I N D I C E
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Acuerdo que modifica al Anexo número 5 al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Zacatecas 3

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

Acuerdo de Coordinación para la realización de acciones del Programa de Desarrollo Forestal PRODEFOR, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Estado de Aguascalientes 4

Acuerdo de Coordinación para la realización de acciones del Programa para el Desarrollo Forestal PRODEFOR, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Estado de Guanajuato 9

Aviso mediante el cual se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Mapimí, localizada en los municipios de Mapimí y Tlahualillo, en el Estado de Durango; Jiménez, en el Estado de Chihuahua, y Francisco I. Madero y Sierra Mojada, en el Estado de Coahuila 14

Aviso mediante el cual se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende establecer el área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Volcán Tacaná, localizada en los municipios de Cacahuatán y Unión Juárez, en el Estado de Chiapas 14

Aviso mediante el cual se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende establecer el área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región denominada Ciénegas del Lerma, localizada en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Mexicalcingo, Chapultepec, San Antonio La Isla, Almoloya del Río, Atizapán, Texcalyacac y Rayón, en el Estado de México 15

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

Resolución final que revisa, con base en la conclusión y recomendación del Grupo Especial del Organo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 1702.40.99 y 1702.60.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia 15

Resolución final del examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de carne de bovino congelada en canales o medias canales, deshuesada y sin deshuesar, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los estados miembros de la Comunidad Europea, independientemente del país de procedencia 40

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2000, Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos 46

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

Dictamen mediante el cual se cancela la autorización otorgada para la constitución de la colonia agrícola y ganadera Adolfo López Mateos, Municipio de Palizada, Camp. 55

Dictamen mediante el cual se cancela la autorización otorgada para la constitución de la colonia agrícola y ganadera Venustiano Carranza, Municipio de Las Choapas, Ver. 56

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Palmillas o El Tule, Municipio de Concordia, Sin. 59

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho San Juan, Municipio de Caborca, Son. 60

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Pesuña, Municipio de Caborca, Son. 60

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sapo, Municipio de Hermosillo, Son. 61

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Coacoyol o Las Lomitas, Municipio de Ahome, Sin. 61

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tochito, Municipio de Champotón, Camp. 62

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Acuerdo número 10/2000, del siete de septiembre de dos mil del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en que se impugne una ley local 63

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 70/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoprimer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero 65

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 66

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional 66

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 67

Adición a la convocatoria a las instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto limitado con registro en el FOVI, a participar en las asignaciones de recursos para otorgar créditos para vivienda 67

Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 15 de septiembre de 2000 67

AVISOS

Judiciales y generales 68

SEGUNDA SECCION

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 100/92, relativo a la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará La Paz Citlaltépetl, Municipio de San Salvador El Verde, Pue. 80

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 914/93, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Francisco de Garay, Municipio de Minatitlán, Ver. 96

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 41/95, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado Canoas, Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. 107

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 327/96, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Paso Valencia, Municipio de Papantla, Ver. 129

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 485/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado San Felipe Llano Grande, Municipio de Tomatlán, Jal. 140

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 049/97, relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado La Capilla, Municipio de El Fuerte, Sin. 160

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

Sentencia pronunciada en el expediente número T.U.A.XII-101/94, relativo al reconocimiento y titulación de bienes comunales de los poblados Tilapa y Arroyo San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Gro. 173

Internet: www.gobernacion.gob.mx Esta edición consta de dos secciones
Correo electrónico: dof@rtn.net.mx *Informes, suscripciones y quejas: 5592-7919 / 5535-4583*

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACUERDO que modifica al Anexo número 5 al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Zacatecas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ACUERDO QUE MODIFICA AL ANEXO NUMERO 5 AL CONVENIO DE ADHESION AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Zacatecas convienen en modificar el Anexo número 5 al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que tienen celebrado,

CONSIDERANDO:

Que el 31 de diciembre de 1998 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el decreto por el que se modifican diversas leyes fiscales y otros ordenamientos federales, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en sus artículos 15 fracción XIII y 41 fracción VI, conforme a la cual, a partir del 1 de enero de 1999, los espectáculos públicos consistentes en funciones de cine, son objeto del pago del

Impuesto al Valor Agregado y, en consecuencia, no pueden ser a su vez objeto de impuestos estatales o municipales, sin contravenir el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Que derivado de la citada reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, es necesario modificar el Anexo número 5, celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas el 1 de enero de 1992 y publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 5 de noviembre de 1993, por lo que ambas partes,

ACUERDAN:

UNICO.- Modificar la cláusula PRIMERA del Anexo número 5 al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes términos:

> "PRIMERA.- El Estado conviene con la Secretaría en establecer en su legislación local, ya sea estatal, municipal o ambas, impuestos a los espectáculos públicos consistentes en obras de teatro y funciones de circo, que en su conjunto, incluyendo adicionales, no superen un gravamen de 8% calculado sobre el ingreso total que derive de dichas actividades. Consecuentemente la Federación mantendrá en suspenso la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a los citados espectáculos en el territorio del mismo."

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo está en vigor a partir del 1 de enero de 1999, deberá ser aprobado por la Legislatura del Estado y publicado tanto en el Periódico Oficial de la Entidad como en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 18 de agosto de 2000.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Angel Gurría Treviño**.- Rúbrica.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, **Ricardo Monreal Avila**.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, **Arturo Nahle García**.- Rúbrica.- El Secretario de Planeación y Finanzas, **Guillermo Huízar Carranza**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

ACUERDO de Coordinación para la realización de acciones del Programa de Desarrollo Forestal PRODEFOR, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Estado de Aguascalientes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

ACUERDO DE COORDINACION PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL "PRODEFOR" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, REPRESENTADA POR SU TITULAR, JULIA CARABIAS LILLO, ASISTIDA POR EL DR. JORGE DEL VALLE CERVANTES, SUBSECRETARIO DE RECURSOS NATURALES; ING. VICTOR SOSA CEDILLO, DIRECTOR GENERAL FORESTAL; ING. JOSE DE JESUS INFANTE DE ALBA, DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAP EN EL ESTADO; ING. FRANCISCO GUEL SERNA, SUBDELEGADO DE RECURSOS NATURALES DE LA SEMARNAP EN EL ESTADO, Y EL LIC. JOSE LUIS MORALES GALLEGOS, JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA DE LA SEMARNAP EN EL ESTADO, EN LO SUCESIVO "LA SEMARNAP", Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES, REPRESENTADO POR EL SR. FELIPE GONZALEZ GONZALEZ Y LIC. ABELARDO REYES SAHAGUN, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL LIC. JUAN JOSE LEON RUBIO, ING. MANUEL IGNACIO FIERROS EVANS, M.V.Z. ROBERTO E. VON BERTRAB PETERS, Y EL LIC. JAVIER GONZALEZ GUTIERREZ, SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO, COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO, EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE, QUE EN LO SUCESIVO SE LES ALUDIRA COMO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

I.- El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que la política de desarrollo social del Gobierno de la República para ese periodo tiene como objetivos elevar el nivel de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. En este sentido, el Convenio de Desarrollo Social vigente suscrito entre los titulares de los poderes Ejecutivos Federal y Estatal tiene como objeto impulsar la participación del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la consecución de las metas de dicho Plan, para ello, el citado Convenio prevé la realización de programas de coordinación especial, los que se formalizarán mediante acuerdos de

coordinación, o bien, anexos de ejecución, cuya finalidad será promover y apoyar el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y los programas de desarrollo estatal.

II.- En materia forestal, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 señala que para incrementar la producción sustentable de este sector, se ampliará la infraestructura existente, se estimulará la exportación en los niveles más altos que permita su potencial, y se diversificará hacia nuevos productos competitivos. Para ello según considera el plan en cita, será necesario redefinir los términos y condiciones de los planes de manejo y aprovechamiento de los bosques; intensificar los programas de protección, cuidado y conservación y perfeccionar los sistemas de inspección y vigilancia.

En este marco, el Programa Sectorial Forestal y de Suelo 1995-2000 plantea como objetivos generales aumentar la participación del sector en el desarrollo económico del país, mediante el impulso del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas, logrando un aumento sostenido de la producción forestal, con el apoyo de esquemas financieros y fiscales que incentiven la sustentabilidad, así como las agroasociaciones, buscando la concertación y corresponsabilidad entre los diferentes agentes de la cadena productiva, para lo cual, prevé la instrumentación del Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR), el cual es un mecanismo para otorgar subsidios transitorios en beneficio de los productores forestales de México, con la finalidad de fomentar y promover el desarrollo del sector social forestal, induciendo la integración y competitividad de cadenas productivas y la formación de unidades de producción eficientes.

III.- Con fecha 28 de junio de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el Acuerdo que establece los lineamientos para el otorgamiento de subsidios destinados a promover el desarrollo forestal, donde se establece que, con el propósito de ampliar la cobertura de los subsidios, "LA SEMARNAP", previa la satisfacción de los requisitos legales para ello, promoverá y, en su caso, concertará con los gobiernos estatales la aportación conjunta de recursos con la Federación, para satisfacer las solicitudes de los productores forestales de la entidad de que se trate.

IV.- El Convenio de Desarrollo Social 2000 tiene por objeto definir y establecer criterios, estrategias y recursos financieros para la ejecución coordinada de proyectos y acciones entre los Ejecutivos Federal y Estatal, con la participación que corresponda a los municipios y a la comunidad, que permitan el combate a la pobreza y la promoción del desarrollo social y regional.

Por acuerdo de las partes, el citado Convenio constituye la única vía de coordinación entre las Administraciones Públicas Federal y Estatal, y prevé que la ejecución de programas y acciones y el ejercicio de recursos que se lleven a cabo coordinadamente en la entidad federativa, durante el presente ejercicio fiscal se formalizará a través de acuerdos de coordinación o anexos de ejecución.

V.- Por lo anterior, el Ejecutivo Federal, a través de "LA SEMARNAP" y el "GOBIERNO DEL ESTADO" convienen en aportar recursos con el objeto de mejorar la competitividad del sector en su conjunto, a través de proyectos conjuntos con los sectores social y privado que propicien el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, en el marco del Programa para el Desarrollo Forestal, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- DE "LA SEMARNAP"

I.1.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal a la que entre otras funciones le corresponde regular el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y promover su industrialización, así como vigilar y estimular, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales.

I.2.- Que entre sus atribuciones le corresponde participar junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el otorgamiento de subsidios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente.

I.3.- Que de acuerdo con la Ley Forestal, "LA SEMARNAP" conjuntamente con las dependencias de la Administración Pública Federal, establecerán medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la conservación, protección, restauración, aprovechamiento sustentable y uso múltiple de los recursos forestales.

I.4.- Que en términos de los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley Forestal, le compete regular el aprovechamiento en los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, así como en lo relativo a la conservación, protección, restauración, aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del país.

I.5.- Que en los términos de los artículos 5o. y 7o. de la Ley Forestal; 33 de la Ley de Planeación, y 5o. fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, está facultada para celebrar el presente Acuerdo de Coordinación.

I.6.- Que para cumplir con los compromisos a que se contrae en este documento cuenta con la autorización emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 312A.-0053 y clave presupuestaria número 2000.16.310.00.14.03.32.000.205.I057.4205.2.0.1., por lo que aportará la cantidad de $583,333.33 (quinientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N.).

I.7.- Que tiene interés en coordinar acciones con el "GOBIERNO DEL ESTADO", a fin de que con su participación se lleve a cabo el Programa para el Desarrollo Forestal.

II.- DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

II.1.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46 fracción VII y 49 de la Constitución Política del Estado, 5, 22 fracción IV, 31 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 1o. fracción IV y 19 fracción VI del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, y 1o., 4o., 5o. y 6o. de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, quien puede suscribir convenios y contratos en nombre del mismo, en unión del Secretario General de Gobierno, con la participación de los titulares de las dependencias a las que el asunto corresponda.

II.2.- Que es su interés participar en el presente Acuerdo con el fin de coordinar acciones y recursos con "LA SEMARNAP" para la instrumentación y ejecución del Programa para el Desarrollo Forestal "PRODEFOR", en el Estado de Aguascalientes.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 40, 41, 42, 43 y 116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32-bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 66 al 70, 73 y 74 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2000; 4o., 5o., 7o. y demás relativos de la Ley Forestal; 4o. y 8o. de su Reglamento; 5o. fracción XXI, 22, 68 y 79 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de conformidad con los establecidos en los artículos 46 fracción VII y 49 de la Constitución Política del Estado; 5, 22 fracción IV, 31 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 19 fracción VI del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, y en las cláusulas primera, tercera y las aplicables del Capítulo de Estipulaciones Finales del Convenio de Desarrollo Social que se celebra cada año, las partes celebran el presente Acuerdo de Coordinación, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

PRIMERA.- El objeto del presente Acuerdo es la definición y establecimiento de las bases y mecanismos de coordinación y cooperación entre "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", para la instrumentación de las acciones contenidas en el Programa para el Desarrollo Forestal y en general las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo de este sector en el Estado de Aguascalientes.

SEGUNDA.- "LA SEMARNAP" conviene con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la coordinación de acciones de aplicación local y conjuntamente consolidarán recursos para la conservación, restauración, aprovechamiento sustentable e incremento de los recursos forestales de la entidad.

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL "PRODEFOR"

TERCERA.- Las partes convienen en sujetarse a lo establecido en el acuerdo que establece las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del Programa para el Desarrollo Forestal, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 14 de marzo de 2000.

CUARTA.- "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre los productores forestales, y los prestadores de servicios técnicos y profesionales vinculados a la actividad forestal, las características y alcances del PRODEFOR y los requisitos de participación correspondientes.

QUINTA.- La coordinación operativa del PRODEFOR estará a cargo de "LA SEMARNAP" junto con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" participante, quienes constituirán un Comité Operativo Estatal para su instrumentación y operación. El procedimiento operativo se realizará en seis fases:

a) Presentación, registro y verificación de solicitudes.
b) Calificación y orden de atención de solicitudes.
c) Autorización y asignación de los subsidios.
d) Pago de subsidios a los beneficiarios.
e) Supervisión y control de los subsidios.
f) Seguimiento y evaluación del Programa.

La evaluación de la operación del PRODEFOR tendrá un carácter permanente y retroalimentador, y se aplicará fundamentalmente a la planeación, la eficiencia en la administración de los recursos y la eficacia

de las acciones, los resultados en cuanto a cambios tecnológicos y organizativos, y a los efectos en el aumento de la producción, incremento de la productividad e ingreso de los productores.

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

SEXTA.- Para la ejecución del Programa para el Desarrollo Forestal, las partes prevén una aportación inicial de $833,333.33 (ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N.) de conformidad con la siguiente estructura financiera:

a) "LA SEMARNAP" aportará la cantidad de $583,333.33 (quinientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 M.N), provenientes de los recursos presupuestales asignados, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.

b) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) provenientes de los recursos presupuestales asignados, de conformidad con el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Las aportaciones podrán ser modificadas anualmente por las partes, de conformidad con la suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente.

SEPTIMA.- Los recursos que aporte "LA SEMARNAP" para la ejecución de este Acuerdo y de los programas que se deriven de éste, estarán sujetos a la suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con lo previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000 y a la obtención de las autorizaciones que correspondan para su transferencia y ejercicios respectivos, así como a las condiciones de aplicación y estipulaciones que se establecen en las Reglas de Operación del PRODEFOR. En todo caso, dichos recursos quedarán invariablemente sujetos a revisión de cuenta pública, para el ejercicio fiscal que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.

La determinación y canalización de recursos por parte de "LA SEMARNAP" estarán condicionadas a que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acredite previamente la aportación de recursos.

OCTAVA.- Los recursos definidos que aporte "EL GOBIERNO DEL ESTADO", para la ejecución de este Acuerdo y de las acciones que se deriven de éste, estarán sujetos a la suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con lo previsto por el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2000 de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", y a la obtención de las autorizaciones que correspondan para su transferencia y ejercicios respectivos.

NOVENA.- Los recursos que proporcione "LA SEMARNAP" a los que se suman los aportados por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", así como los que aporten, en su caso, otras dependencias y personas físicas y morales, serán administrados por medio de un Fideicomiso de Administración e Inversión Central, con una cuenta estatal para el manejo de los recursos por la FIDUCIARIA.

DEL COMITE OPERATIVO ESTATAL DEL PRODEFOR

DECIMA.- "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" constituirán el Comité Operativo Estatal del PRODEFOR, en adelante Comité, de conformidad con lo siguiente:

a) El Comité estará integrado en igual proporción por representantes de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y de "LA SEMARNAP", con sus respectivos suplentes; teniendo el carácter de Presidente el representante titular de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", y de Secretario Técnico el representante titular de "LA SEMARNAP".

b) "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" entregarán a la FIDUCIARIA una relación debidamente avalada de las personas que integrarán el Comité, donde aparezcan registrados los nombres de los representantes propietarios y suplentes, firmas y domicilios de cada uno.

c) En caso de ausencia de alguno de los miembros titulares del Comité, será sustituido por el miembro suplente.

d) El Comité funcionará válidamente al reunirse cuando menos el 50% más uno de los miembros designados, siempre y cuando estén presentes su presidente o su suplente. Cualquier acuerdo adoptado en contravención de lo antes mencionado carecerá de validez.

e) Las decisiones del Comité serán tomadas por mayoría de votos, teniendo el presidente voto de calidad para el caso de empate.

f) De cada reunión deberá redactarse el acta correspondiente por parte del Secretario, la cual deberá estar firmada por el presidente del Comité y el propio secretario, señalándose en la misma a la persona que ante la FIDUCIARIA deberá comparecer a ejecutar los acuerdos.

g) Las instrucciones del Comité invariablemente deberán darse a conocer por escrito a la FIDUCIARIA, mediante comunicación que deberá estar suscrita indefectiblemente por el Presidente y el Secretario.

h) A las reuniones del Comité podrán asistir los representantes de instituciones públicas o privadas y de las organizaciones de productores que el propio Cuerpo Colegiado determine, quienes asistirán con voz pero sin voto.

i) El Comité se reunirá mensualmente en sesión ordinaria y en forma extraordinaria las veces que sean necesarias, previa convocatoria de su Presidente o de las dos terceras partes de sus miembros, debiendo dar a conocer a la FIDUCIARIA de inmediato y por escrito las resoluciones que adopte.

j) Las convocatorias respectivas deberá notificarlas el Secretario del Comité por escrito y por la vía más rápida, dirigida a los domicilios que para tal efecto señalen los miembros del Comité, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión convocada, acompañando el correspondiente orden del día. Para el caso de las convocatorias extraordinarias será con un plazo mínimo de veinticuatro horas.

k) Las reuniones del Comité se efectuarán a la hora y en el domicilio que la convocatoria señale.

l) El cargo de los miembros del Comité es honorífico y no da derecho a recibir retribución alguna por su desempeño.

DECIMA PRIMERA.- Para el otorgamiento de los subsidios del PRODEFOR el Comité se apegará a lo siguiente:

a) Calificar las solicitudes y establecer el orden de atención de las mismas para acceder a los subsidios del PRODEFOR.

b) Autorizar la asignación definitiva de los subsidios en favor de los beneficiarios, conforme a la disponibilidad presupuestal y con base en los resultados de la calificación de cada solicitud en los términos de las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del PRODEFOR.

c) Instruir por escrito a la FIDUCIARIA a fin de que realice la liberación de fondos en favor de los beneficiarios, con cargo al patrimonio fideicomitido, previo cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del PRODEFOR, remitiéndole conjuntamente con la instrucción la carta de adhesión y el recibo correspondiente.

d) Informar periódicamente a “LA SEMARNAP” de los avances y resultados que se registren en la operación del PRODEFOR, conforme a lo establecido en las respectivas Reglas de Operación.

e) Las demás que, en su caso, se confieran en las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del PRODEFOR.

Inmediatamente después de la asignación y autorización de los subsidios correspondientes, por parte de la FIDUCIARIA, el Comité publicará en el diario local de mayor circulación los beneficiarios de subsidios del PRODEFOR, así como los montos asignados.

DECIMA SEGUNDA.- El Comité no contará para su operación con estructura administrativa, pero en la concertación, supervisión, operación y desarrollo de las acciones del PRODEFOR será auxiliado por “LA SEMARNAP” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, conforme a la mecánica operativa establecida en las propias Reglas de Operación.

DECIMA TERCERA.- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas nacionales del PRODEFOR, los recursos asignados por “LA SEMARNAP” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” no podrán ser transferidos a otro Programa.

DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO FORESTAL DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO FORESTAL Y DEL SUELO ESTATAL

DECIMA CUARTA.- En el interior del Consejo Técnico Consultivo Forestal Estatal que preside “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, se constituirá el Subcomité de Desarrollo Forestal como órgano de consulta y de participación social en la operación del Programa para el Desarrollo Forestal, cuya estructura se integrará mayoritariamente por los dueños y poseedores del recurso forestal, representados a través de sus respectivas organizaciones, por un representante de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” quien lo presidirá, y por el Titular de la Delegación Federal de “LA SEMARNAP” como Secretario.

Podrán formar parte del Subcomité representantes de las dependencias, entidades, instituciones y organizaciones, cuya participación se considere necesaria en razón de la vinculación programática interinstitucional que exista con el PRODEFOR.

DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL

DECIMA QUINTA.- Para la instrumentación y ejecución del PRODEFOR, “LA SEMARNAP” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” oportunamente se proporcionarán toda la información relativa a la ejecución del presente Acuerdo y se comprometen, además, a establecer los mecanismos que se requieran para tales efectos.

DE LAS ESTIPULACIONES GENERALES

DECIMA SEXTA.- El personal de cada una de las partes que intervenga en la realización de las acciones materia de este Acuerdo, mantendrá su relación laboral vigente, por lo que no se crearán nuevas relaciones de carácter laboral.

DECIMA SEPTIMA.- Las partes se comprometen a promover y adoptar las medidas complementarias que se requieran para el cabal cumplimiento de lo estipulado en este Acuerdo.

DECIMA OCTAVA.- Las partes aceptan resolver de común acuerdo las cuestiones presupuestales, administrativas, jurídicas y de otra índole que no estén expresamente previstas en este instrumento, así como cualquier duda, conflicto o controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente instrumento.

DECIMA NOVENA.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y podrá tener una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2000.

VIGESIMA.- Este Acuerdo está sujeto a la autorización anual de los recursos presupuestales asignados para "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", los cuales se definirán sobre la base del Convenio Modificatorio que para tal efecto se suscriba anualmente, por lo que no compromete recursos de ejercicios fiscales subsecuentes al año 2000.

Leído que fue, y debidamente enteradas las partes del alcance y contenido legal de sus cláusulas, firman el presente Acuerdo de Coordinación en tres ejemplares, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., a los catorce días del mes de agosto de dos mil.- Por el Ejecutivo Federal: la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, **Julia Carabias Lillo**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Recursos Naturales, **Jorge del Valle Cervantes**.- Rúbrica.- El Director General Forestal, **Víctor Sosa Cedillo**.- Rúbrica.- El Delegado Federal de la SEMARNAP en el Estado, **José de Jesús Infante de Alba**.- Rúbrica.- El Subdelegado de Recursos Naturales, **Francisco Guel Serna**.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad Jurídica de la SEMARNAP, **José Luis Morales Gallegos**.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes: el Gobernador Constitucional, **Felipe González González**.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, **Abelardo Reyes Sahagún**.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas del Estado, **Juan José León Rubio**.- Rúbrica.- El Coordinador General del Comité para el Desarrollo del Estado, **Manuel Ignacio Fierros Evans**.- Rúbrica.- El Director General de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado, **Roberto E. Von Bertrab Peters**.- Rúbrica.- El Director General de Asuntos Jurídicos del Estado, **Javier González Gutiérrez**.- Rúbrica.

ACUERDO de Coordinación para la realización de acciones del Programa para el Desarrollo Forestal PRODEFOR, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y el Estado de Guanajuato.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

ACUERDO DE COORDINACION PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL "PRODEFOR" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, REPRESENTADA POR SU TITULAR JULIA CARABIAS LILLO, EN LO SUCESIVO "LA SEMARNAP", Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO POR EL C. RAMON MARTIN HUERTA, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR LOS CC. ANTONIO OBREGON PADILLA, FRANCISCO JAVIER BECERRA GOMEZ, FRANCISCO LOPEZ TOSTADO Y MARIA ELENA MORALES SANCHEZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE GOBIERNO, SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, RESPECTIVAMENTE, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

ANTECEDENTES

I.- El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que la política de desarrollo social del Gobierno de la República para ese periodo tiene como objetivos elevar el nivel de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. En este sentido, el Convenio de Desarrollo Social vigente suscrito entre los titulares de los poderes del Ejecutivo Federal y Estatal, tiene como objeto impulsar la participación del Gobierno del Estado de Guanajuato en la consecución de las metas de dicho Plan. Para ello, el citado Convenio prevé la realización de programas de coordinación, los que se formalizarán mediante acuerdos de coordinación, o bien, anexos de ejecución, cuya finalidad será promover y apoyar el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y los programas de desarrollo estatal.

II.- En materia forestal, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 señala que para incrementar la producción sustentable de este sector, se ampliará la infraestructura existente, se estimulará la exportación en los niveles más altos que permita su potencial, y se diversificará hacia nuevos productos

competitivos. Para ello según considera el plan en cita, será necesario: redefinir los términos y condiciones de los planes de manejo y aprovechamiento de los bosques; intensificar los programas de protección, cuidado y conservación y perfeccionar los sistemas de inspección y vigilancia.

En este marco, el Programa Sectorial Forestal y de Suelo 1995-2000, plantea como objetivos generales: aumentar la participación del sector en el desarrollo económico del país, mediante el impulso del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas, logrando un aumento sostenido de la producción forestal, con el apoyo de esquemas financieros y fiscales que incentiven la sustentabilidad, así como las agroasociaciones, buscando la concertación y corresponsabilidad entre los diferentes agentes de la cadena productiva, para lo cual, prevé la instrumentación del Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR), el cual es un mecanismo para otorgar subsidios transitorios en beneficio de los productores forestales de México, con la finalidad de fomentar y promover el desarrollo del sector social forestal, induciendo la integración y competitividad de cadenas productivas y la formación de unidades de producción eficientes.

III.- Con fecha 14 de marzo de 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el Acuerdo que establece las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del Programa para el Desarrollo Forestal.

IV.- El Convenio de Desarrollo Social 2000, tiene por objeto definir y establecer criterios, estrategias y recursos financieros para la ejecución coordinada de proyectos y acciones entre los Ejecutivos Federal y Estatal, con la participación que corresponda a los municipios y a la comunidad, que permitan el combate a la pobreza y la promoción del desarrollo social y regional.

Por acuerdo de las partes, el citado Convenio constituye la única vía de coordinación entre las Administraciones Públicas Federal y Estatal, y prevé que la ejecución de programas y acciones y el ejercicio de recursos se lleven a cabo coordinadamente en la entidad federativa, durante el presente ejercicio fiscal se formalizará a través de acuerdos de coordinación o anexos de ejecución.

V.- Por lo anterior, el Ejecutivo Federal a través de "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convienen en aportar recursos con el objeto de mejorar la competitividad del sector en su conjunto, a través de proyectos conjuntos con los sectores social y privado que propicien el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, en el marco del Programa para el Desarrollo Forestal, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- DE "LA SEMARNAP"

I.1.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal a la que entre otras funciones le corresponde, regular el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, y promover su industrialización, así como vigilar y estimular, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales.

I.2.- Que entre sus atribuciones le corresponde participar junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el otorgamiento de subsidios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente.

I.3.- Que de acuerdo con la Ley Forestal, "LA SEMARNAP" conjuntamente con las dependencias de la Administración Pública Federal, establecerán medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la conservación, protección, restauración, aprovechamiento sustentable y uso múltiple de los recursos forestales.

I.4.- Que en términos de los artículos 1o., 4o. y 5o. de la Ley Forestal, le compete regular el aprovechamiento en los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, así como en lo relativo a la conservación, protección, restauración, aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del País.

I.5.- Que en los términos de los artículos 5o. y 7o. de la Ley Forestal; 33 de la Ley de Planeación, y 5o. fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, está facultada para celebrar el presente Acuerdo de Coordinación.

I.6.- Que para cumplir con los compromisos que se contraen en este documento, cuenta con los fondos ya depositados en FIDEFOR, bajo la administración de BANRURAL, S.N.C., por lo que aportará la cantidad de $466,666.66 (Cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis esos 66/100 M.N.) del remanente de ejercicios anteriores, en términos del Capítulo I relativo a las Disposiciones Generales de las Reglas de Operación PRODEFOR 2000 y a la administración del FIDEFOR que realiza directamente BANRURAL, S.N.C.

I.7.- Que en atención a lo anterior se tiene interés en coordinar acciones con el "GOBIERNO DEL ESTADO", a fin de que con su participación se lleve a cabo el Programa para el Desarrollo Forestal.

II.- DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

II.1.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracciones XXII y XXIII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 3o., 4o., 10o. fracciones I, II, VII y VIII, 18 fracción XV y 19 fracciones VI, VII y X, 24 y 25 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 2o., 3o. y 42 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2000, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, quien puede suscribir convenios y contratos en nombre del mismo, en unión del Secretario General de Gobierno, con la participación de los titulares de las dependencias a las que el asunto corresponda.

II.2.- Que es su interés participar en el presente Acuerdo con el fin de coordinar acciones y recursos con "LA SEMARNAP" para la instrumentación y ejecución del Programa para el Desarrollo Forestal "PRODEFOR", en el Estado de Guanajuato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 40, 41, 42, 43 y 116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33 y 34 de la Ley de Planeación; 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 4o., 5o., 7o. y demás relativos de la Ley Forestal, 4o. y 8o. de su Reglamento; 5o. fracción XXI, 22, 68 y 79 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Capítulo Primero de las Reglas de Operación para el otorgamiento de Subsidios del Programa para el Desarrollo Forestal; y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracciones XXII y XXIII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 3o., 4o., 10 fracciones I, II, VII y VIII, 18, 19, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 2o., 3o. y 42 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2000 y 67 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado, y en las cláusulas primera, tercera y demás aplicables del capítulo de estipulaciones finales del Convenio de Desarrollo Social que se celebra cada año, las partes celebran el presente Acuerdo de Coordinación, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

PRIMERA.- El objeto del presente Acuerdo es la definición y establecimiento de las bases y mecanismos de coordinación y cooperación entre "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", para la instrumentación de las acciones contenidas en el Programa para el Desarrollo Forestal y en general, las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo de este sector en el Estado de Guanajuato.

SEGUNDA.- "LA SEMARNAP" conviene con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", la coordinación de acciones de aplicación local y conjuntamente consolidarán recursos para la conservación, restauración, aprovechamiento sustentable e incremento de los recursos forestales de la entidad.

DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL "PRODEFOR"

TERCERA.- Las partes convienen en sujetarse a lo establecido en el Acuerdo que establece las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del Programa para el Desarrollo Forestal publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 14 de marzo de 2000.

CUARTA.- "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" por los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre los productores forestales, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos, las características y alcances del PRODEFOR y los requisitos de participación correspondientes.

QUINTA.- La coordinación operativa del PRODEFOR estará a cargo de "LA SEMARNAP" junto con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" quienes constituirán un Comité Operativo Estatal para su instrumentación y operación. El procedimiento operativo se realizará en siete fases:

a) Presentación, registro y verificación de solicitudes.
b) Calificación y priorización de solicitudes.
c) Cuantificación de necesidades y concertación de recursos.
d) Autorización y asignación de los subsidios.
e) Pago de subsidios a los beneficiarios.
f) Supervisión y control de los subsidios.
g) Seguimiento y evaluación del Programa.

La evaluación de la operación del PRODEFOR, tendrá un carácter permanente y retroalimentador y se aplicará fundamentalmente a la planeación, la eficiencia en la administración de los recursos y la eficacia de las acciones, los resultados en cuanto a cambios tecnológicos y organizativos, y a los efectos en el aumento de la producción, incremento de la productividad e ingreso de los productores.

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

SEXTA.- Para la ejecución del Programa para el Desarrollo Forestal las partes prevén una aportación inicial de $666,666.66 (seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), de conformidad con la siguiente estructura financiera:

a) "LA SEMARNAP" aportará la cantidad de $466,666.66 (cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), provenientes de los recursos remanentes de ejercicios anteriores, de conformidad al Capítulo I relativo a las Disposiciones Generales de las Reglas de Operación PRODEFOR 2000 y a la administración del FIDEFOR que realiza directamente BANRURAL, S.N.C.

b) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M. N.) provenientes de los recursos presupuestales asignados, de conformidad con el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Las aportaciones podrán ser modificadas por las partes de conformidad con la suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente.

SEPTIMA.- Los recursos que aporte "LA SEMARNAP" para la ejecución de este Acuerdo y de los programas que se deriven de éste, estarán sujetos a la suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con lo previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000 y a la obtención de las autorizaciones que correspondan para su transferencia y ejercicios respectivos, así como a las condiciones de aplicación y estipulaciones que se establecen en las Reglas de Operación del PRODEFOR. En todo caso, dichos recursos quedarán invariablemente sujetos a revisión de cuenta pública, para el ejercicio fiscal que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.

La determinación y canalización de recursos por parte de "LA SEMARNAP" estarán condicionadas a que "EL GOBIERNO DEL ESTADO", acredite previamente la aportación de recursos.

OCTAVA.- Los recursos definidos que aporte "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para la ejecución de este Acuerdo y de las acciones que se deriven de éste, estarán sujetos a la suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con lo previsto por la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2000 y a la obtención de las autorizaciones que correspondan para su transferencia y ejercicios respectivos.

NOVENA.- Los recursos que proporcione "LA SEMARNAP", a los que se suman los aportados por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", así como los aportados, en su caso, por los productores forestales, serán administrados por medio de un Fideicomiso de Administración e Inversión Central, con cuenta estatal para el manejo de los recursos por la FIDUCIARIA.

DEL COMITE OPERATIVO ESTATAL DEL PRODEFOR

DECIMA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "LA SEMARNAP" constituirán el Comité Operativo Estatal del PRODEFOR, en adelante Comité, de conformidad con lo siguiente:

a) El Comité estará integrado en igual proporción por representantes de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y de "LA SEMARNAP", con sus respectivos suplentes; teniendo el carácter de Presidente el representante titular de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y de Secretario Técnico el representante titular de "LA SEMARNAP".

b) "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" entregarán a la FIDUCIARIA, una relación debidamente avalada de las personas que integrarán el Comité, donde aparezcan registrados los nombres de los representantes propietarios y suplentes, firmas y domicilios de cada uno.

c) En caso de ausencia de alguno de los miembros titulares del Comité, será sustituido por el miembro suplente.

d) El Comité funcionará válidamente al reunirse cuando menos el 50% más uno de los miembros designados, siempre y cuando estén presentes su presidente o su suplente. Cualquier acuerdo adoptado en contravención de lo antes mencionado carecerá de validez.

e) Las decisiones del Comité, serán tomadas por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.

f) De cada reunión deberá redactarse el acta correspondiente por parte del Secretario, la cual deberá estar firmada por el Presidente del Comité y el propio Secretario, señalándose en la misma a la persona que ante la FIDUCIARIA deberá comparecer a ejecutar los acuerdos.

g) Las instrucciones del Comité invariablemente deberán darse a conocer por escrito a la FIDUCIARIA, mediante comunicación que deberá estar suscrita indefectiblemente por el Presidente y el Secretario.

h) A las reuniones del Comité podrán asistir los representantes de instituciones públicas o privadas y de las organizaciones de productores que el propio Cuerpo Colegiado determine, quienes asistirán con voz pero sin voto.

i) El Comité se reunirá mensualmente en sesión ordinaria y en forma extraordinaria las veces que sean necesarias previa convocatoria de su Presidente o de las dos terceras partes de sus miembros, debiendo dar a conocer a la FIDUCIARIA de inmediato y por escrito las resoluciones que adopte.

j) Las convocatorias respectivas deberá notificarlas el Secretario del Comité por escrito y por la vía más rápida, dirigida a los domicilios que para tal efecto señalen los miembros del Comité, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión convocada, acompañando el correspondiente orden del día. Para el caso de las convocatorias extraordinarias, será con un plazo mínimo de veinticuatro horas.

k) Las reuniones del Comité se efectuarán a la hora y en el domicilio que la convocatoria señale.

l) El cargo de los miembros del Comité es honorífico y no da derecho a recibir retribución alguna por su desempeño.

DECIMA PRIMERA.- Para el otorgamiento de los subsidios del PRODEFOR el Comité se apegará a lo siguiente:

a) Calificar las solicitudes y establecer el orden de atención de las mismas para acceder a los subsidios del PRODEFOR.

b) Autorizar la asignación definitiva de los subsidios en favor de los beneficiarios, conforme a la disponibilidad presupuestal y con base en los resultados de la calificación de cada solicitud en los términos de las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del PRODEFOR.

c) Instruir por escrito a la FIDUCIARIA a fin de que realice la liberación de fondos en favor de los beneficiarios, con cargo al patrimonio fideicomitido, previo cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en las Reglas de Operación del PRODEFOR, remitiéndole conjuntamente con la instrucción la carta de adhesión y el recibo correspondiente.

d) Informar periódicamente a "LA SEMARNAP" de los avances y resultados que se registren en la operación del PRODEFOR, conforme a lo establecido en las respectivas Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios.

e) Las demás que, en su caso, se confieran en las Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios del PRODEFOR.

Inmediatamente después de la asignación y autorización de los subsidios correspondientes, por parte de la FIDUCIARIA, el Comité publicará en el diario local de mayor circulación los beneficiarios de subsidios del PRODEFOR, así como los montos asignados.

DECIMA SEGUNDA.- El Comité no contará para su operación con estructura administrativa, pero en la concertación, supervisión, operación y desarrollo de las acciones del PRODEFOR será auxiliado por "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", conforme a la mecánica operativa establecida en las propias Reglas de Operación.

DECIMA TERCERA.- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas nacionales del PRODEFOR, los recursos asignados por "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no podrán ser transferidos a otro Programa.

DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO FORESTAL DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO FORESTAL Y DEL SUELO ESTATAL

DECIMA CUARTA.- En el interior del Consejo Técnico Consultivo Forestal Regional que preside "EL GOBIERNO DEL ESTADO", se constituirá el Subcomité de Desarrollo Forestal como órgano de consulta y de participación social en la operación del Programa para el Desarrollo Forestal, cuya estructura se integrará mayoritariamente por los dueños y poseedores del recurso forestal, representados a través de sus respectivas organizaciones, por un representante de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" quien presidirá y por el Titular de la Delegación Federal de "LA SEMARNAP" como Secretario.

Podrán formar parte del Subcomité, representantes de las dependencias, entidades, instituciones y organizaciones, cuya participación se considere necesaria en razón de la vinculación programática interinstitucional que exista con el PRODEFOR.

DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL

DECIMA QUINTA.- Para la instrumentación y ejecución del PRODEFOR, "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" oportunamente se proporcionarán toda la información relativa a la ejecución del presente Acuerdo y se comprometen, además, a establecer los mecanismos que se requieran para tales efectos.

DE LAS ESTIPULACIONES GENERALES

DECIMA SEXTA.- El personal de cada una de las partes que intervenga en la realización de las acciones materia de este Acuerdo, mantendrá su relación laboral vigente, por lo que no se crearán nuevas relaciones de carácter laboral.

DECIMA SEPTIMA.- Las partes se comprometen a promover y adoptar las medidas complementarias que se requieran para el cabal cumplimiento de lo estipulado en este Acuerdo.

DECIMA OCTAVA.- Las partes aceptan resolver de común acuerdo las cuestiones presupuestales, administrativas, jurídicas y de otra índole que, en su caso, no estén expresamente previstas en este instrumento, así como cualquier duda, conflicto o controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente instrumento.

Asimismo, podrá darse por terminado en cualquier tiempo previa notificación por escrito de una de las partes a la otra, con sesenta días de anticipación; pero en este caso, las partes tomarán las providencias necesarias a efecto de que las acciones implementadas que se hayan iniciado se desarrollen hasta su total conclusión.

Asimismo las partes manifiestan su conformidad para que en caso de duda sobre la interpretación del presente Acuerdo respecto a su instrumentación, formalización y cumplimiento, se esté a lo previsto en el Convenio de Desarrollo Social 2000 suscrito por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

DECIMA NOVENA.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2000.

VIGESIMA.- Este Acuerdo está sujeto a la autorización anual de los recursos presupuestales asignados para "LA SEMARNAP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", los cuales se definirán en base al Convenio Modificatorio que para tal efecto se suscriba anualmente, por lo que no compromete recursos de ejercicios fiscales subsecuentes al 2000.

Leído que fue, y debidamente enteradas las partes del alcance y contenido legal de sus cláusulas, firman el presente Acuerdo de Coordinación en tres ejemplares, en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil.- Por el Ejecutivo Federal: la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, **Julia Carabias Lillo**.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guanajuato: el Gobernador Constitucional, **Ramón Martín Huerta**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, **Antonio Obregón Padilla**.- Rúbrica.- El Secretario de Planeación y Finanzas, **Francisco Javier Becerra Gómez**.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural, **Francisco López Tostado**.- Rúbrica.- La Secretaria de la Contraloría, **María Elena Morales Sánchez**.- Rúbrica.

AVISO mediante el cual se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Mapimí, localizada en los municipios de Mapimí y Tlahualillo, en el Estado de Durango; Jiménez, en el Estado de Chihuahua, y Francisco I. Madero y Sierra Mojada, en el Estado de Coahuila.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 58 primer párrafo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o. fracción I, y 91 del Reglamento Interior de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO

Se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada "Mapimí", con una superficie total de 342,387-99-17.225 hectáreas (trescientas cuarenta y dos mil, trescientas ochenta y siete hectáreas, noventa y nueve áreas, diecisiete punto doscientas veinticinco centiáreas), localizada en los municipios de Mapimí y Tlahualillo, en el Estado de Durango; Jiménez, en el Estado de Chihuahua, y Francisco I. Madero y Sierra Mojada, en el Estado de Coahuila.

Dichos estudios pueden ser consultados en las oficinas de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de esta Secretaría, ubicadas en avenida Revolución número 1425, colonia Tlacopac, San Angel, Delegación Alvaro Obregón, en México, Distrito Federal, y en las Delegaciones Federales de la propia dependencia en los estados de Durango, Chiahuahua y Coahuila, ubicadas en Coronado número 504, Zona Centro, código postal 34000, Durango, Durango; avenida De las Américas número 300-B, Cuarta Ampliación, colonia San Felipe, código postal 31240, Chihuahua, Chihuahua y, en bulevar Venustiano Carranza número 2454, segundo piso, colonia República Oriente, código postal 31240, Saltillo, Coahuila, respectivamente.

Los estudios justificativos a que se hace mención en el párrafo anterior, quedan a disposición, por un término de quince días, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**; para opinión de los estados y municipios, en cuyas circunscripciones

territoriales se localiza la reserva de la biosfera de que se trata, de las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones, así como de las organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, universidades, centros de investigación, instituciones de los sectores público, social y privado, interesados en el establecimiento, administración y vigilancia del área de referencia.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de septiembre de dos mil.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, **Julia Carabias Lillo**.- Rúbrica.

AVISO mediante el cual se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende establecer el área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Volcán Tacaná, localizada en los municipios de Cacahuatán y Unión Juárez, en el Estado de Chiapas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 58 primer párrafo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o. fracción I, y 91 del Reglamento Interior de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO

Se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende establecer el área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región denominada “Volcán Tacaná", con una superficie total de 22,046-55-52.885 hectáreas (veintidós mil cuarenta y seis hectáreas, cincuenta y cinco áreas, cincuenta y dos punto ochocientas ochenta y cinco centiáreas), localizada en los municipios de Cacahuatán y Unión Juárez, en el Estado de Chiapas.

Dichos estudios pueden ser consultados en las oficinas de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de esta Secretaría, ubicadas en avenida Revolución número 1425, colonia Tlacopac, San Angel, Delegación Alvaro Obregón, en México, Distrito Federal, y en la Delegación Federal de la propia dependencia en el Estado de Chiapas, ubicada en avenida San Cristóbal número 212, colonia Moctezuma, código postal 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Los estudios justificativos a que se hace mención en el párrafo anterior, quedan a disposición, por un término de quince días, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**; para opinión de los estados y municipios, en cuyas circunscripciones territoriales se localiza la reserva de la biosfera de que se trata, de las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones, así como de las organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, universidades, centros de investigación, instituciones de los sectores público, social y privado, interesados en el establecimiento, administración y vigilancia del área de referencia.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de septiembre de dos mil.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, **Julia Carabias Lillo**.- Rúbrica.

AVISO mediante el cual se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende establecer el área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región denominada Ciénegas del Lerma, localizada en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Mexicalcingo, Chapultepec, San Antonio La Isla, Almoloya del Río, Atizapán, Texcalyacac y Rayón, en el Estado de México.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 58 primer párrafo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o. fracción I, y 91 del Reglamento Interior de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO

Se informa al público en general, que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende establecer el área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región denominada "Ciénegas del Lerma", con una superficie total de 3,023-95-74.005 hectáreas (tres mil veintitrés hectáreas, noventa y cinco áreas, setenta y cuatro punto cero cero cinco centiáreas), localizada en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Mexicalcingo,

Chapultepec, San Antonio La Isla, Almoloya del Río, Atizapán, Texcalyacac y Rayón, en el Estado de México.

Dichos estudios pueden ser consultados en las oficinas de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas de esta Secretaría, ubicadas en avenida Revolución número 1425, colonia Tlacopac, San Angel, Delegación Alvaro Obregón, en México, Distrito Federal, y en la Delegación Federal de la propia dependencia en el Estado de México, ubicada en rancho San Lorenzo, Conjunto Sedrago, edificio C-1, código postal 52140, Metepec, México.

Los estudios justificativos a que se hace mención en el párrafo anterior, quedan a disposición, por un término de quince días, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**; para opinión de los estados y municipios, en cuyas circunscripciones territoriales se localiza la reserva de la biosfera de que se trata, de las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones, así como de las organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, universidades, centros de investigación, instituciones de los sectores público, social y privado, interesados en el establecimiento, administración y vigilancia del área de referencia.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de septiembre de dos mil.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, **Julia Carabias Lillo**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

RESOLUCION final que revisa, con base en la conclusión y recomendación del Grupo Especial del Organo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 1702.40.99 y 1702.60.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

RESOLUCION FINAL QUE REVISA, CON BASE EN LA CONCLUSION Y RECOMENDACION DEL GRUPO ESPECIAL DEL ORGANO DE SOLUCION DE DIFERENCIAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO, LA RESOLUCION FINAL DE LA INVESTIGACION ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE JARABE DE MAIZ DE ALTA FRUCTOSA, MERCANCIA CLASIFICADA EN LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 1702.40.99 Y 1702.60.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAIS DE PROCEDENCIA.

RESULTANDOS

Resolución final original

1. El 23 de enero de 1998 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** la resolución final del procedimiento de investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, mercancía clasificada en las fracciones 1702.40.99 y 1702.60.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia, mediante la cual se impuso una medida antidumping definitiva consistente en el pago de diversas cuotas compensatorias definitivas.

Monto de la cuota compensatoria

2. Mediante la resolución a que se refiere el punto anterior, la Secretaría impuso las siguientes cuotas compensatorias definitivas:

A. Para las importaciones de jarabe de fructosa conocida comercialmente como jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 procedentes de las siguientes empresas:

a. A.E. Staley Manufacturing Company, 100.60 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

b. Archer Daniels Manufacturing Company (Archer Daniels Midland Company**)** 63.75 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

c. Cargill, Incorporated, 100.60 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

d. CPC International, Incorporated, 93.44 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

e. Los demás productores y exportadores, 100.60 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

B. Para las importaciones de jarabe de fructosa conocida comercialmente como jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 procedentes de las siguientes empresas:

a. A.E. Staley Manufacturing Company 90.26 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

b. Archer Daniels Manufacturing Company, (Archer Daniels Midland Company) 55.37 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

c. Cargill, Incorporated, 175.50 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

d. CPC International, Incorporated, 75.85 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

e. Los demás productores y exportadores, 175.50 dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica.

Consultas

3. El 8 de mayo de 1998, el Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la celebración de consultas con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la resolución a que se refiere el numeral anterior. Dichas consultas gubernamentales se realizaron el 12 de junio de 1998, al amparo del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y del Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Establecimiento del Grupo Especial

4. El 25 de noviembre de 1998, con fundamento en las disposiciones de los instrumentos jurídicos aludidos en el punto anterior, en la reunión del Organo de Solución de Diferencias de la OMC, a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América, se estableció un Grupo Especial con el objeto de que examinara la compatibilidad de la medida antidumping definitiva a que se refiere el punto 1 de esta resolución, con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 94) y del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

Informe del Grupo Especial y su adopción

5. El 14 de enero de 2000, el Grupo Especial emitió su informe definitivo como resultado del procedimiento de solución de diferencias en el marco de la OMC, respecto del examen de la investigación antidumping realizada por los Estados Unidos Mexicanos sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa y de la imposición de la medida antidumping definitiva. Dicho informe se adoptó en la reunión del Organo de Solución de Diferencias celebrada el 24 de febrero del año en curso.

Conclusiones y recomendación del Grupo Especial

6. Las conclusiones y recomendación a las que llegó el Grupo Especial son las siguientes:

"8.1 Sobre la base de las constataciones precedentes, concluimos que la iniciación por México de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos fue compatible con las prescripciones de los párrafos 2, 3 y 8 del artículo 5, el párrafo 1 del artículo 12 y el inciso iv) del apartado 1 del párrafo 1 de ese mismo artículo del Acuerdo Antidumping.

"8.2 Sobre la base de las constataciones precedentes, concluimos que la imposición por México de la medida antidumping definitiva a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos es incompatible con las prescripciones del Acuerdo Antidumping en los siguientes aspectos:

"a) la insuficiente consideración por México de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional, su determinación de la existencia de una amenaza de daño importante basada no en el conjunto de la rama de producción, sino únicamente en la parte de la producción de la rama de producción nacional vendida en el sector industrial, y su insuficiente consideración de los efectos potenciales del supuesto convenio de restricción en su determinación sobre la probabilidad de un aumento sustancial de las importaciones no son compatibles con las disposiciones de los párrafos 1, 2, 4, 7 y 7 i) del artículo 3 del Acuerdo Antidumping;

"b) la ampliación por México del periodo de aplicación de la medida provisional no es compatible con las disposiciones del párrafo 4 del artículo 7 del Acuerdo Antidumping;

"c) la percepción retroactiva por México de derechos antidumping por el periodo de aplicación de la medida provisional no es compatible con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping;

"d) el hecho de que México no haya procedido con prontitud a liberar las fianzas prestadas y/o restituir los depósitos en efectivo hechos con arreglo a la medida provisional no es compatible con las disposiciones del párrafo 4 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping, y

"e) el hecho de que México no haya facilitado las constataciones o conclusiones sobre la cuestión de aplicación retroactiva de la medida antidumping definitiva no es compatible con las

disposiciones del párrafo 2 del artículo 12 y del apartado 2 de ese mismo párrafo del artículo 12 del Acuerdo Antidumping.

"8.3 **...**

"8.4 Recomendamos al Organo de Solución de Diferencias que pida a México que ponga su medida en conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo Antidumping.**"**

Resolución que modifica la resolución final original

7. El 7 de septiembre de 2000, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial emitió la resolución por la que modifica la resolución final de la investigación sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 1702.40.99 y 1702.60.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, emitida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 23 de enero de 1998, en cumplimiento del panel binacional del caso MEX-USA-98-1904, del 14 de marzo de 2000.

8. Mediante la resolución a que se refiere el punto anterior, la Secretaría modificó los puntos 558 y 559 de la resolución final original en el sentido de imponer a Corn Products International, Inc., las cuotas compensatorias definitivas aplicables a Corn Products Company Internacional, Inc.,

Resolución que revisa la resolución final original

9. Como resultado de la recomendación a que se refiere el punto 6 de esta Resolución, la Secretaría publicó en el **Diario Oficial de la Federación** del 15 de mayo de 2000, la resolución que revisa, con base en la conclusión y recomendación del Grupo Especial del Organo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, la resolución final original de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 1702.40.99 y 1702.60.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia.

Notificaciones

10. Con fundamento en los artículos 84 de la Ley de Comercio Exterior; 142 de su Reglamento y 21.1 del Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, la autoridad investigadora procedió a notificar a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, al gobierno de los Estados Unidos de América, a las importadoras, a las exportadoras y a los usuarios industriales que participaron en la investigación antidumping, la resolución a que se refiere el punto anterior.

Requerimientos de información

11. Con el fin de poder dar cumplimiento a las conclusiones y recomendación del Grupo Especial aludido, y con fundamento en los artículos 54 de la Ley de Comercio Exterior y 6.8 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y en ejercicio del derecho del obligado, la Secretaría procedió a allegarse de mayor información pertinente. En particular por lo que se refiere a la conclusión establecida en el punto 8.2 inciso a) del informe del Grupo Especial, referido en el punto 6 de esta Resolución. Así el 26 de mayo de 2000, la Secretaría requirió a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera; así como a las importadoras y exportadoras: Administración SIM, S.A. de C.V.; Almidones Mexicanos, S.A. de C.V.; Arancia CPC, S.A. de C.V. (antes Arancia Corn Products, S.A. de C.V.); Cargill de México, S.A. de C.V.; Compañía Exportadora de Aguas Minerales, S.A. de C.V.; Dulces Arbor, S.A. de C.V.; Embotelladora Orange Crush, S.A.; Embotelladora Mizarlo, S.A. de C.V.; Embotelladora Xalostoc, S.A. de C.V.; Grupo Tropicana, S.A. de C.V.; Manantiales Peñafiel, S.A. de C.V.; A.E. Staley Manufacturing Company; Archer Daniels Midland Company; Cargill Incorporated; Cerestar USA Inc.; Corn Refiners Association; CPC International Inc.; Minnesota Corn Processors; Progold Limited Liability Company; Roquette America Inc., y demás empresas.

Comparecientes

12. Derivado de los requerimientos a que se refiere el punto anterior, comparecieron las importadoras, exportadoras y productores nacionales que a continuación se señalan, mismas que presentaron argumentos y pruebas que fueron debidamente analizadas y valoradas por la autoridad investigadora.

Argumentos y medios de prueba de las comparecientes

Productor nacional

13. En respuesta al requerimiento UPCI.310.00.1642/0, mediante escritos de los días 22 y 23 de junio de 2000, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y al decir de ella, presentó lo siguiente:

a) Balance nacional mensualizado de azúcar del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994, 1995 y 1996, que contiene, entre otros, información sobre producción, importaciones, ventas y exportaciones de los ingenios: Nacional, Aarón Sáenz, Adolfo López Mateos, Alianza Popular, San Rafael, Atencingo, Bellavista, Benito Juárez, Calipam, Casasano La Abeja, Central Motzorongo, Central Progreso,

Constancia (únicamente 1994 y 1995), Cuautotolapam, Dos Patrias, El Carmen, El Higo, El Mante, El Modelo, El Molino (únicamente 1994 y 1995), El Potrero, El Refugio, El Dorado, Emiliano Zapata, Tenosique, Huixtla, Independencia, Tala, José Ma. Morelos, La Concepción, La Gloria, La Joya, Pablo Machado, La Primavera, La Providencia, Lázaro Cárdenas, Los Mochis, Mahuixtlán, Melchor Ocampo, Pedernales, Plan de Ayala, Plan de San Luis, San Miguel, Puga, Pujiltic, Quesería, Rosales, San Cristóbal, San Fco. Ameca, San Fco. El Naranjal, San Gabriel, San José de Abajo, San Miguelito, San Nicolás, San Pedro, San Sebastián, Santa Clara, Santa Rosalía, Santo Domingo, Tamazula, Tres Valles, Zapoapita y otros (únicamente 1994 y 1995).

b) Cifras del reajuste de personal de 1996 de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, copia del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, del 10 de noviembre de 1995, listado mensual de dependientes económicos, correspondiente a 1994, 1995 y 1996 de los ingenios azucareros: San José de Abajo, S.A. de C.V., La Gloria, S.A., Cía. Azucarera La Fe, S.A. de C.V. (únicamente 1996), Melchor Ocampo, S.A. de C.V., Mahuixtla, S.A. de C.V., Proazúcar, S.A. de C.V. y La Primavera, El Higo, S.A. de C.V., Tres Valles, S.A. de C.V., Adolfo López Mateos, S.A. de C.V., El Refugio, S.A. de C.V., Central Motzorongo, S.A. de C.V., El Carmen, S.A. de C.V., El Dorado, S.A. de C.V., Compañía Industrial Azucarera San Pedro, S.A. de C.V., San Francisco El Naranjal, S.A. de C.V., Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. (únicamente 1995 y 1996), José María Martínez, S.A. de C.V., Presidente Benito Juárez, S.A. de C.V., Santa Rosalía, S.A. de C.V., Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S.A. de C.V., Plan de San Luis, S.A. de C.V., La Providencia, S.A. de C.V., Emiliano Zapata, S.A. de C.V., El Potrero, S.A., El Modelo, S.A., Casasano La Abeja, S.A. de C.V., Atencingo, S.A. de C.V., San Francisco Ameca, S.A. de C.V., Quesería, S.A. de C.V., San Miguel El Naranjo, S.A. de C.V., Constancia, S.A. de C.V., San Rafael de Pucté, S.A. de C.V., Plan de Ayala, S.A. de C.V., Cía. Industrial Azucarera, S.A. de C.V. (Cuautotolapam), Pedernales, S.A. de C.V., Cía. Azucarera del Ingenio Bellavista, S.A. de C.V., Alianza Popular, S.A. de C.V., Tamazula, S.A. de C.V., El Mante, S.A. de C.V., Cía. Azucarera del Río Guayalejo, S.A. de C.V., Azuremex, S.A. de C.V. (únicamente 1995 y 1996), Operadora Azucarera Tehuana, S.A. de C.V. (Santo Domingo), José Ma. Morelos, S.A. de C.V.,

c) Estados financieros auditados y la correspondientes notas a dichos estados por los ejercicios 1994, 1995 y 1996 de los 16 ingenios siguientes: Ingenio Atencingo, S.A. de C.V., Ingenio Tamazula, S.A. de C.V., Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V., Ingenio Alianza Popular, S.A. de C.V., Compañía Azucarera del Río Guayalejo, S.A. de C.V.(Aarón Sáenz), Ingenio El Mante, S.A. de C.V., Compañía Industrial Azucarera San Pedro, S.A. de C.V., Compañía Azucarera del Ingenio Bellavista, S.A. de C.V., Ingenio José María Morelos, S.A. de C.V., Ingenio San Francisco El Naranjal, S.A. de C.V., Ingenio Pedernales, S.A. de C.V., Compañía Industrial Azucarera, S.A. de C.V. (Cuatotolapam), Ingenio San Gabriel Ver. S.A. de C.V., Ingenio San Nicolás, S.A. de C.V., Operadora Azucarera Tehuana, S.A. de C.V. (Santo Domingo) y Proazúcar, S.A. de C.V. (La Primavera).

d) Estados financieros auditados así como las notas a dichos estados correspondientes al ejercicio 1994 del Ingenio El Carmen, S.A. de C.V.; estados financieros auditados y las notas a los estados correspondientes al ejercicio 1996 de los ingenios Azuremex, S.A. y San Francisco Ameca, S.A. de C.V.

e) Estados financieros proforma correspondientes al ejercicio 1997 de los 18 ingenios siguientes: Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S.A. de C.V. (San Cristóbal), Ingenio El Potrero, S.A. de C.V., Ingenio Emiliano Zapata, S.A. de C.V., Ingenio Plan de San Luis, S.A. de C.V., Ingenio El Modelo, S.A. de C.V., Ingenio San Miguelito, S.A. de C.V., Ingenio La Providencia, S.A. de C.V., Ingenio Casasano La Abeja, S.A. de C.V., Ingenio Atencingo, S.A. de C.V., Ingenio San Rafael El Pucté, S.A. de C.V., Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V., Ingenio Quesería, S.A. de C.V., Ingenio San Miguel El Naranjo, S.A. de C.V., Ingenio Constancia, S.A. de C.V., Ingenio San José de Abajo, S.A. de C.V., Ingenio El Carmen, S.A. de C.V., Ingenio José María Morelos, S.A. de C.V. y Operadora Azucarera Tehuana, S.A. de C.V. (Santo Domingo).

f) Relación de amortizaciones correspondientes a los años de 1994, 1995 y 1996, de los ingenios azucareros: San Rafael de Pucté, S.A. de C.V., Atencingo, S.A. de C.V., Constancia, S.A. de C.V., San Miguel El Naranjo, S.A. de C.V., Quesería, S.A. de C.V., San Francisco Ameca, S.A. de C.V., Casasano La Abeja, S.A. de C.V., El Modelo, S.A., El Potrero, S.A., Emiliano Zapata, S.A. de C.V., La Providencia, S.A. de C.V., Plan de San Luis, S.A. de C.V., San Cristóbal, S.A. de C.V., San Miguelito, S.A., Presidente Benito Juárez, S.A. de C.V., Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., El Carmen, S.A. de C.V., Central Motzorongo, S.A. de C.V., El Refugio, S.A. de C.V., Adolfo López Mateos, S.A. de C.V., Proazúcar, S.A. de C.V. e Ingenio La Primavera, Mahuixtlán, S.A. de C.V., Melchor Ocampo, S.A. de C.V., La Gloria, S.A., San José de Abajo, S.A. de C.V., Compañía Industrial Azucarera San Francisco, S.A. de C.V., Compañía Industrial Azucarera San Pedro, S.A. de C.V., Compañía Azucarera del Río Guayalejo, S.A. de C.V. (Aarón Sáenz Garza), El Mante, S.A. de C.V., Tamazula, Alianza Popular S.A. de C.V., Compañía Azucarera del Ingenio Bellavista, S.A. de C.V., Pedernales, S.A. de C.V., Cuautotolapam, Plan de Ayala,

S.A. de C.V., San Gabriel Ver., S.A. de C.V., Emiliano Zapata, S.A. de C.V., Santo Domingo, José Ma. Morelos, S.A. de C.V.

g) Información sobre proyectos de inversión de los ingenios Adolfo López Mateos, S.A. de C.V. e Ingenio Tres Valles, S.A. de C.V.; información incompleta de proyectos de inversión de los ingenios, Plan de San Luis, S.A. de C.V., El Potrero, S.A. de C.V., La Providencia, S.A. de C.V., Ingenio Pedernales, S.A. de C.V., Ingenio Atencingo, S.A. de C.V., Operadora Azucarera Tehuana, S.A. de C.V. (Santo Domingo) e Ingenio José María Morelos, S.A. de C.V; el resto de los ingenios azucareros presentaron información relativa a listados de inversiones correspondientes a los años de 1994 a 1996.

h) Argumentos sobre la repercusión potencial de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, para el periodo 1994-1996 e información, entre otros, sobre el crecimiento real y estimado de las importaciones, consumo de azúcar y jarabe de maíz de alta fructosa en los Estados Unidos de América y precio promedio de venta nacional del azúcar, correspondiente al periodo 1990-1996.

Importadores y exportadores

14. En respuesta al requerimiento UPCI.310.00.1353/0, mediante escritos del 6 y 23 de junio de 2000, Administración SIM, S.A. de C.V., argumentó que ha dejado de importar jarabe de maíz de alta fructosa, toda vez que a partir de noviembre de 1994, adquiere dicho producto de Almidones Mexicanos, S.A. de C.V.

15. En respuesta a los requerimientos UPCI.310.00.1644/0; UPCI.310.00.1652/0; UPCI.310.00.1653/0; UPCI.310.00.1655/0, y UPCI.310.00.1656/0, respectivamente, mediante escritos del 23 de junio de 2000, comparecieron las importadoras y exportadoras Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., A.E. Staley Manufacturing Company, Archer Daniels Midland Company, Corn Refiners Association y Cerestar USA Inc., para argumentar lo siguiente:

a) Conforme al reporte emitido por el Panel, la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de enero de 1998 es irreparable, toda vez que contiene omisiones serias en cuanto al análisis realizado por la autoridad para demostrar la amenaza de daño.

b) La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial carece de fundamento legal para iniciar un procedimiento especial no contemplado en la legislación mexicana, para dar cumplimiento al reporte del panel sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América.

c) En todo caso, la autoridad debe declarar insubsistente el procedimiento por el que se determinaron las cuotas compensatorias preliminares y definitivas a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América, y reponer dicho procedimiento desde el inicio, con la consecuente liberación de todas las fianzas y devolución de las cuotas compensatorias cobradas durante el periodo transcurrido entre las resoluciones preliminar y final.

d) Si la autoridad decide emitir una nueva resolución sin reponer el procedimiento administrativo, debe limitarse al expediente administrativo original, sin crear para ello un expediente administrativo con información adicional.

16. En respuesta al requerimiento UPCI.310.00.1643/0, mediante escrito del 24 de junio de 2000, Arancia Corn Products, S.A. de C.V. (antes Arancia CPC, S.A. de C.V.) manifestó lo siguiente:

a) De enero a noviembre de 1994 existía la empresa denominada Productos de Maíz, S.A. de C.V., misma que se escindió bajo la denominación CPC Industrial, S.A. de C.V.; la cual en agosto de 1995, cambió su razón social por la de Arancia CPC, S.A. de C.V. Posteriormente, en marzo de 1999, nuevamente modificó su denominación, por la de Arancia Corn Products, S.A. de C.V.

b) Por lo anterior, no es posible presentar la información requerida correspondiente a Productos de Maíz, S.A. de C.V. y CPC Industrial, S.A. de C.V., toda vez que ya no la tiene disponible en su sistema.

c) Unicamente presentó información estadística mensual sobre ventas, valor y volumen del producto importado, correspondiente a 1994.

Réplicas de las partes

17. La Secretaría fijó un plazo de 5 días hábiles para que las partes interesadas presentaran sus contrargumentos respecto de la información, argumentos y pruebas vertidas por sus contrapartes en el desahogo de los requerimientos a que se refiere el punto 11 de esta Resolución.

Productor nacional

18. Mediante escrito del 3 de julio de 2000, argumentó lo siguiente:

a) Salvo Arancia Corn Products, S.A. de C.V. (antes Arancia, CPC, S.A. de C.V.), las partes comparecientes no presentaron la información requerida por la autoridad en tiempo y forma, ya que únicamente se limitaron a señalar la manera en que consideran que debe de actuar la Secretaría para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo Especial.

b) Derivado de lo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial debe resolver conforme a la información disponible, confirmando o aumentando las cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América.

Importadores y exportadores

19. Mediante escritos del 3 de julio de 2000, argumentaron lo siguiente:

a) El procedimiento que está siguiendo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es improcedente, por lo que deben darse por terminados los efectos de las cuotas compensatorias de inmediato.

b) La autoridad requirió a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, información que debió haber formado parte de la solicitud de inicio de investigación, lo cual implica un reconocimiento por parte de la autoridad de que inició dicho procedimiento sin contar con los elementos necesarios para ello.

c) En su respuesta al requerimiento, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, no presentó explicación alguna sobre el efecto de las importaciones en la industria, por lo que la autoridad debe basarse en la información disponible que obra en el expediente original para emitir su resolución.

d) El supuesto representante legal de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera carece de facultades para representar a esa organización, toda vez que el instrumento notarial número 79,857 que obra en el expediente administrativo de la investigación antidumping, le otorga un poder especial para actos de administración en todo lo relativo al procedimiento iniciado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial bajo el expediente 1/97, mismo que concluyó con la publicación de la resolución final en el **Diario Oficial de la Federación**, del 23 de enero de 1998.

Información extemporánea

20. Cargill de México, S.A. de C.V., y Cargill Incorporated dieron respuesta en forma extemporánea al requerimiento que formuló esta autoridad mediante oficio número UPCI.310.00.1649/0, por lo que no se tomó en cuenta en este procedimiento.

21. Asimismo, la Secretaría desestimó la información complementaria a la réplica que presentó la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, mediante escrito del 5 de julio de 2000, en virtud de que se presentó fuera del plazo concedido para tal efecto.

CONSIDERANDO

Competencia

22. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es competente para tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional; determinar las cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones, y expedir las disposiciones de carácter administrativo, en cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en materia comercial suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 34 fracciones V y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 1, 2, 3, 4 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 21.1 del Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias; 2, 5 fracciones VII y X, 49 párrafo segundo y 97 fracción II de la Ley de Comercio Exterior y; 138 y 142 de su Reglamento.

23. Respecto al inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América, el Grupo Especial concluyó que las autoridades mexicanas habían procedido de manera consistente con sus obligaciones multilaterales en la materia, por lo que la finalidad de esta resolución es hacer compatible la imposición de la medida antidumping definitiva sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América con las prescripciones del Acuerdo Antidumping en los aspectos a que se refieren los incisos a), b), c), d) y e) del punto 8.2 del informe del Grupo Especial a que se refiere el punto 6 de esta resolución.

24. La recomendación del Organo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio estableció que algunos aspectos del análisis que realizó la autoridad sobre amenaza daño señalados en el punto 8.2 inciso a) del informe del Grupo Especial, referidos en el punto 6 de esta Resolución debían ponerse de conformidad con el Acuerdo Antidumping, y con respeto al principio de deferencia a la Secretaría, que como autoridad investigadora merece, el Grupo Especial no le indicó la forma específica de cumplir con la puesta en conformidad aludida.

25. El Grupo Especial concluyó que era insuficiente la consideración hecha por los Estados Unidos Mexicanos relativa a la repercusión de las importaciones objeto de discriminación de precios sobre la rama de producción nacional, su determinación de la existencia de una amenaza de daño importante basada no en el conjunto de la rama de producción, sino únicamente en la parte de la producción, la rama de producción nacional vendida en el sector industrial, y su insuficiente consideración de los efectos potenciales del supuesto convenio de restricción en su determinación sobre la probabilidad de un aumento

sustancial de las importaciones, conforme lo establecido por el artículo 3, párrafos 1, 2, 4, 7 y 7 inciso i) del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

26. Conforme al artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: "Esta Constitución, las Leyes del Congreso de Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma... serán ley Suprema de toda la Unión". En ese sentido los Estados Unidos Mexicanos es Parte del Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, el cual en su artículo II.2, establece que el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por el que se rige la solución de diferencias (anexo 2), entre otros instrumentos jurídicos conexos, forma parte integrante de dicho Acuerdo y es vinculante para todos sus Miembros, por lo que el informe del Grupo Especial resulta obligatorio para los Estados Unidos Mexicanos.

27. Con el propósito de dar cumplimento al informe del Grupo Especial y en ejercicio del derecho del obligado, la Secretaría publicó en el **Diario Oficial de la Federación** del 15 de mayo de 2000, la resolución que revisa, con base en la conclusión y recomendación del Grupo Especial del Organo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 1702.40.99 y 1702.60.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. A través de dicha Resolución se estableció que durante el procedimiento, la Secretaría formularía requerimientos de información, y otorgaría plazos improrrogables, respetando con ello la garantía de seguridad jurídica de las partes.

28. En las constataciones y recomendación del informe Grupo Especial, a que se refiere el punto 8.2 inciso a) del informe del Grupo Especial a que se hace referencia en el punto 6 de esta Resolución, éste consideró que era insuficiente el examen que llevó a cabo la autoridad para determinar la existencia de amenaza de daño importante. Lo anterior implica que la autoridad debe realizar una evaluación complementaria que le permita dar cumplimiento al informe mencionado.

29. Para dar cumplimiento al informe del Grupo Especial y con fundamento en los artículos 54 de la Ley de Comercio Exterior y 6.8 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría consideró necesario realizar requerimientos a las partes interesadas, lo cual también se señala en la resolución a que se refiere el punto 9 de esta Resolución, toda vez que requería de elementos complementarios para analizar los aspectos a que se hace referencia en el punto 6 de esta resolución. Y requería elementos complementarios, ya que en dichos aspectos, el Grupo Especial tuvo un enfoque diferente al de la Secretaría en su resolución final original.

30. El representante legal de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera tiene las facultades para representar a dicha Cámara en este procedimiento, según se desprende de las escrituras públicas que obran en el expediente administrativo del caso.

31. En relación con la aplicación de la cuota compensatoria provisional, el Grupo Especial concluyó lo siguiente:

a) Que la aplicación de la medida provisional, por un periodo mayor a seis meses, es incompatible con las disposiciones del artículo 7 párrafo 4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

b) Que la percepción retroactiva de derechos antidumping por el periodo de aplicación de la medida provisional es incompatible con las disposiciones del artículo 10 párrafo 2 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

c) Que el hecho de que los Estados Unidos Mexicanos no hayan procedido con prontitud a liberar las fianzas prestadas y/o restituir los depósitos en efectivo hechos con arreglo a la medida provisional, es incompatible con las disposiciones del artículo 10 párrafo 4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

32. En relación con la aplicación de la cuota compensatoria definitiva, el Grupo Especial concluyó que el hecho de que los Estados Unidos Mexicanos no hayan facilitado las constataciones o conclusiones sobre la cuestión de aplicación retroactiva de la medida antidumping definitiva, es incompatible con las disposiciones del artículo 12 párrafo 2 y su apartado, del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

33. La Secretaría, con base en esta resolución, procede a dar cumplimiento a las conclusiones y recomendación que el Grupo Especial señaló como incompatibles con las prescripciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, dentro de los términos establecidos en el Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias. Para estos efectos procede a emitir, en consecuencia, una nueva resolución final, misma que revisa y sustituye, en los aspectos señalados en el punto 8.2 del informe del Grupo Especial a la del 23 de enero de 1998.

Análisis de amenaza de daño y causalidad

Indicadores de amenaza de daño y causalidad

a. Importaciones objeto de discriminación de precios

34. Con fundamento en lo previsto en los artículos 41 y 42 fracción I de la Ley de Comercio Exterior, 64 y 68 fracción I de su Reglamento y 3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría analizó si las importaciones investigadas registraron una elevada tasa de crecimiento en el mercado nacional. Asimismo, se evaluó si una consecuencia del crecimiento de tales importaciones fue el incremento acelerado y sostenido de la participación de tales importaciones en el mercado nacional que indique la probabilidad fundada de que los índices de participación aumenten a un nivel que pueda causar daño a la producción nacional.

35. Con base en lo manifestado en los puntos 229 a 233 de la resolución preliminar, en virtud de que parte del producto investigado en 1995 y 1996 se ha internado al mercado mexicano por fracciones arancelarias distintas a las que corresponde estrictamente su clasificación en la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y con el fin de no subestimar el monto de las importaciones investigadas; la Secretaría determinó incluir en su análisis el volumen de jarabe de maíz de alta fructosa objeto de investigación que ingresó por las fracciones arancelarias 1702.40.01 y 1702.90.99, originario de los Estados Unidos de América. Lo anterior, permitió cuantificar el volumen total de las importaciones del producto investigado que ingresó a los Estados Unidos Mexicanos en condiciones de discriminación de precios, así como sus efectos en el mercado nacional.

36. Para determinar el volumen total importado de jarabe de maíz de alta fructosa correspondiente a las presentaciones comerciales jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 y jarabe de maíz de alta fructosa grado 55, la Secretaría consideró la información proporcionada por las exportadoras Archer Daniels Midland Company, A.E. Staley Manufacturing Company y CPC International, Incorporated; las importadoras Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., Arancia Corn Products, S.A. de C.V. (antes Arancia CPC, S.A. de C.V.) Cargill de México, S.A. de C.V., Compañía Exportadora de Aguas Minerales, S.A. de C.V., y Embotelladora Mizarlo, S.A. de C.V., así como la del Sistema de Información Comercial de México y la solicitada a diversos agentes aduanales, la cual obra en el expediente administrativo de este procedimiento.

37. Con base en las fuentes de información descritas en el punto anterior, las importaciones totales de jarabe de maíz de alta fructosa, se incrementaron 112 por ciento en el periodo investigado, enero a diciembre de 1996, al pasar de un volumen de 90,825 toneladas en 1995 a 192,976 toneladas en el periodo investigado.

38. Con respecto a las importaciones totales de jarabe de maíz de alta fructosa de los Estados Unidos de América, se observó una tendencia creciente en los últimos años: en 1994 el volumen importado fue de 60,996 toneladas, en 1995 de 90,824 toneladas y, en el periodo investigado, de 192,906 toneladas; situación que denota un crecimiento porcentual en dichos años con respecto al mismo periodo del año anterior, del orden de 49 por ciento en 1995 y de 112 por ciento en 1996.

39. A pesar de que el crecimiento absoluto en las importaciones investigadas se registró en ambos tipos de presentaciones, éste se dio principalmente en las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa grado 55, ya que en el periodo investigado las importaciones de esta presentación, procedentes de los Estados Unidos de América, se incrementaron 179 por ciento, mientras que las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 crecieron 5 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior.

40. Del total de las importaciones originarias de los Estados Unidos de América, en el periodo investigado el 81 por ciento correspondió a importaciones de jarabe de maíz con una concentración del 55 por ciento de fructosa (JMAF-55) y el 19 por ciento a importaciones de jarabe de maíz con una concentración del 42 por ciento de fructosa (JMAF-42).

41. Es importante destacar que el crecimiento de las importaciones totales de jarabe de maíz de alta fructosa, lo definió el incremento sustancial en las importaciones originarias de los Estados Unidos de América y no la de otros países. En efecto, al analizar la participación de las importaciones investigadas en relación con las importaciones totales, éstas tuvieron una participación del 99.9 por ciento de 1994 a 1996, por lo que los Estados Unidos de América resultaron ser el principal exportador de jarabe de maíz de alta fructosa al mercado mexicano, situación que permite prever que se registrará un mayor flujo de comercio de edulcorantes de maíz de los Estados Unidos de América hacia el mercado mexicano. Es decir, queda corroborada la probabilidad de un aumento sustancial de dichas importaciones.

42. Al analizar el volumen de las importaciones investigadas, la Secretaría observó que las empresas que en mayor medida contribuyeron al crecimiento de las importaciones procedentes de los Estados Unidos de América en el periodo investigado, son principalmente tres: Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., Arancia Corn Products, S.A. de C.V. (antes Arancia CPC, S.A. de C.V.) y Cargill de México, S.A. de C.V., las cuales tuvieron una participación con respecto al volumen total importado del orden del 51, 30 y

16 por ciento, respectivamente. Estas tres empresas en conjunto concentraron el 97 por ciento del total de las importaciones investigadas, constituyéndose como las principales empresas importadoras de jarabe de maíz de alta fructosa en el periodo investigado.

43. Por otra parte, en el documento del 20 de diciembre de 1996 de Sparks Companies, Inc., titulado "Perspectiva del edulcorante de maíz", así como en la ponencia presentada por Peter J. Buzzanell en la Segunda Conferencia Anual sobre azúcar y edulcorantes en el mundo de F.O. Licht, titulada "Pronósticos de tendencias en la demanda de edulcorantes en las industrias de alimentos y bebidas en América Latina", presentados por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, se señala que la demanda de jarabe de maíz de alta fructosa en el mercado mexicano se cubrirá con importaciones del producto originario de los Estados Unidos de América y producción nacional de jarabe de maíz de alta fructosa, la cual para su fabricación dependerá de maíz importado del mismo país.

44. Dicho señalamiento se corroboró para el periodo investigado cuando, a pesar de la existencia de jarabe de maíz de alta fructosa fabricado en los Estados Unidos Mexicanos, el 83 por ciento de la demanda fue cubierta con producto importado y el 17 por ciento restante con producción nacional. La referida constatación denota que las importaciones del producto investigado constituyeron la principal fuente de abastecimiento. Asimismo, a medida que los usuarios incrementen la sustitución comercial de azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa y dada la tendencia creciente de las importaciones, éstas continuarán teniendo una participación importante en la industria de edulcorantes nutritivos con equivalente poder de dulzor.

45. De hecho, al analizar las estadísticas de importación correspondientes al periodo de enero a septiembre de 1997, la Secretaría confirmó dicha presunción, ya que las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América en el periodo referido, registraron un crecimiento del 75 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

46. Por otra parte, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera argumentó que la totalidad de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa tienen como destino el sector industrial y no el doméstico.

47. Administración Sim, S.A. de C.V., en la investigación antidumping manifestó que se debe evaluar el impacto de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa sobre el total del mercado de azúcar, de lo contrario, al considerar un mercado segmentado, se verá distorsionado el porcentaje de afectación. Por su parte, Compañía Exportadora de Aguas Minerales, S.A. de C.V., Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., y los usuarios industriales manifestaron que la segmentación determinada por la Secretaría del sector industrial para estimar el consumo nacional, y en la cual se basa el análisis de amenaza de daño, carece de fundamento económico y legal.

48. A partir de las constataciones y conclusión del informe del Grupo Especial establecidas 7.147, 7.148, 7.150, 7.154, 7.157, 7.158, 7.159 y 7.160 y 8.2 inciso a) referente a la determinación de la existencia de una amenaza de daño a un segmento de la rama de producción nacional, la Secretaría evaluó los efectos de las importaciones en condiciones de discriminación de precios sobre la totalidad de dicha rama. Para esos efectos, calculó el consumo nacional aparente medido a través de la suma de la producción nacional de azúcar estándar y refinada más la producción nacional de jarabe de maíz de alta fructosa en base seca, dado que ésta forma parte de la demanda de edulcorantes nutritivos con poder de dulzor equivalente, más las importaciones totales de jarabe de maíz de alta fructosa y de azúcar, menos las exportaciones de azúcar estándar y refinada.

49. Al analizar el crecimiento de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América en relación con el consumo nacional aparente, la Secretaría observó una participación creciente, la cual fue del orden del 1.7 en 1994, del 2 por ciento en 1995 y del 4 por ciento en 1996, por lo que en el periodo investigado la participación de las importaciones en el consumo interno, registró un incremento de 2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.

50. En relación con lo manifestado por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera en el punto 46 de esta Resolución, con el fin de reflejar la penetración de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa en el sector industria, la Secretaría analizó el impacto de dichas importaciones en la parte del consumo de azúcar del sector industria. Para estos efectos, estimó el monto de la producción nacional de azúcar que se destinó a cada sector, considerando los siguientes porcentajes: sector doméstico 47 por ciento, sector industria 53 por ciento; este último se desagrega en 29 por ciento para embotelladoras y 24 por ciento para otras industrias.

51. Estos porcentajes, proporcionados por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera en los cuadros denominados "consumo de azúcar", coincidieron con los presentados por Peter J. Buzzanell en la ponencia que se cita en el punto 43 de esta Resolución, en la cual mencionó que: "La composición del consumo de azúcar se puede dividir en uso doméstico (45 a 47 por ciento) y en uso industrial (53 a 55 por ciento)". Asimismo, los usuarios industriales señalaron que la Asociación Nacional

de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, A.C. (ANPRAC) estima que el consumo de azúcar de la industria refresquera representó el 29 por ciento de la producción nacional de azúcar.

52. De acuerdo con los puntos 50 y 51 de esta Resolución, al analizar el crecimiento de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América en relación con el consumo del sector industria, la Secretaría también observó una participación creciente en el periodo comprendido de 1994 a 1996 al pasar del 3 por ciento en 1994 a 9 por ciento en 1996, lo cual muestra que en el periodo investigado la participación de las importaciones investigadas en el consumo interno del sector industria registró un incremento de 6 puntos porcentuales con respecto a 1994.

53. Adicionalmente, con base en la información proporcionada por las importadoras, relativa a las ventas que realizaron en el mercado mexicano del producto importado, se corroboró lo siguiente: que en el periodo investigado el destino de las mismas fue el sector industria, en el cual la de bebidas fue la principal demandante, con un consumo de 81 por ciento del total de las ventas; el 19 por ciento restante fue consumido por industrias dedicadas a la panificación, alimentos procesados, lácteos, farmacéutica, confitería y otras. Al respecto, es importante mencionar que la industria de bebidas está conformada por productores de refrescos embotellados, jugos, reconstituyentes deportivos, infusiones preparadas, concentrados, e incluso bebidas alcohólicas.

54. En relación con lo descrito en los puntos 49, 52 y 53 de esta Resolución, la Secretaría determinó que las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América mantuvieron una tendencia creciente en términos absolutos y en relación con el consumo nacional aparente durante el periodo de 1994 a 1996, tanto en el mercado nacional de edulcorantes como en el correspondiente al sector industria, por lo que se prevé que en el futuro inmediato la concurrencia de nuevas importaciones en condiciones de discriminación de precios repercutirá de manera negativa en el comportamiento de la industria nacional azucarera.

55. Por otra parte, y conforme a lo señalado en los puntos 545 a 547 de la resolución final original y a partir de las constataciones del Grupo Especial descrita en los puntos 7.163 a 7.178, referente a la probabilidad de un aumento sustancial de las importaciones dada la existencia del supuesto convenio de restricción, la Secretaría describió las razones del por qué el supuesto convenio de restricción no eliminaría la probabilidad de que tanto los embotelladores como otros sectores que emplean jarabe de maíz de alta fructosa en múltiples aplicaciones continúen adquiriendo el producto importado en condiciones de discriminación de precios en sustitución del azúcar.

56. La Secretaría determinó que incluso si el supuesto convenio de restricción del uso de jarabe de maíz de alta fructosa de septiembre de 1997, entre los ingenios azucareros y los embotelladores de refrescos existiera, éste no eliminaría la amenaza de daño a la industria nacional azucarera. Lo anterior, en virtud de que aun cuando los embotelladores mexicanos de refrescos ("*soft-drinks*") limitaran su consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, no se elimina la probabilidad de que tanto los mismos embotelladores de refrescos como otros sectores de la industria de bebidas y de otras industrias que emplean jarabe de maíz de alta fructosa en múltiples aplicaciones, continuaran adquiriendo el producto importado en condiciones de discriminación de precios, en razón de lo siguiente:

i). Los usuarios que están en posibilidad de consumir tanto azúcar como jarabe de maíz de alta fructosa son, por una parte, los fabricantes de bebidas de todo tipo, esto es, productores de refrescos embotellados, jugos, reconstituyentes deportivos, infusiones preparadas, concentrados e incluso bebidas alcohólicas, y por otra, los productores de alimentos procesados, conservas, repostería, confitería, panadería y productos lácteos.

ii) Los productores de refrescos embotellados son sólo una parte de la industria de bebidas. Por ello, bajo el supuesto de la existencia del acuerdo, serían los únicos agentes económicos que, en todo caso, limitarían el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa. Sin embargo, esto no significa que dichos productores sean los únicos consumidores ni que el consumo de las otras industrias sea poco significativo ni menos importante. Por lo contrario, las otras industrias que emplean el jarabe de maíz de alta fructosa importado en sus procesos, las cuales no tendrían restricción alguna para incrementar el consumo de este producto en sustitución del azúcar, representaron en el periodo investigado aproximadamente el 46 por ciento del consumo de azúcar total del sector industria.

iii) Los usuarios que utilizan el jarabe de maíz de alta fructosa para la fabricación de sus productos, distintos de los embotelladores de refrescos, consumieron en el periodo investigado casi la tercera parte del jarabe de maíz de alta fructosa importado de los Estados Unidos de América. Sin embargo, ello no significa que en periodos posteriores al investigado su participación en el consumo del jarabe de maíz de alta fructosa importado no se incrementaría, dado el aumento de las importaciones objeto de discriminación de precios.

iv) Tanto la industria de bebidas como las otras industrias podrían adquirir el producto importado a precios bajos como consecuencia de la discriminación de precios, provocándose un mayor desplazamiento y deterioro de los precios del azúcar.

v) Con el objeto de demostrar la inminencia de nuevas importaciones a precios de dumping en el periodo investigado, la Secretaría observó que las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa se incrementaron 112 por ciento con respecto al mismo periodo anterior (1995) y para septiembre de 1997, fecha del supuesto acuerdo, las importaciones registraban un incremento adicional de 75 por ciento con respecto a enero-septiembre de 1996. Esto es, el aumento de las importaciones previsto en el periodo investigado ya había ocurrido a la fecha del supuesto acuerdo, por lo que la supuesta limitación en el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa por parte de los embotelladores de refrescos, ya consideraba un nivel de importaciones sustancialmente superior al consumo que habían tenido estos embotelladores durante el periodo investigado.

vi) El hecho de que en los Estados Unidos Mexicanos otros usuarios industriales, distintos de los embotelladores de refrescos, estuvieran ya sustituyendo su consumo de azúcar por el de jarabe de maíz de alta fructosa, en cantidades cada vez mayores, ubicaba el volumen de las importaciones en un nivel en el cual persistía la amenaza de daño.

57. Por otra parte, la Secretaría realizó un sondeo de mercado, en el cual se reflejaron las condiciones existentes en 1996, cuando el desarrollo del mercado de jarabe de maíz de alta fructosa en los Estados Unidos Mexicanos se encontraba en una etapa de introducción del producto. A partir de este sondeo se determinó que la sustituibilidad técnica del azúcar por el jarabe de maíz de alta fructosa no debía considerarse como una limitación técnica, sino como el nivel que se había alcanzado hasta ese momento, en virtud de que el grado de sustituibilidad técnica variaba en función de la aplicación del siguiente modo: del 100 por ciento en jugos, vinos, caramelo líquido, *glassés*, crema batida y frutas congeladas; del 99 por ciento en jarabes; del 96 por ciento en aderezos; del 70 por ciento en mermeladas; del 52 por ciento en frutas en almíbar, y del 36 por ciento en helados.

58. A efectos de determinar la probabilidad del incremento de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América, suponiendo sin conceder que el supuesto convenio existiera (y además de que se honrara estrictamente por las partes), la Secretaría con base en proyecciones del consumo de azúcar total para 1997 y 1998, estimó el consumo de los usuarios del sector industria diferentes a los embotelladores de refrescos. Asimismo, consideró en su análisis los grados de sustitución de azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa determinados con base en información de los usuarios industriales. Al respecto, la Secretaría observó que en un escenario conservador, en el que se considera el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa de los embotelladores limitado a 350,000 toneladas anuales, que se abastecería de producción nacional de jarabe de maíz de alta fructosa, su capacidad instalada estaría ocupada al 100%, por lo que el consumo de otras industrias incrementaría las importaciones.

59. Esto es, en un mercado en el que los precios de un bien sustituto tienden a disminuir, el incentivo para incrementar su consumo aumenta. Si además se considera el grado de sustitución de azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa existente en 1996 en las otras industrias como constante, incluso si el consumo estimado de azúcar únicamente sustituyeran el 50 por ciento, el volumen de importaciones mínimo necesario ascendería a 334,000 toneladas en 1997 y a 350,000 toneladas en 1998. Es decir, dichos volúmenes significarían incrementos del 73 y 82 por ciento en relación con las importaciones del periodo investigado.

60. Lo anterior permitió a la Secretaría concluir que, incluso en caso de que el supuesto convenio existiera y se cumpliera, la demanda por importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, derivada del nivel de precios a que concurren al mercado nacional, incentivaría el incremento de su consumo por parte de otras industrias consumidoras diferentes a los embotelladores de refrescos. Dicho incremento se presentaría en una magnitud tal, que supondría un incremento sustancial de las importaciones en relación con las observadas en el periodo investigado, lo que demuestra que la amenaza de daño a la industria nacional azucarera persistiría, tanto por los efectos probables en precios como en el desplazamiento de ventas y los consecuentes efectos negativos sobre las variables financieras.

61. Con base en los hechos descritos en los puntos 34 a 60 de esta Resolución, la Secretaría determinó que las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América registraron una elevada tasa de crecimiento en términos absolutos y en relación con el consumo nacional aparente, lo que indica la probabilidad fundada de que se produzca un aumento sustancial de dichas importaciones en el futuro inmediato.

b. Capacidad exportadora

62. De conformidad con los artículos 42 fracción II de la Ley de Comercio Exterior, 68 fracción II de su Reglamento y 3.7 inciso ii) del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría analizó si existió capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad fundada de un aumento significativo de las exportaciones objeto de prácticas de discriminación de precios, tomando

en cuenta la existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones originarias de los Estados Unidos de América.

63. De acuerdo con las estadísticas de producción de jarabe de maíz de alta fructosa, reportadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en 1996 la industria estadounidense de jarabe de maíz de alta fructosa registró un volumen de 8.1 millones de toneladas cortas, base seca. Esto representó un incremento del 4 por ciento en relación con 1995, en el cual la producción fue de 7.9 millones de toneladas cortas. De la producción total registrada en 1996, el 62 por ciento corresponde al jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 y el 38 por ciento restante al jarabe de maíz de alta fructosa grado 42. En cuanto a 1997, el mencionado Departamento de Agricultura estimó que la producción de jarabe de maíz de alta fructosa será de 8.4 millones de toneladas cortas, es decir, 3.7 por ciento superior a la registrada en 1996.

64. Con base en una publicación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera señaló que el incremento en la producción de jarabe de maíz de alta fructosa se explica por la expansión de la capacidad de la industria estadounidense de edulcorantes de maíz. Al respecto, al analizar las estadísticas de producción reportadas por dicho departamento se observó que en promedio la producción de jarabe de maíz de alta fructosa en el periodo de 1985 a 1989 fue de 5.6 millones de toneladas cortas, y en el periodo de 1990 a 1996, el promedio de la producción ascendió a 7.2 millones de toneladas cortas.

65. Por otra parte, para determinar la capacidad instalada de la industria nacional de los Estados Unidos de América, así como la capacidad individual de cada una de las empresas productoras de jarabe de maíz de alta fructosa, la Secretaría consideró como fuentes de información los reportes "*The Maxwell Consumer Report - Update on Sugar, High Fructose Corn Syrup, and High Intensity Sweeteners*" y el elaborado por "*The Connell Company*", así como diversos estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América y las estadísticas proporcionadas en el curso de la investigación antidumping original por las empresas exportadoras.

66. Con base en las fuentes de información descritas en el punto anterior, la Secretaría observó que la capacidad de producción de jarabe de maíz de alta fructosa de la industria estadounidense aumentó de 7.8 millones de toneladas cortas en 1994 a 8.8 y 10.0 millones de toneladas cortas en 1995 y 1996, respectivamente. Es decir, se registró un crecimiento porcentual en dichos años, con respecto al mismo periodo del año anterior, de 13 por ciento en 1995 y de 14 por ciento en 1996. En 1997, la capacidad de producción de jarabe de maíz de alta fructosa ascendió a 11.8 millones de toneladas cortas, lo que significó un incremento de 18 por ciento con respecto a la observada en 1996.

67. De acuerdo con diversas publicaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, el incremento de la capacidad de producción de la industria estadounidense de edulcorantes de maíz, observado en 1994 y 1995, se atribuye en un 25 por ciento a las inversiones que llevaron a cabo Cargill, Incorporated; Archer Daniels Midland Company; Tate and Lyle y Minnesota Corn Processors. Asimismo, con base en información proporcionada por las exportadoras, se observó que en 1995 A.E. Staley Manufacturing Company, Minnesota Corn Processors y CPC International, Incorporated, incrementaron de manera conjunta su capacidad de producción en 22 por ciento.

68. En las mismas publicaciones del Departamento de los Estados Unidos de América se señala que en 1996, Progold Limited Liability Company concluyó la construcción de su planta de jarabe de maíz de alta fructosa e inició operaciones de producción en diciembre del mismo año, lo que representó un incremento en la capacidad de producción de los Estados Unidos de América de 4 a 5 por ciento. Al respecto, en el mismo año las exportadoras que contribuyeron al crecimiento de la capacidad de producción de la industria estadounidense fueron: CPC International, Incorporated; Minnesota Corn Processors; Cargill, Incorporated; Archer Daniels Midland Company; Roquette América, y Golden Technologies, ya que dichas empresas en conjunto registraron un incremento en su capacidad de producción de 11 por ciento. Además, como contribución al crecimiento de la industria de jarabe de maíz de alta fructosa, paralelamente se dio una expansión en las plantas de molienda húmeda de maíz.

69. De acuerdo con lo descrito en los puntos 63 a 68 de esta Resolución, y tomando como base las estadísticas de producción de jarabe de maíz de alta fructosa, reportadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, así como la referente a capacidad instalada señalada en el punto 65 de esta Resolución, la Secretaría estimó la capacidad libremente disponible de la industria estadounidense de jarabe de maíz de alta fructosa, a partir de la diferencia que resulta de restar la producción a la capacidad instalada.

70. Con base en este criterio, la Secretaría observó que los Estados Unidos de América registraron un incremento en su capacidad libremente disponible al pasar de 234 mil toneladas métricas en 1994, a 819 y 1,674 miles de toneladas métricas en 1995 y 1996, respectivamente.

71. De esta manera, se observó que durante 1996 la industria de los Estados Unidos de América de jarabe de maíz de alta fructosa, contó con una alta capacidad libremente disponible, la cual en caso de

destinarse al mercado mexicano, estaría en posibilidad de abastecer el 70 por ciento de la producción de azúcar que demanda el sector industria en su conjunto.

72. Con base en lo manifestado en los puntos 260 a 263 de la resolución preliminar, la Secretaría determinó que algunos elementos que contribuyeron al incremento de la capacidad instalada de la industria estadounidense de jarabe de maíz de alta fructosa, fueron los siguientes:

i) El dinámico desempeño de la industria mexicana embotelladora de refrescos, la que actualmente se considera la segunda en importancia a nivel mundial, después de la de los Estados Unidos de América, por el alto consumo per cápita.

ii) La industria nacional embotelladora de refrescos resulta un mercado atractivo para la industria estadounidense de edulcorantes de maíz, debido a que demanda el 29 por ciento de la producción nacional de azúcar.

iii) De acuerdo con lo descrito en diversos estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, se reconoce que una gran parte del incremento de la capacidad de las plantas productoras de jarabe de maíz de alta fructosa en los Estados Unidos de América estará orientada a desarrollar el mercado mexicano, lo que permite prever que se registrará un mayor aumento en el comercio de edulcorantes de maíz de los Estados Unidos de América hacia los Estados Unidos Mexicanos. Situación que fue corroborada en el apartado de importaciones objeto de discriminación de precios.

73. Por otra parte, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera proporcionó información mediante la cual la Secretaría observó que hasta 1993 la mayor parte de las exportaciones de los Estados Unidos de América de jarabe de maíz de alta fructosa se destinaba a Canadá. Sin embargo, a partir de 1994 los Estados Unidos de América exportaron cantidades cada vez mayores al mercado mexicano.

74. Para corroborar lo descrito en el punto anterior, la Secretaría analizó las ventas de exportación proporcionadas por Archer Daniels Midland Company, A.E. Staley Manufacturing Company y CPC International, Incorporated, observándose que del total de las ventas de exportación que llevaron a cabo, los Estados Unidos Mexicanos constituyeron el principal destino al concentrar el 72 y 88 por ciento de las mismas en 1995 y 1996, respectivamente.

75. La Secretaría consideró que lo señalado en el punto anterior, es representativo del total de las ventas de exportación de la industria estadounidense, por las siguientes razones:

i) Con base en las estadísticas de exportación reportadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, las ventas a los Estados Unidos Mexicanos de Archer Daniels Midland Company; A.E. Staley Manufacturing Company, y CPC International, Incorporated, representaron el 46 y 72 por ciento del total exportado por los Estados Unidos de América en 1995 y 1996, respectivamente, por lo que en el periodo investigado se registró un crecimiento de 26 puntos porcentuales.

ii) De la información aportada en el curso de la investigación antidumping por las partes interesadas y la que la Secretaría se allegó, no se tienen evidencias de que existan otras empresas que hayan exportado a los Estados Unidos Mexicanos jarabe de maíz de alta fructosa.

76. Además, según información proporcionada por Minnesota Corn Processors, Progold Limited Liability Company y Cerestar USA, Inc., estas empresas no exportaron jarabe de maíz de alta fructosa a ningún país, incluso ni a los Estados Unidos Mexicanos, en el periodo investigado. Sin embargo, comparecieron en el presente procedimiento para solicitar que no se les imponga una cuota compensatoria, lo que permite inferir que podrían tener la intención de exportar en el futuro a los Estados Unidos Mexicanos.

77. Adicionalmente, las circunstancias que hacen prever que en un futuro próximo una parte significativa de la capacidad de producción libremente disponible de la industria estadounidense tenga como destino el mercado mexicano son: el alto costo del transporte del jarabe de maíz de alta fructosa, que limita su comercio a intercambios de corta distancia. En este aspecto, los Estados Unidos Mexicanos califican como el mercado natural de dicho comercio. Además, la industria refresquera nacional presenta un crecimiento continuo que, aunado a la discriminación de precios al que se exportó el producto investigado, se traduce en una mayor demanda del mismo; y, en 1995 Cargill, Incorporated estableció centros de almacenamiento en Reynosa, Tamaulipas y en Tula, Hidalgo, con el propósito de atender los requerimientos tanto del noreste de los Estados Unidos Mexicanos como del centro del país.

78. De la evaluación conjunta de los elementos que se señalan en el presente apartado, la Secretaría concluyó que la capacidad libremente disponible de jarabe de maíz de alta fructosa de la industria de los Estados Unidos de América, indica la probabilidad fundada de un aumento sustancial de las exportaciones en condiciones de discriminación de precios al mercado mexicano.

c. Análisis de precios

79. A partir de las constataciones del Grupo Especial establecidas en los puntos 7.141, 7.151, 7.152 y 7.153 del informe definitivo, y con fundamento en lo establecido en los artículos 3.1, 3.2, 3.4 y 3.7 del

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 41 y 42 de la Ley de Comercio Exterior y 64 y 68 de su Reglamento, la Secretaría analizó el comportamiento de los precios de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América y de los precios nacionales de 1994 a 1996, tomando en cuenta la diferencia "natural" entre dichos precios, la información del conjunto de la rama de producción nacional y las condiciones de la industria.

80. Con base en la información contenida en el expediente administrativo y la que la Secretaría se allegó, se observó que la tendencia observada en los precios promedio de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América fue decreciente de 1994 a 1995 y creciente de 1995 a 1996. En 1995, en relación con el año anterior, el precio promedio ponderado de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 disminuyó 30 por ciento y el precio de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 se redujo en 21 por ciento.

81. En 1996, en relación con 1995, se registró un aumento de los precios de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 y jarabe de maíz de alta fructosa grado 55, de 12 por ciento y 5 por ciento, respectivamente. No obstante, la Secretaría observó que en el periodo investigado, respecto a 1994, se mantuvo un descenso de los precios de las importaciones originarias de los Estados Unidos de América, de 22 por ciento en el jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 y de 17 por ciento en el jarabe de maíz de alta fructosa grado 55.

82. Al respecto, la Secretaría observó que con objeto de contrarrestar el efecto de la devaluación de la moneda nacional ocurrida en diciembre de 1994, que debería haber incrementado el precio de las importaciones expresado en pesos, en 1995 el nivel de precios de las importaciones fue disminuido a fin de preservar su competitividad relativa e incentivar el consumo del jarabe de maíz de alta fructosa en sustitución del azúcar.

83. Por su parte, la Secretaría advirtió que el comportamiento de los precios del azúcar estándar y refinada en el mercado nacional fue decreciente de 1994 a 1995 y creciente de 1995 a 1996. En 1995, respecto de 1994, el precio promedio del azúcar estándar disminuyó 28 por ciento, mientras que el precio promedio del azúcar refinada se redujo 34 por ciento. En 1996, respecto a 1995, los precios promedio del azúcar estándar y del azúcar refinada aumentaron 16 por ciento y 48 por ciento, respectivamente. No obstante, la Secretaría observó que en el periodo investigado, respecto a 1994, se registró una disminución de los precios de venta del azúcar estándar de 17 por ciento y 2 por ciento para el azúcar refinada.

84. Con base en lo establecido en el apartado de "Análisis de similitud entre los productos" de la resolución final original, la Secretaría comparó el precio del jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 con el precio del azúcar refinada y el precio del jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 con el precio del azúcar estándar. La comparación de los precios entre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa y azúcar se realizó al nivel comercial en el que compiten en el mercado interno. En el caso de las importaciones de empresas vinculadas se consideró el precio de venta al primer cliente no relacionado, y en el resto, el precio al que adquirieron los productos de importación.

85. Con el fin de obtener el precio de las importaciones a un nivel LAB centro de distribución comparable con el precio del producto nacional, al valor total de las ventas de las empresas importadoras vinculadas, se restó el monto por concepto de fletes y seguros que correspondía al transporte del centro de distribución al cliente no relacionado. Por otra parte, al valor de las importaciones de las empresas no relacionadas se le sumaron los gastos de internación de las mercancías, esto es, arancel, derechos de trámite aduanero y gastos aduanales.

86. Asimismo, con base en la información aportada por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera sobre el valor y volumen de las ventas al mercado interno, correspondiente a ingenios que representaron el 95 por ciento de la producción nacional, la Secretaría calculó el precio promedio ponderado de azúcar refinada y de azúcar estándar a un nivel LAB ingenio, mediante la división del valor de las ventas totales al mercado interno en dólares entre el volumen expresado en toneladas métricas.

87. Como resultado de la comparación de precios, la Secretaría observó que en los 36 meses de 1994 a 1996 se registraron márgenes de subvaloración del precio del jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 respecto al precio del azúcar estándar y del jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 en relación con el precio del azúcar refinada. En 1994 el margen promedio de subvaloración del precio de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 respecto del azúcar estándar fue de 39 por ciento, creció a 41 por ciento en 1995 y aumentó a 43 por ciento en 1996. Asimismo, el margen promedio de subvaloración del precio de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 en relación con el precio del azúcar refinada fue de 48 por ciento en 1994, disminuyó a 37 por ciento en 1995 y se incrementó a 55 por ciento en 1996.

88. Durante el periodo investigado los precios de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América registraron un comportamiento errático, pero con márgenes de subvaloración promedio mensuales superiores al 40 y 50 por ciento para el jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 y jarabe de maíz de alta fructosa grado 55, respectivamente. Asimismo, se observó que vinculado al comportamiento de dichos precios, los volúmenes mensuales de las importaciones se incrementaron significativamente: en particular en el periodo julio-diciembre de 1996 el volumen importado de jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 fue casi el doble de las importaciones totales de este producto en 1995 y tres veces el volumen de importación del mismo en 1994.

89. La autoridad investigadora observó que aun cuando en el periodo investigado el mercado mexicano se encontraba aislado de las distorsiones de los precios internacionales del azúcar, por efectos del arancel, y se registró una recuperación del consumo, los precios del azúcar mostraron una tendencia decreciente, incluso considerando que la fijación de los precios ya no estaba bajo el control gubernamental. Dicho comportamiento se explicó por la concurrencia de importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América en condiciones de discriminación de precios, las cuales por los niveles de subvaloración con que se posicionaron y el dinamismo en su crecimiento, presionaron mes con mes a que los precios del azúcar se ajustaran a dichas condiciones de competencia a fin de evitar que la sustitución creciente se acelerara, induciendo una depresión de precios, particularmente en sus ventas al sector industria.

90. En este sentido, la Secretaría observó que durante el periodo investigado, particularmente los precios del azúcar refinada siguieron mes a mes la tendencia observada en los precios del jarabe de maíz de alta fructosa grado 55; de manera similar, aunque no tan marcada, los precios del azúcar estándar se ajustaron a dicho comportamiento. La Secretaría corroboró el efecto de los precios de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América durante el periodo investigado en los precios del azúcar a través de la prueba de causalidad de Granger, la cual mostró resultados que apoyan el comportamiento observado en el análisis de precios.

91. En relación con la brecha "natural" entre los precios del jarabe de maíz de alta fructosa y del azúcar, indicada en el punto 79 de la resolución de inicio y 277 de la resolución preliminar, la Secretaría advirtió que hasta 1994 el diferencial de precios se mantuvo estable **-**dicha referencia se establecía como resultado de comparar el precio al mayoreo del azúcar refinada y del jarabe de maíz de alta fructosa en el mercado del medio oeste de los Estados Unidos de América publicados por *Milling & Baking News* y se daba a conocer en la publicación *Sugar & Sweeteners* del United States Department of Agriculture (USDA)**-** y de 1995 a 1996 registró una alta volatilidad.

92. Al respecto, la Secretaría observó que de 1991 a 1994 la diferencia de precios fue en promedio de 2.9 centavos de dólar por libra, para 1995 se incrementó a 6.8 centavos de dólar por libra y en 1996 fue de 8.6 centavos de dólar por libra. En términos porcentuales el diferencial de precios observado en el mercado de edulcorantes de los Estados Unidos de América entre el jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 y el azúcar refinada fue en promedio de 11.6 por ciento de 1991 a 1994, mientras que para 1995 dicha brecha se amplió a 19 por ciento y para 1996 fue de 29 por ciento.

93. En relación con lo anterior, la Secretaría observó que a partir de noviembre de 1995, el precio del azúcar en el mercado de los Estados Unidos de América aumentó y se mantuvo estable durante 1996. No obstante, el incremento en el diferencial de precios registrado en 1995 y sobre todo en 1996, fue resultado principalmente de la drástica disminución en el precio del jarabe de maíz de alta fructosa a fin de enfrentar la presión causada por la sobreproducción derivada del incremento significativo en la capacidad instalada. Cabe señalar que entre mayor sea el diferencial de precios mayor es el incentivo a sustituir el azúcar por el jarabe de maíz de alta fructosa en la industria y, por tanto, el incentivo a consumir el producto sustituto aumenta y con ello las ventas del mismo.

94. Asimismo, si bien hasta 1994 los precios del azúcar en los Estados Unidos de América fueron menores a los prevalecientes en los Estados Unidos Mexicanos, dicha relación se invirtió a partir de 1995, lo que por su nivel incentiva la concurrencia de un producto sustituto de menor precio como el jarabe de maíz de alta fructosa. En tal virtud, si bien el nivel de precios prevaleciente hasta 1994 entre el azúcar y el jarabe de maíz de alta fructosa en el mercado de Estados Unidos de América permitió mantener un diferencial estable el cual podía ser considerado como una referencia de precios, a partir de 1995 las condiciones de competencia de la industria de jarabe de maíz de alta fructosa en ese mercado distorsionaron el mecanismo tradicional de fijación de precios. Por la importancia de dicha industria en el contexto internacional se transmitió a los países importadores a través de sus exportaciones, más aun cuando éstas se realizaron en condiciones de discriminación de precios.

95. A mayor abundamiento, a partir de los márgenes de subvaloración de 40 y 33 por ciento obtenidos para el periodo investigado de la comparación de los precios de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 y jarabe de maíz de alta fructosa grado 55, en relación con los precios del azúcar estándar y refinada correspondiente a las ventas específicas al sector industria, la Secretaría corroboró

que en 1996 las importaciones investigadas se ubicaron a precios significativamente inferiores a los del azúcar de fabricación nacional. Dada la magnitud de los márgenes de discriminación de precios calculados, se concluyó que fue a consecuencia precisamente de dichos márgenes que se registraron precios del jarabe de maíz de alta fructosa significativamente bajos en relación con los precios del azúcar y no por la "brecha natural", ya que dicho diferencial de precios fue distorsionado por la abrupta disminución de los precios del jarabe de maíz de alta fructosa.

96. Adicionalmente, con base en la información proporcionada por los consumidores industriales sobre sus compras de jarabe de maíz de alta fructosa y de azúcar, la Secretaría realizó un ejercicio de comparación de precios pagados en ambos productos y obtuvo los siguientes márgenes de subvaloración: en el caso del jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 el precio promedio ponderado se ubicó 41 por ciento por debajo del precio promedio ponderado del azúcar estándar, mientras que el precio del jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 fue 43 por ciento inferior al precio del azúcar refinada.

97. Lo anterior permitió a la Secretaría corroborar la subvaloración del jarabe de maíz de alta fructosa en relación con el azúcar en el punto de consumo de ambos productos. No obstante, los resultados obtenidos sólo pueden ser considerados como ilustrativos dado que las facturas de las que se obtuvieron dichos precios no representaron un volumen significativo de las ventas de azúcar al sector industria o de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa en el periodo investigado.

98. Por otra parte, a partir del comportamiento observado en los precios y volúmenes de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América y de los precios del azúcar, de 1994 a 1996, así como del desempeño de la industria nacional, la Secretaría estimó, mediante un sistema de ecuaciones simultáneas, los precios de ambos productos para 1997 y observó que el precio promedio del jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 se ubicaría 2 por ciento por arriba del precio registrado en el periodo investigado. En contraste, el precio del jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 registraría una disminución de 1 punto porcentual. Asimismo, el precio promedio del azúcar estándar permanecería constante y el del azúcar refinada se reduciría 10 por ciento con respecto a 1996.

99. A partir de dichas proyecciones, los precios promedio del jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 y del jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 se ubicarían 42 por ciento y 52 por ciento por abajo del precio promedio del azúcar estándar y refinada, respectivamente. Este resultado es consistente con las tendencias observadas en el mercado nacional, en virtud de que la industria azucarera a fin de evitar un mayor desplazamiento en las ventas se vería obligada a reducir los precios del azúcar para acortar el diferencial de precios con respecto al jarabe de maíz de alta fructosa y de esa forma contrarrestar la desviación del consumo.

100. En consecuencia, el ajuste en precios requerido por la industria nacional para hacer frente al incremento estimado de las importaciones en condiciones de discriminación de precios se reflejaría en una disminución del 9 por ciento en los precios promedio de venta del azúcar al mercado nacional. En otras palabras, tanto el azúcar vendida al sector industria como la destinada al consumo doméstico, aunado a la disminución de las ventas, en particular al sector industria, por la sustitución directa del jarabe de maíz de alta fructosa, resultaría en un comportamiento negativo de sus utilidades y márgenes operativos.

101. Por otra parte, en la etapa preliminar, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., presentó un estudio titulado "Determinación de precios de azúcar y su relación con las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa", con base en el cual intentó demostrar la ausencia de amenaza de daño a la industria nacional.

102. Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., manifestó que el resultado de las pruebas estadísticas arrojó una correlación de 0.04, por lo que puede afirmarse que las importaciones no han tenido un impacto estadísticamente significativo sobre los movimientos en el precio del azúcar y es imposible establecer nexos de causalidad que relacionen las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa y los niveles de precio del azúcar en 1996.

103. Al respecto, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera señaló que los resultados del ejercicio son incorrectos y sesgados, ya que debió realizarlo únicamente para el periodo investigado, utilizar como variables el incremento o decremento en las importaciones y en los precios del azúcar vendida a la industria, así como usar fuentes de información fidedignas sobre precios.

104. En la etapa definitiva Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., manifestó que las afirmaciones de la Cámara no tienen fundamento alguno, ya que el ejercicio realizado incluye, pero no se limita al periodo investigado, incorpora las variables que precisamente menciona la Cámara y los datos sobre precios proceden de fuentes confiables y fidedignas, para lo cual proporcionó una carta del Director del Sistema de Información Azucarera (SIA), en la cual describe la confiabilidad de la información que maneja en su publicación.

105. En el punto 281 de la resolución preliminar, la Secretaría desestimó el argumento presentado por Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., sobre la no existencia de correlación entre las importaciones de

jarabe de maíz de alta fructosa y los precios reales de azúcar refinada, ya que ésta omitió proporcionar las pruebas estadísticas, además de que dicho argumento era inconsistente con su afirmación de que una cuota compensatoria daría lugar a un incremento en los precios del azúcar.

106. En la etapa definitiva de la investigación antidumping original, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., proporcionó los datos con los que realizó el ejercicio de correlación y manifestó que la correlación de cero no es inconsistente con su afirmación de que el establecimiento de una cuota compensatoria al jarabe de maíz de alta fructosa daría lugar a un incremento en los precios del azúcar por tres razones: a) dicha cuota tendría un efecto directo sobre el precio del jarabe de maíz de alta fructosa; b) el ejercicio de correlación abarca de 1994 a 1996, mientras que los efectos de la cuota sobre los precios del azúcar se estimaron a partir de 1997, y c) las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa no han sido suficientemente importantes para amenazar a la industria azucarera.

107. La Secretaría realizó el ejercicio de correlación entre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa y los precios reales de azúcar refinada, a partir de los datos proporcionados por Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., y verificó que con dicha información se obtiene un coeficiente de correlación de 0.04.

108. No obstante, la Secretaría desestimó las conclusiones de Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., por las razones que se indican a continuación:

i) A partir del coeficiente de correlación no se puede inferir, por sí mismo, que las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa y los precios internos del azúcar son variables independientes y tampoco que no existe una relación de causalidad. La Secretaría considera que dicha relación estadística solamente mide el grado de asociación lineal entre dos variables, por lo que podría no reflejar el comportamiento de variables que no están relacionadas linealmente, además de que dicho coeficiente no implica necesariamente una relación de causa y efecto.

ii) El análisis de los efectos en los precios internos del azúcar incluye, pero no debe limitarse, al volumen de importaciones en condiciones de discriminación de precios. Esto es, se deben considerar, entre otros, elementos como el nivel de precios de las importaciones, el margen de discriminación de precios y la subvaloración de las mismas, ya que uno de estos factores por sí solo no basta necesariamente para obtener una orientación decisiva.

iii) Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., argumentó que un incremento en el precio de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, vía cuota compensatoria, sí tendría un efecto en el precio del azúcar de 1997 en adelante, dado que las importaciones no han sido lo suficientemente importantes para amenazar a la industria azucarera. En opinión de la Secretaría, dicha declaración conlleva el reconocimiento implícito que de incrementarse las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa éstas sí afectarían los precios del azúcar, es decir, sí existiría una correlación entre ambas variables, lo cual es consistente con el hecho de que la investigación es por amenaza de daño.

iv) Asimismo, atribuye el cambio en la correlación de las variables a la cuota compensatoria "...un incremento artificial en su precio (de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa) vía cuotas compensatorias, incrementaría ... los precios del azúcar ...". La cuota compensatoria tiene por objeto corregir la distorsión de los precios de las importaciones originada por una disminución artificial de los mismos, vía los márgenes de discriminación de precios, por lo que aplicando el mismo razonamiento que la importadora, de persistir dicha distorsión se causaría una reducción en los precios del azúcar o se impediría su aumento.

109. En resumen, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., basó la consistencia de sus argumentos en el supuesto de que lo que no sucedió en el periodo investigado, sí puede acontecer de 1997 en adelante, por lo que la Secretaría concluyó que tales manifestaciones lo que pretendían demostrar era la ausencia de daño, pero no desvirtúan la existencia de amenaza de daño alegada por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

110. Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., argumentó que no existe amenaza de daño en virtud de que la inestabilidad de los precios del azúcar respondía, en su totalidad, al comportamiento lógico de los integrantes de un cártel y que, la caída de los precios fue causada por la sobreoferta nacional; hechos que según el importador, nada tienen que ver con "... la disponibilidad de sustitutos como el jarabe de maíz de alta fructosa ...". Al respecto, la importadora afirmó que el modelo de determinación de precios de Bertrand se ajusta muy bien al comportamiento estratégico de los productores de azúcar especialmente para 1996.

111. Asimismo, señaló que desde 1995, los precios del azúcar son altamente inestables y fluctúan entre los niveles concertados por los productores en el seno de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y una multitud de precios inferiores ofrecidos por productores individuales que, unilateralmente, deciden romper con los acuerdos de precios establecidos. En el mismo sentido se pronunció la Compañía Exportadora de Aguas Minerales, S.A. de C.V.

112. Al respecto, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera manifestó que la inestabilidad del precio del azúcar es característica de un mercado liberado del control oficial de precios, en el cual concurren muchos productores y rechazó que éstos llevaran a cabo acuerdos para fijar precios. Además, explicó que los precios del azúcar en los Estados Unidos Mexicanos son determinados libremente en el marco del Fideicomiso Ordenador del Mercado Azucarero, en donde se cruzan ofertas y demandas.

113. Por lo anterior, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera afirmó que las conclusiones a las que llegó Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., sobre la determinación de precios y la ausencia de relación con las importaciones investigadas son erróneas y falsas, puesto que se basan en la hipótesis no demostrada de que la industria azucarera se comporta como un cártel.

114. En la etapa definitiva de la investigación antidumping, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., manifestó que de acuerdo con la teoría económica y la Ley Federal de Competencia, las concertaciones de precios no siempre tienen la forma de contratos explícitos y escritos entre productores y que los supuestos sobre el comportamiento estratégico de los productores y comercializadores de azúcar se ajusta muy bien a la realidad observada.

115. Asimismo, manifestó que la existencia del Fideicomiso Ordenador del Mercado Azucarero no representa una prueba de que el precio de azúcar se determine libremente en el mercado a partir de la ley de la oferta y la demanda, ya que el nivel de actividad que tuvo en 1996 fue sumamente pequeño en comparación con el total de transacciones que se llevaron a cabo en el mercado azucarero.

116. La Secretaría analizó los argumentos y pruebas aportadas por las partes interesadas, y desestimó las conclusiones de Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., por las siguientes razones:

a) Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., no presentó pruebas que sustentaran su afirmación de que los productores llevaron a cabo acuerdos de fijación de precios. El criterio aplicado por la importadora de que el comportamiento estratégico de los productores de azúcar se asemeja al que "teóricamente" se describe en un modelo de competencia oligopólica no constituye una prueba de la existencia de concertaciones de precios explícitas y escritas entre los productores.

b) Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., basa sus argumentos en que el comportamiento económico de los productores de azúcar se aproxima al modelo oligopólico de Bertrand y que los supuestos de éste se ajustan muy bien a la realidad. Sin embargo, la Secretaría destaca que el modelo oligopólico de competencia en precios tipo Bertrand se caracteriza por ser un juego simultáneo no cooperativo en el que tratándose de productos homogéneos, como el azúcar, la solución de equilibrio es un precio competitivo resultado del comportamiento independiente de las empresas. Esto es, a diferencia del comportamiento de un cártel en el cual las empresas actúan conjuntamente como un único monopolista para determinar su nivel de producción y de precios, en el modelo tipo Bertrand a que alude la empresa importadora, las pujas competitivas de las empresas determinan un precio similar al de competencia pura, por lo que los dos comportamientos descritos son inconsistentes entre sí.

c) Independientemente de los argumentos anteriores, la existencia de una estructura de mercado oligopólica no implica por sí misma que las importaciones en condiciones de discriminación de precios no puedan afectar los precios nacionales del azúcar, máxime cuando se trata de productos sustitutos, tal como lo reconoció el propio importador.

117. En relación con los argumentos de Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., sobre el funcionamiento del Fideicomiso Ordenador del Mercado Azucarero, durante la visita de verificación realizada a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, funcionarios del Fideicomiso explicaron a la Secretaría que el mismo reporta el volumen de ventas y los precios promedio ponderados diarios en el mercado nacional a un nivel LAB ingenio y pago de contado por clases y mercados del azúcar, correspondientes a las transacciones diarias del 92 por ciento de los ingenios, es decir, 56 de los 61 existentes.

118. Al respecto, cabe señalar que para su análisis la Secretaría utilizó la información correspondiente a las ventas al mercado interno proporcionada por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, la cual fue representativa del 95 por ciento de la producción nacional.

119. Por otra parte, la Secretaría consideró que si bien las exportaciones de azúcar pudieron haber mitigado la presión de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, esto no significa, como lo sugirió Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., que dichas importaciones a precios discriminados no tengan un impacto real o potencial sobre los precios del azúcar, dado que la competencia de ese sustituto hace más sensible a la industria nacional.

120. Adicionalmente, contrario a lo que afirmó esta empresa, en 1996 con respecto al año anterior, las ventas de azúcar al sector industria en el mercado interno disminuyeron, al mismo tiempo que aumentó la participación de las importaciones investigadas en el consumo nacional aparente, como se estableció en el apartado correspondiente al análisis de importaciones.

121. Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., argumentó que el jarabe de maíz de alta fructosa originario de los Estados Unidos de América no representa una amenaza de daño para la industria nacional del

azúcar, en virtud de que este producto sólo puede usarse en un número limitado de procesos productivos, por lo que su mayor o menor disponibilidad o precio no tiene un efecto significativo sobre la demanda de azúcar y, en consecuencia, a pesar del incremento significativo de las importaciones investigadas en 1996, éstas representaron una parte mínima del consumo nacional de azúcar (6 por ciento aproximadamente) y que el "... consumo de azúcar amenazado ... se encuentra por debajo de 2 millones de toneladas ...".

122. Para sustentar lo anterior, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., presentó estimaciones de grados de sustitución de azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa en diferentes productos, basadas en entrevistas a industriales. Así, por ejemplo, estableció porcentajes de sustitución de 100 por ciento para bebidas y panificación y del 0 al 50 por ciento para alimentos.

123. En la etapa definitiva, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., manifestó que es posible sustituir hasta el 100 por ciento del azúcar utilizada en la industria de bebidas carbonatadas por jarabe de maíz de alta fructosa, lo que no implica que la sustitución se verifique *de facto* en todos los casos o que pueda hacerse de forma inmediata. Asimismo, señaló que factores como el sabor en el caso de las bebidas y limitaciones técnicas para el resto de las industrias impiden la sustitución completa, la cual es un proceso prolongado y difícil que tendría que hacerse de forma gradual.

124. La Secretaría desestimó el argumento del importador por las razones que se detallan a continuación:

a) Tal como se señaló en el apartado de "Análisis de similitud entre los productos", a que se refieren los puntos 329 a 426 de la resolución final original, independientemente de algunas ventajas o desventajas que pudiera ofrecer el empleo de jarabe de maíz de alta fructosa, éste se puede utilizar en una amplia variedad de productos donde se consume tradicionalmente azúcar, principalmente alimenticios, además de que existen evidencias de que sus aplicaciones se están extendiendo hacia nuevos productos.

b) La información sobre las ventas de los principales importadores de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América, indican que el 88 por ciento de estas importaciones se destinaron a los sectores de bebidas y panificación, justamente los mercados en los cuales el importador estimó una sustitución del 100 por ciento, y dos de los principales mercados para el azúcar de fabricación nacional. Precisamente, de acuerdo con información aportada por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, éstos representan el 93 por ciento del consumo del azúcar del sector industria. Además, es importante destacar que, como lo mencionaron los usuarios industriales, el jarabe de maíz de alta fructosa ha sustituido en forma creciente al azúcar; este proceso comenzó con las primeras importaciones del producto investigado.

c) Aun cuando el empleo de jarabe de maíz de alta fructosa se restringiera sólo a los sectores señalados por Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., la Secretaría consideró que en términos de la legislación aplicable, ni el volumen de importaciones en condiciones de discriminación de precios en el periodo investigado ni su participación real y potencial en el mercado nacional, pueden considerarse "mínimos" o insignificantes.

125. Por otra parte, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., manifestó que la mayor parte de la producción de azúcar refinada se obtiene en ingenios que se encuentran integrados con embotelladores, por lo que el volumen de azúcar que se ve amenazado es mínimo. Al respecto, la Secretaría consideró, al igual que lo señalado en el punto anterior, que aun en el extremo de que las importaciones investigadas únicamente amenazaran con dañar al 23.5 por ciento de la producción de azúcar refinada, dicho porcentaje no puede considerarse de ninguna manera poco significativo.

126. De conformidad con los resultados descritos en los puntos 79 a 125 de esta Resolución, y considerando que se registró una tasa significativa de crecimiento de las importaciones en el periodo investigado; que existe una suficiente capacidad libremente disponible y un alto potencial de exportación de la industria del jarabe de maíz de alta fructosa en los Estados Unidos de América para poder abastecer a los Estados Unidos Mexicanos; y la relevancia del mercado mexicano como destino real para las exportaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América, la Secretaría determinó que de continuar la práctica de discriminación de precios, que permitiría a los consumidores adquirir un sustituto del azúcar a precios significativamente bajos, en el futuro inmediato se daría un aumento de la demanda por estos productos, así como efectos negativos sobre los precios del azúcar de fabricación nacional.

d. Efectos sobre la producción nacional

127. Con fundamento en lo previsto en los artículos 41 y 42 de la Ley de Comercio Exterior, 64 y 68 de su Reglamento y 3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, así como con lo señalado en el informe del Grupo Especial en los puntos 7.125, 7.126, 7.127, 7.128, 7.131, 7.132, 7.133, 7.140 y 7.141 referente a la insuficiente consideración de la repercusión de las importaciones objeto de discriminación de precios sobre la rama de

producción nacional, la Secretaría profundizó en el análisis de la evaluación de los factores e índices económicos que influyeron en el estado de la rama de producción de la industria azucarera, incluyendo los efectos de dichas importaciones sobre el total de la rama de producción nacional.

Efectos sobre los indicadores económicos

128. De acuerdo con la información proporcionada por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera; las importadoras y exportadoras, así como la que se allegó la Secretaría, se observó que en el periodo investigado el mercado nacional de edulcorantes, medido a través del consumo nacional aparente, creció en 2 por ciento en relación con 1995.

129. En el periodo investigado, debido al incremento en el volumen de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América que se registraron en el mercado mexicano, la participación de la producción nacional orientada al mercado interno en el consumo nacional aparente disminuyó en 4 puntos porcentuales en relación con el nivel registrado en 1995. Esta pérdida de mercado para la industria azucarera no se limitó al periodo investigado, ya que pasó de una participación en el consumo nacional aparente del 98 por ciento en 1994, al 93 por ciento en 1996. Asimismo, en términos absolutos el volumen de producción orientada al mercado interno disminuyó en 2 por ciento en 1996 con respecto a 1995.

130. Por otra parte, la pérdida de mercado de la industria azucarera en el periodo investigado se reflejó en una disminución de las ventas de azúcar estándar y refinada, las cuales disminuyeron 5 por ciento en relación con las registradas en el mismo periodo anterior. Aunado a dicha pérdida de ventas, la industria nacional se vio obligada a incrementar sus exportaciones de azúcar a precios más bajos que los del mercado nacional, debido al desplazamiento por parte de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa.

131. En relación con las existencias promedio de azúcar, la Secretaría observó que éstas se incrementaron 3 por ciento en el periodo investigado con respecto a 1995. Asimismo, la productividad de la industria azucarera, medida a través de la relación producción y número de trabajadores empleados, registró una mejoría en el periodo investigado de 6 puntos porcentuales en relación con 1995.

132. Al analizar el número de trabajadores empleados directamente en la obtención del azúcar de caña, la Secretaría observó que aun cuando no se han registrado cifras negativas, dada la rigidez que enfrenta esta industria, en virtud de los contratos laborales, su tendencia es decreciente, ya que en 1995 la industria azucarera incrementó el número de trabajadores empleados en 16 por ciento con respecto a 1994. Sin embargo, en el periodo investigado sólo se incrementó un punto porcentual en relación con el número de empleados registrados en 1995. Asimismo, los salarios calculados en dólares americanos, registraron una tendencia decreciente de 1994 a 1996.

133. En relación con el comportamiento de la utilización de la capacidad instalada, ésta registró una tendencia decreciente, ya que en 1995 con respecto a 1994 registró un incremento del 16 por ciento y en el periodo investigado con respecto a 1995 sólo se incrementó en 3 por ciento.

134. Con base en lo descrito en los puntos anteriores y dado el incremento de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América en el periodo investigado a precios por debajo de los registrados por el producto similar de fabricación nacional; la suficiente capacidad disponible estadounidense de jarabe de maíz de alta fructosa para exportar al mercado mexicano; la pérdida de participación del azúcar de fabricación nacional en el consumo nacional; la disminución en ventas, y la tendencia decreciente en el empleo, y la utilización de la capacidad instalada de la industria, muestran la sensibilidad de la industria nacional azucarera a la competencia desleal de dichas importaciones. Igualmente se presenta la probabilidad fundada de que en el futuro registren efectos negativos mayores a los observados en el periodo investigado.

135. Por otra parte, es importante señalar que el comportamiento registrado en los salarios, existencias y productividad de la industria azucarera, se explican por el estado en que se encontraba la industria azucarera en el periodo investigado, ya que requería mejorar sus niveles de producción con el fin de satisfacer la demanda interna, mantener un *stock* de inventarios para no generar desabasto y poder exportar sus excedentes.

136. Para corroborar lo descrito en el punto 134 de esta Resolución, la Secretaría obtuvo estimaciones para 1997 con base en lo siguiente: las cifras de producción nacional de azúcar y de jarabe de maíz de alta fructosa se obtuvieron a partir de cifras publicadas por el *United States Department of Agriculture*. A partir del Acuerdo para la asignación de subsidio destinado a apoyar a ingenios azucareros mediante promoción a las exportaciones, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 20 de octubre de 1997, se obtuvieron las exportaciones de azúcar; y las importaciones se pronosticaron con base en promedios móviles.

137. A partir de la información descrita en el punto anterior, la Secretaría observó que en 1997, la producción orientada al mercado interno mostraría una disminución del 4 por ciento con respecto a 1996. Asimismo, en relación con el consumo nacional aparente, la producción orientada al mercado interno

disminuiría en 4 puntos porcentuales al pasar de una participación en el periodo investigado del 93 por ciento al 89 por ciento en 1997.

138. Por otra parte, mientras que las estimaciones resultaron en un incremento en la demanda de edulcorantes, las ventas internas de la industria nacional de azúcar estándar y refinada mostrarían mayor afectación que en el periodo investigado al registrar una reducción del 10 por ciento en 1997 con respecto a 1996.

139. Con base en los hechos descritos en los puntos 128 a 138 de esta Resolución, la Secretaría determinó que las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América repercutieron de manera negativa en la industria nacional de azúcar, dada la pérdida de participación del azúcar de fabricación nacional en el consumo nacional; la disminución en ventas; la tendencia decreciente del empleo, y de la utilización de la capacidad instalada, indican que de continuar la tendencia creciente de las importaciones a precios discriminados, el daño a la industria nacional de azúcar se materializaría.

Efectos sobre las variables financieras

140. De conformidad con lo que se estableció en el informe del Grupo Especial en los puntos 7.136, 7.137, 7.140, 7.141 y 8.2 a), y conforme a las disposiciones del artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora efectuó un examen de la repercusión que causaron las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos sobre los factores financieros de la industria nacional azucarera en el periodo que comprende los años de 1995 a 1996 y estado de resultados proyectado para 1997.

141. Para el análisis del comportamiento de las variables financieras, la autoridad investigadora consideró la información financiera, consistente en los estados financieros básicos auditados de los años 1994 a 1996 de 48 ingenios azucareros que representan en promedio, el 85 por ciento de la producción nacional considerando las zafras 93/94, 94/95 y 95/96. Por ello, por lo que la autoridad investigadora considera que el comportamiento de las variables analizadas es representativo de la industria nacional productora de azúcar. Por otra parte, se utilizó información de la tabla de amortización de la deuda proporcionada por una institución financiera. Es importante señalar que la autoridad investigadora actualizó la información financiera la cual corresponde al total de la industria -azúcar dirigida al sector industria y doméstico- con propósitos de comparabilidad.

142. La autoridad investigadora procedió a agregar los estados financieros actualizados de los 48 ingenios señalados en el punto anterior, para obtener los estados financieros a nivel de industria productora de azúcar. A partir de éstos, calculó las principales razones financieras promedio de la industria, mismas que fueron ponderadas de acuerdo con el nivel de participación de cada ingenio en las zafras mencionadas.

143. En relación con los indicadores de beneficios y rentabilidad de la industria productora de azúcar, la autoridad investigadora observó que en el año de 1996 el margen de operación creció 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior al reportar 9 por ciento, lo que se debió a una disminución de 7 por ciento en los gastos de operación. No obstante, en el mismo periodo se dio un incremento de 15 por ciento en el costo de ventas. Con respecto a la participación porcentual de los costos en el ingreso por ventas, se observó que en el periodo investigado el costo de ventas disminuyó 2 puntos porcentuales en relación con el periodo anterior, al pasar de 80 por ciento en 1995 a 78 por ciento en 1996, mientras que los gastos de operación disminuyeron su participación en casi 3 puntos porcentuales, al registrar 15 por ciento en 1995 y 12 por ciento en 1996.

144. Asimismo, el margen neto de la industria azucarera creció 6 puntos porcentuales en 1996, al pasar de 1 por ciento negativo en 1995 a 5 por ciento positivo en el periodo investigado, lo que se atribuye principalmente a dos factores: por un lado, al comportamiento favorable de los costos de venta y gastos de operación en la estructura del ingreso por ventas; y por el otro, a que la carga financiera neta de la industria vista a través del costo integral de financiamiento, permaneció prácticamente sin cambio en el año de 1996 en relación con 1995.

145. Por otra parte, se observó que el índice que mide el rendimiento de la inversión de la industria, registró en 1996 un crecimiento de 2 puntos porcentuales ubicándose en 5 por ciento, debido básicamente al comportamiento del margen de operación que se registró en ese año.

146. Adicionalmente a lo señalado sobre el comportamiento del margen de operación en el año de 1996, la autoridad investigadora realizó un análisis de sensibilidad de las utilidades de la industria azucarera ante el cambio en el ingreso por ventas, mediante la obtención del grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y el apalancamiento combinado.

147. Al respecto, la autoridad investigadora observó que al nivel de ventas registrado en 1996, la utilidad de operación de la industria nacional tiene una sensibilidad de 6.9. Es decir, un cambio de 1 por ciento en el ingreso por ventas haría variar la utilidad de operación en una proporción de casi 7 por ciento, lo que representó en 1996 un alto grado de sensibilidad de los beneficios operativos ante un cambio en el

ingreso por ventas. En otras palabras, si se presentara una disminución en el precio y/o en el volumen de ventas del producto investigado se podría esperar, por lo menos, que una disminución de 1 por ciento en el ingreso total de la industria, tendría un efecto adverso de 7 por ciento en la utilidad operativa.

148. Por otra parte, se observó que el grado de apalancamiento financiero de la industria azucarera es alto, en virtud de que al nivel de utilidad de operación obtenido en 1996, la utilidad neta de la industria cambiaría en una proporción de 4 por ciento cuando la utilidad de operación cambiara en proporciones de 1 por ciento. Es decir, la sensibilidad de la utilidad neta es altamente influida por el nivel de la utilidad de operación, debido a que los costos fijos de capital son elevados con respecto a la utilidad operativa de la industria.

149. Adicionalmente, la autoridad investigadora obtuvo el grado de apalancamiento combinado de la industria, y observó que al cambiar 1 por ciento el ingreso por ventas, la utilidad neta cambiaría en 27 por ciento, lo que se considera como una alta sensibilidad de las utilidades netas ante variaciones en el ingreso.

150. Con base en lo señalado en este apartado, la autoridad investigadora determinó que los indicadores de beneficios y rentabilidad de la industria productora de azúcar, tuvieron un comportamiento positivo en el periodo investigado, que fue reflejo de una mejoría en los rubros de costo de ventas y gastos de operación. Sin embargo, debido a las características específicas de la industria azucarera mexicana, las utilidades de operación y las utilidades netas tienen una alta sensibilidad ante cambios en el ingreso, lo que se traduce en que si el ingreso por ventas se reduce, las utilidades de operación y utilidades netas resultarán afectadas en una proporción mayor al cambio en el ingreso.

151. Al respecto, a partir del resultado de la proyección de las variables económicas de la industria para 1997, en particular del precio y las ventas, que se señala en los puntos 100 y 138 de esta Resolución, la autoridad investigadora efectuó una proyección del estado de resultados de la industria nacional azucarera para el periodo posterior al investigado. Mediante esta proyección calculó las utilidades que obtendría la industria de continuar incrementándose las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa originarias de los Estados Unidos de América.

152. Para llevar a cabo dicha proyección la autoridad investigadora mantuvo el ingreso por ventas orientadas al mercado externo y el ingreso por ventas de otros productos distintos al azúcar que obtuvo la industria en 1996 y tomó los factores del precio interno y las ventas en volumen proyectadas para 1997 de acuerdo con lo señalado en los puntos 100 y 138 de esta Resolución. En cuanto a los costos de venta y gastos de operación, la autoridad investigadora los calculó haciendo cambiar la parte variable de los mismos en la misma proporción que el volumen de ventas internas y manteniendo la parte fija en el mismo nivel que se registró en 1996 y eliminó del estado de resultados a las partidas extraordinarias que afectan los resultados netos.

153. A partir de lo anterior, la autoridad investigadora determinó en 1997 la reducción esperada de 9 por ciento en el precio interno del azúcar y de 10.3 por ciento en el volumen de ventas, el ingreso total de la industria disminuiría en 15 por ciento, lo que haría que la utilidad de operación se redujera en 118 por ciento. Es decir, la industria llegaría a pérdidas operativas, lo que de hecho cancelaría la posibilidad de obtención de una rentabilidad operativa.

154. En ese sentido, la autoridad investigadora observó que en el año de 1997 el margen de operación disminuiría 12 puntos porcentuales al quedar en 2 por ciento negativo, con respecto al periodo anterior comparable.

155. Por lo que se refiere al flujo de efectivo, la autoridad investigadora realizó el análisis de dicho factor a través del estado de cambios en la situación financiera de la industria productora de azúcar. Al respecto, observó que en 1996 el flujo de caja operativo creció con respecto al periodo anterior, como resultado del comportamiento que registró la utilidad neta de la industria, misma que como se señaló en puntos anteriores, fue principalmente influida por el desempeño que tuvieron los costos de venta y los gastos de operación en dicho año.

156. Por otra parte, se observó que en 1996, los índices de cobertura registraron un comportamiento favorable, el flujo de caja operativo a pasivo total pasó de 3 por ciento en 1995, a 9 por ciento en 1996, lo que se traduce en que la industria azucarera mexicana incrementó su capacidad para obtener financiamientos de corto plazo en el periodo investigado.

157. Asimismo, la razón de flujo de efectivo operativo a pasivo a largo plazo pasó de 5 por ciento en 1995, a 13 por ciento en 1996, lo que implica que si la industria azucarera mexicana mantuviera el mismo nivel de generación de flujo caja de operación, podría liquidar sus adeudos en un plazo menor.

158. La autoridad investigadora a partir de lo descrito en los puntos anteriores, determinó que el flujo de caja operativo de la industria productora de azúcar tuvo en 1996 un comportamiento favorable lo que se tradujo en mejoría de los índices de cobertura.

159. La autoridad investigadora analizó la capacidad de reunir capital de la industria nacional azucarera, mediante la obtención de los índices de solvencia y apalancamiento financiero. Al respecto,

observó que de acuerdo con la razón de circulante, en 1995 la industria nacional estuvo en posición de cubrir 2.80 pesos por cada peso de pasivo a corto plazo; y para el periodo investigado dicha capacidad de pago se redujo al ubicarse en 2.76 pesos. Asimismo, mediante la razón de activos rápidos –en la que se excluyen los inventarios del total del activo circulante– observó que en 1995, la industria podría haber cubierto 2.38 pesos por cada peso de deuda circulante, mientras que para 1996, dicho índice mostró una baja de 16 centavos al ubicarse en 2.22 pesos de cobertura con activos rápidos por cada peso de deuda de corto plazo.

160. Por otra parte, la autoridad investigadora observó que en el año de 1996 la industria elevó su capacidad de pago, ya que el "promedio de pago" se redujo en 7 días con respecto al año de 1995, al pasar de 31 a 24 días. En lo que se refiere al "periodo promedio de cobranza", la industria nacional logró agilizar sus cobros al reducir en 6 días dicho indicador en 1996, al pasar de 31 a 25 días como periodo promedio de realización de las cuentas por cobrar.

161. A partir de lo señalado en los puntos 159 y 160 de esta Resolución, la autoridad investigadora concluyó que en 1996 la industria productora de azúcar, mantuvo prácticamente el mismo nivel de solvencia en el corto plazo en relación con 1995 y mejoró sus indicadores de cuentas por pagar y por cobrar en el corto plazo.

162. En relación con el nivel de endeudamiento de la industria nacional azucarera, la autoridad investigadora observó a través de la razón de pasivo total a activo total que en 1995, el 45 por ciento de la inversión fue financiada con recursos de sus acreedores, y que para el periodo investigado dicho índice decreció a 44 por ciento. Por lo que toca a la razón de pasivo total a capital contable, en 1995 la industria nacional mostró que los inversionistas prácticamente perdieron su inversión, en virtud de que en ese año se registró un índice de 452 por ciento, es decir, los accionistas adeudaban un equivalente a 4.5 veces su inversión neta, mientras que para 1996 dicha razón creció a 4.6 veces, lo que coloca a la industria en una situación de baja inversión neta y altos niveles de deuda que le hacen tener un riesgo financiero alto.

163. Adicionalmente, la autoridad investigadora calculó la proporción del servicio de la deuda para 1997 con respecto a los ingresos por ventas que se obtendrían según la proyección del estado de resultados para el mismo año y encontró que de seguir la tendencia creciente de las importaciones en condiciones de discriminación de precios, la industria nacional azucarera vería reducidos sus ingresos en 15 por ciento. De la misma forma, el comportamiento de los ingresos según la proyección, indicaría que no es posible cumplir con el servicio de la deuda, máxime si a nivel operativo dicha industria incurrió en pérdidas, ya que la tabla de amortización de la deuda indica que en el año de 1997, el servicio de la misma se establece en una proporción de 7.4 por ciento con respecto al ingreso por ventas.

164. A partir del análisis de apalancamiento de la industria, la autoridad investigadora consideró que se trata de un aspecto estructural y no como consecuencia directa del ingreso de importaciones en condiciones de discriminación de precios. Sin embargo, el nivel de deuda previsto es considerablemente alto y dada la baja capacidad de reunir capital -que limita el acceso por parte de la industria al crédito en condiciones favorables-, el financiamiento de esta industria depende en gran medida de la financiación interna, es decir, de las operaciones normales de la industria.

165. En este sentido, la autoridad investigadora destaca que para hacer disminuir en el futuro la carga financiera y el nivel de deuda es necesario que la industria azucarera logre generar utilidades operativas que permitan pagar el servicio de la deuda utilizada. Es decir, no basta que la industria entre en un esquema de negociación con sus acreedores para reducir el nivel de endeudamiento o el perfil de pagos de la deuda, sino que es necesario y fundamental que el nivel de las utilidades generadas le otorguen a la industria viabilidad económica.

166. Con base en lo señalado en los puntos 143 a 165 de esta Resolución, la autoridad investigadora concluyó que derivado del comportamiento de los factores de: sensibilidad de las utilidades, efectos potenciales en los beneficios, rentabilidad, nivel de endeudamiento y capacidad de reunir capital; los ingresos por ventas de la industria, se reducirán significativamente como reflejo de una baja en los precios y volúmenes de venta de azúcar a consecuencia del ingreso de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa en condiciones de discriminación de precios, por lo que se registraría una reducción sensible de las utilidades, la rentabilidad de las inversiones y la capacidad de reunir capital, mientras que la capacidad de pago de la deuda de la industria se vería comprometida.

e. Inventarios del producto investigado

167. Con base en lo descrito en el punto 295 de la resolución preliminar, para la determinación de la existencia de la amenaza de daño a la industria nacional azucarera, la Secretaría no consideró las existencias del producto investigado, debido a que, por las características físicas y químicas del jarabe de maíz de alta fructosa, este producto no se puede almacenar por más de un mes; en consecuencia, es un producto que se fabrica conforme a su demanda.

f. Otros factores de amenaza de daño

168. En relación con la evaluación de otros factores de amenaza de daño distintos de las importaciones objeto de discriminación de precios establecidos en el artículo 3.5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la Secretaría evaluó los argumentos presentados por las partes en el curso del procedimiento.

169. En relación con lo anterior, diversos comparecientes señalaron que la amenaza de daño de la industria nacional radica en causas diferentes a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa en condiciones de discriminación de precios, tales como: su excesiva deuda; la "guerra" de precios entre productores; falta de modernización de la industria y "evolución" de la tecnología; falta de integración con el campo, exceso de inventarios o sobre oferta nacional de azúcar.

170. Al respecto, el análisis de la autoridad investigadora, así como las determinaciones a las que llegó sobre los argumentos señalados, quedaron establecidos en los apartados de importaciones, precios y efectos sobre la producción nacional de esta resolución.

171. Cabe señalar que la Secretaría desestimó dichos argumentos, en virtud de que los problemas a los que hacen referencia de ninguna manera eliminan o excluyen la amenaza de daño que representa para la industria nacional las importaciones del jarabe de maíz de alta fructosa en condiciones de prácticas de discriminación de precios. Por el contrario, los factores señalados hacen más sensible a la industria nacional ante prácticas desleales de comercio internacional.

172. En relación con la evolución de la tecnología, la Secretaría consideró que dicho factor no afecta la determinación positiva de amenaza de daño, dado que ésta ha contribuido a la productividad de la industria, lo que se reflejó en el incremento de la producción en el periodo investigado no obstante que la superficie cultivada se mantuvo prácticamente constante.

173. En cuanto a la sobre oferta nacional de azúcar, la Secretaría determinó que dicha situación fue resultado del incremento en la producción derivado del incremento en el rendimiento por hectárea, y de la disminución del consumo derivado de la problemática económica registrada con posterioridad a la devaluación de diciembre de 1994. Ante dichas circunstancias la sensibilidad de la industria se incrementó frente a la competencia desleal de un bien sustituto de bajo precio y el consecuente desplazamiento de las ventas y de la pérdida de mercado en el sector industria, lo que ocasionó que los excedentes de azúcar en el mercado interno aumentaran.

g. Elementos adicionales

174. En la etapa preliminar de la investigación antidumping, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., argumentó, con base en el estudio elaborado por el Grupo de Economistas y Asociados, que "... en las circunstancias actuales del mercado azucarero, en donde existe ya un excedente de producción, aunado al clima de incertidumbre económica que prevalece en el país, es imposible imaginar que se darán cuantiosas inversiones destinadas a incrementar la capacidad de los ingenios". Posteriormente, en respuesta a lo establecido en el punto 303 inciso A de la resolución preliminar, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., señaló que la incertidumbre económica se reflejó en el comportamiento de indicadores tales como la inflación y la tasa de interés.

175. Al respecto, la Secretaría consideró que el comportamiento de la inflación y la tasa de interés proporcionado por Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., si bien describe aspectos del contexto macroeconómico existente en el periodo investigado, no explica cómo ese hecho podría justificar los efectos de importaciones en condiciones de discriminación de precios en el mercado interno.

176. En la etapa definitiva de la investigación antidumping, los usuarios industriales manifestaron que el establecimiento de cuotas compensatorias al jarabe de maíz de alta fructosa "... independientemente si se trata de importaciones realizadas con discriminación de precios ..." traerá fuertes repercusiones en los precios de los edulcorantes (azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa) utilizados en la producción de refrescos.

177. Asimismo, los usuarios industriales referidos en el punto anterior señalaron que si se acepta la hipótesis de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera habría un fuerte impacto inflacionario en la economía por el peso que tiene el azúcar como bien de consumo y como insumo en sectores industriales usuarios del producto. Para sustentar lo anterior presentaron un análisis del impacto de un incremento en el precio del azúcar para llevarlo al 80 y al 100 por ciento del precio máximo y a partir de ambas estimaciones concluyeron que los resultados son negativos para la industria refresquera.

178. En relación con lo establecido por la Secretaría en el punto 304 de la resolución preliminar, y con base en sus argumentos sobre las consecuencias adversas para la economía nacional de la imposición de cuotas compensatorias al jarabe de maíz de alta fructosa, manifestaron que contrario a lo que afirma la Secretaría, la aplicación del artículo 88 de la Ley de Comercio Exterior, sí debe obligar a desistirse del establecimiento de la cuota compensatoria, incluso una vez que se ha demostrado la existencia de prácticas desleales de comercio internacional, si con ello cumple el objetivo que marca el artículo 1o. de la misma ley, de proteger la economía del país, contribuir al bienestar de la población y hacer eficientes otros procesos productivos.

179. Por su parte, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., señaló que "... restringir la importación de jarabe de maíz de alta fructosa con una cuota compensatoria ..." induciría artificialmente el incremento en los precios del azúcar, lo que generaría efectos nocivos sobre los consumidores industriales, sobre todo, en los costos de la industria refresquera.

180. Para sustentar lo anterior, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., presentó un modelo de impacto inflacionario el cual cuantifica los efectos de un incremento de 100 por ciento en el precio del azúcar sobre los costos de las industrias que utilizan este insumo. Con base en los resultados de dicho estudio y con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Comercio Exterior, Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., concluyó que no se justifica la imposición de una cuota compensatoria a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa.

181. La Secretaría desestimó las conclusiones presentadas por Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., y los usuarios industriales, por los siguientes motivos:

i) Los modelos de impacto inflacionario presentados por los usuarios industriales y por Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., determinan los efectos probables en las industrias consumidoras de azúcar a partir de incrementos hipotéticos en el precio del azúcar como resultado de la imposición de cuotas compensatorias al jarabe de maíz de alta fructosa. Dichos incrementos se basan en la posibilidad teórica de que el azúcar alcance un precio máximo, determinado por el precio del azúcar en el mercado internacional, más el arancel correspondiente.

ii) Ninguno de los dos modelos cuantifica el impacto de un incremento en el precio de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa sobre el precio del azúcar, sino que suponen como un hecho que el precio del azúcar se incrementará al nivel teórico. Lo anterior resulta inconsistente con las afirmaciones de Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., sobre la imposibilidad por parte de la industria azucarera, dadas sus condiciones de competencia internas, de fijar precios cercanos al máximo ya que "... el comportamiento descrito reduciría rápidamente el precio a los niveles actuales ...".

iii) Las deducciones que menciona Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., son claramente contradictorias con otras argumentaciones presentadas en su escrito donde señala que: a) los precios del azúcar y las importaciones de los productos investigados "no guardan ninguna relación" entre sí; b) existe un comportamiento oligopólico y cartelización de los productores azucareros que implica que "... aunque se fijara momentáneamente un precio (del azúcar) cercano al máximo, el comportamiento descrito reduciría el precio a los niveles actuales ..." ; y c) "... fueron estos excedentes (del azúcar) los que causaron la caída en precios del azúcar ...".

iv) Contrario a lo que afirma Almidones Mexicanos, S.A. de C.V., la cuota compensatoria no tiene como propósito restringir las importaciones, ni como afirman los usuarios industriales, de proteger a la industria nacional sino el de restablecer las condiciones de competencia leal en el mercado nacional a través de la eliminación de la distorsión de precios causada por la discriminación de precios. En este sentido, el efecto de una cuota compensatoria sería el de evitar que en el futuro los precios de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa repercutan sobre los precios del azúcar haciéndolos bajar, y no el de propiciar un incremento injustificado por arriba del monto razonable que se produciría de no existir los efectos de una competencia desleal.

v) Es incorrecta la interpretación que hacen los usuarios industriales mencionados en el punto 25 de la resolución final original, sobre el artículo 88 de la Ley de Comercio Exterior, en virtud de que dicho ordenamiento no "debe obligar" a la Secretaría a desistirse del establecimiento de una cuota compensatoria, ya que como el mismo afirma, la aplicación de dicho artículo "... no puede justificar la existencia de prácticas desleales ...". Esto es, una vez cumplidos los requisitos previstos por la Ley de la materia para la aplicación de cuotas compensatorias, la autoridad debe cumplir con el objetivo de proporcionar una defensa oportuna a la producción nacional y en lo posible evitar que dicha medida repercuta negativamente sobre otros procesos productivos y el público consumidor.

182. Al respecto, con base en la resolución preliminar y las cuotas compensatorias que se establecieron en la misma, la Secretaría decidió analizar la posibilidad de establecer cuotas menores al margen de discriminación de precios. A partir de los márgenes de discriminación de precios que se determinaron en la etapa final de la investigación antidumping, se calcularon los precios a los que llegarían las importaciones una vez aplicadas las posibles cuotas compensatorias y se compararon con los precios del azúcar refinada y estándar.

183. De los resultados de dicha comparación, la Secretaría observó que incluso eliminando el margen de discriminación de precios a través de las cuotas compensatorias definitivas, los precios de las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa se ubicarían en el mercado nacional por debajo del precio del producto nacional. De esta forma, el precio promedio ponderado del jarabe de maíz de alta fructosa grado 42 se ubicaría 24 por ciento por debajo del precio promedio ponderado del azúcar estándar, mientras que el precio del jarabe de maíz de alta fructosa grado 55 sería 41 por ciento inferior al precio del azúcar refinada.

184. En virtud de lo anterior, la Secretaría consideró que el establecimiento de cuotas compensatorias no tiene por objeto restringir las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, ni evitar la sustitución comercial del azúcar por el jarabe de maíz de alta fructosa, sino restablecer las condiciones leales de comercio.

185. En relación con el Acuerdo para el otorgamiento de un subsidio a las exportaciones de azúcar, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del 20 de octubre de 1997, la Secretaría consideró que éste no impide que las importaciones del producto investigado originarias de los Estados Unidos de América ingresen al mercado mexicano en condiciones de discriminación de precios, ni los efectos lesivos de las mismas; en todo caso, serviría como atenuante de tales efectos, puesto que se trata de una medida temporal y limitada.

186. Aún más, las prácticas desleales de comercio internacional tienen como efecto distorsionar el mercado nacional, por lo que de continuar éstas, no sólo podrían contrarrestar los efectos de los subsidios señalados, sino que podrían implicar una mayor erogación del Gobierno Federal.

CONCLUSION

187. De conformidad con los resultados del análisis de los argumentos y pruebas presentadas por las partes interesadas, así como de la información que se allegó la Secretaría con el fin de dar cumplimiento a la recomendación del Grupo Especial, se determinó lo siguiente:

a) De continuar la práctica de discriminación de precios observada en el periodo de enero a diciembre de 1996, que permita a los consumidores adquirir un producto similar al azúcar a precios significativamente bajos, en el futuro inmediato se daría un aumento de la demanda por estos productos, así como efectos negativos sobre los factores e índices económicos y financieros de la rama de producción nacional. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho periodo se registró una tasa significativa de crecimiento de las importaciones en condiciones de discriminación de precios.

b) Existe la probabilidad fundada de que las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América, aumenten en el futuro inmediato.

c) Existe una suficiente capacidad libremente disponible y un alto potencial de exportación de la industria del jarabe de maíz de alta fructosa en los Estados Unidos de América para poder abastecer a los Estados Unidos Mexicanos.

d) El mercado mexicano es relevante como destino real para las exportaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América.

188. Por todo lo anterior, la Secretaría ratifica su conclusión de que en el periodo investigado se presentó una amenaza de daño a la industria nacional azucarera como consecuencia de importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa en condiciones de discriminación de precios originarias de los Estados Unidos de América, por lo que con base en lo señalado en el punto 183 de esta resolución, la Secretaría considera que es procedente mantener las cuotas compensatorias definitivas establecidas en la investigación antidumping, a que se refiere el punto 1 de esta resolución.

189. Con base en los resultandos y considerandos mencionados, la Secretaría da cumplimiento cabal y completo al informe del Grupo Especial, y procede a emitir la siguiente:

RESOLUCION

190. Se declara concluido el presente procedimiento administrativo de revisión de la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América, para dar cumplimiento al informe del Grupo Especial mencionado, estableciendo que sólo se realizó el análisis de los aspectos señalados en el punto 6 de esta Resolución y que resultaron incompatibles con el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, en los siguientes términos:

191. En cumplimiento a las conclusiones y recomendación establecidas en el punto 8.2 incisos b), c), d) y e) del informe del Grupo Especial a que se refiere el punto 6 de esta Resolución, devuélvanse, con los intereses correspondientes, las cantidades que se hubieren enterado por el pago de la cuota compensatoria y, en su caso, cancélense las garantías otorgadas por el pago de dichas cuotas compensatorias provisionales efectuadas del 26 de junio de 1997 al 23 de enero de 1998.

192. Se confirman las cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el punto 2 de esta resolución, impuestas a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, originarias de los Estados Unidos de América.

193. Comuníquese esta Resolución a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales correspondientes.

194. Archívese como caso total y definitivamente concluido.

195. Notifíquese a las partes interesadas de que se tenga conocimiento.

196. Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 14 de septiembre de 2000.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, **Herminio Blanco Mendoza**.- Rúbrica.

RESOLUCION final del examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de carne de bovino congelada en canales o medias canales, deshuesada y sin deshuesar, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de los estados miembros de la Comunidad Europea, independientemente del país de procedencia.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

RESOLUCION FINAL DEL EXAMEN PARA DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS DE LA SUPRESION DE LA CUOTA COMPENSATORIA IMPUESTA A LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO CONGELADA EN CANALES O MEDIAS CANALES, DESHUESADA Y SIN DESHUESAR, MERCANCIA CLASIFICADA EN LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 0202.10.01, 0202.20.99 Y 0202.30.01 DE LA TARIFA DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAIS DE PROCEDENCIA.

Visto para resolver el expediente administrativo 14/99 radicado en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, teniendo en cuenta los siguientes:

RESULTANDOS

Resolución definitiva

1. El 3 de junio de 1994 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, la resolución definitiva sobre las importaciones de carne de bovino congelada en canales o medias canales sin deshuesar o deshuesada, mercancía comprendida en las fracciones arancelarias 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la Comunidad Europea.

Monto de la cuota compensatoria

2. En la resolución a que se refiere el punto anterior, se impuso una cuota compensatoria de 45.74 por ciento a las importaciones de carne de bovino congelada en canales o medias canales sin deshuesar o deshuesada, originarias de la Comunidad Europea.

Aviso de eliminación de cuotas

3. El 26 de abril de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el Aviso sobre eliminación de cuotas compensatorias a través del cual se comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera interés, que las cuotas compensatorias definitivas impuestas a los productos listados en dicho Aviso, se eliminarían a partir de la fecha de vencimiento que se señala en el mismo, salvo que el productor nacional interesado presentara una solicitud de inicio de examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria definitiva, conforme a la legislación en la materia, con una antelación prudencial a la fecha allí señalada, o que la Secretaría la iniciara de oficio. Dentro del listado de referencia se incluyó la carne de bovino congelada en canales o medias canales sin deshuesar o deshuesada, originaria de la Comunidad Europea.

Presentación de la solicitud

4. El 19 de mayo de 1999, la Confederación Nacional Ganadera y la Asociación Nacional de Engordadores de Ganado Bovino, A.C., por conducto de sus representantes legales, comparecieron ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para solicitar el inicio del examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria definitiva impuesta a las importaciones de carne de bovino congelada en canales o medias canales sin deshuesar o deshuesada, mercancía comprendida en las fracciones arancelarias 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la Comunidad Europea.

Prevención

5. En respuesta a la prevención formulada por la Secretaría mediante oficio UPCI.310.99.1608, el 28 de julio de 1999, la Confederación Nacional Ganadera y la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, A.C., presentaron la información requerida. En el mismo acto se adhirieron a la solicitud la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y las sociedades mercantiles de rastros Tipo Inspección Federal: Empacadora Romar, S.A. de C.V.; Empacadora y Ganadera de Camargo, S.A. de C.V.; Ganadería Integral El Centinela, S.A. de C.V.; Ganadería Integral SK, S.A. de C.V.; Ganadería Vallezco, S.A. de C.V.; Ganadería Integral Vizur, S.A. de C.V.; y Productores de Carne de Engorda, S.A. de C.V.

Solicitantes

6. La Confederación Nacional Ganadera, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, A.C.; la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y las sociedades mercantiles de rastros Tipo Inspección Federal Empacadora Romar, S.A. de C.V.; Empacadora y Ganadera de Camargo, S.A. de C.V.; Ganadería Integral El Centinela, S.A. de C.V.; Ganadería Integral SK, S.A. de C.V.; Ganadería Vallezco, S.A. de C.V.; Ganadería Integral Vizur, S.A. de C.V.; y Productores de Carne de Engorda, S.A. de C.V., están constituidas conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos que rigen la materia respectiva, y señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Mariano Escobedo número 714, colonia Anzures, código postal 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.; el objeto social de las tres primeras consiste en representar los intereses comunes de sus miembros, a efecto de impulsar el desarrollo de la ganadería del país, entre otros. El objeto de las restantes es la cría, reproducción, engorda, industrialización, maquila, compraventa de ganado para sacrificio, deshuese, empaque, conservación y actividades similares, así como la explotación pecuaria en general.

Información sobre el producto

A. Descripción del producto

Carne en canal

7. La canal de bovino se define como el cuerpo del animal sacrificado, desangrado y sin piel, separado de la cabeza al nivel de la articulación occipito-altoidea, de las extremidades anteriores al nivel de la articulación carpometacarpiana y de las posteriores al nivel de la tarsometacarpiana, con la cola amputada dejando sólo dos vértebras caudales. Este cuerpo está abierto a lo largo de la línea media ventral incluyendo el tórax y el abdomen, sin vísceras cavitatorias, excepto los riñones, quedando el diafragma adherido sin genitales.

Carne en cortes sin deshuesar

8. La canal es seccionada en cuartos delanteros, cuartos traseros, pierna o piña, lomo o full loin; de los cuartos delanteros se obtiene: pecho, diezmillo, chambarete y costillar; y de los cuartos traseros se obtiene: pierna, lomo y falda.

Carne en cortes deshuesados

9. Cada uno de los cortes primarios sin deshuesar mencionados anteriormente se seccionan obteniéndose diferentes cortes deshuesados; de la pierna se obtiene: bola, cuete, chambarete, copete, contra, centro de cara y empuje; del lomo o full loin se obtiene: aguayón, filete, costilla de asado y entrecot deshuesado; del costillar se obtiene: ribeye lip on, ribeye gota y ribeye roll; del diezmillo se obtiene: diezmillo deshuesado, espaldilla y asado de paleta; de la pata delantera se obtiene: chambarete deshuesado; del pecho se obtiene: el pecho deshuesado; de la falda se obtiene: falda, suadero y conchita, y de las agujas cortas se obtienen fajitas.

Carne congelada

10. La carne congelada es aquella que ha sido preservada a una temperatura de congelamiento; asimismo, aunque la temperatura de congelamiento es de -2.22°C, la carne es normalmente conservada a -28°C.

B. Usos del producto

11. La carne de bovino, tanto de producción nacional como importada, tiene como fin la satisfacción de la alimentación humana.

C. Proceso productivo

Carne en canal

12. Una vez que el ganado se encuentra en la etapa denominada *finalización*, los animales se llevan a un rastro, en donde se les sacrifica, se separa la piel, se separan las vísceras y se limpia la carne para producir carne en canal y en medias canales.

Carne en cortes con hueso y deshuesados

13. El principal insumo para la producción de carne en cortes lo constituyen las canales obtenidas del sacrificio, que posteriormente ingresan a la sala de cortes de los rastros Tipo Inspección Federal o empacadora, que despieza la canal para la producción de cortes sin deshuesar y cortes deshuesados.

D. Canales de distribución

14. De acuerdo con los solicitantes, las canales obtenidas del sacrificio se venden en su mayor parte a tablajeros, carnicerías y autoservicios, quienes deshuesan y cortan la carne para ofrecerla al consumidor final; sin embargo, una proporción importante de dicha producción pasa a las salas de corte de empacadoras o rastros Tipo Inspección Federal, obteniéndose cortes con hueso y carne deshuesada.

E. Tratamiento arancelario

15. Los productos propuestos a examen ingresan a través de las siguientes fracciones arancelarias, y tiene el tratamiento arancelario que a continuación se señala:

Fracción arancelaria	Descripción	Arancel Base
0202.10.01	Carne en canales o medias canales congelada	25%

0202.20.99	Cortes sin deshuesar congelados	25%
0202.30.01	Cortes deshuesados congelados	25%

Resolución de inicio

16. El 11 de octubre de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, la resolución de inicio del examen para determinar las consecuencias de la supresión de las cuotas compensatorias definitivas, impuestas a las importaciones de carne de bovino congelada en canales o medias canales sin deshuesar o deshuesada, mercancía comprendida en las fracciones arancelarias 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01, o en las que posteriormente le sean aplicables de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la Comunidad Europea.

Periodo investigado

17. Con fundamento en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, la Secretaría fijó como periodo de examen el comprendido de julio de 1998 a junio de 1999.

Convocatoria y notificaciones

18. Mediante la publicación a que se refiere el punto anterior, la Secretaría convocó a los importadores, exportadores y a cualquier persona que considerara tener interés jurídico en el resultado del examen, para que comparecieran a manifestar lo que a su derecho conviniese y a presentar las argumentaciones y pruebas que estimaran pertinentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Comercio Exterior; 145 y 164 de su Reglamento; y 12.1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de 1994.

19. Asimismo, con fundamento en los artículos 53 de la Ley de Comercio Exterior; 142 de su Reglamento; y 12.1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de 1994, la autoridad instructora procedió a notificar a la Delegación de la Comisión Europea en los Estados Unidos Mexicanos, así como a la empresa solicitante, a los exportadores e importadores de que tuvo conocimiento, el inicio del examen, corriéndoles traslado de las solicitudes de inicio, así como de los formularios oficiales de examen, con el objeto de que éstas efectuasen su defensa y presentaran la información requerida.

Empresas comparecientes

20. Derivado de la convocatoria y notificaciones descritas en los puntos 18 y 19 de esta Resolución, compareció la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C., con domicilio en Paseo de las Palmas número 405, 5o. piso, colonia Lomas de Chapultepec, código postal 11000, México, D.F., la que acreditó su personalidad jurídica. Asimismo, compareció la Delegación de la Comisión Europea en los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Paseo de la Reforma número 1675, colonia Lomas de Chapultepec, código postal 11000, México, D.F.

Requerimientos

21. Mediante oficios UPCI.310.00.0223 y UPCI.310.00.0695 de fechas 24 de febrero y 17 de marzo de 2000, respectivamente, la Secretaría requirió a la Delegación de la Comisión Europea en los Estados Unidos Mexicanos información relativa a los subsidios que otorga la Comunidad Europea respecto a la carne de bovino, países productores, capacidad instalada y producción entre otra.

Prórrogas

22. Mediante escritos recibidos los días 1 y 22 de marzo y 13 de abril de 2000, folios 1022, 1346 y 1694, respectivamente, la Delegación de la Comisión Europea en los Estados Unidos Mexicanos solicitó prórroga para dar respuesta a los requerimientos señalados, mismas que le fueron concedidas mediante los oficios UPCI.310.00.0576, UPCI.310.00.0733 y UPCI.310.00.1106 de fechas 6, 24 de marzo y 14 de abril de 2000, respectivamente, por 10 días adicionales para cada una de sus solicitudes y mismas que vencieron los días 23 de marzo, 14 de abril y 4 de mayo de 2000.

Argumentos y medios de prueba

Gobierno

Delegación de la Comisión Europea en México

23. A pesar de que la Secretaría le otorgó a dicha Delegación la más amplia oportunidad de defensa, consistente en un total de 60 días para la presentación de argumentos y pruebas, dicha Delegación no dio respuesta al formulario de examen, y solamente presentó los siguientes argumentos:

A. Desde que las cuotas compensatorias han estado en vigor, la Comunidad Europea ha asumido compromisos para reducir los apoyos a la agricultura por un porcentaje de entre 20 y 36 por ciento en el marco del Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial del Comercio.

B. Los solicitantes únicamente presentaron evidencia en referencia al reembolso de exportación y al programa de investigación y desarrollo (I&D) para el sector bovino, sin embargo, el primer programa no aplica a la exportación a los Estados Unidos Mexicanos; el segundo programa es no específico, y en cualquier caso, no existe evidencia de su aplicación.

C. El Reglamento del Consejo (CE) número 805/86 establece las reglas en referencia al programa de reembolso a la exportación; sin embargo este programa no aplica para países de América Latina con relación a la carne de bovino.

D. El sistema de intervención es una disposición interna, cuyo propósito es proveer un apoyo al mercado, en caso de ser necesario y está basado en:

a. Compras de ciertas calidades del mercado;

b. Ventas de productos congelados;

c. Financiamiento.

E. Las compras de intervención pueden llevarse a cabo por la caída de los precios de mercado en la Comunidad Europea a niveles muy bajos. Sin embargo, la decisión de comprar excedentes de carne de bovino está basada en un juicio general de la Comisión de todos los parámetros de mercado relevantes.

F. Actualmente no se registran exportaciones de carne de bovino a los Estados Unidos Mexicanos y no puede demostrarse una probable recurrencia de daño, al no registrarse exportaciones al mercado mexicano desde 1995.

G. Debido a que el subsidio encontrado en la investigación antidumping en 1994 ha sido eliminado, las medidas compensatorias ya no resultan apropiadas. La última compra de intervención tuvo lugar en 1997, y la venta general de intervención para el mercado mundial no se ha aplicado desde 1994. En términos prácticos el sistema de intervención como un todo será eliminado en el año 2000, como seguimiento a la nueva reforma de la carne de bovino bajo la Agenda 2000.

Opinión de la Comisión de Comercio Exterior

24. Una vez declarada la conclusión de la investigación, con fundamento en los artículos 58 de la Ley de Comercio Exterior y 83 fracción I inciso H subinciso I de su Reglamento, la Secretaría presentó proyecto de resolución final ante la Comisión de Comercio Exterior, la que en sesión celebrada el 21 de agosto de 2000, se pronunció favorablemente sobre el sentido de la misma, y

CONSIDERANDO

Competencia

25. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es competente para emitir la presente Resolución conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 34 fracciones V y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 fracción VII de la Ley de Comercio Exterior; 80 y 83 de su Reglamento; 11.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, y 1, 2, 4 y 14 fracción I del Reglamento Interior de la misma dependencia.

Derecho de defensa y de debido proceso

26. Con fundamento en los artículos 82 de la Ley de Comercio Exterior y 162 y 164 de su Reglamento, las partes interesadas tuvieron la más amplia oportunidad para presentar toda clase de pruebas y argumentos en favor de su causa, mismas que fueron valoradas con sujeción a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo.

Información desestimada

27. A pesar de las tres prórrogas de 10 días concedidas por la Secretaría, a que hace referencia el punto 22 de esta Resolución, la Delegación de la Comisión Europea, el 11 de mayo de 2000, folio 1990, es de destacarse que presentó en forma extemporánea respuesta al requerimiento formulado mediante oficio UPCI.310.00.0695, por lo que la Secretaría determinó no tomar en cuenta la información contenida en él, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 de la Ley de Comercio Exterior y 12.7 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Examen sobre la repetición o continuación de las subvenciones

28. Durante el periodo probatorio, la Delegación de la Comisión Europea únicamente realizó simples afirmaciones no apoyadas por pruebas pertinentes. En consecuencia, la Secretaría requirió información adicional para contar con elementos suficientes de los programas que fueron considerados como compensables en la resolución definitiva de la investigación ordinaria, y que a su vez fueron documentados por los solicitantes en la solicitud de inicio del examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria.

29. La Delegación de la Comisión Europea no respondió en tiempo al requerimiento de información adicional de la Secretaría; asimismo, la información proporcionada era exactamente la misma que la presentada durante el periodo probatorio.

30. En virtud de que la Delegación de la Comisión Europea no proporcionó argumentos ni pruebas que desvirtuaran la determinación de la autoridad descrita en la resolución de inicio del examen, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 11 de octubre de 1999, la Secretaría no cuenta con elementos o pruebas adicionales para modificar lo expuesto en dicha resolución.

31. En consecuencia, considerando por un lado, las pruebas presentadas por los solicitantes sobre la existencia de los programas que formaron parte de la cuota compensatoria, y la caída en los volúmenes

importados una vez impuesta la cuota compensatoria, de conformidad con los artículos 54 de la Ley de Comercio Exterior y 21.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, la Secretaría determinó que existen elementos suficientes para suponer que de revocarse las cuotas compensatorias definitivas, los exportadores de la Comunidad Europea repetirían sus ventas de exportación a los Estados Unidos Mexicanos con precios distorsionados por las subvenciones.

Examen sobre la repetición o continuación de la amenaza de daño

32. Con fundamento en el artículo 11.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, la Secretaría con el fin de examinar si existen elementos para presumir que la supresión de la cuota compensatoria daría lugar a la continuación o repetición de la amenaza de daño, evaluó la información aportada por las solicitantes que representan a los productores de la mercancía similar a la investigada.

Producción nacional

33. Esta autoridad investigadora consideró que el total de la producción nacional de carne en canal fue realizado por rastros municipales, rastros Tipo Inspección Federal y sacrificio *in-situ*. Ahora bien, puesto que en la solicitud participaron diversos productores de carne en canal que se obtiene de rastros particulares y en la producción *in-situ* y 11 rastros Tipo Inspección Federal, esta autoridad investigadora observó que son representativos de la producción nacional de carne en canal.

34. En relación con la producción de carne en cortes con hueso, la Secretaría observó que los solicitantes participaron con el 29.34 por ciento de la producción nacional.

35. Finalmente, en relación con la producción de carne en cortes deshuesados, la Secretaría observó que los solicitantes participaron con el 35.2 por ciento de la producción nacional.

36. Con base en lo anterior, la Secretaría determinó que los solicitantes son representativos de la producción de carne en canal, carne en cortes sin deshuesar y de carne en cortes deshuesados.

Mercado internacional

A. Producción

37. De acuerdo con información proporcionada por los solicitantes, de 1995 a 1997, la producción mundial promedio fue de 48 millones de toneladas de carne de bovino. En dicha producción los Estados Unidos de América participaron con el 23.5 por ciento, mientras que la Comunidad Europea aportó el 15.7 por ciento. De acuerdo con las cifras de producción potencial reportadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, los Estados Unidos Mexicanos reporta una participación potencial de 2.8 por ciento en la oferta mundial. Se pronostica que la producción mundial de carne de bovino aumentará cerca del 1.3 por ciento por año en los siguientes 7 años.

B. Consumo

38. Los cinco principales países consumidores de carne de bovino son los Estados Unidos de América, la República Federativa de Brasil, la República Popular China, la Federación de Rusia y la República de Argentina; los Estados Unidos Mexicanos ocupan el décimo lugar. Los países con mayor consumo per capita de carne de bovino son la República de Argentina, los Estados Unidos de América, la República Federativa de Brasil, Australia y Nueva Zelandia; los Estados Unidos Mexicanos ocupan el lugar 18o. con 20 kilogramos de consumo per capita, y la Comunidad Europea el lugar 20o. con cerca de 19 kilogramos. El consumo per capita en los Estados Unidos Mexicanos ha manifestado una tendencia estable, mientras que en la Comunidad Europea ha sido a la baja ya que en años anteriores el consumo per capita fue de alrededor de 20 kilogramos.

C. Comercio internacional

39. Los países con mayor participación en el comercio internacional de carne de bovino son Australia, los Estados Unidos de América, Nueva Zelandia, la República de Argentina y Canadá; por su parte, los Estados Unidos Mexicanos ocupan el lugar 28o. entre los principales países exportadores con un promedio anual de 2.5 miles de toneladas.

40. Para 1998 se exportaron 4.89 millones de toneladas de carne entre las cuales Australia participó con el 29.9 por ciento, Estados Unidos de América con el 19.4 por ciento, Nueva Zelandia con el 9.8 por ciento, la República de Argentina con el 9.2 por ciento y Canadá con el 7.76 por ciento, mientras que la Comunidad Europea participó con el 17.9 por ciento y los Estados Unidos Mexicanos con el 0.06 por ciento.

41. De acuerdo con los solicitantes, el “Foreing Agricultural Service” estima que para 1999, las exportaciones de los Estados Unidos de América crecerán un 8.4 por ciento. Ante la crisis financiera de los mercados en la Federación de Rusia y Asia se proyecta que los Estados Unidos Mexicanos seguirá creciendo fuertemente como mercado para las exportaciones procedentes de los Estados Unidos de América y como posible mercado de los excedentes de la Comunidad Europea.

Importaciones

42. Los solicitantes señalaron en su solicitud, que con base en información del Sistema de Información Comercial de México, durante 1998 no se registraron importaciones de carne en canal, carne en cortes

con hueso y carne en cortes deshuesados congelados, procedentes de la Comunidad Europea debido a que las cuotas compensatorias objeto de este examen han contenido las exportaciones subvencionadas de la Comunidad Europea.

43. Asimismo, esta autoridad investigadora observó que a partir de 1995 las importaciones de los productos investigados se redujeron prácticamente a cero, por lo que se eliminó la amenaza daño que podrían haber causado las importaciones subvencionadas procedentes de la Comunidad Europea.

44. Los solicitantes manifestaron que la eliminación de las cuotas compensatorias provenientes de la Comunidad Europea profundizaría el daño severo causado por el ingreso de productos cárnicos de bovino en condiciones de discriminación de precios provenientes de los Estados Unidos de América, condición que se acentuaría de ingresar productos originarios de la Comunidad Europea debido a que continúan aplicando una política de subvenciones a sus exportaciones, por lo que ante la posible eliminación de cuotas y la crisis en mercados mundiales como el asiático y el ruso, se daría lugar a que los Estados Unidos Mexicanos se perfilara como un mercado viable y atractivo para la ubicación del producto europeo no realizado en sus mercados tradicionales.

Precios

45. En el documento "Prospects for Agricultural Markets" se indica que a pesar de que, en el mediano plazo, se prevé un fuerte crecimiento de los precios de la carne en el mercado mundial, los precios de la Comunidad Europea permanecerán por arriba de éstos, por lo que la Comunidad Europea no podrá exportar sin recurrir a los subsidios; más aún, según esta fuente, la reducción de la diferencia entre ambos precios dependerá de la magnitud de la crisis económica y la velocidad de recuperación en algunas de las regiones importadoras más importantes como son: el sudeste asiático, Japón y la Federación de Rusia.

46. Asimismo, esta autoridad investigadora observó que actualmente la Comunidad Europea realiza exportaciones de los productos investigados a otros países diferentes de los Estados Unidos Mexicanos. Además, de acuerdo con el análisis de subvenciones que se menciona en el apartado correspondiente, existen elementos para suponer que los exportadores de la Comunidad Europea repetirían sus ventas de exportación a los Estados Unidos Mexicanos con precios distorsionados por las subvenciones; lo anterior aunado a la capacidad exportadora de la Comunidad Europea que se menciona en el siguiente apartado, implica que existen indicios razonables para suponer que de eliminarse la cuota compensatoria se repetirían las exportaciones a los Estados Unidos Mexicanos a precios subsidiados, lo que haría que se repitiera la amenaza de daño a la producción nacional.

Capacidad exportadora

47. De acuerdo con los solicitantes se observó un crecimiento a corto y mediano plazos de los *stocks* de carne de bovino de la Comunidad Europea, éstos representan sus exportaciones potenciales, las cuales, sin una cuota compensatoria, serán fácilmente colocables en los Estados Unidos Mexicanos.

48. La Secretaría analizó los datos del "Foreing Agricultural Service Commodity and Marketing Programs", en los cuales observó que los *stocks* de carne de bovino de la Comunidad Europea aumentaron 103.4 por ciento al comparar 1997 con 1996 y 28.8 por ciento al comparar 1998 con 1997.

49. Asimismo, los solicitantes proporcionaron copias del "Prospects for Agricultural Markets" (1998-2005) de la Comunidad Europea, en el cual se contempla a varios países, entre ellos los Estados Unidos Mexicanos, como los importadores y mercados viables para colocar sus excedentes de producción.

50. Por otra parte, como se mencionó en el punto 21 de esta Resolución, la Secretaría solicitó mayores elementos de información a la Comisión de la Comunidad Europea, fundamentalmente en relación con el estado general que guarda la industria de la producción de carne de bovino en la Comunidad Europea en el contexto de los mercados internacionales y específicamente en relación con la capacidad instalada, producción, inventarios, ventas al mercado interno, exportaciones totales, exportaciones a los Estados Unidos Mexicanos y exportaciones a otros países de los productos investigados por separado, ésto es, para la carne de bovino en canal congelada, carne de bovino en cortes sin deshuesar congelados y carne de bovino en cortes deshuesados congelados. Sin embargo, y no obstante que se concedieron prórrogas a la Delegación de la Comisión Europea en espera a la contestación de dicho requerimiento, dicha Delegación no proporcionó la información solicitada en los plazos de ley otorgados por esta Secretaría.

51. Por lo anterior, la Secretaría realizó el análisis de los efectos de la supresión de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de carne de bovino en canal, carne en cortes sin deshuesar y carne en cortes deshuesados congelados, con base en la mejor información disponible que fue la presentada por los solicitantes y aquella que la Secretaría se allegó.

Conclusiones

52. De lo señalado en el punto precedente y de conformidad con los resultados del análisis de los argumentos y pruebas presentados por los solicitantes al inicio de la investigación, así como de la información de las importaciones que la Secretaría tuvo a su disposición, se determinó que existen elementos suficientes que hacen presumir que la supresión de la cuota compensatoria daría lugar a la

repetición de la amenaza de daño a la industria nacional productora de carne en canal, carne en cortes sin deshuesar y carne en cortes deshuesados en virtud de que existe capacidad exportadora en la Comunidad Europea y que existen indicios de que sus exportadores repetirían sus exportaciones a los Estados Unidos Mexicanos en condiciones subvencionadas que agravarían la situación de la producción nacional, lo que se constituiría en una repetición de la amenaza de daño que originó la imposición de las cuotas compensatorias, confirmando con ello el análisis de amenaza de daño realizado y publicado en la resolución de inicio del 11 de octubre de 1999, por lo que de conformidad con los artículos 67 y 70 de la Ley de Comercio Exterior, es procedente emitir la siguiente:

RESOLUCION

53. Se declara concluido este procedimiento de examen y se determina la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta por la resolución definitiva a que se refiere el punto 1 de esta Resolución, a las importaciones de carne de bovino congelada en canales o medias canales, deshuesada y sin deshuesar, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de la Comunidad Europea, en los términos de los artículos 70 de la Ley de Comercio Exterior y 21.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, esto es, por cinco años más contados a partir del 3 de junio de 1999.

54. Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar la cuota compensatoria a que se refiere el punto 53 de esta Resolución, en todo el territorio nacional, independientemente del cobro del arancel respectivo.

55. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, los importadores de la mercancía similar a carne de bovino congelada en canales o medias canales, deshuesada y sin deshuesar, que conforme a esta Resolución que deban pagar la cuota compensatoria definitiva a que se refiere el punto 53 de esta Resolución, no estarán obligados al pago si comprueban que el país de origen de las mercancías es distinto a la Comunidad Europea. La comprobación de origen de las mercancías se hará con arreglo a lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de agosto de 1994 y por los Acuerdos que adicionan al diverso, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de fechas 11 de noviembre de 1996, 12 de octubre de 1998 y 30 de julio de 1999.

56. Notifíquese esta Resolución a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales correspondientes.

57. Notifíquese a las partes interesadas el sentido de esta Resolución.

58. Archívese como caso total y definitivamente concluido.

59. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 4 de septiembre de 2000.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, **Herminio Blanco Mendoza**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2000, Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Dirección General de Autotransporte Federal.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCT/2000, CARACTERISTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.

AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte y Presidente de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre y de Transporte Aéreo, conjuntamente con PEDRO PABLO ZEPEDA BERMUDEZ, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, IV, VI, IX, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones V, XIII, XVI y XVII, 41, 43 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 5o. fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 7o. fracción V y 63 de la Ley de Navegación; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 31 y 114 fracción II del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos

Peligrosos; 45 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 6o. fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y demás ordenamientos que resulten aplicables, y

CONSIDERANDO

Que la identificación mediante etiquetas indicativas de riesgo, en envases y embalajes, es fundamental para prevenir accidentes durante el manejo y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos, así como para la pronta identificación de la naturaleza de peligrosidad de dichos productos en caso de accidentes.

Que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para la emisión de normas oficiales mexicanas, el Subsecretario de Transporte y el Coordinador de Puertos y Marina Mercante, con fecha 18 de noviembre de 1999, ordenaron la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** a efecto de consulta pública del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-SCT/1999, Características de las Etiquetas de Envases y Embalajes, Destinadas al Transporte de Sustancias, Materiales y Residuos Peligrosos, que establece las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben contar los envases y embalajes que contengan sustancias, materiales o residuos peligrosos durante su transportación.

Que durante el plazo de 60 días naturales, contado a partir de la fecha de publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 32 de su Reglamento estuvieron a disposición del público en general para su consulta.

Que en el plazo señalado los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana de referencia los cuales fueron analizados en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, dándose respuesta a los mismos a través del **Diario Oficial de la Federación** el 9 de junio de 2000, integrándose a la Norma Oficial Mexicana, las observaciones procedentes.

Que como resultado de los trabajos de implementación del Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos y Canadá, en el capítulo IX, "Medidas Relativas a Normalización" artículo 905 "Uso de Normas Internacionales", se señala que cada una de las partes utilizará como base para sus propias medidas relativas a normalización las normas internacionales pertinentes o de adopción inminente, en lo que a transporte se refiere se tomaron como fundamento las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, Regulación Modelo, para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

Que previa aprobación de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre, Transporte Aéreo y Transporte Marítimo y Puertos, se tiene a bien expedir la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2000.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil.- El Subsecretario de Transporte y Presidente de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre y Transporte Aéreo, **Aarón Dychter Poltolarek**.- Rúbrica.- El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, **Pedro Pablo Zepeda Bermúdez**.- Rúbrica.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SCT/2000, CARACTERISTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

PREFACIO

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- Dirección General de Autotransporte Federal
- Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal
- Dirección General de Aeronáutica Civil
- Dirección General de Marina Mercante

SECRETARIA DE GOBERNACION

- Dirección General de Protección Civil
- Centro Nacional de Prevención de Desastres

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

- Instituto Nacional de Ecología
- Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

- Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos
- Dirección General de Fábricas

SECRETARIA DE ENERGIA

- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

- Dirección General de Normas

SECRETARIA DE SALUD

- Dirección General de Salud Ambiental

PETROLEOS MEXICANOS

- Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y Ahorro de Energía

Cámara Nacional de la Industria de Transformación
Cámara Nacional de Autotransporte de Carga
Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, A.C.
Asociación Mexicana de Empresas de Pruebas no Destructivas, A.C.
Asociación Nacional de Fabricantes de Refrescos, A.C.
Grupo Intermex, S.A. de C.V.
Dupont, S.A. de C.V.
Novartis, S.A. de C.V.
Bayer de México, S.A. de C.V.
Ciba Especialidades Químicas, S.A. de C.V.
Aerovías de México, S.A. de C.V.
Transportación Marítima Mexicana

INDICE

1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Referencias
4. Definiciones
5. Clasificación
6. Principios generales
6.1 Finalidades de las etiquetas
6.2 Características de las etiquetas
6.3 Etiquetas de riesgo secundario
6.4 Etiquetas adicionales
6.5 Señalamiento para el manejo y almacenamiento
6.6 Etiquetas para envases y embalajes mixtos y consolidados
6.7 Etiquetas de envases con remanentes
7. Bibliografía
8. Concordancia con normas internacionales
9. Observancia
10. Vigilancia
11. Evaluación de la conformidad
12. Sanciones
13. Vigencia
14. Transitorio
Anexos

1. Objetivo

La presente Norma Oficial Mexicana establece las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben portar todos los envases y embalajes, que identifican la clase de riesgo que representan durante su transportación y manejo las sustancias, materiales y residuos peligrosos.

2. Campo de aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana es de aplicación obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios de las sustancias, materiales y residuos peligrosos que transitan por las vías generales de comunicación terrestre, marítima y aérea.

3. Referencias

Para la aplicación de esta Norma es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas y Norma Mexicana, o las que las sustituyan:

NOM-002-SCT2	LISTADO DE LAS SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MAS USUALMENTE TRANSPORTADOS.
NOM-004-SCT	SISTEMA DE IDENTIFICACION DE UNIDADES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
NOM-005-SCT	INFORMACION DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.

NOM-007-SCT2	MARCADO DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
NOM-010-SCT2	DISPOSICIONES DE COMPATIBILIDAD Y SEGREGACION PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
NOM-011-SCT2	CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE LAS SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS EN CANTIDADES LIMITADAS.
NOM-033-SCT4	LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE MERCANCIAS PELIGROSAS A INSTALACIONES PORTUARIAS.
NOM-023-SCT4	CONDICIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN PUERTOS, TERMINALES Y UNIDADES MAR ADENTRO.
NOM-024-SCT2	ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION, ASI COMO LOS METODOS DE PRUEBA DE LOS ENVASES Y EMBALAJES DE LAS SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
NOM-052-ECOL	QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EL LISTADO DE LOS MISMOS Y LOS LIMITES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL AMBIENTE.
NOM-054-ECOL	QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE DOS O MAS RESIDUOS CONSIDERADOS COMO PELIGROSOS POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-ECOL-1993.
NOM-087-ECOL	QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA SEPARACION, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTEN ATENCION MEDICA.
NMX-DGN-Z-1	MAGNITUDES Y UNIDADES DE BASE DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI).

4. Definiciones

Para los propósitos de la presente Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes definiciones:

4.1 Cantidad Exenta:

Cantidades pequeñas de materiales peligrosos que se pueden transportar por vía aérea, envasados y embalados de tal manera que se les exime de los requisitos de marcado, estiba y documentación que exige la reglamentación respectiva.

4.2 Cantidad Limitada:

Límite cuantitativo máximo de sustancia, material o residuo peligrosos de ciertas clases, que pueden ser transportados representando un peligro menor en envases y embalajes de los tipos especificados en la normatividad correspondiente.

4.3 Embalaje:

Material que envuelve, contiene o protege debidamente los productos preenvasados, que facilitan y resisten las operaciones de almacenamiento y transporte.

4.4 Envase:

Cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el producto, para su distribución o venta.

4.5 Etiqueta:

Cualquier señal o símbolo escrito, impreso o gráfico visual o fijado que mediante un código de interpretación indica el contenido, manejo, riesgo y peligrosidad de las sustancias, materiales y los residuos peligrosos.

4.6 Expedidor:

Persona física o moral que a nombre propio o de un tercero, contrata el servicio de transporte de materiales o residuos peligrosos.

4.7 Material Peligroso:

Aquellas sustancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y demás componentes que conformen la carga que será transportada por las unidades.

4.8 Preponderancia:

Mayor peligro de una sustancia respecto a otra.

4.9 Remanente:

Sustancias, materiales o residuos peligrosos que persisten en los contenedores, envases o embalajes después de su vaciado o desembalaje.

4.10 Residuo Peligroso:

Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológico-infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.

4.11 Símbolo:

Imagen que muestra en forma gráfica y de fácil interpretación, el significado del riesgo inherente al material peligroso.

4.12 Transporte Multimodal:

Es el transporte de mercancías (sustancias, materiales o residuos peligrosos) por dos modos diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un contrato de transporte multimodal, desde un lugar de origen en el que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega.

5. Clasificación

Los símbolos utilizados para la identificación de los riesgos en el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos, que se indican en esta Norma, están en función de la clasificación que se establece en los artículos del 7 al 16, del Capítulo I, del Título Primero, del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; Parte 2 de Clasificación y Lista de Mercancías Peligrosas del DOC 9284-AN/905 de las Instrucciones Técnicas para Transporte sin riesgo de Mercancías Peligrosas por vía aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y en la Introducción General del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).

6. Principios generales

Todos los envases y embalajes destinados a transportar materiales o residuos peligrosos cuya masa neta o capacidad no exceda de 400 kg o 450 litros, respectivamente, deben portar una etiqueta o etiquetas (primarias y secundarias, según sea el caso) adheribles, impresas o rotuladas que permitan identificar fácilmente, mediante apreciación visual, los riesgos asociados con su contenido.

Quedan exceptuados de la obligación de portar etiquetas destinadas al transporte, los envases y embalajes que contengan sustancias, materiales o residuos peligrosos que se transporten en "cantidades limitadas" o en "cantidades exentas".

Todos los envases y embalajes destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos cuya masa neta o capacidad exceda de 400 kg o 450 litros deberán portar cuando así lo permita el envase y embalaje una etiqueta o el (los) cartel(es) de identificación, establecidos en la norma correspondiente.

Adicionalmente al etiquetado, en cada envase y embalaje conteniendo sustancias, materiales o residuos peligrosos, debe figurar la designación oficial de transporte (nombre de embarque apropiado) de la sustancia, material o residuo peligroso de que se trate y el correspondiente número de identificación de la Organización de las Naciones Unidas precedido de las letras UN.

En el caso del transporte de envase(s) y embalaje(s) con diferentes materiales o residuos peligrosos compatibles, pero con diferentes riesgos, el envase y embalaje exterior, deberá portar las etiquetas de riesgo primario y cuando se requieran las de riesgo secundario.

6.1 Finalidades de las etiquetas:

a) Reconocer por su aspecto general de color, forma y símbolo, los envases y embalajes que contienen materiales y residuos peligrosos.

b) Identificar la naturaleza del riesgo potencial del material o residuo peligroso mediante símbolos.

c) Prevenir situaciones de peligro en el manejo y estibado de las sustancias, materiales o residuos peligrosos.

Los cinco símbolos básicos de las etiquetas y los cuatro complementarios, con sus correspondientes significados, son los siguientes:

SIMBOLOS BASICOS

- Bomba explotando (peligro de explosión).
- Flama (peligro de incendio).
- Calavera y tibias cruzadas (peligro de envenenamiento).
- Trébol esquematizado (peligro de radiactividad).
- Líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y un metal (peligro de corrosión).

SIMBOLOS COMPLEMENTARIOS

- Flama sobre un círculo (oxidantes o peróxidos orgánicos).
- Cilindro de gas (gases comprimidos no inflamables, no tóxicos).
- Tres medias lunas sobre un círculo (sustancias infecciosas).
- Siete franjas verticales (sustancias peligrosas varias).

6.2 Características de las etiquetas

6.2.1 Deben ser cuadradas de dimensiones mínimas de 100 mm x 100 mm de lado, salvo en el caso de los envases y embalajes que por sus dimensiones sólo pueden llevar etiquetas más pequeñas, con los

vértices opuestos en posición vertical en forma de diamante o rombo, con una línea del mismo color que el símbolo, a 5 mm del borde exterior y paralela a éste (véase figura No. 11).

6.2.2 Las etiquetas están divididas en dos mitades. Con excepción de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, la mitad superior de la etiqueta se reserva para el símbolo y la inferior para el número de la clase o de la división y, si procede para la letra del grupo de compatibilidad, quedando optativo el texto correspondiente al riesgo, excepto para la clase 7 radiactivos, el cual es obligatorio.

No obstante cuando las regulaciones específicas a un modo determinado de transporte así lo establezcan, las etiquetas deberán mostrar los textos requeridos.

6.2.3 Excepto en el caso de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, las etiquetas de la clase 1 llevan en su mitad inferior el número de la división y la letra del grupo de compatibilidad de la sustancia. Las etiquetas de las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 llevan en su mitad superior el número de la división y en su mitad inferior la letra del grupo de compatibilidad. Para la división 1.4, grupo de compatibilidad "S", no se prescribe etiqueta alguna.

6.2.4 En el caso de las etiquetas para riesgo primario clase 5, el número de la división de la sustancia debe mostrarse en el ángulo inferior de su etiqueta. Para todas las demás etiquetas de riesgo primario, se indicará el número de la clase de la sustancia en el ángulo inferior de la etiqueta. Los modelos de las etiquetas de riesgo primario correspondientes a cada una de las clases se ilustran en las figuras del No.1 al 9.

6.2.5 Los espacios en blanco del texto que figuran en la mitad inferior de las etiquetas de las sustancias de la clase 7 deben llenarse con los datos requeridos en la misma, antes de ser transportados los productos (figura No. 7).

En las etiquetas en forma de rombo, que no correspondan a las sustancias de la clase 7, el espacio situado debajo del símbolo no debe llevar, aparte del número de la clase o de la división, más texto que las indicaciones relativas a la naturaleza del riesgo, en su caso, y a las precauciones que habrán de tomarse para la manipulación cuando sean específicas para un modo determinado de transporte.

En caso de que existan niveles de contaminación radiactiva, cuando el recipiente se haya vaciado, se aplicarán las medidas de seguridad radiológica que para tal efecto establece la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de la Secretaría de Energía.

6.2.6 Los símbolos, los textos y los números deben imprimirse en negro en todas las etiquetas en forma de rombo, excepto:

a) En las etiquetas de la clase 8, el texto "corrosivo" (si es que lo llevan) y el número de la clase deben figurar en blanco, y

b) En las etiquetas con fondo enteramente verde, rojo o azul, podrán figurar en blanco.

6.2.7 Todas las etiquetas deben ser de alta resistencia, de tal manera que no sufran decoloración o deformación en su uso normal, para evitar que se deteriore la información contenida en las mismas.

6.2.8 Las etiquetas deben colocarse sobre una superficie de color que contraste con el de ellas.

6.2.9 La colocación de las etiquetas por ninguna razón deberá de obstruir las marcas del envase y embalaje, además deben de estar cercanas a estas marcas, se recomienda 150 mm (6 pulgadas) de distancia con respecto a las marcas, asimismo las etiquetas deberán de colocarse en las 2 caras laterales visibles del envase y embalaje o contenedor.

6.2.10 Por lo que se refiere a los cilindros de gas o botellas que contengan gases de la clase 2, y considerando su forma, así como su posición y sus elementos de sujeción durante el transporte, las etiquetas sin dejar de responder a los modelos que se describen en esta Norma, podrán ser de tamaño reducido en la proporción que convenga, y se fijarán en la parte no cilíndrica (en la hombrera) de dichas botellas.

6.3 Etiquetas de Riesgo Secundario (figura No. 10).

6.3.1 Cuando una sustancia, material o residuo presente más de un riesgo importante (ejemplo: riesgo de incendio y riesgo de envenenamiento y de intoxicación), el envase y embalaje debe llevar, además de la etiqueta correspondiente al riesgo primario, etiquetas secundarias que indiquen los riesgos secundarios importantes.

Las etiquetas deberán corresponder en todo momento a la sustancia, material o residuo peligroso a transportarse.

Cuando se trate de sustancias que figuran por su nombre en las listas de clasificación de los materiales, debe adherírseles una etiqueta indicativa del riesgo a que se alude en la columna de "clase o división" y, en su caso, la etiqueta de riesgo secundario a que se hace referencia en la columna de riesgos secundarios, incluida en la NOM-002-SCT2 o en los listados de materiales correspondientes al transporte marítimo o aéreo.

6.3.2 En el caso específico de las sustancias que responden a la definición de más de una clase, que no está mencionada expresamente en las listas de clasificación, la clase del riesgo primario de las sustancias debe determinarse con arreglo a la tabla número 5 de la NOM-002-SCT2 o en la

correspondiente al transporte marítimo o aéreo, en que se presenta el orden de preponderancia de las características del riesgo de los materiales. Además de la etiqueta requerida para esa clase de riesgo primario, el envase y embalaje debe llevar las etiquetas de riesgo secundario que correspondan, de conformidad con la figura No. 10.

6.3.3 Para las sustancias de la clase 8 no se exige etiqueta de riesgo secundario de la división 6.1, si su toxicidad tiene su origen únicamente en su efecto destructivo sobre los tejidos vivos. Para las sustancias de la división 4.2 no se exige etiqueta de riesgo secundario de la división 4.1.

6.3.4 Siempre que el envase y embalaje lleve etiquetas indicativas de riesgo secundario, éstas únicamente ostentarán el símbolo correspondiente al riesgo.

6.3.5 Para la clase 2 se han previsto 3 etiquetas distintas: una para los gases inflamables de la división 2.1 (roja), otra para los gases no tóxicos no inflamables de la división 2.2 (verde), y otra para los gases tóxicos de la división 2.3 (blanca).

Cuando en las listas de sustancias peligrosas se señale que un gas de la clase 2 ofrece uno o varios riesgos secundarios, se utilizarán las etiquetas que se indican en la figura 11. En todos los casos, la etiqueta de riesgo primario que se indica en la tercera columna del cuadro número 1 debe ajustarse a los modelos reproducidos en la figura No. 2.

CUADRO 1

ETIQUETAS PARA LOS GASES DE LA CLASE 2 QUE TIENEN RIESGOS SECUNDARIOS

Riesgos indicados en la NOM-002-SCT2 o en los listados de materiales correspondientes al transporte marítimo o aéreo		**Forma de identificarse**	
Primario	**Secundario**	**Etiqueta de riesgo primario figura 2**	**Etiqueta(s) de riesgo secundario figura 10**
2.1	Ninguno	2.1	Ninguna
2.2	Ninguno	2.2	Ninguna
	5.1	2.2	5
2.3	Ninguno	2.3	Ninguna
	2.1	2.3	3
	5.1	2.3	5
	5.1, 8	2.3	5, 8
	8	2.3	8
	2.1, 8	2.3	3, 8

6.4 Etiquetas Adicionales.

Cuando un envase o embalaje que contenga sustancias, materiales o residuos peligrosos sea destinado a transportarse en forma multimodal, adicionalmente a las marcas y etiquetas que indiquen los riesgos primarios y secundarios correspondientes, deberá portar aquéllas aplicables para los modos de transporte subsecuentes, cuando así se requiera.

6.4.1 Los envases y embalajes que vayan a ser movilizados por vía marítima, que contengan materiales o residuos peligrosos que representen un riesgo para la vida acuática o los mantos acuíferos, deberán portar la etiqueta de "CONTAMINANTE MARINO", la cual estará conformada por un triángulo con un pez en el centro y una marca en forma de X sobre el mismo, en fondo blanco con el símbolo de color negro y dimensiones de 100 mm por lado como mínimo (la etiqueta se ilustra en la figura No. 12), con excepción de los envases y embalajes que debido a su tamaño sólo pueden ostentar etiquetas de dimensiones inferiores.

6.4.2 Quedan exceptuados de portar la etiqueta de contaminante marino, los envases y embalajes interiores que contengan 5 litros o menos de capacidad para sustancias líquidas o 5 kg o menos de capacidad para sustancias sólidas, así como aquellos que contengan materiales o residuos peligrosos considerados altamente contaminantes del mar con 0.5 litros de capacidad para sustancias líquidas o 500 g o menos de capacidad para sustancias sólidas; sin embargo, las unidades de transporte (incluyendo contenedores) o las unidades de carga que los contengan deberán ostentar la etiqueta o cartel correspondiente.

6.4.3 Se pueden transportar en aeronaves, cantidades pequeñas de materiales peligrosos, debiendo identificar con la etiqueta "MERCANCIAS PELIGROSAS EN CANTIDADES EXENTAS", que se indica en la figura No. 13, con dimensiones mínimas de 100 mm x 100 mm (4 x 4 pulgadas).

6.4.4 Cuando se transporten en aeronaves materiales peligrosos, además de las etiquetas de riesgo, se utilizarán las etiquetas de manejo que se muestran en la figura No. 14, como se indica a continuación:

6.4.4.1 La etiqueta "MATERIAL MAGNETIZADO" debe utilizarse en embalajes y sobre-embalajes que contengan material magnetizado, la cual estará conformada por un recuadro de dimensiones de 110 x 90 mm, con fondo blanco, letras y símbolo color azul claro, el símbolo de una herradura magnética dirigida al indicador de una brújula mostrando el texto de "manténgase alejado del detector de la brújula" (figura No. 14).

6.4.4.2 La etiqueta "PROHIBIDO EN AERONAVES DE PASAJEROS", debe utilizarse en embalajes y sobre-embalajes que contengan sustancias que sólo estén permitidas en aviones de carga. Dicha etiqueta deberá tener forma de cuadrado con dimensiones de 120 mm x 110 mm de fondo negro con letras e imágenes en color naranja mostrando un avión de pasajeros con la puerta abierta y una mano al exterior en señal de alto, con el texto de "PELIGRO PROHIBIDO EN AERONAVES DE PASAJEROS" (figura No. 14).

6.4.4.3 La etiqueta de manipulación para "LIQUIDOS CRIOGENICOS" que se indica en la figura No. 14 debe ser utilizada además de la etiqueta de riesgo de "GAS NO INFLAMABLE" de la división 2.2 en todos los envases, embalajes y sobre-embalajes que contengan líquidos criogénicos que se transportan en aeronaves.

6.4.5 Para carga internacional transportada por vía aérea, el texto de las etiquetas, podrá ser en el idioma inglés. Asimismo, se podrá utilizar el idioma que conforme a los Convenios Internacionales se establezca.

6.5 Señalamiento para el manejo y almacenamiento.

6.5.1 Los envases y embalajes pueden llevar, si procede, adicionalmente etiquetas con otras marcas o símbolos que indiquen las precauciones que se deben tomar, al manipular o estibar un envase o embalaje, por ejemplo: un símbolo de un paraguas para indicar que el envase o embalaje debe mantenerse seco, etiqueta de manipulación para orientación del envase y embalaje. Estas etiquetas, así como sus símbolos y leyendas, deben apegarse según corresponda a lo dispuesto en las normas aplicables o a lo especificado en el punto siguiente:

6.5.1.1 La etiqueta de orientación de los envases y embalajes "ETIQUETA DE POSICION", debe utilizarse en embalajes y sobre-embalajes que contengan sustancias peligrosas líquidas, que deben ser colocadas siempre en posición vertical, y estará conformada por dos flechas de color rojo sobre una línea horizontal en un recuadro del mismo color, sobre un fondo contrastante o de dos flechas en color negro sobre una línea horizontal del mismo color, en un fondo contrastante sin recuadro, en ambos casos las dimensiones mínimas serán de 74 mm x 105 mm (figura No. 15).

6.6 Etiquetas para envases y embalajes mixtos o consolidados.

6.6.1 Envases y embalajes mixtos o consolidados. Cuando se envasen y embalen dos o más materiales o residuos peligrosos compatibles, pero pertenecientes a diferentes clases de peligro dentro del mismo embalaje o dentro del mismo contenedor externo o sobre-embalaje, éste debe portar las diferentes etiquetas primarias y secundarias que correspondan a cada uno de los materiales o residuos, sin embargo, no se requerirán etiquetas de riesgo secundario si dicho riesgo ya está representado por una etiqueta de riesgo primario.

6.7 Etiquetas de envases con remanentes.

6.7.1 Excepto para la clase 7, todo envase y embalaje que haya contenido sustancias peligrosas, deberá estar identificado, marcado, etiquetado y rotulado como si estuviera cargado, a menos que se hayan realizado pasos tales como lavado, purgado de vapores o alguna otra acción a efecto de nulificar su riesgo.

7. Bibliografía

a) Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento;

b) Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas Modelo de Regulaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, Décima Edición, Nueva York y Ginebra, 1997;

c) Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG); Enmienda 29-96, y

d) Parte 2 de Clasificación y Lista de Mercancías Peligrosas del DOC. 9284-AN/905 de las Instrucciones Técnicas para Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea OACI.

8. Concordancia con normas y lineamientos internacionales

Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente con:

a) Las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Modelo de Regulaciones, emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, Décima Edición, Parte 5, Capítulos 5.1 y 5.2; Nueva York 1997 (Recommendations on The Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, Tenth revised edition, United Nations, New York, 1997);

b) Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG), Enmienda 29-96;

c) Anexo 18 al Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, y

d) DOC. 9284-AN/905 de las Instrucciones Técnicas para Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea OACI (1997-1998).

9. Observancia

Esta Norma es de observancia obligatoria en las Vías Generales de Comunicación para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil y su Reglamento; Ley de Navegación y su Reglamento; Ley de Puertos y su Reglamento y en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y demás documentos internacionales signados por nuestro país para el transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como las disposiciones de carácter internacional que México haya firmado, para el transporte de materiales y residuos peligrosos.

10. Vigilancia

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de las Direcciones Generales con injerencia, es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.

11. Evaluación de la conformidad

Será mediante los siguientes lineamientos

Transporte terrestre:

11.1 La verificación se realizará por las Unidades de Verificación debidamente acreditadas y aprobadas y por Inspectores de Vías Generales de Comunicación.

11.2 En la operación se comprobará mediante constatación ocular que los envases y embalajes, cuentan con las etiquetas de riesgo primario y, en su caso, de riesgo secundario, que estén adheridas o impresas a los mismos y que correspondan al riesgo del material, de acuerdo a lo señalado en la documentación de embarque; y que el color de la etiqueta y el símbolo, sean de acuerdo al modelo señalado en la presente Norma, debiendo estar en condiciones aceptables para su interpretación.

11.3 Se verificará además, que las dimensiones de las etiquetas correspondan al tamaño requerido; asimismo los colores del riesgo que identifican y que el nombre es el que identifica a la sustancia, material o residuo que se transporta de acuerdo con la NOM-002-SCT2, o bien, a los listados de materiales correspondientes al transporte aéreo o marítimo.

11.4 Debe verificarse que las etiquetas están sin enmendaduras o decoloraciones que limiten su interpretación.

Transporte aéreo:

11.5 Para el transporte por vía aérea, la Evaluación de la Conformidad se realizará en las verificaciones que se efectúen a los concesionarios, permisionarios u operadores aéreos, a las aeronaves pertenecientes o en posesión de los mismos y/o cualquier otra verificación realizada por la autoridad aeronáutica, a través de su personal verificador y/o las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas. Lo cual consistirá en comprobar que se cumple con lo establecido en la presente Norma aplicable al transporte aéreo.

12. Sanciones

El incumplimiento de lo establecido en esta Norma Oficial Mexicana será sancionado por esta Secretaría, conforme a lo establecido en la Ley de Aviación Civil y su Reglamento; Ley de Navegación y su Reglamento; Ley de Puertos y su Reglamento; Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y los demás ordenamientos legales que resulten aplicables, sin perjuicio de las que impongan otras Dependencias del Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones o de la responsabilidad civil o penal que resulte.

13. Vigencia

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días después de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

14. Transitorio

UNICO.- Con la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, se abroga la NOM-003-SCT2/1994, Características de las Etiquetas de Envases y Embalajes Destinadas al Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 21 de agosto de 1995.

VER IMAGEN 20se-01.BMP

VER IMAGEN 20se-02.BMP

VER IMAGEN 20se-03.BMP

VER IMAGEN 20se-04.BMP

VER IMAGEN 20se-05.BMP

VER IMAGEN 20se-06.BMP

VER IMAGEN 20se-07.BMP

VER IMAGEN 20se-08.BMP

VER IMAGEN 20se-09.BMP

VER IMAGEN 20se-10.BMP

VER IMAGEN 20se-11.BMP

VER IMAGEN 20se-12.BMP

VER IMAGEN 20se-13.BMP

VER IMAGEN 20se-14.BMP

VER IMAGEN 20se-15.BMP

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

DICTAMEN mediante el cual se cancela la autorización otorgada para la constitución de la colonia agrícola y ganadera Adolfo López Mateos, Municipio de Palizada, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.- Dirección de Regularización de la Propiedad Rural.

COLONIA: "ADOLFO LOPEZ MATEOS"
MUNICIPIO: PALIZADA
ESTADO: CAMPECHE
EXPEDIENTE: 117619

DICTAMEN

Visto para su estudio el expediente integrado con motivo de las investigaciones realizadas en los terrenos donde quedó ubicada la colonia agrícola y ganadera "Adolfo López Mateos", Municipio de Palizada, Estado de Campeche, se conocen los siguientes:

ANTECEDENTES

A. El 16 de octubre de 1960 se suscribió un convenio de colonización voluntaria de los predios "El Vapor y Anexas" y "San Eduardo", localizados en los municipios de El Carmen y Palizada, Estado de Campeche, celebrado por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y el ciudadano Eduardo J. Lavalle Urbina, en su calidad de propietario de los predios antes mencionados, por una superficie total de 18,729-55-47 hectáreas.

El 19 de enero de 1961 se expidió un acuerdo, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 23 de enero de 1963, mediante el cual se declaró de utilidad pública la colonización con fines agrícolas y ganaderos de los predios denominados "San José del Vapor y Anexas" y "San Eduardo", localizados en los municipios de El Carmen y Palizada, Estado de Campeche, con una superficie de 18,859-57-34 hectáreas, en dicha superficie quedaría ubicada la colonia agrícola y ganadera "Adolfo López Mateos".

B. El plano correspondiente a la colonia agrícola y ganadera "Adolfo López Mateos", fue elaborado por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en el mes de diciembre de 1962, por una superficie total de 17,488-07-80 hectáreas.

C. Revisados los libros de registro de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, no se encontraron inscripciones de derechos de propiedad de los integrantes de la colonia agrícola y ganadera "Adolfo López Mateos".

Respecto de ello y como producto del diagnóstico de campo realizado por el entonces existente Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, se arribó al conocimiento de que 81 personas cuentan

con escrituras de propiedad sobre la tierra, todas inscritas en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Campeche.

D. A pesar de lo expuesto en el párrafo precedente, consta en el expediente en estudio que el 13 de diciembre de 1997 se efectuó una reunión con los titulares de la tierra, contándose con la presencia de los representantes de la Procuraduría Agraria y del extinto Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. En dicho acto se acordó por unanimidad la incorporación de la colonia al Programa de Regularización de Colonias Agrícolas y Ganaderas, así como continuar en el régimen de colonias agrícolas y ganaderas, extremo que se acredita con el acta respectiva.

E. La específica condición de los titulares de los derechos de propiedad sobre los terrenos de que se trata, considerándose su pronunciamiento de desear mantenerse en el régimen de colonias, provocó que se les convocará formalmente para el efecto de aplicar el procedimiento operativo de regularización de la colonia a la que se alude. Como consecuencia se desarrollaron las acciones correspondientes, habida cuenta de que sus resultados se describen a continuación:

Mediante el oficio número 90 de fecha 17 de enero de 2000, el Representante Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, con sede en la ciudad de Campeche, informó a la Dirección General de Ordenamiento y Regularización que los integrantes de la colonia "Adolfo López Mateos", Municipio de Palizada, de ese Estado, no manifiestan interés respecto al Programa de Regularización de Colonias Agrícolas y Ganaderas, y que los poseedores de dichas tierras cuentan con escrituras debidamente requisitadas y que se comportan como pequeños propietarios. Para acreditar ese extremo remitió la documentación relativa al intento de celebración de Asamblea General Extraordinaria, en la que consta que con fecha 25 de diciembre de 1999 se expidió una primera convocatoria, para llevar a cabo la asamblea el día 3 de enero de 2000, en la que se acordaría, en su caso, continuar con los trabajos de regularización, misma que no tuvo verificativo por falta de quórum, elaborándose en esa fecha el acta respectiva, expidiéndose una segunda convocatoria para celebrar la asamblea el 16 de enero de 2000, elaborándose en esa misma fecha (16 de enero de 2000), un acta circunstanciada en la que se consigna por el Representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, la falta de interés jurídico por parte de los integrantes de la colonia "Adolfo López Mateos" para llevar a cabo los trabajos de regularización, así como la manifestación de los propietarios que en virtud de la falta de interés por parte de 90% de titulares de la tierra, es mejor incorporarse al dominio pleno y ser regidos por el fuero común.

De conformidad con lo expuesto se formulan los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que esta Secretaría de Estado, a través de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, es competente para conocer el presente asunto con fundamento en el artículo 12 fracciones XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria.

II.- Que el texto del Acta Circunstanciada que obra en el expediente, elaborada por el Representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como de lo señalado en la documentación referente al diagnóstico de la colonia de que se trata, se conoce la falta de interés de los miembros de la colonia "Adolfo López Mateos", Municipio de Palizada, Estado de Campeche, para llevar a cabo los trabajos de regularización al interior de la colonia, lo que hace evidente que se dejó de cumplir el objeto para el cual fue creada la colonia, toda vez que se encuentra desarticulada la organización que para el régimen de colonias establecían los artículos del 25 al 28 y 30 de la Ley Federal de Colonización del 30 de diciembre de 1946, y los artículos del 26 al 33 del Reglamento de la Ley Federal de Colonización del 6 de enero de 1927, preceptos considerados al momento de su constitución, en esencia coincidentes con las disposiciones jurídicas que actualmente establece el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, razón por la que con fundamento en los artículos 142 y 143 del propio Reglamento de la Ley Agraria, se concluye que procede cancelar la autorización otorgada por el acuerdo de fecha 19 de enero de 1961, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 23 de enero de 1963, referente a la conformación de la colonia agrícola y ganadera "Adolfo López Mateos", sobre terrenos que en ese entonces tenían la categoría de propiedad federal.

De conformidad con lo expuesto en los antecedentes y considerandos precedentes, se emiten los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se cancela la autorización otorgada para la constitución de la colonia agrícola y ganadera "Adolfo López Mateos", ubicada en el Municipio de Palizada, Estado de Campeche, de conformidad con el considerando II de este documento.

SEGUNDO.- Los derechos adquiridos en relación con las tierras que conformaron la colonia agrícola y ganadera "Adolfo López Mateos", quedan sujetas a la legislación civil del Estado de Campeche.

TERCERO.- Publíquese este Dictamen en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche.

CUARTO.- Désele vista del presente Dictamen al Registro Agrario Nacional, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

QUINTO.- Archívese el expediente número 117619, relativo a este Dictamen.

México, D.F., a 17 de mayo de 2000.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Francisco Javier Molina Oviedo**.- Rúbrica.- El Director de Regularización de la Propiedad Rural, **Héctor Miralrío Rocha**.- Rúbrica.- La Subdirectora de Colonias Agrícolas y Ganaderas, **Ma. Araceli Aguilar Velázquez**.- Rúbrica.

DICTAMEN mediante el cual se cancela la autorización otorgada para la constitución de la colonia agrícola y ganadera Venustiano Carranza, Municipio de Las Choapas, Ver.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.- Dirección de Regularización de la Propiedad Rural.

COLONIA: "VENUSTIANO CARRANZA"
MUNICIPIO: LAS CHOAPAS
ESTADO: VERACRUZ
EXPEDIENTE: 107144

DICTAMEN

Visto para su estudio el expediente general de la colonia agrícola y ganadera "Venustiano Carranza", Municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz, integrado con motivo del Programa de Regularización de Colonias Agrícolas y Ganaderas se conocen los siguientes:

ANTECEDENTES

A. El 31 de mayo de 1948 se expidió un acuerdo, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 18 de junio de 1948, mediante el cual se declaró de utilidad pública la colonización con fines de explotación agrícola y ganadera diversos predios entre ellos el denominado "El Plan", ubicado en el Municipio de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz. En él quedó ubicada la colonia agrícola y ganadera "Venustiano Carranza", Municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz.

B. El plano correspondiente a la colonia agrícola y ganadera "Venustiano Carranza", es un proyecto elaborado por la Comisión Nacional de Colonización por una superficie de 1,550-00-00 hectáreas (sin especificar fecha).

C. Constan en los libros de registro números 195 y 410, tomos I de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, inscripciones de derechos de propiedad de la colonia agrícola y ganadera "Venustiano Carranza", a favor de:

No. Prog.	No. de lote	NOMBRE DEL COLONO	DOCUMENTO REGISTRADO	FECHA	SUPERFICIE (Has.)
1	1	MANUEL DE TOMAS GUTIERREZ	OFICIO DE AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS No. 427539	27/11/74	50-00-00
2	2	ALVARO TORRES DE LA CRUZ	TITULO DE PROPIEDAD No. 1/66	26/01/66	50-00-00
3	3	JUAN JOSE ESPIRON GARCIA	CONTRATO No. 3	4/11/60	50-00-00
4	4	ELIAS MORALES SANCHEZ	CONTRATO No. 4	5/07/57	50-00-00
5	5	JOSE MORALES YEDRA	CONTRATO No. 5	5/07/57	50-00-00
6	6	GUADALUPE GARCIA TEOYA	OFICIO DE AUTORIZACION DE TRANSMISION DE DERECHOS No. 724416	22/04/93	50-00-00
7	7	RAMON CABRERA GARCIA	CONTRATO No. 7	5/07/57	50-00-00
8	8	JEOBA PEREZ CARRILLO	ESCRITURA PUBLICA No. 1662	6/12/72	50-00-00

9	9	HIGINIO CORDOBA JIMENEZ	OFICIO DE AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS No. 442-955	17/06/69	50-00-00
10	10	AMPARO BRAVO VDA. DE VELA	ESCRITURA PUBLICA No. 8878	17/06/82	50-00-00
11	11	ONESIMO ESCOBAR GOMEZ	ESCRITURA PUBLICA No. 5622	28/09/84	50-00-00
12	12	FIDENCIO JIMENEZ RAMOS	TITULO DE PROPIEDAD No. 5/66	26/01/66	50-00-00
13	13	ALBA ALICIA CONTRERAS PEREZ	ESCRITURA PUBLICA No. 1345	2/02/71	50-00-00
14	14	HERADIO TOBIAS MARTINEZ	ESCRITURA PUBLICA No. 7208	8/09/87	50-00-00
15	15	SIRINEO ORTEGA CARRANZA	ESCRITURA PUBLICA No. 2201	29/09/75	50-00-00
16	16	ONESIMO ESCOBAR GOMEZ	ESCRITURA PUBLICA No. 5622	28/09/84	50-00-00
17	17	GILBERTO SOLIS LAZCANO	ESCRITURA PUBLICA No. 1346	2/02/71	50-00-00
18	18	MANUEL LEYVA PEREZ	ESCRITURA PUBLICA No. 682	30/03/67	22-00-00
19	18-A	MARIA ANTONIETA MARTINEZ VALVERDE	OFICIO DE AUTORIZACION DE TRANSMISION DE DERECHOS No. 715319	9/08/91	26-00-00
20	19	JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ	TITULO DE PROPIEDAD No. 5873	12/06/68	01-00-00
21	19-A	MANUELA A. LEYVA LOPEZ	ESCRITURA PUBLICA No. 1730	9/04/73	25-00-00
22	19-B	RAMONA HEREDIA LOPEZ Y COOP.	ESCRITURA PUBLICA No. 5373	7/03/84	24-00-00
23	20	RAMONA HEREDIA LOPEZ Y COOP.	ESCRITURA PUBLICA No. 5373	7/03/84	25-00-00
24	21	JESUS ALMEIDA M.	CONTRATO No. 21	5/07/57	30-84-11
25	21-A	MELITON SALVADOR GUERRERO	TITULO DE PROPIEDAD No. 030586	2/01/85	19-15-89
26	22	SINFORIANO CABRERA GARCIA	CONTRATO No. 22	5/07/57	50-00-00
27	23	ANTONIO PEREZ LOPEZ	CONTRATO No. 23	5/07/57	50-00-00
28	24	LEONILIO LOPEZ BARAJAS	OFICIO DE AUTORIZACION DE TRANSMISION DE DERECHOS No. 711175	5/06/90	75-00-00
29	25	ROSARIO CATANA ZARATE	OFICIO DE AUTORIZACION DE TRANSMISION DE DERECHOS No. 711176	15/06/90	50-00-00
30	26	ALFONSO OLVERA LOPEZ	ESCRITURA PUBLICA No. 1605	5/11/60	50-00-00
31	27	CATARINO ROSADO MORGADO	ESCRITURA PUBLICA No. 7893	22/06/88	50-00-00
32	29	PRIMO FELICIANO CONTRERAS	OFICIO DE AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS No. 631637	28/03/85	50-00-00

D. Mediante oficio número 10716 de fecha 20 de junio de 2000, la Representación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Región del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz, informó a la Dirección General de Ordenamiento y Regularización que los integrantes de la colonia "Venustiano Carranza", Municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz, no manifiestan interés respecto al Programa de Regularización de Colonias Agrícolas y Ganaderas, asimismo, que dicha colonia no cuenta con consejo de administración ni con la organización

interna establecida para las colonias. Para acreditar ese extremo, remitió la documentación relativa al intento de celebración de la Asamblea General de Opción, en la que consta que con fecha 9 de mayo de 2000, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 al 137 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se expidió una primera convocatoria para llevar a cabo el día 25 de mayo de 2000 la Asamblea General de Opción, en la que se acordaría por voluntad de los colonos adoptar el dominio pleno de sus tierras o continuar bajo el régimen de colonias agrícolas y ganaderas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la Ley Agraria, misma que no tuvo verificativo por falta de quórum, expidiéndose de inmediato una segunda convocatoria para celebrar la señalada asamblea el 6 de junio de 2000, elaborándose con esa misma fecha (6 de junio de 2000), un acta circunstanciada en la que se consigna por los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria la falta de interés jurídico por parte de los integrantes de la colonia "Venustiano Carranza" para llevar a cabo dicha asamblea.

De conformidad con lo expuesto se formulan los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que esta Secretaría de Estado, a través de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, es competente para conocer el presente asunto con fundamento en el artículo 12 fracciones XI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria.

II.- Que del texto del Acta Circunstanciada que obra en el expediente, elaborada por los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, así como de lo señalado en la documentación referente al diagnóstico de la colonia de que se trata, se conoce la falta de interés de los miembros de la colonia "Venustiano Carranza", Municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz, para ser integrados al Programa de Regularización de Colonias Agrícolas y Ganaderas, lo que evidencia que se dejó de cumplir el objeto para el que fue creada la colonia, toda vez que se encuentra desarticulada la organización que para el régimen de colonias establecían los artículos 25 al 28 y 30 de la Ley Federal de Colonización del 30 de diciembre de 1946, y los artículos del 26 al 33 del Reglamento de la Ley Federal de Colonización del 6 de enero de 1927, preceptos considerados al momento de su constitución, en esencia coincidentes con las disposiciones jurídicas que actualmente establece el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, razón por la que, con fundamento en los artículos 142 y 143 del propio Reglamento de la Ley Agraria, se concluye que procede cancelar la autorización otorgada por el acuerdo del 31 de mayo de 1948, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 18 de junio de 1948, referente a la conformación de la colonia agrícola y ganadera "Venustiano Carranza", Municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz, debiéndose publicar el presente Dictamen en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial de la entidad federativa correspondiente.

De conformidad con lo expuesto y en los antecedentes y considerandos precedentes, se emiten los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se cancela la autorización otorgada para la constitución de la colonia agrícola y ganadera "Venustiano Carranza", Municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz, de conformidad con el considerando II de este documento.

SEGUNDO.- Los derechos adquiridos en relación con las tierras que conformaron la colonia agrícola y ganadera "Venustiano Carranza", quedan sujetos a la legislación civil del Estado de Veracruz.

TERCERO.- Publíquese este Dictamen en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz.

CUARTO.- Désele vista del presente Dictamen al Registro Agrario Nacional, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

QUINTO.- Archívese el expediente número 107144 relativo a este Dictamen.

México, D.F., a 11 de julio de 2000.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Francisco Javier Molina Oviedo**.- Rúbrica.- El Director de Regularización de la Propiedad Rural, **Héctor Miralrío Rocha**.- Rúbrica.- La Subdirectora de Colonias Agrícolas y Ganaderas, **Ma. Araceli Aguilar Velázquez**.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Palmillas o El Tule, Municipio de Concordia, Sin.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL.

La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 144629 de fecha 22 de julio de 1999, autorizó a esta Representación Regional Pacífico, para que comisionara perito deslindador, la cual en oficio número VI/60477 de fecha 3 de mayo de 2000, me ha autorizado para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 160 de la Ley Agraria 104, 107 y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, proceda a realizar el deslinde y levantamiento topográfico del predio denominado "Palmillas o El Tule", presuntamente propiedad nacional, ubicado en el Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa, el cual cuenta con una superficie de 44-48-00 hectáreas, con las siguientes colindancias:

AL NORTE: Con terreno libre
AL SUR: Con terreno libre
AL ESTE: Con Arturo Cañedo Colio y Joaquín Tirado
AL OESTE: Con terreno libre

Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**; en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, en el periódico de información local, por una sola vez, así como colocarse en los parajes más cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde y levantamiento topográfico, a fin de que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente Aviso, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis correspondiente en las oficinas que ocupa la Representación Regional Pacífico, con domicilio en avenida Vicente Riva Palacios, esquina con bulevar Emiliano Zapata, colonia Almada, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no ocurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.

Atentamente

Culiacán, Sin., a 8 de mayo de 2000.- El Perito Deslindador, **María Eugenia Cruz Pasos**.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Rancho San Juan, Municipio de Caborca, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO "RANCHO SAN JUAN", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, ESTADO DE SONORA.

La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 142657 de fecha 12 de mayo de 2000, expediente sin número autorizó a la Representación Regional Agraria, para que comisionara perito deslindador, la cual con oficio número 2808 de fecha 7 de agosto de 2000, me ha autorizado para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 160 de la Ley Agraria, 104, 107 y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, proceda al deslinde y medición del predio presuntamente propiedad nacional denominado "Rancho San Juan", con una superficie aproximada de 657-25-87 hectáreas, ubicado en el Municipio de Caborca, Estado de Sonora, el cual cuenta con las siguientes colindancias:

AL NORTE: Predio La Minita del C. Antonio Félix
AL SUR: Terrenos del ejido La Noria
AL ESTE: Predio La Campana del C. Efraín Cañez Noriega
AL OESTE: Terrenos de Francisco Reyna

Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá publicarse por una sola vez en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el periódico de información local "El Cambio", así como colocarse en los parajes más cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde, a fin de que dentro del periodo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente aviso en el **Diario Oficial de la Federación**, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis

correspondiente en las oficinas que ocupa la Representación Regional Agraria con domicilio en Justo Sierra y Ortiz Mena, colonia Modelo de la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.

Atentamente

Hermosillo, Son., a 7 de agosto de 2000.- El Perito Deslindador, **Mario Toledo Padilla**.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado La Pesuña, Municipio de Caborca, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO "LA PESUÑA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, ESTADO DE SONORA.

La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 142658 de fecha 12 de mayo de 2000, expediente sin número autorizó a la Representación Regional Agraria, para que comisionara perito deslindador, la cual con oficio número 2813 de fecha 7 de agosto de 2000, me ha autorizado para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 160 de la Ley Agraria, 104, 107 y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, proceda al deslinde y medición del predio presuntamente propiedad nacional denominado "La Pesuña", con una superficie aproximada de 1,653-48-80 hectáreas, ubicado en el Municipio de Caborca, Estado de Sonora, el cual cuenta con las siguientes colindancias:

AL NORTE: Terrenos del ejido La Herradura
AL SUR: F.F.C.C. Sonora - Baja California
AL ESTE: Terrenos del C. César Salgado Arrizón
AL OESTE: Terrenos del ejido El Bajío

Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá publicarse por una sola vez en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el periódico de información local "El Cambio", así como colocarse en los parajes más cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde, a fin de que dentro del periodo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis correspondiente en las oficinas que ocupa la Representación Regional Agraria con domicilio en Justo Sierra y Ortiz Mena, colonia Modelo de la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.

Atentamente

Hermosillo, Son., a 7 de agosto de 2000.- El Perito Deslindador, **Mario Toledo Padilla**.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Sapo, Municipio de Hermosillo, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO "EL SAPO", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA.

La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 142938 de fecha 25 de mayo de 2000, expediente sin número autorizó a la Representación Regional Agraria, para que comisionara perito deslindador, la cual con oficio número 2823 de fecha 7 de agosto de 2000, me ha autorizado para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 160 de la Ley Agraria, 104, 107 y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, proceda al deslinde y medición del predio presuntamente propiedad nacional denominado "El Sapo", con una superficie aproximada de 130-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, el cual cuenta con las siguientes colindancias:

AL NORTE: Terrenos del ejido La Peaña
AL SUR: Terrenos de la colonia El Sapo
AL ESTE: Terrenos de la colonia El Sapo
AL OESTE: Rancho El Divisadero

Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá publicarse por una sola vez en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el periódico de información local "El Cambio", así como colocarse en los parajes más cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde, a fin de que dentro del periodo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis correspondiente en las oficinas que ocupa la Representación Regional Agraria con domicilio en Justo Sierra y Ortiz Mena, colonia Modelo de la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.

Atentamente

Hermosillo, Son., a 7 de agosto de 2000.- El Perito Deslindador, **Jesús Velasco O**.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Coacoyol o Las Lomitas, Municipio de Ahome, Sin.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL.

La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 144623 de fecha 22 de julio de 1999, autorizó a esta Representación Regional Pacífico, para que comisionara perito deslindador, la cual en oficio número VI/60480 de fecha 3 de mayo de 2000, me ha autorizado para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 160 de la Ley Agraria, 104, 107 y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, proceda a realizar el deslinde y levantamiento topográfico del predio denominado "Coacoyol o Las Lomitas", presuntamente propiedad nacional, ubicado en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, el cual cuenta con una superficie aproximada de 8-08-32 hectáreas, con las siguientes colindancias:

AL NORTE: Con Fidel Páez Aguirre
AL SUR: Con Jorge Luis Páez Sánchez
AL ESTE: Con Fidel Páez Aguirre
AL OESTE: Con camino a las Iguanas

Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá publicarse por una sola vez en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, en el periódico de información local, por una sola vez, así como colocarse en los parajes más cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde y levantamiento topográfico, a fin de que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente Aviso, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis correspondiente en las oficinas que ocupa la Representación Regional Pacífico, con domicilio en avenida Vicente Riva Palacio, esquina con bulevar Emiliano Zapata, colonia Almada, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no ocurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.

Atentamente

Culiacán, Sin., a 8 de mayo de 2000.- El Perito Deslindador, **María Eugenia Cruz Pasos**.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado El Tochito, Municipio de Champotón, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

AVISO DE DESLINDE DE TERRENO DE PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL.

La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Reforma Agraria, mediante oficio número 142959 de fecha 26 de mayo de 2000, expediente sin número autorizó a la Representación Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que comisionara perito deslindador, la cual en oficio número 02478 de fecha 26 de julio de 2000, me ha autorizado para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 160 de la Ley Agraria, 104, 107 y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, proceda a realizar el deslinde y levantamiento topográfico del predio "El Tochito", con una superficie de 427-00-00 hectáreas, presuntamente propiedad nacional, ubicado en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche, el cual cuenta con las siguientes colindancias:

AL NORTE: Con Ejido Nuevo Michoacán
AL SUR: Con empresa Maya Dragón, S.A. de C.V.
AL ESTE: Con predio San Adrián
AL OESTE: Con predio Pénjamo

Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**; en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche, en el periódico de información local "Tribuna", por una sola vez, así como colocarse en los parajes cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde y levantamiento topográfico, a fin de que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a su derecho convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis correspondiente en las oficinas que ocupa la Representación Estatal de la Reforma Agraria, con domicilio en Palacio Federal, Avenida 16 de Septiembre, de la ciudad y Estado de Campeche.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tendrá conformes con sus resultados.

Atentamente

Campeche, Camp., a 27 de julio de 2000.- El Perito Deslindador, **Gabino Ignacio Pue Uribe**.- Rúbrica.

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

ACUERDO número 10/2000, del siete de septiembre de dos mil del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en que se impugne una ley local.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACUERDO NUMERO 10/2000, DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN EL QUE SE DETERMINA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS EN QUE SE IMPUGNE UNA LEY LOCAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que por Decreto de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de treinta y uno de diciembre del mismo año, se introdujeron diversas reformas constitucionales tendientes a consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tribunal Constitucional creándose, incluso, la acción de inconstitucionalidad y regulándose con mayor precisión la controversia constitucional;

SEGUNDO. Que por acuerdo de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de tres de julio del mismo año, se introdujeron reformas en materia política, ampliándose la acción de inconstitucionalidad a las leyes electorales, con la peculiaridad de que, por su especial naturaleza, los asuntos necesariamente deben resolverse dentro de plazos fatales;

TERCERO. Que por Decreto de nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de once de junio del mismo año, se reformó entre otros, el artículo 94 de la Constitución, en cuyo párrafo séptimo, se otorgó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la facultad para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor

prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia;

CUARTO. Que en la exposición de motivos del proyecto de Decreto aludido en el Considerando anterior se reafirmó el propósito de las reformas constitucionales mencionadas en el Considerando Primero de este Acuerdo, de que la Suprema Corte tuviera, con mayor plenitud, el carácter de Tribunal Constitucional. En efecto, en diversas partes de ese documento se manifestó que, con el objeto de fortalecer a la Suprema Corte en su carácter de Tribunal Constitucional, se sometía a la consideración del Poder Reformador de la Constitución la reforma del párrafo sexto del artículo 94 (que pasó a ser séptimo) a fin de ampliar la facultad con que contaba el Pleno para expedir acuerdos generales y, con base en ello, aunque la Suprema Corte continuaría, en principio, conociendo de todos los recursos de revisión que se promuevan en contra de sentencias de los jueces de distrito en que se hubiera analizado la constitucionalidad de normas generales, la propia Corte podría dejar de conocer de aquellos casos en los cuales no sea necesaria la fijación de criterios trascendentes al orden jurídico nacional; y que era imprescindible permitirle -como sucede en otras naciones- concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de los asuntos que comprendan un alto nivel de importancia y transcendencia;

QUINTO. Que en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores, en el que se propuso la aprobación de la iniciativa a que se ha hecho referencia, se recalcaron las motivaciones, expresándose sobre el particular que la iniciativa se encauzaba en el espíritu de la reforma del noventa y cuatro y, en consecuencia, nuevamente buscaba dar a la justicia en México la fortaleza y eficiencia que el país reclama; que entre las reformas que se proponía aprobar destacaba la de otorgar a la Suprema Corte la facultad de expedir acuerdos generales a fin de que algunos de los asuntos que son de su competencia pudieran ser resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; que la propuesta se basaba en la consideración de que era necesario permitirle dedicar sus energías a resoluciones que contribuyan de modo significativo a mejorar nuestros sistemas de impartición de justicia, y que la impresionante cantidad de resoluciones que debía de tomar impedía que éstas fueran oportunas; sobre todo aquéllas cuya importancia y trascendencia ameritan la intervención del máximo órgano jurisdiccional del país;

SEXTO. Que la experiencia obtenida en el despacho de asuntos en el Pleno y en las Salas de la Suprema Corte, de febrero de mil novecientos noventa y cinco a la fecha en que entró en vigor el Decreto mencionado en los tres Considerandos precedentes, y a partir del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, fecha en la que entró en vigor el acuerdo general número 6/1999, en el que se determinó el envío de asuntos a los Tribunales Colegiados, a la actualidad, demuestra que por cuestiones técnicas y formales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en detrimento de su función esencial que es concentrarse en asuntos de constitucionalidad de trascendencia e importancia, ha destinado parte significativa de su tiempo en ocuparse de cuestiones diferentes, lo que evidencia que no se ha logrado la deseable desconcentración de asuntos;

SEPTIMO. Que los asuntos en los que se impugnan leyes locales sólo excepcionalmente trascienden de manera significativa en el orden jurídico nacional y es evidente la conveniencia de que se resuelvan con la mayor cercanía a los justiciables, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, como manda el artículo 17 de la Constitución, por los Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el territorio nacional;

OCTAVO. Que en la actualidad, los Tribunales Colegiados de Circuito tienen sólida experiencia en la resolución de amparos que requieren el estudio de la constitucionalidad de leyes, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, resuelven cotidianamente sobre tales aspectos cuando en las demandas de amparo directo se hacen valer conceptos de violación de constitucionalidad; asimismo, también tienen experiencia para resolver, en revisión, amparos promovidos contra normas generales, pues desde las reformas a la Ley de Amparo que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, han tenido competencia para decidir sobre la constitucionalidad de reglamentos municipales autónomos, y a partir del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, en términos del acuerdo general número 6/1999 del Tribunal Pleno, conocen de la constitucionalidad de todos los reglamentos, sean federales o locales. A tan destacada experiencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de constitucionalidad, debe sumarse la de la Suprema Corte de Justicia que, en dicha materia, a través de los años, ha integrado una compilación abundante de criterios sobre temas de amparo contra leyes que, en su caso, pueden servirles de orientación;

NOVENO. Que la determinación a que se refiere este Acuerdo, de dar competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver los amparos contra leyes locales de su circunscripción, no implica el rompimiento de la competencia de la Suprema Corte de Justicia sobre tales materias, pues cuando estime que alguno de esos asuntos, por sus características especiales, deba ser resuelto por ella, podrá ejercer

su facultad de atracción y, en su caso, también estará en aptitud de conocer y resolver cuestiones relativas a ellos en vías de remisión de amparo directo y contradicción de tesis, de modo que a través de tales procedimientos el más Alto Tribunal continuará ejerciendo su labor de unificar la interpretación constitucional de las leyes;

DECIMO. Que el Consejo de la Judicatura Federal, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 94 de la Constitución, incrementa constante y substancialmente el número de los Tribunales Colegiados de Circuito para enfrentar de inmediato las cargas de trabajo que lo ameriten;

UNDECIMO. Que la remisión de asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte a los Tribunales Colegiados de Circuito, que se ha hecho en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno, demuestra, por una parte, que se ha logrado parcialmente el desahogo pretendido y, por la otra, que la distribución entre los referidos tribunales sólo ha incrementado mínimamente su trabajo, por el equilibrio en el reparto que normalmente se ha producido, lo que ha significado que lo que era carga pesada, por exclusiva, de la Suprema Corte de Justicia, se puede resolver ágilmente por todos los Tribunales Colegiados de Circuito con cercanía a los justiciables.

En consecuencia, con fundamento en la disposición constitucional mencionada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expide el siguiente

ACUERDO:

UNICO. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, si en la demanda de amparo se hubiere impugnado una ley local, conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, a partir de la fecha en que entre en vigor este Acuerdo, sin perjuicio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción para conocer y resolver los casos que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten.

En el trámite, resolución y control de tales asuntos deberá cumplirse con lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario número 1/2000.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO. Los recursos de revisión a que se refiere este Acuerdo interpuestos antes de la entrada en vigor del propio acuerdo, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a los Juzgados de Distrito.

CUARTO. Publíquese este Acuerdo en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Licenciado **José Javier Aguilar Domínguez,** Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CERTIFICA: Que este Acuerdo número 10/2000, en el que se determina competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los asuntos en que se impugne una ley local, fue emitido por el Tribunal Pleno en Sesión Privada celebrada el siete de septiembre de dos mil, por mayoría de diez votos de los señores Ministros Presidente **Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza**.- El señor Ministro **José Vicente Aguinaco Alemán** votó en contra.- México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil.- Conste.- Rúbrica.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ACUERDO General 70/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoprimer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL 70/2000, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMOPRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que por decretos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis y el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

TERCERO.- Que el artículo 17 constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual hace necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en las condiciones físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional invocado; por cuya razón, el Consejo de la Judicatura Federal estima de utilidad el cambio de domicilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoprimer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, debido a que en el nuevo local se mejoraría la situación física en que ese órgano jurisdiccional lleva a cabo sus actividades.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza el cambio de domicilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoprimer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

SEGUNDO.- El nuevo domicilio del órgano jurisdiccional en cita será el ubicado en Avenida Alvarez 78, Colonia Centro, Código Postal 39000, Chilpancingo, Guerrero.

TERCERO.- El órgano jurisdiccional federal de que se trata iniciará sus funciones en su nuevo domicilio a partir del veinticinco de septiembre de dos mil.

CUARTO.- Toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la competencia del órgano jurisdiccional señalado, deberá dirigirse y realizarse en el domicilio precisado.

QUINTO.- El Tribunal Colegiado a que se refiere este Acuerdo, conservará su actual denominación, competencia y jurisdicción territorial.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en el país, así como de las autoridades del Estado de Guerrero, del Procurador General de la República, del Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública y del Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes.

TERCERO.- Publíquese este Acuerdo en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en un diario de circulación en esa entidad federativa, así como en un diario de circulación nacional.

EL LICENCIADO **GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ**, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General 70/2000, relativo al cambio de domicilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimoprimer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de once de septiembre de dos mil, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro **Genaro David Góngora Pimentel**, **Manuel Barquín Alvarez**, **Jaime Manuel Marroquín Zaleta**, **Enrique Sánchez Bringas**, **José Guadalupe Torres Morales** y **Sergio Armando Valls Hernández**.- México, Distrito Federal, a once de septiembre de dos mil.- Conste.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones

Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $9.4250 M.N. (NUEVE PESOS CON CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente

México, D.F., a 19 de septiembre de 2000.

BANCO DE MEXICO

Gerente de Inversiones y Cambios Nacionales	Director de Disposiciones de Banca Central
Ricardo Medina Alvarez	**Héctor Tinoco Jaramillo**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

	TASA BRUTA		**TASA BRUTA**
I. DEPOSITOS A PLAZO FIJO		II. PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
A 60 días		A 28 días	
Personas físicas	7.96	Personas físicas	8.26
Personas morales	7.96	Personas morales	8.26
A 90 días		A 91 días	
Personas físicas	8.50	Personas físicas	8.76
Personas morales	8.50	Personas morales	8.76
A 180 días		A 182 días	
Personas físicas	8.80	Personas físicas	9.21
Personas morales	8.80	Personas morales	9.21

Las tasas a que se refiere esta publicación, corresponden al promedio de las determinadas por las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del día 19 de septiembre de 2000. Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989.

México, D.F., a 19 de septiembre de 2000.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Director de Información del Sistema Financiero
Héctor Tinoco Jaramillo	**Cuauhtémoc Montes Campos**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple, se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de hoy, fue de 17.0700 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: Bancomer S.A., Banca Serfin S.A., Banco Internacional S.A., Banco Nacional de México S.A., Citibank México S.A., Banco Inbursa S.A., Chase Manhattan Bank Mexico S.A., Banco Inverlat S.A. y Bancrecer S.A.

México, D.F., a 19 de septiembre de 2000.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Mercado de Valores
Héctor Tinoco Jaramillo	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

ADICION a la convocatoria a las instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto limitado con registro en el FOVI, a participar en las asignaciones de recursos para otorgar créditos para vivienda.

Al margen un logotipo, que dice Banco de México.- Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda.

BANCO DE MEXICO FIDUCIARIO DEL FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA.

ADICION A LA CONVOCATORIA A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO CON REGISTRO EN EL FOVI, A PARTICIPAR EN LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS PARA OTORGAR CREDITOS PARA VIVIENDA.

El 14 de mayo de 1999, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, la convocatoria a las instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto limitado con registro en el FOVI, a participar en las asignaciones de recursos para otorgar créditos para vivienda, a la que ahora se adiciona el municipio que en seguida se indica, por lo que se modifica el punto IV. UBICACION DE LOS PROYECTOS, para quedar en los términos siguientes:

IV. UBICACION DE LOS PROYECTOS:

ESTADO	MUNICIPIO	CLAVE DE MUNICIPIO
... 32	... Ojocaliente ...	... 32036 ...

México, D.F., a 18 de septiembre de 2000.

BANCO DE MEXICO

FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA

Director General	Subdirector Técnico
Manuel Zepeda Payeras	**Rolando González Flores**
Rúbrica.	Rúbrica.

INFORMACION semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 15 de septiembre de 2000.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 41 del Reglamento Interior del Banco de México, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 16 de marzo de 1995, se proporciona la:

INFORMACION SEMANAL RESUMIDA SOBRE LOS PRINCIPALES RENGLONES DEL ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000.

(Cifras preliminares en millones de pesos)

ACTIVO	
Reserva Internacional 1/	286,741
Crédito al Gobierno Federal	0
Valores Gubernamentales 2/	0
Crédito a Intermediarios Financieros y Deudores por Reporto 3/	75,857
Crédito a Organismos Públicos 4/	67,905
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Fondo Monetario Internacional	0
Base Monetaria	161,624
Billetes y Monedas en Circulación	161,528
Depósitos Bancarios en Cuenta Corriente 5/	96
Bonos de Regulación Monetaria	7,030
Depósitos en Cuenta Corriente del Gobierno Federal	85,626
Depósitos de Regulación Monetaria	146,612
Otros Pasivos y Capital Contable 6/	29,611

1/ Según se define en el Artículo 19 de la Ley del Banco de México.

2/ Neto de depósitos de regulación monetaria.- No se consideran los valores afectos a la reserva para cubrir obligaciones de carácter laboral.- En caso de saldo neto acreedor, éste se presenta en el rubro de Depósitos de Regulación Monetaria.
3/ Incluye banca comercial, banca de desarrollo, fideicomisos de fomento y operaciones de reporto con casas de bolsa.
4/ Créditos asumidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
5/ Se consigna el saldo neto acreedor del conjunto de dichas cuentas, en caso de saldo neto deudor éste se incluye en el rubro de Crédito a Intermediarios Financieros y Deudores por Reporto.
6/ Neto de otros activos.

México, D.F., a 19 de septiembre de 2000.
BANCO DE MEXICO
Director de Contabilidad
Gerardo Zúñiga Villarce
Rúbrica.

AVISOS
JUDICIALES Y GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal
EDICTO
Medicina Integral Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable.
En los autos del Juicio de Amparo número 1233/99, promovido por Leonardo Omar Lanzilotta, contra actos de la Junta Especial número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, se ha señalado a usted como tercero perjudicado y como se desconoce su domicilio actual, se ha ordenado por auto de nueve de agosto del año en curso emplazarlo por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico Excélsior, que resultan ser de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo anterior, se encuentra a su disposición en la actuaría de este Juzgado, copia simple de la demanda de garantías, haciéndole saber que cuenta con un plazo de treinta días, contado a partir de la última publicación de tales edictos, para apersonarse en el Juicio de Referencia, y haga valer sus derechos; así también, se le informa que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se harán por medio de la lista en la que se publican los acuerdos emitidos en los juicios de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, según lo dispone el artículo 30 de la Ley de Amparo; y que se fijaron las trece horas del veintiuno de agosto del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional.
Atentamente
México, D.F., a 18 de agosto de 2000.
La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal
Lic. María de Lourdes Galicia Peña
Rúbrica.
(R.- 132126)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Primero de lo Concursal
Secretaría A
Expediente 71/95
EDICTO
El ciudadano Juez Primero de lo Concursal de esta capital hace saber que el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, dictó sentencia declarando en estado de suspensión de pagos a Abastecedora D'Europe Muebles, S.A. de C.V., expediente 71/95. Citando a los presuntos acreedores para

que presenten sus créditos a examen dentro del término de cuarenta y cinco días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación de esta sentencia. Designándose como síndico provisional al licenciado Emilio Aarún Porras.
Para su publicación por tres veces consecutivas, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Financiero.
México, D.F., a 6 de septiembre de 2000.
El C. Secretario de Acuerdos
Lic. José Angel Cano Gómez
Rúbrica.
(R.- 132817)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial
Estado de Chihuahua
Juzgado Séptimo de lo Civil
Distrito Judicial Bravos
Ciudad Juárez, Chih.
EDICTO
El licenciado Jaime Antonio Juárez Villarreal, Magistrado de la Quinta Sala de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en el expediente 1183/93, revocó la resolución de fecha 15 de julio de 1993, en la que se decretó la Suspensión de Pagos de la empresa Empacadora de Frutas y Néctares Rancho Verde, S.A. de C.V., emitida por este Tribunal y dictó el catorce de diciembre de 1999 resolución, declarando la quiebra de la empresa mencionada, ordenando mandar citar a los acreedores, para que dentro del término de cuarenta y cinco días presenten sus créditos, reservándose fecha para la junta de reconocimiento, rectificación y graduación de créditos. Fue designado como síndico de la quiebra a la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias o, en su defecto, a la institución de crédito que designe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo que se hace del conocimiento de los acreedores para que presenten sus créditos en el término antes señalado que contará a partir del día siguiente al de la última publicación de este edicto.
Para su publicación por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación**, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Chihuahua, Chih., en Ciudad Juárez, Chih., así como en Nuevo Casas Grandes, Chih.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Juárez, Chih., a 4 de agosto de 2000.
El C. Secretario del Juzgado Séptimo de lo Civil
Lic. Iván Erives Burgos
Rúbrica.
(R.- 133104)
Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección Regional Sur
Delegación Estatal en Puebla
Subdelegación Metropolitana Sur
Departamento de Cobranza
Asesoría Jurídica
EDICTO
C. Representante legal de Constructora e Inmobiliaria Claudia, S.A. de C.V.
Asunto: Notificación.
De conformidad con lo establecido por los artículos 134 fracción IV y 140 del Código Fiscal de la Federación, en vía de notificación y a través de este conducto por desconocerse su domicilio actual, en relación con el diverso 175 del mismo ordenamiento legal, se hace de su conocimiento el avalúo contenido dentro de la comunicación del avalúo, de fecha 14 de agosto del año 2000, signado por el suscrito, en mi carácter de Jefe de la Oficina para Cobros PUE-2202 de la Subdelegación Metropolitana Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se anexan 25 páginas en las que se describe el avalúo número PU1148/2000, de fecha 26 de julio del año 2000, practicado por el Banco de Crédito Rural del Centro Sur, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en términos de las facultades conferidas por los artículos 277 y 291 de la Ley del Seguro Social y 175 del Código Fiscal Federal.
Comunicación de Avalúo de Bienes Embargados, que a la persona moral denominada Constructora e Inmobiliaria Claudia, S.A. de C.V., patrón registrado ante este instituto con los registros patronales E06 35215 10 y E06 35215 19, con domicilio fiscal en 11 poniente número 1314-103, Centro, de esta ciudad, que con fecha 11 de junio de 1996, se practicó embargo sobre un bien de su propiedad por el adeudo de $330,731.60 (trescientos treinta mil setecientos treinta y un pesos 60/100 M.N.), más actualización y

recargos moratorios generados y los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo, por los créditos números, 939019306, 959013392, 959013394, 949504825, 949506081, 949506083, 959500883, 959500884, 959500885, 959502205, 959013491, 959014137, 959503409, 959503410, 959504585, 959504586, 959505659, 959505660, 931103089, 951006158, 951025413, 951044529 y 951063510 de los bimestres 01/93, 05/93, 01/94, 03/94, 04/94, 04/94, 05/94, 05/94, 05/94, 06/94, 01/95, 01/95, 01/95, 01/95, 02/95, 02/95, 03/95, 03/95, 06/93, 01/95, 02/95, 03/95 y 04/95, respectivamente, y ante la omisión de acudir a esta oficina para cobros a fijar la base de la enajenación del mismo, se procedió a solicitar el avalúo pericial del bien que a continuación se detalla: predio con construcción de uso habitacional en obra negra con superficie de 3,224.95 metros cuadrados situado en Calle 23 Poniente número 1310, localizándose al poniente por la Calle 15 Sur, al oriente por la Calle 13 Sur, al norte por la Calle 21 Poniente que también es frente del bien inmueble con las siguientes características proporcionadas por el Registro Público de la Propiedad, denominándose al predio como fusión de la casa 1309, de la avenida 21 Poniente y fracción de los lotes 3 y 4 formando un solo predio, marcado con los números 13012 y 1314 de la avenida 23 Poniente de esta ciudad, según datos de escritura del predio 5289, volumen 249, instrumento 16820 a fojas 444-468, tomo 9123, libro quinto de la notaría 12 de fecha 13 de diciembre de 1993, con las siguientes medidas y colindancias al norte: 32.517 metros con avenida 21 Poniente, al sur: 49.124 metros con avenida 23 Poniente, al oriente: 83.144 metros con casa número 1308 y avenida 23 Poniente y al poniente en tres tramos el primero en 18.752 metros con la casa 1316 de la 23 Poniente, el segundo de oriente a Poniente en 9.858 metros con casa 1312 de la avenida 23 Poniente y el tercero en 66.811 metros con casa 1316 de la avenida 23 Poniente. mismo que fue valuado en $5'353,357.00 (cinco millones trescientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, le comunico que esta oficina exactora convocará a remate en primera almoneda el bien antes descrito, en las dos terceras partes del avalúo practicado, de conformidad con lo establecido por los artículos 173, 174, 175 y 179 del Código Fiscal Federal.

Que una vez transcurrido el plazo que establece el artículo 175 del citado código, esta oficina ejecutora procederá a convocar el remate en primera almoneda del bien embargado, de conformidad a los artículos 173 y 176 del ordenamiento antes señalado.

Se ordena la publicación de este edicto durante tres días consecutivos en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico de mayor circulación en la República Mexicana, teniendo como fecha de notificación para todos los efectos legales, el de la última publicación.

Por último, se le informa que queda a su disposición en la Oficina para Cobros PUE-2202 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la 25 Poniente número 3316, colonia Los Angeles, de esta ciudad, comunicación de avalúo de bienes embargados, de fecha 14 de agosto del presente año, en el que se anexa avalúo que consta de 25 fojas útiles.

Puebla de Zaragoza, Pue., a 23 de agosto de 2000.

El Jefe de la Oficina para Cobros PUE-2202

C. Jorge de Jesús Valdés Juárez

Rúbrica.

(R.- 133136)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito
en Materia Civil en el Estado de Jalisco
EDICTO

Fernando Díaz Armenta.

En cumplimiento al auto de fecha veintinueve de agosto del año dos mil, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el Juicio de Amparo número 511/2000, promovido por Enrique Varela Vázquez, contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad, Titular y Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Octavo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado y Titular y Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil de Chapala, Jalisco, se le tuvo como tercero perjudicado y en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordenó emplazar por medio de los presentes edictos, a este Juicio, para que si a sus intereses conviniere se apersone al mismo, entendiéndose que debe presentarse en el local de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, sito en el número mil doscientos noventa y ocho de la calle Filadelfia, torre Country Américas, colonia Circunvalación Américas en esta ciudad, dentro del término de treinta días, contado a partir del siguiente al de la última publicación de este edicto, y deberá señalar domicilio para recibir notificaciones, caso contrario, éstas le serán realizadas por lista, que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia simple de la demanda.

Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, se expide el presente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil.- Doy fe.

La Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco

Lic. Rocío del Socorro Rodríguez Urzúa

Rúbrica.

(R.- 133166)

LA PENINSULAR SEGUROS, S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

(cifras en pesos constantes)

100	**Activo**					
110	Inversiones		88,399,651.25			
111	Valores	71,221,685.03				
112	Gubernamentales	39,573,835.23				
113	Empresas privadas	32,724,557.56				
114	Tasa conocida	22,472,469.77				
115	Renta variable	10,252,087.79				
116	Valuación neta	(1,306,657.50)				
117	Deudores por intereses	229,949.74				
118	(-) Estimación para castigos	0.00				
119	Préstamos	0.00				
120	Sobre pólizas	0.00				
121	Con garantía	0.00				
122	Quirografarios	0.00				
123	Descuentos y redescuentos		0.00			
124	Cartera vencida	0.00				
125	Deudores por intereses	0.00				
126	(-) Estimación para castigos	0.00				
127	Inmobiliarias	17,177,966.22				
128	Inmuebles	10,184,638.66				
129	Valuación neta	7,772,689.07				
130	(-) Depreciación	779,361.51				
131	Inversiones para obligaciones laborales al Ret.					3,706,998.57
	Circulante					
132	Disponibilidad		6,523,075.71			
133	Caja y bancos	6,523,075.71				
134	Deudores		34,850,406.07			
135	Por primas	32,412,326.01				
136	Agentes y ajustadores	136,872.05				
137	Documentos por cobrar	413,136.02				
138	Deudores por responsabilidad de fianzas por reclamaciones Pa.					0.00
139	Préstamos al personal	974,886.03				
140	Otros	913,185.96				
141	(-) Estimación para castigos	0.00				
142	Reaseguradores y reafianzadores			28,510,802.85		
143	Instituciones de seguros y fianzas	13,543,272.36				
144	Depósitos retenidos	51,178.91				
145	Participación de reaseguradores por siniestros pendientes				8,626,828.74	
146	Participación de reaseguradores por riesgos en curso				6,289,522.84	
147	Otras participaciones	0.00				
148	Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento			0.00		
150	Otros activos		6,113,718.16			
151	Mobiliario y equipo	3,681,317.64				
152	Activos adjudicados	0.00				
153	Diversos	1,437,772.18				
154	Gastos amortizables	994,628.34				
155	(-) Amortización	0.00				
	Suma el activo		168,104,652.61			
200	**Pasivo**					
210	Reservas técnicas			83,323,517.13		

211	De riesgos en curso	30,363,185.62				
212	Vida	3,982,110.00				
213	Accidentes y enfermedades y daños	26,381,075.62				
214	Fianzas en vigor	0.00				
215	De obligaciones contractuales	37,629,533.01				
216	Por siniestros y vencimientos	24,429,926.23				
217	Por siniestros ocurridos y no reportados	5,612,000.00				
218	Por dividendos sobre pólizas	3,887,914.00				
219	Fondos de seguros en administración	3,468,350.00				
220	Por primas en depósito	231,342.78				
221	De previsión	15,330,798.50				
222	Previsión	9,035,161.62				
223	Riesgos catastróficos	6,295,636.88				
224	Contingencia	0.00				
225	Especiales	0.00				
226	Reservas para obligaciones laborales al retiro				3,706,998.57	
227	Acreedores	5,227,823.67				
228	Agentes y ajustadores	4,740,170.60				
229	Fondos en administración de pérdidas	0.00				
230	Acreedores por responsabilidades de fianzas	0.00				
231	Diversos	487,653.07				
232	Reaseguradores y reafianzadores		5,072,122.50			
233	Instituciones de seguros y fianzas	3,008,372.90				
234	Depósitos retenidos	2,063,749.60				
235	Otras participaciones	0.00				
236	Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento	0.00				
237	Otros pasivos	7,481,455.13				
238	Provisiones para la Participación de Utilidades al Personal			1,000,000.00		
239	Provisiones para el pago de impuestos	0.00				
240	Otras obligaciones	4,928,603.56				
241	Créditos diferidos	1,552,851.57				
	Suma el pasivo	104,811,917.00				
300	**Capital**					
310	Capital o fondo social pagado		140,708,214.52			
311	Capital o fondo social	140,708,214.52				
312	(-) Capital o fondo no suscrito	0.00				
313	(-) Capital o fondo no exhibido	0.00				
314	(-) Acciones propias recompradas	0.00				
315	Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital					0.00
316	Reservas	6,561,513.25				
317	Legal	6,561,513.25				
318	Para adquisición de acciones propias	0.00				
319	Otras	0.00				
320	Superávit por valuación de inmuebles			0.00		
321	Subsidiarias	0.00				
322	Resultados de ejercicios anteriores		(58,265,120.53)			
323	Resultado del ejercicio	2,865,597.23				
324	Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable				(28,577,468.86)	
	Suma el capital	63,292,735.61				
	Suma el pasivo y capital	168,104,652.61				
	Cuentas de orden					
880	Pérdida fiscal por amortizar	70,949,301.29				
910	Cuentas de registro	8,359,227.36				

El presente balance general se formuló de acuerdo con los principios establecidos por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros en su artículo 99 y las normas dictadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con base en los artículos 100, 101 y 105 de la propia ley y 21 de su reglamento interior, de aplicación general y observancia obligatoria de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas y a las normas legales y administrativas aplicables y al catálogo oficial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización

del día. Tanto el propio estado, como los resultados del ejercicio reflejados en el mismo, fueron aprobados por el Consejo de Administración, autorizando su publicación para efecto de lo dispuesto en el artículo 105 de la ley, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

El capital pagado incluye la cantidad de $1,074,250.00 moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por revaluación de inmuebles.

* Nuestros auditores para efectos de información financiera son: Enrique López Novelo, S.C. y C.P. Fernando López Díaz.

** Nuestros auditores para efectos de reservas técnicas son: Despacho de Actuarios y Consultores, TBA, S.C. y Act. Rafael Trava Bolio.

Director General

C.P. Manuel R. Castellanos Reyes

Rúbrica.

Comisario

C.P. Miguel Castro Aznar

Rúbrica.

Contador

C.P. Tomás A. García Pérez

Rúbrica.

Este balance fue revisado con base en la documentación y elementos aportados por la sociedad, en los términos del artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. La autenticidad y veracidad de sus cifras queda bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Según oficio número 06-367-III-2.1/12625 del 23 de agosto de 2000.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Presidente

Lic. Manuel Aguilera Verduzco

Rúbrica.

(R.- 133171)

FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

AVISO A LOS TENEDORES DE BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO

FINASA 2-99

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula séptima del Acta de Emisión, hacemos de su conocimiento que la tasa anual de interés bruto que devengarán los Bonos Bancarios de Desarrollo de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., FINASA 2-99, por el vigésimo primer periodo comprendido del 14 de septiembre al 12 de octubre de 2000, será de 16.11% sobre el saldo insoluto de los bonos en circulación.

Asimismo, comunicamos que a partir del día 14 de septiembre de 2000, en el domicilio de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, México, Distrito Federal, se pagarán los intereses correspondientes al vigésimo periodo, comprendido del 17 de agosto al 14 de septiembre de 2000.

México, D.F., a 13 de septiembre de 2000.

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Rúbrica.

(R.- 133173)

FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

AVISO A LOS TENEDORES DE BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO

FINASA 2-95

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula décima del Acta de Emisión, hacemos de su conocimiento que la tasa anual de interés bruto que devengarán los Bonos Bancarios de Desarrollo de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., FINASA 2-95, por el sexagésimo quinto periodo, comprendido del 14 de septiembre al 12 de octubre de 2000, será de 16.60% sobre el saldo insoluto de los bonos en circulación.

Asimismo, comunicamos que a partir del día 14 de septiembre de 2000, en el domicilio de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, México, Distrito Federal, se pagarán los intereses correspondientes al sexagésimo cuarto periodo, comprendido del 17 de agosto al 14 de septiembre de 2000, contra la entrega del cupón número 64.

México, D.F., a 12 de septiembre de 2000.

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo
Rúbrica.

(R.- 133174)

FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
AVISO A LOS TENEDORES DE BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
FINASA 5-99

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula octava del Acta de Emisión, hacemos de su conocimiento que la tasa anual de interés bruto que devengarán los Bonos Bancarios de Desarrollo de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., FINASA 5-99, por el décimo quinto periodo, comprendido del 14 de septiembre al 12 de octubre de 2000, será de 16.02% sobre el saldo insoluto de los bonos en circulación.
Asimismo, comunicamos que a partir del 14 de septiembre de 2000, en el domicilio de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, México, Distrito Federal, se pagarán los intereses correspondientes al décimo cuarto periodo, comprendido del 17 de agosto al 14 de septiembre de 2000.

México, D.F., a 12 de septiembre de 2000.
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Rúbrica.

(R.- 133175)

SERVICIOS IRAN DE MENSAJERIA Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE LIQUIDACION AL 31 DE AGOSTO DE 2000

Caja	38,330.84	
Bancos	55,261.00	
Total de activo	93,591.84	
Acreedores diversos	34,405.84	
Capital	50,000.00	
Utilidad de ejercicios anteriores	20,606.65	
Pérdida del ejercicio	(11,420.65)	
	93,591.84	

México, D.F., a 31 de agosto de 2000.
Liquidador
C.P. Francisco J. Calero Fuentes
Rúbrica.

(R.- 133179)

PLAN SEGURO, S.A. DE C.V.

COMPAÑIA DE SEGUROS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(cifras en pesos constantes)

100	**Activo**			
110	Inversiones		10,849,354.52	
111	Valores	10,849,354.52		
112	Gubernamentales		10,849,354.52	
113	Empresas privadas		0.00	
114	Tasa conocida	0.00		
115	Renta variable	0.00		
116	Valuación neta	0.00		
117	Deudores por intereses		0.00	
118	(-) Estimación para castigos		0.00	
119	Préstamos	0.00		
120	Sobre pólizas	0.00		
121	Con garantía	0.00		
122	Quirografarios	0.00		
123	Descuentos y redescuentos			0.00
124	Cartera vencida	0.00		
125	Deudores por intereses		0.00	
126	(-) Estimación para castigos		0.00	
127	Inmobiliarias	0.00		
128	Inmuebles	0.00		
129	Valuación neta	0.00		

130	(-) Depreciación	0.00				
131	Inversiones para obligaciones laborales al retiro					0.00
132	Disponibilidad		331,274.82			
133	Caja y bancos	331,274.82				
134	Deudores		28,948,643.71			
135	Por primas	22,118,675.86				
136	Agentes y ajustadores		0.00			
137	Documentos por cobrar		0.00			
138	Deudores por Resp. de fianzas por Recl. P.			0.00		
139	Préstamos al personal		0.00			
140	Otros	6,829,967.85				
141	(-) Estimación para castigos		0.00			
142	Reaseguradores y reafianzadores			0.00		
143	Instituciones de seguros y fianzas		0.00			
144	Depósitos retenidos		0.00			
145	Participación de Reaseg. por siniestros Pen.				0.00	
146	Participación de Reaseg. por riesgos en C.			0.00		
147	Otras participaciones		0.00			
148	Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento				0.00	
149	Particip. de Reaf. en la Rva. de fianzas en Vi.				0.00	
150	Otros activos		2,047,488.40			
151	Mobiliario y equipo		1,798,874.80			
152	Activos adjudicados		0.00			
153	Diversos	677,403.89				
154	Gastos amortizables		184,153.02			
155	(-) Amortización	-612,943.31				
	Suma del activo		42,176,761.45			
200	**Pasivo**					
210	Reservas técnicas			26,929,385.91		
211	De riesgos en curso		21,549,453.35			
212	Vida	-				
213	Accidentes y enfermedades y daños			21,549,453.35		
214	Fianzas en vigor	0.00				
215	De obligaciones contractuales			2,927,077.19		
216	Por siniestros y vencimientos			1,107,446.44		
217	Por siniestros ocurridos y no reportados			1,001,597.80		
218	Por dividendos sobre pólizas			-		
219	Fondos de seguros en administración			-		
220	Por primas en depósitos		818,032.95			
221	De previsión	2,452,855.37				
222	Previsión	2,452,855.37				
223	Riesgos catastróficos		-			
224	Contingencia	0.00				
225	Especiales	0.00				
226	Reservas para obligaciones laborales al retiro					53,050.00
227	Acreedores		4,998,977.47			
228	Agentes y ajustadores		2,377,006.07			
229	Fondos en administración de pérdidas			0.00		
230	Acreedores por responsabilidades de fianzas				0.00	
231	Diversos	2,621,971.40				
232	Reaseguradores y reafianzadores			-		
233	Instituciones de seguros y fianzas		-			
234	Depósitos retenidos		-			
235	Otras participaciones		0.00			
236	Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento				0.00	
237	Otros pasivos		5,101,413.29			
238	Provisión p/Part. de Utilidades al Personal			-		
239	Provisión para el pago de impuestos			0.00		
240	Otras obligaciones		3,474,765.34			
241	Créditos diferidos		1,626,647.95			

	Suma del pasivo		37,082,826.67			
300	**Capital**					
310	Capital o fondo social pagado			22,431,630.85		
311	Capital o fondo social		22,431,630.85			
312	(-) Capital o fondo no suscrito		0.00			
313	(-) Capital o fondo no exhibido		0.00			
314	(-) Acciones propias recompradas			0.00		
315	Oblig. subordinadas de Conv. obligatoria a capital					
316	Reservas					
317	Legal	-				
318	Para adquisición de acciones propias			0.00		
319	Otras	0.00				
320	Superávit por valuación de inmuebles				-	
321	Subsidiarias		0.00			
322	Resultados de ejercicios anteriores			(6,153,863.75)		
323	Resultado del ejercicio			(8,817,924.56)		
324	Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable					(2,365,907.76)
	Suma del capital		5,093,934.78			
	Suma del pasivo y capital			42,176,761.45		
800	Orden	40,210,499.76				
810	Valores en depósito		0.00			
820	Fondos en administración		0.00			
830	Responsabilidades por fianzas en vigor			0.00		
840	Garantías de recuperación por fianzas expedidas				0.00	
850	Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación					0.00
860	Reclamaciones pagadas		0.00			
870	Recuperación de reclamaciones pagadas			0.00		
880	Pérdida fiscal por amortizar			-		
890	Reserva por constituir para obligaciones laborales al retiro					0.00
900	Margen de solvencia		-			
910	Cuentas de registro		40,210,499.76			

El presente balance general se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las normas legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera conforme a las disposiciones emitidas por dicha Comisión.

El capital pagado incluye la cantidad de $0.00 moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

Dentro de los rubros de Inmuebles y de Mobiliario y Equipo, la(s) cantidad(es) de $0.00 y $0.00, respectivamente, representa(n) activos adquiridos en arrendamiento financiero.

Manifestamos que auditaron los estados financieros y reservas técnicas PricewatherhouseCoopers y el actuario Miguel Barber Bravo, respectivamente.

Este balance fue revisado con base en la documentación y elementos aportados por la sociedad en los términos del artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Sociedades.

La autenticidad y veracidad de sus cifras queda bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Director General

Act. M. Salvador Arceo Franco

Rúbrica.

Comisario

C.P. Manuel Sánchez y Madrid

Rúbrica.

Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Marcela Alcántara Gutiérrez

Rúbrica.

Autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con oficio número 735(S-169) "99"/1 06-367-III-2.1/7999 de fecha 23 de agosto de 2000.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Presidente

Lic. Manuel Aguilera Verduzco
Rúbrica.
(R.- 133185)
COPPEL, S.A. DE C.V.
AVISO A LOS TENEDORES DE LAS OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS DENOMINADAS
EN UNIDADES DE INVERSION (UDIS)
(ALMACO) 99U
En cumplimiento a lo establecido en el Acta de Emisión de las Obligaciones Quirografarias de Coppel, S.A. de C.V. (ALMACO 99U), y de conformidad con las reformas fiscales publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 31 de diciembre de 1999, por este conducto nos permitimos informarles lo siguiente:
Cupón No.: 5
Periodo del: 16 de junio de 2000
Al: 15 de septiembre de 2000
Fecha de pago: 15 de septiembre de 2000
UDI vigente a la fecha de pago: $2.830796
Intereses a pagar: $5'956,844.53
El lugar de pago será en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 255, piso 3, colonia Cuauhtémoc, 06500, México, Distrito Federal.
México, D.F., a 13 de septiembre de 2000.
Representante Común de los Tenedores
CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
CBI Grupo Financiero
Rúbrica.
(R.- 133186)
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
AVISO A LOS TENEDORES DE BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
(BANOBRA 93-1)
En cumplimiento a lo establecido en la emisión de Bonos Bancarios de Desarrollo (BANOBRA 93-1), hacemos de su conocimiento que el día 14 de septiembre de 2000, se amortizará la emisión con valor nominal total de $500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, les comunicamos que en esa fecha se pagarán intereses correspondientes al nonagésimo primer periodo de 28 días, por un importe total de $6'845,611.11 determinado sobre el valor nominal de $500'000,000.00 a razón de una tasa bruta anual de 17.6030%.
Al respecto, les informamos que el pago correspondiente se efectuará a partir del 14 de septiembre de 2000 en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Distrito Federal.
México, D.F., a 12 de septiembre de 2000.
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Rúbrica.
(R.- 133187)
GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A. DE C.V.
AVISO A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
GFNORTE 97
En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas séptima y octava del Acta de Emisión, hacemos de su conocimiento que la tasa anual de interés bruto que devengarán las Obligaciones Subordinadas convertibles forzosamente en títulos representativos de capital social serie O de Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V., con clave de emisión GFNORTE 97, por el periodo trigésimo séptimo de 28 días, comprendido del 14 de septiembre al 12 de octubre de 2000, será de 18.44% sobre el valor nominal de las mismas.
Asimismo, comunicamos que a partir del día 14 de septiembre de 2000, en el domicilio de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicado en Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, México, Distrito Federal, se pagarán los intereses con un importe total de $6'287,166.67 sobre el valor nominal de $425'000,000.00, correspondientes al periodo trigésimo sexto de 28 días, comprendido del 17 de agosto al 14 de septiembre de 2000 a razón de una tasa anual de interés bruto de 19.02%, contra la entrega del cupón número 36.

Monterrey, N.L., a 11 de septiembre de 2000.
Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V.
Rúbrica.
(R.- 133188)
GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.
AVISO DE FUSION
Por resoluciones de las asambleas generales extraordinarias de accionistas de Grupo Escato, S.A. de C.V. y de Monta G de Exposiciones, S.A. de C.V., ambas celebradas el día 6 de junio de 2000, dichas sociedades acordaron fusionarse, subsistiendo la primera como sociedad fusionante y extinguiéndose la segunda como sociedad fusionada. En dichas asambleas se adoptaron, entre otras, las siguientes:
RESOLUCIONES
I. Se aprobó la fusión de Monta G de Exposiciones, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, con Grupo Escato, S.A. de C.V., como sociedad fusionante.
II. La fusión de dichas empresas se realizó con base en los estados financieros de las sociedades fusionante y fusionada, ambos al 31 de mayo de 2000.
III. La fusión de tales sociedades surtió sus efectos entre las partes a partir del 1 de julio de 2000.
IV. En términos del artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el momento de celebración de las respectivas asambleas de accionistas de ambas sociedades, se hizo constar que ya se ha obtenido el consentimiento de todos los acreedores de la sociedad fusionada para llevar a cabo la fusión. En consecuencia, dicha fusión surtirá sus efectos frente a terceros al momento de efectuarse la inscripción del acuerdo de fusión en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal.
V. Como consecuencia de la fusión, la totalidad de los bienes, derechos, valores y, en general, todos los activos al igual que todos los pasivos de la sociedad, sea cual fuere su naturaleza, pasarán íntegramente a Grupo Escato, S.A. de C.V., como sociedad fusionante, en los términos del artículo 224 último párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
VI. Igualmente, como consecuencia de la fusión, Grupo Escato, S.A. de C.V. aumentó su capital social mínimo fijo sin derecho a retiro en la suma $201,400.00 M.N. (doscientos un mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), para quedar en la suma de $1'006,400.00 M.N. (un millón seis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), representado por 1'006,400 acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1.00 M.N. (un peso 00/100 moneda nacional), íntegramente suscritas y pagadas.
VII. La publicación del presente aviso de fusión y de los balances de las sociedades fusionante y fusionada al 31 de mayo de 2000, que se hace a continuación, se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
México, D.F., a 3 de julio de 2000.
Delegado Especial de la Sociedad Fusionante
Lic. Gabriel Gadsden Carrasco
Rúbrica.
Delegado Especial de la Sociedad Fusionada
Gustavo Alejandro Shepard Bonequi
Rúbrica.
GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2000
(a pesos de poder adquisitivo de mayo de 2000)
Activo

Circulante		
Efectivo	160,280	
Clientes	2,011,905	
Deudores diversos	646,563	
Inventarios	2,971,239	
Pagos anticipados	35,011	
Total activo circulante		5,824,998
Fijo		
Maquinaria y equipo, neto	142,532	
Equipo de transporte, neto	890,608	
Mobiliario y equipo, neto	714,802	
Equipo de cómputo, neto	206,611	
Otros activos	18,000	
Total de activo fijo		1,972,553
Diferido		

Mejoras a locales arrendados		754,356
Gastos de organización, neto		11,016
Total de activo diferido		765,372
Total de activo		8,562,923
Pasivo		
Circulante		
Proveedores	1,092,979	
Acreedores diversos	5,008,658	
Impuestos por pagar	236,909	
Total de pasivo circulante	6,338,546	
Inversión de los accionistas		
Capital social	905,238	
Reserva legal	187,636	
Resultado de ejercicios anteriores	601,899	
Insuficiencia en la inversión de accionistas	-221,891	
Total de capital contable	1,472,882	
Utilidad del ejercicio	751,495	
Total de capital	2,224,377	
Total de pasivo y capital	8,562,923	

Director General

Lic. Gabriel Gadsden Carrasco

Rúbrica.

MONTA G DE EXPOSICIONES, S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2000

(a pesos de poder adquisitivo de mayo de 2000)

Activo		
Circulante		
Clientes	1,147,935	
Deudores diversos	163,950	
Inventarios	1,234,383	
Pagos anticipados	6,106	
Total activo circulante	2,552,374	
Fijo		
Maquinaria y equipo, neto	119,913	
Equipo de transporte, neto		594,647
Mobiliario y equipo, neto	181,725	
Equipo de cómputo, neto	79,608	
Otros activos	190,619	
Total de activo fijo	1,166,511	
Diferido		
Depósitos en garantía	78,477	
Gastos de organización, neto		8,111
Total de activo diferido		86,588
Total de activo		3,805,473
Pasivo		
Circulante		
Proveedores	720,440	
Acreedores diversos	2,261,311	
Impuestos por pagar	73,164	
Total de pasivo circulante	3,054,915	
Inversión de los accionistas		
Capital social	184,871	
Reserva legal	151,250	
Resultado de ejercicios anteriores	359,811	
Exceso en la inversión de accionistas		43,226
Total de capital contable	739,159	
Utilidad del ejercicio	11,399	
Total de capital	750,558	
Total de pasivo y capital	3,805,473	

Director Comercial

Lic. Gustavo Alejandro Shepard Bonequi
Rúbrica.
(R.- 133189)
PARGO, S.A. DE C.V.
AVISO A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CON GARANTIA COLATERAL (PARGO) 1993
En cumplimiento a lo establecido en el clausulado del Acta de Emisión correspondiente, hacemos de su conocimiento lo siguiente:
Que a partir del 14 de septiembre del año en curso se pagarán los intereses correspondientes al periodo comprendido del 14 de junio al 14 de septiembre de 2000, en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Distrito Federal, a razón de una tasa anual bruta de 21.68%, sobre el valor nominal de las obligaciones, contra la entrega del cupón número 28 de las mismas.
Asimismo, se les informa que a partir del día 14 de septiembre del año en curso se cubrirá la amortización correspondiente a la serie VIII de las obligaciones, con valor nominal de $2'375,000.00; el pago se efectuará en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Distrito Federal, contra la entrega del propio título por corresponder a la 8a. y última amortización.
México, D.F., a 11 de septiembre de 2000.
Representante Común de los Obligacionistas
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte*
*Empresa Cotizada en Bolsa
Rúbrica.
(R.- 133190)
AMERICANA DE FIANZAS, S.A.
EN LIQUIDACION
AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO
Se hace del conocimiento a los acreedores, proveedores y público en general que, a partir del lunes 2 de octubre de 2000, nuestra dirección, a la cual deberán acudir para cualquier asunto relacionado con esta sociedad será: calle Rousseau número 14, despachos 703 y 704, colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11590, México, Distrito Federal.
México, D.F., a 19 de septiembre de 2000.
Liquidador
C.P. Fernando Pérez Simón
Rúbrica.
(R.- 133191)
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
AVISO
A LOS TENEDORES DE LAS
OBLIGACIONES CON GARANTIA FIDUCIARIA
Y SOLIDARIA
(IASASA) 92
En relación a la emisión de las Obligaciones con Garantía Fiduciaria y Solidaria de Industria Automotriz, S.A. de C.V. (IASASA) 92, por medio de la presente hacemos de su conocimiento que la tasa de interés bruta y tasa de interés neta, por el periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2000, es de 20.1476% y de 18.3476%, respectivamente, calculada con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días equivalente a 91 días (16.8476) más 1.5 (uno punto cinco), aplicando el impuesto.
Asimismo, se informa de la tasa de interés trimestral del cupón número 11, por el periodo que comprende del 17 de junio al 16 de septiembre de 2000, fue de 20.0258%, y del pago de la amortización número XI por 34,979 obligaciones.
El pago de intereses y amortización se efectuará el 17 de septiembre de 2000 por Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, División Fiduciaria, a través de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Monterrey, N.L., a 12 de septiembre de 2000.
Representante Común de los Obligacionistas
Banca Serfin, S.A.
Departamento Fiduciario
Lic. Luis Ernesto Aceves Aceves

Rúbrica.
(R.- 133275)

SEGUNDA SECCION

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 100/92, relativo a la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará La Paz Citlaltépetl, Municipio de San Salvador El Verde, Pue.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver en cumplimiento de la ejecutoria D.A.4321/98, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el juicio agrario número 100/92, que corresponde al expediente administrativo 22/9794, relativo al nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará "La Paz Citlaltépetl", y se ubicará en el Municipio de San Salvador El Verde, Estado de Puebla, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por sentencia de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho este, Tribunal Superior Agrario resolvió lo siguiente:

"SEGUNDO.- Se dota al núcleo de población apuntado en el resolutivo anterior con una superficie de 490-00-00 (cuatrocientas noventa hectáreas) de las que 420-00-00 (cuatrocientas veinte hectáreas) son de agostadero de buena calidad y 70-00-00 (setenta hectáreas) son de temporal, que se tomarán de la siguiente manera: 360-00-00 (trescientas sesenta hectáreas) del predio "Rancho Guadalupe la Unión" hoy "El Vaquero", también conocido como "Teponanzingo"; 60-00-00 (sesenta hectáreas), de la fracción de este mismo predio denominada "Mesa de Vergara"; 40-00-00 (cuarenta hectáreas), de la fracción de este predio denominada "Mesa de Ixcamaclilla" y 30-00-00 (treinta hectáreas) de demasías propiedad de la Nación, en virtud de que permanecieron inexplotadas por más de dos años sin causas justificadas, resultando aplicable los artículos 204 y 251, este último en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria, superficie que se destinará a la satisfacción de necesidades agrarias y económicas de veinticuatro campesinos capacitados cuyos nombres quedaron apuntados en antecedentes."

SEGUNDO.- Inconformes con dicha resolución Gregorio Valencia Roque, Filemón Vaquero Monzón y Cirilo Rojas Reyes en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal del núcleo de población denominado "San Felipe Teotlalcingo" del municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, así como Víctor Monje Salazar, Francisco García Palacios y Javier Quiroz Juárez, en su carácter de presidente y secretario del Consejo de Vigilancia, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la sentencia precedentemente mencionada; la que quedó radicada con el número D.A.4321/98, en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dictó su resolución el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en los siguientes términos:

"UNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al núcleo ejidal denominado San Felipe Teotlalzingo, municipio de igual nombre, en el Estado de Puebla, en contra de la sentencia del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, en el expediente 100/92."

La anterior resolución tiene sustento en la siguiente consideración:

"Los conceptos de violación que hacen valer los quejosos, examinados en conjunto, acorde con lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, resultan esencialmente fundados.

En efecto, como lo aducen los impetrantes del amparo, la sentencia reclamada es violatoria en su perjuicio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrarse debidamente fundada y motivada, habida cuenta de que el Tribunal responsable, al desestimar las documentales aportadas por los quejosos para acreditar la legal adquisición de los terrenos denominados Guadalupe la Unión, hoy el Vaquero, también conocido como Teponanzingo, Mesa de Vergara y Mesa de Ixcamiclilla, que forman un solo polígono ubicado en el Municipio de El Verde, Puebla, con superficie total de cuatrocientas sesenta hectáreas, y con los que dotó su solicitud de creación de Nuevo Centro de sobre las razones particulares, causas inmediatas o circunstancias especiales que tuvo en consideración, para no otorgar valor probatorio a esas constancias y estimar afectables dichos predios para arribar con una incorrecta motivación, a la conclusión de que la compraventa de terrenos efectuada por el núcleo ejidal quejoso era nula debido a su inexplotación.

En efecto, de las constancias que obran en autos, se advierte, que el núcleo ejidal quejoso mediante contrato privado de promesa de venta del dos de junio de mil novecientos ochenta y seis, se obligó a comprar al apoderado legal de Carlos Gallardo González, los predios denominados Guadalupe La Unión,

hoy el Vaquero, también conocido como Teponanzingo, Mesa de Vergara y Mesa de Ixcamaclilla, en superficie aproximada a cuatrocientas hectáreas, en virtud de que por asamblea general extraordinaria de ejidatarios del poblado denominado San Felipe Teotlalzingo, Municipio de igual nombre, Puebla, se aprobó la adquisición de esos terrenos para beneficio de los integrantes del propio núcleo agrario (foja 230) de los que después de haber sido comprados fue solicitada su incorporación al régimen ejidal ante las autoridades agrarias, sin haber obtenido respuesta alguna.

Asimismo, este órgano colegiado advierte, que el contrato de compraventa respecto de dichos terrenos se formalizó hasta el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, mediante escritura pública número 935, otorgada ante la fe del Notario Público Tres del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en la que aparecen como parte vendedora Carlos Gallardo González, representado por Jesús Robles Martínez Moreno, y como compradora el ejido quejoso, representado por los integrantes del comisariado ejidal; en ese mismo testimonio notarial, se advierte que la parte compradora adquirió los predios El Vaquero, Mesa de Vergara y Mesa de Ixcamaclilla, el veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, como consta en la escritura pública de compraventa número 28,889, pasada ante la fe del Notario Público número Sesenta y Dos del Distrito Federal, haciendo constar el fedatario público su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Huejotzingo, Puebla, desde el veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y seis, partida 851, fojas 227 frente, tomo XVIII, del libro 1; asimismo, la parte vendedora hizo constar en la cuarta cláusula, que el inmueble enajenado se encuentra libre de todo gravamen (fojas 216 a 218).

Luego, si de autos se desprende que la solicitud de Nuevo Centro de Población Ejidal por parte de los ahora tercero perjudicados, fue presentada el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y seis, señalando entre otros, como afectable el predio denominado Ex-Hacienda de Teponanzingo (el cual comprende los predios adquiridos posteriormente por los quejosos) y manifestando su conformidad con trasladarse al lugar donde sea posible concederles tierras, solicitud que fue aceptada por la Dirección de Nuevo Centro de Población Ejidal, el dos de septiembre del citado año, en el expediente 3224, publicándose en el **Diario Oficial de la Federación** y Gaceta Oficial del Estado de Puebla, los días veintidós y treinta siguientes.

Luego, si de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 449 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el Registro Público de la Propiedad correspondiente deberá hacer las anotaciones marginales preventivas, respecto de los bienes sobre los que existan solicitudes agrarias, conforme a las modificaciones que reciba de las autoridades del ramo, en los libros que registran la traslación de dominio de los inmuebles y derechos reales; y conforme a lo previsto en el artículo 328 de ese propio ordenamiento legal, el Delegado Agrario enviará la solicitud el propio día en que la reciba la solicitud, si en ésta los campesinos señalan los predios presuntamente afectables, notificará ese hecho al Registro Público de la Propiedad que corresponda mediante oficio, a efecto de que se hagan las anotaciones a que se refiere el citado precepto 449 de la Ley Federal de Reforma Agraria; en la especie, es claro que de autos se desprende que no se realizó anotación marginal alguna, en relación con la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal de los terrenos perjudicados, como se demuestra con la constancia que obra a fojas 227, en la que el cinco de marzo mil novecientos ochenta y seis, el encargado por ministerio de ley del Registro Público de la Propiedad de Huelotzingo, Puebla, certifica que los terrenos adquiridos por el núcleo quejoso, están libres de toda responsabilidad en un periodo de veinte años anteriores, sin anotación marginal sobre solicitud de dotación en términos del artículo 449 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

De lo expresado con antelación, debe atenderse a que las autoridades agrarias que intervinieron en las fases del procedimiento incoado con motivo de la solicitud de creación de nuevo centro de población ejidal por parte de los tercero perjudicados, conforme al referido artículo 449 de la Ley Federal de Reforma Agraria no comunicaron al Registro Público de la Propiedad la solicitud de referencia en la cual se señaló como afectable el predio Ex-Hacienda de Teponanzingo, que comprende los predios adquiridos por los quejosos, omisión que trajo como consecuencia que en asamblea general extraordinaria se aprobara comprar por parte del núcleo impetrante del amparo los predios denominado "El Vaquero, Mesa de Vergara y Mesa de Ixcamaclilla, a efecto de beneficiar a sus integrantes y hecho que fue, solicitó su incorporación al régimen ejidal, sin que en momento alguno le fuere imputable la aludida falta de anotación marginal, ni el que no se haya resuelto sobre dicha solicitud de incorporación, como la propia responsable lo reconoce.

De conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, los núcleos de población ejidal que no tengan tierras, bosques y aguas en cantidad bastante para satisfacer sus necesidades, las podrán adquirir con recursos propios, con crédito que obtengan o por cualquier medio legal para ser incorporadas al régimen ejidal, previo acuerdo de la asamblea general, presentando la solicitud con las constancias correspondientes ante el Delegado Agrario de la entidad donde se ubiquen los bienes adquiridos, autoridad que previo deslinde de la superficie y comprobación del origen la

propiedad, emitirá opinión y remitirá el expediente al Cuerpo Consultivo Agrario para los efectos del artículo 304 del citado ordenamiento legal.

Luego, si al comparecer ante el Tribunal responsable, el núcleo quejoso manifestó que solicitó ante las autoridades agrarias la incorporación al régimen ejidal de las tierras que adquirió mediante el referido contrato de compraventa, y a su solicitud no recayó resolución alguna, y que la responsable debió ordenar que se subsanara esa irregularidad para que se pusiera el expediente relativo en estado de resolución, respecto de dicha solicitud; al desestimar las documentales exhibidas por los quejosos y considerar que los terrenos de referencia eran afectables porque de los trabajos técnicos se desprendía que estaban inexplotados, además, que conforme a lo previsto en el artículo 210, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria, el contrato de compraventa de las tierras eran nulo por haberse verificado después de la publicación de solicitud de los tercero perjudicados de creación de Nuevo Centro de Población Ejidal, y con posterioridad a los trabajos técnicos realizados, la afectación a esos terrenos obedecía a su inexplotación que no desvirtuó el núcleo quejoso, y la sola compraventa no era contundente para considerarlos como propiedad social, por ende, inafectables.

Asimismo, el Tribunal responsable determinó que era inatendible que los terrenos estuviesen dedicados a la explotación ganadera y agrícola, pues en los informes de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete, tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y doce de diciembre de mil novecientos noventa y uno, el terreno se reportó inexplotado, sin que se demostrara la falsedad de esos propios informes; y que si bien en el acta de inspección judicial del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se asienta su explotación agrícola, tenían mayor valor probatorio los referidos informes por ser más próximos a la instauración del procedimiento, por reunir los requisitos previstos en el artículo 286, fracciones II y III de la Ley Federal de Reforma Agraria, amén de que el predio era afectable por su anterior inexplotación y porque era nula la compraventa.

De lo anterior se advierte que en la motivación de la sentencia reclamada el Tribunal responsable no se pronuncia sobre el argumento de los quejosos, relativo a que debió requerir que se pusiera en estado de resolución la solicitud del núcleo quejoso de incorporar las tierras que adquirió mediante compraventa para resolver lo conducente, ni la tesis que invocan de rubro "TRANSMISION DE PREDIOS INAFECTABLES, PRODUCE EFECTOS JURIDICOS EN MATERIA AGRARIA, AUN CUANDO LA VENTA RELATIVA SEA POSTERIOR A LA FECHA DE PUBLICACION DE UNA SOLICITUD AGRARIA"; esto es, la responsable no externa en las consideraciones relativas, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración el Tribunal responsable, para no resolver el expediente relativo a dicha solicitud de incorporación, o bien, precisar si había sido resuelto, o las causas por las que no se resolvió, y con base en ello, determinar si tal omisión no impedía que debieran ser beneficiados los tercero perjudicados con los terrenos objeto de dicha compraventa para la creación de un Nuevo Centro de Población Ejidal, pues no menciona razonamiento alguno al respecto dando respuesta a los argumentos del núcleo quejoso, a pesar de observarse de autos que existe transgresión a lo previsto en el artículo 328 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por no haberse anotado marginalmente la solicitud de los tercero perjudicados en el asiento registral de los predios señalados como afectables, circunstancia que con las documentales aportadas puede demostrar, en su caso, la legal adquisición y posesión de los terrenos por parte de los quejosos y su inafectabilidad; por ello, es claro, que la sentencia reclamada incurre en una indebida motivación.

En las relatadas circunstancias, al no encontrarse debidamente motivada la sentencia reclamada, por no expresar el Tribunal responsable las circunstancias de hecho que consideró para no tomar en cuenta el argumento de los impetrantes del amparo, relativo a que los terrenos se adquirieron legalmente y se solicitó su incorporación al régimen ejidal, sin que se hubiere resuelto tal solicitud, siendo necesario que la responsable ordenara que se resolviera el expediente relativo, a fin de determinar lo conducente, la motivación aducida no puede tener adecuación con los fundamentos legales en que se apoya la responsable para determinar que deben ser beneficiados los tercero perjudicados con esos terrenos, tal circunstancia viola en perjuicio de los quejosos la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, por ende, se impone otorgar la protección constitucional solicitada por los impetrantes del amparo, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución, en la que se pronuncie sobre tal aspecto y emita una nueva resolución conforme a derecho."

TERCERO.- En cumplimiento de la ejecutoria de mérito, este Tribunal Superior Agrario, por auto de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictó acuerdo en los siguientes términos:

"PRIMERO.- Se deja sin efectos la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el Tribunal Superior Agrario en el juicio agrario 100/92, que corresponde al expediente administrativo agrario 22/9794, relativo a la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal que de constituirse se denominará "La Paz Citlaltépec", Municipio de San Salvador el Verde, Estado de Puebla".

SEGUNDO.- Túrnese el expediente del juicio agrario con el expediente administrativo agrario referidos al Magistrado Ponente para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, formule el proyecto de sentencia correspondiente y lo someta a la aprobación del Pleno de este Tribunal Superior."

Por auto de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, en cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se ordenó glosar al expediente que nos ocupa, copia certificada de la sentencia dictada el dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en el diverso juicio 270/94, relativo a la solicitud de incorporación de tierras al régimen ejidal del poblado de San Felipe Teotlalcingo del municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, la que negó la incorporación de tierras al régimen ejidal al núcleo gestor, resolución que no fue impugnada y que les fue notificada el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

CUARTO.- Para una mejor comprensión del asunto que se resuelve, se relacionan los antecedentes que lo integran.

El veintiuno de enero de mil novecientos sesenta y seis, un grupo de campesinos radicados en diversos poblados del Municipio de Chiautzingo, Estado de Puebla, ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, solicitó la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará "La Paz Citlaltépec", y se ubicará en el Municipio de San Salvador El Verde, Estado de Puebla, señalando como afectables los predios "Ex-Hacienda de Teponancingo", "La Unión" y "Contra", manifestando su conformidad para trasladarse al lugar donde sea posible concederles tierras.

El dos de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal instauró el expediente asignándole el número 3224. La solicitud se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta Oficial del Estado de Puebla, el veintidós de septiembre de ese mismo año.

El Comité Particular Ejecutivo se integró por Tomás Pérez Pérez, Felipe Domínguez Pérez y Vicente Domínguez Pérez, a quienes se les expidió sus respectivos nombramientos el dos de septiembre de mil novecientos sesenta y seis.

Por oficio 1534, de veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, el Delegado Agrario en el Estado de Puebla, instruyó al ingeniero Juan Manuel Bueno Morales, para que practicara diligencias censales; comisionado que en su informe de veintinueve de febrero de ese mismo año, manifestó que existen veinticuatro campesinos capacitados cuyos nombres son: 1.- Tomás Pérez Pérez, 2.- Felipe Domínguez Pérez, 3.- Vicente Domínguez Pérez, 4.- Pedro Domínguez Roldán, 5.- Hermenegildo Domínguez P., 6.- Rutimio Domínguez Domínguez, 7.- Ascención Ramos Domínguez, 8.- Ventura de Llano Domínguez, 9.- Gerardo Gutiérrez Robles, 10.- Miguel Rocha Ramos, 11.- Nazario Domínguez Villada, 12.- Mauro Pérez Pérez, 13.- Perfecto Rodríguez P., 14.- Esperanza Ramos A., 15.- Anselmo Lozada R., 16.- Francisco Lozada T., 17.- Domingo Domínguez Pérez, 18.- Nicolás Pérez P., 19.- Angeles Lozada, 20.- Cándido Díaz Lozada, 21.- Emilio Domínguez de la Rosa, 22.- Dimas Reyes Pérez, 23.- Andrés Pérez Arellano y 24.- Adrián Pérez Ramírez.

Por oficio 473041, de veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal, comisionó al ingeniero Mario A. Morales, para que realizara trabajos técnicos; comisionado que en su informe de veinticuatro de agosto de ese mismo año, dio a conocer lo siguiente:

"...Predio rústico denominado "San Miguel Contla", localizado a 98° 32:50 de longitud y 19°15:08 de latitud, siendo el propietario de ese inmueble el Sr. Francisco Ruiz Apreza, dicho predio cuenta con una extensión de 324-94-26 Has., de las que 307-09-26 Has., son de monte destinadas a la explotación forestal y 17-85-00 Has., de temporal en explotación agrícola; esta propiedad fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 252 a fojas 101 frente del libro I Tomo XV, el 22 de junio de 1970, en la inteligencia de que no se presentó el propietario, representante o encargado de esta finca a la diligencia.

Predio denominado "SAN MIGUEL CONTLA", con superficie de 47-23-36.98 has., propiedad de Abelardo Sánchez Guzmán, este inmueble se encuentra sembrado de maíz, alfalfa y árboles frutales.

Fracción del predio "SAN MIGUEL CONTLA", éste se encuentra fraccionado con 22 partes mismas que pertenecen a igual número de personas, existiendo casas habitación y terminadas y otras en proceso de construcción sin que los propietarios presentaran documentación alguna con la cual acreditaran sus derechos de propiedad.

Fracción del predio "SAN MIGUEL CONTLA", con superficie de 377-63-76 Has., mismas que están amparadas con Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 108793, expedido a nombre del Sr. Marcos Benavides, con traslado de dominio a favor de la Sra. Francisca Castaño de Benavides, según registro número 845 a fojas 79 frente a la 80 frente, del libro de Pequeñas Propiedades 20-X de la Oficina del Registro Agrario Nacional, de fecha 17 de abril de mil novecientos sesenta y tres.

Predio "LA UNION", propiedad de los CC. JOSE IGNACIO, MIGUEL, FERNANDO, JAVIER, JUAN AMALIA, MARIA CRISTINA Y MARIA DE LA LUZ ECHEGARAY LADRON DE GUEVARA, con superficie

de 353-75-00 Has., sembradas con maíz, gladiolas, alfalfa y otra extensión preparada para el cultivo; aclarándose que este inmueble se encuentra constituido por dos polígonos, uno de 52-00-00 Has., de temporal y el otro con 300-75-00 Has., destinadas a la explotación forestal, con reforestación de cedros.

Predio "SAN ANTONIO TLALTENANGO", este inmueble está dividido en dos fracciones, la primera de ellas con una extensión de 172-00-00 Has., y la segunda con 664-00-00 Has., lo que da un total de 836-00-00 Has., ambas fracciones son propiedad de aproximadamente de 150 a 300 personas, con áreas que van de 00-50-00 Has., a 5-00-00 Has.

Predio "TEPONANZINGO" HOY EL VAQUERO, con una extensión de 490-00-00 Has., las cuales se encuentran sin explotación de ninguna índole; existiendo dentro de esta superficie tres llanos denominados EL VAQUERO, LA MESA o VERGARA, e IXCAMACLILLA, esta área tiene aproximadamente 8 años ociosa y considerada como susceptible de cultivo señalado el comisionado que llevó a cabo una inspección ocular en todos y cada uno de los predios ya mencionados, pero que éste en particular se encuentra en abandono y que es propiedad del C. REFUGIO M. JIMENEZ, en el Registro Público de la Propiedad, no aparece ningún propietario con ese nombre, por lo que dicho profesionista dedujo, el supuesto propietario, según información adquirida...".

A este informe el comisionado acompañó acta de inspección ocular de diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.

Por oficios 423540 y 423541, de dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco, la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal, solicitó al Gobernador del Estado y Comisión Agraria Mixta, sus respectivas opiniones en relación a esta acción agraria; autoridades que el cinco junio y nueve de agosto de ese mismo año, dieron cumplimiento a lo anterior en sentido positivo.

Por oficio 5634, de cuatro de julio de mil novecientos ochenta y cinco, el Delegado Agrario en el Estado de Puebla instruyó al ingeniero Víctor Manuel Avila Huerta, para que notificara el procedimiento al propietario del predio "Teponanzingo" o "El Vaquero", conociéndose que por informe de cinco de julio de ese mismo año, la notificación entendió con Juan Carlos Echegaray, en su carácter de administrador del citado terreno, el veintinueve de junio del citado año.

Por oficio sin número, de treinta de abril de mil novecientos ochenta y seis, la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal instruyó al ingeniero Pedro López Domínguez, para que llevara a cabo inspección ocular en el predio denominado "El Vaquero", comisionado que en su informe de ocho de mayo de ese mismo año, dio a conocer lo siguiente:

"Una vez constituido en el predio de referencia, en compañía del C. Felipe Tovar, representante del grupo solicitante, procedí a realizar un recorrido por los linderos que marca el plano proyecto, comprobando que éstos se encuentran delimitados en su totalidad por caminos de mano de obra, brechas y zanjas, encontrándome también seis mojoneras en diferentes puntos; internándome al predio encontré que un 90% se encuentra ocupado por monte alto en variedades de pino y encino en explotación por parte de la unidad forestal de la compañía papelera "San Rafael", según el informe de la persona encargada de realizar el marqueo correspondiente de los árboles, dentro de esta superficie se encuentra una área considerable en proceso de reforestación; parte de la superficie restante se encuentra sembrada aproximadamente 1400 árboles de manzana y pera con antigüedad de 20 años y con producción en el mes de agosto; 600 árboles de ciruelo con antigüedad de 20 años y con producción en el mes de junio; en esta misma superficie se encontraron restos de siembra de frijol y papa.

También cuenta en una superficie aproximada de 10-00-00 Has., con instalaciones totalmente equipadas para la cría de cerdos, las cuales se encuentran fuera de funcionamiento debido a una veda de cinco años decretada por la SARH., a consecuencia de una epidemia de la región; al sur de estas instalaciones se observa un llano de aproximadamente 15-00-00 Has., con incipiente siembra de árboles frutales, asimismo con una casa habitación que se ocupa temporalmente por el propietario y otra casa en la que vive el encargado del predio...".

El veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y seis, la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal dictaminó que es procedente la creación de un nuevo centro de población ejidal que nos ocupa, el que se deberá dotar con 491-68-81 (cuatrocientas noventa y una hectáreas, sesenta y ocho áreas, ochenta y una centiáreas), que se tomarán íntegramente del predio denominado "El Vaquero", propiedad de Carlos Gallardo González, previa cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola que amparan el mismo.

El dos de junio de mil novecientos ochenta y seis, Pánfilo Valencia Rojas, en su carácter de presidente del comisariado ejidal del poblado "San Felipe Teotlalzingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla y Jesús Robles Martínez, en representación de Carlos Gallardo González, celebraron contrato de promesa de compra-venta, cuyo objeto sería el predio "El Vaquero".

Toda vez que existían diferencias entre los trabajos técnicos e informativos antes realizados por oficio 477393, de dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y seis, la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal instruyó al ingeniero Mario A. Morales y Jiménez, a efecto de que practicara investigación

en el predio denominado "Guadalupe la Unión", hoy "El Vaquero", en la que determine la explotación agropecuaria y forestal que se lleve a cabo en el mismo, calculando la edad y producción de los árboles frutales, calidad de suelos, instalaciones para la producción, maquinaria y equipo; el comisionado, en su informe de veintiuno de julio de ese mismo año, dio a conocer lo siguiente:

"PROPIETARIO.- Carlos Gallardo González, 460-00-00 Has., predio "Guadalupe la Unión", hoy "El Vaquero", Municipio "El Verde", jurisdicción de Huejotzingo, Puebla, inscrito en el Registro Público de la Propiedad.- Libro 1, Tomo XVIII, número 852.

INSPECCION.- POR LO QUE SE REFIERE A LA EDAD Y PRODUCCION DE LOS ARBOLES FRUTALES EXISTENTES EN EL PREDIO.- La antigüedad de algunos es de más de 20 y 35 años secos, enmontados y sin ningún cuidado, los frutales que existen son pera, manzano y ciruelo (sic); otros de 5 a 10 años en las mismas condiciones (sic) que los anteriores cuidados para ser que produzcan éstos; deben ser como lo indica la calendarización de actividades para huertos de ciruela, manzana y para, de la Comisión Nacional de Fruticultura Delegación Estatal Puebla, y Programa de Desarrollo Regional, CONAFRUT, DE LA S.A.R.H., dentro de las cuales señala, para que exista buen control seguir las calendarizaciones, una de las principales son, el desyerbe (mantener limpio el huerto), fertilización, realizar cultivos intercalados, entre otros.

La existencia de árboles frutales no está indicando que el predio que nos ocupa esté en explotación, ya que se encuentra sin cuidado y no sacan la fruta (ni venta ni consumo), ni existen restos o cultivos que indiquen se realicen.

INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION.- Las que existen son para la cría de puercos, mismas que están fuera de servicio desde hace aproximadamente más de 10 años como puede observarse en las fotografías que se anexan al presente informe.

CASAS HABITACION.- Existen tres casas de material, incluida la del propietario en mal estado (techo cayéndose).

MAQUINARIA Y EQUIPO.- No existe maquinaria, salvo dos empacadoras de forraje fuera de servicio.

CUANTIFICACION DE LAS SUPERFICIES.- La explotación que debe darse en este predio es: la forestal de aproximadamente 405-00-00 Has., Frutícula en 24-00-00 Has., aproximadamente, (secos, enmontados, sin ningún cuidado, de las cuales únicamente 6-00-00 (Has., están desyerbadas pero sin explotación); cultivables 61-00-00 Has., aproximadamente, de temporal, se solicitó información a la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Agropecuario y Forestal, Unidad Industrial de Explotación Forestal de San Rafael, Municipio de Tlamanalco, Estado de México, de la S.A.R.H., indicando que ya fueron entregados a los interesados por lo que no podían darlos nuevamente".

A este informe el comisionado acompañó solicitud de datos al Registro Público de la Propiedad, así como a la Comisión Nacional de Fruticultura, acta de inspección ocular sin fecha, copia del informe de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, planos, y treinta y tres fotografías que reflejan lo observado.

Por oficio 1938, de veinte de marzo de mil novecientos ochenta y siete, el Delegado Agrario en el Estado de Puebla, ordenó al ingeniero Miguel Angel Pérez Padilla, realizar trabajos técnicos tendientes al levantamiento topográfico en el predio denominado "Rancho Guadalupe La Unión", hoy "Vaquero"; comisionado que en su informe de treinta de abril de mil novecientos ochenta y siete, dio a conocer lo siguiente:

"...Me trasladé al poblado de referencia y me entrevisté con las autoridades ejidales a las cuales les hice saber el motivo de mi comisión y les indique que era necesario que me facilitaran personal de los propios ejidatarios a fin de estar en condiciones de realizar el levantamiento topográfico del predio denominado "RANCHO GUADALUPE LA UNION EL VAQUERO", localizado en la jurisdicción de San Felipe Teotlalzingo, Puebla, y según las autoridades ejidales dicho predio fue adquirido por contrato de compra-venta por los ejidatarios de este poblado, sin que se me haya proporcionado ningún antecedente de ello.

Es necesario destacar que las autoridades arriba mencionadas me indicaron que en los primeros días del mes de mayo del presente año me traerían el antecedente de la compra-venta del predio que nos ocupa.

Posteriormente se llevó a cabo el levantamiento topográfico consistiendo éste en una poligonal cerrada levantada por el metido de ángulos utilizándose para medir las distancias cinta de 50.00 metros y estadal de charnela, se orientó el lado 1-2 obteniendo un rumbo astronómico de S 60-00 W con este rumbo y con los ángulos interiores medidos se calcularon los rumbos de los demás lados de la poligonal.

Los trabajos de gabinete consistiendo en el cálculo de la orientación astronómica así como de las proyecciones, coordenadas y superficie del predio levantado, y el dibujo en papel milimétrico del mismo, el resultado del levantamiento del predio que nos ocupa arrojó los siguientes datos:

Superficie de 440-89-20 Has., de las que 70-00-00 Has., aproximadamente son de temporal y el resto de monte alto.

El predio se encuentra localizado a 15 kilómetros aproximadamente al sur-oeste del poblado San Felipe Teotlalcingo, en la parte oriente de las faldas del volcán conocido con el nombre de "IZTACCIHUALT" y a 25 kilómetros aproximadamente sur-oeste de la ciudad de San Martín Texmelucan, Pue.

Cabe hacer notar que el cálculo de la superficie analítica se realizó directamente en la calculadora aplicando la fórmula (Y1-Y3) (X2) y se fueron acumulando en la memoria, por tal motivo en la columna de productos positivos y negativos de la planilla de cálculo no aparece ningún valor...".

El doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se dictó Resolución Presidencial, mediante la cual se dejaran sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola de veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de ocho de octubre de ese año, y se cancelaron los certificados números 130660 y 130671, que ampararon los predios denominados "Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla", de 60-00-00 (sesenta hectáreas) y 40-00-00 (cuarenta hectáreas), que aparecen en propiedad de Carlos Gallardo González.

El veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, Felipe Tovar López, en representación de los campesinos de nuevo centro de población ejidal, demandó el amparo y la Justicia Federal, reclamando de la Secretaría de la Reforma Agraria la suspensión de trámite del expediente; en tal virtud se registró el expediente número 926/88 ante el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano constitucional que por sentencia de ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, concedió el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente sus órdenes de suspensión del citado procedimiento agrario y continúe con su tramitación dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

El nueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, el Delegado Agrario en el Estado de Puebla, comunicó al Cuerpo Consultivo Agrario que el poblado "San Felipe Teotlalcingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, había solicitado la incorporación de tierras al régimen ejidal, refiriéndose al predio "El Vaquero".

El cinco de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el comisariado ejidal del poblado "San Felipe Teotlalcingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, y Jesús Robles Martínez Moreno, representante de Carlos Gallardo González, formalizaron contrato de compra-venta cuyo objeto fueron los predios denominados "Rancho Guadalupe La Unión, hoy "El Vaquero", "Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla".

Por oficio número 023323, de veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y nueve, la Coordinación Nacional de Asuntos Agrarios, instruyó al ingeniero Luis Alfonso Chávez Sosa, para que realizara inspección ocular en los predios denominados "Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla"; comisionado que en su informe de tres de agosto de ese mismo año, dio a conocer lo siguiente:

"...Primeramente me trasladé a la ciudad de San Martín Texmelucan en compañía del C. Felipe Tovar López representante del grupo solicitante, lugar donde nos esperaba el Sr. Santos Frutos López integrante del Comité Particular Ejecutivo quien iba acompañado por siete solicitantes más y todos procedimos a dirigirnos a los lugares motivo de la comisión, llegando en primer lugar al rancho "El Vaquero" antes predio Teponanzingo, donde se comprende que fue el casco de la Finca ya que se encontró dos casas de materia e instalaciones para la cría de cerdos de los cuales están abandonadas por lo que están muy deterioradas, dos empacadoras en las mismas condiciones, en una de las casas encontramos a la esposa del encargado de la finca Sr. Leonel, quien nos informó que ellos iban a hacer limpieza cada ocho días y desde que su esposo consiguió ese trabajo que fue hace dos años nunca se ha sembrado que la propiedad es del Sr. Robles Martínez pero que ellos tienen trato con el hijo del Sr. Echegaray, que es el Sr. Javier Echegaray; hay dos predios que colindan con este casco Santa Gertrudis de aproximadamente 15-00-00-00 Has. y El Ciruelo de unas 3-00-00 Has., en los cuales se encuentran árboles frutales secos, manzanos y ciruelos, en seguida hay monte alto con pino, oyamel y cedro blanco, después se encuentra la "Mesa de Vergara" con una superficie aproximada de 60-00-00 Has., la cual se encuentra en su mayor parte sin cultivar pero tiene pequeñas superficies sembradas de maíz y haba, que en su totalidad serán unas 5-00-00 Has., pasando esta Mesa se encuentra monte alto que tiene pino y encino, en seguida se encuentra la "Mesa de Ixcamaclilla" (sic) con una superficie aproximada de 40-00-00 Has., teniendo solamente como 2-00-00 Has., sembradas de haba; después sigue un monte alto que se conoce como Plaza de Armas y luego el resto del predio que es monte alto con pino, existe explotación del mismo a baja escala en forma clandestina y la damera la bajan en carretas tiradas por bueyes, en todo este recorrido a excepción del casco de la finca no se encontró ninguna persona o algún encargado.

Los terrenos de cultivo que se encontraron son de temporal los cuales tienen una buena capa arable. Los pinos son de diferentes edades y como se dijo existe tala en pequeña escala en forma clandestina.

Los linderos del predio están debidamente señalados. En virtud de lo anterior espero haber dado cumplimiento a la comisión conferida...".

El veintiuno de junio de mil novecientos noventa, el Cuerpo Consultivo Agrario acordó dejar sin efecto el dictamen emitido el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y ocho, para que se investigue en forma exhaustiva el predio denominado "Rancho Guadalupe la Unión", hoy "El Vaquero", también conocido como Teponanzingo", inmueble que según datos proporcionados por la Delegación del ramo en la entidad federativa, en esa fecha aparece en propiedad del poblado "San Felipe Teotlalcingo", quien lo adquirió en el mes de junio de mil novecientos ochenta y seis, con fondos comunes del propio núcleo, previa autorización del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, ya que dicho predio está contemplado dentro del programa de incorporación de tierras al régimen ejidal implementado por la Secretaría de la Reforma Agraria.

En base a lo anterior, el Delegado Agrario en el Estado de Puebla, por oficio número 05354 de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa, informó al Cuerpo Consultivo Agrario que el doce de septiembre de ese año, personal de esa dependencia realizó levantamiento topográfico del aludido predio, ya que según antecedentes el ejido "San Felipe Teotlalcingo", la había adquirido y por ello solicitado la incorporación a su régimen ejidal.

En vista de que las autoridades responsables no daban cumplimiento a la ejecutoria de amparo el Juzgado de Distrito en cita remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia de Nación, recibido el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa; radicándose el incidente de inejecución de sentencia número 59/90, en el que el trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno, la Segunda Sala de nuestro más alto Tribunal, resolvió que había quedado sin materia en virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto del Cuerpo Consultivo Agrario, había emitido dictamen positivo del catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno.

El dictamen que antecede fue objeto de observaciones por la Unidad de Acuerdos Presidenciales; en tal virtud por oficio 026638, de dos de diciembre de mil novecientos noventa y uno, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, a través de la Coordinación Nacional de Asuntos Agrarios Especiales, instruyó al ingeniero Essau Ramírez Osogobio, para que de nueva cuenta practicara inspección ocular en los terrenos solicitados para la creación de un nuevo centro de población ejidal que nos ocupa; comisionado que en su informe de doce de diciembre de mil novecientos noventa y uno, dio a conocer lo siguiente:

"Para el desempeño de mi comisión, me trasladé al poblado denominado "San Nicolás Zecalocoaya", lugar donde radica la mayoría de los solicitantes, el cual se encuentra próximo a los terrenos investigados, explicándoles el motivo de mi presencia y enterados sus representantes, se estableció la fecha y forma de realizar los trabajos, procediendo de inmediato a notificar al propietario del terreno, el cual no se le pudo localizar por desconocerse su domicilio actual.

Llegado el día prefijado, se iniciaron los trabajos, acompañados siempre de los CC. Margarito Castillo Pérez y Abraham de Matías García, Regidor de Hacienda y segundo comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Salvador El Verde, con la finalidad de que dieran fe de los hechos, constatando la situación física de los predios que en forma conjunta constituyen una superficie aproximada de 500-00-00 Has.

En ese entendido y teniendo a la vista el plano informativo formulado por la Dirección de Nuevos Centros de Población, que localiza los terrenos en comento, la Carta Topográfica de I.N.E.G.I. y la de Catastro Rural, recorrimos la superficie antes señalada encontrando que aunque se les conoce con tres diferentes nombres los predios involucrados, lo cierto es que los mismos se encuentran formando una sola unidad topográfica definida su perímetro por mojoneras, ya que no existen cercas ni brechas que dividan las fracciones para identificar cada uno de los predios; la totalidad del predio se constituye con terrenos de agostadero y temporal predominando el monte alto en donde existen el pino en sus diferentes variedades, encino y madroño. La suma de los terrenos de temporal de los tres predios, equivale aproximadamente a 120-00-00 Has., no se localizó ningún tipo de ganado o explotación forestal y por comodidad se fue recorriendo cada fracción o predio para definir sus características, resultando lo siguiente:

I.- PREDIO "MESA DE VERGARA".- Como quedó establecido, este predio se encuentra formando parte de una sola unidad topográfica de totalidad de los terrenos solicitantes, al momento de notificarse y llevarse a cabo la inspección ocular, no se localizó el propietario o encargado del predio y al recorrer el mismo, se encontró que existe aproximadamente una superficie de 50-00-00 Has., consideradas de temporal laborable, que se ubica en la parte más plana susceptible de cultivo, teniendo a la fecha un camino de acceso y en forma lateral al mismo, se encuentra sembrado con árboles frutales de manzana, peras y ciruelas, de los cuales algunos recientemente fueron plantados, otros más enmontados y algunos arrancados y secos por no tener mantenimiento y encontrarse en abandono total. En forma similar y a los lados del camino se apreciaron 6-00-00 Has., con vestigios de haberse cultivado en años anteriores con siembra de habas y de maíz en fracciones aisladas y a la fecha enmontadas. El resto de la superficie laborable o de temporal se encuentra totalmente abandonado y llena de zacate que por su tamaño se dedica que tiene más de cinco años sin cultivarse.

2.- PREDIO "MESA DE IXCAMATLIYA". Esta área como la anterior, posee en la parte susceptible de cultivo, una superficie de temporal de aproximadamente 40-00-00 Has., que el momento de la inspección ocular no se encontró al propietario o encargado del mismo, apreciándose que a la fecha está totalmente abandonada y enmontada con zacate que por sus características se deduce que tiene más de cinco años sin haberse cultivado, encontrándose en el interior solamente una casa semidestruida y sin servicios.

3.- PREDIO "GUADALUPE DE LA UNION" HOY "EL VAQUERO". Este predio como los anteriores, conforman una sola unidad topográfica y entre las tres constituyen la superficie solicitada por los campesinos que pretenden el N.C.P.E. Al encontrarnos en el mismo, no se pudo hallar al propietario o encargado del predio, no obstante, haberse notificado con cédula común. Así las cosas, se apreció que dentro de esta fracción se localiza una superficie de temporal de 18-00-.00 Has., dentro de las cuales existen 3-00-00 Has., cercadas con alambre de púas y postes de madera, en donde se observan árboles frutales que por su abandono y descuido del propietario se han cercado, además de una casa habitación.

Por último, no omito manifestar a usted, que según información de los campesinos solicitantes, el propietario de las tres fracciones o predios es el Sr. Armando Torres Mansalve, quien al parecer ha tratado de aparentar ventas a favor de personas distintas, motivo por el cual las notificaciones formuladas por el suscrito, aparecen con el nombre de quien fuera titular del certificado de inafectabilidad".

A este informe el comisionado anexó acta de inspección ocular debidamente circunstanciada de seis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, avisos de notificación a propietarios, su oficio de comisión y planos que ilustran la ubicación de los inmuebles investigados.

El veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, este Tribunal Superior Agrario radicó el expediente asignándole el número 100/92; circunstancia que fue notificada a la Procuraduría Agraria, a propietarios de predios investigados y al Comité Particular Ejecutivo.

El doce de enero de mil novecientos noventa y tres, este Tribunal Superior Agrario, acordó solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria diversos documentos y otorgó a los propietarios o poseedores del predio denominado "Rancho Guadalupe la Unión" (hoy El Vaquero), un término de cuarenta y cinco días para que ofrecieran pruebas y alegatos.

En vista de lo anterior, se giró el despacho número AC/1042/93, que por oficio 1552 de dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, fue debidamente remitido por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, con sede en la ciudad de Puebla, del que se conoce que se practicaron las notificaciones solicitadas.

QUINTO.- Por acuerdo de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, se giró el despacho AC/141/97, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, con sede en la ciudad y Estado de Puebla, para que notifique a los integrantes del comisariado ejidal del poblado "San Felipe Teotlalzingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, y le haga saber que tiene un término de cuarenta y cinco días contados a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación, para que aporten pruebas y formulen sus alegatos.

Por oficio 1270, veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal Unitario Agrario devolvió diligenciado el despacho de mérito, del que se conoce que los integrantes del comisariado ejidal del poblado "San Felipe Teotlalzingo", fueron debidamente notificados.

SEXTO.- Por escrito de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el órgano de representación ejidal antes citado, ofreció pruebas documentales y formuló alegatos que posteriormente serán valorados, también ofreció la prueba de inspección judicial, por lo que se giró el despacho AC/250/97, para que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, con sede en la ciudad y Estado de Puebla, desahogara la citada inspección.

SEPTIMO.- Por escritos de trece de octubre y diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Felipe Tovar López, en representación del poblado gestor, presentó pruebas y formuló alegatos, que serán valorados en la parte considerativa que corresponda. Finalmente, por oficio número 22, de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, con sede en la ciudad y Estado de Puebla, devolvió debidamente diligenciado el despacho AC/205/97, del que se conoce que la inspección judicial se llevó a cabo el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, recayendo acuerdo el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y ocho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 189 y tercero transitorio de la Ley Agraria, relacionados con los numerales 1o., 7o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- La presente resolución se dicta en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el Juicio de Amparo Directo número D.A.4321/98, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al núcleo ejidal denominado "San Felipe Teotlalzingo", contra el acto reclamado al Tribunal Superior Agrario consistente en la resolución definitiva

dictada el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, que dotó al poblado para la creación del nuevo centro de población ejidal de referencia con una superficie de 490-00-00 (cuatrocientas noventa hectáreas), siendo el efecto de la concesión de la protección constitucional, el de que el Tribunal Superior Agrario se pronuncie respecto de la solicitud de incorporación de tierras al régimen ejidal del poblado "San Felipe Teotlalcingo". En cumplimiento de la ejecutoria de mérito, este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 80 de la Ley de Amparo; por acuerdo de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, resolvió dejar insubsistente la sentencia en comento, para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, formule el proyecto de sentencia correspondiente.

TERCERO.- La capacidad del núcleo gestor quedó demostrada del informe rendido por Juan Manuel Bueno Morales de veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, conforme a lo dispuesto en el artículo 198 y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, comprobando la existencia de veinticuatro campesinos capacitados, siendo los siguientes: 1.- Tomás Pérez Pérez, 2.- Felipe Domínguez Pérez, 3.- Vicente Domínguez Pérez, 4.- Pedro Domínguez Roldán, 5.- Hermenegildo Domínguez P., 6.- Rutimio Domínguez Domínguez, 7.- Ascención Ramos Domínguez, 8.- Ventura de Llano Domínguez, 9.- Gerardo Gutiérrez Robles, 10.- Miguel Rocha Ramos, 11.- Nazario Domínguez Villada, 12.- Mauro Pérez Pérez, 13.- Perfecto Rodríguez P., 14.- Esperanza Ramos A., 15.- Anselmo Lozada R., 16.- Francisco Lozada T., 17.- Domingo Domínguez Pérez, 18.- Nicolás Pérez P., 19.- Angeles Lozada, 20.- Cándido Díaz Lozada, 21.- Emilio Domínguez de la Rosa, 22.- Dimas Reyes Pérez, 23.- Andrés Pérez Arellano y 24.- Adrián Pérez Ramírez.

CUARTO.- Los requisitos de procedibilidad que conforman la creación del nuevo centro de población ejidal quedaron satisfechos conforme a lo dispuesto en los artículos 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

A fin de determinar si el predio "Rancho Guadalupe la Unión" hoy "El Vaquero", es o no afectable, se entra al estudio de los medios de prueba aportados por los integrantes del comisariado ejidal del poblado "San Felipe Teotlalzingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla.

1.- Copia de las credenciales expedidas por la Secretaría de la Reforma Agraria, que acreditan a Fidel Domínguez, Jaime Velázquez Silva y Samuel Pretelir Roque, como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal del poblado "San Felipe Teotlalzingo", municipio del mismo nombre Estado de Puebla, en términos del artículo 32 de la Ley Agraria.

2.- Copia al carbón de acta de asamblea general extraordinaria de ejidatarios, celebrada en el poblado "San Felipe Teotlalzingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, el diez de enero de mil novecientos ochenta y seis, en la que se acordó autorizar al comisariado ejidal para que celebre contrato de compra-venta del predio conocido como "El Vaquero", en términos del artículo 47 fracción VIII de la Ley Federal de Reforma Agraria.

3.- Copia certificada de escrito fechado el dos de junio de mil novecientos ochenta y seis, mediante el que Jesús Robles Martínez, mandatario de Carlos Gallardo González y Pánfilo Valencia Rojas, presidente del comisariado ejidal, del poblado "San Felipe Teotlalzingo", celebraron contrato de promesa de compra-venta, cuyo objeto sería los predios denominados "Rancho Guadalupe la Unión", "La Mesa de Vergara y Mesa de Ixcamaclilla", en términos del artículo 189 de la Ley Agraria.

4.- Copia certificada de escritura pública número 935, volumen XVII de cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, levantada por el licenciado Jorge Romero Vargas, Notario Público número Tres, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla.

Con este documento se acredita que Jesús Robles Martínez Moreno, representante de Carlos Gallardo González, vendió al poblado "San Felipe Teotlalzingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, el terreno denominado "Guadalupe la Unión", así como dos fracciones de este mismo predio que se identifican como "Mesa de Vergara" y "Mesa Ixcamaclilla", de 360-00-00 (trescientas sesenta hectáreas) de 60-00-00 (sesenta hectáreas) y 40-00-00 (cuarenta hectáreas) cada una, respectivamente, atento a lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica supletoriamente a la Ley Agraria.

5.- Copia simple de documento fechado el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, expedido por el Banco Mexicano Somex. Con este instrumento se demuestra que la citada institución de crédito realizó avalúo en los terrenos que fueron objeto de compra-venta entre el poblado antes citado y el propietario.

6.- Copia de escrito fechado el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, mediante el que las partes contratantes registraron la compra-venta ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, para el efecto de pago del impuesto predial.

7.- Documento fechado el once de abril de mil novecientos ochenta y nueve, mediante el que las partes contratantes comunicaron la compra-venta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el efecto del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles.

8.- Copia de escritura pública número 37,000, levantada el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta, ante el licenciado Heriberto Román Talavera, Notario Público número 62, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con la que se acredita que Carlos Gallardo González otorgó mandato en favor de Jesús Robles Martínez Moreno y otras personas para que en su nombre y representación celebraran todo tipo de actos jurídicos.

9.- Escrito de cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, expedido por el juez de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, encargado del Registro Público de la Propiedad por Ministerio de Ley, quien manifiesta que los predios denominado "Guadalupe la Unión" y dos fracciones del mismo, denominadas "Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla", propiedades de Carlos Gallardo González, no tienen gravamen alguno y se encuentran libres de toda responsabilidad.

10.- Plano que ilustra la ubicación del predio conocido como "Rancho Guadalupe la Unión", hoy "El Vaquero", así como las fracciones "Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla".

11.- Acta de inspección judicial verificada el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por el actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, con sede en la ciudad y Estado de Puebla, que a continuación se transcribe:

"...En cumplimiento a lo acordado en auto de fecha seis de octubre del año en curso, por el Tribunal Superior Agrario y auto de tres de noviembre dictado por este Tribunal Unitario Agrario, previa notificación a las partes de la realización de la presente diligencia, encontrándose presentes los órganos de representación ejidal del poblado "San Felipe Teotlalzingo", me constituí en los siguientes parajes: "Santa Gertrudis", "La Mesa de Vergara", "Ixcamaclilla", "El Ciruelo" y "Zazatpinta", mismos que integran o forman parte del Rancho Guadalupe La Unión o El Vaquero, encontrándose que estas fracciones se encuentran (sic), con siembra de maíz, haba, trigo, cilantro, papa, frijol, así como de árboles de pera, ciruela, tejocote, durazno y chabacano, así como gente que al momento de la diligencia se encontraba trabajando la tierra, y durante el recorrido no se observa que dichas tierras hayan sido abandonadas al cultivo, así como tampoco se observa talas de bosques que forman parte de las tierras del casco de la ex-hacienda El Vaquero, asimismo, me constituí en el casco de la ex-hacienda sujeta a inspección, en donde no se observa construcción alguna reciente, encontrándose las construcciones viejas propias de un rancho viejo, no así las fracciones sujetas a inspección las cuales se encuentran explotadas y que por el dicho de los presentes, es por gente del propio poblado "San Felipe Teotlalzingo", con lo que se da por terminada la presente diligencia...".

En sus alegatos, los representantes ejidales manifiestan que mantienen la posesión de estos predios desde mil novecientos ochenta y siete, y que para lograr su legalización gestionaron la incorporación de los mismos al régimen ejidal ante la Secretaría de la Reforma Agraria, trámite que a decir de ellos, no culminó con resolución agraria, que a partir de la celebración de la compra-venta el dos de junio de mil novecientos ochenta y seis, los terrenos identificados como "Guadalupe la Unión" hoy "El Vaquero", "Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla", pasaron a ser propiedad del núcleo, una vez que cubrieron el pago correspondiente, para lo cual acudieron al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, insistiendo que la solicitud de incorporación de estas tierras al régimen ejidal fue aceptada por la autoridad agraria mencionada, razón por la que por oficio 1938, de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, se comisionó al ingeniero Miguel Angel Pérez Padilla, para que se trasladara a los terrenos y realizara el levantamiento topográfico correspondiente; circunstancia que se asentó en el informe de treinta de abril de ese mismo año.

Aducen que si bien es cierto se dio trámite a la solicitud para alcanzar la incorporación, también es verdad que en ningún momento se dictó la resolución correspondiente, razón esta última que no debe ser imputable al poblado. En otra parte manifiestan que la compra-venta es legal y que no contraviene al artículo 210, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria y que no es verdad que los terrenos hayan permanecido inexplotados como así lo manifestaron los comisionados en sus respectivos informes de trabajos técnicos.

Por otra parte, obra en autos escrito de trece de agosto de mil novecientos ochenta y cinco dirigido a la Dirección General de Nuevos Centros de Población Ejidal, mediante el que Jesús Robles Martínez Moreno, representante de Carlos Gallardo González, formuló alegatos en los que substancialmente manifiestan que los terrenos de su mandante, se destinan, a la producción agropecuaria y que no rebasan los límites de la pequeña propiedad, por tanto son inafectables.

QUINTO.- Al analizar las pruebas documentales aportadas por el poblado "San Felipe Teotlalzingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, este Tribunal Superior Agrario arriba a la convicción de que los multicitados terrenos identificados como "Rancho Guadalupe la Unión", "La Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla", son afectables en beneficio de campesinos que solicitan la creación de un nuevo centro de población ejidal que nos ocupa, en virtud de que los fundamentos, y los motivos particulares y circunstancias específicas que a continuación se detallan:

a).- En principio, porque en el informe de los trabajos técnicos dado a conocer por el comisionado Mario A. Morales, el veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, se afirmó que el predio conocido como "El Vaquero" se encuentra inexplotado desde hace ocho años sin que exista causa justificada para ello.

Este informe tiene pleno valor probatorio, considerando que se trata del más inmediato a la instauración del expediente por la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal, acontecida el dos de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, debido a que refleja las condiciones reales que presentaba el predio, toda vez que el comisionado precisó la superficie, calidad de suelos y antecedentes registrales, pero sobre todo porque apuntó las circunstancias de inexplotación en el acta de inspección de dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, reuniendo así los requisitos previstos en el artículo 286, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria, estimando que este informe es un medio de prueba reconocido por la propia ley, que presenta relación directa con los hechos controvertidos.

No escapa advertir que en el acta de inspección ocular de ocho de mayo de mil novecientos ochenta y seis, levantada por el comisionado Pedro López Domínguez, se afirmó que el predio se encontraba ocupado en un 90% por monte alto, en variedades de pino y encino en explotación por la unidad forestal de la Compañía Papelera "San Rafael", ya que el comisionado dijo haber observado mil cuatrocientos árboles de manzana con antigüedad de veinte años, así como árboles de ciruelo con la misma antigüedad; sin embargo, esta afirmación es inatendible si tomamos en cuenta que en el informe de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, el predio se había reportado inexplotado, circunstancia que se corrobora con el informe de veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y seis, en el que de nueva cuenta el comisionado Mario A. Morales y Jiménez, destacó que efectivamente en el predio se localizan árboles de manzano y ciruelo con la antigüedad señalada, pero que ello es producto del abandono dada su inexplotación por parte de su propietario, estimando que fue categórico al señalar que la existencia de árboles frutales no quiere decir que el terreno se destine a la explotación, pues no existen restos o cultivos que así lo indiquen, siendo contundente al precisar que las instalaciones pecuarias se encuentran fuera de servicio desde hace aproximadamente más de diez años, anexando al efecto fotografías que ilustran las condiciones materiales de esa infraestructura, informe cuyos datos se encuentran robustecidos en el acta de inspección que se acompañaron al mismo.

Aunado a lo anterior, en el acta de inspección ocular de tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, el comisionado Luis Alfonso Chávez Sosa, confirmó la inexplotación del predio "El Vaquero", al señalar el abandono de las instalaciones pecuarias y la inexplotación agrícola del mismo. Por otra parte, en el informe de doce de diciembre de mil novecientos noventa y uno, el comisionado Essau Ramírez Osogobio, dio a conocer que la totalidad del predio se constituye con terrenos de agostadero y temporal, en donde predomina el monte alto caracterizado por pinos en sus diferentes variedades, sin que se haya localizado ningún tipo de explotación ganadera o forestal, informes que hacen prueba plena por ser rendidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria.

Como se conoce de antecedentes, desde la instauración formal del procedimiento que inicia con la publicación de la solicitud en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, los días veintidós y treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, era necesario conocer las condiciones del predio denominado "Rancho Guadalupe la Unión", o "El Vaquero", también conocido como "Teponanzingo", para que en base a ello determinar su afectación o no en beneficio de los campesinos promoventes, por cuanto a su superficie, calidad de suelos y explotación, o inexplotación en su caso, de tal manera que si en el informe de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro se reportó inexplotado, es inconcuso que desde entonces era susceptible de afectación habida cuenta que durante el procedimiento no se demostraron causas justificadas de ello por su propietario, razón por la que el Gobernador del Estado de Puebla y la propia Comisión Agraria Mixta, los días cinco de junio y nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, emitieron sus respectivas opiniones proponiendo la creación de un nuevo centro de población ejidal que nos ocupa, el que se debería de dotar con una superficie de 490-00-00 (cuatrocientas noventa hectáreas) que se tomarían del multicitado predio, en términos del artículo 332 de la Ley Federal de Reforma Agraria, opiniones que fueron convalidadas por dictamen emitido el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y seis, por la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal, y por el propio Cuerpo Consultivo Agrario en su dictamen de catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno, ya que por Resolución Presidencial de doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se habían dejado sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola de veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el ocho de octubre de ese año, y la consecuente cancelación de los certificados números 130660 y 130671, que amparaban los predios denominados

"Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla", de 60-00-00 (sesenta hectáreas) y 40-00-00 (cuarenta hectáreas), respectivamente, propiedad de Carlos Gallardo González.

b).- En segundo término, porque el contrato de compra-venta celebrado el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, entre Jesús Robles Martínez Moreno, representante de Carlos Gallardo González y los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "San Felipe Teotlalzingo", municipio del mismo nombre, Estado de Puebla, carece de validez y, por tanto, no produce efectos jurídicos en materia agraria en virtud de que se verificó después de la publicación de la solicitud ocurrida, siendo que en el informe de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, se dijo que se observó inexplotado, lo que lo hacía afectable; los días veintidós y treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, respectivamente.

En efecto, prevé el artículo 210, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria, que la división y el fraccionamiento así como la transmisión íntegra por cualquier título de predios afectables, se sujetarán por cuanto toca a la materia agraria a las reglas siguientes: no producirán efectos los realizados con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de restitución, ampliación, dotación, ni de las relativas a nuevo centro de población ejidal en las que se señalen los predios afectables, o de la publicación del acuerdo que inicia el procedimiento de oficio, ni los que se realicen con posterioridad a la notificación prevista en el artículo 332 del citado ordenamiento legal.

De la cronología del caso, con claridad se observa que esta venta carece de validez, considerando que en los informes de trabajos técnicos de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro y veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y seis, el predio en comento se había reportado inexplotado por más de dos años consecutivos y sin causas justificadas, de tal modo que al formalizarse la compra-venta del mismo el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, dicha circunstancia no es motivo suficiente para declarar su inafectabilidad, precisamente porque la venta es posterior no nada más a la instauración del procedimiento sino también a la práctica de los trabajos técnicos apuntados.

No pasa inadvertido considerar que los representantes del poblado "San Felipe Teotlalzingo", en sus alegatos fueron reiterados por cuanto a que solicitaron la incorporación del multicitado terreno a su régimen ejidal ante la Secretaría de la Reforma Agraria circunstanciada ocurrida el nueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, es decir, después de celebrar el contrato de promesa de compra-venta el dos de junio de mil novecientos ochenta y seis y antes de formalizar dicho acto el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, como así se desprende de la comunicación que en esa fecha realizara la Delegación Agraria en el Estado de Puebla, al Cuerpo Consultivo Agrario.

Al respecto, es pertinente señalar que dicha solicitud fue resuelta el doce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, negando la incorporación de tierras al régimen ejidal al núcleo gestor, y que la afectación del predio obedece a su inexplotación por más de dos años consecutivos y sin causas justificadas, que se reportó en los informes de trabajos técnicos previamente analizados a la luz del artículo 189 de la Ley Agraria, dicho de otra manera, la sola compra-venta del predio por parte del núcleo agrario en cita, no es contundente para arribar a la convicción de que pueda ser considerada como propiedad social y, por ende inafectable, en términos del artículo 51 de la Ley Federal de Reforma Agraria, pues como ya se precisó, su afectación deviene de su inexplotación observada antes de que le fuera vendida al poblado "San Felipe Teotlalcingo", circunstancia inmediata que conduce a considerar nula la compra-venta formalizada el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, en términos de la fracción I, del artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Como se conoce de la relatoria, este núcleo fue notificado por parte del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, con sede en la ciudad y Estado de Puebla, por medio de despacho AC/141/97, y con las pruebas aportadas al procedimiento y de sus respectivos alegatos, en ningún momento desvirtuó la inexplotación del predio señalada en los informes de trabajos técnicos de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro y veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y seis, por ser previos al acto de compra-venta, tampoco restó valor probatorio a los subsecuentes informes de tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, no obstante que ya había adquirido el predio, razones por las que se concluye que este predio deberá ser afectado en beneficio de campesinos del nuevo centro de población ejidal denominado "La Paz Citlaltépec", Municipio de San Salvador el Verde, Estado de Puebla.

Obra también en autos escrito de trece de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, presentado por Jesús Robles Martínez Moreno, apoderado legal de Carlos Gallardo González ante la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que alega que el predio de su propiedad es inafectable en virtud de que se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del Municipio El Verde, jurisdicción de Huejotzingo, Puebla, desde mil novecientos cuarenta y ocho, y que se encuentra amparado con los certificados de inafectabilidad agrícola números 130660 y 130661; en lo que respecta a las fracciones denominadas "Mesa de Vergara" y "Mesa Ixcamaclilla", también aduce que no rebasa los

límites de la pequeña propiedad y que es inafectable porque se ha destinado a la siembra de habas y árboles frutales, así como la explotación ganadera; agrega que los informes de trabajos técnicos, sin precisar cual de ellos son falsos y que se refieren a un predio distinto de su representado; finalmente agrega que el predio no puede ser destinado a la creación de un nuevo centro de población ejidal, porque se encuentra fuera del radio legal de afectación.

Al respecto, son inoperantes estos alegatos, debido a que quedó plenamente demostrada la propiedad del terreno a nombre de Carlos Gallardo González, sin que esto signifique un asunto toral en el procedimiento, toda vez que se afectan predios más no propietarios. Por cuanto a que el terreno se ha dedicado a la explotación agrícola y ganadera, es inatendible habida cuenta que en los informes de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro y veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y seis, corroborados con los de tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y doce de diciembre de mil novecientos noventa y uno, el terreno se reportó inexplotado, por lo que no basta el simple alegato expuesto en esos términos.

En relación a que el predio, particularmente las fracciones denominadas "Mesa de Vergara" y "Mesa de Ixcamaclilla", se encuentran amparadas con los certificados de inafectabilidad agrícola 130660 y 130661, cabe destacar que por Resolución Presidencial de doce de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, los acuerdos de inafectabilidad de veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el ocho de octubre de ese mismo año, se dejaron insubsistentes y, en consecuencia, se cancelaron los respectivos certificados, sin que se haya impugnado la resolución.

Tocante a que los informes de trabajos técnicos son falsos, es menester señalar que no es suficiente el alegato en ese sentido, sino que se requiere de pruebas que así lo demuestren y por cuanto a que el predio se ubica fuera del radio legal de afectación, es oportuno considerar que en el procedimiento de creación de nuevo centro de población ejidal, no se requiere la investigación de predios dentro del radio de siete kilómetros.

En este mismo escrito el oferente aportó los medios de prueba, relativos a la escritura pública número 28,889, volumen DXXXIX, de veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, levantada por el licenciado Heriberto Román Talavera, Notario Público número 62, en México, Distrito Federal, con la que se acredita que Carlos Gallardo González compró a Jesús Robles Martínez y Guadalupe Lazirtegui de Robles el predio denominado "Rancho Guadalupe la Unión". De igual forma, ofreció dictamen técnico elaborado el diez de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, por el titular de la Unidad de Estudios y Proyectos del Programa de Conservación de Suelos y Agua de la Secretaría de la Reforma Agraria, en base a estudio del predio en comento, en el que se destaca que el terreno es apto para uso forestal y, en una mínima parte, para sus agrícolas.

Como se advierte en el contenido de estos documentos, son insuficientes para demostrar la inafectabilidad del supracitado predio, pues se concretan a demostrar la forma de como Carlos Gallardo González adquirió la propiedad del mismo y la calidad del suelo, en términos del artículo 189 de la Ley Agraria.

Por lo que respecta al acta de inspección judicial, verificada el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por el actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, si bien es cierto que en la misma se informó que el terreno se destina a la siembra de maíz, entre otros cultivos y de árboles frutales; no obstante esta afirmación, ello resulta insuficiente para estimar que resulta inafectable y que, por tanto, deba respetarse el beneficio del poblado "San Felipe Teotlalzingo", en virtud de que esta diligencia por sus circunstancias de tiempo y forma, no refleja las condiciones más inmediatas a la instauración del procedimiento, pues de un simple razonamiento lógico se colige que a la fecha de la inspección era evidente que los campesinos del poblado antes apuntado lo dedicarían a la explotación agrícola, ganadero o de otra especie, para que de esa manera el actuario se percatara de su explotación y así lo reportara; sin embargo, reviste mayor valor probatorio los trabajos técnicos practicados durante la substanciación del procedimiento, en atención a que son más próximos a su instauración y además porque reúnen los requisitos previstos en el artículo 286, fracciones II y III; de la Ley Federal de Reforma Agraria, en tanto que esta inspección, si bien reporta la siembra de diversos cultivos y árboles frutales, aún así el predio es afectable por su anterior inexplotación y porque la compra-venta carece de validez jurídica.

Si bien es cierto, que a los campesinos del poblado "San Felipe Teotlalcingo" adquirieron por compra-venta hecha a Carlos Gallardo González el terreno denominado "Guadalupe Unión" y dos fracciones de este mismo predio que se identifican con los nombres de "Mesa de Vergara" y "Mesa Ixcamaclilla" con superficies de 360-00-00 (trescientas sesenta hectáreas), 60-00-00 (sesenta hectáreas) y 40-00-00 (cuarenta hectáreas) respectivamente, lo que se conoce de la escritura pública número 935 volumen XVII de cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, levantada por el licenciado Jorge Romero Vargas, Notario Público número 3 del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y que al celebrarse dicha

operación no existía anotación alguna en el Registro Público de la Propiedad que la señalada como afectable, tal y como lo establece el artículo 328 de la Ley Federal de Reforma Agraria, lo que lo identifican con un tercero adquirente de buena fe, también lo es que en materia agraria, dicha venta no surte efectos, tal y como lo establece la fracción I del artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria que establece:

"Art.- 210.- La división y el fraccionamiento así como la transmisión íntegra por cualquier título de predios afectables, se sujetarán por cuanto toca a la materia agraria, a las reglas siguientes:

I.- No producirán efectos los realizados con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de restitución, ampliación, dotación, ni de las relativas a nuevos centro de población en las que señalen los predios afectables, o de la publicación del acuerdo que inicie el procedimiento de oficio, ni los que se realicen con posterioridad a la notificación a que se refiere el artículo 332.

Los propietarios de los predios señalados como afectables en las solicitudes de creación de nuevo centro de población ejidal, podrán ocurrir ante la Secretaría de la Reforma Agraria dentro de un plazo de diez días, contados a partir de la fecha en que sean notificados, a exhibir sus títulos de inafectabilidad o bien rendir las pruebas que a juicio de esta autoridad sean bastantes para desvirtuar la afectabilidad atribuida a esos predios, en cuyo caso se mandará tildar la inscripción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 329".

Y toda vez que de los informes de los trabajos técnicos e informativos rendidos el veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y seis, tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y doce de diciembre de mil novecientos noventa y uno, los que hacen prueba plena por ser rendidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria, se conoce que se encontró inexplotado el predio de referencia, de ahí que al observarse que existe causal de afectación, consistente en una inexplotación de la finca en cuestión por más de dos años consecutivos, sin que exista causa de fuerza mayor que la justifique, el predio resulta afectable en términos del artículo 251, interpretado a contrario sensu, de la Ley Federal de Reforma Agraria y por ende aplicable la fracción I del artículo 210 del ordenamiento legal antes citado.

Ahora bien, por lo que respecta a lo señalado por la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, en el sentido de que los ejidatarios del poblado denominado "San Felipe Teotlalcingo" al adquirir los predios antes aludidos, para beneficio de los integrantes del núcleo y "...después de haber sido comprados fue solicitada su incorporación al régimen ejidal ante las autoridades agrarias sin haber obtenido respuesta alguna". Asimismo que, "...el núcleo quejoso manifestó que solicitó ante las autoridades agrarias la incorporación al régimen ejidal de las tierras que adquirió mediante el referido contrato de compra-venta, a su solicitud no recayó resolución alguna", y "no se pronuncia sobre el argumento de los quejosos, relativo a que debió requerir que se pusiera en estado de resolución la solicitud del núcleo quejoso de incorporar las tierras que adquirió mediante compra-venta...", así como que "la responsable no externa en las consideraciones relativas, las circunstancias especiales, razones particulares, y causas inmediatas que tuvo en consideración el Tribunal responsable, para no resolver el expediente relativo a dicha solicitud de incorporación" y que "se solicitó" su incorporación al régimen ejidal, sin que se hubiere resuelto tal solicitud, siendo necesario que la responsable ordenara que se resolviera el expediente relativo...".

De una recta interpretación a lo mencionado en la ejecutoria que se cumplimenta respecto de la solicitud de incorporación de tierras al régimen ejidal hecha por los quejosos en el amparo, cabe señalar que por acuerdo de este Tribunal de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, se ordenó glosar al expediente del juicio que nos ocupa del diverso expediente 270/94, la sentencia que se dictó el dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por este órgano colegiado en la que se resolvió la solicitud de incorporación de tierras al régimen ejidal formulada por los campesinos del poblado denominado "San Felipe Teotlalcingo" del municipio del mismo nombre, Estado de Puebla; en el siguiente sentido: "No ha lugar a la incorporación de tierras al régimen ejidal solicitada..."; sentencia que no fue impugnada y que les fue notificada el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Efectivamente, tal y como lo refiere la ejecutoria que se cumplimenta, la motivación aducida no puede tener adecuación con los fundamentos legales en que se apoyó este Tribunal para determinar que deben ser beneficiados los terceros perjudicados con sus terrenos, esto es cierto, si consideramos que existe una solicitud de incorporación de tierras al régimen ejidal, pendiente de resolución y respecto de la cual se omitió pronunciarse; sin embargo, quedó demostrado que dicha solicitud, fue resuelta en definitiva por sentencia del Tribunal Superior Agrario el dos de junio de mil novecientos noventa y cuatro, la que, como ya se mencionó, negó la incorporación de tierras al régimen ejidal, negativa que no fue impugnada, no obstante habérseles sido notificada el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, circunstancia ésta, que no le fue informada al Tribunal Colegiado que concedió el amparo.

En síntesis, al resultar procedente la acción de creación de un nuevo centro de población ejidal, se deberá dotar al poblado denominado "La Paz Citlaltépec", Municipio de San Salvador El Verde, Estado de

Puebla, con una superficie de 490-00-00 (cuatrocientas noventa hectáreas) son de agostadero de buena calidad y 70-00-00 (setenta hectáreas) son de temporal, que se tomarán de la siguiente manera: 360-00-00 (trescientas sesenta hectáreas), del predio "Rancho Guadalupe la Unión" hoy "El Vaquero", también conocido como "Teponanzingo"; 60-00-00 (sesenta hectáreas), de la fracción de este mismo predio denominada "Mesa de Vergara"; 40-00-00 (cuarenta hectáreas), de la fracción de este predio denominada "Mesa de Ixcamaclilla" propiedad para efectos agrarios de Carlos Gallardo González y 30-00-00 (treinta hectáreas) de demasías propiedad de la Nación, del Municipio de Teotlalcingo, Estado de Puebla, en virtud de que permanecieron inexplotadas por más de dos años sin causas justificadas, resultando aplicable los artículos 204 y 251, este último en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria, superficie que se destinará a la satisfacción de necesidades agrarias y económicas de veinticuatro campesinos capacitados cuyos nombres quedaron apuntados en antecedentes.

La superficie que se concede deberá localizarse conforme al plano proyecto que obra en autos y pasará a ser propiedad del núcleo de población con todas sus accesiones, usos, servidumbres y costumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 23 y 56 de la Ley Agraria, y podrá constituir la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y áreas necesarias para el asentamiento humano.

En la creación de este nuevo centro de población ejidal, deberán de colaborar para el mejor logro en constitución y coadyuvar con las obras de infraestructura económica, así como de la asistencia técnica y social necesaria para su sostenimiento y desarrollo: el Gobernador del Estado de Puebla; las Secretarías de la Reforma Agraria, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Desarrollo Social, de Educación Pública; así como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria, de acuerdo en lo establecido por los artículos 248 y 334 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; los artículos 189 y tercero transitorio de la Ley Agraria; adminiculados con los artículos 1o., 7o., 9o., fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se

RESUELVE

PRIMERO.- Es de dotarse y se dotan para la creación del nuevo centro de población ejidal antes referido de una superficie de 490-00-00 (cuatrocientas noventa hectáreas) son de agostadero de buena calidad y 70-00-00 (setenta hectáreas) son de temporal, que se tomarán de la siguiente manera: 360-00-00 (trescientas sesenta hectáreas), del predio "Rancho Guadalupe la Unión" hoy "El Vaquero", también conocido como "Teponanzingo"; 60-00-00 (sesenta hectáreas), de la fracción de este mismo predio denominada "Mesa de Vergara", 40-00-00 (cuarenta hectáreas), de la fracción de este predio denominada "Mesa de Ixcamaclilla" propiedad para efectos agrarios de Carlos Gallardo González y 30-00-00 (treinta hectáreas) de demasías propiedad de la Nación, del Municipio de Teotlalcingo, Estado de Puebla, en virtud de que permanecieron inexplotadas por más de dos años sin causas justificadas, resultando aplicable los artículos 204 y 251, este último en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria, superficie que se destinará a la satisfacción de necesidades agrarias y económicas de veinticuatro campesinos capacitados cuyos nombres quedaron apuntados en antecedentes. La superficie que se concede deberá localizarse conforme al plano proyecto que obra en autos y pasará a ser propiedad del núcleo de población con todas sus accesiones, usos, servidumbres y costumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 23 y 56 de la Ley Agraria, y podrá constituir la parcela escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer, la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud y áreas necesarias para el asentamiento humano.

SEGUNDO.- Publíquense esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer las cancelaciones respectivas; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes conforme a las normas aplicables y a lo dispuesto en esta sentencia.

TERCERO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Puebla, a las Secretarías: de la Reforma Agraria, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Educación Pública; a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua; ejecútese; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 914/93, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Francisco de Garay, Municipio de Minatitlán, Ver.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 914/93, que corresponde al expediente 7177, relativo a la solicitud de segunda ampliación de ejido, promovida por un grupo de campesinos del poblado "Francisco de Garay", Municipio Minatitlán, Estado de Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, en el juicio de amparo número 191/95, promovido por el Comité Particular Ejecutivo de la ampliación de ejido solicitada por el poblado "Coachapa", del mismo municipio y estado, y

RESULTANDO:

PRIMERO. El Tribunal Superior Agrario, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, emitió sentencia en el juicio agrario número 914/93, correspondiente al poblado señalado al rubro conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"**PRIMERO.-** Es procedente la segunda ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado 'Francisco de Garay', Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota, por concepto de segunda ampliación de ejido, al poblado referido en el resolutivo anterior, con una superficie de 463-00-00 (cuatrocientas sesenta y tres hectáreas) de temporal, afectable conforme al artículo 251, aplicado en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual se tomará de la siguiente manera: del predio 'Lomas de Coachapa' o 'El Jacal', propiedad de Juan Pérez Díaz hoy su sucesión, 93-00-00 (noventa y tres hectáreas); del mismo predio, propiedad de Trifona Alor Zúñiga, 100-00-00 (cien hectáreas; otra fracción del mismo predio con superficie de 65-00-00 (sesenta y cinco hectáreas), propiedad de Terrenos de Jaltipan, S.A.; del predio 'El Cedro', 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas) propiedad de Juan Daniel Alor Alor y Yazmín Márquez Escobar. Esta superficie deberá localizarse conforme al plano proyecto que obra en autos y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres para constituir los derechos agrarios de los treinta y dos beneficiados que se relacionan en el considerando segundo de esta sentencia, y en cuanto al destino de la superficie que se otorga, la asamblea resolverá de acuerdo a las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria...".

Cabe aclarar que las 463-00-00 (cuatrocientas sesenta y tres hectáreas) de temporal que se mencionan en el párrafo anterior, se integran con 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas) del predio "El Cedro" propiedad de Estuardo Guevara Pérez, que se mencionan en el considerando tercero, y se omitieron en este resolutivo.

SEGUNDO. Inconformes con la sentencia por escrito de treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, Plácido Reyes Santiago, Apolinar Pérez Acosta y Asael Torruco Garduza, en su carácter de presidente, secretario y vocal, respectivamente, del Comité Particular Ejecutivo del poblado de "Coachapa", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, interpusieron demanda de amparo ante el Juzgado de Séptimo de Distrito en el Estado, correspondiéndole el número 191/95; previos los trámites de ley, el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, el Juzgado del conocimiento emitió sentencia en dicho juicio, concediéndoles el amparo y protección de la Justicia Federal conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"**UNICO.-** La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a PLACIDO REYES SANTIAGO, APOLINAR PEREZ ACOSTA, y ASEL TORRUCO GARDUZA, en su carácter de Presidente, Secretario y Vocal del Comité Particular Ejecutivo Agrario de la primera Ampliación del Ejido 'COACHAPA' del municipio de Minatitlán, Veracruz, contra los actos de las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta sentencia..."

Los efectos de esta ejecutoria quedaron precisados en el considerando quinto que a la letra dice:

"**QUINTO.-** Son substancialmente fundados los conceptos de violación que esgrimen los quejosos.

Los impetrantes de garantías argumentan en síntesis, que las autoridades señaladas como responsables, vulneran en su perjuicio las garantías de audiencia y de legalidad, que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República (sic), en virtud de que sin haberlos oído ni vencido en juicio, pretenden desposeerlos de noventa y seis hectáreas de terrenos que tienen en posesión

en forma quieta, pacífica, continua, pública y de buena fe, en su carácter de ejidatarios, y para regularizar su posesión, solicitaron ante la Comisión Agraria Mixta, se abriera el procedimiento correspondiente para que por la vía de dotación de ampliación, sin embargo, después de que se instauró su solicitud, también solicitó en ampliación, los mismos terrenos, el ejido 'Francisco de Garay', a pesar de que ya se había dictado dictamen favorable a sus intereses, por el Cuerpo Consultivo Agrario, la referida comisión revocó su determinación y concedió los terrenos que tienen en posesión, al diverso ejido solicitante de ampliación, y que se los pretenden entregar a éstos, cuando que desde hace años los vienen poseyendo. Por tanto, el Cuerpo Consultivo Agrario como el Tribunal Superior Agrario, debieron tomar en consideración el principio general de derecho, en virtud de que solicitaron en primer término la acción agraria, para ser dotados de los terrenos que poseen, y al no haberlo hecho así, fallando en primer lugar el expediente de dotación del ejido ahora tercero perjudicado, es indudable que se violan los preceptos constitucionales que invocan.

Obran en autos, los dictámenes periciales emitidos por la perito del Tribunal Superior Agrario; dictamen pericial del perito oficial de este Juzgado; inspección ocular, y testimoniales ofrecidas por los quejosos, respecto de las noventa y seis hectáreas que tienen en posesión; documentales relativas a los expedientes agrarios número 914/93 y 853/94, del índice de la responsable ordenadora, respecto de la dotación de tierras de los ejidos, quejoso y tercero perjudicado, en el presente juicio. De dichas probanzas, se desprende, que le asiste la razón a los peticionarios de garantías, en virtud de que se advierte que se violan las garantías constitucionales que invocan.

En efecto, de las constancias relativas al expediente agrario número 853/94, respecto a la ampliación de ejidos, solicitada por un grupo de campesinos del poblado denominado 'Coachapa', Municipio de Minatitlán, Veracruz, se desprende, que por resolución de doce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se declaró procedente dicha ampliación solicitada, y se ordenó dotar al referido poblado de 221-50-00 hectáreas, de temporal que se tomarían del predio denominado 'Coachapa', propiedad de Ignacio Castillo Utrera, 171-50-00 hectáreas, del mismo predio, y 50-00-00 hectáreas, copropiedad del antes mencionado y de Delfino Castillo Aguilar. Que dicha superficie se localizará de conformidad con el plano proyecto para pasar a ser propiedad del núcleo de población beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, para constituir los derechos agrarios de los treinta y un campesinos beneficiados.

Por otra parte, obra agregada a fojas de la 107 a la 118 de autos, la resolución de fecha nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, emitida por el Tribunal Superior Agrario en el expediente de solicitud de ampliación de ejidos número 914/93, relativo al poblado denominado 'Francisco de Garay', municipio de Minatitlán, Veracruz, mediante la cual dotó de tierras al referido poblado, con una superficie de 463-00-00 hectáreas de temporal, las que se tomarían de la siguiente manera: Del predio 'Lomas de Coachapa' o 'El Jacal', propiedad de Juan Pérez Díaz, hoy sucesión de 93-00-00 hectáreas; del mismo predio, propiedad de Trifona Alor Zúñiga 100-00-00 hectáreas; otra fracción del mismo predio de 65-00-00 hectáreas, propiedad de Terrenos de Jaltipan, S.A.; del predio 'El Cedro', 102-50-00 hectáreas, propiedad de Juan Dandel Alor Alor y Yazmín Márquez Escobar, superficie que se localizará conforme al plano proyecto, para pasar a ser propiedad del núcleo de población beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres.

Ahora bien, de los relatados expedientes agrarios de solicitud de ampliación de ejidos, promovidos por los aquí quejosos y por los ahora terceros perjudicados, se advierte que ambos ejidos solicitaron como de probable afectación, el predio denominado 'El Jacal', propiedad de Juan Pérez Díaz, sin embargo, el expediente agrario del poblado quejoso, se instauró por la Comisión Agraria Mixta el quince de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, y el expediente del poblado 'Francisco de Garay', fue instaurado por dicha responsable el veinte de junio de mil novecientos ochenta y nueve, de lo que se advierte que dichos terrenos eran susceptibles de ser afectados, y por ende, debieron ser otorgados en primer término al ejido ahora quejoso, en virtud de haberlos solicitado con anterioridad al ejido 'Francisco de Garay', máxime que el comisionado para realizar la investigación de los predios afectables, determinó que la fracción de terrenos del predio 'Lomas de Coachapa', con superficie de 96-33-33 hectáreas, propiedad de Terrenos de Jaltipan, S.A., se encontraba inexplotado por más de dos años sin causa justificada, información ésta que se rindió el treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, es decir, un mes antes de que se radicara la solicitud de dotación del ejido ahora tercero perjudicado, según consta de la resolución dotatoria que obra a fojas de la 98 a la 102 de autos, por lo que es errónea la determinación del Tribunal responsable, al haber resuelto favorable la dotación de tierra en favor de éstos, sin haber tomado en consideración que los integrantes del poblado 'Coachapa', se encontraba en posesión materia de las noventa y seis hectáreas del predio 'Lomas de Coachapa' o 'El Jacal', propiedad de Juan Pérez Díaz, con las que dotó, entre otros terrenos, al ejido 'Francisco de Garay'. Lo anterior, se encuentra debidamente acreditado por el poblado quejoso, por los dictámenes periciales, del perito designado a su favor, así como por el perito oficial de este Juzgado, y la perito designada por el Tribunal responsable, de los que se

desprende que la superficie de aproximadamente noventa y seis hectáreas, fueron otorgadas al poblado 'Francisco de Garay', como segunda ampliación de ejidos, según plano proyecto de localización y ejecución en favor del mencionado núcleo de población, que es el mismo que actualmente cultivan las personas del ejido de 'Coachapa', lo cual se corrobora también, con la diligencia de inspección judicial, ofrecida por los quejosos y que fue desahogada en el mencionado ejido del Municipio de Minatitlán, Veracruz, por el Juez Mixto Menor de esa ciudad, el cual asentó que en el referido terreno existen sembradíos de maíz y frijol, entre otros, así como casas rústicas construidas en dichos terrenos, de madera, palmas y barro, y que los moradores les informaron que pertenecen al ejido 'Coachapa', lo que se corrobora con las testimoniales de Renato y José de apellidos Pérez Pérez, quienes son coincidentes al manifestar que el ejido quejoso están en posesión de los terrenos desde mil novecientos ochenta y cinco, por resolución de la Comisión Agraria Mixta, y que les constan porque viven en el ejido 'Coachapa' desde que nacieron en el mismo.

Así las cosas, resulta evidente que se vulneran en perjuicio de los quejosos las garantías de audiencia y legalidad en el procedimiento agrario, que consagran los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que han demostrado fehacientemente estar en posesión material de las noventa y seis hectáreas del predio 'Lomas de Coachapa', o 'El Jacal', con las que fue dotado el ejido 'Francisco de Garay', por lo que el Tribunal responsable debió haberlos llamado a juicio para que hicieran valer lo que a sus intereses conviniera, respecto del predio en cuestión, en virtud de que, como ya se dijo, éstos solicitaron en primer término la afectación de dichos predios, y al haber demostraron la posesión de los mismos, es lógico que al pretender ejecutar la resolución dotatoria en favor del ejido tercero perjudicado, se vulneran sus garantías puesto que no fueron oídos ni vencidos en dicho procedimiento agrario, lo cual debió haber advertido el Tribunal Superior Agrario al emitir la resolución dotatoria, subsanando dicha deficiencia, tal como lo establece el cuarto transitorio, fracción II, último párrafo, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que establece: 'Si a juicio del Tribunal Superior o de los Tribunales Unitarios, en los expedientes que reciban no se ha observado la garantía de audiencia, se subsanará esta deficiencia ante el propio Tribunal'.

En mérito de lo anterior, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en los términos de los razonamientos anteriormente expuestos.

Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia número mil trescientos cincuenta y uno, publicada en la página dos mil ciento ochenta y dos, Segunda Parte, Salas y Tesis, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo rubro es: 'POSESION. DEBE RESPETARSE. PARA PRIVAR A UN NUCLEO DE POBLACION EJIDAL DE ELLA, SE LE DEBE OIR EN DEFENSA, SEA QUE LA POSESION SEA LEGITIMA O ILEGITIMA.'...".

TERCERO.- En cumplimiento a la citada ejecutoria este Tribunal Superior Agrario emitió acuerdo el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, en los siguientes términos:

"**PRIMERO.-** Se deja sin efectos la sentencia del nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, emitida por este órgano jurisdiccional en el expediente el juicio agrario 914/93, relativo al expediente administrativo agrario 7177, sobre ampliación de ejido al poblado 'Francisco de Garay', Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz.

SEGUNDO.- Túrnese el presente acuerdo al Magistrado Ponente para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, formule el proyecto de sentencia correspondiente, y lo someta a la aprobación de este Tribunal Superior.

TERCERO.- Remítase copia certificada de este acuerdo al órgano de control constitucional respectivo, para acreditar el cumplimiento que el Tribunal Superior Agrario está dando a la ejecutoria de amparo...".

CUARTO.- Tomando en cuenta los efectos de la ejecutoria pronunciada en favor del Comité Particular Ejecutivo del poblado "Coachapa", Municipio de Minatitlán, Veracruz, el Magistrado Instructor dictó acuerdo para mejor proveer el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, en los siguientes términos:

"... En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de la Ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 186 de la Ley Agraria, se considera procedente girar oficio al Tribunal Unitario Agrario del 40 Distrito, con sede en San Andrés Tuxtla, Estado de Veracruz, para que se ordene notificar al poblado 'Coachapa' por conducto de Plácido Reyes Santiago, Apolinar Pérez Acosta y Asael Garduza, como integrantes de su Comité Particular Ejecutivo, la instauración del juicio agrario que nos ocupa para que hagan valer sus derechos en la vía y forma que procede ante este Tribunal expresando sus alegatos y ofreciendo las pruebas conducentes en un término de cuarenta y cinco días con fundamento en el artículo 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria y debiendo para tal efecto acompañarse copia de la ejecutoria a que se ha hecho referencia...".

En cumplimiento del acuerdo anterior el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, el diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, envió las documentales que comprueban que fue debidamente diligenciado el acuerdo de referencia.

QUINTO.- Por escrito de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo de la segunda ampliación de ejido del poblado "Francisco de Garay", Minatitlán, Veracruz, presentaron alegatos en los que argumentan que:

"... los hoy quejosos en el Juicio de Garantía número 191/95, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, nos tienen invadida 65 hectáreas que nos fueron entregados por el ING. JESUS ALMANZA ROA, tal y como consta en el Acta de posesión provisional de fecha 17 de Enero de 1992, mediante el cual se ejecutó el mandamiento del Gobernador del Estado de Veracruz, y dichas 65 hectáreas forman partes del total de 463 hectáreas, que se nos concedió a los suscritos campesinos de la segunda ampliación del ejido FRANCISCO DE GARAY Municipio de Minatitlán, Veracruz, por lo tanto es claro y notorio que los campesinos del poblado Coachapa tienen abandonadas las tierras que le fueron concedidas y que se encuentran descritas en el Alegato número ocho de este H. Tribunal Superior Agrario que dicte una sentencia conforme a derecho declarando que se dota a los campesinos del ejido Francisco de Garay, Municipio de Minatitlán, Veracruz, una segunda ampliación de ejido con una superficie de 463-00-00 hectáreas. (sic)

Por lo ya antes expuesto y fundado a Usted C. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO atentamente pido:

PRIMERO.- Se nos tenga por presentado con este escrito en tiempo y forma, formulando alegatos de nuestra parte...".

SEXTO.- Mediante escritos recibidos en este Tribunal Superior Agrario el siete y veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo de la ampliación de ejido al poblado "Coachapa", Municipio Minatitlán, Estado de Veracruz, presentaron alegatos, en tiempo, en defensa de sus intereses, y ofrecieron las pruebas que se hacen consistir en:

"**1.-** DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la sentencia debidamente ejecutoriada, dictada en nuestro favor en el Juicio Amparo No. 191/95, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz.

2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia debidamente certificada de la Escritura Número 748 de fecha 6 de diciembre de 1960, que obra en la inscripción número 87 del folio 344 al 346, de fecha nueve de febrero del año de 1961, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz y plano de las 96-00-00 hectáreas que tenemos en posesión y que ahora aparece a nombre de Terrenos 'Jaltipan, S.A.', a nombre de quienes fueron afectados para la Segunda Ampliación del Ejido 'Francisco de Garay', Municipio de Minatitlán, Veracruz.

3.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la Escritura No. 13380 del Volumen 112 de fecha 18 de abril de 1985, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coatzacoalcos, Veracruz, de fecha 18 de julio de 1988.

4.- DOCUMENTAL.- Consistente en fotocopia del plano del anteproyecto de ampliación definitiva de ejidos, al poblado 'Coachapa', Municipio de Minatitlán, Veracruz, en el cual aparece la superficie de 96-00-00 hectáreas, que tenemos en posesión y que indebidamente fueron dotadas al poblado 'Francisco de Garay', en segunda ampliación del ejido Francisco de Garay, del Municipio de Minatitlán, Veracruz.

5.- DOCUMENTAL.- Consistente en dictamen de fecha 12 de septiembre del año de 1990, emitido por el H. Cuerpo Consultivo Agrario y por el cual se nos concedían las 96-00-00 hectáreas, que fueron materia del Juicio de Amparo No. 191/995, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz y que corresponden al predio 'Lomas de Coachapa' o 'El Jacal', propiedad de JUAN PEREZ DIAZ, ahora de JALTIPAN, S.A., el cual deberá ser solicitado al H. Cuerpo Consultivo Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, con domicilio en la Calle Azafrán No. 219, Colonia Granjas-México, de la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 08400 de la citada ciudad, en virtud de que los suscritos carecemos de autoridad sobre dicho Cuerpo Colegiado, para que se nos otorguen y que obra en el expediente de ampliación de ejido 'Coachapa', Municipio de Minatitlán, Veracruz.

6.- DOCUMENTAL.- Consistente en fotocopia de la diligencia de inspección judicial, levantada el día treinta de noviembre de 1995, por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto Menor, en atención a lo ordenado por el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Veracruz, ahora Octavo y en el cual se da fe que estamos en posesión de los terrenos 'Lomas de Coachapa' o 'El Jacal', propiedad del señor JUAN PEREZ DIAZ ahora terrenos de Jaltipan, S.A.

7.- DOCUMENTAL.- Consistente en fotocopia del Peritaje, realizado por la Ingeniero BLANCA LILIA SANCHEZ TORRES, perito de ese H. Tribunal Superior Agrario, nombrado en el Juicio de Amparo No. 191/995, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz.

8.- DOCUMENTAL.- Consistente en fotocopia del informe justificado, que rinde el H. Cuerpo Consultivo Agrario, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria y el Director General de Tenencia de la Tierra de la misma institución, en el Juicio de Amparo No. 1743/92, del índice del entonces Juzgado Cuarto de distrito en el Estado de Veracruz, ahora Juzgado Octavo, con residencia en la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, cuya copia certificada solicitamos se pidan

a las expresadas Autoridades, dado que carecemos de autoridad sobre ellas, para ordenarle se nos expida la citada copia, la anterior para que surta sus efectos legales, en el presente juicio de amparo 191/995, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. Lo anterior con fecha 27 de junio de 1991, dictamen que debe también solicitarse al H. Cuerpo Consultivo Agrario.

9.- DOCUMENTAL.- Consistente en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, de fecha 25 de diciembre de 1984, en la cual aparece la solicitud de Ampliación del Ejido 'Coachapa', Municipio de Minatitlán, Veracruz y en la cual se señala como predio presunto afectado el denominado 'El Jacal', propiedad del señor JUAN PEREZ DIAZ, ahora TERRENOS DE JALTIPAN, S.A. y demás fincas rústicas excavadas (sic) dentro del radio legal de siete kilómetros, con lo que se demuestra que la instauración de nuestra solicitud fue anterior a la del expediente del poblado 'Francisco de Garay', y por ende debieron ser otorgados en primer términos a los ahora afectados, por haberlo solicitado con anterioridad. Y que corre agregado en autos en el expediente 7024/84, de la Comisión Agraria Mixta del Estado de Veracruz, que dio origen al juicio 853/94, de este mismo Tribunal, el cual debe tenerse a la vista.

10.- DE INSPECCION JUDICIAL.- Que deberá realizar el personal judicial actuante, en el terreno, materia de este juicio, ubicado en la Congregación de Coachapa, Municipio de Minatitlán, Veracruz, al margen del Río Coatzacoalcos y su afluente.

a).- Constituirse en el predio de referencia y que forman la primera ampliación Coachapa.

b).- Certificar y dar fe que ahí tenemos diversos cultivos entre otros maíz, tomate y las que pueden describirse y observarse al momento de realizarse el desahogo de la presente.

c).- Certificar y dar fe que ninguno de los integrantes, del núcleo de población 'Francisco de Garay', segunda ampliación, tiene siembras o viven en dicho terreno o tienen casa alguna en el mismo.

Nos comprometemos a poner a disposición de este Tribunal o a quien se encomiende el desahogo de esta probanza, los medios materiales para el desahogo de la misma, que tiende a probar que tenemos la posesión de los terrenos, materia del presente juicio.

9.- TESTIMONIAL.- De los señores RENATO PEREZ PEREZ y JOSE PEREZ PEREZ, quienes tienen su domicilio conocido en el poblado 'Coachapa', Municipio de Minatitlán, Veracruz y a quienes me comprometo a presentar el día y hora que se les fije, al tenor del interrogatorio que se adjunta...".

SEPTIMO.- El veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, el Magistrado Instructor pronunció acuerdo en el cual ordena al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, el desahogo de las pruebas testimonial e inspección ocular ofrecidas por el poblado "Coachapa", Minatitlán, Veracruz.

El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40 el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, envió las constancias que acreditan haber dado cumplimiento al acuerdo citado en el párrafo anterior, las cuales se hacen consistir en:

- Notificaciones a los Comités Particulares Ejecutivos de los poblados "Coachapa" y "Francisco de Garay", de doce y quince de agosto de mil novecientos noventa y siete.

- Acta de inspección ocular levantada el veinte de agosto de mil novecientos noventa y siete, la cual en su parte medular señala:

"... principalmente se va a dar fe de los siguientes puntos:

a).- Constituirse en el predio de referencia y que forman la primera Ampliación de Coachapa.

b).- Certificar y dar fe que ahí tenemos diversos cultivos entre otros maíz, tomate y los que pueden describirse u observarse al momento de realizar el desahogo.

c).- Certificar y dar fe que ninguno de los integrantes del núcleo de población de Francisco de Garay segunda ampliación, tiene siembras o viven en dicho terreno o tienen casa en el mismo.

En lo que respecta al primer punto, estoy constituida en el predio como ya lo manifesté al inicio de esta diligencia.

El segundo punto doy fe de que efectivamente se encuentra sembrado maíz, recorriendo los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste, haciendo una totalidad aproximada de superficie cultivo de maíz de 60 hectáreas; también doy fe de que existen cultivos de yuca la cual se encuentra sembrada en líneas rectas, cultivo de plátano, doy fe de que existen pastos mejorados para el ganado, como privilegio, estrella y señal. Y existe también sembrada piña y una superficie pequeña de caña.

En lo que respecta al tercer y último punto de esta diligencia. Doy Fe de que en esta superficie en la que se encuentra ubicado el caserío, en el predio el Jacal, no viven en este lugar ni mucho menos tienen siembras o casa alguna ninguno de los integrantes del poblado Francisco de Garay, segunda ampliación. Lo que corroboro al preguntar en este momento al Presidente del Comisariado Ejidal del poblado mencionado Francisco de Garay.

Una vez desahogada esta diligencia y agostados los puntos ofrecidos procedo a determinar las colindancias de esta superficie en conflicto en el predio el Jacal misma que está integrada de 96-00-00 hectáreas, norte con el C. Juan Pérez Díaz, al Sur con el ejido definitivo Francisco de Garay, al este con el ejido definitivo de Coachapa y al Oeste con el Río Coatzacoalcos...".

- Acta de veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, levantada con motivo del desahogo de la prueba testimonial conforme al siguiente interrogatorio:

"... DIRAN SI SABEN Y LES CONSTA?

1.- Desde cuándo poseen los promoventes la ampliación del Ejido Coachapa.

2.- Qué clase de terreno compone la ampliación del Ejido Coachapa.

3.- Qué cultivan los Ejidatarios de la Ampliación del Ejido Coachapa.

4.- Qué título tienen los ejidatarios de Coachapa, para poseer los terrenos materia de este juicio.

5.- Qué Autoridad les dotó la ampliación del ejido Coachapa.

6.- La razón de su dicho...".

El acta de mérito literalmente dice:

" ... A continuación estando presente el C. JOSE PEREZ PEREZ, a quien se le procede a protestar en términos de ley para que se conduzca con verdad en la diligencia que va a intervenir y advertido de las penas quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial de generales manifestó, 61 años de edad, estado civil, casado, que sí sabe leer y escribir, con instrucción primer año de primaria, originario de TACOJATALPAN, y vecino del ejido COAXAPA, ocupación, campesino, y procede a dar contestación al interrogatorio de la siguiente forma:

1.- r.- desde año de mil novecientos ochenta y cinco; 2.- r.- que es una parte de agostadero y otra de loma; 3.- r.- que siembran maíz, yuca y plátano; 4.- r.- que sí, que tiene su plano y su Diario Oficial; 5.- r.- que no lo recuerda; 6.- r.- que todo esto lo sabe y le consta porque es ejidatario y fundador del ejido de COACHAPA, en uso de la voz el abogado de los integrantes del comité particular ejecutivo del poblado 'SEGUNDA AMPLIACION DE EJIDO FRANCISCO DE GARAY', municipio de Minatitlán, Veracruz, por voz de su asesor agrario procede repreguntar de la siguiente forma:

En relación con la pregunta directa número uno, que diga el testigo porque sabe desde cuando poseen los integrantes del ejido Coachapa la ampliación del ejido Coachapa, se califica de legal, a lo que contestó, r.- que porque ahí vive; en relación la pregunta directa número dos, que diga el testigo, porque le consta la clase de terrenos que componen la ampliación del ejido Coachapa, se califica de legal a lo que contestó, 4.- porque ahí vive; en relación con la pregunta directa número tres, que diga el testigo, porque sabe lo que cultivan los ejidatarios de la ampliación del ejido Coachapa, se califica de legal a lo que contestó, r.- porque ahí vive; en relación con la pregunta directa número cuatro, que diga el testigo, porque le consta los títulos que tiene los ejidatarios de Coachapa, se califica de legal a lo que contestó, r.- porque ahí vive, y que él participa como ejidatario dentro de las asambleas; en relación la pregunta directa número cuatro (sic), que diga el testigo que la autoridad le entregó los títulos a los ejidatarios, se desecha en virtud de que el testigo nunca se refirió a títulos; en relación con la pregunta directa número sexta, que diga el testigo en la razón de su dicho, que diga el testigo, desde cuando se encuentra viviendo en el ejido de Coachapa, se califica de legal a lo que contestó desde el año de mil novecientos cincuenta y cinco, previa lectura ratificó su dicho, firmando al margen para constancia.

A continuación estando presente el C. RENATO PEREZ PEREZ, a quien se le procede a protestar en términos de ley, para que se conduzca con verdad en la diligencia que va a intervenir y advertido de las penas que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, y de generales manifestó llamarse como ha quedado escrito y ser de 65 años de edad, estado civil, casado, que no sabe leer ni escribir, sin instrucción escolar, pero que sabe poner su nombre, originario DE FRANCISCO DE GARAY y vecino de ejido de Coachapa, domicilio, conocido, ocupación, al campo, a quien se le procede a interrogar de la siguiente forma:

1.- r.- desde el año de mil novecientos ochenta y cinco; 2.- que son tierras altas y bajas; 3.- r.- maíz, plátano, caña y yuca; 4.- r.- que sí que cuentan con un dictamen positivo; 5.- r.- La Comisión Agraria Mixta, que está en Jalapa; 6.- r.- la razón de su dicho, que todo esto lo sabe y le consta, porque estas circunstancias las sabe y les constan porque es originario y tiene reconocido la calidad de ejidatario, previa lectura ratificó su dicho, firmando al margen para constancia.- A continuación los integrantes del poblado 'SEGUNDA AMPLIACION DE EJIDO DE FRANCISCO DE GARAY', municipio de Minatitlán, Veracruz, por voz de su asesor agrario procede a formular las siguientes preguntas de la siguiente forma:

En relación con la pregunta directa número primero, que diga el testigo, porque le consta la fecha del tiempo en que posee la ampliación del ejido Coachapa, se califica de legal, a lo que contestó, r.-. porque ahí vive; en relación con la pregunta directa número, segunda, que diga el testigo, porque le consta la clase de terrenos que componen la ampliación del ejido Coachapa, se calificada (sic) de legal a lo que contestó, r.- porque ahí vive: en relación con la pregunta directa número tres, que diga el testigo, porque sabe lo que cultivan los ejidatarios de la ampliación del ejido Coachapa, se califica de legal, a lo que contestó, r.- porque el ahí está y ahí vive, en relación la pregunta directa número cuarta, que diga el testigo, porque le consta el dictamen positivo que poseen los ejidatarios de Coachapan, se califica de legal a lo que contestó, r.- que tuvo conocimiento a través de la asamblea; en relación con la pregunta directa cuatro, (sic) que diga el testigo, qué autoridad le entregó el dictamen positivo a los ejidatarios de

Coachapa, en la ampliación, se califica de legal, a lo que contestó, r.- que fue la mixta agraria; en relación con la pregunta cinco directa, que diga el testigo, en qué fecha les dotó la Comisión Agraria Mixta la ampliación del ejido Coachapa, se califica de legal, a lo que contestó, r.- que en el año de mil novecientos ochenta y cinco; en relación con la pregunta directa número seis con la razón de su dicho, que diga el testigo, qué título tiene para acreditar el carácter de ejidatario, se califica de legal, a lo que constestó, r.- el certificado de derechos agrarios, y que data hace aproximadamente treinta o cuarenta años; previa lectura ratificó su dicho, firmando al margen para constancia.

El Tribunal Unitario Agrario de referencia acompaña a las documentales derivadas de las testimoniales e inspección ocular, los alegatos presentados por los representantes del poblado "Francisco de Garay" ofreciendo pruebas que se hacen consistir en:

"**1.-** DOCUMENTAL.- Consistente en un legajo compuesto de 32 fojas simples útiles de un ejemplar del **Diario Oficial de la Federación**, de fecha 28 de febrero de 1996, que contiene la publicación de la sentencia relativa al juicio agrario número 853/94, dictada por el Tribunal Superior Agrario de México, D.F., el día 12 de julio de 1995, referente a la ampliación promovida por campesinos del poblado denominado Coachapa, perteneciente al Municipio de Minatitlán, Veracruz, en donde con dicha sentencia se comprueba que los campesinos de Coachapa se les concedió en ampliación de ejido 221-50-00 hectáreas, propiedad de los señores IGNACIO CASTILLO UTRERA Y DELFINO CASTILLO AGUILAR.

2.- DOCUMENTAL.- Consistente en tres fojas útiles del acta de deslinde y posesión provisional, total relativa a la ampliación del ejido definitivo 'Coachapa', perteneciente al Municipio de Minatitlán, Veracruz, de fecha 11 de abril de 1985, firmadas por el comisionado de la Superioridad de la Comisión Agraria Mixta, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, el Comisariado Ejidal y Presidente, Secretario y Tesorero del Conejo de Vigilancia, y por que fueron debidamente certificadas por el Notario Público número Dieciséis, LIC. PABLO MARTIN CRUZ HERNANDEZ, de la Ciudad de Minatitlán, Veracruz, Prueba Documental en donde se comprueba que los ejidatarios del poblado Coachapa, recibieron de conformidad una superficie de 221-50-00 hectáreas, en terrenos de temporal para beneficiar a 31 capacitados en materia agraria, propiedad de los señores IGNACIO CASTILLO UTRERA Y DELFINO CASTILLO AGUILAR, con lo cual se demuestra que a los campesinos de Coachapa ya se les concedió una ampliación y que recibieron de conformidad tal y como consta en el acta, con sus medidas y colindancias...".

OCTAVO.- A fin de dar cumplimiento a la precitada ejecutoria, se procedió a revisar el expediente administrativo agrario número 7177, relativo a la solicitud de segunda ampliación de ejido del poblado que nos ocupa, en el cual obran las siguientes actuaciones procesales:

- Por Resolución Presidencial de catorce de mayo de mil novecientos treinta y cinco, publicada en el mismo año y ejecutada el diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, se concedió al poblado "Francisco de Garay", por concepto de dotación de tierras, una superficie de 385-00-00 (trescientas ochenta y cinco hectáreas). No se encontraron antecedentes sobre el número de campesinos capacitados.

- Igualmente, por Resolución Presidencial de nueve de julio de mil novecientos setenta y seis, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el nueve de agosto del mismo año y ejecutada el catorce de los mismos, se concedió al poblado citado en el párrafo anterior, por concepto de ampliación de ejido, una superficie de 1,628-00-00 (mil seiscientas veintiocho hectáreas) para beneficio de cuarenta y cuatro campesinos.

- Mediante escrito de cinco de julio de mil novecientos ochenta y ocho, un grupo de campesinos del poblado en mención, solicitó al Gobernador del Estado de Veracruz, segunda ampliación de ejido, señalando como de probable afectación los predios denominados "El Jacal" y "El Cedro", propiedad de Juan Pérez Díaz.

Propusieron para integrar el Comité Particular Ejecutivo a Juan González Hernández, Esteban Martínez Fernández y Gerónimo Pitalúa Fernández, como Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente.

- La Comisión Agraria Mixta instauró el procedimiento respectivo, el veinte de junio de mil novecientos ochenta y nueve, y lo registró bajo el número 7177, procediendo a notificar dicha instauración al Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, Veracruz, a Juan Pérez Díaz, propietario de los predios señalados como de probable afectación y mediante cédula notificatoria común a todos los propietarios de predios ubicados dentro del radio legal de afectación del poblado solicitante.

- De acuerdo a información que obra en autos, la solicitud del grupo campesino se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz, correspondiente al veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y nueve. Con anterioridad, esto es, el veintinueve de junio del mismo año, mediante oficio número 5020, se comisionó al ingeniero Jesús Almanza Roa para realizar la investigación sobre el aprovechamiento de las tierras, otorgadas al poblado en dotación y ampliación, la elaboración del censo agrario y la inspección de las superficies señaladas como de probable afectación.

- El responsable de los trabajos rindió su informe el diez de enero de mil novecientos noventa, señalando en lo fundamental que las tierras otorgadas en dotación y ampliación al poblado, se encontraron totalmente explotadas y que el resultado del censo arrojó un número de treinta y dos campesinos capacitados. En relación a los trabajos técnicos informativos, en escrito de diez de enero de mil novecientos noventa, manifestó que dentro del radio legal del poblado solicitante existen los ejidos "Zamorano", "El Cafetal", "Las Animas", "Limonta", "La Soledad", "El Progreso", "Monte Oscuro", "El Cedral", "El Tabasqueño", "Antonio Plaza", "El Remolino", "Tacomango", "El Iguanero", "Coachapa", "Tlacosalpan", "Potrerillo" e "Ixhuacan"; asimismo, realizó una investigación en cincuenta y tres predios los cuales tienen una superficie que fluctúa entre las 20-00-00 (veinte hectáreas) de agostadero el menor, a 200-00-00 (doscientas hectáreas) de la misma calidad el mayor, encontrándolos en explotación, por lo que dada su dimensión resultan inafectables. Agregó que los predios que a continuación se detallan resultan afectables por haber permanecido más de dos años sin explotación:

1.- "Lomas de Coachapa", propiedad de Trifona Alor Zúñiga, con superficie de 100-00-00 (cien hectáreas) con escritura inscrita bajo el número 2354, sección primera, folios de 8364 al 8366, de diez de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.

2.- "Lomas de Coachapa", propiedad de Juan Pérez Díaz, con superficie de 100-00-00 (cien hectáreas), con escritura inscrita bajo el número 2355, sección primera, folios 8367 al 8369, de diez de diciembre de mil novecientos setenta y seis. La superficie resultante después del levantamiento topográfico, fue de 93-00-00 (noventa y tres hectáreas).

3.- "Lomas de Coachapa", propiedad de terrenos de Jaltipan, S.A., con superficie de 82-00-00 (ochenta y dos hectáreas) de las cuales 17-00-00 (diecisiete hectáreas) están ocupadas por obras y muelle, por lo que la superficie de probable afectación de este predio sería de 65-00-00 (sesenta y cinco hectáreas); con escritura inscrita bajo el número 2166, sección primera, folios 7389 al 7393, de dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y cinco.

4.- "El Cedro", con superficie de 205-00-00 (doscientas cinco hectáreas) de acuerdo al levantamiento topográfico realizado por el comisionado, propiedad de Estuardo Guevara Pérez, con escritura inscrita bajo el número 708, sección primera, folios 2779 al 2781, el veintisiete de abril de mil novecientos setenta. De esta superficie vendió a Juan Daniel Alor Alor y Yazmín Márquez Escobar, 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas) de acuerdo a escritura inscrita bajo el número 3640, sección primera, folios 15566 al 15568, el ocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho. Los datos de inscripción corresponden al Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, Veracruz. Finalmente señaló que las superficies antes descritas que en total suman 463-00-00 (cuatrocientas sesenta y tres hectáreas) de temporal, se encontraron sin delimitación entre los predios y que "... por el grado de abandono caen dentro de lo estipulado en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ya que han permanecido así por más de dos años consecutivos...". Acompañó a su informe acta circunstanciada levantada el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, para constatar la inexplotación de los predios señalados, así como la notificación hecha en su domicilio a Trifona Alor Zúñiga, Estuardo Guevara Pérez, Juan Daniel Alor Alor y Juan Pérez Díaz, y en donde también consta que el Agente Municipal de Otapa, Municipio de Cotazacoalcos, Veracruz, señaló que dichas notificaciones fueron llevadas al domicilio de las mencionadas personas y éstas se negaron a firmarlas.

- La Comisión Agraria Mixta aprobó su dictamen el tres de enero de mil novecientos noventa y uno, proponiendo dotar al poblado "Francisco de Garay", con una superficie de 463-00-00 (cuatrocientas sesenta y tres hectáreas) que se tomarían de la manera siguiente: del predio "Lomas de Coachapa" o "El Jacal", propiedad de Juan Pérez Díaz, 93-00-00 (noventa y tres hectáreas); del predio "Lomas de Coachapa" o "El Jacal", propiedad de Trifona Alor Zúñiga, 100-00-00 (cien hectáreas), del predio "Lomas de Coachapa", propiedad de Terrenos de Jaltipan, S.A. 65-00-00 (sesenta y cinco hectáreas) del predio "El Cedro", propiedad de Estuardo Guevara Pérez, 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas) y del predio "El Cedro", propiedad de Juan Daniel Alor Alor y Yazmín Márquez Escobar, 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas). La anterior superficie se consideró afectable conforme al artículo 251 aplicado en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria.

- El Gobernador del Estado emitió su Mandamiento el ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, en los mismos términos que el dictamen de la Comisión Agraria Mixta. De acuerdo a información que obra en autos, dicho mandamiento no fue publicado; su ejecución se llevó a cabo el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, de acuerdo al acta de deslinde, amojonamiento y posesión provisional levantada en esa fecha.

Es pertinente señalar que fueron notificados para la diligencia de deslinde, amojonamiento y entrega de los terrenos concedidos como segunda ampliación a Azufrera Panamericana, S.A., que de acuerdo al sello que contiene el citatorio, éste fue recibido el quince de enero de mil novecientos noventa y dos; Juan Daniel Alor y Yazmín Márquez Escobar, según constancia del Agente Municipal correspondiente al poblado Francisco de Garay, estas personas se negaron a firmar el citatorio; Juan Pérez Díaz, Estuardo

Guevara Pérez y Trifona Alor Zúñiga, de acuerdo a lo que hace constar la referida autoridad, se negaron a recibir el citatorio.

- Mediante escrito del diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, Juan Daniel Alor Alor, Yazmín Márquez Escobar y Estuardo Guevara Pérez, comparecieron ante el Cuerpo Consultivo Agrario presentando alegatos en el sentido de que sus predios son inafectables, anexando a dicho escrito copia de escrituras, constancia de fierros de herrar y copia de embarques de ganado. Posteriormente, el seis de marzo de mil novecientos noventa y dos, Trifona Alor Zúñiga, Estuardo Guevara Pérez, Juan Daniel Alor Alor y Yazmín Márquez Escobar, comparecieron por escrito ante la Delegación Agraria en el Estado, manifestando que no fueron notificados para intervenir en los trabajos técnicos informativos y que, en su caso, no se actualiza lo preceptuado por el artículo 251, aplicado en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria, para lo cual presentan un informe de inspección a sus predios, de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y uno, ordenada por la Comisión Agraria Mixta, en el que se señala que los predios propiedad de las personas mencionadas, se encuentran en explotación ganadera, así como un informe relativo a la inspección realizada por la Unidad de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos el veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, en los predios "El Jacal" y "El Cedro", propiedad el primero, de Trifona Alor Zúñiga y Juan Pérez Díaz, y el segundo de Juan Daniel Alor y Yazmín Márquez, en donde se señala que la vegetación predominante en dichos predios está constituida por "... selva alta perennifolia con tiempo aproximado de 15 a 20 años, siendo las siguientes especies forestales predominantes de maderas tropicales corrientes: bari, roble, mezquite, amargoso, etc.; siendo el grosor de esta variable, que van de los 30 a 80 cms. de diámetro con una altura que varía de los 6 a los 13 Mts...". También se aportó un estudio elaborado por la mencionada Dependencia, el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el cual se refiere al uso potencial del suelo del predio "El Jacal".

- La Delegación Agraria en el estado de Veracruz, mediante oficio número 27563 del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y dos, remitió el expediente del caso al Cuerpo Consultivo Agrario, acompañando un resumen del procedimiento y su opinión, que es en el sentido de que se confirme el Mandamiento del Gobernador del Estado.

- El Cuerpo Consultivo Agrario aprobó su dictamen el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, proponiendo ampliación de ejido en los mismos términos que el Mandamiento del Gobernador del Estado y por considerar que el expediente estaba debidamente integrado lo turnó a este Tribunal Superior Agrario para su resolución definitiva.

NOVENO.- Por auto de cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado el presente juicio en este Tribunal Superior Agrario, habiéndose registrado bajo el número 914/93. El auto de radicación se notificó a los interesados y se comunicó a la Procuraduría Agraria, para los efectos legales procedentes.

DECIMO. Por acuerdo dictado por este Tribunal Superior Agrario el cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se solicitó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, que se notificara a los propietarios de los predios propuestos para afectación, el denominado "Lomas de Coachapa" o "El Jacal", con superficie de 65-00-00 (sesenta y cinco hectáreas) propiedad de Terrenos de Jaltipan, S.A., y 93-00-00 (noventa y tres hectáreas) propiedad de Juan Pérez Díaz.

Diligenciado el despacho correspondiente, compareció ante el referido Tribunal, Roberto Guarneros Rojas, apoderado legal de Terrenos de Jaltipan, S.A., personalidad que acreditó con el testimonio de la escritura pública número 11,941 que contiene poder general para pleitos y cobranzas que le fue expedido el siete de octubre de mil novecientos noventa y uno, ante el protocolo del Notario Público número 11 de Minatitlán, Veracruz.

El citado profesionista en escrito de alegatos señala que su poderdante "... nace a la vida pública con la finalidad de adquirir todos y cada uno de los terrenos que, en forma futura o presente, Azufrera Panamericana, S.A., o cualesquiera otra Entidad requiera terrenos para cumplir con los objetivos propios de sus funciones... con fecha 18 de abril de 1985, adquirió mediante contrato de compraventa de los C.C. Juan Pérez Díaz y esposa, 93-33-33 Has. del predio denominado Lomas de Coachapa, ubicados en el Municipio de Mintitlán, Veracruz, las cuales a su vez mediante contrato de comodato cedió a Azufrera Panamericana, S.A.

Al respecto, es improcedente la solicitud de ampliación antes citadas, en donde mi mandante es afectada en sus terrenos, toda vez que, en ningún momento fue legalmente notificada... del mandamiento emitido por el Gobernador del Estado, el ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, el cual no fue publicado como se menciona en el acuerdo notificado a mi representada. Llevándose a cabo su ejecución el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, levantando acta de deslinde, amojonamiento y posesión provisional, lesionando los intereses de mi mandante".

Anexó a su escrito copia certificada de la escritura con que acredita la propiedad del aludido predio.

Por lo que respecta a Juan Pérez Díaz, fue notificada Trifona Alor Zúñiga, de quien el actuario notificador recabó acta de defunción de Juan Pérez Díaz, lo que ocurrió el ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, así como el testimonio de la iniciación del trámite por vía notarial del juicio testamentario de dicha persona, protocolizado ante el Notario Público número 8 de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde consta la aceptación por parte de Trifona Alor Zúñiga, del nombramiento de albacea.

Ofreció como prueba de su parte la inspección ocular, misma que para su desahogo el Tribunal Unitario Agrario señaló las 10:00 horas del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, citando a los interesados. Siendo notificada para la mencionada diligencia, Trifona Alor Zúñiga manifestó:

"... Que su predio 'Lomas de Coachapa', que colinda con el que era de su esposo, y que es de una superficie de cien hectáreas, lo tenía en posesión hasta el mes de enero de 1992, fecha en que los campesinos solicitantes lo tomaron en posesión y le sacaron sesenta y cinco reses más doce caballos de su propiedad... que desde esa fecha el poco ganado que le queda - ya que lo ha ido vendiendo - lo tiene a pasto en terrenos que renta a otras personas. Que hace estas manifestaciones en el momento de notificación ya que en virtud de que por su enfermedad y avanzada edad no podría acudir a la diligencia de inspección ocular que se realizará el veintinueve de agosto del año en curso, y que lo único que solicita es que se le respete su pequeña propiedad que la tenía destinada a la ganadería hasta el año de 1992...".

El día señalado se realizó la inspección ocular, asentando el actuario del referido Tribunal Unitario:

"... Que haciéndose un recorrido por las cien hectáreas se pudo observar lo siguiente: ... Que aproximadamente cincuenta y dos hectáreas, se encuentran sembradas de maíz de temporal sobre la orilla del Río sobre las partes que colindan con el Ejido Coachapa; el resto de las cien hectáreas se encuentra inundado en esta temporada de lluvias de finales de agosto hasta el mes de noviembre. Este maíz lo sembraron treinta y dos campesinos solicitantes de tierras en segunda ampliación..."; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; además se emite en cumplimiento de la ejecutoria del Juzgado Séptimo de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, en el juicio de amparo número 191/95.

SEGUNDO.- La capacidad agraria individual y colectiva del núcleo solicitante, quedó acreditada de conformidad con los artículos 197 fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con diligencia censal levantada el seis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, en la que resultaron treinta y dos campesinos capacitados, cuyos nombres son los siguientes:

1.- Gerónimo Pitalúa Fernández, 2.- Jorge López Soto, 3.- Abundio Fernández Hernández, 4.- Juan González Hernández, 5.- Federico Morales P., 6.- Demetrio Fernández Fernández, 7.- Servando Martínez Fernández, 8.- Sósimo Fernández Hernández, 9.- Fernando Fernández Rivón, 10.- Abelardo Fernández Domínguez, 11.- Lucio Fernández González, 12.- Flora Nazario González, 13.- Sabás López Cortinez, 14.- Andrés Fernández Martínez, 15.- Camilo Fernández Prieto, 16.- Angélica Fernández Rueda, 17.- Pedro Fernández González, 18.- Isidro Fernández Martínez, 19.- José Santana Fernández, 20.- Juan Morales Prieto, 21.- Odón Prieto García, 22.- Felipe Escolástico, 23.- Epitacio Martínez Palomé, 24.- Melquiades Patraca P., 25.- Celestino Martínez Hernández, 26.- Eulalia Toledo L., 27.- Filemón Torres Martínez, 28.- Juana de Dios González F., 29.- Patricio Ortiz Hernández, 30.- Abel Flores Martínez, 31.- Natanael Morales Gutiérrez y 32.- Tomás Martínez Prieto.

Los requisitos de procedibilidad de la solicitud de segunda ampliación de ejido al poblado que nos ocupa, se acreditaron con el informe rendido el dos de enero de mil novecientos noventa por el ingeniero Jesús Almanza Roa del que se conoce que "está total y debidamente aprovechado el ejido".

TERCERO.- El procedimiento seguido del trámite de este juicio agrario se ajustó a lo que para tal efecto establecen los artículos 272, 275, 286, 287, 292 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual resulta aplicable en los términos del citado artículo tercero transitorio del Decreto de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos.

CUARTO.- De lo actuado en el juicio agrario que nos ocupa se llegó al conocimiento con el informe rendido por el ingeniero Jesús Almanza Roa de dos de enero de mil novecientos noventa que dentro del radio de siete kilómetros se investigaron cincuenta y tres predios, los cuales se encontraron totalmente aprovechados con superficies que van de las 20-00-00 (veinte hectáreas) a las 2000-00-00 (doscientas hectáreas) de agostadero por lo cual resultan inafectables en la presente acción agraria.

En relación con los predios que se detallan a continuación, resultan afectables por haber permanecido inexplotados por más de dos años consecutivos sin causa justificada, hecho que se corrobora con el dicho del comisionado en el sentido de que se encontraron abandonados con monte cerrado, muy poblado de

zacate camalote, con árboles de roble, jobo, amate, mulato y palmeras con una altura de 8 a 10 metros y diámetros de 40 a 60 centímetros, y no encontró ganado, por lo que cae dentro de lo establecido en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria interpretado en sentido contrario: "Lomas de Coachapa", propiedad de Trifona Alor Zúñiga, el cual cuenta con una superficie de 93-00-00 (noventa y tres hectáreas) de agostadero; "Lomas de Coachapa", propiedad de Juan Pérez Díaz, con una superficie de 100-00-00 (cien hectáreas) de agostadero; "El Cedro", propiedad de Estuardo Guevara Pérez, con 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas) de agostadero; y el "Cedro", propiedad de Juan Daniel Alor Alor y Jazmín Márquez Escobar, con 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas) de agostadero.

QUINTO.- Respecto del predio "Lomas de Coachapa" o "El Jacal", que cuenta con una superficie de 65-00-00 (sesenta y cinco hectáreas) propiedad de Jaltipan, S.A., y que el poblado "Coachapa" alegó en el juicio de amparo tener mejor derecho que el poblado "Francisco de Garay", habiéndosele concedido la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, Tribunal Superior Agrario, dejara sin efectos su sentencia de nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco y concediera la garantía de audiencia a los quejosos, habiéndose dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito en el aspecto procesal, se valoran las actuaciones que sobre este predio existen y que son:

- El informe de diez de enero de mil novecientos noventa, en el cual el ingeniero Jesús Almanza Roa comisionado para practicar trabajos técnicos e informativos, indica que lo encontró inexplotado, razón por la cual lo propuso como afectable, con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicada en sentido contrario; y

- El mandamiento del Gobernador pronunciado en este expediente el ocho de julio de mil novecientos noventa y uno y ejecutado en sus términos el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, afectó tal predio al estar sin explotación por más de dos años consecutivos sin causa justificada.

En cumplimiento del acuerdo del Magistrado Instructor, se practicaron las siguientes diligencias:

- Un acta de inspección ocular practicada por Dora María Pastrana Rincón, actuaria del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40 en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el veinte de agosto de mil novecientos noventa y siete, la cual en su parte medular señala "... que no viven en este lugar ni mucho menos tienen siembras o casa alguna ninguno de los integrantes del poblado Francisco de Garay, segunda ampliación. Lo que corroboró al preguntar en este momento al Presidente del Comisariado Ejidal del poblado mencionado Francisco de Garay...".

- Acta levantada en audiencia del veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, con motivo del desahogo de la prueba testimonial a cargo de José Pérez Pérez y Renato Pérez Pérez, quienes señalaron primeramente que siempre han vivido en ese predio, que en el mismo no existe ninguno de los integrantes de la ampliación de ejido al poblado "Francisco de Garay" y que quien lo tiene en posesión son campesinos del poblado "Coachapa".

Con los elementos anteriores de prueba, se llega a la convicción de que el predio de mérito lo tiene en posesión el poblado "Coachapa", en tales condiciones, no los beneficia el informe del ingeniero Jesús Almanza Roa quien afirma que el predio se encontró inexplotado, dado que la posesión la tienen los quejosos; en consecuencia no procede su afectación, pues de hacerlo se ocasionaría un problema de tipo social; por consiguiente en el caso en estudio, no se puede soslayar el hecho de que el poblado peticionario no ha tenido la posesión del predio de 65-00-00 (sesenta y cinco hectáreas) denominado "Lomas de Coachapa" o "El Jacal", propiedad de Jaltipan, S.A., no obstante que el mandamiento gubernamental lo afectó en su favor.

SEXTO.- En relación con los alegatos y pruebas ofrecidas por el poblado "Francisco de Garay" detalladas con antelación resultandos quinto y séptimo de esta sentencia es pertinente resaltar que en ningún momento logran probar estar en poder real del predio multicitado y lo único que logran demostrar es que por mandamiento gubernamental se les concedió el predio "Lomas de Coachapa" o "El Jacal", así como que el ejido "Coachapa" ha sido beneficiado con las acciones agrarias de dotación y ampliación de ejido.

SEPTIMO.- En congruencia, es procedente dotar al poblado de referencia con una superficie de 398-00-00 (trescientas noventa y ocho hectáreas) de temporal, ubicadas en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, mismas que se tomarán de la siguiente manera: del predio "Lomas de Coachapa" o "El Jacal", propiedad de Juan Pérez Díaz hoy su sucesión, 93-00-00 (noventa y tres hectáreas; del mismo predio, propiedad de Trifona Alor Zúñiga, 100-00-00 (cien hectáreas); del predio "El Cedro", 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas) del mismo predio propiedad de Estuardo Guevara Pérez y 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas) propiedad de Juan Daniel Alor Alor y Yazmín Márquez Escobar, para beneficiar a treinta y dos campesinos capacitados. Esta superficie pasa a ser propiedad del ejido con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, y en cuanto al destino de las tierras, la asamblea resolverá de acuerdo a las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria y podrá constituir la zona urbana, la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud.

OCTAVO.- Se da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, derivada del juicio de amparo número 191/95, promovido por el Comité Particular Ejecutivo de la ampliación de ejido solicitada por el poblado "Coachapa", Municipio de Minatitlán, en la misma Entidad Federativa.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así como los artículos 80, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la segunda ampliación de ejido promovida por campesinos radicados en el poblado "Francisco de Garay", Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz.

SEGUNDO.- Se dota al poblado de referencia con una superficie de 398-00-00 (trescientas noventa y ocho hectáreas) de temporal, ubicadas en el Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz, mismas que se tomarán de la siguiente manera: del predio "Lomas de Coachapa" o "El Jacal", propiedad de Juan Pérez Díaz hoy su sucesión, 93-00-00 (noventa y tres hectáreas); del mismo predio, propiedad de Trifona Alor Zúñiga, 100-00-00 (cien hectáreas); del predio "El Cedro", propiedad de Estuardo Guevara Pérez, 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas); y del mismo predio, propiedad de Juan Daniel Alor Alor y Yazmín Márquez Escobar, 102-50-00 (ciento dos hectáreas, cincuenta áreas), para beneficiar a treinta y dos campesinos capacitados. Esta superficie pasa a ser propiedad del ejido con todas sus acciones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto al destino de las tierras, la asamblea resolverá de acuerdo a las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

TERCERO.- Publíquense esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, asimismo en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes a que se refiere la presente sentencia y conforme a las normas aplicables.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados; comuníquese al Gobernador del Estado de Veracruz, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría de la Reforma Agraria para los efectos del artículo 309 de la Ley Federal de Reforma Agraria; con copia certificada de esta sentencia al Juzgado Séptimo de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz; ejecútese; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, con la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Angel López Escutia, Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Martha Arcelia Hernández Rodríguez**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 41/95, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado Canoas, Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 41/95, que corresponde al expediente número 3100, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos radicados en el poblado denominado "Canoas", ubicado en el Municipio de Ciudad Valles, en el Estado de San Luis Potosí, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A. 3455/96, promovido por Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González en contra de actos de este Tribunal, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito de veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y uno, un grupo de campesinos del poblado señalado en el proemio, solicitó al Gobernador del Estado dotación de tierras, señalando como de probable afectación diversos predios de propiedad particular, localizados dentro del radio de afectación.

SEGUNDO.- La solicitud se turnó a la Comisión Agraria Mixta en el Estado, la que instauró el expediente respectivo el veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y uno, bajo el número 3100.

La mencionada solicitud se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el siete de noviembre del mismo año.

El Comité Particular Ejecutivo quedó integrado por Francisco Martínez Rojas, Jesús Rosas Briseño y Fernando Rosas Olguín como presidente, secretario y vocal, respectivamente; a quienes el Gobernador

del Estado expidió sus nombramientos en oficios números 9693, 9694 y 9695 de cinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno.

TERCERO.- La Comisión Agraria Mixta habilitó a Alejandro Gómez del Campo, mediante oficio número 75 del veintinueve de enero de mil novecientos setenta y dos, a fin de que procediera a levantar el censo general agrario. El comisionado rindió su informe el veintitrés de mayo del mismo año, señalando que el poblado investigado cuenta con ciento treinta y cuatro habitantes, de los cuales cincuenta y dos tienen capacidad agraria.

CUARTO.- El órgano colegiado que se menciona instruyó al ingeniero J. Isabel Hernández Rómulo, mediante oficio número 15 de veintisiete de noviembre de mil novecientos setenta y tres, para que trasladándose al poblado solicitante practicara los trabajos técnicos informativos a que se refiere el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Al rendir su informe el veinticinco de enero de mil novecientos setenta y cuatro el comisionado constató:

"I.- UBICACION DEL POBLADO.- El poblado solicitante de dotación de ejidos denominado Canoas y que pertenece a esta cabecera municipal se encuentra situada a unos seis kilómetros de Est. (sic) Quinientos hacía el Oeste, de los cuales cuentan con un camino de herradura que solamente en tiempo seco es transitable, el poblado lo forma una sola unidad.

II.- ASPECTO FISICO DEL TERRENO.- En el recorrido que se hizo en los terrenos solicitados por el poblado denominado Canoas, se observó que todos los terrenos son de aspecto arcilloso, susceptible para abrirse al cultivo, teniendo una capa arable de una profundidad de medio metro aproximadamente suficiente para el mantenimiento de las plantas y sostenimiento de las mismas, y en terrenos planos aunque también existe una cerranía pero que tiene partes que pueden abrirse al cultivo, además todos los terrenos de temporal, teniendo parte que puede ser de agostadero principalmente en la parte cerril.

III.- CLIMA DE LA REGION.- El clima de la región se demarca perfectamente bien de acuerdo con las estaciones del año, y en cada estación hay diferente actividad en el campo, ejemplo:

Primavera.- La primavera se presenta calurosa, siendo los meses de marzo, abril y mayo, en estos meses los campesinos comienzan a preparar la tierra para la siembra de temporal (cultivo de maíz) en los lugares donde se efectúan desmontes, aprovechando los meses de marzo, y abril, también se aprovechan los fuertes rayos solares para efectuar la quema de los desmontes en los terrenos donde van a sembrar maíz.

b.- LLUVIAS.- Después de los trabajos que se describen, vuelve la época de siembra, aprovechando el régimen de lluvia que también es una época perfectamente bien demarcada, empezando ésta desde junio hasta septiembre, pero la época de siembra es el mes de junio y parte de julio, tiempo de lluvias en la que el terreno de temporal adquiere la humedad suficiente para el desarrollo del cultivo de maíz. Se hace la aclaración que el mes de mayor precipitación pluvial es septiembre, pues en este mes se presentan fuertes vientos huracanados que en ocasiones perjudican la agricultura, principalmente la siembra de maíz que en esa época se encuentra jilotenado.

IV.- VEGETACION ESPONTANEA.- Por lo que respecta a la vegetación espontánea, puedo informar que existe una parte de los terrenos cubiertos con vegetación de monte alto, en el que existen maderas preciosas, tales como cedro, palo de rosa, chijoles y otras más que pueden utilizarse como madera de construcción y para muebles; esta clase de madera existe principalmente en la cerranía, y por lo que respecta a la parte plana o sea donde está dedicado a la agricultura, solamente existe monte fijo, en la que solo hay madera blanca sin importancia, principalmente el huizache, arbusto que se desarrolla en los terrenos de agostadero.

V.- CULTIVOS A QUE SE DEDICAN LOS SOLICITANTES.- Los solicitantes de dotación del poblado Canoas, no obstante que no tienen terrenos ejidales se han dedicado a la agricultura en los terrenos propiedad del C. Francisco Sironi que se encuentran totalmente abandonados y es el terreno solicitado, teniendo una superficie abierta al cultivo unas 40-00-00 Hs. Teniendo como cultivos principales maíz, frijol y caña de azúcar, teniendo otros cultivos principales en menor escala, todos estos cultivos son de temporal aprovechando la precipitación pluvial a su debido tiempo, todos estos cultivos son en menor escala debido a que no tienen terreno para extender sus cultivos.

VI.- UTILES DE LABRANZA.- Los solicitantes de dotación de ejidos, para ejecutar trabajos agrícolas utilizan, para desmontes usan herramientas comunes; machete, hacha, si es monte alto, el arado en terrenos donde ya es posible trabajar con dicho implemento agrícola, dicho arado es utilizado con yuntas de bueyes o caballos.

VII.- CULTIVOS BASICOS DE LA REGION.- Los cultivos básicos de la región ya se dijo anteriormente que son maíz, frijol y caña de azúcar, siendo este último el cultivo principal, de la variedad luciana, de la cual fabrican el piloncillo que venden en la misma fábrica.

Además de los cultivos básicos de la región también tienen algunos árboles frutales, que recientemente han plantado, tales como naranjos, aguacate y mango, todas estas huertas en baja escala.

VIII.- COSTO DEL CULTIVO.- El costo del cultivo de maíz, por hectárea se cotiza de acuerdo con los trabajos por ejecutar, ya sea desmonte o barbecho, caso de desmonte el costo sería mayor, de acuerdo con la altura del monte.

Costo de desmonte	$400.00
Limpia	350.00
Siembra	150.00
Pizca	150.00
TOTAL	1050.00

En el caso de barbecho el costo es de $250.00 por hectárea.

El costo del cultivo de caña de azúcar, según informes recabados, desde la siembra hasta la cosecha es aproximadamente de $1,500.00, teniendo un rendimiento por hectárea de piloncillo de tres toneladas a razón de $1,700.00 cada una por lo que una hectárea producirá un total en efectivo de $5,100.00.

En el cultivo de la caña de azúcar utilizan abonos e insecticidas, el primero con el fin de obtener mayor desarrollo en la planta y el segundo para el combate de plagas, principalmente la mosca pinta y otras propias de este cultivo.

IX.- CENTROS DE CONSUMO Y VIAS DE COMUNICACION.-

a).- Centros de consumo, el centro de consumo más próximo al poblado solicitante es esta cabecera municipal y Cd. Santos esos lugares son donde la mayoría de los campesinos venden sus productos y al mismo tiempo se abastecen de alimentos para el curso de la semana.

b).- Vías de comunicación.- Para llegar al poblado solicitante, existe un camino vecinal que conduce a Cd. Valles al poblado El Naranjo a la altura del lugar denominado Crucitas, a seis kilómetros de desvía y a caballo se llega por una vereda transitable en época seca.

X.- CASERIO Y AGUA DE QUE DISPONEN.- El caserío en donde viven los solicitantes, es una sola unidad, es decir las casas todas están unidas en una sola zona, la construcción es corriente de madera blanca debido a que él representa el terreno no los deja sacar madera para los fines indicados.

AGUA DE QUE DISPONEN.- Este poblado cuenta con varios manantiales de los cuales disponen para el uso casero como para el abrevadero siendo permanentes dichos manantiales.

XI.- CLASIFICACION DE TIERRAS.- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, son de temporal susceptibles para abrirse al cultivo y no obstante que son terrenos cerriles en algunas partes también pueden ser terrenos laborables.

También en la parte cerril se encuentra madera fina como el cedro rojo y chijol que lo usan para la construcción de sus casas y otras maderas más que las usan para los mismos fines, también informó que en la parte plana existe monte plano con madera sin importancia, siendo esos huizaches que es propio de los potreros abandonados y diferentes arbustos. Esta parte es la más propia para la agricultura y en donde los solicitantes desean trabajar todos los terrenos no están dedicados a la ganadería pues son abandonados por sus propietarios además son de una sedimentación arcillosa, propia para la agricultura.

XII.- CENSO GENERAL AGRARIO.- El Censo General Agrario fue ejecutado por un comisionado de la Comisión Agraria Mixta de San Luis Potosí, el 31 de marzo de 1972, de cuyo censo arrojó un total de 52 capacitados con derechos a parcela de acuerdo con la junta censal, con esta cantidad de capacitados se calcula el monto total de las hectáreas que se necesitarían para los fines intentados.

XIII.- MONTO TOTAL DE LA DOTACION.- De acuerdo a lo expresado anteriormente con relación al número de capacitados con derecho a obtener parcela, de los cuales arroja la cantidad de 52 capacitados y para satisfacer las necesidades de dicho núcleo solicitante se necesitaría la siguiente superficie:

ZONA URBANA	13-00-00 Hs.
52 capacitados a 20 Hs. c/u	1040-00-00 Hs.
Para uso colectivo 4-00-00 Hs.	208-00-00 Hs.
Parcela escolar	20-00-00 Hs.
TOTAL DE HECTAREAS	1281-00-00 Hs.

Que los datos anteriores y con los informes del Registro Público de la Propiedad, además con la identificación de la superficie de los predios, se comprende que existen terrenos para una dotación completa para satisfacer las necesidades del núcleo solicitante.

También me permito informar que los terrenos son de temporal de buena calidad para la agricultura aunque existe una parte que es cerril en un 40% pero ésta se puede utilizar como agostadero.

XIV.- PREDIOS PROBABLES DE AFECTACION.- Entre los predios que se encuentran dentro del radio de afectación del poblado denominado Canoas de este Municipio son los siguientes:

FRANCISCO SIRONI, JESUS ROQUE CAMPOS, HELIO ARREOLA RAMOS, SEVERIANO SANCHEZ, REFUGIO ROSAS VDA. DE REYES, EUTIQUIA ROSAS DE OLVERA y otras propiedades que se encuentran explotadas por sus propietarios.

Por los predios solicitados por los integrantes del núcleo de población mencionado, son los terrenos de los señores: Francisco Sironi, Helio Arreola Ramos y Jesús Roque Campos. Los solicitantes se

encuentran trabajando dentro del predio del Sr. Sironi, el cual se encuentra totalmente abandonado y teniendo una superficie propia para la agricultura.

IX.- INFORME DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.- Para complementar el informe y tener la seguridad del Régimen de Propiedad que guardan los predios solicitados por los vecinos antes citados para la acción intentada, fue necesario solicitar informes en el Registro Público de la Propiedad para ver si esos predios son afectables o no, de los cuales transcribo dichos informes en el presente:

FRANCISCO V. ZIRONI.- Adquirió en la sucesión testamentaria a bienes de la Sra. Rosa Jones de Zironi 124-00-00, 11-00-00, 40-45-89, 498-25-75 y 80-50-00 hectáreas, según registro No. 19 del tomo I de propiedad con fecha 19 de febrero de 1964.

JESUS RENDON CAMPOS.- Adquirió por compra a la Sra. Ana Johana O. De Jones y Roy H. Jones, 808-50-28 hectáreas, según registro No. 111 del tomo I de propiedad con fecha 22 de octubre de 1962, y 135-20-48 hectáreas, según registro No. 113 del tomo I de propiedad el 22 de octubre de 1962.

HONORIO RENDON.- Compró a Florentino Maqueda Ríos, 47-00-00 hectáreas según registro No. 2 del tomo I de propiedad el 29 de enero de 1970 y a Simón Balderas Rivera 100-00-00 hectáreas, según registro No. 103 del tomo I de propiedad con fecha 15 de abril de 1970.

ERNESTO ESPINOSA.- Compró a Jesús Héctor Sulaimán 422-31-00 hectáreas según registro No. 61 del tomo II de propiedad con fecha 10 de noviembre de 1969.- 77-01-00 hectáreas que compró Jesús Pérez Verástegui, según registro No. 30 tomo I de Propiedad de 1972, lo vendió a la Sra. Dolores Flores de Roulet, según registro No. 135 del tomo II de Propiedad con fecha 28 de noviembre de 1973.

LIC. ENRIQUE ESPINOSA A.- Compró a José Sulaimán Chagnón 422-31-00 Hs. según registro No. 62 del tomo II de Propiedad el 10 de noviembre de 1969.

SEVERIANO SANCHEZ ROMO.- Compró a Catherine May Speedie, 155-00-00, 52-00-00 y 85-50-00 hectáreas según registro No. 25 del tomo IV de propiedad de 1967/68 con fecha 30 de noviembre de 1967.

CLEMENTE ARREOLA DURAN.- Adquirió por herencia del Sr. Elio Arreola Ramos 179-35-00-00, 156-89-60, 47-60-00 hectáreas, según registro No. 51 del tomo I de Propiedad de 1972.

PLANO DE CONJUNTO.- El plano de conjunto fue formado por documentos existentes en esta subdelegación agraria de los cuales encierra varias propiedades que se encuentran perfectamente bien demarcadas, también se encuentra en el radio legal de afectación los ejidos definitivos; Damián Carmona y Micos, y algunas propiedades con certificado de inafectabilidad ganadera.

OPINION DEL COMISIONADO.- De acuerdo con lo estipulado por el artículo 203 de la Ley Federal de Reforma Agraria, propongo para su afectación los predios propiedad del Sr. Sironi cuya superficie es de 72-00-00 Hs. las cuales se encuentran ocupadas por los mismos solicitantes por ser un terreno ocioso y abandonado por su propietario, cuenta con una parte que es acahual y susceptible a la agricultura y otro que es cerranía en donde se encuentran maderas para construcción.

De este predio se propone la totalidad de la superficie debido a que desde hace años se encuentra abandonado.

Predios de Dn. Jesús Roque Campos, este predio cuenta con una superficie total de 808-50-328 Hs. de las cuales se le afectan 409-00-00 Hs. para la acción intentada quedando un sobrante de 399-00-00 Hs. más un predio de 135-00-00 Hs.

En este predio son terrenos de temporal susceptibles a la agricultura en toda la parte afectada, aunque también existen algunos lomeríos de escasa elevación.

En total se propone una superficie de 1,281-00-00 Hs. que beneficia a 52 capacitados con derecho a parcela para la dotación de ejidos para el poblado denominado Canoas, perteneciente a este municipio.

OTROS PREDIOS.- En el radio legal de afectación existen otros predios pero por su cerranía no son susceptibles de afectación por tener en su totalidad cerranía, pues solo un 25% sería aprovechable y además los solicitantes no tienen mayor interés en ellos...". (fojas 46 y siguientes del legajo I del expediente en estudio).

Se anexan al informe, el plano informativo que demarca los predios que se ubican dentro del radio de afectación del poblado, incluyendo los ejidos "Damián Carmona" y "Micos", con sus respectivas ampliaciones.

QUINTO.- La Comisión Agraria Mixta instruyó nuevamente a Alejandro Gómez del Campo, mediante oficio número 1127 de catorce de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, para que practicara una investigación en los predios propiedad de Francisco V. Zironi, así como en otros predios, que al parecer son propiedad del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, así como en la Agencia del Ministerio Público para conocer si existe alguna denuncia de invasión por parte de Francisco V. Zironi.

El comisionado informó el veintinueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro que:

"...Me trasladé al poblado de Canoas, acompañado como se me ordenó por el Representante de la presidencia Municipal de Cd. Valles Representante del Comité Regional Campesino Zona No. 13, perteneciente a la Liga de Comunidades Agrarias, Juez Auxiliar de Canoas y de los miembros del Comité

Particular Ejecutivo, se hizo un recorrido de inspección por los terrenos propiedad de Francisco V. Zirone, encontrándose que la superficie de cultivo tiene aproximadamente como 170 Hs. de estas tierras hay abierta al cultivo 60 Hs. que están sembradas de maíz y frijol, la tierra de agricultura en su mayoría es una planicie. La vegetación del terreno cerril que es la mayor parte del predio, compónese (sic) de palo de rosa, cedro, chijol y encino, la de los terrenos que son susceptibles al cultivo es de huizache, aquiche, limoncillo y guayabo, este terreno cuenta con pequeños manantiales de agua.

Después de haber terminado el trabajo de inspección del predio de Francisco V. Zirone, vi el terreno del lote 22, que en su totalidad cerril boscoso, con la misma vegetación que tiene el cerril de Francisco V. Zirone.

Pasé a la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Cd. Valles, para sacar los datos del Registro Público de la Propiedad de los predios números 22, 24 y 25 que son propiedad del Gobierno del Estado, pero el Jefe de la Oficina, me informó que por lotes no tienen registrado ninguna propiedad del Estado, que conforme al plano que yo le presenté iban por las colindancias a buscar a quien pertenecieron esas propiedades, pero este trabajo era dilatado hasta la semana entrante lo terminaría. Le recomendé al Presidente del Comité Particular Ejecutivo de Canoas, que se diera sus vueltas a la Oficina del Registro Público de la Propiedad, para que cuando ya estuvieran listos los trabajos los recogiera y los remitiera a San Luis Potosí, S.L.P.

Estuve en la oficina sub-alterna de renta de Cd. Valles, para solicitar que se me proporcionaran los datos de empadronamiento de los lotes 22, 24 y 25, pero únicamente se encontraron que son propiedad del Estado, los lotes 24 y 25 que fueron propiedad de la American Land Mercantil, se me expidió un comprobante de que son propiedad del Gobierno del Estado.

Me informó el Agente del Ministerio Público de Valles, que en esa Agencia no existe ninguna demanda de invasión por parte del Sr. Zirone o por un supuesto representante del Sr. Zirone, que por esta razón no me expedía ninguna constancia...", (fojas 67 y siguientes del legajo I del expediente en análisis).

Al informe anterior se acompaña acta de inspección ocular, que dice textualmente:

"En el poblado de *CANOAS,* del Municipio de Cd. Valles, del Estado de San Luis Potosí, siendo las catorce horas del día veintisiete del mes de agosto del año de 1974, reunidos en la casa del C. Ignacio Rosas, los CC. Alejandro Gómez del Campo, Representante de la Comisión Agraria Mixta, Roberto Morales Nájera, Representante del Presidente Municipal de Cd. Valles, Alfonso Torres, Representante del Comité Regional Campesino Zona No. 13, perteneciente a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de Campesinos de Valles, Francisco Martínez Rojas, Jesús Rosas Briseño y Fernando Rosas Olguín, presidente, secretario y vocal del Comité Particular Ejecutivo y Juan Rosas Olguín, Juez Auxiliar del poblado de Canoas, para hacer constar lo siguiente; que el Representante de la Comisión Agraria Mixta, dijo que habilitado para notificar en oficio número 1127 de fecha 14 de agosto de 1974, me constituí en la casa de Ignacio Rojas, en compañía de todas las personas mencionadas arriba en la presente acta, para efectuar una investigación relativa sobre el estado de explotación o abandono en su caso, de los predios propiedad de: Francisco Zirone y del Gobierno del Estado, (Lote 22), se procedió de conformidad con lo ordenado en primer lugar una investigación del predio de Francisco V. Zirone, encontrándose que la mayor parte del terreno de Francisco V. Zirone, se encuentra en el más completo abandono y enmontado por más de dos años, que las únicas siembras que se ven en el terreno son siembras de maíz, frijol y caña; pero esos cultivos son propiedad de los vecinos solicitantes de dotación de ejidos del poblado de Canoas, el terreno está circulado en parte con lienzo de alambre de púas, pero es de propiedad de los colindantes con esta propiedad. El terreno está dedicado a la agricultura es plano, pero la mayor parte del predio es terreno cerril boscoso, Al norte: linda con José y Rafael Carrera Moctezuma, Reynaldo Vilches y Marcelino Barrón. Al sur: con la Hacienda de Micos. Al oriente: Félix Roque Campos, Ma. Guadalupe Sánchez, Carmelo Navarro, Ray H. Jones, Helio Arreola Ramos y Clemente Arreola Durán, Al poniente Edmigio Reyes Rosas. La capa arable del terreno es de medio metro. El lote número 22, que dicen que es propiedad del Gobierno del Estado, con terrenos cerriles boscosos... propios únicamente para agostadero, no están circulados. Los lotes 24 y 25 son terrenos cerriles en su totalidad propios también para la ganadería, el lote 24 está sin circular y el 25 está circulado en parte con alambre de púas. En los predios colindantes con la propiedad de Francisco V. Zirone, no hay ninguna persona ya sea propietario o encargado de rancho, para que firme la presente acta. La mayor parte de los habitantes que viven en canoas, dicen que no conocen para nada a Francisco V. Zirone, pues nunca se para en este rancho. Informan los vecinos de Canoas, que una Sra. que se llama Irene Jiménez, les cobraba el partido de las siembras que el tercio de maíz, esta señora se decía dueña del terreno, pero nunca pudo comprobar con escrituras ser la dueña de estas tierras...", (fojas 72 y siguientes del expediente en análisis).

Obran en autos igualmente tres constancias expedidas por el jefe de la oficina Sub-alterna de Rentas de Ciudad Valles, San Luis Potosí, expedidas los días, una el seis de septiembre, y dos más el veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y cuatro; en la primera de ellas se hace constar que en la cuenta número 1-5-2872, a nombre del Gobierno del Estado, entre otros predios se encuentra registrado el lote

número 26, que perteneció a la American Land and Mercantil, con una superficie de 73-00-00 (setenta y tres hectáreas); otra señala que en la cuenta número 1-5-2872 abierta a nombre del Gobierno del Estado se encuentran registrados, entre otros predios, los lotes 24, con superficie de 146-00-00 (ciento cuarenta y seis hectáreas), y el lote número 25, con superficie de 146-00-00 (ciento cuarenta y seis hectáreas), que pertenecieron a la American Land and Mercantil; en la última de las constancias el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, certifica textualmente que: "...realizada una búsqueda en los libros de esta oficina, no se encontraron antecedentes respecto de los lotes números 22, 24 y 25, que se dice son propiedad del Gobierno del Estado...".

SEXTO.- La Comisión Agraria Mixta aprobó dictamen positivo el veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, proponiendo conceder la dotación al poblado promovente en una superficie total de 985-80-00 (novecientas ochenta y cinco hectáreas, ochenta áreas) de agostadero cerril, que se tomarían afectando 498-25-75 (cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, veinticinco áreas, setenta y cinco centiáreas) propiedad de Francisco V. Zironi, 365-00-00 (trescientas sesenta y cinco hectáreas) de terrenos propiedad del Gobierno del Estado y 122-54-25 (ciento veintidós hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, veinticinco centiáreas) baldíos; aclarando que dejaba al criterio de la Secretaría de la Reforma Agraria la afectación de los predios propiedad del citado Francisco V. Zironi, ya que éstos se encuentran amparados por certificado de inafectabilidad.

SEPTIMO.- El Gobernador del Estado emitió su mandamiento el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, concediendo al poblado solicitante una superficie total de 985-80-00 (novecientas ochenta y cinco hectáreas, ochenta áreas) de agostadero cerril, en los mismos términos del dictamen de la Comisión Agraria Mixta.

El mandamiento gubernamental se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y cinco.

El órgano colegiado de referencia designó al ingeniero José Luis Calderón Rocha mediante oficio número 339 de veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y cinco para que ejecutara el mandamiento gubernamental. El comisionado informó el veintisiete de mayo del mismo año:

"...Trasladándome al núcleo de población denominado Las Canoas, Municipio de Valles de este Estado, me puse en contacto con los miembros del Comité Particular Ejecutivo Agrario para notificarles el motivo de mi presencia:

Este poblado presentó solicitud con fecha 27 de septiembre de 1971, turnándose a la Comisión Agraria Mixta el 20 de octubre del mismo año, el dictamen se dio con fecha 23 de diciembre del año próximo pasado.

Después de haber comunicado a los miembros del Comité Particular Ejecutivo Agrario y al grupo de solicitantes cual sería el trabajo a desempeñar, procedí a enviar notificación de aviso de posesión, a el C. Francisco V. Zirone la cual no se recibió por la persona antes mencionada, pues por años no reside en su propiedad, también hago mención que a ningún propietario afectado se le envió cédula notificatoria de plazo para levantar cosechas o desocupar terrenos de agostadero, en virtud de no existir cosechas pendientes, ni ganado dentro de las propiedades afectadas y haciendo mención de que las únicas cosechas y trabajos de labor realizados son las de los campesinos solicitantes ya beneficiados con el mandamiento del C. Gobernador Constitucional del Estado.

Se giraron avisos de deslinde a todos y cada uno de los colindantes habiendo quedado de acuerdo en respetar los linderos marcados con la brecha.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS.- Para la realización de estos trabajos se empleó un teodolito marca ROSSBACH de un minuto de aproximación en ambos círculos, la constante grande de 100 y la chica reducción a O, se emplearon estadales centecimales, las distancias se observaron en sentido directo e inverso, lo mismo que los ángulos horizontales y verticales, para mayor comprobación utilizándose el método de ángulos exteriores para el polígono No. 1 y horizontales para el polígono No. 2, habiéndose realizado entre los dos polígonos línea de liga para unirlos entre sí.

TRABAJOS DE GABINETE.- Estos trabajos se desarrollaron primeramente calculando los polígonos y la línea de liga, desde rumbos astronómicos hasta coordenadas del resultado de éstas, se proyectó el plano que fue dibujado a escala 1:40,000 se hace la aclaración que en Bienes Nacionales, al planimetrar dicha propiedad se excedió en superficie en relación a lo ordenado en el mandamiento del C. Gobernador Constitucional del Estado por lo que fue necesario ajustar la superficie, en una línea de 17-00-00 Has., por lo que respecta, en apego a lo ordenado por el Mandamiento del Gobernador Constitucional del Estado, por no localizarse más terreno en dicha propiedad...", (fojas 101 y siguientes del legajo I del expediente en análisis).

El comisionado anexa a su informe acta de posesión y deslinde levantada el cinco de abril del año que se menciona, en el poblado Canoas, en la que se dice lo siguiente:

"...En el poblado de las Canoas, Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, siendo las doce horas del día 5 de abril de 1975 mil novecientos setenta y cinco, reunidos en la Escuela del lugar, los

CC. Ing. José Luis Calderón Rocha, comisionado por la Comisión Agraria Mixta en el Estado, según oficio No. 339 de fecha 26 de febrero del presente año, para ejecutar el deslinde provisional de los terrenos concedidos en dotación de ejidos al poblado arriba mencionado, por el Mandamiento dictado por el C. Gobernador Constitucional del Estado, de fecha 23 de diciembre del año próximo pasado el cual se ejecutó en forma parcial, Jesús Rosas B., Luis Perales, Demetrio Reyes, presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, así como el consejo de vigilancia y Juez Auxiliar, así como la mayoría de los vecinos de este lugar, con derechos plenamente reconocidos para beneficiarse con la dotación de ejidos concedida por el mencionado mandamiento, y cuyos puntos resolutivos expresan: PRIMERO.- Es procedente la solicitud de dotación de ejidos, promovida por los vecinos del poblado de Canoas, Municipio de Ciudad Valles, de este estado, con fecha 27 de septiembre de 1971.- SEGUNDO.- Es de concederse y se concede al ya mencionado poblado de Las Canoas, Municipio de Ciudad Valles, por concepto de dotación de ejidos una superficie de 985-80 (NOVECIENTAS OCHENTA Y CINCO HECTAREAS, OCHENTA AREAS), de agostadero cerril que se afectarán de la siguiente forma: al C. Francisco V. Zirone 498-25-75 Hs. al gobierno del Estado lotes 24, 25 y parte del 26 del fraccionamiento de Micos, con una superficie total de 365 Hs. y el lote No. 22 del mismo fraccionamiento considerado como bien nacional con una superficie de 122-54-25 Hs. la superficie afectable se destinará al uso colectivo de los solicitantes, dejándose a salvo los derechos en materia agraria, de los 51 individuos capacitados que resultaron del censo respectivo, para que los ejerzan si a sus intereses conviene por la vía legal que corresponda.

Se dio principio a la diligencia dando lectura al mandamiento del C. Gobernador Constitucional del Estado, y en seguida el comisionado en unión de los presentes hizo conocer los linderos general de acuerdo y teniendo a la vista el plano proyecto elaborado.

Se inició el recorrido del perímetro de los predios afectados, partiendo del predio propiedad del C. Francisco V. Zirone, en el vértice No. O denominado mojonera El Soyate, con una distancia 495.98 Mts. Y con rumbo astronómico de NW 29°19', se llegó al vértice No. 3 marcado en el plano, teniendo a la derecha de este recorrido a la dotación provisional de ejidos del poblado en referencia y a la izquierda la propiedad del C. Emilio Reyes Rosas de este vértice se parte con rumbo astronómico NW 29°15' y distancia de 1764.57 Mts. Se llega al vértice No. 9 denominado mojonera El Mirador, teniendo a la derecha de este recorrido la dotación del poblado en referencia y a la izquierda la propiedad del C. Emilio Reyes Rosas de este vértice se parte con rumbo astronómico NW 29°15' y distancia del 1764.57 Mts. Se llega al vértice No. 9 denominado mojonera El Mirador, teniendo a la derecha de este recorrido la dotación del poblado en referencia y a la izquierda a las propiedades primeramente a la del C. Emilio Reyes R. y a la del C. Manuel González Perales, de este vértice se continúa con rumbo NE 58°24' y distancia de 2868.64 Mts. Se llega al vértice No. 20 denominado mojonera El Orejón, teniendo a la derecha de este recorrido a la dotación provisional del poblado de referencia y a la izquierda terrenos baldíos de este vértice se continúa con rumbo SE en línea quebradas y distancia de 2,289.96 Mts. Se llega vértice No. 34 denominado mojonera La Pasadita, teniendo a la derecha de este recorrido primeramente la dotación provisional del poblado de referencia y a la izquierda primeramente a la pequeña propiedad de Rancho Nuevo y a continuación la propiedad del C. Francisco V. Zirone, terrenos que usufructúan los vecinos de Las Canoas, de este vértice se continúa con rumbo SW 59°00' promedio y distancia de 2,827.70 se llega al vértice No. 0 denominado mojonera El Soyate, punto de partida, teniendo a la derecha el recorrido a la dotación provisional del poblado en referencia, y a la izquierda a la propiedad del C. Ernesto Espinoza Moya, envolviendo este polígono una superficie de 638-00-00 Hs. superficie que es mayor a la ordenada en el Mandamiento del C. Gobernador Constitucional que ordena 920-80-00 Hs. por lo cual se ajusta la superficie en una línea que abarca 17-20-00 Hs. de aquí se traslada al vértice No. 8 denominado mojonera El Mirador partiendo con un rumbo NW 29°15' y una distancia de 1766.33 Mts. Llegando al vértice No. 65 denominado mojonera La Posada teniendo a la derecha primeramente el terreno baldío y seguida a la propiedad del C. Manuel González Perales esta línea se trazó para ligar a los dos predios, del vértice No. 65 se continúa con un rumbo NE 8°44' y una distancia de 1945.80 Mts. Llegando al vértice No. 77 denominado mojonera La Chaca teniendo a la derecha del recorrido a la propiedad del C. José Cabrera Moctezuma y a la izquierda a la dotación provisional del poblado en referencia, de este vértice se parte con rumbo NW 31°454' y una distancia de 1820.69 Mts. Llegando al vértice No. 98 denominado mojonera El Rincón, teniendo a la derecha de este recorrido a la propiedad del C. Helio Arreola Ramos y a la izquierda a la dotación del poblado en referencia de 1754.05 Mts. Se llega al vértice No. 117 denominado mojonera El Cedro teniendo a la derecha de este recorrido a la propiedad del C. Helio Arreola Ramos y a la izquierda a la dotación del poblado en referencia de este vértice se continúa con un rumbo SW 58°46' y una distancia de 1754.05 Mts. Se llega al vértice No. 117 denominado mojonera El Cedro teniendo a la derecha el No. 26 del Fraccionamiento de Micos, y a la izquierda a la dotación del poblado en referencia de este vértice parte con un rumbo SE 29°17' y una distancia de 1834.43 Mts. Llegando al vértice No. 65 denominado mojonera La Posada, aun propiedades de Soya Verde y a la izquierda a la

dotación del poblado en referencia este polígono abarca una superficie de 330-00-00 Hs. ya que no se localizó más superficie.

Terminado lo anterior, el C. Ing. Luis Calderón Rocha, declaró: En nombre del C. Gobernador Constitucional del Estado y en cumplimiento a su fallo de fecha 23 de diciembre de 1974, concedió dotación de ejidos al poblado de Las Canoas, Municipio de Cd. Valles, Estado de San Luis Potosí, doy posesión de la superficie de 985-80 Hs. ejecutadas en forma parcial respecto al mencionado mandamiento de terrenos de agostadero cerril que se han descrito en el plano proyecto haciéndose formal entrega de ellas al Presidente del Comisariado, el Presidente del Comisariado Ejidal dijo: En nombre del poblado de Las Canoas, Municipio de Cd. Valles, Estado de San Luis Potosí declaro que son de recibirse y se reciben los terrenos que por concepto de dotación de ejidos fueron concedidos a este poblado, comprometiéndose a respetar las instrucciones dadas y que en lo sucesivo dieren para la buena administración del ejido.

Se hacen constar que con la debida anticipación se giró citatorios a los propietarios y representantes dentro de los terrenos afectados, señalándoseles día y hora y lugar, asimismo se giró citatorios a los colindantes, para hacerles conocer los terrenos fijados. Se hace constar que no aceptaron firmar las mencionadas notificaciones...", (fojas 104 y siguientes del legajo I del expediente en análisis).

OCTAVO.- Previo resumen del expediente en análisis, el Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de San Luis Potosí emitió su opinión el diecisiete de junio de mil novecientos setenta y seis, en el sentido de ratificar en su fondo el mandamiento del gobernador, y modificarlo en cuanto a la superficie concedida; y mediante oficio número 03453 de veintinueve de julio del mismo año, remitió el expediente al Cuerpo Consultivo Agrario para su trámite subsecuente.

NOVENO.- A solicitud del Cuerpo Consultivo Agrario, la Dirección General de Tenencia de la Tierra instauró el procedimiento tendiente a dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de ocho de febrero y de dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el primero de junio de mil novecientos cincuenta y el dos de enero de mil novecientos cincuenta y uno, y cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola números 48711 y 60001 expedidos en favor de Rosa Lee Jones y John Albert Jones respectivamente, para amparar los predios conocidos como lotes 57 y 58, fracción del lote 59 y fracción del lote 111 del denominado fraccionamiento "Elk City Oklahoma México Colony", todos ubicados en el Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, que amparan una superficie total de 235-00-00 (doscientas treinta y cinco hectáreas) de temporal y agostadero cerril propiedad de Francisco V. Zironi, por haber permanecido inexplotados durante más de dos años consecutivos sin causa justificada, es decir, al integrarse la hipótesis que señala el artículo 418, fracción II de la Ley Federal de Reforma Agraria. La citada Dirección General emitió su dictamen el diez de junio de mil novecientos ochenta y uno, declarando procedente dejar sin efectos jurídicos los ya mencionados acuerdos presidenciales, así como cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola números 48711 y 60001 a que se hace referencia.

El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria resolvió, conforme a las facultades que le concedía la fracción XX del artículo 10 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en siete de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, dejar sin efectos los acuerdos presidenciales de ocho de febrero y dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta de que se trata y, en consecuencia, cancelar los multicitados certificados de inafectabilidad.

Al respecto, obra en autos constancia expedida por el Secretario del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el nueve de mayo de mil novecientos setenta y ocho, en la que certifica que Francisco V. Zironi no es vecino ni tiene registrado su domicilio en ese municipio; constancia que expidió a solicitud de las autoridades ejidales del poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí.

De constancias que obran a fojas 39 y siguientes del legajo VI del expediente en estudio, se conoce que la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, y especialmente la Dirección General de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria trataron de notificar personalmente a Francisco V. Zironi en diversas ocasiones, y al no conseguirlo, la citada Dirección General de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria mandó efectuar la notificación por edictos, que se publicaron los días cinco, doce y diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y nueve en el periódico "La Prensa", de la ciudad de México, Distrito Federal, y en el **Diario Oficial de la Federación** los días veinticuatro de febrero, cinco y dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, haciéndole saber al citado Francisco V. Zironi, que al ignorarse su domicilio se le notifica de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia agraria, que la Dirección General de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria instauró procedimiento para dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de ocho de febrero y dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de primero de junio de mil novecientos cincuenta y dos de enero de mil novecientos cincuenta y uno, para cancelar las inscripciones en el

Registro Agrario Nacional de los certificados de inafectabilidad agrícola número 48711 y 60001, que amparan los predios denominados lotes 57, 58, 59 y 111 del fraccionamiento "Elk City Oklahoma México Colony" de su propiedad.

DECIMO.- Obran en autos igualmente trabajos técnicos practicados por el ingeniero Genaro González Padilla, quien rindió informe el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en atención al oficio de comisión número 4663 de veintinueve de septiembre del mismo año, girado por la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de San Luis Potosí, quien le encomendó la práctica de trabajos informativos complementarios.

El comisionado expresa textualmente:

"Antecedentes.- El poblado Canoas, Municipio de Valles, S.L.P. fue dotado de ejido en forma provisional, según mandamiento del gobernador del Estado, de fecha 23 de diciembre de 1974, concediendo una superficie total de 985-60 Has. Y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 16 de enero de 1975; y ejecutado en forma parcial el 5 de abril de 1975.

El lote 57, fracción del lote 57 de la Elk City Oklahoma México Colony, Municipio de Valles, S.L.P. propiedad de la señorita Rosa Lee Jones, de nacionalidad norteamericana, con una superficie de 80-50-00 Has. Amparadas con certificado de inafectabilidad 48711, de fecha 3 de junio de 1950, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 1 de junio del mismo año.

De los lotes 58, 59 y 111 del fraccionamiento Elk City Oklahoma México Colony, Municipio de Valles, S.L.P. propiedad de John Albert Jones, de nacionalidad norteamericana, con superficie de 154-50-00 Has., amparadas con certificado de inafectabilidad 60001, de fecha 10 de enero de 1951, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 2 de enero del mismo año.

Actuaciones.- Se citó a los colindantes de los dos predios que se acaban de mencionar para tratar de aclarar el déficit derivado de los trabajos técnicos informativos, respecto al predio propiedad del C. Francisco V. Zironi, que originalmente fueron los CC. Rosa Lee Jones y 112-00-00 Has. Del predio propiedad del C. John Albert Jones, también en posesión de los vecinos ejidatarios del poblado Canoas y las 42-40-00 del lote 111 que se cita en antecedentes está en posesión total la C. Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre Liaño, amparados con escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Valles, S.L.P. bajo el número 83 del tomo IV de la Propiedad, que se encuentra totalmente explotado con cultivo de caña de azúcar...", (fojas 34 y siguientes del legajo V del expediente en análisis).

DECIMO PRIMERO.- De copia fotostática certificada por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, expedida el veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, que obra a fojas 14 y siguientes del legajo VI del expediente que se estudia, se conoce que Francisco V. Zironi denunció ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil en la Ciudad de San Luis Potosí el juicio sucesorio intestamentario a bienes de la señora Rosa Jones de Zironi, con quien había contraído matrimonio el veintiséis de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, y quien falleció el nueve de abril de mil novecientos sesenta y uno; y por Resolución Judicial de veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, se le declaró único y universal heredero de la sucesión, adjudicándosele en propiedad: 124-00-00 (ciento veinticuatro hectáreas) de predios sin nombre, 11-00-00 (once hectáreas) de un predio ubicado en el punto conocido como "Las Moritas", predio ubicado también en "Las Moritas" con superficie de 40-45-89 (cuarenta hectáreas, cuarenta y cinco áreas, ochenta y nueve centiáreas), además de un lote de 498-25-75 (cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, veinticinco áreas, setenta y cinco centiáreas) colindante al oriente con los lotes números 57, 58 y 59 del fraccionamiento "Elk City Oklahoma México Colony"; todo ello inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de San Luis Potosí el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, bajo el número 19 del tomo I de propiedad.

DECIMO SEGUNDO.- La Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado comisionó al ingeniero Guillermo Rocha González, mediante oficio número 2695 de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y tres, para que efectuara los trabajos técnicos de localización de los predios que resultaron afectables, de acuerdo con el dictamen emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y uno, según el cual la superficie total a dotarse, se integraba de 1,185-80-00 (mil ciento ochenta y cinco hectáreas, ochenta áreas).

El comisionado informó el doce de agosto del mismo año que los trabajos de campo consistieron en levantar poligonales cerradas por ángulos interiores y exteriores, según el caminamiento ligadas cada una entre sí; diligencia que arrojó una superficie analítica de "...polígono I.- 510-09-17.70 has... polígono II.- 81-35-49.24 has... polígono III.- 160-47-23 has... polígono IV.- 329-34-49 has... polígono V.- 133-87-50 has...", señala el comisionado que existe una diferencia de 29-33-88.94 (veintinueve hectáreas, treinta y tres áreas, ochenta y ocho centiáreas, noventa y cuatro miliáreas) las que se consideran dentro de los límites de tolerancia debido a las calidades del terreno, que son uno por ciento de riego o humedad, tres por ciento de temporal, cinco por ciento de agostadero en monte y ocho por ciento de terrenos áridos,

porcentajes estipulados en el instructivo técnico, por lo que "se tomaron las mismas superficies" del dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario que se cita.

DECIMO TERCERO.- Obra en autos oficio número 116/994 de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, emitido por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual informa a la Secretaría de la Reforma Agraria, que después de efectuar una búsqueda minuciosa en el archivo de ese Registro a su cargo, encontró que los lotes números 24, 25 y fracción del lote 26 que pertenecieron a la "American Land and Mercantil Co.", están inscritos bajo el número 2 del tomo II, según inscripción de dieciocho de octubre de mil novecientos cincuenta y seis como propiedad del Gobierno del Estado. Y en relación al lote número 22, éste no se encontró inscrito a nombre de persona alguna, y que sobre este predio no existen antecedentes registrales.

DECIMO CUARTO.- El Cuerpo Consultivo Agrario remitió a este Tribunal el expediente para su resolución definitiva, por considerarlo debidamente integrado.

DECIMO QUINTO.- Por auto de dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, se tuvo por radicado en este Tribunal Superior Agrario el expediente de dotación de tierras promovido por campesinos del poblado denominado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, el cual fue registrado con el número 41/95; se notificó a los interesados y se comunicó a la Procuraduría Agraria para los efectos legales procedentes.

DECIMO SEXTO.- Este órgano jurisdiccional dictó sentencia el ocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco en los autos del juicio agrario número 41/95 relativo a la solicitud de dotación de tierras promovida por un grupo de campesinos radicados en el poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, declarando procedente la dotación solicitada y concediendo al núcleo de referencia una superficie total de 1,185-80-00 (mil ciento ochenta y cinco hectáreas, ochenta áreas) afectando con fundamento en el artículo 251 interpretado en sentido contrario de la Ley Federal de Reforma Agraria una extensión de 498-25-75 (cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, veinticinco áreas, setenta y cinco centiáreas) de agostadero en monte; así como el lote número 57 del fraccionamiento "Elk City Oklahoma México Colony" con 80-50-00 (ochenta hectáreas, cincuenta áreas) de temporal, el lote 58, fracción del 59 y fracción del 111 del mismo fraccionamiento con 154-50-00 (ciento cincuenta y cuatro hectáreas, cincuenta áreas) de temporal.

DECIMO SEPTIMO.- Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González interpuso amparo por escrito presentado el doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Superior Agrario, contra actos de este órgano jurisdiccional; el amparo se radicó bajo el número D.A. 3455/96 en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, autoridad que por resolución de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, concedió el amparo solicitado, por considerar que este órgano jurisdiccional no respetó a la quejosa, la garantía de audiencia, señalando en el considerando sexto de su ejecutoria que:

"...Le asiste la razón a la parte quejosa al manifestar que el Tribunal Superior Agrario, infringió en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no obstante que ofreció pruebas, éstas no fueron valoradas.

Lo anterior es así, pues como ya se precisó, la quejosa compareció por escrito de fecha once de octubre de mil novecientos ochenta y dos, ante el ingeniero Genaro González Padilla, comisionado por el Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de San Luis Potosí, a efecto de llevar a cabo el levantamiento topográfico ordenado por el Director General de la Tenencia de la Tierra; escrito al que acompañó diversas pruebas; asimismo, con fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, compareció ante el actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Quinto (sic) (quien le notificó el acuerdo de radicación del expediente agrario en el tribunal responsable), ofreciendo también pruebas a fin de acreditar que es propietaria de una fracción del lote número ciento once del fraccionamiento Elk City Oklahoma México, Colony, materia de afectación; sin embargo, como puede advertirse de la lectura de la resolución reclamada, el Tribunal Superior Agrario no se ocupó del estudio de dichas pruebas, con lo cual, como ya se dijo infringió en perjuicio de la quejosa sus garantías de legalidad y seguridad jurídicas consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales... por ello procede conceder la protección federal, a fin de que, al dictarse nueva sentencia, se tomen en consideración las pruebas que no fueron estimadas...".

DECIMO OCTAVO.- En cumplimiento a la ejecutoria anterior, este Tribunal Superior Agrario declaró, por acuerdo de doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, dejar insubsistente la sentencia emitida el ocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco en el expediente del juicio agrario número 41/95, correspondiente al expediente administrativo agrario número 3100 relativo a la solicitud de dotación del núcleo de referencia; y ordenó turnar los autos al Magistrado Ponente para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, formulara el proyecto de sentencia correspondiente, sometiéndolo a la aprobación del pleno de este Tribunal Superior Agrario.

DECIMO NOVENO.- Este órgano jurisdiccional dictó acuerdo para mejor proveer al cumplimiento de la ejecutoria de referencia, en los autos del presente juicio agrario, el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, con objeto de aclarar la situación del predio propiedad de la quejosa Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo D.A. 3455/96, y respetar en beneficio de la referida quejosa su garantía de audiencia.

Para dar cumplimiento al mencionado acuerdo se giró despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, para que allegándose de los peritos que fuesen necesarios, ordenara la práctica de trabajos técnicos informativos, tomando en cuenta el plano proyecto de localización de la dotación provisional al poblado "Canoas", que se anexó al despacho.

El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45 con jurisdicción en Ciudad Valles, San Luis Potosí, remitió el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el despacho anterior, debidamente cumplimentado, incluyendo un acta de inspección ocular, debidamente detallada, levantada por el actuario adscrito a dicho Tribunal, quien recorrió los terrenos concedidos provisionalmente al núcleo agrario "Canoas", por el Gobernador del Estado, así como la propiedad de Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González; a las diligencias levantadas en el poblado solicitante, anexa escrito de alegatos de la interesada, presentados el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante aquél Tribunal, acompañado de diversos documentos que anexa para demostrar que su propiedad es inafectable.

El acta de inspección ocular practicada en los terrenos en posesión del poblado "Canoas", señala que la diligencia se inició el día tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, continuándose durante varios días; en ella se hace constar que las partes fueron debidamente notificadas, y que asistieron a la diligencia tanto los representantes del poblado solicitante, como el representante de la quejosa; por lo que hace al predio propiedad de la citada Luz Elena del Perpetuo Socorro, compareció el ingeniero René González Zúñiga en su carácter de apoderado de la quejosa, indicando que es propietario de dos predios contiguos con medidas y colindancias; el actuario hace constar al respecto:

"...El primero denominado `El Cerrito'- al norte con misma superficie o misma propietaria, al norte o vértice V2 al V3 y V1- mide 544.00 metros, V2 al V1- 40, 880, sur; V4- V5 mide - 297.00, V5 al V6 mide - 45.50 - V6 al V7 - 16.00 MTS. V7 - V8 - 105.00 MTS., V9 al V9 - 319.00 MTS., al oriente - V9 al V0 - 142.00 MTS., V0 al V1 - 198.00 MTS., linda por estos con el C. Gerardo Gómez González al poniente con vértices V4 al V6 - en 326.00 Mts., colinda con lote 58 y 59 en posesión del ejido 'Canoas', superficie total 23-88-54 HAS., como consta en croquis que se anexa, con superficie cerril de 6-01-54 hectáreas terreno cerril con existencia de árbol conocido como gavia, palma, pata de vaca, arbusto y pasto, 15 a 16 hectáreas laborables sembradas de caña que se constata de que así es por recorrer el terreno - y para cosecharse en 60 días, caña variedad 69-290, CP - 2086 - Q-96, altura - caña 2.00 MTRS... en la parte cerril se encuentra casa-habitación 2 recámaras, piso de concreto, material de construcción ladrillo, techo, hoja de asbesto, con energía solar, sistema radio comunicación, cocina o cocineta de material tradicional, palma madera, otate, piso cemento - una galera bodega 8 X 15 MTRS. aproximadamente, tractor marca Jhon Deer (sic), modelo 4255, color verde, implementos agrícolas, rastro y arado surcadores, subsuelo que se tienen a la vista, carro pipa con capacidad 8000 litros, color crema sin marca, tanque pipa de 10000 litros descolorido... predio No. II con superficie de 88-03-12 hectáreas, denominado `Rancho Porvenir'. Al norte mide lotes 112, 113, 248 parte del lote 114- fraccionamiento Elk City Oklahoma México Colony, y fracción de lote No. 111 ... al norte mide 760.00 metros, linda con Rogelio Aguirre Leaño, al sur linda con rancho "El Cerrito", en 940.94 metros, al oriente, mide, en el lado del sur, linda con la misma dueña. Al oriente en 3 líneas quebradas, la primera de 350, la segunda de 250.00 metros, la tercera de 815.00 metros linda con ejido `La Incada' o lote 110, al poniente mide 1030 metros y linda con ejido 'Canoas', o lotes 57, 58 ...propiedad del ejido 'Canoas', estos predios están en posesión de la C. Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre Leaño de González, y los tiene explotados con caña de azúcar en su totalidad, teniendo preparadas para nueva siembra 10.00.00 hectáreas aproximadamente, y además, el resto de siembra, es variedades ex-65-cp-2086-069-290, Q-68-p-23, 681345, Coq 97 a 60 días para cosecharse y contratadas manifiesta Ing. René González con el ingenio `Plan de San Luis' o `La Incada', (sic) en el extremo norte, se encuentra Noria además de una galería de 10X 15 aproximadamente en condiciones regulares, material orcones (sic), madera, lámina en forma de jacal. Además el suscrito actuario hago constar que el polígono o predio I tiene cerril, con árbol de la región y arbusto y el polígono o predio II de las 80.00.00 hectáreas está sembrado el noventa por ciento de caña de azúcar y en posesión de Luz Elena del Perpetuo Socorro, teniendo estas 2 propiedades caminos interiores de acceso, en cuadros que miden aproximadamente, 200 metros por 300 metros o cuadrícula de 200 metros por 300 metros aproximadamente ... agrega el C. Ing. René González que estos terrenos desde su adquisición en el año de 1976, al año de 1984 estuvieron contratados en su producción de caña con el ingenio Alianza Popular de Tambaca y antes de esta adquisición estas propiedades fueron terrenos ganaderos que

estaban en explotación de los señores Elio y Clemente Arreola y sucesores ... que además cuenta con certificado de inafectabilidad de los lotes No. 112, al 118 y 248 del fraccionamieto Elk City Oklahoma México Colony que dice corresponde estos 2 predios y que no existe actualmente ganadería...".

El ingeniero Aurelio Vázquez Román perito topógrafo adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45 rindió su informe de comisión en oficio sin fecha, en el que describe la diligencia de deslinde de los terrenos ejidales; en relación al predio propiedad de Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González señala que éste se encuentra en posesión y explotación de su propietaria, el cual se localiza en el polígono número 1 del plano proyecto aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y uno, anexo a su informe.

VIGESIMO.- Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, formula en su escrito de siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, alegatos en defensa de sus intereses, expresando que no fue debidamente notificada de la diligencia de inspección ocular y de trabajos técnicos informativos en el predio de su propiedad, ya que se notificó a una persona llamada Esmeralda Morales, quien no se identificó con ningún documento oficial; y que en relación a los trabajos técnicos mencionados, que se practicaron el tres de noviembre del mismo año, manifiesta su inconformidad, pues, afirma que se violaron diversos preceptos constitucionales en su perjuicio, por lo que formula los siguientes alegatos:

"1.- Una vez que se han llevado a cabo los trabajos técnicos informativos ordenados así como la Inspección Ocular, por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, vengo por medio de las presentes alegaciones a solicitar se tomen en cuenta todos y cada uno de los documentos que aporté a la causa a fin de acreditar que soy la legítima propietaria de una fracción del lote ciento once del fraccionamiento `ELK CITY OKLAHOMA MEXICO COLONY', y que desde que entré en posesión legítima, siempre lo he tenido en explotación según se acredita con las constancias que ya obran en autos y que pido se tomen en consideración al momento de surtir sus efectos legales correspondiente al emitir una nueva resolución conforme a derecho, por lo anterior es imperativo y necesario mencionar en primer lugar que mi compraventa nunca ha sido nula de pleno derecho, pues si bien es cierto que el artículo 210 fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria, derogada pero aplicable al caso que nos ocupa, por disposición expresa del tercer artículo transitorio que reformó el artículo 27 Constitucional, y publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 6 de enero de 1992, establece que la transmisión íntegra por cualquier título de predio afectable no producirá efectos si se realiza con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de dotación, también lo es que ello debe ser materia de otra resolución.

2.- Con el propósito de acreditar con la documentación que se anexó a los trabajos técnicos informativos, en cuanto a la propiedad y explotación, quiero manifestar que tengo la posesión material y jurídica del predio rústico denominado fracción del lote 111 del fraccionamiento Elk City Oklahoma México Colony, ubicado en el Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, dicha propiedad la adquirí mediante escritura pública bajo el número 83, del tomo IV, de Propiedades Públicas, de fecha 8 de marzo de 1976, por compraventa que hice a la señora MARIA ANTONIA ARREOLA VILCHIS, con el consentimiento de su esposo, el señor EUTIMIO SALINAS ORTA, un predio rústico ubicado en la fracción de San Dieguito, de este Municipio denominado 'EL PORVENIR', con una superficie de 88-03-12 hectáreas. Quien a su vez adquirió mediante escritura pública inscrita bajo el número 71, del tomo primero de Propiedades de fecha 3 de julio de 1972, por compraventa que hizo el señor CLEMENTE ARREOLA DURAN, quien a su vez adquirió a bienes del señor Elio Arreola Ramos, quien a su vez adquirió mediante escritura pública inscrita bajo el número 51, del tomo primero de Propiedades de fecha 14 de junio de 1972, por Juicio Sucesorio Intestamentario mediante escritura pública inscrita bajo el número 46 del tomo segundo de propiedades públicas de fecha 13 de diciembre de 1954, por compraventa que se hizo a la señora IRENE JIMENEZ DE LA CRUZ VIUDA DE JONES, quien a su vez adquirió mediante escritura pública inscrita bajo el número 24 del tomo quinto de Propiedades de fecha 14 de diciembre de 1945, por compraventa que se hizo al C. DIPUTADO ISMAEL SALAS, en su carácter de Tesorero General de Gobierno del Estado en rebeldía de los señores WCLASCKEON AMERICAN LAND MERCANTIL COX. COWAN, CARTER Y DINWIDIE Y W. L. RACKER. Desde la fecha en que entré en posesión material y jurídica del predio de mi propiedad me he dedicado a hacerlo producir, de tal forma que siempre lo he dedicado al cultivo de caña de azúcar hasta la fecha.

Lo anterior de acuerdo a las constancias que ya me he permitido anexar con anterioridad al expediente original y en la que obran entre otras la constancia del ingeniero (sic) `ALIANZA POPULAR', correspondiente a la zafra 1975-1976. Así como la constancia del Ingenio Plan de San Luis, misma que corresponde a la zafra 1994-1995, con lo cual se acredita que siempre he tenido la posesión y el usufructo del predio de mi propiedad, siempre he tenido contratos con la industria azucarera prueba de ello es que me permito anexar la constancia de fecha 10 de noviembre de 1998, que me expido el `INGENIO PLAN DE SAN LUIS' S.A. en la que se hace constar que soy una abastecedora de materia prima, teniendo contratos pendientes durante los ciclos 1998/1999 y 1999/2000, y en las mismas se hace constar las superficies que se encuentran en explotación con caña de azúcar, mismas que están debidamente

inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ciudad Valles, S.L.P. para confirmar lo anterior; me permití acompañar la constancia que expide el INGENIERO (sic) ALIANZA POPULAR S.A. de C.V. mediante la cual acredita que siempre he sido productora de caña en los periodos de zafra 1977/1978 a la fecha de 1983/1984, habiéndoseme proporcionado todo tipo de créditos refaccionarios; y para los efectos de acreditar la explotación constante de mi predio me permito anexar la constancia que me fue expedida por 'LA ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS Y EJIDATARIOS CAÑEROS DEL INGENIO PLAN DE SAN LUIS', redactada con fecha 11 de noviembre de 1998, y en donde se hace notar que tengo una propiedad de 88-03-12 hectáreas en producción de caña de azúcar en el predio denominado 'EL PORVENIR' con una antigüedad de cañera de catorce años en el Ingenio Plan de San Luis, y siete años con el Ingenio Alianza Popular, propiedad que siempre contó con el correspondiente Certificado de Derechos Agrarios signado por el Ejecutivo de la Nación en favor de su antiguo propietario JOHN ALBERT JONES.

3.- En la presente alegación, el propósito principal es que la suscrita soy propietaria de un predio o fracción de terreno en la fracción del lote 111, superficie que en seguida identificaré plenamente, superficie que se me pretende afectar por parte de los campesinos del ejido de Canoas, Municipio de Ciudad Valles quienes a base de falacias y argumentos fuera de todo orden legal manifestando a todas las personas que han llevado a cabo trabajos técnicos informativos en el sentido de que los solicitantes siempre han estado en posesión; circunstancia totalmente falsa y fuera de orden comúnmente hablando lo cierto es que los campesinos solicitantes NUNCA HAN ESTADO EN POSESION DE MIS TERRENOS; tal y como se demostrará dentro de la integración del presente expediente; como antecede a lo anterior me permito comunicar que con fecha 25 de enero de 1974, también fue comisionado personal de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, para el efecto de que llevaran a cabo los trabajos técnicos informativos mismos que fueron efectuados bajo los más falsos testimonios de las personas que en ellos intervinieron, pues indebidamente se asentó en tales informes que mi superficie compuesta de 42-50-00 hectáreas, era susceptible de afectación en virtud de que se encontraban abandonadas, hecho totalmente falso e infundado. En primer lugar los ejidatarios del poblado solicitante nunca han tenido la posesión física ni materialmente de las 42-50-00 hectáreas de la fracción del lote 111, que se encuentra amparado con el Certificado de Inafectabilidad Agrícola número 60001, así como tampoco es verídico que dicha superficie se haya encontrado abandonada en aquel entonces cuando se practicaron los trabajos técnicos informativos a que hago referencia; lo cierto es que siempre desde que adquirió dicha propiedad, la he tenido quieta, pacífica y continua y de buena fe y aún 100% de su explotación, tal afirmación se acreditará dentro del expediente que se está formando con motivo de la elaboración de los trabajos técnicos informativos para los que fui requerida, quiero agregar a lo anterior y así lo demuestro que los anteriores propietarios, como la señora ANTONIA ARREOLA VILCHIS siempre sostuvo una constante explotación, prueba de ello es la constancia expedida por la `ASOCIACION GANADERA A.C.', con fecha 29 de julio de 1995 y donde se acredita como miembro de dicha asociación a la señora ANTONIA ARREOLA VILCHIS, estableciendo una actividad de cría y engorda de ganado mayor desde el año de 1973. Asimismo se hace del conocimiento del Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria mencionada señora, (sic) dentro de su actividad siempre fue ininterrumpida desde su adquisición y siempre ha prevalecido en ella la explotación ganadera; constancia de fecha 38 (sic) de agosto de 1973, expedida por la Oficina subalterna de renta de Ciudad Valles, S.L.P. en donde se hace constar que en los padrones de esa oficina en la cuenta No. 1-5-75-31 se encuentra inscrito un predio con una superficie de 88-03-12 hectáreas, denominado `EL PORVENIR', cuya causante es la señora ANTONIA ARREOLA VILCHIS, empadronamiento que se hizo con fecha 28 (sic) de junio de 1973.

Anexo, una copia debidamente certificada, de la solicitud de Inafectabilidad Agrícola, de fecha 27 de agosto de 1973, que hizo la mencionada señora, (sic) y en donde se hace constar entre otras cosas la mencionada superficie de 88-03-12 hectáreas se encontraba circulado totalmente con alambre de cuatro hilos, casa, corral represa y noria; copia certificada de oficio de comisión de fecha 12 de noviembre de 1973, mediante la cual se le ordena al ingeniero Serafín Perales, se traslade al predio propiedad de la señora ANTONIA ARREOLA VILCHIS, practique una minuciosa inspección técnica reglamentaria de conformidad con el artículo 354 de la Ley Federal de Reforma Agraria, verificar colindancias y linderos del predio comparando lo anterior con los Títulos de Propiedad y constancia de posesión, así como indicar la clase de explotación a que está sujeto el predio; con lo anterior queda plenamente acreditada la posesión y la explotación de mi vendedora circunstancia que se demuestra y se actualiza en el sentido de que mi antecesora o la persona que me vendió la superficie SI DEMOSTRO SER DUEÑA, ESTAR EN POSESION PACIFICA Y CONTINUA Y BUENA FE, SIN PERJUICIO DE NINGUN TERCERO, Y SOBRE TODO LA CONTINUA Y COMPLETA EXPLOTACION DEL PREDIO MOTIVO DE LA COMPRAVENTA QUE SE HIZO A MI FAVOR.

4.- A mayor abundamiento el dueño anterior a la señora ANTONIA ARREOLA VILCHIS, fue propiedad del señor CLEMENTE ARREOLA DURAN; quien a su vez lo adquirió por TESTAMENTARIA del señor

ELIO ARREOLA RAMOS, quien tuvo la legítima posesión y la correspondiente explotación desde el año de 1954 según se puede comprobar con la constancia que expide `LA ASOCIACION GANADERA LOCAL A.C.' de Ciudad Valles, San Luis Potosí, con fecha 29 de julio de 1995, en la que se manifiesta que el señor CLEMENTE ARREOLA DURAN, era miembro activo de esa organización desde el año de 1959, estableciendo en ella la explotación ganadera en forma ininterrumpida. Asimismo anexé copia certificada de la solicitud de inafectabilidad ganadera ante el Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con fecha 11 de diciembre de 1972, en donde se hace constar entre otras cosas que dicha superficie se encontraba cercada en su totalidad de alambre de cuatro hilos, cuatro casas, corrales, noria, manga para bañar y divisiones diversas, su explotación siempre fue la cría de ganado vacuno y engorda del mismo, ininterrumpidamente desde al año de 1960, con anterior queda plenamente establecido que los antiguos propietarios del terreno de mi propiedad siempre estuvieron *explotados legalmente,* y se da cuenta que dicha explotación ya existía antes de la solicitud de Dotación de tierras que pretende hacer el poblado de referencia.

Para mayor amplitud del conocimiento de los hechos y que se pretende demostrar mediante los presentes alegatos me permito adjuntar historial mencionado `LA CARTA DE CETENAL' en el cual se hace constar; LOS CERCOS PERIMETRALES PARA LA EXPLOTACION GANADERA ASI COMO LOS PASTIZALES Y PRADERAS Y CERCOS DE ELIO ARREOLA, CLEMENTE ARREOLA, DORA ARREOLA Y LUZ ELENA DEL PERPETUO SOCORRO AGUIRRE, en carta topográfica de 1970, en donde se hace constar y se establece que la fracción del lote 111 de la Elk Oklahoma México Colony, mismo que se encuentra amparado con certificado de inafectabilidad agrícola. Por todo lo anterior pretende que se certifique por medio comisionado (sic) que está llevando a cabo los trabajos técnicos informativos que los mismos se hagan apegados a derecho tomando en cuenta los antecedentes a que he hecho referencia anteriormente ya que lo único que pretendo y que en autos se demuestra que me encuentro en pacífica y continua posesión y en plena explotación del predio de mi propiedad en superficie de 42-50-00 hectáreas, que corresponden a la fracción del lote 111 del fraccionamiento ELK CITY OKLAHOMA MEXICO COLONY, y que pidió que dichos trabajos técnicos informativos sean debidamente efectuados basados en los términos del artículo 225 en relación con el 212 de la Ley de Amparo en materia agraria, y por personal que se conduzca apegado a derecho.

Lo anterior, en virtud de que dados los antecedentes de la integración del expediente en mención y dadas todas las irregularidades efectuadas por personas que han sido comisionadas para llevar a cabo los trabajos técnicos informativos, así como las falsedades con las que se han conducido al rendir sus informes; en esta ocasión me permití nombrar un supervisor TECNICO EN TOPOGRAFIA, a quien el mismo LIC. PEDRO FLORES, acreditó, con tal personalidad, pero lo cierto es; que nuevamente tanto el ING. AURELIO VAZQUEZ ROMAN, Perito Topógrafo; incurren nuevamente en falsedades tanto en la inspección ocular como en el levantamiento de los trabajos técnicos informativos, teniendo conocimiento mediante el informe que rinde el perito topógrafo ADAN GONZALEZ QUINTERO, quien manifiesta que; estuvo presente en la elaboración de los trabajos, el martes 3 de noviembre del año en curso, fecha en que se le acreditó como supervisor por el Comisionado Lic. Pedro Flores; el día 5 de noviembre de 1998, estando presente en el lugar que sirvió de base para la delimitación de los puntos, los cuales son el 4 y 7 del plano del certificado de inafectabilidad agrícola No. 60001 a nombre de Albert Jones de fecha 1946, de donde saldría la medición propiedad de la señora LUZ ELENA DEL PERPETUO SOCORRO AGUIRRE DE GONZALEZ, se le solicitó al ingeniero comisionado, que mostrara el Plano Proyecto, para determinar distancias, rumbos y coordenadas para ubicar los trabajos que se iban a efectuar, a lo que se negó no presentó plano alguno, así como tampoco presentó `CUADROS DE CONSTRUCCION' INDISPENSABLE PARA TENER IDEA COMPLETA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, MOSTRANDO SOLAMENTE UN SIMPLE CROQUIS' sin ningún cuadro de construcción, al continuar con los trabajos no sube a la sierra a medir, únicamente desarrolla su trabajo por los andadores habiendo medido 668.36 metros de los 780.00 metros que marca la distancia del punto 4 al 48 del plano base del certificado de inafectabilidad número 60001.

Por todo lo anterior es innecesaria la transcripción que hace el perito topógrafo de todas y cada una de las irregularidades de que fui objeto, solo sé que el ingeniero comisionado siempre dudó de su trabajo, al grado de que tuvo que preguntar a las personas que viven en el ejido y que tienen más antigüedad en el lugar, y tener referencia de los trabajos técnicos informativos encomendados por la superioridad por donde los ejidatarios le ordenaron y al simple tanteo ya que no es posible llevar a cabo unos trabajos técnicos sin plano que no contenga el correspondiente cuadro de construcción y hacer un trabajo apegado a la realidad y que se actualice de acuerdo a la verdad, (informe que se agrega a los presentes alegatos y surta efectos legales a que haya lugar)..."

Al escrito anterior, la compareciente anexa una copia del plano proyecto con cuadro de construcción (rumbos, distancias, coordenadas) para la ubicación del mencionado polígono I, II y/o III en estudio conforme al oficio de comisión; copias de la inspección ocular así como de los trabajos técnicos

informativos practicados en terrenos de su propiedad; una carta topográfica de CETENAL, formada por métodos fotogramétricos, a partir de fotografías aéreas obtenidas en enero de mil novecientos setenta, primera edición impresa en mil novecientos setenta y dos, en la cual se resalta que dentro de la zona cubierta con "vegetación", cultivo o huerto, se localiza la región de ubicación del poblado "Canoas", apareciendo como terrenos cultivados; constancia expedida por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en la que se asienta que Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre Liaño adquirió por compra a María Antonia Arreola Vilchis con el consentimiento de su esposo Eutimio Salinas Orta un predio rústico ubicado en la fracción de "San Dieguito", de este Municipio, denominado "El Porvenir", con superficie de 88-03-12 (ochenta y ocho hectáreas, tres áreas, doce centiáreas), según escritura pública inscrita bajo el número 83 del tomo IV de Propiedad, el ocho de marzo de mil novecientos setenta y seis, predio del que se señalan sus colindancias; una carta expedida el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por el gerente general del Ingenio Alianza Popular, S.A. de C.V., en Tambaca, San Luis Potosí, en la que hace constar que Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre Liaño fue productora de caña de ese ingenio durante el periodo comprendido de la zafra 1977/1978 a la zafra 1983/1984, habiéndosele proporcionado créditos refaccionarios y de avío para desmontes, preparación de suelos, siembras, cultivo y cosecha de caña de azúcar, con la garantía de su predio de 88-03-12 (ochenta y ocho hectáreas, tres áreas, doce centiáreas) denominado "El Porvenir", aclarando que dejó de abastecer a ese ingenio, al ser transferido al ingenio Plan de San Luis, a quien se traspasó la cartera que tenía por los créditos recibidos; carta de diez de noviembre del mismo año, expedida por el gerente general del ingenio Plan de San Luis, S.A. en la que hace constar que Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre Liaño fue transferida del ingenio Alianza Popular a esa industria en el ciclo 1983-1984 con su superficie y obligaciones crediticias que se tenían contratado con ese ingenio para formar parte de los abastecedores de materia prima, teniendo contratos vigentes durante el ciclo 1998/1999 y 1999/2000, señalando que la compareciente es propietaria de dos superficies una de 23-84-54 (veintitrés hectáreas, ochenta y cuatro áreas, cincuenta y cuatro centiáreas) y otra de 88-03-12 (ochenta y ocho hectáreas, tres áreas, doce centiáreas), esta última conocida como "El Porvenir"; una carta expedida el once de noviembre del año que se menciona por el presidente y el secretario de la Asociación Agrícola Local de Pequeños Propietarios y Ejidatarios Cañeros del Ingenio Plan de San Luis por la que se hace constar que la mencionada compareciente es miembro activo de dicha agrupación con una antigüedad de cañero de catorce años en el ingenio Plan de San Luis y siete años de mil novecientos setenta y siete a (mil novecientos ochenta y cuatro en el ingenio Alianza Popular de Tambaca, San Luis Potosí; constancia expedida el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí en la que se afirma que Clemente Arreola Durán tuvo registrado su fierro de herrar desde el año de mil novecientos cincuenta y nueve hasta el año de mil novecientos ochenta, para marcar hasta 50 animales que pastan en los terrenos de "Rancho Nuevo", "El Porvenir" y "El Triunfo", de la fracción "Río Verdito", ubicada en Ciudad Valles, que esta certificación consta bajo el número 300 a fojas 75 vuelta y 76 frente del libro de Registros de Fierro que se lleva en la Secretaría del Ayuntamiento; otras constancias expedidas en el año de mil novecientos noventa y cinco por el secretario de la Asociación Ganadera Local, A.C. de Ciudad Valles, San Luis Potosí en las que se hacen constar que Clemente Arreola Durán fue miembro activo de esa organización desde el cuatro de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, y otras donde consta la inscripción de Clemente Arreola Durán en el padrón de la propiedad rústica de la Tesorería General del Estado, en Ciudad Valles, en relación a su propiedad denominada "Rancho Nuevo", y de otro denominado "Rioverdito"; fotocopia del certificado de Inafectabilidad Agrícola número 60001, expedido a John Albert Jones de nacionalidad norteamericana el diez de enero de mil novecientos cincuenta y uno, según acuerdo de dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el dos de enero de mil novecientos cincuenta y uno, para amparar una superficie total de 154-00-00 (ciento cincuenta y cuatro hectáreas), correspondiente al lote número 58, fracción del 59 y fracción del 111 del fraccionamiento Elk City Oklahoma México Colony; fotocopia del certificado de inafectabilidad agrícola número 19454 expedido a Irene Jiménez de Jones para amparar los lotes del 112 al 118 y 248 del fraccionamiento mencionado, expedido el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho, para amparar una superficie total de 258-00-00 (doscientas cincuenta y ocho hectáreas); fotocopia de la escritura pública número 35 otorgada en Ciudad Valles, San Luis Potosí el ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, ante el Notario Público número 2, en la que consta el contrato de compraventa celebrado entre la compareciente, como compradora y Rosa Laura Nudding Rodríguez en relación al predio de 23-88-54 (veintitrés hectáreas, ochenta y ocho áreas, cincuenta y cuatro centiáreas), ubicado en el Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí; fotocopia del certificado de inafectabilidad agrícola correspondiente a la citada fracción, denominada "El Cerrito", expedido el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, por el Secretario de la Reforma Agraria; fotocopia en gran parte ilegible de un escrito signado por José G. Rojas Vázquez a nombre de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca

Potosina el doce de agosto de mil novecientos setenta y siete dirigido al Secretario General de Asuntos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria; fotocopia de otro escrito signado por Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre Liaño, sin fecha dirigido al Director General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria, en parte ilegible y en el que formula alegatos relativos a los trabajos técnicos practicados en octubre de mil novecientos ochenta y tres, en el expediente agrario instaurado con motivo de la solicitud del poblado "Canoas", así como del ejido "Españita".

La mencionada compareciente Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González formula alegatos en sendos escritos de doce de febrero y doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a los cuales acompaña fotocopias del plano de los lotes fracción del 111 con superficie de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas), y de los lotes 58 y fracción del 59 con superficie de 112-00-00 (ciento doce hectáreas), de agostadero con 50 por ciento laborable certificado por la delegada estatal del Registro Agrario Nacional, quien hace constar que la copia es fiel y exacta de la que obra en el archivo de ésa. En ambos escritos la compareciente solicita a este Tribunal Superior Agrario se le tenga por presentada formulando alegaciones complementarias, a fin de que se respete el predio de su propiedad conocido como fracción del lote 111 con superficie de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas), del fraccionamiento denominado Elk Oklahoma México Colony, tomando en cuenta que es legalmente inafectable, por constituir una pequeña propiedad en explotación.

VIGESIMO PRIMERO.- Obran en autos escritos de diversas fechas, uno de ellos de veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual comparecen al procedimiento Angel Roberto Rosas Reyes, Eliodoro Rosas Briseño y Cuauhtémoc Cedillo Olvera en su carácter de presidente, secretario y vocal del Comité Particular Ejecutivo del poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, para formular los siguientes alegatos:

"1.- El comisionado al llevar a cabo la práctica de los trabajos no da cumplimiento a lo dispuesto por los Arts. 286 frac. II y 290 de la L.F.R.A., en virtud de que no lleva a cabo un minucioso estudio de los predios que se encuentran dentro del radio legal de afectación, toda vez que no rinde un informe detallado del origen de todos y cada uno de los predios, por lo que nos violan nuestros derechos agrarios al no cumplir con lo que establece el Art. 27 Constitucional. Asimismo en ningún momento establece el total de hectáreas que posee cada uno de los propietarios que se encuentran dentro del radio legal de afectación para así determinar el número total de propiedad que poseen y dar cumplimiento a lo establecido por la L.F.R.A. en su art. 249 que fija el límite de la Pequeña Propiedad y que en el caso que nos ocupa esto no se llevó a cabo por lo que en su momento procesal oportuno lo demostraremos; a efecto de demostrar que existen excedentes de propiedad para afectar para dotación hecho que no se llevó a cabo.

En la Dotación Provisional dictada por el Ejecutivo Local (sic) el 23 de diciembre de 1974, se dota al poblado de Canoas, Municipio de Valles, S.L.P., con una superficie de 985-80-00 hectáreas de agostadero cerril, y estableciéndose:

`La superficie afectable se destinará al uso colectivo de los solicitantes dejándose a salvo los derechos en materia agraria, de los 51 individuos capacitados que resultaron del censo respectivo, para que los ejerzan si a sus intereses conviene por la vía legal que corresponda...'

De lo anterior se concluye clara violación a los derechos agrarios de los solicitantes de tierras del poblado Canoas al dictarse con posteridad en fecha 8 de agosto de 1995, una Sentencia de Dotación de Tierras por parte del Tribunal Superior Agrario, donde se dota nuevamente a dicho poblado con la misma superficie cerril pero ahora para efectos de que se parte de dotación individual y únicamente se agrega una pequeña superficie que son los lotes 57, 58 fr. del 59 y fr. del 111, aptos para el cultivo, violándose así el Art. 27 de nuestra Carta Magna (sic), y pues no se nos dota de terreno apto para abrirse al cultivo y que en la especie existen y tal como se demostrará dichos predios afectables sobrepasan por mucho la pequeña propiedad y asimismo de conformidad con lo dispuesto por el Art. de la L.F.R.A., (sic) tenían más de dos años de abandono por parte de sus propietarios.

En otro orden de ideas cabe hacer mención que la mayor parte de los lotes que se encuentran dentro del radio legal de afectación corresponden a Terrenos Nacionales, en virtud que se les habían embargado a sus propietarios por parte del estado por deudas prediales, todos estos predios se encuentran en la Elk City Oklahoma México City, fracción Micos y en una forma totalmente arbitraria y en usurpación fueron vendidos a particulares.

La mayoría de los predios propiedad de particulares que se encuentran dentro del radio legal de afectación sobrepasan el límite para considerarlos como pequeña propiedad y ese solo hecho se les considera afectables tal como lo dispone la L.F.R.A. (sic) en su artículo 249. Así también es aplicable lo dispuesto por el Art. 251 de la Ley en mención, pues dichos predios se encontraban en total abandono, tal como lo estableció el Comisionado y como se demostrará por nuestra parte, por lo que al momento de resolver debieron ser considerados para efectos de dotación a favor del poblado que los suscritos representamos.

En una clara violación a nuestros derechos a obtener tierras cultivables en dotación por parte del comisionado al practicar Trabajos Técnicos en los predios que se encuentran dentro del radio legal de afectación omite como se ha mencionado hacer un estudio exhaustivo sobre los predios. En base a lo anterior se hace la siguiente explicación del origen de la propiedad de los predios conocidos con los números: lotes 112, 113, 114, 115, 116 y 117, fracción 57, 248 y 118 que se encuentran dentro del radio legal de afectación del poblado Canoas, Municipio de Valles, S.L.P., en base a lo siguiente:

En diciembre de 1995, el C. Ismael Salas, Tesorero del Estado de San Luis Potosí, llevó a cabo y en total violación y transgresión a sus funciones y a la Constitución Política (sic), la venta de diverso predio ubicados en la Elk Oklahoma, a la Sra. Irene Jiménez de la Cruz, en virtud de que es facultad de la Federación la venta de tales terrenos a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (art. 7 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías).

En consecuencia, y en base a lo anteriormente manifestado la venta de una parte de los predios que se encuentran dentro de nuestro radio legal de afectación es totalmente nula, porque no se ajusta a lo dispuesto por el art. 88 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías que manifiesta:

Los terrenos materia de esta ley no podrán ser embargados ni sujetos a procedimiento alguno de adjudicación por parte de particulares o de los gobiernos locales o autoridades municipales; cualquiera adjudicación de ellos basada en este procedimiento es nula.

Es aplicable además lo dispuesto en los artículos siguientes:

ART: 79.- Los títulos sobre terrenos baldíos, nacionales o demasías, expedidos por particulares o autoridades no facultadas para ello, son nulos y no constituyen responsable, en caso alguno, a la hacienda pública.

Lo anterior trae como consecuencia que si el Gobierno Federal había dado en arrendamiento terrenos nacionales a la Compañía Elk City Oklahoma México Colony, fracción Micos, en consecuencia estos no eran propietarios de tales terrenos y por lo tanto son nulos todos los embargos practicados por catastro del Estado de San Luis Potosí en contra de todos estos predios que después de manera ilícita y en usurpación de funciones enajenó a particulares.

En lo que se refiere a los predios propiedad del Sr. Elio Arreola Ramos, al llevarse a cabo los Trabajos Técnicos ya había fallecido entre los que se encuentran el Sr. Clemente Arreola Durán, quien heredó diversos predios. De la sucesión testamentaria le correspondieron diversos predios que en total suman 643-60-00 has., y que se encuentran dentro del radio legal de afectación en el lugar denominado como Campo Rioverdito, además de ser propietario de los lotes conocidos con los números 57 fracción A, 263, 264 y 265 ubicados todos en la Elk City Oklahoma México Colony, de los cuales el Comisionado no rindió informe del origen de propiedad de los mismos ni mucho la superficie que ocupaban, siendo que tales predios sobrepasaban por mucho el límite fijado para la pequeña propiedad, tal como lo establece la L.F.R.A., por lo que en una clara violación a nuestros derechos agrarios el Comisariado no propuso predio alguno para afectación de los anteriormente señalados, ni justificó ante la autoridad competente la procedencia de sus orígenes de propiedad, y no dio cumplimiento en ningún momento a lo dispuesto por el Art. 286 fracción III, que manifiesta:

'...Este informe aludirá también a la propiedad y extensión de las fincas afectables en favor del núcleo solicitante; examinará sus condiciones catastrales o fiscales irá acompañado de los certificados que se recaben del Registro Público de la Propiedad o de las oficinas fiscales'.

En lo que respecta al Sr. Jesús Roque Campos, en 1971 año de inicio de nuestro expediente de dotación de ejidos era propietario de dos terrenos rústicos ubicados dentro del radio legal de afectación del poblado Canoas; el primero compuesto por los lotes 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132 y fracción 110 del antiguo fraccionamiento The American Land Mercantile Co. Elk City Oklahoma México Colony, fracción Micos con superficie 808-50-28 hectáreas y el segundo compuesto por el resto de la porción media del lote 110 con superficie de 135-20-48 hectáreas del mismo fraccionamiento. Ambos predios rústicos suman en total 943-70-76 hectáreas; proponiendo el Comisionado para afectación del primer predio 409-00-00 hectáreas para la acción intentada más el total de superficie del segundo. De lo anterior se deduce que fue improcedente la propuesta del Comisionado y además que era procedente la dotación a nuestro favor de dichos predios pues además se encontraba en total abandono por parte de su propietario tal como se demuestra con las constancias del informe del Comisionado y además con una constancia de una inspección ocular practicada el día .. de .. de .. por el C... (sic) Presidente Municipal de Cd. Valles, S.L.P. lo que demuestra que era procedente nuestra solicitud de que se nos dotara de dichos predios para satisfacer nuestras necesidades agrarias y además que es terreno en su totalidad apto para abrirse al cultivo y del cual carecemos los solicitantes...".

VIGESIMO SEGUNDO.- Luz Elena del Perpetuo Socorro, Aguirre de González, compareció nuevamente ante este Tribunal para formular nuevos alegatos en relación a los formulados por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "Canoas", transcritos en el resultando anterior; en su escrito se lee lo siguiente:

"...Desde este momento se objetan como improcedentes las pruebas ofrecidas por los solicitantes de tierra del ejido `Canoas', Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. documentales que fueron ofrecidas en los incisos precisados del 1 al 5, en lo que atañe a su valor probatorio y alcance que pretende darle el Comité Particular Ejecutivo, habida cuenta que está fuera de la LITIS, determinar su situación verdadera, ya que tales documentales tuvieron su momento y su recurso legal para hacerlas valer debidamente, en cuanto a sus puntos antes señalados con los dígitos antes mencionados se niegan en su totalidad, pues careciendo de soporte en los capítulos esenciales de hechos y de derecho tales petitorios carecen de validez jurídica.

En cuanto a sus disposiciones legales que menciona en su escrito de pruebas y que pretenden hacer valer, tales fundamentos se niegan en su totalidad, pues no existen los hechos en la forma que pretende hacerlos valer el Comité Particular Ejecutivo, es obvio que tampoco le son aplicables las disposiciones legales que invocan, motivo por el cual deben desestimarse todo el escrito de ofrecimiento de pruebas que pretende hacer valer en el juicio agrario de referencia.

En relación al punto primero de su ofrecimiento el Comité Particular Ejecutivo, ofrece como prueba todos y cada una de las escrituras motivos de las diferentes compraventas realizadas sobre los lotes fracción del 111, así como su origen, respecto a lo manifestado, cabe mencionar `QUE EL PROPIETARIO QUE EXHIBE UNA ESCRITURA PUBLICA EN Ley Agraria QUE DEMUESTRA SU DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE UN INMUEBLE, TIENE Ley Agraria PRESUNCION DE SER POSEEDOR DE ESTE, Ley Agraria QUE SOLO PUEDE SER DESTRUIDA POR LOS MEDIOS LEGALES'. Por lo anterior dichas escrituras conservan su valor probatorio que la ley les concede, mientras no se demuestre, en el juicio correspondiente, la falsedad de las mismas.

Por lo que hace a las afirmaciones que contiene el punto dos, en donde se manifiesta todas y cada una de las operaciones realizadas en los lotes de referencia, y donde se manifiesta que el Gobierno del Estado en usurpación de funciones llevó a cabo la venta de los terrenos nacionales, concretamente es un punto que no me incumbe, tal y como lo manifesté anteriormente, correspondía a los ejidatarios del poblado de Canoas Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. denunciar la usurpación de las funciones a que se refiere, en consecuencia como no menciona tiempo, lugar, y forma de los actos a que se refiere, independientemente de lo anterior dichos lotes se encontraban amparados con el correspondiente certificado de derechos agrarios No. 19454, en relación con el lote 111, que contaba con el certificado respectivo de derechos agrarios No. 60001, ambos expedidos por el ejecutivo de la Nación.

Por otra parte es un hecho ajeno a la litis, el que se ofrezcan como prueba todos los datos sobre las operaciones de transmisión de la propiedad, en virtud de que ni siquiera menciona quien conserva estos datos o en que dependencia Oficial se encuentran o se encontraban, ya que ofrece ambigüedades que no tienen lugar, modo, tiempo y forma, y en relación con las afirmaciones que aluden a los trabajos técnicos informativos que supuestamente no fueron tomados en cuenta, los comparecientes tenían los recursos legales para hacerlos valer por las vías legales ante las dependencias correspondientes, y en cuanto a lo que se manifiesta en el punto 4 cuatro del escrito de ofrecimiento de pruebas, en donde la prestación era procedente, la dotación para el poblado `Canoas', Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en virtud de que los terrenos susceptibles de afectación se encontraban abandonados, `SE NIEGA PARA TODOS LOS EFECTOS JURIDICOS DE Ley Agraria NEGACION, YA QUE LOS TERRENOS QUE A MI PARTE CORRESPONDE EXPLOTADOS TAL Y COMO SE HA ESTABLECIDO EN Ley Agraria INTEGRACION DEL EXPEDIENTE MOTIVO DEL PRESENTE JUICIO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE HE OFRECIDO FEHACIENTEMENTE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO MOTIVO DEL PRESENTE JUICIO DE DOTACION DE TIERRAS'. Por lo que de una manera dolosa y falsa el Comité Particular Ejecutivo pretende conducirse.

Por lo manifestado en el punto quinto, cabe mencionar que los solicitantes nunca han estado en posesión de ninguna superficie de mi propiedad y menos de la superficie de 42-50-00-00 Has., del lote 111, por estar siempre en posesión de su propietaria Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de Liaño, y completamente explotada y cultivada con caña de azúcar, propiedad que se acreditó con la correspondiente escritura pública, y que corre agregada en autos de las actuaciones practicadas con motivo de la integración del presente expediente de solicitud de tierras por parte del ejido `Canoas', Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Por tal motivo se impugnan las incorrectas pruebas ofrecidas, por lo que se hacen meras alusiones más o menos generales sin precisar los elementos probatorios concretos que se quería establecer por lo que tales argumentos resultan imprecisos y ambiguos y ese Tribunal debe desestimarlos por no precisar argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad con que se ha actuado ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido de sus probanzas y se impone declararlas improcedentes por la insuficiencia de sus términos.

En cuanto a los alegatos, que se presentan ante el Tribunal Superior Agrario con fecha 22 de junio de mil novecientos noventa y ocho, mismos que son presentados ante ese Tribunal Agrario por Angel Roberto Rosas Reyes, Heleodoro Rosas Briseño, Cuauhtémoc Cedillo Olvera, presidente, secretario y

vocal del Comité Particular Ejecutivo del poblado `Canoas', Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, cabe mencionar que en la fase de pruebas las partes han aportado los elementos y fundamentos crediticios que se han tenido al alcance y que han sido dirigidos a demostrar los extremos de hechos y los artículos que han sido su fundamento legal en donde se apoyan las respectivas pretensiones, y en el presente caso los alegatos del Comité Particular Ejecutivo ya fueron examinados y la suscrita los declara sin fundamento ya que sus argumentaciones no reúnen los requisitos ni la técnica jurídica procesal señalada para el efecto debiéndose desecharse dichos alegatos y confirmar mis argumentos que en su momento oportuno hice valer, por otra parte, si el Comité Particular al momento de presentar sus alegaciones no invoca ningún fundamento legal, tampoco hace uso de la doctrina de las leyes que los estados emiten carecen de relevancia jurídica sus argumentaciones y en los alegatos de los solicitantes carecen de todo fundamento legal, por lo que resulta obsoleto entrar al fondo del estudio y análisis de los mismos.

Independientemente de lo anterior, los alegatos presentados por los solicitantes del poblado de 'Canoas', Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, son razonamientos, opiniones, exposiciones formuladas por sus representantes legales de las partes, aunque no siempre se hacen, por medio de las cuales aportan datos y criterios jurídicos al juez para llevarle convicción sobre la litis planteada con la intención de inclinarlo y fallarlo a su favor.

Los alegatos a últimas fechas han ido perdiendo importancia y la tendencia de los procedimientos modernos es desaparecerlos por constituir meras sugerencias muchas de las cuales son subjetivas y carentes de toda base legal y jurídica como es el caso que nos ocupa, máxime que presuncionalmente el juzgador es un perito y conocedor del derecho, salvo prueba en contrario para el caso concreto, no estando obligado de ninguna manera en tomar en consideración los alegatos que le presenten las partes: Aunque consideramos que el buen juez debe leerlos y analizarlos con criterio imparcial ya que en ellos puede dar la pauta para la resolución que se emita. Pero en la presente hipótesis el Comité Particular Ejecutivo por conducto de sus alegatos pretende hacer valer violaciones que no competen al Tribunal Superior Agrario, por ejemplo en su inciso primero entre otras cosas manifiesta:

`Que se violan sus derechos agrarios al no haberse cumplido con lo que establece el artículo 27 Constitucional', y la suscrita opina que tal violación daba las bases y trámite para el amparo agrario correspondiente máxime que supuestamente hubo violaciones al procedimiento y no se dotó de terreno apto para el cultivo al poblado solicitante de `Canoas', Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí. En virtud de que una de las finalidades del derecho de amparo es, tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus respectivos derechos agrarios y que pertenezcan a la clase campesina, no obstante que el deseo de los legisladores es proteger al sector campesino mediante el amparo en Materia Agraria.

Por lo anterior, son inoperantes sus alegatos, ya que de acuerdo con los antecedentes que obran en autos del expediente, formado con motivo de la solicitud de tierras del poblado `Canoas', Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, se demostró plenamente que los solicitantes nunca han estado en posesión y menos usufructuando la fracción de terreno 111, de acuerdo con las carta formada por métodos fotogramétricos a partir de fotografías aéreas obtenidas en el mes de enero de 1970, además en el mismo procedimiento se acreditó fehacientemente la posesión...", y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, tercero transitorio de la Ley Agraria, 1o., 9o. fracción VIII, cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- Que la presente sentencia se emite con fundamento en los artículos 80, 104 y 105 de la Ley de Amparo en cumplimiento de la sentencia dictada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, por el Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo D.A. 3455/96, promovido por Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario el ocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco en los autos del presente juicio agrario número 41/95, por la que se concede la dotación solicitada al poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, afectando entre otros, el lote 111, del fraccionamiento Elk City Oklahoma México Colony, propiedad de la quejosa, sentencia que en vía de cumplimiento de ejecutoria de amparo, fue dejada insubsistente por acuerdo de doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, del propio Tribunal Superior Agrario.

TERCERO.- En cuanto a la capacidad individual de los solicitantes y la colectiva del poblado quedaron plenamente demostradas en autos, conforme a los artículos 195 y 196 en relación con el 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, especialmente con la diligencia censal practicada por Alejandro Gómez del

Campo, según su informe del veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y dos, del que se desprende la existencia de cincuenta y dos campesinos capacitados cuyos nombres se relacionan a continuación:

1.- Fernando Rosas Olguín, 2.- Salomón Rosas, 3.- Jesús Rosas Briseño, 4.- Juan Rosas Olguín, 5.- Alberta Rosas, 6.- Casimiro Rosas, 7.- Francisco Martínez Rojas, 8.- Pablo Martínez, 9.- Ignacio Rosas Ramos, 10.- Belém Rosas, 11.- Juan Rosas, 12.- Francisco Grimaldo Torres, 13.- Ambrosio Rosas Olguín, 14.- Amado Reyes González, 15.- Heliodoro Rosas Briseño, 16.- Pedro Rosas Berrones, 17.- Canuto Rosas Sánchez, 18.- Angel Segura Torres, 19.- Luis Perales Ramírez, 20.- Lino Perales Ramírez, 21.- Hexiquio Perales Bonilla, 22.- Angel Perales, 23.- Pedro Loredo Gutiérrez, 24.- Faustino Loredo, 25.- Paula Loredo, 26.- Nazaria Loredo, 27.- Eliseo Naranjo Valtiérrez, 28.- Víctor Lirio Naranjo, 29.- Cleofas Lirio Gómez, 30.- Luisa Lirio Gómez, 31.- Domingo Lirio Gómez, 32.- Eulogio Lirio Gómez, 33.- Lorenzo Lirio Gómez, 34.- Luis Lirio Gómez, 35.- Santiago Valtiérrez Palomo, 36.- Benjamín Segura Arriaga, 37.- Sabino Hernández, 38.- Belém Barrón Lara, 39.- Filiberto Barrón Amaro, 40.- José Mendoza Ortiz, 41.- Luis Naranjo Montalvo, 42.- Timoteo Naranjo Valtiérrez, 43.- Félix Ibarra, 44.- Ramón Ibarra, 45.- Cecilia Ibarra, 46.- Leandro Reyes L., 47.- Julio Reyes, 48.- Guadalupe Reyes, 49.- Margarita Reyes, 50.- Demetrio Reyes Maldonado, 51.- Camilo Martínez Hernández y 52.- Santos Fernández Hernández.

CUARTO.- Que en la especie se observaron las formalidades del procedimiento, según lo señalan los artículos 272, 273, 275, 286, 287, 291, 292, 298, 299 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicable de acuerdo a lo establecido en las disposiciones anotadas en el primer considerando.

QUINTO.- Que es preciso recordar que la presente sentencia se emite en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A. 3455/96, promovido por Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, en contra de la sentencia dictada por este Tribunal el ocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en autos del presente juicio agrario. En este contexto de los trabajos técnicos informativos y complementarios practicados durante el trámite de este procedimiento, así como los elementos de convicción aportados por las partes, aparece que:

A).- De acuerdo con los trabajos técnicos informativos practicados por el ingeniero J. Isabel Hernández Rómulo, según su informe de veinticinco de enero de mil novecientos setenta y cuatro, por lo que hace a los predios investigados dentro del radio legal del poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, se conoce que la fracción del lote 111 del predio Elk City Oklahoma México, Colony, con extensión de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas), en aquella fecha propiedad de Helio Arreola Ramos, causante directo de la quejosa en el amparo que se cumplimenta Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, se encontraba debidamente explotado por su propietario; del mismo informe transcrito en lo conducente a fojas 5 de la presente sentencia, se advierte que los campesinos solicitantes "...se encuentran trabajando dentro del predio del Sr. Sironi, el cual se encuentra totalmente abandonado y teniendo una superficie propia para la agricultura...", que el predio mencionado estaba ocupado por los campesinos solicitantes en aquella fecha debido al abandono del predio por parte de su propietario desde hacía varios años. En consecuencia de los trabajos técnicos en comentario no se desprende causal alguna que pueda justificar la afectación de la fracción de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas) del lote 111, del predio denominado "Elk City Oklahoma México Colony" actual propiedad de la citada Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González.

B).- De acuerdo con los trabajos técnicos informativos complementarios practicados por Alejandro Gómez del Campo, según su informe de veintinueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, así como del acta de inspección ocular levantada el veintisiete del mismo mes y año, se desprende que el comisionado investigó los predios correspondientes a los lotes números 22, 24 y 25 del mencionado predio, constatando que el primero de los mencionados lotes se encontraba en el más completo abandono, enmontado "por más de dos años", que los únicos cultivos que se observaron fueron de maíz, frijol y caña propiedad de los campesinos solicitantes, que el mencionado lote número 22, era propiedad del Gobierno del Estado; y que en la propiedad de Francisco V. Zironi no había ninguna persona encargada del predio pero que los campesinos le informaron que en realidad la persona que "...les cobraba el partido de las siembras", era Irene Jiménez, quien se decía dueña del terreno; luego entonces de los trabajos técnicos en comentario tampoco se desprende causal de afectación alguna en relación a la fracción del lote 111, que se menciona es propiedad de Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguilar de González.

C).- Según se desprende de las constancias de autos el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, concedió la dotación provisional al poblado solicitante, por mandamiento de veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, en una superficie de 985-80-00 (novecientas ochenta y cinco hectáreas, ochenta áreas), que se tomarían afectando la propuesta de la Comisión Agraria Mixta, 498-25-75 (cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, veinticinco áreas, setenta y cinco centiáreas), de la propiedad de Francisco V. Zironi, 365-00-00 (trescientas sesenta y cinco hectáreas) de terrenos propiedad del Gobierno del Estado, además de 122-54-25 (ciento veintidós hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, veinticinco

centiáreas) de terrenos baldíos; mandamiento que ejecutó el ingeniero José Luis Calderón Rocha, el veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y cinco; de cuya acta de posesión y deslinde de cinco de abril del mismo año se desprende que recorrió el lindero de la superficie concedida por el mandamiento provisional, acta en la que se reconoce que a la altura del vértice número 98, conocido como mojonera "El Rincón", a la derecha del citado recorrido, estaba la propiedad de Helio Arreola Ramos, y a la izquierda la dotación del poblado en referencia..."; informe y acta de posesión y deslinde de los que se desprende que se entregó al poblado en posesión una superficie total de 985-80-00 (novecientas ochenta y cinco hectáreas, ochenta áreas), respetando el predio entonces propiedad de Helio Arreola Ramos, causante original de la quejosa, Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, en virtud de que dicho predio se localizó explotado por su entonces propietario.

D).- Que de autos aparece que la Dirección General de Tenencia de la Tierra, a solicitud del Cuerpo Consultivo Agrario, instauró el procedimiento tendiente a dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de ocho de febrero y dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta, publicados en el **Diario Oficial de la Federación**, el primero de junio de mil novecientos cincuenta, y el dos de enero de mil novecientos cincuenta y uno, a fin de cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola números 48711 y 60001, expedidos en favor de Rosa Lee Jones y John Albert Jones, respectivamente, para amparar los lotes 57 y 58, fracción del 59 y fracción del 111 del denominado fraccionamiento "Elk City Oklahoma México Colony", ubicados todos en el Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí; el Secretario de la Reforma Agraria, resolvió el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, dejar sin efectos los acuerdos presidenciales en comentario y cancelar los referidos certificados de inafectabilidad agrícola, basándose en el hecho de que los predios amparados por los mencionados certificados se encontraron inexplotados y abandonados por sus propietarios de acuerdo con la hipótesis de la fracción II, del artículo 418, de la Ley Federal de Reforma Agraria. Al respecto cabe señalar que no pasa inadvertido para este Tribunal que la cancelación antes mencionada debió de haberse declarado sólo en forma parcial, es decir cancelando parcialmente el certificado de inafectabilidad número 60001 que amparaba la fracción de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas) correspondiente a la fracción del lote 111 del multicitado predio "Elk City Oklahoma México Colony", toda vez que en relación a este predio hoy propiedad de la quejosa Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, la causal de inexplotación no se comprobó en ninguna de las fases del procedimiento agrario que dio origen al juicio que aquí se resuelve, y en consecuencia tampoco se integró la hipótesis que establece la fracción II del artículo 418, de la Ley Federal de Reforma Agraria.

E).- De acuerdo con los trabajos técnicos informativos complementarios practicados por el ingeniero Genaro González Padilla, según su informe del nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, el predio de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas), fracción del lote 111, de referencia, se encontró "en posesión total de la C. Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre Liaño... totalmente explotado con cultivo de caña de azúcar..."; con lo cual se corrobora que la mencionada propietaria siempre estuvo en posesión de su predio a partir de su adquisición en el año de mil novecientos setenta y seis; que lo ha tenido en explotación continua, como lo ha venido afirmando en los diversos alegatos formulados tanto ante las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, como ante los Tribunales Agrarios, en su oportunidad, alegatos que surten sus efectos, los cuales, debidamente adminiculados con los documentos aportados por la quejosa como elementos de prueba, logran desvirtuar la presunción que existía en relación a la inexplotación del predio de su propiedad y en consecuencia desvirtuar la causal de afectación derivada del artículo 251, interpretado en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria.

SEXTO.- Que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Primer Circuito concedió el amparo a Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, por sentencia de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, a fin de que la autoridad señalada como responsable, en este caso el Tribunal Superior Agrario, respetara en beneficio de la quejosa la garantía de audiencia, ya que no se habían analizado sus alegatos, ni documentos aportados como pruebas de su parte, para demostrar la inafectabilidad del predio de su propiedad, según la ejecutoria transcrita en lo conducente en el resultando décimo séptimo de esta sentencia. Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito y respetando en beneficio de la quejosa su garantía de audiencia, resulta que del análisis integral de los elementos de convicción que obran en autos, es procedente concluir que el predio denominado "Fracción del lote 111", del fraccionamiento "Elk City Oklahoma México Colony", con superficie de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas) constituye una pequeña propiedad inafectable en los términos de los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez, que no rebasa los límites de la pequeña propiedad, y ha permanecido en explotación por sus respectivos propietarios, a través del tiempo, antes y después de la fecha de la solicitud de dotación del poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, que data de veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y uno.

Que tomando en cuenta que de los elementos de convicción analizados, tampoco aparece ninguna otra causal de afectación, en razón de que el título de propiedad que lo ampara es legítimo, ya que las

ventas efectuadas, con posterioridad a la fecha de la solicitud de dotación, surtieron sus efectos, al no haberse comprobado la inexplotación del predio, y estar además protegido por el certificado de inafectabilidad agrícola número 60001, expedido a John Albert Jones, por acuerdo presidencial de ocho de febrero de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el dos de enero de mil novecientos cincuenta y uno, cabiendo aplicar por analogía el criterio establecido al respecto en la siguiente jurisprudencia:

"AGRARIO. PEQUEÑA PROPIEDAD INAFECTABLE, RECONOCIMIENTO DE. VENTAS DE FRACCIONES. PRODUCEN EFECTOS AUNQUE SE EFECTUEN DESPUES DE INICIADO EL PROCEDIMIENTO AGRARIO EN QUE SE SOLICITA SU AFECTACION. No es aplicable el artículo 64, fracción I, del Código Agrario (que corresponde al artículo 210, fracción I, párrafo primero, de la Ley Federal de Reforma Agraria), al caso en que se afectan ventas de fracciones de un predio amparado con certificado de inafectabilidad agraria, o, por analogía, con el reconocimiento y declaratoria de pequeña propiedad inafectable hechos por el Presidente de la República, ya que dicho precepto se refiere a la división o fraccionamiento de predios afectables; por lo que, encontrándose el terreno amparado con certificado de inafectabilidad vigente, o con reconocimiento de pequeña propiedad inafectable, las ventas realizadas de fraccionamientos producen efectos, incluso en materia agraria, aunque se hayan verificado con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de ejidos, ya que dichas ventas se realizan sobre predios inafectables, según declaratoria hecha por la suprema autoridad agraria, por una resolución que únicamente la misma puede dejar sin efectos; pero, mientras no exista la declaratoria de cancelación relacionada, no pueden considerarse afectables los predios de referencia".

Volumen 10, pág. 15. Amparo en revisión 2788/68. Leonel Guizar Alvarez y coags. 3 de octubre de 1969. 5 votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

Volumen 10, pág. 15. Amparo en revisión 7641/68. Rafael Rico Santos. 27 de octubre de 1969. 5 votos. En la publicación no aparece nombre del ponente.

Volumen 55, pág. 14. Amparo en revisión 4538/72. Leonila del Toro de Walter. 19 de julio de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

Volumen 85, pág. 13. Amparo en revisión 1929/75. Benjamín López García. 28 de enero de 1976. 5 votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro.

Volúmenes 91-96, pág. 42. Amparo en revisión 1002/76. Gracia Quintana Medina y otros (menores). 21 de julio de 1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Antonio Rocha Cordero.

Séptima Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 91-96 Tercera Parte

Página: 120

Que por otra parte y por lo que hace al escrito de alegatos presentado por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por escrito de veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho, en el que argumentan "...que no se dio cumplimiento al artículo 286 y 290 de la Ley Federal de Reforma Agraria...", toda vez que en los informes de los comisionados no se detalla el origen de todos y cada uno de los predios que integran el radio legal de su poblado; al respecto debe señalarse, que la presente sentencia se emite en estricto cumplimiento de la ejecutoria dictada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que resultaría improcedente reiniciar el procedimiento agrario que dio origen al juicio que aquí se resuelve, solamente porque los comparecientes argumentan que los terrenos que les fueron concedidos por el Mandamiento Gubernamental, no son de cultivo y que los predios que integran el radio legal de su poblado, provienen todos de terrenos nacionales, que no salieron del dominio de la Nación por títulos legalmente expedidos, toda vez que este argumento resulta inconsistente por lo que hace al predio de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas), mejor conocido como fracción del lote 111 propiedad de la multicitada Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, tomando en cuenta que su propiedad deviene de una venta efectuada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y además amparado por el certificado de inafectabilidad número 60001, circunstancia que lo hace inafectable en la especie por las razones expresadas en el párrafo precedente; por lo que resulta igualmente inatendible el argumento de los representantes, del poblado "Canoas", de que se viola en su perjuicio el artículo 27 constitucional, ya que si bien esta disposición establece la creación de ejidos, establece también la protección de la pequeña propiedad, como base de organización agrícola, es decir, la mencionada disposición constitucional establece la facultad del Poder Ejecutivo de dictar resoluciones, en los procedimientos agrarios, para dotar de ejidos a los núcleos de población que carezcan de ellos, pero siempre con la restricción de que en toda resolución afectatoria se respete la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación; así la fracción XV del precepto constitucional que se menciona establecía correlativamente a los derechos de los dueños o poseedores de

pequeñas propiedades, la prohibición a las autoridades encargadas anteriormente del trámite de procedimientos agrarios, de afectar la pequeña propiedad agrícola y ganadera en explotación y aún establece constitucionalmente los límites y extensiones así como las equivalencias en cuanto a calidad de tierras de las superficies que se consideran pequeñas propiedades. En el presente caso quedó demostrado que no es de afectarse el predio de 42-50-00 (cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas) hoy propiedad de la quejosa Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, por las razones expuestas. Al respecto sirve de apoyo la tesis visible a fojas 16 del tomo LXXI, tercera parte, sexta época, segunda sala, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"PEQUEÑA PROPIEDAD INAFECTABLE DE LA. La pequeña propiedad es una institución agraria constitucionalmente definida como intocable y exenta de contribuir a la dotación de ejidos, como límite señalado expresa y terminantemente en la fracción XV del artículo 27 de la Constitución Federal, que dispone que las `autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no podrán afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad agrícola o ganadera en explotación o incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la constitución, en caso de conceder dotaciones que la afecten'. Por los razonamientos que anteceden, es de concluirse que asiste la razón a la responsable al haberse pronunciado en el sentido que lo hizo en consecuencia resulta infundado el concepto de violación esgrimido y con ello surge la imposibilidad de conceder la protección constitucional solicitada".

Que por las consideraciones antes expuestas y tomando en cuenta que los predios concedidos en dotación provisional a los campesinos del poblado "Canoas", de antecedentes, se encontraron en posesión y explotación de los propios solicitantes, en virtud del abandono e inexplotación por parte de sus propietarios, situación que de acuerdo a los trabajos técnicos informativos que obran en autos, se presume que prevaleció durante más de dos años consecutivos, se estima que en la especie se integra la causal de afectación, derivada del artículo 251, interpretado en sentido contrario de la Ley Federal de Reforma Agraria; que Francisco V. Zironi, fue notificado en relación al procedimiento instaurado en su contra para cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola números 48711 y 60001, que amparaban los predios de su propiedad, notificándosele por edictos publicados en el periódico La Prensa los días 5, 12 y 19 de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, y en el **Diario Oficial de la Federación** los días 24 de febrero, 5 y 16 de marzo de mil novecientos ochenta y uno al no habérsele podido localizar personalmente, habiendo transcurrido el plazo de ley sin que el interesado haya concurrido al procedimiento a presentar pruebas y formular alegatos en su defensa, por lo que las garantías de audiencia y legalidad se respetaron en su beneficio.

Que es procedente dotar al poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, una superficie total de 1,142-80-00 (mil ciento cuarenta y dos hectáreas, ochenta áreas), afectando con fundamento en el artículo 251, interpretado en sentido contrario de la Ley Federal de Reforma Agraria, una superficie de 498-25-75 (cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, veinticinco áreas, setenta y cinco centiáreas) de agostadero en monte; lote número 57 del fraccionamiento "Elk City Oklahoma México Colony" con 80-50-00 (ochenta hectáreas, cincuenta áreas) de temporal; lote 58, fracción del 59 y fracción del 111 del mismo fraccionamiento con 112-00-00 (ciento doce hectáreas), de temporal, todos propiedad de Francisco V. Zironi; con fundamento en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria los lotes 24, 25 y fracción del 26, con 330-00-00 (trescientas treinta hectáreas) propiedad del Gobierno del Estado y el lote número 22 con 122-54-25 (ciento veintidós hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, veinticinco centiáreas) de agostadero en monte, como baldío propiedad de la Nación. La anterior superficie deberá ser localizada de acuerdo con el plano que al efecto se elabore y pasa a ser propiedad del poblado beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, y en cuanto a la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

Con respecto al mandamiento gubernamental de veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y cinco, deberá modificarse en relación a la superficie concedida en dotación.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la dotación de tierras solicitada por campesinos del poblado "Canoas", ubicado en el Municipio de Ciudad Valles, en el Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO.- Se dota al poblado "Canoas", Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, con una superficie total de 1,142-80-00 (mil ciento cuarenta y dos hectáreas, ochenta áreas), afectando con fundamento en el artículo 251, interpretado en sentido contrario de la Ley Federal de Reforma Agraria: superficie de 498-25-75 (cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, veinticinco áreas, setenta y cinco centiáreas) de agostadero en monte; lote número 57 del fraccionamiento "Elk City Oklahoma México

Colony" con 80-50-00 (ochenta hectáreas, cincuenta áreas) de temporal; lote 58, fracción del 59 del mismo fraccionamiento con 112-00-00 (ciento doce hectáreas), de temporal, todos propiedad de Francisco V. Zironi; con fundamento en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria: los lotes 24, 25 y fracción del 26, con 330-00-00 (trescientas treinta hectáreas) propiedad del Gobierno del Estado y el lote número 22 con 122-54-25 (ciento veintidós hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, veinticinco centiáreas) de agostadero en monte, baldío propiedad de la Nación. La anterior superficie deberá ser localizada de acuerdo con el plano que al efecto se elabore y pasa a ser propiedad del poblado beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, y en cuanto a la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria en vigor.

TERCERO.- Se modifica el mandamiento del Gobernador del Estado emitido el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, y publicado el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y cinco en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por lo que hace a la superficie concedida en dotación.

CUARTO.- Comuníquese con copia certificada de la presente sentencia al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en relación al amparo D.A. 3455/96, interpuesto por Luz Elena del Perpetuo Socorro Aguirre de González, en contra de actos de este Tribunal.

QUINTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; los puntos resolutivos de la misma sentencia en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos agrarios correspondientes conforme a las normas aplicables.

SEXTO.- Notifíquese a los interesados; comuníquese al Gobernador del Estado de San Luis Potosí, a la Procuraduría Agraria, al Registro Público de la Propiedad correspondiente y a la Secretaría de la Reforma Agraria a través de la Dirección de Colonias y Terrenos Nacionales de la Dirección General de Procedimientos Agrarios; ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cuatro votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, con la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 327/96, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Paso Valencia, Municipio de Papantla, Ver.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 327/96, que corresponde al expediente administrativo 5700, relativo a la solicitud de segunda ampliación de ejido, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Paso Valencia", ubicado en el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz; en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DA.-1481/98, promovido por Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- El Tribunal Superior Agrario, el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictó sentencia en el juicio agrario número 327/96, correspondiente al poblado señalado al rubro, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.- Se declara la nulidad del acuerdo de inafectabilidad ganadera y la cancelación del certificado número 407621 expedido el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, que ampara el predio 'El Pahual o Las Palmas', que ampara una superficie de 196-00-00 (ciento noventa y seis hectáreas) de agostadero de buena calidad, en base a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia.

SEGUNDO.- Es procedente la segunda ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado 'Paso Valencia', Municipio Papantla, Estado de Veracruz, por tanto, es de concederse y se concede una superficie de 213-58-25 (doscientas trece hectáreas, cincuenta y ocho áreas, veinticinco centiáreas) de agostadero de buena calidad, que se tomará del predio denominado 'El Pahual o Las Palmas', ubicado en el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, propiedad de la Federación, en términos del artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

La superficie que se concede deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en autos y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y

servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria...".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por escrito presentado el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, ante el Tribunal Superior Agrario, Jorge N. Villada, representante legal de Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal; radicada dicha demanda de garantías en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número DA-1481/98, se dictó resolución el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la que la Justicia de la Unión amparó y protegió a dichos quejosos, en contra de la sentencia pronunciada por este Tribunal Superior Agrario, el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en el expediente número327/96, para el efecto que el Tribunal Superior Agrario dejará insubsistente la sentencia reclamada, y en su caso pronuncie otra en la que funde y motive debidamente la pretendida causal de cancelación del certificado de inafectabilidad número 407621, expedido el veintinieve de abril de mil novecientos noventa y ocho, a favor de Juana Misseferi de Lammoglia, que ampara el predio "Las Palmas", con superficie de 196-00-00 (ciento noventa y seis hectáreas) de agostadero de buena calidad, ubicado en el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, así como la consiguiente afectación del predio, de resultar procedente la acción agraria de segunda ampliación de ejido, teniendo en consideración lo siguiente:

"...**SEPTIMO.-** En cambio es fundado y suficiente para conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitada lo expuesto en el concepto de violación referido en cuarto término, en cuanto se duele de que la autoridad responsable indebidamente anula el acuerdo de inafectabilidad ganadera, de fecha veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en favor del predio 'Las Palmas', con una superficie de 196-00-00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS HECTAREAS) propiedad de JUANA MISSEFERI DE LAMMOGLIA, sin fundamento ni sustento jurídico y en contravención a lo dispuesto en el artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicada en términos del artículo tercero transitorio de la Ley Agraria vigente.

En efecto, a fin de demostrar el aserto anterior conviene traer al caso lo expuesto por la responsable en el considerando quinto, inciso i) de la sentencia reclamada, que dice:

'i) En virtud de la notificación del procedimiento de nulidad de acuerdo presidencial de inafectabilidad ganadera, en informe del dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, el Comisionado de la Delegación Agraria en el Estado de Veracruz, manifestó que según información proporcionada por Salvador Román Lammoglia Misseferi, Juana Misseferi de Lammoglia, había fallecido el diez de agosto de mil novecientos noventa y tres. En base a estos antecedentes, se llega a la convicción de que en el caso es procedente declarar la Nulidad del Acuerdo Presidencial de Inafectabilidad Ganadera publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y por ende es procedente la cancelación de certificado número 407621, expedido el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho (sic), en favor de Juana Misseferi de Lammoglia, que ampara el predio 'Las Palmas', con superficie de 196-00-00 (ciento noventa y seis hectáreas) de agostadero de buena calidad, ubicado en el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, en virtud de que se tramitó después de que había sido publicada la solicitud de segunda ampliación de ejido el diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, surtiéndose así la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, resultando también aplicable el artículo 236 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 16 de la Ley General de Bienes Nacionales. No pasa inadvertido que por escrito de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador y Adrián de apellidos Lammoglia Macip, presentaron copia de la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, en autos del expediente número 830/93, sustanciado con motivo de la creación del nuevo centro de población ejidal, promovida por campesinos del poblado 'La Martinica', Papantla, Veracruz, que de constituirse se hubiera denominado Josefa Ortiz de Domínguez, en la que se consideró inafectable el predio 'El Pahual o Las Palmas'. Con motivo de la presentación de este documento, fue necesaria la consulta de las constancias procesales que obran en el expediente número 830/93, radicado ante este Tribunal Superior Agrario, llegando al conocimiento de que en este expediente no obra el decreto de expropiación publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve (sic), a que ya se hizo referencia en esta resolución, razón por la que en el referido expediente se resolvió de la manera como se hizo, sin embargo, en las constancias procesales del expediente administrativo relativo a la segunda ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado Paso Valencia, Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, sí se cuenta con el referido decreto y además con los documentos relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Agustín Lammoglia Misseferi en el expediente 243/954, instaurado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia, de Papantla, Veracruz, así como de las escrituras mediante las que el predio El Pahual, fue vendido por esta persona a Juana Misseferi de

Lammoglia, quien a su vez vendió en tres fracciones este terreno a Salvador Román Lammoglia Misseferi, así como a Adrián y Salvador de apellidos Lammoglia Macip, documentos que valorados adminiculamente, llevan a la conclusión de que el citado predio es propiedad de la Federación, pues como ya se dijo anteriormente no se ha expedido título que lo ampare legalmente, considerando además que el acuerdo de inafectabilidad y la expedición del certificado número 407621, expedido a nombre de Juana Misseferi de Lammoglia el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, por tratarse de documentos posteriores a la publicación de la solicitud de ampliación de ejido no surten eficacia probatoria y por tanto es procedente declarar la nulidad y cancelación de los mismos'.

De lo transcrito con anterioridad se puede apreciar que la responsable hace depender la nulidad y cancelación del certificado de inafectabilidad de que se trata, del hecho de que dicho documento se expidió con posterioridad a la solicitud de tierras formulada por el núcleo agrario tercero perjudicado.

Ahora bien, el artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria establece:

'ARTICULO 418.- Los certificados de inafectabilidad legalmente expedidos podrán ser cancelados cuando:

I.- El titular de un certificado de inafectabilidad agrícola, ganadera o agropecuaria, adquiera extensiones que, sumadas a las que ampara el certificado, rebasen la superficie señalada como máximo inafectable, de acuerdo con las equivalencias del artículo 250;

II.- El predio no se explote durante dos años consecutivos salvo que medien causas de fuerza mayor;

III.- Tratándose de inafectabilidad ganadera o agropecuaria, dedique la propiedad a un fin distinto del señalado en el certificado, y

IV.- En los demás casos que esta Ley señale.

De lo referido con anterioridad se advierte que si bien las causales de cancelación de certificados de inafectabilidad que establece la legislación agraria en consulta, son de carácter enunciativo y no limitativo, también lo es que las hipótesis que refiere la fracción IV del numeral transcrito deben precisarse con relación al supuesto contemplado por la propia ley, es decir relacionarse con el precepto legal correspondiente y que como ejemplo se pueden citar los siguientes casos: Los previstos por los artículos 52, 53 y 257 de la mencionada Ley Federal de Reforma Agraria, en cuanto disponen la nulidad de los acuerdos de inafectabilidad decretados respecto de predios comprendidos dentro del régimen ejidal, así como cuando los rústicos protegidos con certificados de inafectabilidad, se dediquen al cultivo de estupefacientes.

En ese orden de ideas, es claro que la resolutora responsable no fundó debidamente el acto reclamado, sin que importe en contrario la circunstancia de que se invoque la supuesta hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 418 de la Legislación Agraria en consulta, ya que ésta no es ninguna causal de cancelación, según se vio de la consideración precedente, por lo que la nulidad decretada del acuerdo en cuestión resulta contraria a derecho, en razón de que se omitió citar con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como las razones particulares, circunstancias especiales y causas inmediatas que tuvo en consideración para arribar a la conclusión cuestionada, luego entonces, conforme a lo antes apuntado, es claro que la autoridad responsable no hizo un estudio y análisis exhaustivo del material probatorio que obra en el juicio natural, tal como lo establece el artículo 189 de la Ley Agraria vigente, lo que resulta violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, cuya conculcación aducen los quejosos y en consecuencia, lo conducente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su caso pronuncie otra en la que funde y motive debidamente la pretendida causal de cancelación del certificado de inafectabilidad referido, así como la consiguiente afectación del predio, de resultar procedente la acción agraria en comento.

En consecuencia, resulta innecesario analizar los restantes motivos de inconformidad, puesto que en nada variarían la conclusión alcanzada.

En apoyo a los argumentos expuestos se invocan las tesis de jurisprudencia números 263 y 280, publicadas en las páginas 177 y 200 de los tomos III y IV del apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dicen:

'INAFECTABILIDAD. ACUERDOS QUE LA DECLARAN. ENTRAÑAN EL RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD EN FAVOR DE QUIENES SE EXPIDEN: Los acuerdos presidenciales de inafectabilidad entrañan el reconocimiento por la suprema autoridad agraria del derecho de propiedad en favor de las personas a quienes se otorgan, y, necesariamente, el de que las operaciones de compraventa por medio de las cuales dichas personas adquirieron los predios respectivos, produjeron efectos jurídicos'.

'FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO, GARANTIA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN.- Cuando se alegan en la demanda de garantías violaciones formales, como lo son el que no se respetó la garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no procede la protección constitucional por violaciones de

fondo, porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, aunque pueden constreñírsele a reiterarlo'...".

TERCERO.- Por acuerdo plenario de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal Superior Agrario, en cumplimento a la ejecutoria de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio de amparo DA.-1481/98, dejó "parcialmente" insubsistente la sentencia de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el propio Tribunal Superior Agrario en el expediente del juicio agrario 327/96, que corresponde al expediente administrativo agrario 5700, relativos a la segunda ampliación de ejido al poblado que nos ocupa, "unicamente por lo que se refiere a la superficie que defienden los quejosos, y que se encuentra amparada por el certificado de inafectabilidad ganadera 407621", y a su vez, ordenó turnar el expediente al Magistrado Ponente, para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad, formule el proyecto de sentencia correspondiente y lo someta a la aprobación del pleno de este Tribunal Superior.

CUARTO.- En mérito de lo anterior, y a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria en mención, se procede a la revisión del expediente administrativo 327/96, relativo a la solicitud de segunda ampliación de ejido del poblado "Paso Valencia", Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, en donde obran los siguientes antecedentes:

I.- Por Resolución Presidencial de cuatro de septiembre de mil novecientos veinticinco, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el once de noviembre de ese mismo año, se concedió por concepto de dotación de tierras una superficie de 618-00-00 (seiscientas dieciocho hectáreas), para beneficiar a ciento tres campesinos capacitados más la parcela escolar, habiéndose ejecutado el primero de marzo de mil novecientos veintiséis.

II.- Mediante Resolución Presidencial de veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de mayo de ese mismo año, se concedió por concepto de ampliación de ejido al poblado que nos ocupa una superficie de 1,463-00-00 (mil cuatrocientas sesenta y tres hectáreas), para beneficiar a sesenta y cinco campesinos capacitados, habiéndose ejecutado dicha resolución el veinticuatro de septiembre de ese mismo año.

III.- Por escrito de veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y siete, un grupo de campesinos del poblado de referencia, se dirigieron al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, solicitando segunda ampliación de ejido, en virtud de que las tierras concedidas por concepto de dotación y ampliación, resultan ser insuficientes para satisfacer sus necesidades agrícolas, señalando como predio de probable afectación el denominado 'El Pahual', administrado por Petróleos Mexicanos y demás predios ubicados dentro del radio de siete kilómetros.

IV.- El treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Veracruz, instauró el expediente respectivo registrándolo bajo el número 5700, girando los avisos de iniciación correspondientes. La solicitud se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, el diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.

V.- Por oficios números 6778, 6779 y 6780 de nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, expidió los nombramientos en favor de Eustolio Martínez Huerta, Cirilo García Ordóñez y Urbano Gómez Sandoval, como presidente, secretario y vocal, del Comité Particular Ejecutivo, respectivamente.

VI.- Por oficio número 6775 de nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, la Comisión Agraria Mixta, procedió a notificar al Jefe del Departamento de Servicios de Petróleos Mexicanos la iniciación del expediente en estudio, comunicándole que los campesinos solicitantes de la segunda ampliación de ejido, señalaron como predio presuntamente afectable el denominado "El Pahual", propiedad de Petróleos Mexicanos, asimismo, se notificó a todos los propietarios de predios que se encuentran ubicados dentro del radio legal de siete kilómetros, por medio de cédula común notificatoria de esa misma fecha.

VII.- La Comisión Agraria Mixta, mediante oficio número 6765 de ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, comisionó a José Ubaldo López Mora, a efecto de que se trasladara al poblado de referencia y llevara a cabo investigación sobre el aprovechamiento de las tierras concedidas por dotación y ampliación de ejido, asimismo levantara el censo general de población y el recuento pecuario correspondiente, mismo que rindió su informe el veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, en los siguientes términos:

'...Habiéndome trasladado al lugar de referencia... se llevó a cabo una inspección ocular por todo el ejido, con el objeto de comprobar la forma en que se encuentra aprovechado. Una vez terminada la inspección se pudo constatar que en lo que respecta a tierras cultivadas, éstas se hayan sembradas aproximadamente de la siguiente manera: maíz 1,000-00-00 Has.; frijol 20-00-00 Has.; plátano 16-00-00 Has.; naranjo 20-00-00 Has.; vainilla 20-00-00 Has.; chile 55-00-00 Has.; pasto guinea 50-00-00 Has.; pasto pángola 50-00-00 Has.; monte alto 100-00-00 Has; sábanas 100-00-00 Has.; 50-00-00 Has.

ocupadas por la zona urbana del poblado dando un total de 1,481-00-00 Has... Se encuentra dentro del ejido arriba mencionado, alrededor de 90 cabezas de ganado vacuno, de las que unas 60 cabezas están a pastos y el resto, o sea 30, son propiedad de los ejidatarios del lugar. Manifestaron las autoridades del ejido al comisionado, que una superficie aproximada de 300-00-00 Has., pertenecientes al ejido 'Paso de Valencia', están invadidas por un grupo de campesinos de San Lorenzo, Ver., y también que desde el año de 1944 hasta esta fecha, el Río Tecolutla les ha cortado una superficie de tierra aproximada a unas 300-00-00 Has., como se pudo ver a la hora de hacer la inspección ocular; que la mayor parte de esos terrenos se han formado isletas y terrenos pedregosos, en donde no se puede cultivar nada, por encontrarse esos lugares en pésimas condiciones. Considero conveniente hacer del conocimiento de esa superioridad, que donde se encuentran los terrenos de Petróleos Mexicanos, denominados 'El Pahual', éstos se hayan totalmente enmontados, siendo una superficie aproximada de 300-00-00 Has., habiendo manifestado las autoridades ejidales, así como también el agente municipal, que tiene como 4 años que nadie trabaja esas tierras...".

Los trabajos censales, arrojaron setenta y nueve campesinos capacitados.

VIII.- La Comisión Agraria Mixta aprobó dictamen el veinte de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, en el cual niega la acción intentada, en virtud de que el poblado promovente no demostró el debido aprovechamiento de las tierras de cultivo que le fueron concedidas por dotación y ampliación de ejido.

IX.- El Gobernador del Estado de Veracruz no emitió mandamiento, no obstante que por oficio número 2414 de diecinueve de abril de mil novecientos sesenta y ocho se le turnaron los autos del expediente.

X.- Por oficio de veinte de octubre de mil novecientos setenta y ocho, el Delegado Agrario en el Estado de Veracruz, emitió su opinión confirmando en todas sus partes el dictamen de la Comisión Agraria Mixta.

XI.- El dieciséis de enero de mil novecientos ochenta, el Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó dictamen negando la acción, por no estar debidamente aprovechadas las tierras ejidales concedidas por concepto de dotación y ampliación.

XII.- Los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, por escrito sin fecha, presentaron inconformidad en contra del dictamen que antecede, argumentando que se aprobó sin que la Comisión Agraria Mixta en la entidad federativa y la Sala Regional de este órgano colegiado en Jalapa, Veracruz, tomaran en cuenta el informe de veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, realizado por el comisionado José Ubaldo López Mora, en el que manifiesta que la superficie que se encuentra sin explotar es debido a las pequeñas isletas que ha formado el río Tecolutla, además de que otras partes se encuentran empedradas, siendo éste el motivo principal por el cual les negaron su solicitud de segunda ampliación de ejido. Por otra parte, manifestaron que el predio denominado "El Pahual", es administrado por Petróleos Mexicanos, del cual se han desmembrado diversas fracciones, en virtud de juicios de prescripción positiva, promovida por diversas personas, por lo que solicitaron la práctica de nuevos trabajos técnicos e informativos complementarios.

XIII.- El Cuerpo Consultivo Agrario, en sesión celebrada el seis de octubre de mil novecientos ochenta y dos, acordó dejar sin efectos jurídicos el dictamen aprobado por este órgano colegiado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y ordenó a la Dirección General de Procedimientos Agrarios comisionara personal de su adscripción, a efecto de que llevara a cabo trabajos técnicos e informativos, de conformidad a lo establecido en el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

En cumplimiento a este acuerdo, la Subdirección de Tierras y Aguas, dependiente de la Dirección General de Procedimientos Agrarios, mediante oficio número 2864 de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, comisionó al ingeniero Enrique Poceros Contreras, a fin de que llevara a cabo los trabajos técnicos e informativos complementarios, mismo que rindió su informe el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en los siguientes términos:

"...Habiéndome trasladado al poblado citado al rubro, para proceder con los trabajos encomendados, por lo que comunico a usted, que después de realizar una asamblea con los integrantes del grupo solicitante, para comunicarles de la comisión encomendada, posteriormente se pasó lista de asistencia, arrojando un total de 74 solicitantes, inmediatamente se informó al comisionado de la ubicación de los predios señalados, llegando a un acuerdo de la forma en que se procedería a realizar el desahogo de estos trabajos, teniendo como primer predio a deslindar la fracción del predio 'El Pahual', propiedad de Alfonso Ortuño C., elaborando de inmediato los citatorios correspondientes, indicándole al propietario antes mencionado el día exacto en que se procedería a realizar estos trabajos, mandándole así el citatorio correspondiente, negándose éste a recibir el aviso antes mencionado, por lo que se procedió a realizar estos trabajos, esperando tener contacto con el propietario en el trayecto de este recorrido para conocer mejor los linderos correspondientes, no presentándose a este recorrido el propietario o encargado de dicho predio localizando una superficie de 250-00-00 Has., en lo que respecta a los datos del Registro Público de la Propiedad señala que en inscripción número 544, sección primera, tomo 9 de 1o. de agosto de 1944. El Fisco del Estado, representado por el C. Jefe de la Oficina de Hda. del Estado de este lugar,

vendió a favor del señor Andrés Trueba una finca rústica con superficie de 250-00-00 Has., ubicada en el predio denominado 'El Pahual', perteneciente a este Municipio de Papantla, Ver.

Al terminar los datos del Registro Público de la Propiedad en los datos que señala la Escritura Pública número 4102 del Lic. José Ma. Garza Satinas hace mención que perteneció a la Hacienda El Pahual, propiedad del C. Brown, posteriormente propiedad de Petróleos Mexicanos.

Posteriormente, se pasó a localizar al predio denominado 'Las Palmas', propiedad de la Sra. Juana Misseferi de Lammoglia, localizando una superficie de 198-00-00 Has., que se encuentran unidas por una parte con el predio mencionado anteriormente, perteneciendo este predio a la Hacienda de El Pahual, como lo hace ver la Escritura Pública No. 2567 del Lic. Gustavo de la Llave Kranss, el cual hace la aclaración que fue adquirida por prescripción positiva, con superficie de 198-00-00 Has., conocido también con el nombre de Texquitipam, hoy conocido como Las Palmas, ya que los datos del Registro Público de la Propiedad manifiesta que en la inscripción número 780, sección primera, tomo 11 de 19 de diciembre de 1946, por juicio intestamentario a bienes de la Sra. Francisca Consejo de López, se adjudicó a los señores Florentino Enrique, Severiano y María Margarita López, por partes iguales, la finca rústica compuesta de 289-00-00 Has., ubicada en el predio denominado Texquitipam, perteneciente a este Municipio de Papantla, Ver.

Lo que señala que la Finca Texquitipam es actualmente 'Las Palmas', y aunque no lo menciona este predio formó parte de la Hacienda del Pahual como lo indica la Escritura correspondiente...

...En lo que respecta a la parte restante de la Hacienda El Pahual, ésta se encuentra en su mayoría en manos de campesinos entre dotaciones y ampliaciones, quedando de esta Hacienda el casco correspondiente de dicho predio y al igual que la finca 'Santa Clara', ha sido fraccionada en ejidos y unas fracciones que se encuentran en poder de la familia Trueba Patiño, con compraventa anterior a la solicitud.

Cuando se mencionó a los solicitantes de localizar los predios antes señalados si los reconocían perfectamente los linderos como su extensión, agregando éstos que sí, mencionándoles si alguna otra fracción había que localizar, indicando al comisionado que no, que únicamente querían se midieran estos tres que son los que ellos solicitaron y que no querían meterse a ningún otro predio, por lo que de este modo se dio por terminada la localización de estos predios...'.

El comisionado anexó el informe proporcionado por la oficina del Registro Público de la Propiedad de Papantla, Veracruz, que contiene los datos de las propiedades investigadas, así como escrito de alegatos y pruebas documentales aportadas por Baldomero Ibáñez Tejeda, Alfonso Ortuño Carballo, Juana Misseferi de Lammoglia y Salvador R. Lammoglia Misseferi.

XIV.- El ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó dictamen en sentido positivo proponiendo la afectación de 198-75-30 (ciento noventa y ocho hectáreas, setenta y cinco áreas, treinta centiáreas) de agostadero de buena calidad, que se tomarían íntegramente del predio Exhacienda de "Santa Clara" o "El Pahual", propiedad de la Nación, hoy conocido como "Las Palmas", del cual Juana Misseferi de Lammoglia tiene la posesión.

XV.- Por escrito de seis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, Juana Misseferi viuda de Lammoglia, a través del Presidente y Secretario de la Confederación Nacional Ganadera, y ante la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, presentó inconformidad en contra del dictamen del ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, alegando fundamentalmente que su predio es inafectable.

XVI.- Por oficio número 28289 de veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, la Unidad de Acuerdos Presidenciales de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, formuló observaciones al dictamen en los siguientes términos:

"...El informe del comisionado de 19 de diciembre de 1982 que realizó los trabajos técnicos e informativos complementarios, manifiesta que según datos que proporcionó el Registro Público de la Propiedad, señala que en octubre de 1921 adquirieron 1,000-00-00 Has. las Sociedades J.A. Brown S.E.N.C. y L. Buche S. en C. correspondiéndole a la primera 750-00-00 Has., y a la segunda 250-00-00 Has., de la Ex hacienda 'Santa Clara', con motivo del acto expropiatorio en el año de 1938 pasaron a ser propiedad de la Nación los predios de referencia, la fracción de 750-00-00 Has., ha sido reducida debido a varias afectaciones agrarias, ya que al poblado 'San Gotardo', se concedieron 164-00-00 Has.; 288-00-00 Has., para `Paso Valencia' y para el poblado 'El Pípila' dan una suma de 579-00-00 Has., por lo que le restan 171-00-00 Has., y en la presente acción pretenden conceder de la misma fracción 198-75-30 Has., por lo que se solicita aclarar la diferencia de 27-75-30 Has. de qué predio o fracción fueron tomadas...".

XVII .- El diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, y en cumplimiento a las observaciones formuladas por la Unidad de Acuerdos Presidenciales, el Cuerpo Consultivo Agrario, acordó suspender los efectos jurídicos del dictamen del ocho de febrero de ese año, y por oficio número 110001 de dieciséis de octubre de ese mismo año, solicitó al Delegado Agrario en el Estado de Veracruz, la práctica de nuevos trabajos técnicos e informativos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los que cuando se realizara el levantamiento topográfico del

predio denominado Ex hacienda de “Santa Clara” o “El Pahual”, hoy conocido como “Las Palmas”, se determinara si la superficie de 27-75-30 (veintisiete hectáreas, setenta y cinco áreas, treinta centiáreas), se encontraban comprendidas dentro de dicho predio o dentro de demasías propiedad de la Nación, debiendo recabar también datos de las oficinas rentísticas y del Registro Público de la Propiedad, que permitiera conocer los cambios de propiedad de dicho predio. En tal virtud, la citada Delegación Agraria comisionó al Ingeniero Miguel Angel Meza García a través de oficio número 192 del tres de enero de mil novecientos ochenta y cinco, profesionista que el veinticinco de enero de ese mismo año, rindió su informe en los siguientes términos.

“...DATOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.- De los datos del Registro Público de la Propiedad, enviados al suscrito en oficio número 016 del 25 de enero del presente año, de las oficinas en Papantla, Ver., así como de los obtenidos del expediente de dotación de ejidos del poblado ‘El Pípila’, Municipio de Papantla, Ver., así como del expediente que nos ocupa, de los cuales se analiza lo siguiente:

EXHACIENDA ‘SANTA CLARA O EL PAHUAL’, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.

Antecedentes de la misma:

Según inscripción 770 del 11 de octubre de 1921, el Sr. ‘J.A. Brown’, en nombre y representación de su mandante la Sociedad `J.A. Brown', Sociedad en Comandita, vendió a favor de la Sociedad ‘E.L. Bucley’, Sociedad en Comandita, una cuarta parte de la mitad de la Hacienda de Santa Clara denominada ‘El Pahual’, perteneciente al Municipio de Papantla, Veracruz, con superficie de 250-00-00 Has. Y del mismo predio antes mencionado; según inscripción 232 del 26 de noviembre de 1924; las Sociedades ‘J.A. Brown S. en Comandita y la Compañía ‘E.L. Buckley’, Sociedad en Comandita, se dividieron el predio `El Pahual’, quedando dicha partición de la siguiente forma: La fracción ‘A’ con superficie de 750-00-00 Has. a la Sociedad Mercantil denominada ‘J.A. Brown’ S. en Comandita y la fracción ‘B’ con superficie de 250-00-00 Has., a la Compañía E.L. ‘Buckley’ Sociedad en Comandita. De esta última fracción le fue afectada una superficie de 167-80-00 Has., para dotación ejidal, a favor de los vecinos del poblado ‘Alamo’, según inscripción 317 del 29 de octubre de 1935.

Por otra parte con motivo del Decreto Presidencial Expropiatorio, de fecha 18 de marzo de 1938, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 19 de marzo del mismo año, la fracción de 750-00-00 Has. del predio ‘El Pahual’, pasó a ser propiedad de la Nación para ser administrada por Petróleos Mexicanos. La superficie de terreno anteriormente mencionada fue reducida por afectaciones agrarias para ampliaciones y dotaciones ejidales para los siguientes poblados:

San Gotardo, Municipio de Papantla, Ver., según Resolución Presidencial de 6 de Febrero de 1962, una superficie de ..... 164-00-00 Has.

Paso Valencia, Municipio de Papantla, Ver., según Resolución Presidencial de 24 de Marzo de 1964, una superficie de 288-00-00 Has.

El Pípila, Dotación. Municipio de Papantla, Ver., según Resolución Presidencial de 12 de Febrero de 1982, una superficie de ..... 127-00-00 Has.

SUPERFICIE TOTAL ..... 579-00-00 Has.

Del predio antes citado el C. Agustín Lammoglia Misseferi, adquirió por prescripción positiva una superficie de 198-75-30 Has. del predio rústico denominado ‘Las Palmas’ de la Congregación de ‘El Pahual’, Municipio de Papantla, Ver., según inscripción 583 del 3 de septiembre de 1954.

Posteriormente según inscripción 1216 del 11 de diciembre de 1956, el C. Agustín Lammoglia Misseferi, vendió el predio antes mencionado a la Sra. Juana Misseferi de Lammoglia, o sean las 198-75-30 Has. ya mencionadas.

El predio antes citado, según antecedentes proviene de la ExHacienda Santa Clara o El Pahual, la que después de las compra ventas efectuadas y mencionadas al principio, pasaron a ser propiedad de la Nación, según Decreto Presidencial Expropiatorio citado anteriormente.

Deduciendo de las 750-00-00 Has., que originalmente contaba la Hda. Santa Clara hoy Ex hacienda Santa Clara o El Pahual se le restan 579-00-00 Has., que fueron afectadas para los poblados mencionados en párrafos anteriores, y le quedaría al citado predio una superficie de 171-00-00 Has., sin embargo el Sr. Agustín Lammoglia Misseferi, del citado predio adquirió por prescripción positiva una superficie de 198-75-30 Has., existiendo una demasía de 27-75-30 Has., ahora bien tomando en consideración el levantamiento efectuado por el suscrito del predio Ex hacienda Santa Clara o El Pahual, conocido con el nombre de ‘Las Palmas’, arrojó una superficie analítica de 213-58-25 Has., existiendo una mayor demasía de la antes mencionada, que debe ser considerada dentro del predio anteriormente mencionado. Ya que es de suponerse que el predio originalmente mencionado no fue medido en su totalidad, por lo tanto, no se encontraba inscrita la superficie real, por otra parte tampoco fue levantado el excedente que le quedaba, después de las afectaciones agrarias por el que adquirió la citada fracción por prescripción positiva, ya que como se puede observar arrojó una superficie mayor de la que había adquirido.

Por lo anterior y salvo la mejor opinión de esa Superioridad deben disponerse las 213-58-25 Has., consideradas de Agostadero de buena calidad, del predio Ex hacienda de Santa Clara o El Pahual, conocido con el nombre de 'Las Palmas', propiedad de la Nación, para satisfacer las necesidades agrarias de los solicitantes de 2a. Ampliación de Ejidos del poblado que nos ocupa.

LEVANTAMIENTO DEL PREDIO.- El levantamiento del predio Ex hacienda Santa Clara o El Pahual, conocido con el nombre de 'Las Palmas'', se llevó a cabo tomando en cuenta, personas conocedoras del mismo; ya que no se presentó el actual propietario, a pesar de que se le notificó con anterioridad; por lo que tampoco se pudo recabar documentación del mismo; sin embargo de acuerdo con los trabajos realizados con anterioridad, dicha documentación ya se encuentra anexada al expediente que nos ocupa.

Por otra parte en el recorrido efectuado al mismo, se pudo constatar de que de su calidad de terreno, es de considerarse de agostadero de buena calidad, dedicado por su actual propietario a la ganadería, por otra parte no se encontró ninguna división que determinara, de que se tratara de dos fracciones, sino de una sola unidad, con el resultado antes mencionado...".

A este informe el comisionado acompañó el oficio de notificación a propietarios del predio `Las Palmas', acta de inspección ocular levantada el dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y cinco, en la que se indica la explotación ganadera del predio; información proporcionada por el Registro Público de la Propiedad del veinticinco de enero de ese año, así como escrito de alegatos y pruebas presentados por Juana Misseferi de Lammoglia.

XVIII.- El dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen mediante el que dejó sin efectos jurídicos los pronunciados el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta, y ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, proponiendo conceder por concepto de segunda ampliación de ejido al poblado que nos ocupa, una superficie de 213-58-25 (doscientas trece hectáreas, cincuenta y ocho áreas, veinticinco centiáreas) de agostadero de buena calidad, de las que 171-00-00 (ciento setenta y una hectáreas) fueron consideradas propiedad de la Federación, en el predio "Santa Clara" o "El Pahual", hoy conocido como "Las Palmas", 27-75-30 (veintisiete hectáreas, setenta y cinco áreas, treinta centiáreas) de demasías confundidas en los límites del mismo predio afectable, inscritas a nombre de Juana Misseferi de Lammoglia y 14-82-95 (catorce hectáreas, ochenta y dos áreas, noventa y cinco centiáreas) de demasías circunscritas en el propio predio afectable, pero no inscritas a nombre de persona alguna.

XIX.- Por acuerdo de dos de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el Cuerpo Consultivo Agrario determinó suspender los efectos jurídicos del dictamen positivo aprobado el dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, para el efecto de que la Delegación Agraria notificara el procedimiento de segunda ampliación de ejido a Juana Misseferi de Lammoglia, titular del certificado de inafectabilidad ganadera número 407621, que protege el predio denominado "Las Palmas", con superficie de 196-00-00 (ciento noventa y seis hectáreas) de agostadero de buena calidad, así como a sus causahabientes y actuales propietarios Salvador Román Lamoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip, con el objeto de que en un término de treinta días acudieran a la Consultoría a exponer lo que a su derecho conviniera respecto a la presunta existencia de la causal para dejar sin efectos jurídicos el acuerdo de inafectabilidad dictado por el Secretario de la Reforma Agraria y la consecuente cancelación de dicho certificado, toda vez que se presumió que el mismo fue expedido sobre terrenos baldíos propiedad de la Nación, conforme a lo dispuesto por los artículos 418 fracción IV y 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en relación con los artículos 3o. fracción I, 4o., 7o., 79, 86 y 88 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías.

XX.- Por acuerdo de treinta de enero de mil novecientos noventa y seis; el Cuerpo Consultivo Agrario determinó dejar parcialmente sin efectos jurídicos el acuerdo aprobado el dos de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en lo que se refiere a la suspensión de efectos jurídicos el dictamen positivo aprobado el dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. También acordó tener por notificado a Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip, causahabientes de Juana Misseferi de Lammoglia; y por último, turnó el expediente a este Tribunal Superior Agrario para los efectos legales correspondientes.

XXI.- Por acuerdo del quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, se tuvo por radicado el expediente ante este Tribunal Superior Agrario, registrándose con el número 327/96, notificándose a los interesados y comunicándolo a la Procuraduría Agraria.

XXII.- Por escrito presentado el quince de octubre de mil novecientos noventa y seis, ante este Tribunal Superior Agrario comparecieron Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip, manifestando que no existe base legal para la instauración del procedimiento de nulidad de acuerdo de inafectabilidad ganadera y cancelación del certificado número 407621 que fue expedido en favor de Juana Misseferi de Lammoglia y que por tanto, el predio "Las Palmas" debe ser inafectable por estar debidamente explotado y no rebasar los límites de la pequeña propiedad.

Asimismo, por escrito del veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, aportaron copia certificada de la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el expediente 830/93, relativo al nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "Josefa Ortiz de Domínguez", Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, en la que se declaró inafectable el predio "El Pahual" o "Las Palmas", y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo D.A. 1481/98, promovido por Jorge N. Villada, representante legal de Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 104 y 105 de la Ley de Amparo, el Tribunal Superior Agrario, por acuerdo de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, declaró insubsistente su sentencia dictada el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, emitida en el juicio agrario 327/96, correspondiente a la solicitud de segunda ampliación de ejido del poblado de que se trata, por lo que este órgano jurisdiccional, en términos de la ejecutoria de amparo, emite la presente resolución.

TERCERO.- El requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 97 del Código Agrario vigente en la fecha de solicitud de la segunda ampliación del citado poblado, y su relativo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, queda satisfecho, ya que las tierras concedidas por concepto de dotación y ampliación de ejido al poblado mencionado, se encuentran debidamente aprovechadas, circunstancia acreditada con el informe de trabajos técnicos rendido por Enrique Poceros Contreras el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, precisado en los antecedentes del resultando cuarto de la presente sentencia; asimismo, la capacidad individual y colectiva del grupo solicitante quedó demostrada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de dicho Código Agrario y su relativo 197 fracción II de la Ley Federal de Reforma Agraria, al haberse encontrado setenta y nueve campesinos capacitados, que reúnen los requisitos exigidos por los artículos 50 y 200, respectivamente, de los invocados cuerpos legales.

CUARTO.- Durante la secuela procesal, se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento agrario, contenidas en los artículos 272, 273, 275, 286, 287, 288, 291, 293 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

QUINTO.- Como se señaló, en la ejecutoria que se cumplimenta, la Justicia de la Unión amparó y protegió a los citados quejosos, para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario dejara insubsistente la sentencia reclamada, y en su caso pronuncie otra en la que funde y motive debidamente la pretendida causal de cancelación del certificado de inafectabilidad ganadera número 407621, así como la consiguiente afectación del predio, de resultar procedente la acción agraria en comento; ya que señala que la resolutora responsable no fundó debidamente el acto reclamado, al apoyarse en la fracción IV del artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en virtud que de dicho dispositivo legal se advierte, que si bien las causales de cancelación de certificados de inafectabilidad que se establecen son de carácter enunciativo y no limitativo, también lo es que las hipótesis que refiere dicha fracción, deben precisarse con relación al supuesto contemplado por la propia ley, es decir, relacionarse con el precepto legal correspondiente, ya que tal fracción no es ninguna causal de cancelación, por lo que la nulidad decretada del acuerdo en cuestión resulta contraria a derecho, en razón de que se omitió citar con precisión los conceptos legales aplicables al caso concreto, así como las razones particulares, circunstancias especiales y causas inmediatas que tuvo en consideración para arribar a la conclusión cuestionada, sin haber hecho "un estudio y análisis exhaustivo" del material probatorio que obra en el juicio natural, tal como lo establece el artículo 189 de la Ley Agraria, lo que resulta violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales.

SEXTO.- De los informes de trabajos técnicos e informativos complementarios, rendidos el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco, así como de las constancias procesales que obran en autos, se conocen los siguientes antecedentes:

Según inscripción número 770 de once de octubre de mil novecientos veintiuno, J.A. Brown, en nombre y representación de su mandante, la Sociedad J.A. Brown, Sociedad en Comandita, vendió a la Sociedad E.L. Buckley, Sociedad en Comandita, una cuarta parte de la mitad de la Hacienda de "Santa Clara", también denominada "El Pahual", perteneciente al Municipio de Papantla, Veracruz, con superficie de 250-00-00 (doscientas cincuenta hectáreas).

Según inscripción 232, de veintiséis de noviembre de mil novecientos veinticuatro, las sociedades antes mencionadas se dividieron el predio "El Pahual", con superficie de 1,000-00-00 (mil hectáreas), de

la siguiente manera: la fracción "A", con superficie de 750-00-00 (setecientas cincuenta hectáreas) a la Sociedad Mercantil denominada J.A. Brown, y la fracción "B", con superficie de 250-00-00 (doscientas cincuenta hectáreas) a la compañía E.L. Buckley; de esta última fracción fue afectada con superficie de 167-60-00 (ciento sesenta y siete hectáreas, sesenta áreas), para dotar de tierras al poblado "Alamo", según inscripción 317 de veintinueve de octubre de mil novecientos treinta y cinco.

Con motivo del decreto expropiatorio de dieciocho de marzo de mil novecientos treinta y ocho, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el día siguiente, mediante el cual se declararon expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, los bienes muebles e inmuebles de varias compañías petroleras; la fracción "A" del lote número 5 denominado "El Pahual", compuesta de 750-00-00 (setecientas cincuenta hectáreas), pasó a formar parte del patrimonio de Petróleos Mexicanos, ya que pertenecía a la Compañía J.A. Brown, Sociedad en Comandita, mismo que ha sido afectado en una superficie de 579-00-00 (quinientas setenta y nueve hectáreas), para beneficiar a los siguientes ejidos: "Paso de Valencia", con 288-00-00 (doscientas ochenta y ocho hectáreas); "San Totardo", con 164-00-00 (ciento sesenta y cuatro hectáreas); y "El Pípila", con 127-00-00 (ciento veintisiete hectáreas). Que según informes del Jefe del Departamento Jurídico del Distrito de Petróleos Mexicanos, de veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y seis, le quedaba a la citada superficie un restante de 171-00-00 (ciento setenta y una hectáreas), ocupadas por Juana Misseferi de Lammoglia y el doctor Agustín Lammoglia Misseferi, "por virtud de un título de propiedad de alcance legal no definido".

De las pruebas aportadas por Juana Misseferi de Lammoglia y sus causahabientes, quejosos en el amparo que se cumplimenta, Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip, consistentes en el acta número 583, sobre diligencias de información por prescripción positiva para acreditar la propiedad de un predio rústico denominado "Las Palmas", de la Congregación de "El Pahual", Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, promovidas por Agustín Lammoglia Misseferi; Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, de veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho; escritura notarial 8951, de dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, elevada ante el notario titular número 3, de Papantla, Veracruz; certificado de inafectabilidad ganadera número 407621 y plano del predio "Las Palmas", ubicado en el Municipio de Papantla, Veracruz, mismas que tienen valor probatorio, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se conoce:

Que en los autos del expediente número 243/954, radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, Agustín Lammoglia Misseferi, tramitó diligencias de información ad perpetuam y por sentencia de prescripción positiva de diecisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, adquirió una superficie de 198-75-30 (ciento noventa y ocho hectáreas, setenta y cinco áreas, treinta centiáreas), correspondientes al predio rústico denominado "Las Palmas" de la Congregación de "El Pahual" del Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, diligencias que fueron protocolizadas por el licenciado Juan Hernández Alarcón, Notario Público número 3 de esa localidad, el tres de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esa jurisdicción con el número 583, en esa misma fecha.

Que Juana Misseferi viuda de Lammoglia, adquirió por compraventa el citado terreno rústico denominado "Las Palmas" de la Congregación de "El Pahual", según se desprende del primer testimonio de la escritura notarial número 2567, otorgada en la ciudad de Papantla, Veracruz, el diecinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, ante el licenciado Gustavo de La Llave Krauss, en ese entonces, titular de la Notaría número 2, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esa misma ciudad, en el acta 1216, del tomo XV, de la sección I, el once de diciembre de ese mismo año.

Que con fecha veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y ocho, se expidió en favor de Juana Misseferi de Lammoglia, el certificado de inafectabilidad ganadera número 407621, respecto del predio denominado "Las Palmas", ubicado en el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, con superficie de 196-00-00 (ciento noventa y seis hectáreas) de agostadero de buena calidad; publicado el acuerdo de inafectabilidad ganadera por el cual se expidió dicho certificado, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, de veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho; superficie que se puede apreciar en forma gráfica en el plano que obra a foja 664, del legajo XII.

Y que en la escritura notarial 8951, de dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, el notario titular número 3 de Papantla, Veracruz, hizo constar las compraventas que celebraron por una parte Juana Misseferi viuda de Lammoglia, como vendedora, y por la otra Salvador Román Lammoglia Misseferi, Adrián Lammoglia Macip y Salvador Lammoglia Macip, como compradores, respecto del citado predio.

Asimismo, se conoce, según información proporcionada por Salvador Román Lammoglia, al comisionado de la Delegación Agraria en el Estado de Veracruz, con el objeto de que llevara a cabo la notificación del procedimiento de nulidad de Acuerdo Presidencial de inafectabilidad ganadera, que Juana Misseferi de Lammoglia, falleció el diez de agosto de mil novecientos noventa y tres.

SEPTIMO.- Teniendo en consideración que el predio "El Pahual", señalado como de probable afectación por los solicitantes de tierras de la segunda ampliación que nos ocupa, y en la que se encuentra la fracción denominada "Las Palmas", se declaró expropiado por causa de utilidad pública, a favor de la Nación, con motivo del decreto expropiatorio publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el diecinueve de marzo de mil novecientos treinta y ocho; es decir, que se trata de un terreno nacional; que conforme a la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el siete de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, en su capítulo II, artículos 8o. al 24, establece la única forma en que se pueden adquirir terrenos nacionales, mismos que no se adquieren legalmente por la vía jurídica de la prescripción; que a su vez el artículo tercero transitorio del artículo 27 constitucional, establece que los expedientes en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los Tribunales Agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su Ley Orgánica, resuelvan en definitiva de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el decreto promulgado el tres de enero de mil novecientos noventa y dos, es decir, la Ley Federal de Reforma Agraria, misma que su artículo 204 establece que: "Las propiedades de la Federación, de los Estados o de los Municipios, serán afectadas por dotar o ampliar ejidos o para crear nuevos centros de población.

Los terrenos baldíos nacionales y, en general, los terrenos rústicos pertenecientes a la Federación, se destinarán a constituir y ampliar ejidos o a establecer nuevos centros de población ejidal de conformidad con esta ley. No podrán ser objeto de colonización, enajenación a título honeroso o gratuito, ni adquisición por prescripción o información de dominio y, sólo podrán destinarse, en la extensión estrictamente indispensable, para fines de interés público y para las obras o servicios públicos de la Federación, de los Estados o de los Municipios"; y que el artículo 58 de Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y tres, vigente en la época en que por vía de prescripción Agustín Lammoglia Misseferi adquirió "la propiedad" del predio "Las Palmas", señala, además de lo anterior, que los terrenos nacionales "...no podrán ser objeto de colonización ni venta", este Tribunal Superior Agrario llega a la conclusión que las pruebas aportadas por Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip anteriormente analizadas, no logran desvirtuar que el predio que actualmente poseen se trate de una propiedad inafectable, toda vez que la manera por la que se adquirió de origen el mismo, resulta nula, por tratarse de un predio propiedad de la Nación, y por ende nulas las operaciones llevadas a cabo con posterioridad respecto del mismo predio, y en consecuencia resulta afectable en términos del artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

En base a lo anterior, y al surtirse la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con relación al supuesto contemplado por el artículo 204 de la misma ley, se llega a la convicción, de que en el caso es procedente declarar la nulidad del Acuerdo Presidencial de inafectabilidad ganadera, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y por ende, es procedente la cancelación del certificado número 407621, expedido el veintinueve de abril de ese mismo año, en favor de Juana Misseferi de Lammoglia, que ampara el predio "Las Palmas", con superficie de 196-00-00 (ciento noventa y seis hectáreas) de agostadero de buena calidad, ubicado en el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, en contravención a los dispositivos legales antes invocados.

En esta tesitura y al considerar que al haber sido formulada la solicitud de segunda ampliación de ejido del poblado que nos ocupa, en el informe de trabajos técnicos de veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco, el ingeniero Miguel Angel Meza García dio a conocer que la superficie analítica del predio en cita es de 213-58-25 (doscientas trece hectáreas, cincuenta y ocho áreas, veinticinco centiáreas), considerado que existe una demasía de 27-75-30 (veintisiete hectáreas, setenta y cinco áreas, treinta centiáreas) es procedente la segunda ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado "Paso Valencia", Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, dotándose dicha superficie de agostadero de buena calidad, que se tomará del predio denominado "Las Palmas", propiedad de la Nación, en términos del artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

La superficie que se concede deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en autos y pasa a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

No pasa inadvertido que por escrito de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete, Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador y Adrián, de apellidos Lammoglia Macip, presentaron copia de la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y seis, en autos del expediente número 830/93, substanciado con motivo de la creación del nuevo centro de población ejidal, promovida por campesinos del poblado "La Martinica", Papantla, Veracruz, que

de constituirse se hubiera denominado "Josefa Ortiz de Domínguez", en la que se consideró inafectable el predio "El Pahual" o "Las Palmas".

Con motivo de la presentación de dicho documento, fue necesaria la consulta de las constancias procesales que obran en el expediente 830/93, llegando al conocimiento, de que en el mismo, no obra el decreto de expropiación publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de diecinueve de marzo de mil novecientos treinta y ocho, a que ya se hizo referencia en esta resolución, razón por la que en el referido expediente se resolvió de la manera como se hizo.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 80 en relación con el 104 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo D.A. 1481/98, promovido por Jorge N. Villada, representante legal de Salvador Román Lammoglia Misseferi, Salvador Lammoglia Macip y Adrián Lammoglia Macip, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Se declara la nulidad del Acuerdo Presidencial de inafectabilidad ganadera, por el cual se expidió el certificado número 407621, de veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y ocho, que ampara el predio "Las Palmas", con una superficie de 196-00-00 (ciento noventa y seis hectáreas) de agostadero de buena calidad, así como la cancelación del mismo, en base a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia.

SEGUNDO.- Es procedente la segunda ampliación de ejido, promovida por campesinos del poblado "Paso Valencia", Municipio de Papantla, Estado de Veracruz.

TERCERO.- Es de concederse y se concede al citado poblado una superficie de 213-58-25 (doscientas trece hectáreas, cincuenta y ocho áreas, veinticinco centiáreas) de agostadero de buena calidad, que se tomarán del predio denominado "Las Palmas", ubicado en el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz, propiedad de la Nación.

La superficie que se concede deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en autos y pasa a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

CUARTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a la cancelación respectiva; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Veracruz, a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural y a la Procuraduría Agraria; ejecútese; y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

SEXTO.- Comuníquese al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el juicio de amparo directo D.A. 1481/98.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaría General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 485/96, relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado San Felipe Llano Grande, Municipio de Tomatlán, Jal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 485/96, que corresponde al expediente administrativo 3750, relativo a la solicitud de ampliación de ejido, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "San Felipe Llano Grande", ubicado en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco; en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo DA-

983/98, promovido por Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- El Tribunal Superior Agrario, el ocho de julio de mil novecientos noventa y siete, dictó sentencia en el juicio agrario número 485/96, correspondiente al poblado señalado al rubro, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.- Se declara la nulidad de fraccionamientos simulados y actos jurídicos que deriven del mismo, de conformidad con el artículo 210 fracción III, inciso b) de la Ley Federal de Reforma Agraria, constituido por los predios propiedad de María de los Angeles Cibrián Langarica, María Dolores Pelayo Gutiérrez, Herlinda Pelayo Gutiérrez, Raúl González Agraz, María del Rosario González Agraz, Irma de Jesús González Agraz y Carmen Sofía González Agraz, ubicados en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, que forman en conjunto una superficie de 2,528-19-00 (dos mil quinientas veintiocho hectáreas, diecinueve áreas), de las cuales 160-93-00 (ciento sesenta hectáreas, noventa y tres áreas) son de temporal, y 2,367-26-00 (dos mil trescientas sesenta y siete hectáreas, veintiséis áreas) de agostadero de mala calidad, cuyos beneficios provenientes de la explotación incrementa exclusivamente el patrimonio de María del Carmen Agraz Valera de González.

SEGUNDO.- Ha lugar a dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y seis; de primero de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el dieciocho de mayo del mismo año (sic); de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y seis; y de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y seis; relativos a los predios 'La Cañita', con superficie de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas), 'El Moro', con superficie de 292-00-00 (doscientas noventa y dos hectáreas), 'La Lima', con superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas), y 'El Colomo', con superficie de 210-50-00 (doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas), respectivamente; cancelando en consecuencia los certificados de inafectabilidad agrícola números 10871, expedido a favor de María Guadalupe Gil Hernández; 10746, expedido a favor de Cristina Hernández Cuéllar; 10965, expedido a favor de María de la Luz Ramos Valdez y 10966, expedido a favor de María Dolores Araiza Guzmán, en su orden; al haberse acreditado los supuestos previstos en los artículos 405 y 418 fracción IV de la Ley Federal de Reforma Agraria.

TERCERO.- Ha lugar a dejar parcialmente sin efectos jurídicos el acuerdo presidencial de inafectabilidad agrícola de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el doce de noviembre del mismo año y, en consecuencia, cancelar asimismo, parcialmente el certificado de inafectabilidad agrícola número 37955, expedido a favor de Rafael Araiza Guzmán, que ampara el predio 'Casco de San Cayetano' con una superficie total de 500-50-00 (quinientas hectáreas, cincuenta áreas) propiedad de Raúl González Agraz, por cuanto hace a una superficie de 90-72-50 (noventa hectáreas, setenta y dos áreas, cincuenta centiáreas); al haberse acreditado los supuestos previstos en los artículos 405 y 418, fracción IV de la Ley Federal de Reforma Agraria, y en relación con el artículo 250 del mismo ordenamiento legal, por cuanto a la superficie que se respeta.

CUARTO.- No ha lugar a dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y seis, por el que se expidió a favor de Carmen Agraz Valera, el certificado de inafectabilidad agrícola número 10967, que ampara el predio denominado 'Huertillas', con una superficie de 302-50-00 (trescientas dos hectáreas, cincuenta áreas) propiedad de María de los Angeles Cibrián Langarica; y de veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el ocho de noviembre de ese mismo año, por el que se expidió a favor de Salvador Gil Hernández el certificado de inafectabilidad agrícola número 35613, que ampara el predio denominado 'Los Robles', con una superficie de 642-90-00 (seiscientas cuarenta y dos hectáreas, noventa áreas) propiedad de Herlinda Pelayo Gutiérrez; el primero, en razón de que la superficie que ampara, en términos del artículo 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria, deberá considerarse como pequeña propiedad inafectable; y el segundo, al quedar comprobada la imposibilidad jurídica y material para ser afectado para la presente acción agraria.

QUINTO.- De la superficie total de los predios que anteceden, se afectan 1,173-37-50 (mil ciento setenta y tres hectáreas, treinta y siete áreas, cincuenta centiáreas), las cuales 130-68-00 (ciento treinta hectáreas, sesenta y ocho áreas) son de temporal y 1,042-51-00 (mil cuarenta y dos hectáreas, cincuenta y un áreas) de agostadero de mala calidad, por exceder los límites de la pequeña propiedad conforme a los artículos 209, 249 y 250, estos dos últimos, aplicados a contrario sensu de la Ley Federal de Reforma Agraria; respetándose la pequeña propiedad de 800-00-00 (ochocientas hectáreas) de agostadero en

terrenos áridos, tomadas de los predios 'Huertillas', con superficie de 302-50-00 (trescientas dos hectáreas, cincuenta áreas), clasificadas 30-25-00 (treinta hectáreas, veinticinco áreas) de temporal y 272-25-00 (doscientas setenta y dos hectáreas, veinticinco áreas) de agostadero de mala calidad y 'Casco de San Cayetano' con una superficie de 409-77-50 (cuatrocientas nueve hectáreas, setenta y siete áreas, cincuenta centiáreas) de agostadero en terrenos áridos.

SEXTO.- Es procedente la acción de ampliación de ejido, promovida por campesinos del poblado denominado 'San Felipe Llano Grande', ubicado en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco.

SEPTIMO.- Es de dotarse y se dota al poblado de referencia, con una superficie total de 1,448-47-50 (mil cuatrocientas cuarenta y ocho hectáreas, cuarenta y siete áreas, cincuenta centiáreas), que se tomarán de la siguiente manera: 275-10-00 (doscientas setenta y cinco hectáreas, diez áreas) de agostadero cerril del predio 'Fracción del Tule o El Cigarrillo', propiedad de Enrique Dueñas Ruiz y 1,173-37-50 (mil ciento setenta y tres hectáreas, treinta y siete áreas, cincuenta centiáreas), de las cuales 130-68-00 (ciento treinta hectáreas, sesenta y ocho áreas) son de temporal y 1,042-51-00 (mil cuarenta y dos hectáreas, cincuenta y un áreas) son de agostadero de mala calidad, del fraccionamiento compuesto por los predios: 'La Cañita' propiedad de María Dolores Pelayo Gutiérrez, con superficie de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas); 'El Moro' propiedad de María del Rosario González Agraz, con superficie de 292-00-00 (doscientas noventa y dos hectáreas); 'La Lima' propiedad de Irma de Jesús González Agraz, con superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas); 'El Colomo' propiedad de Carmen Sofía González Agraz, con superficie de 210-50-00 (doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas); y `Casco de San Cayetano' propiedad de Raúl González Agraz, con una superficie de 90-72-50 (noventa hectáreas, setenta y dos áreas, cincuenta centiáreas); ubicados en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, afectables con fundamento en los artículos 209, 249 y 250, interpretados a contrario sensu, los dos últimos, de la Ley Federal de Reforma Agraria, al exceder el límite establecido para la pequeña propiedad, de conformidad a los razonamientos señalados en los considerandos que anteceden; para satisfacer las necesidades agrarias de los cincuenta y ocho campesinos capacitados cuyos nombres se transcriben en el considerando quinto de esta sentencia. La superficie que se concede, debe ser localizada conforme al plano proyecto que para tal efecto deberá ser elaborado, y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

OCTAVO.- Se modifica el mandamiento positivo, dictado por el Gobernador del Estado de Jalisco, el seis de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa, el veintiocho del mismo mes y año, en cuanto a la superficie que se concede y predios a afectar...".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, mediante escrito presentado ante este Tribunal Superior Agrario, el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete; demanda de amparo que por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se registró con el número DA-983/98, dictándose sentencia en dicho juicio de garantías, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la que la Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos, del acto reclamado a este Tribunal Superior Agrario, bajo la siguiente consideración:

"...SEXTO.- Es fundado para otorgar el amparo solicitado lo argumentado por los quejosos en sus conceptos de violación en el sentido de que el procedimiento de nulidad de fraccionamiento de predios afectables por actos de simulación, jamás debió instaurarse en contra de los inmuebles que defienden en virtud de que no tienen el carácter de afectables al contar con certificados de inafectabilidad.

El artículo 210, fracción III, inciso b) de la Ley Federal de Reforma Agraria, el cual sirvió de fundamento a la responsable para declarar la nulidad de fraccionamientos simulados, establece o siguiente:

'ARTICULO 210.- La división y el fraccionamiento así como la transmisión íntegra por cualquier título de predios afectables, se sujetan por cuanto toca a la materia agraria, a las reglas siguientes:

III.- Se presume que hay simulación y en consecuencia el fraccionamiento no surtirá efectos en materia agraria, en los siguientes casos:

b).- Cuando haya una concentración del provecho o acumulación de beneficios provenientes de la explotación de diversas fracciones, a favor de una sola persona'.

De la anterior transcripción se desprende que para que proceda la nulidad de fraccionamientos debe darse el supuesto de que los predios fraccionados tengan el carácter de afectables.

En el caso, los predios que defienden los quejosos, esto es 'El Colomo', 'La Cañita', 'El Moro' y 'La Lima', cuentan con certificados de inafectabilidad, situación que hace a tales predios inafectables.

Así, es claro que el procedimiento de nulidad de fraccionamientos por actos de simulación establecido en el transcrito artículo 210 fracción III inciso b) es improcedente, pues como ya se señaló no se da el supuesto para que se actualice tal hipótesis, consistente en que los predios tengan el carácter de afectables, violándose en consecuencia, con la sentencia reclamada, en perjuicio de la parte quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 88 del Volumen 181-186 Tercera Parte, Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación que dice:

'AGRARIO. NULIDAD DE CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD Y NULIDAD DE FRACCIONAMIENTOS SON PROCEDIMIENTOS DIFERENTES.- La Ley Federal de Reforma Agraria estatuye procedimientos diferentes para decretar la nulidad o cancelación de los certificados de inafectabilidad y la nulidad de los fraccionamientos de propiedades afectables; el primer caso queda comprendido en los artículos del 418 al 419 y el segundo en los preceptos del 399 al 405 de la propia ley. En virtud de ello, no puede establecerse que cuando un particular se encuentre en la hipótesis de alguna nulidad de fraccionamiento, eso implique la nulidad de su certificado de inafectabilidad, pues la primera de las situaciones jurídicas, por su propia naturaleza, no puede referirse a bienes inafectables como acontece en los casos en que se cuenta con un certificado de inafectabilidad'.

Ahora bien, toda vez que en la sentencia reclamada se ordenó la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números 10966, 10871, 10746 y 10965, correspondientes a los predios 'El Colomo', 'La Cañita', 'El Moro' y 'La Lima', respectivamente, como consecuencia de la nulidad de fraccionamientos, es evidente que también tal pronunciamiento es ilegal.

En efecto el Tribunal responsable ordenó la cancelación de los señalados certificados de inafectabilidad con fundamento en los artículos 405 y 418 fracción IV de la Ley Federal de Reforma Agraria, los cuales respectivamente, establecen;

'ARTICULO 405.- Si se declara la nulidad de un fraccionamiento, la resolución presidencial traerá como consecuencia la nulidad de todos los actos derivados del mismo. En cumplimiento de la resolución decretada se procederá a cancelar las inscripciones de los actos jurídicos declarados nulos, tanto en el Registro Público de la Propiedad como en el Registro Agrario Nacional.

Los predios de que se ocupe la resolución serán afectables para satisfacer las necesidades de núcleos agrarios'.

'ARTICULO 418.- Los certificados de inafectabilidad legalmente expedidos podrán ser cancelados cuando:

IV.- En los demás casos que esta Ley señale'.

Como se observa el Tribunal responsable ordenó la cancelación de los certificados de inafectabilidad anteriormente precisados, como consecuencia de la declaración de nulidad de fraccionamientos, apoyándose en el citado artículo 405.

En atención a la conclusión alcanzada en relación a la improcedencia de la nulidad de fraccionamientos, debe también declararse ilegal la cancelación de certificados de inafectabilidad que se dio como consecuencia de la nulidad de fraccionamientos.

Tiene aplicación al caso la Tesis Jurisprudencial número 318, consultable a fojas 231 del Tomo III, Materia Administrativa del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación que dice:

'NULIDAD DE FRACCIONAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS DE. DEBEN RESPETARSE LOS CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAD.- La expresión literal del artículo 405 de la Ley Federal de Reforma Agraria en el sentido de que 'si se declara la nulidad de un fraccionamiento... traerá como consecuencia la nulidad de todos los actos derivados del mismo', no puede incluir la nulidad de los certificados de inafectabilidad y que, por tanto, deba resultar innecesario el trámite del procedimiento especial sobre su cancelación, ya que el precepto en cita se refiere en forma exclusiva a los actos derivados del procedimiento de nulidad de fraccionamiento y al cumplimiento que se debe dar a la resolución respectiva, señalando, entre otros, la cancelación de las inscripciones de los actos jurídicos declarados nulos, entre los que no es válido incluir la expedición de los certificados de inafectabilidad, habida cuenta de que no constituye un acto accesorio del fraccionamiento, puesto que para su invalidación se requiere del procedimiento específico establecido en la ley de la materia, por lo que, mientras este procedimiento no se lleve a cabo, las autoridades agrarias están obligadas a respetar los certificados de inafectabilidad'.

En las relatadas condiciones, y ante la violación de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, debe otorgarse el amparo solicitado.

Debe precisarse que la concesión del amparo se hace extensiva respecto de las autoridades responsables señaladas como ejecutoras: Tribunal Unitario Agrario del Distrito número XIII (sic) con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco y Secretario Actuario adscrito a ese Tribunal, en atención a la Jurisprudencia número 22/96 que resolvió la contradicción de tesis número 2/95 en

sesión de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, que al rubro dice: 'AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCION DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO CUANDO SE IMPUGNAN EN VIA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS'...".

TERCERO.- Por acuerdo plenario de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal Superior Agrario, en cumplimiento a la ejecutoria de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio de amparo directo DA-983/98, dejó parcialmente sin efectos la sentencia de ocho de julio de mil novecientos noventa y siete, emitida por el propio Tribunal Superior Agrario, en el expediente del juicio agrario 485/96, que corresponde al expediente administrativo 3750, relativos a la ampliación de ejido al poblado "San Felipe Llano Grande", del Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, únicamente por lo que respecta a los predios "El Colomo", "La Cañita", "El Moro" y "La Lima", que defienden los quejosos; y dejó intocada la misma, por lo que hace a la afectación que no fue materia del juicio de amparo.

CUARTO.- En mérito de lo anterior, y a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria en mención, se procede a la revisión del expediente administrativo 485/96, relativo a la solicitud de ampliación de ejido del poblado "San Felipe Llano Grande", Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, en donde obran los siguientes antecedentes:

I.- Por Resolución Presidencial de quince de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, publicada en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintiocho de octubre del mismo año, se concedió al poblado de referencia, por concepto de dotación de tierras, una superficie total de 3,515-60-00 (tres mil quinientas quince hectáreas, sesenta áreas), para beneficiar a setenta y cuatro campesinos capacitados; sin que obre en autos constancia alguna respecto a su ejecución.

II.- Mediante escrito de cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, campesinos del núcleo de población que nos ocupa, solicitaron ampliación de ejido, al Gobernador del Estado de Jalisco, para satisfacer sus necesidades agrarias, señalando como predios de probable afectación los denominados "San Cayetano", "Huertillas", "El Pozo", "El Cigarrillo", "San Isidro", "El Chilacayote" y "Las Higuerillas", ubicados en el mismo municipio y estado.

III.- El expediente respectivo fue instaurado por la Comisión Agraria Mixta en la entidad federativa, el siete de enero de mil novecientos setenta, al que le correspondió el número 3750; se giraron los correspondientes avisos de inicio, y por oficios número 35 y 36 de esa misma fecha, se realizaron notificaciones dirigidas al Presidente Municipal de Tomatlán, Jalisco, y a todos los propietarios de los predios ubicados dentro del radio de siete kilómetros del poblado gestor.

IV.- La solicitud se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, número 29, tomo CCXL, de veintiuno de febrero de mil novecientos setenta.

V.- El Comité Particular Ejecutivo quedó integrado por propuesta hecha en la misma solicitud, por Rodimiro Yerena Núñez, Taurino Gutiérrez Madrueño y Salvador Vargas Pelayo, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, a quienes el Gobernador de la entidad federativa expidió los nombramientos correspondientes.

VI.- La Comisión Agraria Mixta en la entidad federativa, por oficios 278 y 279, de siete de mayo de mil novecientos setenta, designó a Leonardo García Núñez, con objeto de que realizara los trabajos de investigación de aprovechamiento de tierras ejidales y diligencias censales, mismo que rindió su informe el cinco de junio de ese mismo año, del que se conoce que una vez cumplidas las formalidades de ley, practicó la diligencia respectiva, resultando cincuenta y ocho campesinos capacitados en la materia; respecto al aprovechamiento de las tierras concedidas por dotación, informó que las mismas se encuentran debidamente aprovechadas con cultivos de maíz, frijol y calabaza, y que contaban con cincuenta cabezas de ganado mayor, ochenta y ocho de ganado menor y ciento setenta aves de corral.

VII.- Obra en autos diversos escritos, por medio de los cuales, los siguientes propietarios, que en el caso interesan, formularon alegatos y ofrecieron pruebas ante la Comisión Agraria Mixta:

MARIA DOLORES PELAYO GUTIERREZ.- Con escrito del veintitrés de septiembre de mil novecientos setenta, manifestó ser dueña del predio denominado "La Cañita", con superficie de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas), siendo 36-75-00 (treinta y seis hectáreas, setenta y cinco áreas) de temporal, y el resto de agostadero cerril y monte alto, con inscripción números 13, de treinta de mayo de mil novecientos sesenta; posee certificado de inafectabilidad agrícola número 10871, de veinticuatro de julio de mil novecientos cuarenta y seis, a nombre de su causante María Guadalupe Gil Hernández, señala que este inmueble está fuera del radio legal, también indica que veintiséis años, antes de que se publicara la solicitud de ampliación, el predio en cuestión ya era una pequeña propiedad, y debido a que son terrenos montañosos, los ocupa en el pastoreo de ganado y los dedica a la producción de forraje con el que sostiene un pequeño criadero de ciento veinticinco semovientes herrados con el fierro quemador de su propiedad, por lo cual pidió que su inmueble quede libre de toda afectación.

IRMA DE JESUS GONZALEZ AGRAZ.- Con su escrito de veintidós de septiembre de mil novecientos setenta, alegó ser la propietaria del predio "La Lima", con superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas), siendo 33-51-50 (treinta y tres hectáreas, cincuenta y un áreas, cincuenta centiáreas) de labor y el resto es de monte alto cerril; con inscripción número 172, del nueve de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, de la Oficina Registradora de Puerto Vallarta, Jalisco; indica que adquirió el inmueble siendo menor de edad, representada por su padre Raúl González Michel, amparado con certificado de inafectabilidad agrícola número 10965, de veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y seis, a nombre de su causante María de la Luz Ramos Valdez; agregó que el predio queda fuera del radio de siete kilómetros; que veintiséis años antes de que se presentara la solicitud de ampliación, el predio "La Lima", ya estaba constituido como pequeña propiedad, y que está dedicado a la producción de pasturas para la cría, engorda y reproducción de ganado; ofreció diversas pruebas y solicitó que se respetara su inmueble.

CARMEN SOFIA GONZALEZ AGRAZ.- Con escrito de veintidós de septiembre de mil novecientos setenta, manifestó ser la dueña del predio "El Colomo", con superficie de 210-50-00 (doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas) de monte alto, con inscripción número 170, del nueve de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, que lo adquirió siendo menor de edad, representada por su padre Raúl González Michel, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola número 10966, de veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y seis, a nombre de su causante María Dolores Araiza Guzmán; que de acuerdo con los antecedentes registrales del predio que defiende, se comprueba que veintidós años antes de que se publicara la solicitud de ampliación de ejido, ya estaba constituido en pequeña propiedad, que dedica el terreno a la cría de ganado, contando con ciento cincuenta semovientes, ofreció sus pruebas y solicitó que se respete su propiedad.

LEONOR RAMOS ALVAREZ.- Con escrito de veintitrés de septiembre de mil novecientos setenta, alegó ser la dueña del predio denominado "El Moro", con extensión de 292-00-00 (doscientas noventa y dos hectáreas) de monte cerril; con inscripción número 97, del veinte de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, de la Oficina Registradora de Puerto Vallarta, Jalisco; está amparado con certificado de inafectabilidad agrícola número 10746, del veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, a nombre de su causante Cristina Hernández Cuéllar; que veintiséis años antes de que se publicara la solicitud de ampliación, el referido inmueble ya era una pequeña propiedad; el mismo está ubicado en las faldas del cerro "El Cuisi" y únicamente sirve para producir el forraje que utiliza en la engorda y reproducción de noventa y cinco semovientes que tiene; acompañó los documentos que estimó necesarios y solicitó que se respetara su terreno.

Los propietarios alegaron en común que se valoren los títulos de propiedad que presentan y que al resolver el expediente, se tome en consideración que se trata de pequeñas propiedades inafectables dado la superficie de cada uno y .la calidad de las tierras.

VIII.- Mediante oficio número 992, de siete de abril de mil novecientos setenta y dos, la Comisión Agraria Mixta en la entidad federativa, designó a Juan Guerra Hernández, para efectuar los trabajos técnicos e informativos correspondientes, quien rindió su informe el once de junio de mil novecientos setenta y tres, del cual se conoce lo siguiente:

"..1.- Predio rústico denominado 'EL CHILACAYOTE' (Fracción de La Higuerita) con superficie de 152-00-00 Has. agostadero cerril, con 10% laborable, propiedad de José María Sánchez Canales. Esta propiedad la adquirió su padre el Sr. José Ma. Sánchez Reynoso, por compra que hizo al Sr. Francisco Rodríguez García, para el día 21 de sept. de 1962, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 5, libro 15, sección primera de fecha 8 de marzo de 1963. Además está amparado con Certificado de Inafectabilidad Agr. No. 108777 de fecha 30 de noviembre de 1953.- 2.- Predio rústico denominado 'LOS ROBLITOS' (Fracción de La Higuerita), con superficie de 195 Has. de agostadero cerril, propiedad de Jorge Sánchez Canales. Esta propiedad la adquirió su padre el Sr. José Ma. Sánchez Reynoso, por compra que hizo al Sr. Francisco Rodríguez García, para el día 21 de sept. de 1962, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 5, libro 15, sección primera de fecha 8 de marzo de 1963. Además está amparado con Certificado de Inafectabilidad Agr. No. 108777 de fecha 30 de noviembre de 1953.- 3.- Predio rústico denominado 'LA TIGRA' (Fracción de La Higuerita), con sup. de 133-88-00 Has. de agostadero cerril, propiedad de Javier Sánchez Canales. Esta propiedad la adquirió su padre el Sr. José Ma. Sánchez Reynoso, por compra que hizo al Sr. Francisco Rodríguez García, para el día 21 de sept. de 1962, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 5, libro 15, sección primera de fecha 8 de marzo de 1963. Además está amparado con Certificado de Inafectabilidad Agr. No. 108777 de fecha 30 de noviembre de 1953.- 4.- Predio rústico denominado 'MESAS PIEDRA DE AMOLAR' (Fracción de San Jerónimo) con sup. de 90-00-00 Has. agostadero cerril, con 10% laborable, propiedad de Evangelina Sánchez Peña. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo su padre el Sr. José Ma. Sánchez Reynoso, a Ma. Elena Ambrosio

Delgadillo y Doña Magdalena Agraz de Ambrosio, como padres de los menores José Manuel y José Ambrosio Agraz, el día 8 de sept. de 1965. Y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 185, libro 19, sección primera de fecha 22 de marzo de 1966. Además está amparado con Certificado de Inafectabilidad Agr. No. 38041 de fecha 26 de nov. de 1949, a nombre de María Elena Ambrosio Agraz.- 5.- Predio rústico denominado Fracción de San Jerónimo con sup. de 173-20-00 Has. agostadero cerril, propiedad de María Praxedis Rodríguez Ruelas. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a Ma. Elena Ambrosio de Hernández, por su propio derecho y Don Macario Ambrosio Delgadillo y Magdalena Agraz de Ambrosio, como padres de José Manuel y José Ambrosio Agraz, el 7 de sept. de 1965, y cuyo testimonio quedó registrado en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 183, libro 19, de la sección primera de fecha 22 de marzo de 1966. Además amparado con Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 38041 de fecha 26 de nov. de 1949.- 6.- Predio rústico denominado 'LA TEPAMOSA', Fracción de San Jerónimo con superficie de 173-20-00 Has. agostadero cerril, propiedad de Ma. del Rosario Sánchez Canales. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo su padre el Sr. José Ma. Sánchez Reynoso a Ma. Elena Ambrosio de Hernández por su propio derecho y Dn. Macario Ambrosio Delgadillo y Doña Magdalena Agraz de Ambrosio, como padres de los menores José Manuel y José Ambrosio Agraz, el 7 de sept. de 1965, y cuyo testimonio quedó registrado en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 184, libro 19, sección primera. Además está amparado con Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 38041 de fecha 26 de nov. de 1949.- 7.- Predio rústico denominado Fracción Huertillas con superficie de 242-50-00 Has. agostadero cerril y Monte, propiedad de Emilia Cibrián Langarica. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a Ma. del Carmen Valera Vda. de Agraz, el 4 de octubre de 1949, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 144, libro 4, sección primera de fecha 18 de nov. de 1949. Además cuenta con Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 10967 de fecha 29 de julio de 1946, a nombre de Ma. del Carmen Agraz Valera.- 8.- Predio rústico denominado 'LA CAÑITA', con superficie de 245-00-00 Has. siendo 37-00-00 de temporal y el resto de agostadero cerril y Monte alto, propiedad de Ma. Dolores Pelayo Gutiérrez. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a Ma. Guadalupe Gil Hernández, el 26 de julio de 1957, según escritura pública No. 4324, otorgada en Guadalajara, Jal., y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en inscripción No. 13, libro 12, sección primera de fecha 30 de mayo de 1960. Además cuenta con Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 10871 de fecha 24 de junio de 1946, a nombre de Ma. Guadalupe Gil Hernández.- 9.- Predio rústico denominado 'LOS ROBLES', con superficie de 642-90-00 Has. de agostadero cerril, propiedad de Herlinda Pelayo Gutiérrez. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo al Sr. Salvador Gil Hernández, el 9 de Sept. de 1957, según escritura pública No. 4345, otorgada en Guadalajara, Jal. La escritura fue aclarada y rectificada según consta en la escritura pública 4824, otorgada en la misma ciudad el 5 de octubre de 1959; y cuyos testimonios quedaron inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal. La primera en inscripción No. 14, libro, sección primera el 30 de mayo de 1960, y la segunda en inscripción No. 14, libro 12, sección primera de fecha 30 de mayo de 1960, además cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola No. 35613 de fecha 10 de Nov. de 1949, a nombre de Salvador Gil Hernández.- 10.- Predio rústico denominado Fracción de La Mojonera, con superficie de 362-00-00 Has. agostadero árido cerril, propiedad de Enedina Fregoso de Castillo. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo al Sr. Manuel Barba González, el 31 de julio de 1943, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 132, Libro 1, Sección Primera, de fecha 8 de marzo de 1945.- 11.- Predio rústico denominado 'CASCO DE SAN CAYETANO', con superficie de 500-00-00 Has. agostadero cerril, propiedad de Raúl González Agraz. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo al Sr. Rafael Araiza Guzmán, el 30 de abril de 1966, según escritura pública No. 896 y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 171, libro 20, sección primera de fecha 9 de sept. de 1966, además está amparado con Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 37955, de fecha 16 de Nov. de 1949, a nombre de Rafael Araiza Guzmán.- 12.- Predio rústico denominado 'LA LIMA', con superficie de 335-15-00 Has. siendo 33-50-00 Has. de labor y el resto de agostadero cerril, propiedad de Irma de Jesús González Agraz. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a Ma. de la Luz Ramos Váldez el 30 de abril de 1966, según escritura pública No. 8970, otorgada en Mascota, Jal. y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 172, Libro 20, Sección Primera de fecha 9 de Sept. de 1966.- Además cuenta con Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 10965, de fecha 29 de julio de 1946 a nombre de Ma. de la Luz Ramos Valdez.- 13.- Predio rústico denominado 'EL MORO', con superficie de 292-00-00 Has. agostadero cerril y monte alto, propiedad de Leonor Ramos Alvarez.- Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a Cristina Fernández Cuellar, el 9 de febrero de 1962, en escritura pública No. 5493, otorgada en Guadalajara, Jal., y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, en inscripción No. 97, libro 18, de la sección primera de fecha

20 de mayo de 1965. Además está amparada con Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 10756, otorgado según acuerdo de inafectabilidad dictado el 1o. de agosto de 1945, y publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 18 de mayo de 1946, y registrado en el Registro Agrario Nacional bajo el No. 1128 a fojas de las 173 a la 174 del volumen 13-VI en México junio 8 de 1946.- 14.- Predio rústico denominado 'EL COLOMO', con superficie de 210-50-00 Has. agostadero cerril y monte, propiedad de Carmen Sofía González Agraz. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a María Dolores Araiza Guzmán el 30 de abril de 1966, según escritura pública No. 865, otorgada en Mascota, Jal. y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, en inscripción No. 170, libro 20 de la sección primera, de fecha 9 de sept. de 1966. Además cuenta con Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 10966, de fecha 29 de julio de 1945 a nombre de Ma. Dolores Araiza Guzmán.- 15.- Predio rústico denominado fracción No. Del Ocotillo, con superficie de 250-00-00 Has. agostadero cerril propiedad de Enrique Velarde Valenzuela. Este predio lo adquirió por compra que hizo al Sr. Eladio González el 10 de marzo de 1951, ante el Notario Público No. 30 de Guadalajara, Jal. y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, en inscripción No. 149, libro 10, sección primera de fecha 3 de junio de 1959.- 16.- Predio rústico denominado fracción 2 de 'EL OCOTILLO', con superficie de 300-00-00 Has. agostadero cerril propiedad de Ma. Guadalupe Meza González. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a Bertha Robles Villaseñor el 15 de mayo de 1970, según escritura pública No. 10524, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, en inscripción No. 39, libro 29, sección primera de fecha 24 de oct. de 1970.- 17.- Predio rústico denominado fracción 3 de 'EL OCOTILLO', con superficie de 200-00-00 Has. agostadero cerril propiedad de José Cruz Peña Meza. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo al Sr. Vidal Briseño Flores el 8 de enero de 1971, en escritura pública No. 11375, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 130, libro 19, sección primera de fecha 4 de marzo de 1971.- Adquirió el vendedor por compra a Margarita Ruiz el 18 de marzo de 1951, según escritura pública No. 5509 y se registro en inscripción No. 151, libro 10, sección primera del Registro Público de la propiedad de Puerto Vallarta, Jal.- 18.- Predio rústico denominado Fracción 4 de 'EL OCOTILLO', con superficie de 200-00-00 Has. agostadero cerril propiedad de Ma. Consuelo Navarro Orozco.- Esta propiedad la adquirió por compra que hizo al Sr. Luis Alfonso Robles el 2 de octubre de 1970, según escritura pública No. 10994, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 131, libro 29, sección primera de fecha 4 de marzo de 1971. El vendedor adquirió por compra a Ma. González en escritura pública ante el Notario No. 30 y registrada en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal. en inscripción No. 155, libro X, sección primera.- 19.- Predio rústico denominado fracción 5 de 'EL OCOTILLO', con superficie de 450-00-00 Has. agostadero cerril, propiedad de Magdalena A. Villaseñor. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a María A. Agraz el 17 de agosto de 1938, según escritura privada archivada con el No. 90, libro 66 de documentos privados; y cuyo testimonio está inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Mascota, Jalisco, en inscripción No. 38, libro 26, sección primera.- 20.- Predio rústico denominado fracción 6 de 'EL OCOTILLO', con superficie de 500-00-00 Has. agostadero cerril, propiedad de Bertha Villaseñor viuda de Robles. Esta propiedad la adquirió por testamentaria a bienes del Sr. Luis Alberto Robles Peña en el año de 1968, en el cual fue reconocida única universal heredera, como cónyuge del autor de la herencia y protocolizada por el C. Notario Público No. 1 del Municipio de Autla de Navarro, Jal. bajo el Núm. 1289, folios del 2 al 4, tomo 16. Dicha escritura se encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal. en inscripción No. 2, libro 30, sección primera de fecha 9 de marzo de 1971.- 21.- Predio rústico denominado 'JUAN MIGUEL', fracción norte con superficie de 500-00-00 Has. agostadero cerril, propiedad de Ignacio Pelayo Estrella. Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a la Srita. Ma. del Carmen Hernández Torco, el 9 de diciembre de 1949, según escritura otorgada en Talpa de Allende, Jal. y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal. en inscripción No. 217, libro 4, sección primera de fecha 3 de abril de 1950.- 22.- Predio rústico denominado 'EL TULE' ó `EL CIGARRILLO', con superficie de 867-70-00 Has. siendo 53-00-00 temporal, 169-60-00 Has. agostadero susceptible de cultivo y el resto de agostadero cerril propiedad del Sr. Enrique Dueñas Ruiz. Este predio lo adquirió por compra que hizo al Sr. José Manuel Castañeda Chávez como apoderado y en representación de la sociedad denominada 'EL TULE HACIENDA COMPANY', el 27 de mayo de 1965, ante el Lic. Manuel Chávez Bravo, Notario Público No. 31, de Guadalajara, Jal., y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal. en inscripción No. 180, ordinal No. 2795, libro 18, sección primera de fecha 17 de agosto de 1965.- 23.- Predio rústico denominado fracción de Cacaluta con superficie de 450-00-00 Has. agostadero cerril, propiedad de Francisco, Juan, Ana, José Guadalupe, Manuel, Salvador e Isabel, todos de apellidos Vargas V. Esta propiedad la adquirieron por compra que hicieron a la Sra. Ramona Peña Vda. de Guzmán el día 26 de marzo de 1931, y cuyo testimonio quedó inscrito en la Delegación de Hacienda de Tomatlán, Jal. en el Registro No. 8, bajo partida No. 104, libro 2, de fecha 1o. de abril de

1935.- 24.- Predio rústico denominado 'SAYULILLA', propiedad de la Sra. Refugio Dueñas de Zarazúa, con una extensión superficial de 800-00-00 Has. terrenos de agostadero y monte, con 30% laborable, este predio anteriormente contaba con una extensión superficial aproximada de 1,500-00-00 Hs. el cual posteriormente se le afectó con 700-00-00 Hs. dejando el resto a la propietaria de dicho predio.- 25.- Predio rústico denominado 'CAMALOTILLO', formado por las siguientes fracciones:- FRACCION 'A' del predio rústico denominado 'CAMALOTILLO', propiedad del Sr. José Manuel Yerena Pelayo, con una extensión superficial aproximada de 40-00-00 Hs. de agostadero 10% laborable, adquirido por compra al Sr. José Ma. Pelayo Reynoso el 20 de junio de 1962.- FRACCION `B' del predio rústico denominado 'CAMALOTILLO', propiedad del Sr. Ignacio Yerena Pelayo, con una extensión superficial de 40-00-00 Hs. de terrenos de agostadero, adquiridas a José Ma. Pelayo Reynoso el 20 de junio de 1962.- FRACCION 'C' del predio rústico denominado 'CAMALOTILLO', propiedad del Sr. Vidal Yerena Pelayo, con una superficie de 40-00-00 Hs. de agostadero, adquiridas por compra al Sr. José Ma. Pelayo Reynoso, el día 20 de Junio de 1962.- FRACCION 'D' del predio rústico denominado 'CAMALOTILLO', con superficie de 40-00-00 Hs. de agostadero, adquirido por compra al Sr. José Ma. Pelayo el 20 de junio de 1962, propiedad de Andrés Yerena Pelayo.- FRACCION 'E' del predio rústico denominado 'CAMALOTILLO', propiedad de Victoria Pelayo Castillo, con una superficie de 40-00-00 Hs. de agostadero, adquirido por compra al Sr. José Ma. Pelayo Reynoso el 20 de junio de 1962.- FRACCION 'F' del predio rústico denominado 'CAMALOTILLO', propiedad del Sr. Policarpo Martínez Ornelas, con superficie de 255-20-00 Hs. agostadero y monte alto, adquiridas por compra al Sr. Ricardo Pelayo Castillo y Vicente Pelayo Castillo, el 27 de febrero de 1965 y 28 de junio de 1968.- 26.- Predio rústico denominado 'LLANO GRANDE', con superficie de 4,227-00-00 Hs. agostadero cerril con 10% de temporal y riego; formado por las siguientes fracciones:.- FRACCION 'A', predio rústico denominado 'LOS CABALLOS', con superficie de 5-90-00 Hs. de riego, propiedad de Santos Pelayo Fernández adquiridas por compra hecha a Alberto Pelayo Guzmán el día 9 y 11 de diciembre de 1951 y registradas en la Delegación de Hacienda de Tomatlán, Jal. el 12 de julio de 1955.- FRACCION `B', predio rústico denominado 'EL BUEYERO', con superficie de 376-00-00 Hs. propiedad de Felicitas Fernández de Pelayo, adquiridas por compra que hizo a Petra Rodríguez Vda. de Vargas y Ma. Vargas Rodríguez el 10 de junio de 1941 y registradas en la Delegación de Hacienda de Tomatlán el 28 de junio de 1941.- FRACCION 'C', predio rústico denominado 'EL MAMEY', con superficie de 35-35-00 Hs. propiedad de Felipe Padilla Gutiérrez, este predio lo adquirió por compra que hizo a Arnulfo Palomera Quintero el 19 de septiembre de 1947 y registradas en la Delegación de Hacienda de Tomatlán, Jal. el 2 de octubre de 1947.- FRACCION 'D', predio rústico denominado 'LLANO GRANDE', con superficie de 9-00-00 Hs. propiedad de Eva Lomelí Vda. de Nuño, esta propiedad la adquirió por adjudicación del Juzgado de Letras de Mascota, Jal., en bienes del Sr. Francisco Nuño con fecha 14 de diciembre de 1939 y registrados en la Delegación de Hacienda de Tomatlán, Jal. el mismo año.- FRACCION 'F', predio rústico denominado 'SAN FELIPE LLANO GRANDE', con superficie de 188-50-00 Hs. propiedad de Mauro Castillo Gómez, esta propiedad la adquirió por remate de la Delegación de Hacienda, en bienes de Antonio Villa el 13 de dic. de 1926 inscritas en el mismo año.- FRACCION `G', predio rústico denominado 'LLANO GRANDE', con superficie de 2-37-67 Hs. adquiridas por compra que hizo a la Sra. Adelaida Gutiérrez P. el 28 de octubre de 1946 y registradas en la Delegación de Hacienda de Tomatlán, Jal. el 15 de agosto de 1947, propiedad de Pedro Ledezma Gutiérrez.- FRACCION `H', predio rústico denominado 'LLANO GRANDE', con superficie de 45-00-00 Hs. propiedad de Daniel Estrada Ramírez, esta propiedad la adquirió por compra que hizo a Eusebio Barraza Cuevas el 30 de marzo de 1955 e inscritas en la Delegación de Hacienda de Tomatlán, Jal. el 23 de abril de 1955.- FRACCION 'I', predio rústico denominado 'LLANO GRANDE', con superficie de 4-50-00 Hs. propiedad de Juan Ruelas Barraza, este predio lo adquirió por compra que hizo a José María Barraza el 3 de sept. de 1941, registradas el 25 de octubre de 1941 en la Delegación de Hacienda de Tomatlán, Jal.- FRACCION 'J', predio rústico denominado 'EL MAMEY', con superficie de 8-91-00 Hs. propiedad de Manuel S. Peña el 10 de Marzo de 1908, y registradas en la Delegación de Hacienda de Tomatlán, Jalisco, en el mismo año.- FRACCION 'K', predio rústico denominado 'LLANO GRANDE', con superficie aproximada de 188-50-00 Hs. agostadero y temporal propiedad de David Pelayo Fernández.- Esta propiedad la adquirió por compra que hizo al Sr. Francisco S. Calleja el 12 de enero de 1952, cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal. en inscripción No. 46 libro 14 sección 1ra. de fecha 12 de junio de 1962.- El resto del terreno que corresponde a estos predios que se han descrito y cual es de agostadero cerril se aprovecha en forma común por los miembros de dicha mancomunidad, y en virtud de no existir más antecedentes que acredite la segregación de otras superficies, para los efectos del presente estudio, dicha superficie se considera una sola Unidad resultando afectable en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria; no habiendo segregado las fracciones descritas en este estudio por así convenir a los campesinos solicitantes y por encontrarse en dichas fracciones familiares y vecinos del mismo poblado y además lo que ellos solicitan son los terrenos de los predios denominados 'EL CIGARRILLO', y terrenos de los señores Agraz.- 27.- Predio rústico denominado 'El Olvido', con superficie de 360-00-00 Hs. de

agostadero cerril propiedad de Alfonso Anaya Flores.- Esta propiedad la adquirió por compra que hizo a Salvador Dueñas Preciado, en representación de Refugio Dueñas de Zarazúa y Antonio Zarazúa Redondo, el 31 de julio de 1969, y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco en inscripción No. 2, ordinal 4098 libro XXVII, sección primera de fecha 31 de oct. de 1969.- Los vendedores adquirieron por dación en pago hecho a la Sra. Refugio Dueñas de Zarazua, por Gregoria Preciado, en Escritura Pública No. 8129 de fecha 19 de abril de 1967 y cuyo testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jal., en inscripción No. 1365, libro 9, de la sección primera. Esta propiedad se encuentra amparada en el Juzgado Primero de Distrito contra actos del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el cual ganaron en Amparo No. 1223/67 a nombre de Arturo Estrada Ramírez y coagraviados...".

IX.- La Comisión Agraria Mixta, emitió su dictamen el veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, proponiendo conceder la superficie de 183-87-50 (ciento ochenta y tres hectáreas, ochenta y siete áreas, cincuenta centiáreas) de temporal teórico, tomada del predio denominado "El Tule" o "El Cigarrillo", propiedad de Enrique Dueñas Ruiz.

X.- El seis de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, el Gobernador del Estado de Jalisco, emitió su mandamiento, en los siguientes términos: "PRIMERA.- Se declara adecuada la vía elegida de primera ampliación de tierras para el poblado "San Felipe Llano Grande", Municipio de Tomatlán, Jalisco; SEGUNDA.- Del predio denominado 'El Tule' o 'El Cigarrillo', propiedad del C. Enrique Dueñas Ruiz, se dota al poblado ' SAN FELIPE LLANO GRANDE', Municipio de Tomatlán, de esta entidad federativa, con una superficie de 183-87-50 Has. de temporal teórico o sus equivalentes, que resultan afectables para atender las necesidades de tierras de los solicitantes de primera ampliación de ejido de dicho poblado, dejando a salvo la extensión superficial que corresponde a la pequeña propiedad;...".

Dicho mandamiento fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, sin que de la copia fotostática de dicha constancia que obra en autos, se conozca la fecha y número de publicación.

Asimismo, por oficio 4197, de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, la Comisión Agraria Mixta, designó al ingeniero Carlos García Curiel para la ejecución del mandamiento que antecede, de cuyo informe rendido el dieciséis de diciembre de ese mismo año, se conoce haber entregado en provisional al núcleo gestor, previo deslinde y amojonamiento, la superficie total concedida, esto es 183-87-50 (ciento ochenta y tres hectáreas, ochenta y siete áreas, cincuenta centiáreas). Anexando a su informe el acta respectiva y copia de las notificaciones realizadas.

XI.- El Delegado Agrario en la entidad federativa, previo informe reglamentario de veintidós de enero de mil novecientos setenta y cinco, emitió su opinión en el mismo sentido que el mandamiento gubernamental.

XII.- Con escrito de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y cinco, el Comité Particular Ejecutivo del poblado peticionario, se dirigió al Cuerpo Consultivo Agrario, pidiendo se investigara el fraccionamiento simulado llevado a cabo en la Hacienda "El Tule" o "El Cigarrillo", cuyos beneficios recibe José Manuel Castañeda Chávez; en atención al mismo, la Dirección General para la Investigación Agraria, comisionó por oficio 2789 de dos de enero de mil novecientos setenta y ocho, al ingeniero Lorenzo A. Alatorre Ramírez, la investigación de los predios denominados "Huertillas", "La Cañita", "El Moro", "La Lima", "El Colomo", "Casco de San Cayetano" y "Los Robles", con base en lo establecido en la fracción III, del artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria; proporcionando su informe el seis de abril de mil novecientos setenta y ocho, de cuya acta de inspección ocular se conoce, en lo que interesa:

"...En la Presidencia Municipal de Tomatlán, Estado de Jalisco, siendo las 10.00 diez horas del día 19 de febrero de 1978 mil novecientos setenta y ocho, reunidos el C. ingeniero Lorenzo A. Alatorre Ramírez, comisionado por la Secretaría de la Reforma Agraria, según oficio de comisión No. 2789, de fecha 2 dos de enero de 1978 mil novecientos setenta y ocho, los CC. Propietarios María del Rosario González Agraz, Irma de Jesús González Agraz, Raúl González Agraz, Carmen Sofía González Agraz, menores de edad y en su representación por ejercer la Patria Potestad sobre los menores la señora María del Carmen Agraz Valeria, así como también en representación de la C. María Dolores Pelayo Gutiérrez, Herlinda Pelayo Gutiérrez, María de los Angeles Cibrián Langarica, el C. Lic. Isidro Sánchez González, quien comparece a este acto en su carácter de Vice-Presidente de la Federación de la Pequeña Propiedad Agrícola y Forestal de Jalisco, y como Secretario de Acción Cultural de la Federación Nacional de la Pequeña Propiedad, de los Predios investigados que al final se mencionan, los CC. Rodimiro Yerena Núñez, Taurino Gutiérrez Mardueño y Salvador Vargas Pelayo, como presidente, secretario y vocal del Comité Particular Ejecutivo Agrario del grupo solicitante, y el C. Profr. Vidal Mora Castillo, como representante de la Autoridad Municipal con el objeto de asentar el resultado de la Inspección Ocular indicada, de lo cual se desprende lo siguiente: ...2.- Predio LA CAÑITA: Propiedad de María Dolores Pelayo Gutiérrez.- Este predio cuenta con una superficie total de 245-00-00 Has. de las cuales tiene 4-00-00 Has. de temporal y, un 15% quince por ciento aproximadamente de agostadero susceptibles de cultivo y el resto de agostadero cerril.- Contando con los siguientes linderos; al noroeste con el ejido Llano Grande y Alfonso Hernández,

mediando lienzo de piedra y alambre; al Sur; con los predios la Lima y el Colomo, mediando lienzo de piedra y alambre; al oeste con el predio Huertillas, mediando lienzo de piedra y alambre, en este predio se tiene sembradas 4 cuatro Has. de maíz no encontrando ganado pero manifestando el vaquero que ahí pasta el ganado con la siguiente señal de fierro de herrar (...) registrado a nombre de María del Carmen Agraz Valera.- Para las labores propias del predio el mismo trabajador que se encarga del predio Huertillas nos manifestó que se encargaba de este mismo, además este trabajador es pagado por el Sr. Raúl González Michel con fondos aportados por el propietario María Dolores Pelayo Gutiérrez.- Las declaraciones anuales se realizan en la Oficina de Hacienda en Tomatlán Jalisco. El representante de la pequeña propiedad manifiesta copia de la escritura pública No. 4324, así como el Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 10871 y plano que delimita su propiedad así como el recibo de pago de contribuciones, reservándose el derecho a presentar posteriormente a esa Dirección General de Investigación de Fraccionamientos simulados, Constancia de AVECINDAD, Constancias de Operaciones de Compraventa, así como documentos que demuestren que no es cierto lo que se atribuye como declarado por Maximiliano Palomares.- 3.- Predio EL MORO; Propiedad de María del Rosario González Agraz, quien adquirió éste de Leonor Ramos Alvarez.- Este predio cuenta con una superficie total de 292-00-00 Has., de las cuales 40-00-00 Has. son de temporal, un diez por ciento susceptible de cultivo y el resto de agostadero cerril.- Contando con los siguientes linderos y colindantes; al noreste, con el Predio Huertillas, mediando lienzo de alambre de cuatro hilos; al suroeste con el predio Los Robles, mediando lienzo de piedra; al este, con el predio La Lima, no existiendo lienzo solamente Mojoneras, al sureste, Casco de San Cayetano, mediando lienzo de piedra; al poniente, con el señor José Ma. Sánchez, mediando lienzo de piedra.- En este predio se tienen sembradas aproximadamente 30-00-00 Has. de maíz, el que se encuentra en rastrojos, además se encontraron varias cabezas de ganado mayor de raza cebú con la siguiente señal de fierro de herrar (...) registrado a nombre de María del Carmen Agraz Valera.- Para las labores propias del predio cuentan con un trabajador permanente siendo este el Sr. Maximino Vargas Núñez, pagado por el Sr. Raúl González Michel con fondos aportados por el propietario María del Rosario González Agraz.- Las operaciones de compraventa se llevan a cabo con el Sr. Félix Aldaco Sánchez y la persona que las realiza es la Sra. María del Carmen Agraz Valera, por ejercer la Patria Potestad, sobre la menor.- Las operaciones de crédito se están tramitando en el Banco del Atlántico, crédito que lleva como finalidad mejoras agropecuarias, en el inmueble, propiedad de la menor, consistentes en reparación de lienzos, construcción de éstos, y mejora de la cría de ganado.- Las declaraciones anuales a la Oficina de Hacienda se llevan a cabo en las oficinas ubicadas en Tomatlán Jalisco.- En este acto el representante del propietario aporta copia de la escritura pública No. 6677 que ampara el predio el Moro, plano que lo delimita, Certificado de Inafectabilidad No. 10746, recibo de pago de contribuciones prediales, y manifiesta que se reserva el derecho a formular en alegatos y a ofrecer pruebas.- 4.- Predio LA LIMA; propiedad de Irma de Jesús González Agraz.- Este predio cuenta con una superficie total de 335-15-00 Has. de las cuales 30-00-00 Has. de temporal, 20-00-00 Has. de agostadero de buena calidad y el resto agostadero cerril.- Contando con los siguientes linderos y colindantes; al norte; con los predios Huertillas y la Cañita, mediando lienzo de alambre incompleto en construcción, al sureste; con los predios Casco de San Cayetano y el Colomo, mediando lienzo de piedra; al oeste; con el predio el Moro no existiendo lienzo, sólo mojoneras.- En este predio se siembran 30-00-00 Has., aproximadamente de maíz, además se encontraron varias cabezas de ganado mayor de raza cebú, con la siguiente señal de fierro de herrar (...) registrado a nombre de María del Carmen Agraz Valera.- Para las labores propias del predio cuenta con un trabajador permanente, siendo este el Sr. Maximino Vargas Núñez, pagado por el Sr. Raúl González Michel, con fondos aportados por la propietaria Irma de Jesús González Agraz.- Las operaciones de compraventa se llevan a cabo con el Sr. Félix Aldaco Sánchez y la persona que la realiza es la Sra. María del Carmen Agraz Valera.- Las operaciones de crédito se llevan a cabo con la Financiera General S.A. y la persona que la realiza es la Sra. María del Carmen Agraz Valera y las declaraciones anuales se realizan en la Oficina de Hacienda de Tomatlán Jalisco.- El representante de la propietaria manifiesta en este acto entrega al Ing. Comisionado, Copia Certificada de la Escritura Pública No. 897, Copia Certificada del Certificado de Inafectabilidad Agrícola No. 10965, plano que delimita el inmueble, último recibo de pago de contribuciones prediales, así como Copia Certificada de la Sentencia recaída en las diligencias de jurisdicción voluntaria, que se tramitó en el Juzgado de 1a. Instancia de Puerto Vallarta Jalisco, bajo expediente 139/70, en la que se otorgó la autorización Judicial para gravar la propiedad de la menor, porque el dinero que prestara la Financiera General S.A. bajo contrato refaccionario No. 277, se destinaría a la explotación agropecuaria del inmueble, y en el mencionado contrato se especifica que los beneficiados con el referido crédito, la suscrita Irma de Jesús, Raúl y Carmen Sofía González Agraz, comprarían alambre para circular sus propiedades, desmontarían 300-00-00 Has., adquirirían 75 vaquillas cruza cebú, adquisición de 50 vacas cruza cebú y adquisición de 5 sementales cebú, haciéndose la aclaración que lo anterior consta en la Cláusula II del contrato refaccionario No. 277 suscrito por el gerente de la Institución y la representante de los menores María del Carmen Agraz de González por

ejercer la Patria Potestad, en Guadalajara el 22 de julio de 1970, asimismo se entrega copia simple (aclarando que al formular alegatos entregará copia certificada) de la Circular No. 22 de fecha 28 de mayo de 1974, en la que se reitera a los inspectores, encargados de la Oficina Municipal de Estadísticas e Inspección Agrícola y Ganadera del Estado de Jalisco, en la cual en su segundo párrafo se asienta "Las figuras de fierro de herrar ganado deberán registrarse por personas físicas mayores de 18 años, ganadero que no se ajuste a los preceptos que la propia Ley determine no se registrarán", es por ello que los fierros con que están herrados los semovientes que pastan en la propiedad de los menores Raúl, Carmen Sofía e Irma de Jesús González Agraz es la figura de una x ce a (sic), con lo que se herran los animales, que se adquirieron con el crédito es porque son los menores de edad y por el impedimento legal indicado; asimismo acompañará la menor, constancia de existencias de cuentas de ahorros en Instituciones Bancarias.- 5.- Predio EL COLOMO, propiedad de Carmen Sofía González Agraz. Este predio cuenta con una superficie total de 210-50-00 Has. de las cuales 12-00-00 Has. son de temporal, un diez por ciento de agostadero susceptible de cultivo, 15-00-00 Has. aproximadamente de agostadero de buena calidad y el resto de agostadero cerril.- Contando con los siguientes linderos y colindantes: al norte; con el predio La Cañita mediando lienzo de piedra, al sur; Casco de San Cayetano mediando lienzo de piedra, al este; los predios Juan Miguel y Cucharas, mediando lienzo de piedra y al noroeste, con el predio La Lima mediando lienzo de piedra.- En este predio se tienen sembradas 12-00-00 Has., de maíz, además no se encontró ganado, pero según nos manifestó el vaquero encargado que en este predio pasta el ganado antes mencionado con la siguiente señal de fierro de herrar (...) registrado a nombre de María del Carmen Agraz Valera.- Para las labores propias del predio cuenta con un trabajador permanente, siendo este el Sr. Maximino Vargas Núñez, el cual es pagado por el Sr. Raúl González Michel, con fondos aportados por la propietaria, según nos manifestó el mencionado empleado.- Las operaciones de Compraventa se llevan a cabo con el Sr. Félix Aldaco Sánchez y la realiza la Sra. María del Carmen Agraz Valera, las operaciones de crédito se llevan a cabo con la Financiera General S.A. realizándolas la Sra. María del Carmen Agraz Valera, las declaraciones anuales se realizan en la Oficina de Hacienda en Tomatlán Jalisco.- El representante de la peña propiedad y vocero de Carmen Sofía González Agraz manifiesta que hace entrega al comisionado la Escritura Pública No. 895, asimismo copia certificada al igual que la anterior del certificado de inafectabilidad agrícola No. 10966, plano que delimita el inmueble, copia certificada de la resolución recaída en el expediente 139/1970, en la cual se autoriza a la menor Carmen Sofía gravar su propiedad, para con el Crédito Hipotecario incrementar la explotación agropecuaria del mismo. Desmontar superficie comprar 75 vaquillas de la raza cebú, 50 vacas y 5 sementales de la misma raza, y obtuvo el crédito según consta en el contrato refaccionario No. 277 en la Institución Bancaria Financiera General S.A., suscrito el Crédito en Guadalajara Jalisco, el 22 de julio de 1970; asimismo se acompaña copia de la circular No. 22 de fecha 20 de mayo de 1974, en la que se reitera a los encargados de la oficina de Estadística e Inspección Agrícola Ganadera de prohibición para que personas físicas menores de 18 años puedan tener fierro registrado a su nombre, y por ello el ganado propiedad de la menor está herrado con el fierro que se registra a su madre María del Carmen Agraz Valera y que es una ce y una a, posteriormente acompañaré constancias de la minoridad de edad, de las Instituciones donde ella se educa, así como en las Instituciones donde tiene cuentas de ahorros y otros documentos, tales como el contrato refaccionario 277. ...No habiendo más asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando los que en ella intervinieron, supieron y quisieron hacerlo siendo las 14:00 catorce horas del mismo día en que se indicó...".

XIII.- A fojas 158 y 159 del legajo V, obra el informe rendido por el encargado del Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, de dieciocho de febrero de mil novecientos setenta y ocho, en el cual señala:

"...MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ AGRAZ: Fracción del predio rústico denominado San Cayetano de la Municipalidad de Tomatlán, Jalisco, que se denominará El Moro, con extensión superficial de 292-00-00 doscientas noventa y dos hectáreas, dentro de los siguientes linderos: Al oriente, con terrenos de Lima y Huertecillas; al norte, con terrenos de Huertecillas y Sayulilla; al poniente, con la Hacienda del Tule y al sur, con el resto de lo que Hacienda de San Cayetano.- Adquirió la actual propietaria el inmueble de referencia por compra que hizo a la señorita Leonor Ramos Alvarez, con fecha 10 diez de octubre de 1970 mil novecientos setenta, Leonor Ramos Alvarez adquirió por compra que hizo a la señorita Cristina Hernández Cuéllar, con fecha 9 nueve de febrero de 1962 mil novecientos sesenta y dos y ésta a su vez adquirió por compra a la señorita María de Jesús Agraz Contreras, mediante escritura privada de fecha 3 tres de junio de 1944 mil novecientos cuarenta y cuatro.- La propiedad antes descrita se encuentra registrada en favor de dicha persona con fecha 20 veinte de septiembre de 1973 mil novecientos setenta y tres, bajo inscripción número 151 ciento cincuenta y uno ordinal número 5178 cinco mil ciento setenta y ocho del libro XXXIV treinta y cuatro de la sección primera de esta oficina a mi cargo.

MARIA DOLORES PELAYO GUTIERREZ: Fracción del predio rústico que formó parte del conocido con el nombre de San Cayetano del Municipio de Tomatlán, Jalisco, con extensión superficial de 245-00-

00 doscientas cuarenta y cinco hectáreas, dentro de los siguientes linderos:- Al oriente y norte, con terreno de los señores Hernández; Al poniente, con el predio Huertillas y al sur, con terrenos denominados La Lima y El Colomo. Adquirió la actual propietaria el inmueble de referencia por compra que hizo a la señorita María Guadalupe Gil Hernández con fecha 30 treinta de mayo de 1960 mil novecientos sesenta y ésta a su vez adquirió por compra que hizo a la señorita María de Jesús Agraz Contreras, mediante escritura privada de fecha 2 dos de diciembre de 1944 mil novecientos cuarenta y cuatro.- La propiedad antes descrita se encuentra registrada bajo inscripción número 13 trece ordinal número 1691 mil seiscientos noventa y uno del libro XII doce de la sección primera y reporta un gravamen por la cantidad de $290,000.00 doscientos noventa mil pesos M.N. en favor de Financiera General con fecha 29 de julio de 1970 mil novecientos setenta.

IRMA DE JESUS GONZALEZ AGRAZ: Predio rústico denominado La Lima, desmembrado del terreno San Cayetano, ubicado en la Municipalidad de Tomatlán, Jalisco, con superficie de 335-15-00 trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas, de las cuales 33-51-50 treinta y tres hectáreas, cincuenta y una áreas, cincuenta centiáreas, de agostadero, de mala calidad y tiene los siguientes linderos:- Al norte, los terrenos de La Cañita y Huertillas; Al sur, con terrenos de San Cayetano y El Colomo; Al oriente, con El Colomo y La Cañita y poniente, con El Moro.- Adquirió la actual propietaria el inmueble de referencia por compra que hizo a la señorita María de la Luz Ramos Valdez, mediante escritura pública número 897 ochocientos noventa y siete, de fecha 30 treinta de abril de 1966 mil novecientos sesenta y seis, bajo inscripción número 172 ciento setenta y dos, ordinal número 3156 tres mil ciento cincuenta y seis del libro XX veinte de la sección primera de esta Oficina a mi cargo.- Y María de la Luz Ramos Valdez adquirió por compra que hizo a María de Jesús Agraz Contreras, mediante escritura privada de fecha 3 tres de junio de 1944 mil novecientos cuarenta y cuatro reporta un gravamen por la cantidad de 290,000.00 doscientos noventa mil pesos M.N., en favor de Financiera General, S.A., de fecha junio 29 de 1970...

...SOFIA GONZALEZ AGRAZ.- Predio rústico llamado El Colomo desmembrado de la finca San Cayetano, ubicado en el Municipio de Tomatlán, Jalisco, el que tiene una extensión superficial de 210-50-00 doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas, de las cuales 31-57-50 treinta y una hectáreas, cincuenta y siete áreas, cincuenta centiáreas, son de terreno laborable y 178-92-50 ciento setenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, cincuenta centiáreas, y los siguientes linderos: Al norte, los terrenos llamados La Lima y La Cañita; Al sur y oeste, San Cayetano y este, terrenos de Hernández.- Adquirió el actual propietario el inmueble de referencia por compra que hizo a María Dolores Araiza Guzmán, mediante escritura pública número 895 ochocientos noventa y cinco de fecha 30 treinta de abril de 1966 mil novecientos sesenta y seis, misma que se encuentra registrada bajo inscripción número 170 ciento setenta ordinal número 3154 tres mil ciento cincuenta y cuatro, del Libro XX veinte de la sección primera y María Dolores Araiza Guzmán adquirió por compra que hizo a María de Jesús Agraz Contreras, mediante escritura privada de fecha 3 tres de junio de 1944 mil novecientos cuarenta y cuatro.- Reporta un gravamen por la cantidad de $290,000.00 (doscientos noventa mil pesos M.N., en favor de Financiera General, S.A. de fecha 29 veintinueve de julio de 1970 mil novecientos setenta...".

XIV.- Por acuerdo aprobado en sesión celebrada el dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta, el Subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, ordenó la instauración del procedimiento de Nulidad de Fraccionamientos de Predios Afectables por Actos de Simulación, previsto en los artículos 399 al 405 de la Ley Federal de Reforma Agraria, al comprobarse los indicios de simulación que estatuye el artículo 210 fracción III del ordenamiento legal invocado, en los predios denominados "Huertillas, propiedad de María de los Angeles Cibrián Langarica; "La Cañita", propiedad de María Dolores Pelayo Gutiérrez; "El Moro", propiedad de la menor María del Rosario González Agraz; "La Lima", propiedad de la menor Irma de Jesús González Agraz; "El Colomo", propiedad de la menor Carmen Sofía González Agraz; "Casco de San Cayetano", propiedad del menor Raúl González Agraz, y "Los Robles", propiedad de Herlinda Pelayo Gutiérrez, según el resultado de la inspección ocular de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho, en el que se manifiesta que los mismos están dedicados a la actividad ganadera, habiéndose encontrado en todos ellos ganado marcado con el fierro quemador registrado a nombre de María del Carmen Agraz Valera de González; los trabajadores que laboran indistintamente en todos los inmuebles, reciben su salario de Raúl González Michel, esposo de María del Carmen Agraz Valera, siendo esta misma quien se encarga de realizar las operaciones de compraventa, y al resultar evidente el nexo de parentesco con algunos de los propietarios, se deduce que quien incrementa su patrimonio por la concentración de beneficios es María del Carmen Agraz Valera de González.

El acuerdo que antecede, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el ocho de mayo de mil novecientos ochenta, en el número 28, tomo CCLXXII. Las notificaciones personales se atendieron con María de los Angeles Cibrián Langarica, María Dolores y Herlinda Pelayo Gutiérrez, María del Rosario, Irma de Jesús, Carmen Sofía y Raúl González Agraz, así como a María del Carmen Agraz Valera de González, esta última, en representación también de sus menores hijos González Agraz, los días doce

y trece de agosto de mil novecientos ochenta; el actuario notificador hizo saber en su informe de catorce de agosto de ese año, que no fue posible entregar las cédulas notificatorias personalmente a María Dolores y Rafael Araiza Guzmán, Cristina Hernández Cuellar, María de la Luz Ramos Valdez y María Guadalupe Gil Hernández de Ramos, a quienes se les llamó al procedimiento por encontrarse sus nombres en los certificados de inafectabilidad que amparan los predios en cuestión, debido a que algunas de ellos ya fallecieron y otras no residen en el lugar, por lo que se les notificó por edictos, mismos que se publicaron en el periódico "El Informador" de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el veintisiete de enero, tres y diez de febrero de mil novecientos ochenta y uno.

XV.- En atención a las notificaciones que anteceden, comparecieron al procedimiento los propietarios de los predios sujetos a la nulidad de fraccionamientos, ofreciendo las siguientes pruebas y de cuyos alegatos se destaca:

MARIA DOLORES PELAYO GUTIERREZ.- Propietaria del predio "La Cañita", con superficie de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas) de las cuales 36-75-00 (treinta y seis hectáreas, setenta y cinco áreas) son de temporal, sembradas de maíz y el resto de agostadero sembrado de pasto guinea, zacatón y otras variedades mejoradas; que explota y dirige su pequeña propiedad, siendo la única que se beneficia con los productos; que adquirió dicho predio el veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete, por compra a Guadalupe Gil Hernández, quedando registrada su escritura el treinta de mayo de mil novecientos sesenta, bajo el número 13, de la sección primera, del Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco; que el acta de inspección ocular de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho, consigna hechos falsos, al indicar el comisionado que en algunas ocasiones pastaban en su predio ganado herrado con el fierro de Carmen Agraz Valera, haciendo esto sólo para complacer a los solicitantes de la ampliación, afirmación que no es real, en virtud de que nunca el ganado de esa persona ha pastado en su propiedad, por lo que su representante que compareció en dicha inspección, insistió al comisionado que asentara en el acta únicamente lo que veía, ya que se trataba de una inspección ocular y no de una información testimonial, además de que otorgando sin conceder que en el supuesto, que señala inaceptable desde luego, de que fuera verdad que en su predio se hubiese encontrado pastando ganado marcado con el fierro de herrar de Carmen Agraz, no constituye un ilícito, porque tanto el Derecho Agrario, como el Derecho Común y la Constitución, permiten a los particulares vender las pasturas, sin que el arrendatario o comprador de las mismas se vaya a volver por ello dueño del predio del que adquirió tales pasturas, porque de lo contrario, no tendrían sentido la existencia de los contratos de arrendamiento de predios ganaderos o la aparcería de ganado, reglamentado por el Derecho Civil; que también es falso que Raúl González Michel pague el sueldo de los trabajadores de su finca, ya que quien realiza ese pago es la promovente o su encargado Alfredo Biseño Guzmán, quien se encarga igualmente de todas las operaciones de compraventa que se realizan en relación a los productos que se obtienen de la explotación del inmueble; que respecto de la notificación recibida, indica que ella no tiene parentesco con María del Carmen Agraz Valera, que aun cuando ella conoce a la citada señora, no le liga ningún lazo familiar, pero en el supuesto caso de que fueran parientes, ello no sería prueba de simulación, dado que ni la Constitución, ni la Ley Federal de Reforma Agraria o el Código Civil del Estado de Jalisco, prohíben a ningún mexicano comprar terrenos entre personas que sean parientes. Ofreció como pruebas: a) plano de su predio, b) copia del certificado de inafectabilidad número 10871, expedido en el año de 1945, c) recibo del último pago de contribuciones, d) certificación de hechos practicada el veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta, por el Juez Menor de Talpa, Jalisco, actuando como notario por receptoría, quien se constituyó en el predio "La Cañita", junto con dos testigos de asistencia, dando fe de que el mismo está cercado con alambre y piedra, que los testigos identificaron el inmueble, constatándose que 50-00-00 (cincuenta hectáreas) están sembradas de zacatón y 8-00-00 (ocho hectáreas) aparecen cultivadas con maíz espigado.

IRMA DE JESUS GONZALEZ AGRAZ.- Propietaria del predio denominado "La Lima", con superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas), amparado con certificado de inafectabilidad agrícola número 10965, de veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y seis, expedido por Acuerdo Presidencial de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación,** el veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y seis; que su predio siempre ha sido una pequeña propiedad inafectable y que el hecho de que su madre Carmen Agraz Valera, administre su predio y los inmuebles de sus hermanos, no prueba la acumulación de provechos a su favor porque está obligada a ello en términos del derecho común, dada la circunstancia de que tanto la ocursante como sus hermanos son menores de edad y por lo mismo sus bienes necesariamente deben ser administrados por quienes ejercen la patria potestad; que si bien en la inspección ocular realizada el diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho, el comisionado informó haber encontrado ganado marcado con el fierro quemador registrado a nombre de su madre, ello se debe a que la oferente y sus menores hermanos solicitaron en préstamo refaccionario a la Financiera General, Sociedad Anónima, para comprar ganado, tramitándose la correspondiente autorización judicial dentro del expediente número

139/70, en el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Vallarta, Jalisco, misma que se obtuvo por resolución del veintitrés de junio de mil novecientos setenta, mediante la cual se autorizó a gravar los bienes de los menores en cuestión, hasta por la cantidad de $290,000.00 (doscientos noventa mil pesos), con garantía hipotecaria fincada sobre los predios rústicos "San Cayetano", "El Colomo" y "La Lima", que el producto obtenido de ese crédito se destinó a incrementar la explotación agropecuaria, que para el otorgamiento del crédito, la Financiera General exigió que el fierro quemador para marcar el ganado comprado con ese dinero, estuviera registrado a nombre de Carmen Agraz, en virtud de que existe la circular número 22, de veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, expedida por el Departamento de Agricultura y Ganadería del Estado de Jalisco, que ordena: "...Las figuras de herrar ganado, deberán registrarse por personas físicas mayores de 18 años,..."; que el hecho de que su padre Raúl González Michel, pague el salario de los trabajadores, no representa tampoco prueba alguna de simulación, en virtud de que la minoría de edad también le impide administrar sus bienes; que con el producto de su rancho paga sus gastos, entre
ellos los de sus estudios; que los trabajadores de su propiedad, así como sus instalaciones, son diversas a los predios propiedad de sus hermanos. Ofreció como pruebas: a) Testimonial, b) Pericial, c) Inspección ocular, d) Confesional, e) Título de propiedad, f) Plano del inmueble, g) Certificado de inafectabilidad, h) Copia del título de propiedad de su causante, i) Ultimo recibo del pago de contribuciones, j) Copia de la circular número 22, de veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, k) Copia del expediente de autorización judicial para gravar bienes de menores, l) Certificado de ser vecina de Talpa, Jalisco, m) Certificado escolar de secundaria, n) Certificado de los bancos, en donde la oferente tiene depositados sus ahorros, ñ) Acta de la inspección ocular practicada por el Juez menor de Talpa, Jalisco.

En el mismo tenor que el escrito anterior, Carmen Sofía y María del Rosario González Agraz, comparecieron al procedimiento, cuyos argumentos y pruebas presentadas en lo individual, respecto de sus predios se tienen por reproducidos, en obvio de repeticiones.

MARIA DEL CARMEN AGRAZ VALERA.- Compareció por su propio derecho, manifestando que es infundada la concentración de provechos y acumulación de beneficios provenientes de siete predios sujetos al procedimiento de nulidad, que se le atribuye; que por lo que respecta a María de los Angeles Cibrián Langarica, María Dolores y Herlinda Pelayo Gutiérrez, éstas no son de su familia, ni tiene amistad con ellas, mucho menos ha poseído sus predios y el ganado herrado con su fierro quemador, jamás ha pastado en los inmuebles de esas personas; que al ejercer la patria potestad sobre sus menores hijos, se han dado actos de administración por su parte, de los bienes de los mismos, empero, el producto de los mismos se entrega a cada uno de ellos, a través del pago de sus gastos personales; que en relación a lo informado como resultado de la inspección ocular de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho, contiene datos falsos, ya que es inexacto de los predios inspeccionados estén dedicados solamente a la actividad ganadera, porque los terrenos de sus menores hijos en el tiempo en que se realizó la inspección, presentan grandes extensiones con vestigios de haber sido sembrados de maíz. Ofreció como pruebas: a) Testimonial y confesional, b) Copia de la instrumental de actuaciones para obtener la autorización judicial para gravar bienes de menores de edad, c) Copias de actas de nacimiento de sus hijos, d) Copia de la circular del veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, e) Constancia del diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y ocho, expedida por el encargado de la Oficina Municipal de Estadística e Inspección Agrícola de Talpa, Jalisco, f) Constancias de estudios de sus hijos, g) Comprobantes de pago de colegiaturas, h) Constancias de manutención de sus menores hijos.

XVI.- La Subdirección de Investigación Agraria, de la Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria, el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y tres, emitió su dictamen, en el que estimó procedente declarar la nulidad del fraccionamiento simulado, constituido por los siete predios sujetos al procedimiento respectivo y que son propiedad de María de los Angeles Cibrián Langarica, María Dolores y Herlinda Pelayo Gutiérrez, Raúl, Irma de Jesús, María del Rosario y Carmen Sofía González Agraz, encontrándose ubicados en el Municipio de Tomatlán, Jalisco, cuyas superficies arrojan el total de 2,468-55-00 (dos mil cuatrocientas sesenta y ocho hectáreas, cincuenta y cinco áreas), siendo 327-75-00 (trescientas veintisiete hectáreas, setenta y cinco áreas) de temporal, 60-00-00 (sesenta hectáreas) de agostadero de buena calidad y 2,080-80-00 (dos mil ochenta hectáreas, ochenta áreas) de agostadero en terrenos áridos, al haberse comprobado que los beneficios provenientes de la explotación de esos inmuebles, incrementan el patrimonio de María del Carmen Agraz Valera de González; en este dictamen se ordenó también la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola que amparan los predios de que trata.

XVII.- El veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, el Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó acuerdo en el que ordena a la Dirección General de la Tenencia de la Tierra, instaure el procedimiento de cancelación, previsto en el artículo 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, respecto a los certificados de inafectabilidad que amparan los predios sujetos al juicio de nulidad de

fraccionamiento, por haber quedado demostrado los supuestos previstos en el inciso b), de la fracción III, del artículo 210 del ordenamiento legal invocado.

XVIII.- La Dirección General de Tenencia de la Tierra, por acuerdo de veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, ordenó iniciar el procedimiento tendiente a dejar sin efectos jurídicos, entre otros, los acuerdos presidenciales por los que se expidieron los certificados de inafectabilidad agrícola números 10871, 10746, 10965 y 10966, que amparan los predios "La Cañita", "El Moro", "La Lima" y "El Colomo", respectivamente, radicando el expediente correspondiente bajo el número 2118-84/AGRIC/JAL.

Las notificaciones a sus propietarios fueron realizadas por cédulas de veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, en atención a las cuales comparecieron al procedimiento, entre otros, María Dolores Pelayo Gutiérrez, María del Rosario González Agraz, Irma de Jesús González Agraz de Pelayo y Carmen Sofía González de Solís, ofreciendo como pruebas y alegatos, los presentados en el procedimiento de nulidad de fraccionamiento. Cabe señalar por lo que toca a Irma de Jesús y Carmen Sofía González Agraz, que las mismas manifestaron haber alcanzado la mayoría de edad, por lo que cada una de ellas ya administraban los predios de su propiedad, ofreciendo como pruebas sus propias constancias de fierros quemadores.

Substanciado el procedimiento respectivo, el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y ocho, la Dirección General de Tenencia de la Tierra, resolvió declarar sin efecto los acuerdos de inafectabilidad que motivaron la expedición, de entre otros, de los cuatro certificados mencionados, ordenando el turno del expediente al Cuerpo Consultivo Agrario, para su trámite subsecuente.

XIX.- Obra en autos, dictamen positivo, aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario, de dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en el que propone conceder una superficie de 183-87-50 (ciento ochenta y tres hectáreas, ochenta y siete áreas, cincuenta áreas) de temporal teórico, y declara la inexistencia de fraccionamientos simulados y la improcedencia de la nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de los predios sujetos a investigación, y ordena el turno del expediente a este Tribunal Superior Agrario, para su resolución definitiva.

Asimismo, obra la siguiente documentación:

1.- Acuerdo de cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario, en los siguientes términos: "PRIMERO.- Se suspenden los efectos jurídicos del dictamen de Ampliación de Ejido, Nulidad de Fraccionamientos por Actos de Simulación, Nulidad de Acuerdos Presidenciales y Cancelación de Certificados de Inafectabilidad del poblado denominado 'SAN FELIPE LLANO GRANDE', Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario, en sesión plenaria de fecha 2 de diciembre de 1993, así como el Acuerdo que autorizó el plano proyecto de localización de fecha 23 de febrero de 1994.- SEGUNDO.- Solicítese al Coordinador Agrario en el Estado de Jalisco, para que proceda a notificar a los CC. MARIA DOLORES PELAYO GUTIERREZ, HERLINDA PELAYO GUTIERREZ, RAUL GONZALEZ AGRAZ, IRMA DE JESUS GONZALEZ AGRAZ, CARMEN SOFIA GONZALEZ AGRAZ, MARIA DE LOS ANGELES CIBRIAN LANGARICA, MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ AGRAZ, propietarios de los predios señalados en el considerando IV, todos ellos ubicados en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, y/o sucesión legítima y/o causahabientes y/o posesionarios y/o quien legalmente los represente; tal notificación se realizará por Edictos en los términos previstos por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en Materia Agraria, y en su oportunidad, se remitan a esta Consultoría Agraria titular las actuaciones respectivas".

2.- Edictos publicados los días ocho y veinticinco de abril y dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el periódico "El Heraldo de México", así como en el **Diario Oficial de la Federación** de veinticuatro de junio, primero y ocho de julio de mil novecientos noventa y seis, por lo que hace al procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de inafectabilidad; y los días cuatro, once y dieciocho de abril de mil novecientos noventa y seis, en el periódico "Excélsior", y en el **Diario Oficial de la Federación** los días veinticuatro de junio, primero y ocho de julio de mil novecientos noventa y seis, en cuanto a la nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación.

3.- Acuerdo de veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario, en el que se tiene por notificados a los interesados, respecto de los procedimientos que anteceden.

XX.- Por auto de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, se tuvo por radicado el presente expediente en este Tribunal Superior Agrario, para su resolución correspondiente, registrándose bajo el número 485/96; habiéndose notificado a los interesados y comunicándolo a la Procuraduría Agraria.

XXI.- María Antonia González de Ramírez, Aurelio Ramírez Martínez, José Ramírez Martínez y Roberto Ramírez González, por su propio derecho y en su carácter de actuales propietarios, de los predios "El Moro", "La Lima", "La Cañita" y "El Colomo", ubicados en el Municipio de Tomatlán, Jalisco,

comparecieron ante este Tribunal Superior Agrario, por escritos presentados el trace de diciembre de mil novecientos noventa y seis, cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, ofreciendo las siguientes pruebas:

Copias certificadas de las actas números 1315, 1317, 1152 y 1139, las dos primeras de veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, y la tercera y cuarta de veintitrés y dieciséis de enero de ese mismo año, pasadas ante la fe del notario público número 1, de Mascota, Jalisco; declaraciones para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y pago provisional del impuesto sobre la renta, por su enajenación, certificaciones de pago por impuesto predial llevados a cabo en la Tesorería General del Estado de Jalisco; así como de los planos y de los certificados de inafectabilidad agrícola de los predios "El Moro", "La Lima", "La Cañita" y "El Colomo"; y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DA-983/98, promovido por Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 80 de la Ley de Amparo, el Tribunal Superior Agrario, por acuerdo de veinticuatro de marzo de este mismo año, dejó parcialmente sin efecto su sentencia definitiva de ocho de julio de mil novecientos noventa y siete, emitida en el juicio agrario 485/96, que corresponde al expediente administrativo 3750, relativos a la solicitud de ampliación de ejido del poblado de que se trata, únicamente por lo que respecta a los predios "El Colomo", "La Cañita", "El Moro" y "La Lima", defendidos por los quejosos, por lo que este órgano jurisdiccional, en términos de la ejecutoria de amparo, emite la presente resolución, únicamente por lo que fue materia de estudio por el órgano jurisdiccional, de conformidad al primero de los artículos citados.

TERCERO.- El requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, se cumple, ya que las tierras concedidas en vía de dotación al poblado "San Felipe Llano Grande", Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, se encuentran debidamente aprovechadas, según se asienta en el informe de Leonardo García Núñez, fechado el cinco de junio de mil novecientos setenta.

CUARTO.- En el presente caso, se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento agrario, contenidas en los artículos 272, 273, 275, 286, 291, 292, 297, 298, 299 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

QUINTO.- Asimismo, de las constancias que obran en autos, se conoce que en el presente juicio agrario se respetaron las garantías de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales ya que los propietarios de los predios rústicos investigados, fueron debidamente notificados, apersonándose a la substanciación del procedimiento, presentando pruebas y formulando alegatos; debiéndose señalar que por lo que hace a las pruebas documentales ofrecidas por los quejosos Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, consistentes en las documentales que hacen suyas y que se refieren a las que aportaron en el procedimiento, María Dolores Pelayo Gutiérrez, María del Rosario González Agraz, Irma de Jesús González Agraz y Carmen Sofía González Agraz, tendientes a acreditar la improcedencia de la nulidad de fraccionamientos de predios, por actos de simulación, resulta innecesario su análisis y valoración, tomando en cuenta las consideraciones hechas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que se cumplimenta, y de la que más adelante se hará referencia.

SEXTO.- Del análisis de las constancias que obran en autos, así como de los informes de los trabajos técnicos e informativos rendidos por Juan Guerra Hernández y José Robles Manzana, el once de junio y quince de diciembre de mil novecientos setenta y tres, respectivamente, los cuales hacen prueba plena por ser expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria; se conoce por lo que toca a la investigación de predios comprendidos dentro del radio legal del núcleo gestor, se localiza la Comunidad Indígena de Jocotlán, el ejido definitivo de "San Felipe Llano Grande"; asimismo, veintisiete predios rústicos, de entre los cuales, diecinueve predios de propiedad privada, por su calidad de tierras, tipo de explotación a que se encuentran dedicados y superficies, resultan inafectables, al estar comprendidos dentro de lo señalado por los artículos 249, 250 y

251 de la Ley Federal de Reforma Agraria; y ocho predios, mismos que fueron solicitados por el núcleo gestor, se reportaron como probablemente afectables.

Ahora bien, por lo que respecta a estos últimos predios investigados, y en particular, los que corresponden a los quejosos en el juicio de amparo DA-983/98, de las constancias que integran el expediente en estudio, así como de los informes rendidos el ocho de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, seis de abril de mil novecientos setenta y ocho, y veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, por los comisionados Carlos García Curiel, Lorenzo A. Alatorre Ramírez y Salomón Barrera Sánchez, respectivamente, se conoce que los predios que eran propiedad de María Dolores Pelayo Gutiérrez, María del Rosario González Agraz, Irma de Jesús González Agraz y Carmen Sofía González Agraz, cuentan en su orden, con los siguientes certificados de inafectabilidad agrícola:

- Certificado de inafectabilidad agrícola número 10871, que ampara el predio "La Cañita", con superficie de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas), clasificadas 36-75-00 (treinta y seis hectáreas, setenta y cinco áreas) de temporal y 208-25-00 (doscientas ocho hectáreas, veinticinco áreas) de agostadero de mala calidad, expedido a nombre de María Guadalupe Gil Hernández, mediante Acuerdo Presidencial de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y seis.

- Certificado de inafectabilidad agrícola número 10746, que ampara el inmueble "El Moro", con superficie de 292-00-00 (doscientas noventa y dos hectáreas), de las cuales 29-20-00 (veintinueve hectáreas, veinte áreas) son de temporal y 262-80-00 (doscientas sesenta y dos hectáreas, ochenta áreas) de agostadero cerril, expedido mediante Acuerdo Presidencial de primero de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el dieciocho de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, a nombre de Cristina Hernández Cuéllar.

- Certificado de inafectabilidad agrícola número 10965, que ampara el predio "La Lima", con superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas), clasificadas 33-15-50 (treinta y tres hectáreas, quince áreas, cincuenta centiáreas) de temporal y 301-63-50 (trescientas una hectáreas, sesenta y tres áreas, cincuenta centiáreas) de agostadero de mala calidad, expedido mediante Acuerdo Presidencial de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y seis, a nombre de María de la Luz Ramos Valdez.

- Certificado de inafectabilidad agrícola número 10966, que ampara el predio "El Colomo", con superficie de 210-50-00 (doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas), de las cuales 31-57-50 (treinta y una hectáreas, cincuenta y siete áreas, cincuenta centiáreas) son de temporal y 178-92-50 (ciento setenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, cincuenta centiáreas) de agostadero de mala calidad, expedido por Acuerdo Presidencial de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y seis, a nombre de María Dolores Araiza Guzmán.

A petición del núcleo gestor, fueron investigados los predios que anteceden, los cuales por acta de inspección ocular de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho, se conoce en relación a la explotación de los mismos, que los dedican en su mayor parte al agostadero y en pequeñas porciones a la agricultura; indicando que el ganado encontrado está marcado con fierro de herrar, propiedad de María del Carmen Agraz Valera, por lo que se presumió una acumulación de provechos a su favor, de dichos predios.

Con motivo de la causa de afectación atribuida a los predios rústicos citados, el Subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, ordenó la instauración del procedimiento de nulidad de fraccionamientos de predios afectables por actos de simulación, previsto en los artículos 399 al 405 de la Ley Federal de Reforma Agraria, al comprobarse los indicios que prevé el artículo 210 fracción III, inciso b) del ordenamiento legal invocado. En consecuencia, la Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria, acordó la instauración respectiva, el dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el ocho de mayo de ese mismo año; y substanciadas sus etapas procesales, se emitió dictamen, el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y tres, declarando procedente la nulidad del fraccionamiento simulado, constituido por los predios investigados, al comprobarse que María del Carmen Agraz Valera de González, es quien concentraba los provechos y acumulaba los beneficios provenientes de la explotación de los predios descritos, encontrándose aplicable lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III, del artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo, se declaró procedente la cancelación de los certificados de inafectabilidad que amparan dichos predios, previa declaración de nulidad de los acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de inafectabilidad; tal procedimiento fue instaurado por la Dirección General de Tenencia de la Tierra el veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, bajo el número 2118-84/AGRIC/JAL., al existir presunciones fundadas de que los predios sujetos al procedimiento, se adecuaban a la hipótesis normativa prevista en la fracción XV, del artículo 27 constitucional, aplicado a

contrario sensu, 210 fracción III, inciso b) de la Ley Federal de Reforma Agraria, en relación con el 418, fracción IV, de este último ordenamiento legal; habiéndose emitido el dictamen respectivo, el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y ocho, declarando procedente dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad que nos ocupan.

En base a lo anterior, y al análisis de las pruebas aportadas por María Dolores Pelayo Gutiérrez y María del Rosario, Irma de Jesús y Carmen Sofía de apellidos González Agraz, las cuales al considerar a su vez este Tribunal que son las mismas que fueron presentadas por los quejosos María Antonia González de Ramírez, Aurelio Ramírez Martínez, José Ramírez Martínez y Roberto Ramírez González, y por ello, se sujetaron al resultado del análisis y valoración de las primeras, en la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, el ocho de julio de mil novecientos noventa y siete, se llegó a la conclusión, que los oferentes no lograron desvirtuar la acumulación de beneficios que derivan de la explotación realizada en los inmuebles rústicos denominados "La Cañita", "El Moro", "La Lima" y "El Colomo", ubicados en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, cuya acumulación se atribuyó a María del Carmen Agraz Valera de González, señalándose que durante la secuela del procedimiento, en ningún momento quedó comprobado que los beneficios provenientes de la explotación llevada a cabo en esos predios, incrementara en forma individual el patrimonio de dichas personas; por lo que al quedar acreditada la simulación de fraccionamientos en cuanto a la hipótesis prevista en el artículo 210 fracción III inciso b) de la Ley Federal de Reforma Agraria, en términos de los artículos 249, aplicado a contrario sensu y 250 de la propia ley, resultaron afectables en favor de los peticionarios de dicha acción agraria, la unidad topográfica que forman entre otros, los predios "La Cañita", propiedad de María del Rosario González Agraz (sic); "El Moro", propiedad de María del Rosario González Agraz (sic), "La Lima", propiedad de Irma de Jesús González Agraz (sic), y "El Colomo", propiedad de Carmen Sofía González Agraz (sic); por lo que al haber resultado procedente declarar la nulidad del fraccionamiento compuesto por dichos predios, en términos del artículo 405 de la citada Ley Federal de Reforma Agraria, con fundamento en la fracción IV del artículo 418 del ordenamiento legal invocado, también se declararon nulos los siguientes acuerdos presidenciales y cancelaron los certificados de inafectabilidad agrícola que por ello se expidieron.

1.- Acuerdo Presidencial de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y seis, por el que se expidió el certificado de inafectabilidad agrícola número 10871, que ampara al predio denominado "La Cañita", con una superficie de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas), clasificadas como 36-75-00 (treinta y seis hectáreas, setenta y cinco áreas) de temporal y 208-25-00 (doscientas ocho hectáreas, veinticinco áreas) de agostadero de mala calidad, a favor de María Guadalupe Gil, actualmente propiedad de María Dolores Pelayo Gutiérrez.

2.- Acuerdo Presidencial de primero de agosto de mil novecientos cuarenta y seis, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el dieciocho de mayo del mismo año, por el que se expidió certificado de inafectabilidad agrícola número 10746, que ampara al predio denominado "El Moro", con una superficie de 292-00-00 (doscientas noventa y dos hectáreas), de las cuales 29-20-00 (veintinueve hectáreas, veinte áreas) son de temporal y 262-80-00 (doscientas sesenta y dos hectáreas, ochenta áreas) de agostadero cerril, a favor de Cristina Hernández Cuéllar, actualmente propiedad de María del Rosario González Agraz.

3.- Acuerdo Presidencial de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y seis, por el que se expidió certificado de inafectabilidad agrícola número 10965, que ampara al predio denominado "La Lima", con una superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas), clasificadas 33-15-50 (treinta y tres hectáreas, quince áreas, cincuenta centiáreas) de temporal y 301-63-50 (trescientas una hectáreas, sesenta y tres áreas, cincuenta centiáreas) de agostadero de mala calidad, a favor de María de la Luz Ramos Valdez, actualmente propiedad de Irma de Jesús González Agraz.

4.- Acuerdo Presidencial de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y seis, por el que se expidió certificado de inafectabilidad agrícola número 10966, que ampara al predio denominado "El Colomo", con una superficie de 210-50-00 (doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas), de las cuales 31-57-50 (treinta y una hectáreas, cincuenta y siete áreas, cincuenta centiáreas) son de temporal y 178-92-50 (ciento setenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, cincuenta centiáreas) de agostadero de mala calidad, a favor de María Dolores Araiza Guzmán, actualmente propiedad de Carmen Sofía González Agraz.

Y por lo anterior, también resultó procedente la ampliación de ejido en favor del núcleo de población que nos ocupa, de una superficie total de 1,448-47-50 (mil cuatrocientas cuarenta y ocho hectáreas, cuarenta y siete áreas, cincuenta centiáreas), que se tomarían de entre otros, de los predios de referencia.

Teniendo en consideración, que en contra de lo anterior, Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, demandaron el amparo y

protección de la Justicia Federal, que al ser resuelto el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Justicia de la Unión los amparó y protegió, considerando que el procedimiento de nulidad de fraccionamiento de predios afectables por actos de simulación, jamás debió instaurarse en contra de los inmuebles que defienden, en virtud de que no tienen el carácter de afectables, al contar con certificados de inafectabilidad, siendo ilegal el pronunciamiento respecto de la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números 10966, 10871, 10746 y 10965, correspondientes, respectivamente a los predios "El Colomo", "La Cañita", "El Moro" y "La Lima", por lo que en estricto cumplimiento a la ejecutoria de mérito, resulta improcedente declarar la nulidad de fraccionamientos simulados, respecto de los predios, actualmente propiedad de Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, ubicados en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco; y por consecuencia, declarar que no ha lugar a dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y seis; de primero de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el dieciocho de mayo de mil novecientos cuarenta y seis; de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y seis; y de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y seis; relativos a los predios "La Cañita", con superficie de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas); "El Moro", con superficie de 292-00-00 (doscientas noventa y dos hectáreas); "La Lima", con superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas); y "El Colomo", con superficie de 210-50-00 (doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas), respectivamente; resultando por ende improcedente cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola números 10871, expedido a favor de María Guadalupe Gil Hernández; 10746, expedido a favor de Cristina Hernández Cuéllar; 10965, expedida a favor de María de la Luz Ramos Valdez; y 10966, expedido a favor de María Dolores Araiza Guzmán, en su orden.

Por otra parte, Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, actuales propietarios de los multicitados predios, y quienes fueron quejosos en el juicio de amparo que se cumplimenta, para acreditar la causahabiencia con las personas a quienes compraron, como con los originales propietarios de los mismos, ofrecieron las pruebas que fueron relacionadas en el resultando cuarto (antecedente XXI), mismas que tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, con las que se conoce que María Antonia González de Ramírez, adquirió de María del Rosario González Agraz, el predio denominado "El Moro", ubicado en el Municipio de Tomatlán, Jalisco, y que arroja una superficie de 292-00-00 (doscientas noventa y dos hectáreas), mediante instrumento público acta notarial número 1315, pasada ante la fe del notario público número 1 de Mascota, Jalisco, misma que data del veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, de la cual se tomó razón en la Oficina del Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, el diez de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, agregada e incorporada al libro número 281, folios del 2 al 6, predio que se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 10746, expedido el veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, mediante el acuerdo de inafectabilidad antes mencionado, en favor de su original propietaria Cristina Hernández Cuéllar, y que cuenta con la superficie antes indicada, con las siguientes áreas y calidades de tierra: 29-20-00 (veintinueve hectáreas, veinte áreas) de temporal y 262-80-00 (doscientas sesenta y dos hectáreas, ochenta áreas) de agostadero cerril.

Que Aurelio Ramírez Martínez adquirió de Irma de Jesús González Agraz, el predio denominado "La Lima", ubicado en el citado municipio, con una superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas), mediante escritura pública de veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, pasada ante la fe de dicho notario público, y de la que tomó razón en el acta protocolaria 1317, inscrita en la Oficina del Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, en el libro número 281, fojas de 7 a la 11; predio que se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 10965, expedido el veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y seis, mediante el acuerdo de inafectabilidad mencionado con anterioridad, expedido en favor de la propietaria original María de la Luz Ramos Valdez, y que cuenta con la superficie antes indicada, con las siguientes áreas y calidades de tierra: 33-51-50 (treinta y tres hectáreas, cincuenta y un áreas, cincuenta centiáreas) de temporal y 301-63-50 (trescientas una hectáreas, sesenta y tres áreas, cincuenta centiáreas) de agostadero de mala calidad.

Que José Ramírez Martínez adquirió de María Dolores Pelayo Gutiérrez, el predio denominado "La Cañita", con una extensión superficial de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas), mediante acta notarial número 1152, de veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y nueve, pasada ante la fe

del citado notario público, tomando razón de la misma en la Oficina del Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, en el libro 250, folios del 52 al 57, predio que se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 10871, expedido el veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y seis, mediante el acuerdo de inafectabilidad señalado con anterioridad, en favor de la propietaria original María Guadalupe Gil Hernández y que cuenta con la superficie antes indicada, con las siguientes áreas y calidades de tierra: 36-75-00 (treinta y seis hectáreas, setenta y cinco áreas) de temporal y 208-25-00 (doscientas ocho hectáreas, veinticinco áreas) de agostadero de mala calidad.

Que Roberto Ramírez González, adquirió de Carmen Sofía González Agraz de Solís, el predio denominado "El Colomo", que tiene una superficie de 210-50-00 (doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas), mediante escritura pública de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y nueve, pasada también ante la fe del notario público número 1, de Mascota, Jalisco, bajo el instrumento notarial 1139, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, Jalisco, en el libro 250, folios del 64 al 69; predio que se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 10966, expedido el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y seis, emitido por el acuerdo de inafectabilidad referido con anterioridad, en favor de su original propietaria María Dolores Araiza Guzmán, y que cuenta con la superficie antes indicada, con las siguientes áreas y calidades de tierra: 31-57-50 (treinta y una hectáreas, cincuenta y siete áreas, cincuenta centiáreas) de temporal y 178-92-50 (ciento setenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, cincuenta centiáreas) de agostadero de mala calidad.

Teniendo en consideración las pruebas anteriormente analizadas, adminiculadas con las consideraciones hechas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria que se cumplimenta, en el sentido de que los predios que defienden los quejosos tienen el carácter de inafectables, así como con los trabajos técnicos e informativos realizados por el ingeniero Lorenzo A. Alatorre Ramírez, quien rindió su informe el seis de abril de mil novecientos setenta y ocho, en relación a la solicitud de ampliación de ejido del poblado "San Felipe Llano Grande", que obra a fojas 107 a 113 del legajo V, de los que se conoce que los citados predios se dedican a la explotación ganadera así como a la siembra de maíz y en los cuales se han hecho erogaciones de dinero para la mejora y explotación de los mismos; este Tribunal Superior Agrario llega a la conclusión que por la extensión de tierra, calidad de la misma, explotación y régimen de propiedad de los predios en cuestión, resultan ser inafectables para satisfacer las necesidades agrarias del grupo solicitante de tierras de la primera ampliación de ejido del poblado "San Felipe Llano Grande", Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, atento a lo dispuesto por los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 76 y 80 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo DA-983/98, promovido por Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Se declara improcedente la nulidad de fraccionamientos simulados respecto de los predios actualmente propiedad de Roberto Ramírez González, José Ramírez Martínez, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, ubicados en el Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, por tener éstos la calidad de inafectables.

SEGUNDO.- En consecuencia, no ha lugar a dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales de inafectabilidad agrícola de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintidós de junio de mil novecientos cuarenta y seis; de primero de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el dieciocho de mayo de mil novecientos cuarenta y seis; de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y seis; y de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y seis; relativos a los predios "La Cañita", con superficie de 245-00-00 (doscientas cuarenta y cinco hectáreas); "El Moro", con superficie de 292-00-00 (doscientas noventa y dos hectáreas); "La Lima", con superficie de 335-15-00 (trescientas treinta y cinco hectáreas, quince áreas); y "El Colomo", con superficie de 210-50-00 (doscientas diez hectáreas, cincuenta áreas), respectivamente; resultando por ende improcedente cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola números 10871, expedido a favor de María Guadalupe Gil Hernández; 10746, expedido a favor de Cristina Hernández Cuéllar, 10965, expedido a favor de María de la Luz Ramos Valdez y 10966, expedido a favor de María Dolores Araiza Guzmán, en su orden.

TERCERO.- Es de negarse y se niega la ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado denominado "San Felipe Llano Grande", Municipio de Tomatlán, Estado de Jalisco, sólo por cuanto hace a

los predios "La Cañita", "El Colomo", "El Moro" y "La Lima", propiedad de José Ramírez Martínez, Roberto Ramírez González, María Antonia González de Ramírez y Aurelio Ramírez Martínez, respectivamente, que fueron materia de estudio constitucional, quedando subsistente la sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario el ocho de julio de mil novecientos noventa y siete, en lo que no fue materia de amparo.

CUARTO.- Publíquese esta resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, para los efectos legales correspondientes.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Jalisco, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría de la Reforma Agraria, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

SEXTO.- Comuníquese al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio de amparo directo DA-983/98.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 049/97, relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado La Capilla, Municipio de El Fuerte, Sin.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 049/97, que corresponde al expediente número 742, relativo a la ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos radicados en el poblado "La Capilla", Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa; en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho en el juicio de amparo número D.A. 1675/98, promovido por Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, contra actos de este Tribunal, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Superior Agrario emitió sentencia en los autos del presente procedimiento, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Es procedente la ampliación de ejido, promovida por campesinos del poblado denominado 'La Capilla', Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.

SEGUNDO. Es de dotarse y se dota al poblado de referencia, por concepto de segunda (sic) ampliación de ejido, una superficie de 349-00-00 (trescientas cuarenta y nueve) hectáreas de terrenos de agostadero, que se tomarán de la siguiente manera: 26-00-00 (veintiséis) hectáreas de terrenos de agostadero, ubicado en el predio 'Lomas de Sivirijoa' o 'Minas', sindicatura de San Blas, Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa, propiedad de Juan Ceballos Caro, por haberse encontrado inexplotado por parte de su propietario por más de cinco años sin causa de fuerza mayor que lo impida, afectado de conformidad con el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicado en sentido contrario; 23-00-00 (veintitrés) hectáreas de agostadero, confundidas dentro de los límites del mismo predio, consideradas como demasías propiedad de la Nación, afectable de conformidad con el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria; 300-00-00 (trescientas) hectáreas de agostadero, de terrenos baldíos propiedad de la Nación, afectable de conformidad con el artículo 204 del mismo ordenamiento legal invocado; entregándoles en propiedad dicha superficie, conforme al plano proyecto que al efecto se elabore, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, para constituir los derechos agrarios correspondientes de los 23 (veintitrés) campesinos beneficiados, enumerado en el considerando segundo, en cuanto a la determinación del destino de estas tierras y su organización económica y social, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

TERCERO. Se revoca el mandamiento del Gobernador del Estado de Sinaloa.

CUARTO. Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa y los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad que corresponda; asimismo, inscríbase en el Registro

Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes a que se refiere la presente sentencia y conforme a las normas aplicables...".

SEGUNDO. Inconforme con la sentencia anterior Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez propietario de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) del predio "Lomas de Sivirijoa" o "Minas" promovió demanda de amparo, mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete ante la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, en defensa exclusiva de su predio quien se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto turnándose al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, Distrito Federal, quien la admitió el nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho quedando radicada bajo el número D.A. 1675/98; autoridad que por sentencia de ocho de octubre del mismo año, concedió el amparo y protección solicitado, conforme al siguiente punto resolutivo:

"...SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, en contra del acto que reclama del Tribunal Superior Agrario, consistente en la resolución de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, dictada en el expediente agrario número 049/97, y su ejecución, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución...".

La parte considerativa de la ejecutoria de mérito señala en su parte fundamental:

"..SEPTIMO.- Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son en parte infundados y, en otra, fundados, de conformidad con las consideraciones siguientes:

En efecto, aduce al quejoso que la resolución reclamada transgrede las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no se encuentra fundada ni motivada.

Lo anterior resulta inexacto, porque de la transcripción efectuada de la propia sentencia reclamada, se advierte que el Tribunal responsable citó como fundamentos de su resolución, entre otros, los artículos 14 y 16 constitucionales, segundo y tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del seis de enero de mil novecientos noventa y dos, 10, 56, 189 y tercero transitorio de la Ley Agraria, 1o. 9o. fracción VII, y cuarto transitorio fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 197 fracción II, 200, 210 fracción III, 204, 241, 249, 250, 251, 272, 275, 286, 291, 292, 304, 399, 400, 418 y 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 197, 200, 202, 203 y 212, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 3o., 4o. y 6o., de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías; además expuso las consideraciones que la condujeron a declarar procedente la ampliación de ejido solicitada por campesinos del poblado denominado 'La Capilla', Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.

Por otro lado, sostiene el quejoso que la sentencia reclamada transgrede en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad, porque las pruebas que ofreció y los alegatos que formuló en el juicio agrario número 49/97, mediante escrito presentado el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, así como el certificado que contiene el coeficiente de agostadero número 625.03.02-0571/97 expedido por el Subdelegado Agropecuario de la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social y el Jefe de la Unidad Cotecoca en Sinaloa, de treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, no fueron admitidas ni desahogadas por el Tribunal responsable, por lo que se dejaron de respetar las formalidades esenciales del procedimiento ...contrariamente a lo que sostiene el quejoso, las pruebas que ofreció en su escrito presentado el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, ante el Tribunal Superior Agrario se tuvieron por admitidas y por formulados sus alegatos; asimismo se tuvieron por desahogadas, en términos de ley, las pruebas documentales, la presuncional e inspección ocular, no así la prueba testimonial ofrecida en dicho escrito, por haber sido declarada desierta; por lo tanto, en este aspecto, contrariamente a lo que sostiene el quejoso, no puede considerarse que el Tribunal responsable haya dejado de respetar las formalidades esenciales del procedimiento y que, por ello, la resolución reclamada sea violatoria de garantías.

Por otro lado, en relación con la prueba consistente en el certificado que contiene el coeficiente de agostadero número 625.03.02-0571/97, expedido por el Subdelegado Agropecuario de la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social y el Jefe de la Unidad Cotecoca en Sinaloa, de treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, debe decirse que si bien es cierto que de las constancias que integran el expediente agrario número 49/97, no se advierte que el Tribunal Superior Agrario lo haya admitido, también lo es que de dicho expediente agrario, tampoco se advierte que el ahora quejoso lo hubiera ofrecido como prueba de su parte ante el Tribunal Superior Agrario, toda vez que como se desprende del escrito de ofrecimiento de pruebas presentado el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, si bien ofreció un certificado relativo al coeficiente de agostadero ponderado en la región, correspondiente al predio 'Lomas de Sivirijoa' o 'Minas', lugar donde se establecen las fincas rústicas R-5187 y 4-3232(5196), dedicadas a la explotación ganadera y agrícola de temporal, expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, éste no puede ser el mismo al que se refiere en la demanda de amparo, ya que a la fecha de su ofrecimiento, veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho, es anterior a la de expedición del certificado a que se refiere.

Tampoco beneficia al quejoso lo que sostiene en el sentido de que la sentencia reclamada es violatoria de garantías porque en ella el Tribunal Superior Agrario, omitió valorar la prueba testimonial que ofreció por escrito presentado el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete.

Lo anterior es así, porque como ha quedado precisado, si bien en el juicio agrario se admitió la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa en su escrito de veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, también lo es que en acuerdo dictado en la audiencia celebrada el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y siete, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Séptimo (sic), declaró desierta dicha probanza, por lo que el Tribunal Superior Agrario, legalmente encontraba impedido para valorar la misma al dictar la resolución reclamada.

En cambio, resulta fundado el argumento que sostiene el quejoso en el sentido de que la sentencia reclamada es violatoria de garantías, porque en ella el Tribunal Superior Agrario omite valorar las pruebas documentales, presuncional y de inspección ocular que ofreció por escrito presentado el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete y los alegatos que formuló en el mismo escrito.

En efecto, como ha quedado precisado, mediante escrito presentado el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, ante el Tribunal Superior Agrario, el quejoso ofreció como pruebas de su parte, entre otras, las documentales, la presuncional y la inspección ocular que se detallan en el propio escrito, mismas que fueron admitidas por el magistrado instructor de ese Tribunal, mediante acuerdo de siete de mayo del mismo año, habiéndose desahogado las primeras por su propia naturales y la última mediante inspección llevada a cabo el diez de julio de mil novecientos noventa y siete, por el Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Séptimo (sic), así como también expresó los alegatos que a su derecho convino, los cuales se tuvieron por formulados mediante el citado acuerdo de siete de mayo de mil novecientos noventa y siete; como se desprende de las constancias que se han transcrito anteriormente.

Ahora bien, de la resolución reclamada, cuya parte considerativa se transcribió en el considerando quinto de esta ejecutoria, se advierte que el Tribunal Superior Agrario, no hizo pronunciamiento alguno en relación con las mencionadas pruebas, excepción hecha del acta de inspección ocular realizada por los ingenieros Crispín Cortés y Efraín Camacho Marín, de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta, para concluir que era procedente la ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado denominado 'La Capilla', Municipio de el Fuerte, Estado de Sinaloa, así como tampoco tomó en consideración los alegatos formulados por el ahora quejoso; por lo que debe concluirse que con tal proceder, el Tribunal responsable lo dejó en estado de indefensión, toda vez que resuelve sin considerar los medios de defensa que ofreció en el expediente agrario que culminó con la resolución reclamada.

En este orden de ideas, debe decirse que la resolución reclamada es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales y, por ende, lo procedente es otorgar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Tribunal responsable, dejando insubsistente la resolución que se reclama, únicamente por lo que se refiere al predio que defiende, en su lugar dicte otra en la que se valore conforme a derecho proceda, las pruebas que ofreció y que le fueron admitidas y desahogadas en el juicio agrario respectivo, así como los alegatos por él formulados y, con plena jurisdicción en ese aspecto, resuelva lo que en derecho proceda, sin dejar de observar lo dispuesto en el artículo 189, de la Ley Agraria.

Atenta la conclusión alcanzada resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos hechos valer en los conceptos de violación, de conformidad con la tesis jurisprudencial número tres, publicada en la página ocho, segunda parte, del informe laboral de mil novecientos ochenta y dos, que a la letra dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.- Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo, resulta fundado uno de estos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja...".

TERCERO. Por acuerdo de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho el Tribunal Superior Agrario en cumplimiento a la ejecutoria de referencia declaró parcialmente insubsistente la sentencia de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, emitida por este órgano jurisdiccional en los autos del juicio agrario número 49/97, correspondiente al expediente administrativo agrario número 742, instaurado con motivo de la solicitud de ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos radicados en el poblado "La Capilla", Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa únicamente respecto de las 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) del predio "Lomas de Sivirijoa" o "Minas" propiedad del quejoso y se ordenó su turno al Magistrado Ponente a fin de que elaborara el proyecto de nueva sentencia.

CUARTO. De las constancias de autos, que a continuación se analizan, se conoce lo siguiente:

"Por Resolución Presidencial de dos de junio de mil novecientos treinta y cuatro, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el dieciséis de octubre del mismo año, se concedió al poblado que nos ocupa, por concepto de dotación de tierras una superficie de 512-00-00 (quinientas doce hectáreas) de

agostadero, para beneficiar a treinta y seis campesinos capacitados; habiéndose ejecutado dicha resolución el primero de mayo de mil novecientos treinta y cinco.

-Por escrito de diecinueve de marzo de mil novecientos treinta y ocho, un grupo de campesinos del poblado de referencia, solicitó al Gobernador del Estado de Sinaloa, ampliación de ejido para satisfacer sus necesidades agrarias.

-La Comisión Agraria Mixta instauró el procedimiento el once de abril de mil novecientos treinta y ocho, registrándolo bajo el número 742, la solicitud se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Sinaloa, el diecinueve de abril de mil novecientos treinta y ocho.

-Fue comisionado Enrique Ramírez A., para que investigara el aprovechamiento de los terrenos ejidales, quien rindió su informe el diecisiete de noviembre del mismo año, del cual se conoce que los terrenos ejidales, los explotan los ejidatarios.

-El topógrafo Domingo Sepúlveda, levantó el censo general y agropecuario del poblado que nos ocupa, quien rindió su informe el cuatro de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, en el que señala que existen veintitrés campesinos capacitados.

-La Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen el veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, negando la ampliación de ejido por no haber terrenos afectables dentro del radio legal.

-El Gobernador del Estado de Sinaloa, emitió su mandamiento el dos de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, confirmando en todas sus partes el dictamen emitido por la Comisión Agraria Mixta.

-La Delegación Agraria en el Estado formuló su resumen y opinión el dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, confirmando el mandamiento del Gobernador.

-Por oficios números 4074 y 4080, de ocho de septiembre de mil novecientos ochenta, se comisionó a Crispín Pérez Cortés y Efraín Camacho Marín, para llevar a cabo trabajos de investigación con base en el artículo 210 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria, quienes rindieron su informe el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, del que se conoce que investigaron seis fracciones del predio denominado "Las Minas", con superficies de 100-00-00 (cien hectáreas); 100-00-00 (cien hectáreas); 60-00-00 (sesenta hectáreas); 100-00-00 (cien hectáreas); 100-00-00 (cien hectáreas) y 100-00-00 (cien hectáreas) propiedad de María Antonia Ceballos Berrellaza, María Berrellaza Cota, Matías Ceballos Berrellaza, Armando Ceballos Berrellaza, Ignacio Ceballos Berrellaza y Silvia Ceballos Berrellaza, mismos que forman unidad topográfica y las operaciones de éstos, son realizadas por María Berrellaza Cota; tres predios denominados "Las Minas" de 100-00-00 (cien hectáreas) cada una propiedad de Ramiro Ceballos Moreno, Gloria Ofelia Ceballos Moreno de Sánchez y Ernesto Ceballos Moreno, que no forman unidad topográfica y están usufructuados por sus propietarios, además de no rebasar la pequeña propiedad; y el último predio que estudian es el siguiente: "...10.- Predio 'LAS MINAS'.- Este predio propiedad del C. JUAN CEBALLOS MORENO, delimitado por lienzo de alambre en todo su perímetro colindando por el Norte con Matías Ceballos Berrelleza; al Sur con Mercedes Gaxiola; al Este con Jesús Vega y Víctor Ruiz y al Oeste con Ernesto Ceballos Moreno, encerrando su perímetro una superficie de 50-00-00 Has., clasificadas en la siguientes forma: un 10% de agostadero de buena calidad y un 90% de agostadero de mala calidad. En todo su recorrido no se encontró nada de explotación...".

Los trabajos antes citados fueron revisados jurídicamente por la licenciada Lidia Mercedes Núñez Luna adscrita a la Dirección General de Procuración, Quejas e Investigación Agraria, quien el cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y tres, opina que no es procedente instaurar el procedimiento de nulidad de fraccionamientos de predios afectables por actos de simulación por no configurarse lo establecido en el artículo 210 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria y que las 300-00-00 (trescientas hectáreas) propiedad de Mercedes Gaxiola están en posesión del poblado "El Aliso". El análisis técnico, sin fecha practicada por el licenciado Luis Zamora Contreras contiene los mismos datos de la anterior, solamente agrega que el coeficiente de agostadero para el municipio de El Fuerte en Sinaloa, es 10.1 hectáreas por unidad animal.

-El veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, el Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó acuerdo ordenando el inicio del procedimiento de nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación en contra de María Antonia Ceballos Berrellaza, María Berrellaza Cota, Matías Ceballos Berrellaza, Armando Ceballos Berrellaza, Ignacio Ceballos Berrellaza y Silvia Ceballos Berrellaza, propietarios de seis fracciones del predio "Las Minas" y se investiguen exhaustivamente los predios "Las Minas" propiedad de Juan Ceballos Moreno y el innominado, propiedad de Mercedes Gaxiola.

-Por oficio VI/26233, de cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, la Delegación Agraria en el Estado de Sinaloa, ordenó al ingeniero José María Espinoza Alvarez, la práctica de trabajos técnicos e informativos, quien rindió su informe el dieciocho de abril del mismo año, al que acompañó acta de inspección de los predios investigados el diez de abril del mismo año, del cual se conoce que notificó personalmente el cinco y ocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco, a los propietarios de los predios a investigar.

En relación al predio "Las Minas" con superficie de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) de agostadero, propiedad de Juan Ceballos Moreno; dicho predio si bien es cierto se encontró delimitado también lo es que se halló en completo estado de abandono por más de cinco años, destacando que, dentro de esta superficie se encuentra el panteón municipal del ejido que aproximadamente es de 1-00-00 (una hectárea).

Con respecto al predio propiedad de Mercedes Gaxiola, con superficie de 300-00-00 (trescientas hectáreas) de agostadero, éste se encuentra en posesión del poblado que nos ocupa, desde hace más de cinco años y lo explotan colectivamente en forma ganadera y no como se decía en investigaciones anteriores "en posesión del ejido El Alizo". El Registro Público de la Propiedad y la Oficina de Catastro del Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa, le informó que no se encuentra registrado ningún bien a nombre de Juan Ceballos Moreno y Mercedes Gaxiola viuda de Vega, el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

-Por acuerdo de veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Sinaloa el dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, se inició el Procedimiento de Nulidad de Fraccionamientos de Propiedades Afectables por Actos de Simulación, señalando que María Berrellaza Cota y/o Matías Ceballos Ríos, concentra provechos y acumula beneficios provenientes de la explotación de los predios rústicos propiedad de María Antonia Ceballos Berrellaza, María Berrellaza Cota, Matías Ceballos Berrellaza, Armando Ceballos Berrellaza, Ignacio Ceballos Berrellaza y Silvia Ceballos Berrellaza, por lo que se presume que existe simulación, configurándose lo señalado en el artículo 210 fracción III, de la Ley Federal de Reforma Agraria, tales propietarios presentaron pruebas y alegatos en este procedimiento incidental.

-El dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, la Dirección General de Procuración Social Agraria, emitió su dictamen señalando procedente la nulidad del fraccionamiento constituido por los predios rústicos denominados "Fracción Las Minas", propiedad de María Antonia Ceballos Berrellaza, María Berrellaza Cota, Matías Ceballos Berrellaza, Armando Ceballos Berrellaza, Ignacio Ceballos Berrellaza y Silvia Ceballos Berrellaza, respectivamente, que en conjunto suman 560-00-00 (quinientas sesenta hectáreas) cuyos beneficios provenientes de su explotación, incrementan particularmente el patrimonio de María Berrellaza Cota.

-La Delegación Agraria en el Estado de Sinaloa, comisionó al ingeniero Octavio Rendón Juárez, con el fin de que hiciera la localización y clasificación de la calidad de la tierra del lote de terreno con superficie de 560-00-00 (quinientas sesenta hectáreas), propiedad de María Antonia Ceballos Berrellaza, María Berrellaza Cota, Matías Ceballos Berrellaza, Armando Ceballos Berrellaza, Ignacio Ceballos Berrellaza y Silvia Ceballos Berrellaza; quien rindió su informe el once de septiembre de mil novecientos noventa, en el que señala resulta una superficie total de 578-84-08 (quinientas setenta y ocho hectáreas, ochenta y cuatro áreas, ocho centiáreas) que se divide en siete polígonos, con las siguientes superficies analíticas: polígono I, 18-24-93 (dieciocho hectáreas, veinticuatro áreas, noventa y tres centiáreas) de riego; polígono 2, 9-95-81 (nueve hectáreas, noventa y cinco áreas, ochenta y una centiáreas) de agostadero; polígono 3, 20-83-55 (veinte hectáreas, ochenta y tres áreas, cincuenta y cinco centiáreas) agostadero susceptible de cultivo temporal; polígono 4, 153-67-81 (ciento cincuenta y tres hectáreas, sesenta y siete áreas, ochenta y una centiáreas) agostadero; polígono 5, 26-84-87 (veintiséis hectáreas, ochenta y cuatro áreas, ochenta y siete centiáreas) de agostadero susceptible al temporal; polígono 6, 238-88-45 (doscientas treinta y ocho hectáreas, ochenta y ocho áreas, cuarenta y cinco centiáreas) de agostadero y polígono 7, 110-38-66 (ciento diez hectáreas, treinta y ocho áreas, sesenta y seis centiáreas) de agostadero susceptible al temporal.

-En sesión de pleno de cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, el Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó dictamen negativo sobre la nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación relativo al predio denominado "Las Minas", del Municipio de El Fuerte, Sinaloa.

-Mediante oficio número 61158, de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y dos, la Delegación Agraria, ordenó al ingeniero Leopoldo Leal Bojórquez, la investigación exhaustiva de los predios propiedad de Juan Ceballos Moreno y Mercedes Gaxiola, con superficies de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) y 300-00-00 (trescientas hectáreas), quien rindió su informe el veinticuatro de noviembre del mismo año, del cual se conoce que a Mercedes Gaxiola, falleció, por lo que notificó personalmente a su hijo Jesús Vega Gaxiola, el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos y, el cuatro de noviembre del mismo año notificó a Juan Ceballos Moreno, por conducto de su esposa y hecho lo anterior, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, llevó a cabo una inspección ocular en el terreno propiedad de Mercedes Gaxiola, con superficie de 300-00-00 (trescientas hectáreas), de agostadero cerril susceptibles de cultivo al temporal, ubicado en el predio "Lomas de Sivirijoa", o "Minas", sindicatura de San Blas, del Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, en donde pudo constatar que dicho terreno está inexplotado por más de veinte años consecutivos, y levantó acta de inspección ocular en el predio propiedad de Juan Ceballos Caro, con superficie de 50-00-00 (cincuenta hectáreas), ubicado

en el predio de "Lomas de Sivirijoa", o "Minas", sindicatura de San Blas, del Municipio de El Fuerte, del Estado de Sinaloa con calidad de la tierra de agostadero cerril susceptible de cultivo de temporal, mismo que está cercado con hilo de alambre de púas pero sin explotar. El Registro Público de la Propiedad del Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, el diez de noviembre del mismo año, informó que esta persona tiene registrada una finca rústica con superficie de 26-00-00 (veintiséis hectáreas), bajo el número 67, del Libro número 52, de la sección primera, el tres de enero de mil novecientos setenta y cinco.

El Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Estado de Sinaloa, el tres de agosto de mil novecientos noventa y tres, informó a la comisionada de la Delegación Agraria ingeniero María Eugenia Cruz Pazos que, Jesús Vega Gaxiola tiene registrado el predio "El Metate", con 83-04-93 (ochenta y tres hectáreas, cuatro áreas, noventa y tres centiáreas), que adquirió mediante escritura pública número 1,625, volumen VIII, de veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, inscrita bajo el número 13, del libro número 42 Bis, de la Sección I, de veintiséis de noviembre del mismo año; y se encuentra enclavada dentro del ejido "Balacachi", del mismo municipio y estado, el cual cuenta con Resolución Presidencial dotatoria de cinco de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, y el Director de Catastro de Culiacán, Estado de Sinaloa, el diez de septiembre de mil novecientos noventa y tres, informó que en los padrones cartográficos, dicha superficie no se encuentra a nombre de persona alguna.

El Cuerpo Consultivo Agrario el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, emitió dictamen positivo, proponiendo conceder al poblado en cita, por concepto de ampliación de ejido, 326-00-00 (trescientas veintiséis hectáreas) de agostadero.

-Por oficio VI/63320 de seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, la Delegación Agraria en Sinaloa comisionó a la ingeniero María Eugenia Cruz Pazos a efecto de que notifique debidamente a Juan Ceballos Caro y se recabe información del Registro Público de la Propiedad, respecto de las 26-00-00 (veintiséis hectáreas) presunta propiedad de Juan Ceballos Caro; comisionado que informó el ocho de diciembre del mismo año, que en tales oficinas Registrales tienen registrado un predio que contaba con 51-00-00 (cincuenta y una hectáreas) de las cuales 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) vendió a Víctor Manuel Amador Ibarra según inscripción 178 del libro 62, Sección I del ocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro y, 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) vendió a Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez según inscripción 153 del libro 76, Sección I de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; además de que las oficinas Catastrales de Sinaloa informaron el quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que no obran antecedente de esos predios según sus padrones cartográficos; por otro lado, respecto del predio "Las Minas" de 300-00-00 (trescientas hectáreas), no cuenta con datos; por último informa que no pudo localizar a Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez causahabiente de Juan Ceballos Caro por lo que la notificación se fijó por estrados y levantó acta circunstanciada en la que hace constar que no localizó casco de la finca; no obstante lo anterior éste presentó ante la Delegación Agraria alegatos el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro en los que señala que es propietario de un predio de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) dedicadas a la ganadería y ofreció como pruebas: copia certificada de la escritura 6412, por medio de la cual adquirió el predio de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) de que se trata, constancias del fierro de herrar a su nombre así como un plano del predio.

-Por acuerdo del Cuerpo Consultivo Agrario de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, se ordenó notificar personalmente a Mercedes Gaxiola o a su sucesión, respecto del predio "Lomas de Sivirijoa" o "Minas", y en cumplimiento al mismo, se publicaron edictos en el periódico "La prensa" los días dieciséis, veintitrés y treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco y en el **Diario Oficial de la Federación** el veintitrés y treinta de enero así como el seis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

QUINTO.- Por auto de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete, se tuvo por radicado en este Tribunal Superior Agrario, el expediente relativo a la solicitud de ampliación de ejido promovido por el núcleo agrario denominado "La Capilla", ubicado en el Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa, el cual se registró con el número 049/97; se notificó a los interesados y se comunicó a la Procuraduría Agraria para los efectos a que haya lugar.

SEXTO.- Por escrito de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y siete, recibido en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior Agrario Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, primeramente ofrece pruebas y alegatos que son del tenor siguiente:

ALEGATOS:

El poblado en estudio no satisface los extremos del artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria al no tener en explotación los terrenos concedidos en dotación; no reúnen los requisitos de los artículos 197, 198 y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, es decir no tienen capacidad individual y colectiva para solicitar la ampliación de su ejido; dentro del radio legal del núcleo gestor no existen terrenos afectables; los predios de su propiedad son dedicados a la explotación ganadera y han sido respetados en sentencias del Tribunal Superior Agrario, como la pronunciada en el juicio agrario número 1071/93 además de que debe considerarse el coeficiente de agostadero ponderado en la región.

PRUEBAS:

1) Fotocopia del escrito de dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y siete, por medio del cual Gloria Ofelia Ceballos de Sánchez y Ramiro Jaime Ceballos Moreno presentaron alegatos ante la Dirección General de Inspección, Procuración y Quejas de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el expediente de ampliación de ejido al poblado en estudio, en el que señalan las características de sus predios.

2) Fotocopia del memorándum de ocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete, por medio de la Dirección General de Inspección, Procuración y Quejas remite al Consejero Agrario por Sinaloa que los alegatos citados en el párrafo anterior.

3) Fotocopia del acta de inspección ocular de veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta practicada por los comisionados Efraín Camargo Marín y Crispín Pérez Cortés, comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria, en los predios "Lomas de Sivirijoa o las Minas".

4) Copia certificada de la escritura pública 5007 del quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro que ampara la finca rústica número 5,187 con superficie según escrituras de 100-00-00 (cien hectáreas) y según levantamiento topográfico, 106-75-88 (ciento seis hectáreas, setenta y cinco áreas, ochenta y ocho centiáreas) por medio de la cual Ramiro Jaime Ceballos Moreno vende a Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez el citado predio, la cual quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte,

Sinaloa con el número 30, Libro 78, Sección I el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

5) Documental consistente en planos de los predios Lomas de Sivirijoa o Minas con 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) y de un predio innominado con 106-75-88 (ciento seis hectáreas, setenta y cinco áreas, ochenta y ocho centiáreas) propiedad del oferente.

6) Copias certificadas del recibo predial de mil novecientos noventa y seis y de consumo de energía de mil novecientos noventa y siete.

7) Documentales públicas consistentes en diez fotocopias certificadas de factura a nombre del oferente, que amparan la compra de diversos insumos.

8) Fotocopia del recibo del pago de impuestos de la finca rústica 5,187 del tercero y cuarto trimestre de mil novecientos setenta y seis y primero y segundo de mil novecientos noventa y siete a nombre de Ramiro Jaime Ceballos Moreno.

9) Copia simple de la constancia expedida por la Asociación Ganadera Local del Fuerte, Sinaloa de veinticinco de junio de mil novecientos setenta y seis en la que se hace constar que Ramiro Jaime Ceballos Moreno es miembro de la misma.

10) Copias certificadas de las constancias de la Presidencia Municipal de El Fuerte, Sinaloa, por medio de las cuales hace constar que Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez es propietario de una finca rústica con número 5,187 predio "Lomas de Sivirijoa" o "Minas" con superficie registral de 106-75-88 (ciento seis hectáreas, setenta y cinco áreas, ochenta y ocho centiáreas) así como de una finca rústica número 3232 o 5196 con superficie de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas).

11) Escritura pública 6412 de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro que ampara la finca 3232 o 5196 con superficie de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) que vende Juan Ceballos Cano a Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez la cual quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte Sinaloa, con el número 153, libro 76 sección I de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

12) Historia registral de catorce de abril de mil novecientos noventa y siete del predio de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) propiedad de Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, expedido por el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Sinaloa.

13) Trabajos de notificación a Juan Ceballos Caro y su causahabiente Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez de seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro para los efectos de que ofreciera pruebas y alegatos.

14) Fotocopia del escrito de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro por medio del que el amparista ofrece pruebas y alegatos ante la Delegación Agraria en defensa del predio de su propiedad de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas).

15). Veintidós fotografías certificadas tomadas el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, en los terrenos de 106-75-88 (ciento seis hectáreas, setenta y cinco áreas, ochenta y ocho centiáreas) y del de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas).

16) En constancia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sin fecha respecto al coeficiente de agostadero de 9.80 hectáreas por unidad animal en los predios "Lomas de Sivirijoa" que cuentan con 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) y 106-75-88 (ciento seis hectáreas, setenta y cinco áreas, ochenta y ocho centiáreas).

17) Copia certificada del avalúo practicado el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en la finca rústica 5,187 con superficie catastral de 100-00-00 (cien hectáreas).

Así como las pruebas testimoniales, inspección ocular y presuncional.

SEPTIMO. En proveído de siete de mayo de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal Superior Agrario tiene por ofrecidas y admitidas las pruebas ofrecidas por abril del mismo año, que se hacen consistir en: presuncional y documentales mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y respecto de la testimonial e inspección ocular, se admiten correspondiendo al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, el desahogo de las mismas.

La inspección ocular, se practicó el diez de julio de mil novecientos noventa y siete en la que el comisionado, actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27 señaló que: "...nos constituimos en el lote de terreno de 25-00-00 hectáreas aproximadamente, el cual se localiza de la manera siguiente: Al Norte con terreno de Matías Ceballos; al Sur con terreno de Juan Ceballos; al Oriente con camino vecinal de bocatema a carretera El Carrito al Fuerte y por el Poniente con terreno de Ernesto Ceballos, haciendo constar la existencia de: un corral con 3 bebederos de ganado, una pila de agua, una vaca con una cría, una mula, 3 ganados caballar, 100 cabezas de ganado vacuno aproximadamente, dos casa-habitación debidamente delimitado con palos o postes con alambre de púas, y el cual se encuentra debidamente comprendido en el lote de referencia, dos bombas de capacidad de dos pulgadas y de una y media continuamente el C. Oscar Vega Gaxiola en el carácter antes mencionado manifiesta: Que la posesión del C. Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, es de aproximadamente de 3 años, que por lo subsecuente el desmonte y las mejoras que se le han hecho al terreno son recientes... y en relación a la prueba testimonial, en el acta de la audiencia de dieciséis de julio del mismo año, celebrada en el Unitario de referencia, se hizo constar la inasistencia de Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, oferente de la prueba, asistiendo una hora después y presentado en un escrito en el que solicita una prórroga para presentar sus testigos, a lo cual no se acordó favorablemente y se declaró desierta tal probanza testimonial; la documentación que integra tales actuaciones fue recibida en este Organo Jurisdiccional el quince de agosto de mil novecientos noventa y siete.

OCTAVO. El diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal escrito de Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez que ocurre al procedimiento alegando lo siguiente: cita el amparo 1675/98 del que su ejecutoria lo ampara y protege y manifiesta que su predio de 25-00-00 hectáreas constituye una auténtica pequeña propiedad de origen en explotación agropecuaria con un coeficiente de agostadero de 9.80 hectáreas por unidad animal y no se justifica su afectación basándose en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria además de que con base en la falta de interés del grupo solicitante el veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, se emitió dictamen negativo y el dos de junio del mismo año el Gobernador confirmó tal negativa por no existir fincas afectables y argumenta que fue notificado ni el anterior propietario Juan Ceballos Cano ni el amparista para la práctica de los trabajos técnicos informativos en que los comisionados señalaron que estaba inexplotado tal predio y ofrece como pruebas:

1.- Fotocopia de su escrito de pruebas y alegatos de veintiuno de abril de mil novecientos setenta y siete.

2.- Copia certificada del estudio de los coeficientes de agostadero en el predio "Lomas de Sivirijoa", o "Minas" propiedad del oferente por el que se establece el coeficiente de agostadero ponderado de 9.80 hectáreas por unidad animal, realizado el seis de mayo de mil novecientos noventa y siete por el Jefe de la Unidad COTECOCA ingeniero Raúl Villalobos Gaxiola perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

3.- Constancia de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete expedida por la Asociación Ganadera Local del Fuerte en la que señala que Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez es miembro activo de la misma y se dedica a la Ganadería, teniendo ciento diez cabezas de ganado que pastorean en 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) en el predio "Lomas de Sivirijoa".

4.- Copia certificada de la factura de veintidós de octubre de mil novecientos setenta y siete de la Asociación Ganadera Local del Fuerte que acredita pago de derechos en ese año de ochenta cabezas de ganado ni que el ganado adquirido por el propietario haya sido llevado al referido predio para su explotación.

5.- Copia simple del plano del predio "Lomas de Sivirijoa" o "Las Minas".

6.- Ocho copias certificadas de fotografías tomadas en el predio "Lomas de Sivirijoa" o "Las Minas" tomadas el diez de octubre de mil novecientos noventa y siete, en las que se observan diferentes lugares del predio en cuestión.

7.- La presuncional legal y humana en todo lo que favorezca el interés del promovente.

NOVENO. El tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por acuerdo de Magistratura y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo número D.A. 1675/98 se ordena notificar al amparista Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, que los autos del juicio agrario 49/97 los tiene a la vista

por un término de diez días a partir de la notificación conforme al artículo 297 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles a fin de que formulare alegatos en defensa de sus intereses, con el fin de respetarle la garantía de audiencia que señalan los artículos 14, 16 y 27 constitucionales.

La notificación citada fue practicada el veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve en los términos de lo dispuesto por los artículos 309 y 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Conforme a lo anterior Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, presenta pruebas y formula alegatos, el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, fecha comprendida dentro del término concedido por este órgano jurisdiccional que corrió del veintiocho de abril al doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, solicitando se tomen en consideración las pruebas y alegatos formulados el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete y doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, además de que:

"I.- Como está evidenciado, demostrado con certificado del Registro Público, Certificado de Coeficiente de Agostadero y demás probanzas que resulta de autos que la superficie de 25-50-00 Has. constituye una pequeña propiedad de origen desde el año de 1926, conforme a lo dispuesto por los artículos 66 y 105 del Código Agrario de 1942, artículos 249, 250, 251, 252, 259, 260 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como también los artículos 116, 117, 120, 121 y aplicables de la Ley Federal vigente, porque tiene el carácter de inafectable por disposición de la Ley mediante declaratoria por virtud de que fue respetada en la diversas acciones agrarias que culminaron con Resolución Presidencial del Ejecutivo de la Unión en los casos de los núcleos ejidales denominados 'El Rincón', 'Mulanjey', 'Sivirijoa', 'Las Chunas', 'Buenos Aires', 'Bateve', 'Tehueco', 'Las Estacas', 'Jecolua', 'El Aliso', del citado Municipio, en especial las de estos tres últimos, que conoció y resolvió negativamente ese H. Tribunal Superior Agrario, por tanto solicitó sea excluida de afectación mediante sentencia que al efecto se dicte conforme a lo dispuesto por el artículo 27 constitucional y jurisprudencia definitiva de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe...

II. Es preciso indicar que todas y cada una de las investigaciones, diligencias y actuaciones que presuntamente se practicaron por los ingenieros comisionados CC. Ings. Crispín Pérez Cortés y Efraín Camacho, José María Espinoza Alvarez e Ing. Leopoldo Leal Bojórquez en diversas fechas durante el trámite del procedimiento administrativo según expediente número 742, éstas fueron llevadas a cabo a espaldas de Juan Ceballos Caro, así como del Sr. Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez y constituyen desde luego pruebas de carácter unilateral, toda vez que en su desahogo no participó el propietario de las 25-50-00 Has. del predio Minas motivo de la presente defensa, se asiente lo dicho por los solicitantes de tierras en vía de ampliación de ejido 'La Capilla', la autoridad municipal y lo que de mala fe los comisionados hayan querido establecer en forma arbitraria y tendenciosa, señalando que se encontraba inexplotado el terreno, solamente pretendieron notificar al presunto afectado el 4 de noviembre de 1992 SIN QUE EXISTA CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL por la circunstancia de que no compareció al procedimiento según esa autoridad confirma que el propietario abandonó dicha superficie y que no la explota, de ahí toma como base para fincar afectación en término del artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, pasando por alto las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria y ese Tribunal Superior Agrario de que en base al citado dispositivo se encontraba ante la presencia de una auténtica pequeña propiedad ganadera inafectable por virtud de la declaratoria de inafectabilidad presidencial desde el año 1938 cuando se dotó de ejido al poblado 'El Aliso', a través del cual se efectuó un estudio general para resolver íntegramente el problema agrario de la región de Ahome-El Fuerte del Estado de Sinaloa, por otra parte no deben dar base dichas actuaciones, diligencias, trabajos de campo para afectar la superficie que constituye la finca rústica 3232 con superficie de 25-50-00 Has. del predio Minas, porque no constituyen actas de inexplotación debidamente requisitadas y certificadas, que cumplan con los lineamientos que ordenaba el Pleno del Cuerpo Consultivo Agrario para acreditar la causal de afectación por motivo de inexplotación que señaló en la fracción II del punto 3 Capítulo de antecedentes.

III. A mayor abundamiento, suponiendo que dichos documentos (informes, diligencias, trabajos de comisionados) específicamente las actas de investigación se hubiesen llevado a cabo en el predio de Juan Ceballos Caro y/o Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, tales investigaciones carecen de eficacia probatoria plena para acreditar los supuestos del artículo 251 del ordenamiento antes dictado, en atención de que dichas investigaciones tienen las mismas características que las actas levantadas con motivo de VISITAS DOMICILIARIAS y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado jurisprudencia respecto de que dichos actos de autoridad carecen de validez cuando no se reúnen los requisitos consagrados en la parte final del artículo 16 Constitucional...

IV.- Por constituir prueba documental pública con valor pleno de acuerdo al segundo párrafo del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Agraria, se adjuntó oportunamente el CERTIFICADO DE COEFICIENTE DE AGOSTADERO DE LA SUPERFICIE DE 25-20-00 Has. le corresponde el coeficiente de 9.80 HA/U.A./AÑO, en él se establecen generalidades, tales como ubicación, vegetación matorral arborecente; el tipo vegetativo fue eliminado para incorporarlo a CULTIVOS FORRAJEROS Y PRADERAS PERENNES, las observaciones que se hacen es respecto al cerco perimetral completo, con buenas vías

de comunicación, con infraestructura pecuaria como corral de manejo, bebedero y línea de conducción de agua al bebedero, se combina con las praderas las leguminosas para el mejor aprovechamiento en la productividad pecuaria conecta con explotación de doble propósito dentro del rancho con pastoreo semiextensivo y en las épocas de estiaje es apoyado en la molienda de esquilmos mediante utilización de un molino para pajas, expedido por el Jefe de COTECOCA, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Delegación Sinaloa, dicha probanza solicitó sea analizada, estudiada y valorada conforme a Derecho, lo mismo que las documentales públicas privadas, fotografías, inspección ocular, presuncional en su doble aspecto, instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca el interés jurídico del pequeño propietario y en lo que hace las 25-50-00 Has. del predio Minas, El Fuerte, Sinaloa, también oportunamente rendidas...".

Y ofrece como pruebas: documentales y fotografías respecto de la finca 3232 con superficie de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) con las que demuestra explotación, construcciones, ganado, cultivos y delimitaciones del mismo, alegatos de veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete y diecisiete de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como la inspección ocular de diez de julio de mil novecientos noventa y siete llevada a cabo en el predio "Las Minas" propiedad del oferente, así como:

1.- Copia certificada del informe del Registro Público de la Propiedad El Fuerte, Sinaloa, del catorce de abril de mil novecientos noventa y siete respecto del predio de 25-50-00 hectáreas de su propiedad.

2.- Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa de quince de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, que contiene la Resolución Presidencial de veintiuno de septiembre de mil novecientos treinta y ocho relativa a la dotación de tierras al poblado "Los Alisos", El Fuerte, Sinaloa, así como de la sentencia pronunciada en el juicio agrario 1071/93 pronunciada en el expediente de ampliación de ejidos al mismo poblado, ya que en ambas se respeta su predio.

3.- Copia certificada de la cédula común notificatoria de dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y ocho en el expediente del poblado Jesolula, El Fuerte, Sinaloa, en la que aparece Juan Ceballos Caro causante directo de Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez.

4.- Copia certificada del escrito de pruebas y alegatos de diversos propietarios dentro de los que, se encuentran los anteriores propietarios de los predios propiedad de Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez recibido por la Comisión Agraria Mixta en Culiacán, Sinaloa, el dos de julio de mil novecientos ochenta y ocho, en el expediente del poblado Jesolula.

5.- Copia certificada de la sentencia de ocho de junio de mil novecientos noventa y tres del juicio agrario 349/93 en que se niega la ampliación de ejido al poblado Jesolua por falta de fincas afectables.

6.- Copia certificada del oficio de siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, dirigido a la Asociación de Propietarios Rurales del Norte del Estado de Sinaloa en que se comunican criterios de valoración de pruebas del Cuerpo Consultivo Agrario relativo al nuevo centro de población ejidal Benito Juárez, El Fuerte, Sinaloa; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que concede amparo tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en ese sentido, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo número D.A. 1675/98, interpuesto por Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, en contra de la sentencia emitida por este Tribunal Superior Agrario el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete en los autos del juicio agrario 49/97, este Organo Colegiado por acuerdo de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho declaró parcialmente insubsistente la sentencia antes citada únicamente por lo que se refiere al predio propiedad del quejoso.

TERCERO. Resulta relevante para clarificar la controversia que nos ocupa, señalar que el amparista es propietario de dos predios, lo cual se comprueba con las constancias que obran en autos, así como con las escritura se exhibió, mismas que se detallan a continuación:

1) Escritura pública 5007 de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que ampara de la finca rústica número 5,187 con 100-00-00 (cien hectáreas), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Sonora, con el número 30, libro 78, sección I el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

2) Escritura pública 6412 de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, que ampara la finca número 3,232 o 5196 con 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas), inscrita en el Registro

Público de la Propiedad de El Fuerte, Sinaloa, con el número 153, libro 76, sección I el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

Ahora bien, de los antecedentes reseñados se tiene que la sentencia emitida el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y siete, este Tribunal Superior Agrario en cumplimiento de la citada ejecutoria, la declaró parcialmente insubsistente, únicamente en lo referente al predio propiedad del quejoso; respecto del que cuenta con 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) denominado "Sivirijoa" o "Minas", sin que sea trascendente ocuparnos del otro predio propiedad del quejoso por no haber sido afectados por la sentencia impugnada.

CUARTO. La historia registral del predio en análisis es el siguiente:

Por escritura privada de veintitrés de agosto de mil novecientos veintiséis, la cual fue inscrita bajo los números 65 y 64 del libro 3, bis el tres de septiembre de mil novecientos veintiséis, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de El Fuerte, Sinaloa, Dolores Vega López, vendió a Susana Vega Gaxiola.

Por escritura pública número 1,009, volumen VII, de ocho de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Sinaloa, bajo el número 68 del libro número 42, sección I, de veinte de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, Susana Vega Gaxiola vendió a Argelia Vega Gaxiola y Guadalupe Gaxiola Vega.

Por escritura pública número 787, volumen IV de nueve de mayo de mil novecientos setenta, inscrita con el número 31 del libro 49 de la sección I del veinte de febrero de mil novecientos setenta y uno en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Sinaloa, Federico Miett Gaxiola, adquirió el predio de que se trata en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Argelia Gaxiola Vega.

Por escritura pública número 1,595, volumen VII de ocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro e inscrita con el número 67 del libro 52 de la sección I del tres de enero de mil novecientos setenta y cinco en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Sinaloa, Federico Miett Gaxiola vendió a Juan Ceballos Caro e Hilda Mendivil de Ceballos.

Según inscripción 178 del libro 62 sección II de ocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, realizada en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Sinaloa, se tiene que Juan Ceballos Caro, vende a Víctor Manuel Amador Ibarra una fracción de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas).

Y por escritura pública número 6,412, volumen 24 de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Sinaloa, con el número 153, del libro 76, sección I de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Juan Ceballos Caro vendió las otras 25-80-00 (veinticinco hectáreas, ochenta áreas) que integraban el predio de que se trata a Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, actual propietario y amparista.

QUINTO. En los trabajos técnicos e practicados por Crispín Pérez Cortés y Efraín Camacho Marín, cuyo informe es de ocho de septiembre de mil novecientos ochenta, fue en los primeros trabajos en los cuales se señaló que el predio propiedad de Juan Ceballos Caro, denominado "Lomas de Sivirijoa" o "Minas" con superficie de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) de agostadero, con un 10% de mala calidad, los comisionados lo encontraron delimitado, pero totalmente inexplotado; presupuesto que de nueva cuenta expresa José María Espinoza Alvarez en su informe de dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco con la observación de que en 1-00-00 (una hectárea) se ubica el panteón del ejido "La Capilla"; el ingeniero Leopoldo Leal Bojórquez, comisionado de la Delegación Agraria en su informe de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, asentó que de la inspección al predio, llegó al conocimiento que la calidad de tierras del predio es de agostadero cerril susceptible de cultivo al temporal, cercado con hilo de alambre de púas, en "posesión" de Juan Ceballos Caro, pero sin explotar y aclara que el Registro Público de la Propiedad correspondiente le informó que tal propietario únicamente tiene registradas a su nombre 26-00-00 (veintiséis hectáreas), según inscripción 57 libro 52 sección I de tres de enero de mil novecientos setenta y cinco; por último la ingeniero María Eugenia Cruz Pazos, comisionada para notificar a este propietario, así como para obtener antecedentes registrales del predio en análisis, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro informó que esta persona no tiene registrada a su nombre ninguna propiedad, ya que el predio de 50-00-00 (cincuenta hectáreas) "Lomas de Sivirijoa" o "Minas", lo vendió de la siguiente forma: 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) a Víctor Manuel Amador Ibarra y 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) a Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez y que esta última venta se inscribió en el Registro Público de la Propiedad de El Fuerte, Sinaloa, con el número 153 del libro 76 sección I de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro y por último que dicha persona presentó pruebas y alegatos.

Por último la inspección ocular de diez de julio de mil novecientos noventa y uno, practicada al último predio citado en el párrafo anterior, llevada a cabo por un actuario del Tribunal Superior Agrario del Distrito 27, en la cual el comisionado en el acta que levantó, señaló que se encuentra cercada, cuenta con una casa habitación y es explotado ganaderamente desde aproximadamente "hace 3 años", por lo que las mejoras al terreno incluyendo el desmonte son recientes, por lo tanto, es concluyente que tales diligencias

sólo sirven para demostrar que el amparista desde que adquirió el predio lo tiene en explotación lo cual aconteció el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y la inexplotación señalada se informó en los años de mil novecientos ochenta, mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos noventa y dos; esto es antes de que él adquiriera este predio.

SEXTO. Una vez la relatoría de antecedentes, a continuación pasaremos al estudio y valoración de las pruebas documentales, presuncional, inspección ocular y alegatos presentados por Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez de veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en relación con las demás constancias procesales que obran en autos, particularmente con los informes de trabajos técnicos e informativos practicados en el predio "Lomas de Sivirijoa" o "Minas", para de esta forma resolver el presente asunto conforme a lo establecido por el artículo 189 de la Ley Agraria, así como lo señalado para tal efecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria y en observancia a la ejecutoria de amparo que se cumplimenta.

Los alegatos que presentó el amparista en su conjunto señalan que el poblado en estudio no satisface los extremos del artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria al no tener en explotación los terrenos concedidos en dotación; no reúnen los requisitos de los artículos 197, 198 y 200 del ordenamiento legal antes invocado pues no tienen capacidad individual y colectiva para solicitar la ampliación de su ejido; así como que dentro del radio legal del grupo gestor, no existen terrenos afectables; que el predio de su propiedad el cual dedica a la explotación ganadera, ha sido respetado por este Tribunal, en la sentencia que pronunció en el juicio agrario 10071/93 y por último solicita se tome en consideración el coeficiente de agostadero ponderado de la región.

Por lo que respecta a la falta de capacidad del núcleo promovente y no tener explotados los terrenos que les fueron concedidos en dotación, no son de tomarse en consideración dado que tal situación fue considerada en la sentencia pronunciada por este Tribunal Superior Agrario en el juicio que nos ocupa el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, la cual quedó firme; respecto a que en el radio legal del poblado no existen terrenos afectables, es conveniente volver a señalar que precisamente esta sentencia se pronuncia en cumplimiento de ejecutoria, para los efectos de valorar pruebas presentadas y así determinar si procede o no la afectación de su predio y en lo referente a que éste ha sido respetado con anterioridad al resolverse el juicio agrario 1071/93, es conveniente puntualizar que en la resolución que cita, se niega la acción agraria intentada por el núcleo gestor por falta de fincas afectables, pero en ningún momento en particular se señala la inafectabilidad de su predio; de las otras aseveraciones, del quejoso referentes a la explotación del predio y el coeficiente de agostadero del mismo, se irán analizando en las siguientes consideraciones.

Entre las pruebas presentadas por el amparista, se encuentran en fotocopias simples: los alegatos de Gloria Ceballos de Sánchez y Ramiro Jaime Ceballos Moreno de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, presentados ante la Secretaría de la Reforma Agraria, el envío de los mismos al Consejero Agrario correspondiente y los alegatos y pruebas de Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez ofrecidas ante la misma Dependencia del Ejecutivo Federal el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; las dos primeras, se refieren a predios diversos a los que son propiedad del amparista y en relación con la tercera, lo único que logra demostrar, en su comparecencia ante la Secretaría de la Reforma Agraria en este asunto, como propietario del predio de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) denominado "Lomas de Sivirijoa" o "Minas".

Con la fotocopia de la inspección ocular en el predio, de veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta, practicada por Crispín Pérez Cortés y Efraín Camacho Marín, comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria, es conveniente señalar independientemente de que se ofrece como prueba, la misma de por sí se está tomando en consideración, ya que forma parte de los trabajos que se citan, en la cual se asentó lo siguiente: "...en todo el recorrido no se encontró nada de explotación..." y por lo tanto se les concede plena validez, toda vez que fueron realizados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones como lo señalan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria en materia agraria.

Los recibos de pagos de impuestos de los años de mil novecientos setenta y seis y mil novecientos noventa y siete, así como la constancia de la Asociación Ganadera Local de veinticinco de junio de mil novecientos setenta y seis, expedida a nombre de Ramiro Jaime Ceballos Caro, exhibidos en fotocopia se refieren al predio del 100-00-00 (cien hectáreas) propiedad del quejoso el cual no se está estudiando en forma particular en el presente asunto, porque no forma parte de la materia de la litis.

La copia certificada de la escritura que ampara los predios propiedad del amparista 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) así como los planos correspondientes, sólo sirven al promovente para comprobar ampliamente que dichos predios son de su propiedad, siendo pruebas plenas para acreditar la propiedad, de conformidad al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria; sin embargo, dicha documental en ningún momento desvirtúa

que este predio estuvo sin explotación por más de dos años consecutivos, sin que existiera causa de fuerza mayor, como lo indican los diversos comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria que realizaron los trabajos técnicos e informativos de diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco, veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Con las copias certificadas de los recibos de pago del impuesto predial, se acredita únicamente que ha cumplido con tal obligación tributaria, respecto de los predios de su propiedad, sin que dichos documentos sean idóneos para acreditar la explotación de su predio.

De las copias certificadas de las facturas a su nombre con las que se demuestra que adquirió diversos insumos, propios para la explotación agropecuaria, con ellos solamente se desprende que éste realizó tales compras, mas no que tales productos se hayan empleado en la explotación de los predios en estudio y de ninguna manera son las pruebas idóneas con las que se demuestre la explotación del predio.

La copia certificada del documento expedido por la Presidencia Municipal de El Fuerte, Sinaloa, en la que señala que Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez es propietario de dos predios denominados "Lomas de Sivirijoa" o "Minas" con 100-00-00 (cien hectáreas) y 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas), no se pueden considerar como pruebas idóneas para desvirtuar la inexplotación que existía en el predio en cuestión, acreditada en los trabajos técnicos de diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco y veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, según lo indican los comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria, ya que la autoridad municipal que la expidió no tiene autoridad para hacer constar este tipo de hechos, existiendo tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"AGRARIO POSESION PRUEBA. CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL NO ES BASTANTE.- La constancia expedida por el Presidente y el Secretario del Ayuntamiento en que se asienta que los quejosos poseen los lotes cuestionados y que los han dedicado a la explotación ganadera, no hace prueba de esos hechos, porque esta Segunda Sala sostiene que las constancias expedidas por autoridades sobre cuestiones ajenas a sus funciones, no tiene valor probatorio pleno. A.R.1122/82.- Comisariado Ejidal del poblado 'El Jaripal', Municipio de Huandacaréo, Mich.- Unanimidad de 4 votos. A.R.3555/75.- Isabel Gómez Palacio y otros.- Unanimidad de 4 votos. TESIS RELACIONADA CON LA No. 68, PAG. 145 DEL APENDICE 1917-1975, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION...".

Con la constancia del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de El Fuerte Sinaloa de catorce de abril de mil novecientos noventa y siete, en la cual se proporciona la historia registral del predio "Lomas de Sivirijoa" o "Minas", propiedad del quejoso y que cuenta con 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas); al igual que las escrituras respectivas ya analizadas en párrafos anteriores, solamente acreditan la forma como adquirió el predio y las ventas que ha sufrido, tal predio no desvirtuando con esto la inexplotación de éste, señalada por los diferentes comisionados que practicaron trabajos técnicos en este predio.

La constancia de la Unidad de COTECOCA en Sinaloa, dependiente de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, sin fecha, así como el estudio practicado por la misma Dependencia de seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en el predio, por medio de los cuales se determinó el coeficiente de agostadero anual por unidad animal ponderado en 9.80 hectáreas, demuestran solamente la calidad de las tierras del predio, el cual resulta propio para la explotación ganadera, pero no le ayuda a comprobar sus afirmaciones en el sentido de que el predio en cuestión ha sido explotado continuamente, así como por sus anteriores propietarios, por otro lado es evidente que en este caso el oferente demuestra que con sus predios, no rebasa los límites de la pequeña propiedad, pero es el caso que la presunta afectación del predio no se basa en tal supuesto, sino en la falta de explotación del mismo la cual fue reportada por los comisionados en sus informes de diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco y veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Con la copia certificada del avalúo practicado al predio del amparista que cuenta con 100-00-00 (cien hectáreas) de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, lo que se demuestra es el valor que tenía ese terreno en ese momento, pero con esto no llega a desvirtuar la inexplotación del otro predio del quejoso compuesto de 25-00-00 (veinticinco hectáreas) y como se dijo con anterioridad que fue reportado inexplotado por los comisionados.

En cuanto a la constancia de la Asociación Ganadera Local de El Fuerte, Sinaloa, de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete y la factura expedida por la misma en esa misma fecha, referente al predio de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas), sólo demuestra que Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez es miembro de la misma, y que realizó el pago de tenencia ante la misma por el año de mil novecientos noventa y siete, sin embargo con ella en ningún momento desvirtúa la inexplotación que sobre su predio pesa por más de dos años consecutivos, como lo hacen saber los

comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria en sus trabajos de investigación de diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco y veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos toda vez que no se adminicula con ninguna otra para establecer que la actividad ganadera, se desarrollaba en el predio cuando se practicaron los trabajos técnicos.

Las fotografías que presenta en original y copia certificada de diferentes lugares de los predios de su propiedad de diez de abril y diez de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los que se aprecia que los mismos se encuentran en explotación, si bien es cierto forman prueba plena, lo único que logran demostrar es que en la fecha en que fueron tomadas, sí estaban trabajados, lo cual no es suficiente ni resultan ser las pruebas idóneas para desvirtuar la inexplotación del predio, que cuenta con 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas), la cual reportaron en sus informes de diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco y veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Con las constancias de notificación de seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por medio de las cuales la Secretaría de la Reforma Agraria hace sabedor al anterior propietario del predio que, cuenta con un término de cuarenta y cinco días para ofrecer pruebas y alegatos en favor de sus intereses, se demuestra que éste tuvo el debido conocimiento del procedimiento y no se violó en su contra la garantía de audiencia.

Y por último con los documentos que aporta y que se refieren a los expedientes de los poblados denominados "Jecolula", "los Alisos" y "Benito Juárez", ubicados en el mismo municipio y estado, el oferente lo único que logra demostrar con relación a los dos primeros, es que en otras acciones agrarias también fue señalado el predio de su propiedad como de posible afectación, que en los mismos se apersonó ofreciendo pruebas y alegatos y que al resolver el Tribunal Superior Agrario, no se le afectaron sus predios; ahora bien respecto al comunicado de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad en que comunica criterios para la valoración de pruebas en el expediente del nuevo centro de población ejidal Benito Juárez, no son de tomarse en consideración ya que quien los emitió se trata de un órgano netamente administrativo, y es el caso que este Tribunal al resolver aplica las leyes agrarias así como el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia.

Por lo tanto, como se observa en párrafos anteriores, todas las probanzas en estudio presentadas por el amparista resultan insuficientes para desvirtuar la inexplotación del predio de su propiedad denominado "Lomas de Sivirijoa" o "Minas", que cuenta con una superficie de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) señalada por los comisionados de la Secretaría de la Reforma Agraria en sus informes de diecisiete de diciembre, dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y cinco y veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

SEPTIMO. Por lo anteriormente señalado, se considera procedente conceder al núcleo de población denominado "La Capilla", ubicado en el Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa, por concepto de ampliación de ejido la superficie de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas), de agostadero, del predio "Lomas de Sivirijoa" o "Minas", para efectos agrarios propiedad de Juan Ceballos Caro y cuyo actual propietario es Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, por haberse encontrado inexplotado por su propietario por más de dos años, sin causa de fuerza mayor que se lo impidiera, afectado de conformidad con el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicado en sentido contrario, en cuanto a la determinación del destino de estas tierras, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 189 de la Ley Agraria, 1o., 7o. y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es procedente la ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado denominado "La Capilla", Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa.

SEGUNDO. Se concede al poblado de referencia, por concepto de ampliación de ejido, una superficie de 25-50-00 (veinticinco hectáreas, cincuenta áreas) de agostadero, ubicada en el predio "Lomas de Sivirijoa" o "Minas" Sindicatura de San Blas, Municipio El Fuerte, Estado de Sinaloa, para efectos agrarios propiedad de Juan Ceballos Caro, actual propietario Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez, por haberse encontrado inexplotado por parte de su propietario por más de cinco años sin causa de fuerza mayor que lo impida, afectada de conformidad con el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicado en sentido contrario. Queda firme la sentencia de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete en cuanto a lo que no fue materia de amparo.

TERCERO. Comuníquese con copia certificada de la presente sentencia al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en relación a la ejecutoria dictada el ocho de octubre de mil

novecientos noventa y siete en el Juicio de Amparo número D.A. 1675/98, promovido por Manuel Ignacio Gutiérrez Vázquez.

CUARTO. Publíquese esta sentencia tanto en el **Diario Oficial de la Federación** como en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad que corresponda; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, conforme a las normas aplicables.

QUINTO. Notifíquese a los interesados; comuníquese al Gobernador del Estado de Sinaloa y a la Procuraduría Agraria; ejecútese; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Angel López Escutia, Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el expediente número T.U.A.XII-101/94, relativo al reconocimiento y titulación de bienes comunales de los poblados Tilapa y Arroyo San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Gro.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Unitario Agrario.- Secretaría de Acuerdos.- Distrito 12.- Chilpancingo.

Vistos para resolver en definitiva los autos que integran el expediente citado al rubro, promovido por los poblados de Tilapa y Arroyo San Pedro, ambos del Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, relativo al trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio de amparo directo agrario número 694/98; a fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, es necesario previamente transcribir en lo medular los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Tomando en cuenta que los expedientes registrados bajo los números 276.1/3465 y 276.1/2815, instaurados con motivo de las solicitudes planteadas separadamente por los núcleos de población de Tilapa de Guerrero y Arroyo San Pedro, ambos del Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales, fueron acumulados al expediente que hoy se resuelve; en tal virtud, la resolución que en este asunto se dicte comprenderá lo relativo a ambas peticiones.

SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, campesinos del poblado denominado Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, solicitaron al entonces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el reconocimiento y titulación de las tierras que poseen como bien comunal.

TERCERO.- La anterior solicitud fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el día veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y dos, y en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha cinco de marzo de mil novecientos setenta y tres; lo anterior, en cumplimiento al artículo 357 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria.

CUARTO.- Asimismo, a través de ocurso de fecha primero de marzo de mil novecientos sesenta, los ciudadanos Fermín E. Santana, Bonifacio Bruno y Emilio Barrera, Comisario Municipal propietario, suplente y secretario, respectivamente, del poblado denominado Arroyo San Pedro, ubicado en el Municipio de Malinaltepec, del Estado de Guerrero, solicitaron ante el entonces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el reconocimiento y titulación de los terrenos comunales que tiene en posesión; solicitud que ha reiterado en múltiples ocasiones, pidiendo siempre que se les reconozcan esos terrenos de manera separada respecto del poblado de Tilapa, correspondiente a la misma municipalidad de Malinaltepec, Guerrero.

QUINTO.- La solicitud presentada por Arroyo San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el dos de marzo de mil novecientos noventa y tres.

SEXTO.- Obran de la foja 169 a la 182 del tomo I, los trabajos técnicos informativos practicados respecto de los terrenos cuyo reconocimiento y titulación solicita el poblado de Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, así como de la foja 320 a 393 del tomo II, del expediente que se resuelve entre los que figura la descripción limítrofe de esos bienes, en los siguientes términos: "...partiendo del punto denominado "Cerro Pelón", se sigue un rumbo NW y distancia de 1,924.01 mts.

pasando por los vértices 2, 3, 4, 5 y 6 para llegar al vértice número 7, denominado Casa de Arnulfo Nicolás, de este punto se sigue con igual rumbo NW y distancia aproximada de 2,704.27 mts. pasando por los vértices, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 para llegar al vértice 18, denominado "Mesón Viejo de Alchipagua", punto trino entre los terrenos comunales de Iliatenco, terrenos comunales de Colombia de Guadalupe, y los terrenos comunales de Tilapa de Guerrero; colindando por todo el recorrido con la comunidad de Iliatenco; del vértice número 18 se sigue con un rumbo general SW y distancia aproximada de 4,955.40 mts. pasando por los vértices 19, 20, 21, 22, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59, para llegar al vértice número 60, de este punto se sigue un rumbo SE y distancia aproximada 277.79 mts. pasando por los vértices 61, 62 y 63 para llegar al vértice número 64, denominado "Cerro de la Luna", punto trino entre los terrenos comunales de Colombia de Guadalupe, terrenos comunales de Tierra Colorada y los terrenos que se describen; de este punto se sigue un rumbo SE y distancia aproximada de 1,098.50 mts. para llegar al vértice R3, denominado "Barranca Chica", de este punto se sigue un rumbo SE y distancia aproximada de 1,195.00 mts. para llegar al vértice R2, conocido como "Media Falda", de este punto se sigue con igual rumbo SE y distancia aproximada de 563.38 mts. para llegar al vértice R1, denominado "Tepehuaje", continuando con igual rumbo SE, y distancia de 477.93 mts. se llega al vértice número 67, denominado "El Huamúchil", colindando por este recorrido con la zona en conflicto entre Tierra Colorada y Tilapa; del vértice número 67 se sigue con rumbo SE y distancia de 1,445.00 mts. se llegó al vértice A, denominado "Terreno Panela o El Mango", punto trino entre los terrenos comunales de Tierra Colorada, terrenos comunales de Santa Cruz, del Rincón, colindando por este lado con los terrenos comunales de Tierra Colorada, del vértice número A, se sigue con rumbo NE y distancia de 2,625.00 mts. para llegar al vértice 70, denominado "Tercer Picacho del Cerro Ardilla", se continúa con rumbo SE y distancia de 1,420.00 mts. se llega al vértice denominado "Cerro Ardilla", punto trino entre los terrenos comunales de Santa Cruz del Rincón, terrenos comunales de Iliatenco y los terrenos que se describen; por este recorrido se colinda con los terrenos comunales de Santa Cruz del Rincón; de este punto se sigue un rumbo NW y distancia aproximada de 3,312.17 mts. para llegar al vértice número 1, denominado "Cerro Pelón", punto de partida de esta descripción limítrofe, con la anterior descripción quedó encerrada una superficie de libre de conflicto de 2,505-30-19.35 hectáreas..."

"...DESCRIPCION LIMITROFE DE LA ZONA URBANA DEL POBLADO "TILAPA DE GUERRERO", MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO.- Partiendo del vértice No. 71 se sigue un rumbo NE y distancia de 246.00 mts. se llega al vértice número 72, de este punto se sigue un rumbo NW y distancia de 492.00 mts. para llegar al vértice número 73; de este punto se sigue un rumbo SW y distancia 189.00 mts. para llegar al vértice número 74, continuando con un rumbo SE y distancia de 233.00 mts. se llega al vértice número 65, de este punto se sigue con rumbo SE y distancia de 412.00 mts. para llegar al vértice número 71, punto de partida de esta descripción, quedando encerrada una superficie de 13-61-51.96 hectáreas...".

SEPTIMO.- También obran las plantillas de campo y demás levantamientos topográficos, formando parte de los trabajos técnicos; incluyendo el censo general del poblado solicitante, el cual arrojó las siguientes cifras: 2959 habitantes, clasificados en 544 jefes de familia, 423 jóvenes solteros mayores de dieciséis años y 1992 niños y jóvenes menores de dieciséis años. Trabajos que fueron clausurados mediante acta de fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, mismos que fueron dados a conocer, fijándose en los lugares más visibles de esa comunidad, para el efecto de que aquéllos que se hubieran excluido, hicieran valer sus derechos durante el plazo improrrogable de quince días; sin que se hubiese presentado inconformidad alguna sobre el particular.

OCTAVO.- Por otra parte, tenemos que el día veinte de enero de mil novecientos cincuenta y seis, mediante asamblea de comuneros, el poblado solicitante designó por mayoría a los ciudadanos Emiliano J. Neri e Ignacio E. Bernardino, como representantes comunales propietario y suplente, respectivamente del poblado de Tilapa de Guerrero; haciéndose nuevas designaciones a partir de esa fecha, hasta que finalmente fueron substituidos por Nazario Mendoza Garzón y Alfonso Ambrosio Galeana, como propietario y suplente respectivamente.

NOVENO.- Igualmente, corren agregadas de la foja 336 a la 338 (tomo II), actas de conformidad de linderos, entre el poblado solicitante de Tilapa, con Colombia de Guadalupe, El Rincón e Iliatenco, todos del Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero. Es de hacerse notar en este punto que, por lo que respecta al poblado de Arroyo San Pedro, siempre han manifestado su oposición de ser considerado como anexo de Tilapa de Guerrero.

DECIMO.- Con posterioridad fue ordenada la elaboración de trabajos técnicos complementarios, los cuales fueron llevados a cabo por el ciudadano Marco A. Guerrero, quien mediante informe de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta, manifestó lo siguiente: "...arribé al poblado de Tilapa de Guerrero, con fecha 17 de noviembre de 1969, convocando desde luego a una asamblea de comuneros, hice del conocimiento de los mismos, el objeto de mi presencia en ese lugar, poco después ya enteradas

las autoridades y pueblo en general, me informaron que el ingeniero Agustín Popoca Salgado, ya había ejecutado los trabajos técnicos y ya tenían copia del plano informativo, siendo su único problema una pequeña franja de terreno, que tienen en disputa con el poblado de Tierra Colorada, del mismo Municipio de Malinaltepec. Poco después ya presentes las autoridades de ambos poblados en disputa, nos dirigimos a la zona en litigio, que se localiza en los puntos denominados: Mojonera Terrero de Panela y el Guamuchilito. Por ser una parte tan pequeña, fue posible llegar a un arreglo satisfactorio, quedando de acuerdo ambas partes en dividir la zona en disputa en partes iguales, firmándose para su constancia un acta de conformidad, terminando de esta manera la enemistad entre ambos pueblos...".

DECIMO PRIMERO.- Mediante oficio sin número de fecha veintiocho de julio de mil novecientos setenta, el ciudadano ingeniero Pedro Salazar, rindió informe de revisión de los trabajos técnicos practicados respecto de la solicitud del núcleo de población de Tilapa, de esa entidad federativa, concluyendo que los mismos son de aceptarse, salvo la mejor opinión de la superioridad.

DECIMO SEGUNDO.- Dichos trabajos técnicos informativos fueron puestos a la vista de las partes durante el término de treinta días, para que expusieran lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 360 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria. Lo anterior, se puede corroborar a través de las actuaciones que obran de la foja 536 a 541 del expediente que se resuelve.

DECIMO TERCERO.- Con fecha cinco de octubre de mil novecientos setenta y uno, el Instituto Nacional Indigenista emitió opinión, en el sentido de que una vez cumplimentados los trámites de procedimiento, se reconozca al poblado de Tilapa, una superficie de 2,550-00-00 hectáreas para beneficiar a 266 comuneros.

DECIMO CUARTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 362 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario resolvió, mediante dictamen de fecha cuatro de julio de mil novecientos setenta y cinco, mismo que corre agregado de la foja 153 a la 164 (tomo I) del expediente que se resuelve, de la siguiente manera: "...PRIMERO.- Se declara la capacidad legal en materia agraria de las comunidades "TILAPA DE GUERRERO" y "ARROYO SAN PEDRO", ambas del Municipio de Malinaltepec, del Estado de Guerrero, conforme a los artículos 200 y 267 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en el expediente comunal que se resuelve por esta vía.- SEGUNDO.- Se declara que dentro de los terrenos que se reconocen y titulan, no existen propiedades de particulares que deban ser excluidas, asimismo, se declara que dichos terrenos son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisibles, y sólo garantizan el goce y disfrute de los mismos por parte de la comunidad a que pertenecen, quedando sujeto a las limitaciones y modalidades establecidas en la ley.- TERCERO.- Declarados cumplidos los requisitos de la Ley Federal de Reforma Agraria y del Reglamento para la tramitación de confirmación y titulación de bienes comunales; se reconoce como bien comunal de los poblados de "TILAPA DE GUERRERO" y "ARROYO SAN PEDRO", ambos del Municipio de Malinaltepec, del Estado de Guerrero, una superficie total de 2,442-00-00 Has., de monte alto y pequeñas porciones laborables; teniéndose en cuenta que de las mismas se excluirán las superficies que resulten de ambas zonas urbanas de los poblados antes mencionados. Dicha superficie deberá localizarse de conformidad al plano que en su oportunidad apruebe el Cuerpo Consultivo Agrario.- CUARTO.- Una vez ejecutada la Resolución Presidencial que al efecto se dicte, se realizarán los estudios y trabajos a que se refiere el artículo 365 de la Ley Federal de Reforma Agraria.- QUINTO.- Aprobado que sea el presente dictamen, túrnese a la Dirección General de Derechos Agrarios, a efecto de que conforme al mismo, se sirva elaborar el proyecto de Resolución Presidencial correspondiente...".

DECIMO QUINTO.- Respecto del dictamen señalado en el resultando que antecede, es pertinente mencionar que el núcleo de población denominado Arroyo San Pedro de Morelos, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, promovió juicio de garantías, contra actos de los ciudadanos Secretario de la Reforma Agraria, Director General de la Tenencia de la Tierra y Director General de Bienes Comunales, todos con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como contra actos del Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria y Subdelegado de Bienes Comunales, estos residentes en la ciudad de Chilpancingo, señalando como actos reclamados la negativa, o abstención de esas autoridades de dar contestación a sus diversas peticiones por escrito, encaminadas a seguir con el trámite de su solicitud de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, estos residentes en la ciudad de Chilpancingo, como por ejemplo la petición hecha por el núcleo de población amparista, a través de oficio número 56 de fecha veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y dos, en la que solicitaron a la primera de dichas autoridades responsables la designación de personal técnico para que levantara trabajos topográficos de delimitación de sus terrenos comunales; así como lo solicitado mediante escrito de fecha veintidós de julio de mil novecientos setenta y cuatro, en el que pedían la anulación de todas las actas del convenio en que aceptaban ser anexo del núcleo de población de Tilapa, Guerrero, y la substanciación de su expediente de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, de manera separada, al de Tilapa; entre otros ocursos. El juicio de amparo a que se ha hecho alusión se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el

Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad y Puerto de Acapulco, de esta misma entidad federativa, bajo el número 72/987.

DECIMO SEXTO.- Mediante resolución de fecha veinte de marzo de mil novecientos ochenta y siete, la cual se declaró ejecutoriada por auto de fecha veinte de abril de ese mismo año, la autoridad amparadora dictó sentencia, concluyendo con los siguientes puntos resolutivos: "...PRIMERO.- SE SOBRESEE el presente juicio de garantías respecto de los actos reclamados por la parte quejosa a los CC. Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, y Subdelegado de Bienes Comunales de la misma Secretaría, ambos con residencia en Chilpancingo, Guerrero, actos que fueron precisados en el resultando primero de esta sentencia.- SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA, en contra de los restantes actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia, para los efectos señalados en el último considerando de la misma (esto es, para que las mencionadas autoridades responsables dictaran los correspondientes acuerdos por escrito en relación a las peticiones hechas y lo hicieran saber en breve término a la amparista)...". A fojas 1636 a 1643 (tomo VII) del expediente en estudio, obran copias fotostáticas de la sentencia de mérito.

DECIMO SEPTIMO.- El amparo promovido por el poblado de Arroyo San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, y sobre todo como consecuencia de la ejecutoria dictada al respecto, las autoridades agrarias facultadas para ello, realizaron todos los trámites inherentes al expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales, solicitado por el mencionado núcleo de población, tales como la publicación del acuerdo de inicio de ese expediente, la cual fue publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del día dos de marzo de mil novecientos noventa y tres.

DECIMO OCTAVO.- Asimismo, corren agregados de la foja 1452 a la 1465 (tomo VI) del expediente que nos ocupa, los trabajos censales relativos al poblado solicitante de Arroyo San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Guerrero. Y a fojas 1468 a la 1471, de ese mismo tomo, obra el estudio de revisión censal realizado a esos trabajos, por el licenciado Bernardino García Maldonado, entonces Jefe del Departamento de Reconocimiento Legal de Derechos Comunales, quien concluyó con las siguientes consideraciones: "...PRIMERO.- Los trabajos se desarrollaron de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 31, 358 y 359 inciso "b" de la Ley Federal de Reforma Agraria, y 6o., 7o. y 8o., del Reglamento para la tramitación de expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales.- SEGUNDO.- Se considera en la comunidad de referencia de acuerdo con los trabajos realizados, los cuales se han descrito, que existen 120 comuneros capacitados, que cumplen con lo dispuesto en los artículos 200 y 267 de la Ley Federal de Reforma Agraria...".

DECIMO NOVENO.- De igual manera aparecen a fojas 1529 y 1530 (tomo VII) del multicitado expediente, constancias expedidas por las autoridades internas de bienes comunales de los núcleos de población de Iliatenco y Tierra Colorada, Guerrero, ambos Municipio de Malinaltepec, Guerrero, en las que manifiesta expresamente no tener conflictos con el poblado solicitante de Arroyo San Pedro, Guerrero.

VIGESIMO.- Con estos antecedentes, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió nuevo dictamen respecto a la solicitud planteada por el núcleo de población de Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, concluyendo con los siguientes puntos resolutivos: "...PRIMERO.- Es procedente la solicitud de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, promovida por el poblado de "TILAPA DE GUERRERO", Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero.- SEGUNDO.- Se deja sin efectos jurídicos el dictamen aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario en sesión plenaria del 4 de julio de 1975.- TERCERO.- Se reconoce y titula como bien comunal al poblado de "TILAPA DE GUERRERO", Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, una superficie de 1,887-48-43.52 Has., de terrenos de diversas calidades, sobre las cuales ejercen la posesión y que serán localizadas dentro del polígono general de 2,492-98-43.52 Has., al momento de ejecutarse la resolución definitiva, con las que se favorece a 684 campesinos, cuyos nombres y posesiones se señalan de la foja 20 a la 37 del presente dictamen.- CUARTO.- Dada su naturaleza, quedó excluida del presente procedimiento la zona urbana del poblado que nos ocupa, que arrojó una superficie de 13-61-51.96 Has., cuya descripción limítrofe se consigna en el considerando IV del presente dictamen.- QUINTO.- Se declara que los terrenos materia del presente procedimiento son inalienables, imprescriptibles e inembargables y que sólo para garantizar el goce y disfrute de los mismos por parte de la comunidad se sujetarán a las limitaciones y modalidades impuestas por la ley.- SEXTO.- Que no existen propiedades particulares que deban respetarse o segregarse, dentro de la superficie que se reconoce y titula como bien comunal.- SEPTIMO.- Túrnese copia del presente dictamen, así como el legajo que contiene los trabajos técnicos informativos a la Dirección General de Tenencia de la Tierra, para la elaboración del Plano Proyecto y previa aprobación de éste, por el Cuerpo Consultivo Agrario, envíese el asunto al Tribunal Superior Agrario...".

VIGESIMO PRIMERO.- Igualmente, por lo que respecta a la promoción del poblado de Arroyo San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, con fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el Cuerpo Consultivo Agrario, emitió nuevo dictamen positivo, el cual corre agregado de la foja 2196 a la 2240 (tomo IX) del expediente en estudio, finalizando con los siguientes puntos resolutivos:

"...PRIMERO.- Es procedente la solicitud de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, promovido por el poblado de "ARROYO SAN PEDRO", Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero.- SEGUNDO.- Se deja sin efectos jurídicos el dictamen aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario en sesión plenaria del 4 de julio de 1975.- TERCERO.- Se reconoce y titula como bien comunal al poblado de "ARROYO SAN PEDRO", Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, una superficie de 605-50-00 Has., de terrenos de diversas calidades, sobre las cuales ejercen la posesión y que serán localizadas dentro del polígono general de 2,492-98-43.52 Has., al momento de ejecutarse la resolución definitiva para 204 capacitados cuyos nombres se señalan de la foja 31 a la 37 del presente dictamen.- CUARTO.- Se declara que los terrenos materia del presente procedimiento son inalienables, imprescriptibles e inembargables y que sólo para garantizar el goce y disfrute de los mismos por parte de la comunidad, se sujetarán a las limitaciones y modalidades impuestas por la ley.- QUINTO.- Que no existen propiedades particulares que deban excluirse o segregarse de los terrenos que se reconocen y titulan como bien comunal.- SEXTO.- Infórmese y remítase copia del presente dictamen por conducto del Secretario General del Cuerpo Consultivo Agrario a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud del incidente de ejecución número 48/92, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada del juicio de amparo 72/987, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria y a los representantes comunales del poblado "ARROYO DE SAN PEDRO", Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero.- SEPTIMO.- Túrnese copia del presente dictamen así como el legajo que contiene los trabajos técnicos, sobre el polígono de 2,492-98-43.52 Has., a la Dirección General de Tenencia de la Tierra para la elaboración del plano proyecto y previa aprobación, envíese el asunto al Tribunal Superior Agrario para que se resuelva en definitiva...".

VIGESIMO SEGUNDO.- Por último tenemos que con fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, el mismo Cuerpo Consultivo Agrario, elaboró otro nuevo dictamen, el cual aparece de la foja 2257 a la 2350 (tomo X) del sumario, el cual concluye de la forma siguiente: "...PRIMERO.- Son procedentes las solicitudes de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales promovidas por los poblados "TILAPA DE GUERRERO" y "ARROYO DE SAN PEDRO", ambos del Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero.- SEGUNDO.- Se deja sin efectos jurídicos el dictamen aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario de fecha 4 de julio de 1975, así como los aprobados por dicho órgano colegiado el 9 de diciembre de 1993, de conformidad con lo expuesto en la consideración IX de este dictamen; igualmente los planos aprobados en esa fecha.- TERCERO.- Se reconoce y titula como bien comunal el poblado de "TILAPA DE GUERRERO", una superficie total de 2,492-98-43.52 Has., de terrenos de monte alto y agostadero con pequeñas porciones laborables, para beneficio de 684 campesinos, cuyos nombres se consignan de la foja 24 a la 42 del presente dictamen de las que se respetarán al momento de la ejecución de la resolución definitiva las posesiones que detentan los campesinos del poblado "ARROYO DE SAN PEDRO", cuya relación se anota de la foja 70 a la 76 del propio dictamen, asimismo no se excluyen propiedades particulares, por no haberse localizado.- CUARTO.- Quedó excluida la superficie de 13-61-51.96 Has., de la zona urbana del poblado "TILAPA DE GUERRERO", Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, cuya descripción limítrofe se menciona en la consideración V de este dictamen.- QUINTO.- Se niega la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, promovida por campesinos del poblado "ARROYO DE SAN PEDRO", Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, en razón de lo expuesto en la consideración IV, inciso b) del presente dictamen.- SEXTO.- Infórmese y remítase copia del presente dictamen por conducto del Secretario General del Cuerpo Consultivo Agrario, a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud del incidente de inejecución número 48/92 y al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, en cumplimiento a la Sentencia Ejecutoriada del juicio de amparo 72/987, así como a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria.- SEPTIMO.- Túrnese copia del presente dictamen así como el legajo que contiene los trabajos técnicos informativos, a la Dirección General de Tenencia de la Tierra, para que elabore el plano proyecto para el poblado de "Tilapa de Guerrero", Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, y previa aprobación de éste, por el Cuerpo Consultivo Agrario, envíese el expediente al Tribunal Superior Agrario para que se resuelva conforme a derecho proceda..."; una vez transcrito lo anterior, se pasa a reseñar lo siguiente, y

RESULTANDO

PRIMERO.- Encontrándose los autos en este estado procesal de resolución; mediante oficio sin número, de fecha diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, signado por el Subsecretario General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, fueron remitidos a este Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII; el cual lo tuvo por radicado por auto de fecha veinte del mes y año en cita; declarándose competente para conocer y resolver del presente asunto y se ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el número correspondiente, ordenándose notificar personalmente de dicho acuerdo a los núcleos de población solicitantes, con objeto de que dentro del término de ocho días hábiles manifestaran lo que a su

interés conviniera, apercibidos de que una vez transcurrido el plazo señalado, se turnaría el expediente al Secretario de Estudio y Cuenta respectivo para que formulara el proyecto de sentencia.

SEGUNDO.- Ahora bien, tenemos que con fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, este unitario emitió sentencia en el expediente en que se actúa, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "...PRIMERO.- Se declara procedente la acción agraria de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales que, de manera separada, promovieron los núcleos de población denominados TILAPA DE GUERRERO Y ARROYO SAN DE PEDRO, ambos Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, en consecuencia: SEGUNDO.- Se reconocen y titulan en favor de TILAPA DE GUERRERO, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, los terrenos comunales libres de todo conflicto que han venido poseyendo, constituyendo una superficie de 1,887-48-43.52 hectáreas de diversas calidades, mismas que serán localizadas del polígono general de 2,492-98-43.52 hectáreas, previos los trabajos técnicos que para tal efecto se lleven a cabo. Dicha superficie será destinada para beneficio de los 684 comuneros capacitados, cuyos nombres han quedado precisados en el considerando IV de la presente resolución, y de sus respectivas familias, que en forma pacífica, continua, pública, de buena fe, a título de dueño y en común han poseído; en el entendido de que la superficie de 13-61-51.96 hectáreas, que ocupa la zona urbana se excluye del área comunal. TERCERO.- Asimismo, se reconoce y titula como bien comunal al poblado de ARROYO DE SAN PEDRO, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, una superficie de 605-50-00 hectáreas de terrenos de diversas calidades, en beneficio de los 204 comuneros capacitados cuyos nombres se señalan en los considerandos V y VI del presente fallo y de sus respectivas familias, que en forma pacífica, continua, pública, de buena fe, a título de dueño y en común han poseído. En la inteligencia de que esta superficie será localizada del polígono general de 2,492-98-43.52 hectáreas; previa la elaboración de los trabajos técnicos pertinentes. Queda excluida de dicha superficie el área que ocupa la zona urbana del mencionado núcleo de población. CUARTO.- Se declara que los terrenos materia del presente procedimiento son inalienables, imprescriptibles, e inembargables, y que sólo para garantizar el goce y disfrute de los mismos por parte de la comunidad, se sujetarán a las limitaciones y modalidades impuestas por la ley. QUINTO.- Por otra parte, se declara que no existen propiedades particulares que deban excluirse o segregarse de los terrenos que se reconocen y titulan como bienes comunales a los multicitados poblados solicitantes; dejándose sus derechos a salvo a aquéllos que demuestren fehacientemente, con posterioridad, su calidad de pequeños propietarios, para que lo hagan valer en la vía y forma correspondiente. SEXTO.- Quedan excluidas del presente reconocimiento las áreas correspondientes a la zona urbana de cada uno de los núcleos de población de referencia. SEPTIMO.- Publíquese un extracto de la presente resolución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero; y fíjese en los Estrados de este H. Tribunal. OCTAVO.- Remítase copia certificada de esta sentencia al Registro Agrario Nacional, para su inscripción y expedición de los correspondientes certificados de derechos agrarios, en términos de los artículos 56 y 152 de la ley de la materia.- NOVENO.- Elabórense los técnicos necesarios para la localización de las superficies que se reconocen y titulan a cada uno de los núcleos de población solicitantes, dentro del polígono general. DECIMO.- Notifíquese personalmente a los poblados solicitantes, a través de sus representantes comunales; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y cúmplase...".

TERCERO.- Una vez que fueron notificados los representantes comunales de los poblados a que nos hemos venido refiriendo el ciudadano Nazario Mendoza Garzón, representante del poblado de Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, de esta entidad federativa, promovió amparo directo ante el Tribunal Colegiado en turno del veintiún circuito, por lo que se formó el amparo directo agrario 505/94, del índice del Primer Tribunal Colegiado del circuito citado; quien el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, acordó declararse incompetente para conocer el amparo directo promovido por el referido poblado y ordenó remitir el cuaderno de antecedentes así como el expediente en estudio, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y por proveído del veintidós de febrero del año en mención, el Juzgado Federal de referencia, aceptó la competencia y en ese orden se formó el amparo indirecto número 99/95.

CUARTO.- En tal virtud, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, por resolución de fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis, resolvió sobreseer el juicio de garantías promovido por Nazario Mendoza Garzón, en contra de los actos y de las autoridades señaladas como responsables. Inconformes con la sentencia de referencia, el citado representante de los bienes comunales del poblado de referencia, interpuso Recurso de Revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, formándose el Amparo en Revisión número 46/97, quien por ejecutoria de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, revocó la sentencia recurrida, y concedió el amparo a Nazario Mendoza Garzón, representante de los bienes comunales del poblado de Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, de esta entidad federativa, para los efectos de que este órgano jurisdiccional agrario dejara insubsistente lo actuado a partir del auto de radicación de este asunto, y procediera a notificar

personalmente al quejoso el acuerdo dictado con fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

QUINTO.- Por lo que en cumplimiento a la ejecutoria de referencia, este órgano jurisdiccional agrario con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y siete, procedió a notificar de manera personal el auto de radicación a los ciudadanos Nazario Mendoza Garzón y Maximino Galeana Neri, representante de bienes comunales y comisario municipal de Tilapa respectivamente, ante la presencia de la licenciada María del Rosario Vázquez abogada patrono de dichas personas, e incluso ofrecieron pruebas para que fueran tomadas en cuenta al momento de resolver; al igual que los representantes del poblado de Arroyo de San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Guerrero.

SEXTO.- Una vez de que se dio cumplimiento a la ejecutoria antes citada, al desahogarse las pruebas que cada parte ofreció en este asunto, por auto de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, este órgano jurisdiccional agrario tuvo por emitida la opinión pericial en topografía encomendada a los ciudadanos Eduardo Romero López y Manuel de Jesús Tamayo González, miembros de la brigada agraria "Morelos", que auspicia el Gobierno del Estado de Guerrero, de lo cual se ordenó dar vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera; esto último en razón de que los campesinos del poblado de Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, de esta entidad federativa, se oponían a la realización de trabajos técnicos de campo, sobre el terreno motivo de la acción que nos ocupa, mayormente que existen elementos técnicos necesarios para resolver este asunto; en tal virtud, en ese mismo auto se les concedió a ambos poblados el mismo término de tres días, para que de manera escrita formularan sus respectivos alegatos, lo que fue notificado al poblado de Arroyo de San Pedro, el cuatro de junio y al poblado de Tilapa de Guerrero, el día nueve del mes y año que transcurre.

SEPTIMO.- Por acuerdo del once del presente mes y año, se tuvo al representante comunal del poblado Arroyo de San Pedro, en forma y tiempo legal por desahogando la vista y formulando sus respectivos alegatos. Por otra parte, mediante diverso proveído del dieciséis de junio del año pasado, se tuvo por perdido el derecho que debió haber ejercitado en el plazo concedido Nazario Mendoza Garzón representante comunal del poblado de Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, de esta entidad federativa, en razón de que no hizo manifestación alguna en relación al dictamen topográfico del cual se le mandó dar vista, ni formuló alegatos; en consecuencia, se decretó el cierre de instrucción y se citó a las partes para oír resolución definitiva, misma que fue emitida el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, concluyendo en los siguientes puntos resolutivos: "...PRIMERO.- Se declara procedente la acción agraria de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales que, de manera separada, promovieron los núcleos de población denominados TILAPA DE GUERRERO Y ARROYO DE SAN PEDRO, ambos del Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero; en consecuencia: SEGUNDO.- Se reconocen y titulan en favor de TILAPA DE GUERRERO, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, los terrenos comunales libres de todo conflicto que han venido poseyendo y que tienen una superficie de 1,917-37-48.93 hectáreas de diversas calidades, que fueron precisadas en la parte considerativa de esta resolución; incluyéndose la superficie de 13-61-51.96 hectáreas que constituyen la zona urbana del referido poblado. Dicha superficie será destinada para beneficio de los 684 comuneros capacitados, cuyos nombres han quedado precisados en el considerando cuarto de la presente resolución, y de sus respectivas familias. TERCERO.- Asimismo, se reconoce y titula como bienes comunales al poblado de ARROYO DE SAN PEDRO, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, una superficie de 565-41-65.15 hectáreas de terrenos de diversas calidades, incluyéndose la zona urbana, en beneficio de los 204 comuneros capacitados cuyos nombres se señalan en los considerandos quinto y sexto del presente fallo y de sus respectivas familias. CUARTO.- En lo referente a las 39-61-25.47 hectáreas precisadas en el penúltimo párrafo del considerando tercero de este fallo, son de dejarse a salvo los derechos de propiedad que pudiera tener cada uno de los poblados sobre dicha superficie, hasta en tanto la autoridad penal competente resuelva en forma definitiva lo actuado en la averiguación penal número ALT/63/997. QUINTO.- Se declara que los terrenos reconocidos y titulados, tanto a TILAPA DE GUERRERO como a ARROYO DE SAN PEDRO, ambos del Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, son inalienables, imprescriptibles, e inembargables, y sólo para garantizar el goce y disfrute de los mismos por parte de dichas comunidades, sujetándose a las limitaciones y modalidades impuestas por la Ley Agraria en vigor. SEXTO.- Por otra parte, se declara que no existen propiedades particulares que deban excluirse o segregarse de los terrenos que se reconocen y titulan como bienes comunales a los multicitados poblados solicitantes; puesto que durante el procedimiento ninguna persona compareció a solicitar la exclusión de pequeñas propiedades. SEPTIMO.- Publíquese la presente resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero; asimismo, remítase copia certificada de esta sentencia y del plano aprobado por este propio Tribunal, que corre agregado a foja 3260, al Registro Agrario Nacional, así como al Registro Público de la Propiedad y Crédito Agrícola en el Estado de Guerrero, para su inscripción y registro correspondiente. OCTAVO.- Notifíquese personalmente

a los poblados solicitantes, a través de sus representantes comunales; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.- CUMPLASE...".

OCTAVO.- Inconforme con el fallo anterior, Félix Galeana Neri, en su carácter de representante de bienes comunales de la comunidad de Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, por escrito presentado el once de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ocurrió ante Oficialía de Partes de este Tribunal, solicitando el amparo y protección de la justicia federal de esta autoridad agraria, y del acto reclamado consistente en la sentencia de fecha indicada en la parte última del resultando que antecede, y por cuestión de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, radicándose, bajo el número 694/98, una vez tramitado el citado juicio constitucional, la autoridad de amparo de referencia, por acuerdo del nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, concedió al quejoso de referencia, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto reclamado de este Tribunal Agrario, consistente en la resolución de fecha dieciocho de junio del año próximo pasado, dictada en los presentes autos, siendo la concesión del amparo para los efectos que se indicaron en la parte final del considerando sexto de la ejecutoria en comento, misma que en lo conducente consideró: "...para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita una nueva en donde precise el primer término, cuales fueron todas y cada una de las formalidades que la Ley Federal de la Reforma Agraria exigía para el trámite del reconocimiento y titulación de bienes comunales, que los poblados hoy quejoso y tercero perjudicado cumplieron; así como, con que medios de convicción se demuestra no sólo la posesión que detenta el poblado de Arroyo de San Pedro, sobre 565-41-65.15 hectáreas que se le reconocen y titulan, sino que dicha posesión es en calidad de dueño, de buena fe, en forma pacífica, continua y pública hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda respecto a la acción agraria de confirmación y titulación de bienes comunales deducida en el juicio natural, con plenitud de jurisdicción...".

NOVENO.- Mediante oficio número 470 de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se remitieron a este Tribunal Agrario, los presentes autos constituido en doce tomos, en 3, 328 fojas, conteniendo el testimonio de la ejecutoria de mérito, comunicando la resolución dictada en el juicio de amparo directo agrario número 694/98, por la autoridad amparadora en cita, promovido por Félix Galeana Neri, por su propio derecho y en su carácter de representante de bienes comunales de la comunidad de Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, haciendo del conocimiento que se concedió al citado quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la resolución definitiva dictada en el sumario que nos ocupa, por este órgano jurisdiccional, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, por lo que, en cumplimiento a la referida ejecutoria y atendiendo los lineamientos señalados, por proveído del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se dejó insubsistente la sentencia en comento; en consecuencia, se procede en esta fecha a dictar nueva sentencia, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Tribunal Unitario Agrario es competente para conocer y resolver de la presente solicitud de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, de conformidad con lo establecido en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tercero transitorio del decreto que reforma y adiciona el precepto constitucional invocado; primero y tercero transitorios de la Ley Agraria; 18 fracción III, y cuarto transitorio fracción I de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así como del acuerdo aprobado por el H. Pleno del Tribunal Superior Agrario del once de julio de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual determina la competencia territorial de este distrito para la impartición de la justicia agraria, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del cuatro de octubre del mismo año.

SEGUNDO.- Tomando en consideración que el presente expediente objeto de estudio se comprenden las acciones agrarias relativas al reconocimiento y titulación de bienes comunales, promovidas por los poblados de Tilapa y Arroyo de San Pedro, mismas que se encuentran instauradas separadamente en expedientes números 276.1/3465 y 276.1/2815, como consecuencia de las solicitudes planteadas individualmente por los aludidos núcleos de población. Asentado lo anterior, este juzgador a fin de poder ponderar adecuadamente el trámite seguido por el precitado poblado gestor denominado Tilapa, puesto que fue el primero en promover el procedimiento agrario en comento, por ello, por cuestión de método, en primer término se procede a estudiar si los representantes comunales que activaron el expediente de mérito se encuentran legitimados jurídicamente en este asunto, lo que en la especie se advierte que de acuerdo con el artículo 358 de la derogada Ley de la Reforma Agraria, la personalidad de los referidos representantes resulta inobjetable, en virtud que fueron electos por mayoría de votos, a fin de que gestionaran su solicitud planteada; asimismo, se concatena con lo exigido en el artículo 1o. del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.

Habida cuenta de lo anterior, se procede a constatar si se dio cabal cumplimiento a todas y cada una de las formalidades que la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, exigía para el trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales. En efecto, de autos se desprende que el poblado de Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, con fecha diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, a través de sus representantes solicitaron el reconocimiento y titulación de las tierras que poseen como bien comunal, siendo instaurado expediente respectivo sobre la acción agraria que nos ocupa con el número 276.1/3465; asimismo, consta que se realizó la publicación de la aludida solicitud en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y dos, y en el **Diario Oficial de la Federación** el cinco de marzo de mil novecientos setenta y tres; igualmente, se nombraron representantes comunales fungiendo hasta el momento con tales cargos Nazario Mendoza Garzón y Alfonso Ambrocio Galeana, como propietario y suplente, respectivamente, consecuentemente, se realizaron los trabajos censales, técnicos informativos y complementarios, dándose también cumplimiento a los emplazamientos a los interesados, durante el plazo de treinta días en la que se obtuvo la opinión del Instituto Nacional Indigenista, institución que emitió su opinión el cinco de octubre de mil novecientos setenta y uno, en el sentido de que una vez cumplimentados los trámites del procedimiento se reconozca y titule al poblado de Tilapa. Una vez que se agotaron los trabajos tanto censales como técnicos informativos y complementarios, el expediente antes señalado se envió al Cuerpo Consultivo Agrario, instancia que era la competente en la época en que se ventiló el referido trámite, a fin de que elaborara el proyecto de resolución sobre el reconocimiento y titulación de bienes comunales, lo anterior, con fundamento en los artículos 357 a 362 de la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria.

Apuntado lo anterior, este resolutor con fundamento en lo establecido en el artículo 189 de la Ley Agraria, en correlación con el diverso 197 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, a la ley de la materia, se procede a valorar los medios de convicción que fueron ofertados al expediente mediante ocurso presentado por Oficialía de Partes, el dos de abril de mil novecientos noventa y siete, siendo las que a continuación se detallan: a) Acta levantada el dieciocho de octubre de mil ochocientos noventa y nueve, ante el síndico del ayuntamiento municipal de Malinaltepec, Estado de Guerrero; a lo anterior cabe decir, que para este Tribunal tal documento de cesión de tierras en favor del poblado de Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, de esta entidad federativa, es nulo de pleno derecho, por tanto, no surte efectos jurídicos en el presente procedimiento agrario.

Así las cosas, tenemos que el artículo 27 Constitucional vigente, en su fracción VIII, declara nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados, o cualquier otra autoridad local, en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas. Ahora bien, analizando el documento referido, se advierte que el síndico municipal del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, sin tener facultades de acuerdo a la ley citada, y en contravención plena al texto del artículo 27 Constitucional de mil ochocientos cincuenta y siete, vigente en esa época, enajenó o cedió las tierras que el poblado de Tilapa de Guerrero cree pertenecerle, en base a la cesión que hiciera esa autoridad local el dieciocho de octubre de mil ochocientos noventa y nueve; puesto que debemos recordar que el artículo constitucional últimamente aludido elevó a rango de suprema ley lo establecido en la norma de desamortización de bienes del veintiséis de junio de mil ochocientos cincuenta y seis, ley que en sus artículos 8o. y 25 en forma medular establece que ninguna corporación civil o religiosa, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrán capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, a excepción de los edificios destinados, inmediatamente y directamente al servicio u objeto del instituto de las corporaciones e incluso los ayuntamientos, así como los ejidos o cualquier otra población, únicamente conservarían de acuerdo a dicha ley, sólo tenían capacidad legal para administrar los terrenos exclusivamente a los servicios públicos; mientras que el artículo 27 Constitucional de mil ochocientos cincuenta y siete, estableció categóricamente que ninguna corporación civil o eclesiástica cualquiera que fuera su carácter, denominación u objeto, tendrán capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces. Como podrá observarse de acuerdo a la norma constitucional vigente en el año de mil ochocientos noventa y nueve, las poblaciones, congregaciones o rancherías estaban incapacitados legalmente para adquirir tierras y si el actuar del síndico municipal del ayuntamiento citado, procedió en contravención a las leyes vigentes en ese entonces, tal cesión o enajenación de tierras que pretende hacer valer la comunidad de Tilapa de Guerrero, resulta nula de pleno derecho, además de que como ya se expresó el propio artículo 27 Constitucional en su fracción VIII tales enajenaciones las declara nulas; por tanto, el poblado de Tilapa de Guerrero, no demuestra la propiedad con el acta de cesión citada, luego entonces de ningún modo se puede considerar al poblado de Arroyo de San Pedro, como anexo de Tilapa, lo que evidentemente este órgano jurisdiccional agrario estima improcedente, por las razones ya anotadas; sin que sea óbice a lo anterior, de que con fechas quince de febrero de mil novecientos setenta y tres y siete

de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, los representantes comunales de Arroyo de San Pedro y Tilapa de Guerrero, hayan manifestado que Arroyo de San Pedro fuera anexo del poblado de Tilapa, puesto que tales acuerdos no fueron sometidos a la aprobación de la asamblea comunal del poblado Arroyo de San Pedro; b) Documentales en original consistentes en las escrituras públicas otorgadas por la Prefectura de Tlapa, Guerrero, fechadas el veintitrés de junio de mil ochocientos ochenta y seis, probanzas por encontrarse en la hipótesis que la inmediatamente valorada se le aplican los mismos razonamientos en obvio de inútiles repeticiones, como si a la letra se insertasen; c) Documental pública en copia al carbón sellada y firmas autógrafas consistentes en el oficio número 464-1318 del diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, girado por Rodrigo Ramírez Pastelín, procurador de Asuntos Indígenas en ese entonces al representante de Arroyo San Pedro, probanza que puede ser consultable a (fojas 2775 a 2776 del expediente). Una vez analizado el texto de la misma, se advierte que el referido funcionario signante del documento hace mención a la venta de terrenos supuestamente efectuadas por el poblado de Arroyo de San Pedro, en el que se le indica que esas enajenaciones son nulas, por la razón de que el citado poblado se encuentra enclavado dentro de los terrenos comunales del núcleo de población de Tilapa, además de que los compradores no son hijos del poblado de Arroyo de San Pedro, sino que se encuentran viviendo en Iliatenco, San Luis Acatlán y Tierra Colorada; medio de prueba que se le otorga el valor jurídico consagrado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta aplicable en materia agraria de manera supletoria; empero, al núcleo oferente de la prueba únicamente le favorece para demostrar las gestiones que se han realizado en la tramitación del expediente que tienen instaurado de reconocimiento y titulación de bienes comunales, así como de las intervenciones realizadas por autoridades del ramo, en la que sólo señalan que las enajenaciones están en contravención con la normatividad agraria vigente en la época en que se suscitó tal evento; cabe abundarse al respecto que tanto el poblado de Tilapa como Arroyo de San Pedro, no se les había reconocido ninguna superficie comunal, puesto que su derecho lo sustentan en las posesiones que aducen tener desde tiempo inmemorial, situaciones que obviamente deben ser acreditadas por éstos, en la prosecución del procedimiento agrario que tienen incuado lo que desde luego, será materia de estudio por este juzgador, a efecto de poder determinar si sus solicitudes resultan procedentes. Así las cosas, es de otorgársele al referido medio de convicción el carácter de indicio, mismo que será ponderado con las restantes pruebas que se aportaron al expediente. No sin antes recalcar desde este momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio que las resoluciones en que se reconocen y titulan bienes comunales, carecen de efectos restitutorios, en razón de que únicamente se limita a reconocer derechos preexistentes, respecto a los terrenos poseídos en forma conjunta por los habitantes del poblado que resulte beneficiado, lo cual evidentemente debe de estar desprovisto de discordia o conflicto con otro u otros poblados circunvecinos y en caso de resolverse la controversia de límites que se presentara en los trabajos técnicos topográficos en la delimitación de la superficie a reconocer, necesariamente deben existir actas de conformidad entre los poblados que se presentaran algún conflicto.

d) Documental privada en original huella y firma autógrafa relativa al oficio número 21 de fecha veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y dos, suscrita por el entonces comisario municipal de Arroyo de San Pedro, girada al representante de bienes comunales de Tilapa, con motivo de la venta de terrenos efectuadas por gente del poblado primeramente mencionado, probanza que puede ser consultable a (foja 2774 tomo XI del expediente en estudio); al analizar el contenido de la misma, este juzgador única y exclusivamente le confiere el carácter de indicio, por lo que en esa virtud se le aplican los mismos razonamientos y fundamentos vertidos al ponderar la probanza anterior, como si a la letra se insertacen en obvio de inútiles repeticiones; e) Documental pública en copia certificada por el licenciado José Lázaro Marino, en su carácter de Notario Público por Ministerio de Ley del poblado de Malinaltepec, Guerrero, Distrito Judicial de la Montaña, consistente en el acta levantada con fecha tres de febrero de mil novecientos veintiséis en el poblado antes mencionado por los representantes de Tilapa y algunos integrantes del poblado de Arroyo de San Pedro, visible a (fojas 2770 a 2773 tomo XI del expediente); medio de prueba que igualmente se le otorga el carácter de indicio en lo tocante a la propiedad que aduce ostenta el poblado de Tilapa, puesto que de la misma se advierte que tanto los representantes del poblado de Tilapa, como algunos de los vecinos del poblado de Arroyo de San Pedro, reconocieron estos últimos, que los terrenos en los que se asientan pertenecen al poblado primeramente enunciado y que sólo piden permiso para edificar una capilla para la adoración a dios y también crear un nuevo inspector que sea vigilante del lugar, petición ésta, que fue aceptada por el poblado de Tilapa, con la advertencia de que si no daban cumplimiento a lo anterior, y se apropiaran de sus terrenos serían demandados judicialmente; f) Documentales públicas consistentes en las resoluciones presidenciales y planos definitivos de las comunidades de Iliatenco, Santa Cruz del Rincón y Colombia de Guadalupe, consistentes en copias certificadas visibles a (fojas 2777 a 2823 del tomo XI); a juicio de este Tribunal, en nada beneficia al poblado de referencia para acreditar la propiedad sobre la totalidad del polígono que pretendió al instaurar

el procedimiento agrario que nos ocupa, puesto que con las mismas únicamente se demuestra de que tanto los planos definitivos de las comunidades de Santa Cruz del Rincón, Tierra Colorada, Iliatenco y Colombia de Guadalupe, han considerado única y exclusivamente como colindante al poblado de referencia, pero cabe decir, que dichos medios convictivos no constituyen un derecho de propiedad en favor del poblado oferente sobre las tierras cuya ocupación detenta el poblado de Arroyo de San Pedro, y que mediante esta resolución se le han reconocido y titulado en los términos anotados, de ahí que tales probanzas se les dé el carácter únicamente con efectos demostrativos, en términos de los artículos 189 de la Ley Agraria; 197 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; g) Por lo que ve a la prueba confesional ofrecida por el poblado de Tilapa, su desahogo tuvo lugar en la continuación de la audiencia del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, a cargo de Fausto Jesús Oropeza, en su carácter de representante de bienes comunales de Arroyo San Pedro, al tenor del pliego de posiciones consultable a fojas 2865 a 2866, tomo XI, del expediente que nos ocupa; una vez analizado el contenido de las respuestas vertidas por el absolvente se advierte que en nada beneficia al poblado de Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, en torno a sus pretensiones aducidas en la tramitación agraria relativa a reconocimiento y titulación de bienes comunales que aduce ostentar en la posesión, toda vez que es de explorado derecho que no resulta el medio idóneo para demostrar tales extremos, independientemente que de los generales del confesante se advierta que es una persona mayor de edad capacitada para obligarse y que declaró sobre hechos propios, pero es el caso que lo manifestado por éste, en nada le perjudica y por ende, tampoco favorece al articulante de la prueba, máxime que el asunto que se analiza se refiere exclusivamente a un trámite previsto en la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, aún más que el poblado gestor denominado Tilapa, debe legalmente acreditar la preexistencia de posesión mediante el título respectivo o en su defecto la existencia de hecho de la comunidad en comento, tal y como lo establece el artículo tercero del Reglamento para la tramitación de los expedientes de confirmación y titulación de bienes comunales, que fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el quince de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, y que en la especie es el aplicable para tal efecto. Independientemente de lo precisado en líneas anteriores, este juzgador pondera el referido medio de convicción con base en lo establecido en los artículos 189 de la Ley Agraria, en concordancia con los numerales 197 y 199 del Código Adjetivo Civil Federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia: h) Es de comentarse que la prueba pericial ofrecida por el poblado de Arroyo de San Pedro, la misma no fue desahogada, ya que los propios oferentes manifestaron en forma escrita el desinterés de que se midiera el terreno que tienen en posesión ante ellos como los comuneros de Arroyo de San Pedro, tal y como se corrobora con los documentos que corren agregados a fojas 2864 a 3014 del expediente; i) por lo que atañe a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, este resolutor les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 189 de la Ley Agraria; 218 del Código supletorio que se ha venido invocando, toda vez que con los referidos medios de prueba se arriba a la convicción plena y total que el poblado gestor denominado Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, ha demostrado en la substanciación de su expediente sobre el reconocimiento y titulación de bienes comunales que ha guardado en estado comunal la superficie de terreno que más adelante se describirá, misma que se encuentra libre de todo conflicto en razón que a cabalidad ha comprobado que han poseído a título de dueños, de buena fe y en forma pacífica, continua y pública, consideraciones éstas que más adelante se abundarán.

Habida cuenta de lo anterior, este Tribunal arriba a la convicción fundada de que el núcleo de población denominado Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, si bien no acreditó documentalmente tener la propiedad de los terrenos que poseen, por resultar sus títulos carentes de valor crediticio, tal y como se dejó apuntado en el considerando segundo, en sus incisos a) al i) de este fallo, en virtud de la preexistencia que dichos campesinos han ostentado desde tiempo inmemorial. Por esa causa, al poblado de Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, de esta entidad federativa, se le reconocen como bienes comunales con fundamento en el artículo 267 de la derogada Ley de la Reforma Agraria, con una superficie total de 1,917-37-48.93 hectáreas, que se describen de acuerdo al plano proyecto informativo, que se aprueba por este órgano jurisdiccional agrario, suscrito por los topógrafos Eduardo Romero López y Manuel de Jesús Tamayo González, miembros de la brigada agraria Morelos, que auspicia el Gobierno del Estado, en los siguientes términos: iniciando del vértice H al vértice 1, punto conocido como El Cerro Pelón, teniendo una distancia de 1,080.00 metros y un rumbo astronómico de N21°31'W, siguiendo la medición del vértice 1 hasta el vértice 6 punto conocido como La Casa de Arnulfo Nicolás y una distancia de 1913.55 metros en línea semiquebrada con NW rumbos astronómicos, de este vértice 6 al vértice 21 punto conocido como El Mesón Viejo de Alchipagua, en línea semiquebrada, con una distancia de 3,051.53 metros y con rumbos astronómicos de NW, del vértice H al vértice 21, se colinda con el terreno comunal de Iliatenco, siguiendo la medición del punto conocido El Mesón Viejo de Alchipagua, en línea quebrada hasta llegar al vértice 65, punto conocido como El Cerro de la Luna, teniendo el rumbo astronómico NW y SW y distancia de 6,966.35 metros, colindando con terrenos

comunales de Colombia de Guadalupe, del vértice 65 en línea recta, se llega al Tepehuaje por la línea punteada, con una distancia de 2,820.00 metros y rumbo de SE y del Tepehuaje al Huamúchil vértice 67 con la distancia de 538.00 metros y rumbo SE, del vértice 65 al 67 se colinda con la superficie de 20-94-84, que le corresponden al poblado de Tierra Colorada, por la resolución de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por este órgano jurisdiccional en el expediente T.U.A.XII-232/93; del vértice 67, que es el Huamúchil en línea recta y con una distancia de 4,081.00 metros, y con rumbo de NE de 83°-21', se llega al punto de partida que es el vértice H, del vértice 67 que es el Huamuchil, al vértice auxiliar H, se colinda con los terrenos a proyectarse al poblado de Arroyo de San Pedro; aclarándose que la superficie de 1,917-37-48.93 hectáreas, ya están agregadas las 22-01-97 hectáreas que le corresponden a Tilapa de Guerrero, de conformidad con la resolución dictada por este Tribunal en el referido expediente T.U.A.XII-232/93. En esta descripción queda incluida como bien comunal la zona urbana de Tilapa de Guerrero, de 13-61-51.96 hectáreas.

TERCERO.- La superficie de terrenos transcrita en el párrafo que antecede, del núcleo de población de Tilapa de Guerrero, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, es para beneficiar a 684 comuneros, que resultaron con capacidad legal, toda vez que han venido disfrutando la misma de manera pacífica, continua, pública y de buena fe, cuyos nombres son los siguientes: 1.- Ciriano Rojas Calixto; 2.- Sergio Navarro Moreno; 3.- Agustín Navarro Rojas; 4.- Silvestre Navarro Rojas; 5.- Alejandro Rojas Calixto; 6.- Martín Rojas Catalán; 7.- Fidencio Garzón Castro; 8.- José Melquiades Olea; 9.- Antonio Crescencio Galeana; 10.- Gerardo Melquiades Olea; 11.- Nazario Mendoza Garzón; 12.- José Taurino Ambrosio; 13.- Gervacio Gálvez Rentería; 14.- Evaristo Basurto Avila; 15.- Agustín Basurto Catalán; 16.- Lázaro Basurto Catalán; 17.- Marciano Basurto Catalán; 18.- Francisco Basurto Catalán; 19.- Mauro Gallardo Arizmendi; 20.- Mauro Quiroz Santiago; 21.- Teófilo Quiroz García; 22.- Cirilo Quiroz García; 23.- Enrique Casimiro Peñaloza; 24.- Adrián Aburto Mendoza; 25.- Mateo Aburto Mendoza; 26.- Hilario Aburto Mendoza; 27.- Abel Aburto Mendoza; 28.- Claudio Flores Martínez; 29.- Rosario Casimiro Crescencio; 30.- Florentino Marín de los Santos; 31.- Teófilo Melquiades de Jesús; 32.- Tomás Melquiades Olea; 33.- Felicitos Melquiades Olea; 34.- Encarnación Melquiades Quiroz; 35.- Santiago Bravo Galeana; 36.- Aurelia Melquiades Borja; 37.- Aurelia Borja Feliciana; 38.- Abel Gálvez Rentería; 39.- Joaquín Basurto; 40.- Fidencio Sánchez de la Cruz; 41.- Agustín Aburto Pacheco; 42.- Epigmenio García Vázquez; 43.- Margarito García Hilario; 44.- Eusebio García Hilario; 45.- Roberto García Hilario; 46.- Claudio Tiburcio Melquiades; 47.- Alejandrino Tiburcio Patricio; 48.- Juan Neri Galeana; 49.- Isauro Callejas Santana; 50.- Agustín Sebastián Mendoza; 51.- Felipe Melquiades de Jesús; 52.- Apolinar Melquiades Cantú; 53.- Donaciano Melquiades Borja; 54.- Maximino Galeana Neri; 55.- Bibiano Nicolás Cantú; 56..- Macedonio Mendoza Moreno; 57.- Doroteo Mendoza Neri; 58.- Adrián Altamirano Cerón; 59.- Adrián Altamirano Mendoza; 60.- Eucario Hernández Seferino; 61.- Crispín Rentería Mendoza; 62.- Roberto Rentería Santiago; 63.- Noé Sánchez Crescencio; 64.- Félix Pacheco Crescencio; 65.- Erasto Pacheco Taurino; 66.- Apolinar Pacheco Crescencio; 67.- Martiniano Pacheco Crescencio; 68.- Aristeo Pacheco Crescencio; 69.- Mario Pacheco Crescencio; 70.- Arnulfo Melquiades Galeana; 71.- Luis Mejía Tito; 72.- Eleuterio Santos Quiroz; 73.- Emilio Hilario Cristino; 74.- Cirilo Hilario Cristino; 75.- Cresenciano Hilario Cristino; 76.- Alejo Santos Garzón; 77.- Aniceto Galeana; 78.- Rodrigo Quiroz Santiago; 79.- Epigmenio Quiroz Hilario; 80.- Cresenciano Quiroz Hilario; 81.- Alfonso Quiroz Hilario; 82.- Joaquín Solano Garzón; 83.- Alejandro Ambrosio Melquiades; 84.- Miguel García Gerardo; 85.- Benigno Cantú Neri; 86.- Raúl Cantú Peñaloza; 87.- Basilio García Castro; 88.- Plutarco Taurino Neri; 89.- Isabel Taurino Cantú; 90.- Alfonso Quiroz Gallardo; 91.- Félix Bernardino Manuel; 92.- Pablo Modesto Neri; 93.- José Quiroz Gallardo; 94.- Cresencio Quiroz Reyes; 95.- Andrés Quiroz Gallardo; 96.- Otilio Modesto Neri; 97.- Alberto Vázquez Bazán; 98.- Héctor Vázquez Rojas; 99.- Alfredo Vázquez Martínez; 100.- Alfonso Vázquez Martínez; 101.- Margarito Vázquez Martínez; 102.- Mario Vázquez Rojas; 103.- Tranquilino Neri Santos; 104.- Everardo Neri Cantú; 105.- Roberto Neri Cantú; 106.- Alfonso Neri Cantú; 107.- Alfredo Jacinto Vázquez; 108.- Caritino Neri Cantú; 109.- Felipe Bernardino González; 110.- Victorino Callejas Rojas; 111.- Jorge Santiago Villegas; 112.- Artemio Callejas Quiroz; 113.- Librado Zavala Villegas; 114.- Hilario Cruz Carbajal; 115.- Fernando Macedonio S.; 116.- Paulino Navarro Quiroz; 117.- Donato García Bernardino; 118.- Victoriano Moreno Callejas; 119.- Severiano Moreno Callejas; 120.- Andrés Moreno Callejas; 121.- Pedro Moreno Callejas; 122.- Santos Moreno Callejas; 123.- Pedro Sánchez Santos; 124.- Miguel Sánchez Casimiro; 125.- Juan Callejas Rojas; 126.- Juan Callejas Alvarez; 127.- Felipe Callejas Borjas; 128.- Julián Callejas Borjas; 129.- Fulgencio Callejas Rojas; 130.- Rosalino Callejas Rojas; 131.- Carlos Gálvez Escamilla; 132.- Pedro Gálvez Mendoza; 133.- Tomás Espinosa Modesto; 134.- Daniel Contreras Morales; 135.- Florencio Mendoza Modesto; 136.- Félix Galeana Neri; 137.- Marcelino Basurto Garzón; 138.- Ambrocio Basurto Garzón; 139.- Alejandro Basurto Garzón; 140.- Amadeo Díaz Gallardo; 141.- Ignacio Díaz García; 142.- Epifanio Díaz García; 143.- Eleuterio Díaz García; 144.- Alberto Díaz García; 145.- Juan Díaz García; 146.- Balbina Martínez Sierra; 147.- Lázaro Rojas Santana; 148.- Faustino Rojas Santana; 149.- Romualdo Emigdio Cantú; 150.- Gerardo Sánchez Lucero; 151.- Salvador Reyes

Crescencio; 152.- Miguel Reyes Crescencio; 153.- Felipe Reyes Crescencio; 154.- Ramiro Reyes Crescencio; 155.- Brígido Bernardino González; 156.- Feliciano Patricio Galeana; 157.- Vicente Patricio Cantú; 158.- Maximino Galeana Mendoza; 159.- Mairán Benjamín Galeana; 160.- Francisco Galeana Neri; 161.- Francisco Galeana Mendoza; 162.- Gumercinda Galeana Rentería; 163.- Isidro Parra Sebastián; 164.- Alfonso Parra Calixto; 165.- Juan Gálvez Rentería; 166.- Francisco Gálvez Santiago; 167.- Aristeo Bruno Escalante; 168.- Doroteo Bruno Mendoza; 169.- Catalina Bruno Mendoza; 170.- Félix Vázquez Bruno; 171.- Antonio Vázquez Bruno; 172.- Bartolomé Gálvez Callejas; 173.- Pedro Mendoza Pacheco; 174.- Dorotea Mendoza Garzón; 175. Abad Téllez Martínez; 176.- Hipólito Flores Cantú; 177.- Juan Bazán Gallardo; 178.- Bartolomé García Aburto; 179.- Eutiquio García Neri; 180.- Procopio García Neri; 181.- Fidencio Tiburcio Melquiades; 182.- Ricarda Castro Hilario; 183.- Heladio Galeana Mendoza; 184.- Salvador Ramírez Castro; 185.- Germán García Neri; 186.- Ignacio Galeana Bravo; 187.- Margarito Galeana Bravo; 188.- Pelipe M. Mendoza Neri; 189.- Zeferino Vázquez Rojas; 190.- Flavio Vázquez Zavala; 191.- Gabriel Torres Amigón; 192.- Elena Díaz Gallardo; 193.- Heladio Díaz García; 194.- Ignacio Bernardino Clemente; 195.- Angel Bernardino Galeana; 196.- Raúl Bernardino Galeana; 197.- Ismael Bernardino Rodríguez; 198.- Jerónimo Bernardino Galeana; 199.- Antolino Bernardino Galeana; 200.- Flaviano Ruiz Bruno; 201.- Gelacio Ambrosio S.; 202.- Efrén Maximiliano P.; 203.- Eusebio Maximiliano Quiroz; 204.- Félix Maximiliano P.; 205.- Dámaso Maximiliano C.; 206.- Luis Figueroa Santiaguis; 207.- Epifanio García Borja; 208.- Luis Gallardo Mendoza; 209.- Andrés Catalán Rojas; 210.- Dámaso Gallardo Mendoza; 211.- Juan de la Cruz González; 212.- Macario Gálvez Rentería; 213.- Angel Gálvez Santiago; 214.- Carmelo Gálvez Santiago; 215.- Nemorio García Vázquez; 216.- Luis García Bernardino; 217.- Claudio Lara Toledo; 218.- Inés Peñaloza García; 219.- Celestino Peñaloza García; 220.- Jesús Sánchez Hernández; 221.- Tranquilino Espíndola R.; 222.- Bonifacio Bernardino; 223.- Luis García Casimiro; 224.- Domitilo Mendoza Garzón; 225.- Herculano Espíndola Reyes; 226.- Carlos Santana Mendoza; 227.- Rufina Garzón Castro; 228.- Francisco Santana Garzón; 229.- Esteban Santana Garzón; 230.- Gregorio Santana Garzón; 231.- Marcelino Espíndola de Jesús; 232.- Ismael Espíndola Reyes; 233.- Antonio Cantú García; 234.- Onésimo Casimiro Rojas; 235.- Alberto Espíndola Reyes; 236.- Pablo Maximiliano Pacheco; 237.- Alejo Neri Galeana; 238.- Nicolás Solano Pacheco; 239.- Marcelino Parra Neri; 240.- Pedro Garzón Ignacio; 241.- Marcelino Garzón Sánchez; 242.- Amadeo Garzón Sánchez; 243.- Valeriano Garzón Sánchez; 244.- Artemio Garzón Sánchez; 245.- Juan Garzón Ignacio; 246.- Timoteo Pacheco Neri; 247.- Simplicio Modesto Neri; 248.- Sergio Ramírez González; 249.- Mardonio Mendoza Garzón; 250.- Rafael Calleja Calixto; 251.- Simón Cortés Altamirano; 252.- Leonardo Cortés Quiroz; 253.- Víctor Tiburcio Sánchez; 254.- Isabel Calixto Villegas; 255.- Alberto Casimiro Calixto; 256.- Ernesto Garzón Reyes; 257.- Francisco Garzón García; 258.- Andrés Garzón Sebastián; 259.- Abundio Taurino Neri; 260.- Jerónimo Santiago Calixto; 261.- Jerónimo Neri Gálvez; 262.- Bonifacio Neri García; 263.- Jerónimo Quiroz Santiago; 264.- Aristeo Quiroz Basurto; 265.- Silvestre Quiroz Santiago; 266.- Victorio Quiroz Basurto; 267.- Lorenzo Bernardino Santos; 268.- Juan Hilario Cristino; 269.- Urbano Basurto Quiroz; 270.- Hilario Cortés Quiroz; 271.- Florentino Pacheco Francisco; 272.- Juan Gregorio Neri; 273.- Senorina Galeana Mendoza; 274.- Perfecto Melquiades Galeana; 275.- Fernando Calleja Méndez; 276.- Leonarda Casimiro Rojas; 277.- Apolinar Vázquez Rojas; 278.- Efrén García Vázquez; 279.- Francisco García Gálvez; 280.- Carlos Patricio Lauro; 281.- Guadalupe Peñaloza Bernardino; 282.- Alfonso Pacheco Ambrosio; 283.- Paulino Vázquez Neri; 284.- Agustín Rojas Garzón; 285.- Abel Rojas Casimiro; 286.- Manuel Patricio Lauro; 287.- Benito Patricio Tiburcio; 288.- Silverio Sixto Gallardo; 289.- Sofía Santos Bernardino; 290.- Leonardo González Santos; 291.- Rodolfo Callejas Rojas; 292.- Ruperto Callejas Mendoza; 293.- Francisco Callejas Mendoza; 294.- Inocencio Garzón Bernardino; 295.- Donato Garzón Bernardino; 296.- Víctor Fiscal Miranda; 297.- Enrique Ortiz Reyes; 298.- Humberto Flores; 299.- Antonio Crescencio Borja; 300.- Eucario Crescencio Neri; 301.- Delfino García Pacheco; 302.- Miguel Patricio Lauro; 303.- José Socorro Mondragón; 304.- Raúl Rodríguez Gil; 305.- Luis Ambrosio Santana; 306.- Eliseo Tiburcio Melquiades; 307.- Alvaro Tiburcio Navarro; 308.- Elena Pacheco Modesto; 309.- Antonio Pérez Rojas; 310.- Alejandro Garzón Sebastián; 311.- Timoteo García Bazán; 312.- Julián Sebastián Mendoza; 313.- Epifanio Rojas Santana; 314.- Crisóstomo Bruno M.; 315.- Joaquín García Castro; 316.- Rafael Ramos Ramos; 317.- Ubaldo Cervantes Pérez; 318.- Francisco Pérez Rojas; 319.- Francisco García Gálvez; 320.- Encarnación Garzón Ignacio; 321.- Macedonio Sebastián C.; 322.- Galdino Vargas Martha; 323.- Alfonso Ambrosio Galeana; 324.- Alejandro Callejas Martínez; 325.- Demetrio Callejas Villegas; 326.- Raymundo Callejas Santana; 327.- Sebastián Santos Bernardino; 328.- Margarito Santos Vargas; 329.- Jerónimo Santos Vargas; 330.- Miguel Santos Vargas; 331.- Gerardo Taurino Ignacio; 332.- Maximiliano Peñaloza T.; 333.- Cutberto Peñaloza Bernal; 334.- Isaac Peñaloza Bernal; 335.- Rogelio Peñaloza Bernal; 336.- Cirilo Callejas Rojas; 337.- Carlos Pacheco Mendoza; 338.- Lauro Mendoza Galeana; 339.- Agustín Mendoza Galeana; 340.- Maximino Muñoz Ramírez; 341.- Luisa Garzón Castro; 342.- Albino Mendoza Garzón; 343.- Crescenciana Mendoza Garzón; 344.- Faustino Vázquez Neri; 345.- Armando Esquivel; 346.- Donato Vázquez Rojas; 347.- Edelgardo Vázquez Cantú; 348.- Feliciano Vázquez Cantú; 349.-

Ismael Vera Rojas; 350.- Julio García Casimiro 351.- Genaro Díaz Gallardo; 352.- Isidro Bernardino Aburto; 353.- Delfina Aburto Espíndola; 354.- Norberto Quiroz Modesto; 355.- Crescencio Sánchez de Jesús; 356.- Felipe Solano Zeferino; 357.- Eloy Solano Garzón; 358.- Romualdo Solano Garzón; 359.- Joaquín Solano Garzón; 360.- Alberta Solano Garzón; 361.- Angela Solano Garzón; 362.- Félix Rentería Santiago; 363.- Ernesto Casimiro Garzón; 364.- Alberta Solano Garzón; 365.- Macario Casimiro Crescencio; 366.- Sirenia Casimiro Crescencio; 367.- Arcadio Casimiro Crescencio; 368.- Fabián Casimiro Crescencio; 369.- Jerónimo Martínez Silverio; 370.- Sixta Mendoza Garzón; 371.- Albino Mendoza Garzón; 372.- Crisanta Villegas Borja; 373.- Tiburcio Callejas Borja; 374.- Juan Calixto Villegas; 375.- Angel Calixto Villegas; 376.- Isidro Parra Sebastián; 377.- Alfonso Parra Calixto; 378.- Heriberto Mendoza Garzón; 379.- Ventura Solano Zeferino; 380.- Agustín Solano Pacheco; 381.- Mardonio Mendoza García; 382.- Antonio González Lugo; 383.- Gregorio Peñaloza García; 384.- Marciana García Mendoza; 385.- Benigno Peñaloza García; 386.- Leodegario Olea Borjas; 387.- Felipe Olea Melquiades; 388.- Timoteo Neri Santos; 389.- Donato Neri Bazán; 390.- Hipólito Modesto Lauro; 391.- Teófilo Bernardino Gregorio; 392.- Julio Garzón Ignacio; 393.- Crescenciano Garzón Sebastián; 394.- Fidel Garzón Sebastián; 395.- Margarito Garzón Sebastián; 396.- Augusto Garzón Sebastián; 397.- Juan Bernardino Manuel; 398.- Benjamín Basurto Garzón; 399.- Vicente Flores Cantú; 400.- Leonides Patricio Tiburcio; 401.- Modesto Sabino Damián; 402.- Donaciano Gregorio Bernardino; 403.- Aurelio Martínez de Jesús; 404.- Dióscoro Sixto Oropeza; 405.-- Anastacio Sabino Rojas; 406.- Hipólito Tiburcio Taurino; 407.- Félix Policarpo Cruz; 408.- Juan Garzón Sebastián; 409.- Felipe Sixto Calleja; 410.- Melitón Sixto Gallardo; 411.- Susana Sixto Gallardo; 412.- Guadalupe Sixto Gallardo; 413.- Claudio Alejo Sixto; 414.- María Sixto Calleja; 415.- Juan Sixto Oropeza; 416.- Fernando Sixto Calleja; 417.- Antioco Martínez Garzón; 418.- Paulino Garzón Sánchez; 419.- Mario Garzón Modesto; 420.- Julián Crescenciano Santana; 421.- Alfredo Martínez Sebastián; 422.- Jerónimo Gálvez Olea; 423.- Demetria Patricio Lauro; 424.- Guadalupe Neri Patricio; 425.- Alejandro Tiburcio Giro; 426.- Fernando Silva Tiza; 427.- Anastacio Gálvez Calleja; 428.- Perpetuo Gálvez Mendoza; 429.- Cruz Domínguez Rojas; 430.- Leocadio Aranda Cruz; 431.- Gregorio Sixto Gallardo; 432.- Pablo Maximiliano Pacheco; 433.- Bernabé Maximiliano Neri; 434.- Rubén Basurto Bernardino; 435.- Lorenzo Maximiliano Pacheco; 436.- Cornelio Ramón Galeana; 437.- Pedro Tiburcio Giro; 438.- Valeriano Morales Vicente; 439.- Alfonso Nava Aburto; 440.- Javier Nava Garzón; 441.- Félix Nava Garzón; 442.- Feliciano Nava Garzón; 443.- Silvestre Gálvez Santiago; 444.- Eulogio Gálvez Modesto; 445.- Jerónimo Bernardino Gregorio; 446.- Agustín Patricio Rojas; 447.- Rolando Patricio Tiburcio; 448.- Rosalino Patricio Tiburcio; 449.- Sebastián Francisco Parra; 450.- Pablo Francisco Tiburcio; 451.- Rubén Altamirano Bernardino; 452.- Silviano Patricio Navarro; 453.- Blas García Francisco; 454.- Federico Taurino Neri; 455.- Aquilino Taurino Garzón; 456.- Filomeno García Francisco; 457.- Isabel Garzón Ignacio; 458.- Carlos Martínez Garzón; 459.- Fortunato Martínez Garzón; 460.- Brígido Mendoza Garzón; 461.- Damián Patricio Lauro; 462.- Luis Patricio Tiburcio; 463.- Florentino Patricio Tiburcio; 464.- Epifanio de Jesús Sánchez; 465.- Marcelino de Jesús Parra; 466.- Cirilo de Jesús Parra; 467.- Florentino Peñaloza Peralta; 468.- Lorenzo Peñaloza Cantú; 469.- Agustín Bazán Calleja; 470.- Herón Bazán Calixto; 471.- Agapito Flores Peralta; 472.- Genaro Flores Martínez; 473.- Doroteo Mendoza Neri; 474.- Margarito Ruiz Quiroz; 475.- Juan Bartolo Bernal; 476.- Guillermo Martínez Sánchez; 477.- Ofelio Bazán Guerrero; 478.- Lucas Bazán Aburto; 479.- Fortino Bazán Basurto; 480.- Cecilio Cortés Villegas; 481.- Pedro Bernardino Santos; 482.- Tolentino Bernardino García; 483.- Victorio Bernardino García; 484.- Raúl García Martínez; 485.- Antonio Ruiz González; 486.- Severiano Bravo Bazán; 487.- Rubén Altamirano Bernardino; 488.- Paciano Bazán Garzón; 489.- Valeria Bazán Garzón; 490.- Margarita Bazán Garzón; 491.- Alfonso Bazán Garzón; 492.- Celestino Bazán Garzón; 493.- Valeriano Bazán Bruno; 494.- Epifanio Garzón Lorenzo; 495.- Antonio Lorenzo Oropeza; 496.- Teódulo Garzón Lorenzo; 497.- Pablo Garzón Bruno; 498.- Adán Garzón Bruno; 499.- Alberto Garzón Bruno; 500.- Román Garzón Lorenzo; 501.- Prisciliano Garzón Lorenzo; 502.- Rafael Peñaloza García, 503.- Florencio García Aburto; 504.- Basilio García Peñaloza; 505.- Rafael Peñaloza Peralta; 506.- Juan Peñaloza Bruno; 507.- Lázaro Peñaloza Bruno; 508.- Melquiades Solano Zeferino; 509.- José Luis Ramírez; 510.- José Luis Pérez; 511.- Epifanio Solano García; 512.- Teófilo Valle Aquino; 513.- Joaquín Solano García; 514.- Miguel Angel Ruiz; 515.- Cruz Bazán Aburto; 516.- Samuel Bazán Estrada; 517.- Francisco Bazán Estrada; 518.- Francisco Neri Librado; 519.- Julio García Casimiro; 520.- Víctor García Casimiro; 521.- Honorio García Casimiro; 522.- Moisés Bazán Garzón; 523.- Ladislao Bazán Garzón; 524.- Miguel Agapito Santos; 525.- Celerina García Neri; 526.- Timoteo Ambrosio Melquiades; 527.- Epifanio Silverio Solana; 528.- Ramón Silverio Rafael; 529.- Prisciliano Crescencio Santiago; 530.- Felipe de Jesús Silverio; 531.- Librado Silverio Solano; 532.- Filemón de Jesús Manuel; 533.- Esteban Martínez Silverio; 534.- Francisco Martínez Cantú; 535.- Cirilo Martínez Cantú; 536.- Erasto de Jesús Casimiro; 537.- Rufino Neri Sixto; 538.- Florentino Neri Parra; 539.- Cesáreo Neri Parra; 540.- Desiderio Neri Parra; 541.- Marcelino Neri Parra; 542.- Tomás Flores Cantú; 543.- Maximino Martínez Cantú; 544.- Severiano Martínez Melquiades; 545.- Macedonio Calleja Moreno; 546.- Pablo Moreno Bernardino; 547.- Bernabé Moreno Bernardino; 548.- Pedro Moreno

Bernardino; 549.- Eleuterio Patricio Lauro; 550.- Eulogio Crescenciano García; 551.- Romualdo de Jesús Casimiro; 552.- Maximino Crescencio Borja; 553.- Erasmo Crescencio Santana; 554.- Martiniano Crescencio Santana; 555.- Alejandro Sánchez Casimiro; 556.- Martiniano Martínez Silverio; 557.- Víctor Crescencio Galeana; 558.- Claudia García Crescencio; 560.- Erasmo Neri Parra; 561.- Juan Gálvez de Jesús; 562.- Pedro de Jesús Casimiro; 563.- Remigio Cantú Calleja; 564.- Lorenzo Bruno Mendoza; 565.- Florentina Calixto Martínez; 566.- Hilario Calleja Martínez; 567.- Epifanio Cantú Mendoza; 568.- Mario Cantú Casimiro; 569.- Apolinar Cantú Casimiro; 570.- Rodolfo Crescencio Borja; 571.- Pedro Calleja Martínez; 572.- Melchor Anatalio Tiburcio; 573.- Francisco Martínez García; 574.- Bonifacio Martínez García; 575.- Otilio García Vázquez; 576.- Francisco Tomás Ramírez; 577.- Maurilio Cantú Navarrete; 578.- Minerva Cantú Melquiades; 579.- Inocencia Cantú Melquiades; 580.- Evelia Cantú Melquiades; 581.- Camila Cantú Melquiades; 582.- Adelaido Melquiades de Jesús; 583.- Maximina Melquiades de Jesús; 584.- Mateo Martínez Calleja; 585.- Paulo Martínez Taurino; 586.- Gelacio Martínez Silverio; 587.- Domingo López Guzmán; 588.- Emilio López de Jesús; 589.- Andrés López de Jesús; 590.- Facundo Silverio Solana; 591.- Timoteo Neri Bazán; 592.- Eustorgio Silverio Rafael; 593.- Víctor Silverio Chávez; 594.- Julio Villalva Carrasco; 595.- Catalina Neri Mendoza; 596.- Emiliano Calleja Rojas; 597.- Francisco Martínez García; 598.- Víctor Martínez Rodríguez; 600.- Raymundo Martínez Rodríguez; 601.- Antonio Martínez Rodríguez; 602.- Guadalupe Bernardino Calleja; 603.- Martín Bernardino Chávez; 604.- Marcos Bernardino Chávez; 605.- Crescenciano Bernardino Chávez; 607.- Rosendo Pacheco P.; 608.- Agustín Neri Ignacio; 609.- Alvaro Ambrosio Santana; 610.- Roberto Calleja Mendoza; 611.- Virginio Bazán Calleja; 612.- Perfecta Bazán Calleja; 613.- Eugenio Olea Melquiades; 614.- Eutiquio Bernardino González; 615.- Quirino Calleja Parra; 616.- Crispín García Mendoza; 617.- Ernesto Gregorio Neri; 618.- Leandro Gregorio Neri; 619.- Eugenio Gregorio Patricio; 620.- Roberto Garzón Bernardino; 621.- Oscar Jiménez Girón; 622.- Eleuterio Sixto Gallardo; 623.- Enrique Bazán Sierra; 624.- Carlos Espinobarros; 625.- Cirilo Olea Galán; 626.- Demetrio Neri Ignacio; 627.- Cipriano Neri Galeana; 628.- Agustín Neri Galeana; 629.- Francisco Martínez Martínez; 630.- Juan Quiroz Gallardo; 631.- Amado Rojas Catalán; 632.- Prócoro Flores Martínez; 633.- Pedro Flores Rentería; 634.- Jesús Sánchez Ignacio; 635.- Paulino Sánchez Martínez; 636.- Pedro Tiburcio Calleja; 637.- Anastacio Tiburcio S.; 638.- Demetrio Calleja Villegas; 639.- Raymundo Calleja; 640.- Víctor Velázquez M.; 641.- Daniel Díaz Gallardo; 642.- Emiliano Díaz González; 643.- Tomasa Díaz González; 644.- Basilicia Díaz González; 645.- Zacarías Bernardino G.; 646.- Refugio Casimiro Gregorio; 647.- Gonzalo Casimiro Bruno; 648.- Herminio Modesto Lauro; 649.- Florencio Rojas Santa Ana; 650.- Esther Cantú Mendoza; 651.- Alejandrino Tiburcio T.; 652.- Francisco Melquiades de Jesús; 653.- Felícitos Gallardo Maximiliano; 654.- Francisco Gallardo Espinoza; 655.- Jaime Neri Garzón; 656.- Leocadio Francisco Tiburcio; 657.- Daniel Garzón Aburto; 658.- Celestino Gallardo Antonio; 659.- Alfonso Pantoja Vargas; 660.- Felícitas Vargas Mendoza; 661.- Fortunato Vargas Palma; 662.- Victorino Pantoja Vargas; 663.- Luis Gálvez Olea; 664.- Julia Cantú Patricio; 665.- Benjamín García Mendoza; 666.- Agripino Garzón M.; 667.- Ponciano Basurto Jiménez; 668.- Severiano Casimiro Rojas; 670.- Enrique Aburto Bolaños; 671.- Félix Cantú Avilés; 672.- Benjamín Avilés Mendoza; 673.- Arnulfo Natalio Calleja; 674.- Narciso Silverio Chávez; 675.- Basilisa Mendoza Neri; 676.- Alpina Maximiliano Pacheco; 677.- Eugenio Pacheco Mendoza; 678.- Félix Moreno Calleja; 679.- Heriberto Moreno Valle; 680.- Palemón Tiburcio García; 681.- Ambrosio Bautista G.; 682.- Pedro Moreno Valle; 683.- Emilio Bernardino Chávez, y 684.- Silvestre Bernardino Chávez.

CUARTO.- Con los elementos anteriores la comunidad de Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, demostró encontrarse en posesión a título de dueño de buena fe, en forma pacífica, pública y continua, desde tiempo inmemorial y que sobre dicha superficie no tiene conflictos por límites con los poblados colindantes, es decir, de la superficie anteriormente transcrita, de la que solicita le sea reconocida y titulada, resultando en consecuencia, procedente reconocer y titular a favor de la comunidad de Tilapa, la referida superficie, de conformidad con el artículo 267 de la derogada Ley de Reforma Agraria, para beneficiar a los campesinos que se han relacionado en el párrafo que antecede, atendiendo lo contemplado en su descripción limítrofe.

QUINTO.- Ahora corresponde en este considerando ponderar las probanzas suministradas por el poblado de Arroyo de San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, con objeto de demostrar la procedencia de su solicitud de reconocimiento y titulación de bienes comunales en su expediente original 276.1/2815, que de manera separada gestionaron y que fueron acumulados al expediente que hoy se resuelve, con fundamento en lo establecido en los artículos 189 de la Ley Agraria; 197 del Código Adjetivo Civil Federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se pasa al análisis de las pruebas que ofreció el aludido poblado mediante ocurso presentado el dos de abril de mil novecientos noventa y siete, siendo las que a continuación se precisan: a) Por lo que ve a la prueba testimonial a cargo Guillermo Francisco Cortés y Epitacio Santana Fernanda, quienes fueron coincidentes al señalar que Arroyo de San Pedro, se encuentra en posesión de aproximadamente 605 hectáreas de terreno y que las poseen desde hace más de un siglo, ya que las cultivan de café, plátano, caña, piña, limón dulce, cacao,

cajeles y guanábanos; probanza a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, en virtud de que son personas mayores de edad, que viven en el lugar donde se ubican los terrenos a confirmar, sin que lo anterior sea obstáculo la tacha de testigos que hizo valer el poblado de Tilapa de Guerrero, al argumentar que son parciales en sus declaraciones por ser del poblado de Arroyo de San Pedro, en respuesta a lo anterior, cabe señalar que dentro del derecho agrario, son precisamente los campesinos que viven en el lugar los que en el entorno que se desenvuelven son quienes más conocen los hechos de posesión y conflictos que se sustentan por la tenencia de la tierra; sin que al caso sean aplicables las tesis de jurisprudencia que invoca el representante comunal del poblado de Tilapa de Guerrero, lo anterior de conformidad con los artículos 189 de la Ley Agraria y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. A lo antes señalado tiene aplicación el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que las resoluciones que reconocen y titulan bienes comunales carecen de efectos restitutorios, ya que se limitan a reconocer derechos preexistentes, respecto de los terrenos poseídos en común por los habitantes de los poblados beneficiados.

Ahora bien, la posesión que el núcleo de población Arroyo de San Pedro, ostenta sobre los terrenos que reclama, no sólo queda demostrada con la testimonial de los referidos atestes, toda vez que se requieren otros elementos en que se demuestre que la misma sea a título de dueño, de buena fe y en forma pacífica, continua y pública, tal y como lo indica el artículo 3o. del Reglamento para la tramitación de los expedientes de confirmación y titulación de bienes comunales, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el quince de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, el cual resulta aplicable en la especie en razón de que el asunto que nos ocupa se tramitó bajo el amparo de esas disposiciones legales; elementos estos últimos, que a juicio de este resolutor no quedaron en su totalidad comprobados, puesto que existen en el expediente elementos que permiten inferir que la posesión de la superficie que solicitan su reconocimiento no ha sido a título de dueño, por la sencilla razón de que siempre han dependido del poblado de Tilapa, como se puede constatar en diversas documentales que obran a (fojas 1225, 1236, 1238, 1240, 1245, 1249, 1258, 1278 y 1279 tomo IV del expediente en estudio), por tanto, se advierte que su solicitud relativa al reconocimiento y titulación de bienes comunales no es procedente, máxime que de todas y cada una de las constancias se infiere la existencia de conflicto respecto de la superficie que posee el poblado de Arroyo de San Pedro, por ende, no se actualiza la forma pacífica de esa posesión. Así las cosas, no se dan los extremos que exige el artículo 3o. del referido Reglamento, por ello, los demás elementos resultaría ocioso analizarse, cuanto más que los poblados tanto Tilapa como Arroyo de San Pedro, al realizarse las delimitaciones y trabajos técnicos topográficos, así como complementos, éstos no firmaron ninguna acta de conformidad, en relación a la superficie que ambos ostentan, ello en razón de que inicialmente el expediente se ventiló en forma conjunta y así se hicieron las mediciones respectivas, como tampoco tienen especificada una zona urbana, puesto que según se desprende de autos, las casas se encuentran desiminadas en el área que poseen los campesinos de Arroyo de San Pedro; b) En efecto, si bien es verdad el núcleo de población de Arroyo de San Pedro, exhibió unos títulos para acreditar su derecho, mismos que a través de la opinión rendida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, fueron declarados apócrifos; independientemente de lo anterior, este resolutor únicamente les otorga el carácter de indicio de conformidad con las prevenciones contenidas en los numerales 189 de la Ley Agraria y 197 del Código Supletorio a la ley de la materia, y c) Por lo que ve a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana se le otorga el valor jurídico que estipulan los dispositivos legales 189 de la Ley Agraria, en correlación con los diversos 197 y 218 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.

SEXTO.- Por otra parte, es de señalarse que en el censo básico figuran en el poblado de Arroyo de San Pedro, una relación de los siguientes campesinos: 1.- Alejandro García Gabriel; 2.- Anastacia García Cantú; 3.- Jorge Pérez Fidencio; 4.- Bartolomé Claudio Santos; 5.- Victorio Claudio Santos; 6.- Emilio Solano Medel; 7.- Aurelio Gallardo Cruz; 8.- Victorio Laureano Cruz; 9.- Cirilo Jinete Gallardo; 10.- Baldomero Jinete Gallardo; 11.- Teódulo Gallardo Barrera; 12.- Eugenia Medel Ignacio; 13.- Faustino Solano Medel; 14.- Julián Flores Santana; 15.- Filemón López Cruz; 16.- Enedino Zeferino Santana; 17.- Francisca Santana de Jesús; 18.- Teófilo Santana Bruno; 19.- Feliciano Flores Solano; 20.- Jesús García Cortés; 21.- Herminio García Chávez; 22.- Silvino García Chávez; 23.- Alejo Bruno García; 24.- Zeferino Laureano Merino; 25.- Rodolfo Cortés Santos; 26.- Maximino Solano Sánchez; 27.- Lucio Santana Santos; 28.- Arnulfo Santana Santos; 29.- Plácido Santana Santos; 30.- Andrés Santana Bruno; 31.- Amadeo Bruno Claudio; 32.- Hilario Policarpo Rivera; 33.- Epifanio Santana Fernández; 34.- Daniel Zeferino Santana; 35.- Joaquín Zeferino Vázquez; 36.- Gregorio Oropeza Chávez; 37.- Roberto Barrera Ignacio; 38.- Gregorio González García; 39.- Anastacio Solano Sánchez; 40.- Severiano Castro Ignacio; 41.- Alberta Ignacio Candia; 42.- Rutilia Laureano Cruz; 43.- Metodio Francisco Cortés; 44.- Mario Francisco Santana; 45.- Teófilo Francisco Santana; 46.- Paulino Merino Candia; 47.- Hermenegildo Santana Fernández; 48.- Floriberto Basurto Galindo; 49.- Juan Giro Francisco; 50.- Arnulfo Chávez Santana; 51.-

Arturo Chávez Bruno; 52.- Lucas Santana Santos; 53.- Alberto Jinete Ignacio; 54.- Macario Zeferino Santana; 55.- Jesús Zeferino Santana; 56.- José Zeferino Santana; 57.- Matilde Oropeza Villegas; 58.- Gregorio de Jesús Oropeza; 59.- Nicodemes Aurias Mauro; 60.- Fermín Santana Castro; 61.- Hipólito Solano Calixto; 62.- Miguel Solano Santana; 63.- Saturnino Solana Santana; 64.- Eusebio Policarpo Gallardo; 65.- Leobardo García Gabriel; 66.- Luis García Villa; 67.- Gerardo García Villa; 68.- Domingo Oropeza Claudio; 69.- Juan García Cantú; 70.- Antonio García Cantú; 71.- Fidel de los Santos Cruz; 72.- Juana Laureano Merino; 73.- Dolores García Laureano; 74.- Cirila Merino Santos; 75.- Onésimo Oropeza Candia; 76.- Enrique Santana Santos; 77.- Guillermo Francisco Cortés; 78.- Lázaro Jinete Gallardo; 79.- Lorenzo Francisco Luis; 80.- Silvano Barrera García; 81.- Félix Barrera Ignacio; 82.- Elena Barrera Ignacio; 83.- Agapito Zeferino Santana; 84.- Demetria Rosendo García; 85.- Laura Galeana Rosendo; 86.- Concepción Galeana Rosendo; 87.- Eutiquio Galeana Rosendo; 88.- Rigoberto Giro Francisco; 89.- Alejandro Villa Encarnación; 90.- Lázaro Flores Solano; 91.- Octaviano Flores Cruz; 92.- Policarpo Barrera Toribio; 93.- Juan Flores Solano; 94.- María Luisa Villegas Mendoza; 95.- Erasmo Ramírez Villada; 96.- Macario Merino Claudio; 97.- Florentino Laureano Cruz; 98.- Florencio Laureano Merino; 99.- Romualdo Laureano Merino; 100.- Gonzalo Santana Bruno; 101.- Mauro Santana Santos; 102.- Domingo Santana Gallardo; 103.- Norberto Santana Gallardo; 104.- Victorio Santana Flores; 105.- Alberto Flores Solana; 106.- Maximino Flores Solana; 107.- Alvaro Claudio Santos; 108.- Marcelino Santana Flores; 109.- Rodolfo Santana Gallardo; 110.- Genaro Chávez Santana; 111.- Jacinto Zeferino Santana; 112.- Luisa Santana Santos; 113.- Alfonso Solana Santana; 114.- Francisco Solana Flores; 115.- Florina Oropeza Francisco; 116.- Agustín Oropeza Mendoza; 117.- Florencio López Arias; 118.- Bonifacio Bruno Antonio; 119.- Asunción Zeferino Santana; 120.- Felícito Zeferino Santana; 121.- Fidencio Santana Medino; 122.- Félix Santiago Amado; 123.- Félix Zeferino Santana; 124.- Donato García Santiago; 125.- Calixto Santiago Tiburcio; 126.- Fulgencio Santiago Tiburcio; 127.- Nemorio Santiago Santana; 128.- José Santiago Donato; 129.- Feliciano Santana Santos; 130.- Alejandro Santiago Barrera; 131.- Delfino Zeferino Santana; 132.- Mateo Nicolás Martínez; 133.- Nazario Santana Cruz; 134.- Cirilo Pastrana Cantú; 135.- Alfonso Pastrana Cantú; 136.- Francisco Pastrana Cantú; 137.- Enrique Santiago Donato; 138.- Eulogio Santana Santana; 139.- Tranquilino Santana Merino; 140.- Timoteo Santana Nazario; 141.- Hilario Santana Nazario; 142.- Ramón Santana Nazario; 143.- Asunción Santana Nazario; 144.- Benito Zeferino Santana; 145.- José Cortés Hilario; 146.- Aarón Cortés Mejía; 147.- Apolinar Cortés Mejía; 148.- Alejandro Cortés Mejía; 149.- Perfecto Oropeza Claudio; 150.- Agustina Galindo Ruiz; 151.- Anastacia Cantú Navarrete; 152.- Federico Ciro Agustín; 153.- Florencio Ciro Francisco; 154.- Gregorio Ciro Francisco; 155.- Anselmo de Jesús Oropeza; 156.- Antonio Merino Claudio; 157.- Luis Santiago Barrera; 158.- Alfonso García Cortés; 159.- Víctor Solano Flores; 160.- Pablo Solano Chávez; 161.- Francisco Solano Chávez; 162.- Mauro Solano Chávez; 163.- Gabino Solano Calixto; 164.- Emigdio Santiago Santiago; 165.- Santiago Zeferino Santana; 166.- Felipe Claudio Santos; 167.- Cornelio Zeferino Santos; 168.- Filemón Solano Calixto; 169.- Gerardo de Jesús Cabrera; 170.- Fausto de Jesús Oropeza; 171.- Maximino García Cortés; 172.- Donato García Oropeza; 173.- Daniel García Oropeza; 174.- Pedro Calixto Martínez; 175.- Epifanio Chávez Santos; 176.- Camilo Chávez Poblano; 177.- Tiburcio Solano Flores; 178.- Zeferino Solano Sánchez; 179.- Salomón de Jesús Oropeza; 180.- Albertano Giro Cortés; 181.- José Emiliano Anastacio; 182.- Jesús Solano Calixto; 183.- Julio Santana de Jesús; 184.- Arquímides Santana Cantú; 185.- Eutiquio Laureano Merino; 186.- Ernesto Porfirio Santiago; 187.- Antioco de los Santos.

SEPTIMO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, Arroyo de San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, presentó observaciones al censo levantado, enviando relación de 17 campesinos que fueron omitidos en los trabajos censales, siendo las siguientes personas: 1.- Juan Cantú de Aquino; 2.- Alejandro Villa Galeana; 3.- Guillermo Villa Galeana; 4.- Alberto Laureano Cruz; 5.- Nicasio Santana Gallardo; 6.- Cirilo Pastrana Cantú; 7.- Constantino Pastrana Santana; 8.- Esteban Laureano Santana; 9.- Pablo Oropeza Francisco; 10.- Nemorio Laureano Santana; 11.- Cornelio Laureano Santana; 12.- Daniel García Cortés; 13.- Donato García Cortés; 14.- Silviano Villa Encarnación; 15.- Jacinto Reyes Cantú; 16.- Teófilo Claudio Santos; 17.- Sabino Francisco Cortés.

OCTAVO.- Por cuanto hace al poblado de Arroyo de San Pedro, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, según se desprende de autos, al tenor de la opinión técnica emitida por los peritos Eduardo Romero López y Manuel de Jesús Tamayo González, misma que puede ser consultable a (fojas 3250 a 3253 tomo XII de autos), dictamen al que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 189 de la Ley Agraria; 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, resultó una superficie de 565-41-65.15 hectáreas, como resultado de la diferencia de las 605-02-90.62 hectáreas, de las que se segregan 39-61-25.47 hectáreas que son motivo de la averiguación previa penal ALT063/997, instruida en contra de campesinos del poblado de Tilapa de Guerrero, en agravio del poblado de Arroyo de San Pedro, ambos del Municipio de Malinaltepec, de esta entidad federativa, hasta en tanto la autoridad penal correspondiente resuelva sobre las presuntas conductas ilícitas por la ocupación de las 39-61-25.47 hectáreas, tal como se infiere

de las constancias que obran a fojas 3049 a 3248 del tomo 12 de los autos, relativas a la citada averiguación previa penal, así como de que se acredite que el Ministerio Público del Fuero Común, como órgano investigador, dé cumplimiento a la opinión emitida el trece de enero de mil novecientos noventa y ocho, por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, dentro del expediente CODDEHUM-VG/512/97-II. En tal virtud, las 565-41-65.15 hectáreas quedan comprendidas dentro del polígono de 605-02-90.62 hectáreas, que se describen en los siguientes términos: partiendo del vértice 0 punto conocido como El Cerro de Ardilla, y de este punto al vértice auxiliar H. teniendo una distancia de 2,220.00 metros y un rumbo astronómico N21°-31'W, colindándose con terrenos de la comunidad de Iliatenco, siguiendo el recorrido de la medición de este punto, con rumbo astronómico S83°-21'W, en línea recta y con una distancia de 4,081.00 metros, se llega al punto conocido como El Huamúchil, vértice 67 colindando con Tilapa, de este punto al vértice 68 y 69 teniendo una distancia de 1,508.55 metros, con los rumbos astronómicos de S41°-25'E y S21°-34'E, al vértice 69 es la mojonera El Mango, o El Terrero Panela colindando con terrenos comunales de Tierra Colorada, del Mango en línea recta se llega al vértice 70 punto conocido como el Tercer Picacho del Cerro de la Ardilla, con una distancia de 2,554.03 metros, y rumbo astronómico N89°-03'E, del vértice 70 al vértice 0 en línea recta y con una distancia de 1,434.07 metros y rumbo astronómico de S74°-28'E, se llega al punto de partida, encerrándose así las referidas 605-02-90.62 hectáreas, de los vértices números 69, 70 y el 0 se colinda con terrenos comunales de Santa Cruz del Rincón. Las 39-61-25.47 hectáreas que son motivo de la indagatoria penal referida en el párrafo precedente, se identifica en los siguientes términos: del punto trino conocido como El Mango, a El Huamúchil y del Huamúchil al punto auxiliar L y de este punto al referido punto trino El Mango o Terrero Panela, colindando al norte con terrenos de Tilapa de Guerrero, al sur con terrenos de Santa Cruz del Rincón, al oriente con terrenos de la comunidad de Arroyo de San Pedro, y al poniente con terrenos de la comunidad de Tierra Colorada.

NOVENO.- Ahora bien, al encontrarse problemas que entrañan conflictos sobre la superficie de terreno precisada en el considerando que antecede, este resolutor en aras de salvaguardar las garantías que consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, estima en equidad que la referida superficie se ventile por conflicto por límites, a fin de que los poblados tanto de Tilapa como de Arroyo de San Pedro, ambos del Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, tengan la oportunidad de aportar si al caso requiere, nuevos elementos probatorios en los que permita determinar a quien corresponde el área litigiosa, lo anterior con apoyo legal en el artículo 366 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, que en la especie resulta aplicable al caso, en atención al nacimiento del referido conflicto; por esa causa, este Tribunal una vez que cause ejecutoria la sentencia, procederá a instaurarse de oficio el conflicto por límites sobre la superficie aludida en el considerando octavo de este fallo, lo cual en su oportunidad le será notificado a los poblados en mención.

DECIMO.- Por otra parte, la superficie que se reconoce y titula en favor del poblado de Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, será destinada al aprovechamiento y explotación, en beneficio de 684 comuneros que arrojó el censo básico que se levantó en dicho poblado, y de sus respectivas familias, sin más limitaciones que las que señala la ley de la materia, incluyendo las zonas urbanas, en virtud, de que no se consideran pequeñas propiedades, por no haberse exhibido los títulos que así lo acrediten; todo lo anterior, en términos de los artículos 98, 99, 101, 102, 186, 187, 189 y demás relativos de la Ley Agraria.

En mérito de lo expuesto, fundado y razonado es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con la presente, se da cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio de Amparo Directo Agrario número 694/98, que concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Félix Galeana Neri, por su propio derecho y en su carácter de representante de bienes comunales de la comunidad de Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, en contra de los actos atribuidos a este Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII.

SEGUNDO.- En consecuencia, únicamente se declara procedente la acción agraria de reconocimiento y titulación de bienes comunales que promovió el poblado denominado Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, sobre la superficie que se precisa en el considerando segundo de este fallo. Con objeto de beneficiar a 684 comuneros que resultaron capacitados cuyos nombres quedaron precisados en el considerando tercero de esta sentencia.

TERCERO.- Se declara que los terrenos reconocidos y titulados, a Tilapa, Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y sólo para garantizar el goce y disfrute de los mismos por parte de dicha comunidad, sujetándose a las limitaciones y modalidades impuestas por la Ley Agraria en vigor.

CUARTO.- Por otra parte, se declara que no existen propiedades particulares que deban excluirse o segregarse de los terrenos que se reconocen y titulan como bienes comunales al citado poblado

solicitante; puesto que durante el procedimiento ninguna persona compareció a solicitar a exclusión de pequeñas propiedades.

QUINTO.- Por cuanto hace a la superficie que se precisa en el considerando octavo de esta sentencia, se dejan en conflicto de conformidad con lo establecido en el artículo 366 de la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, en las que se incluyen también las 39-61-25.47 hectáreas en las que se encuentra instaurada una averiguación penal número ALT/63/997. En tal virtud instáurese de oficio el conflicto por límites una vez que cause ejecutoria el presente fallo, lo cual en su oportunidad se notificará a los representantes de los poblados de Tilapa y Arroyo de San Pedro, ambos del Municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero.

SEXTO.- Publíquese la presente resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero; asimismo, remítase copia certificada de esta sentencia y del plano aprobado por este propio Tribunal, que corre agregado a foja 3260, al Registro Agrario Nacional, así como al Registro Público de la Propiedad y Crédito Agrícola en el Estado de Guerrero, para su inscripción y registro correspondiente.

SEPTIMO.- Remítase testimonio de la presente sentencia en copia certificada al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, informando del cumplimiento a le ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo agrario número 694/98, de fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

OCTAVO.- Notifíquese personalmente a los poblados solicitantes, a través de sus representantes comunales; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.- Cúmplase.

Chilpancingo de los Bravo, Gro., a siete de enero de mil novecientos noventa y nueve.- Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado **Juan Rodolfo Lara Orozco**, Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario Distrito XII, ante el ciudadano licenciado **Juan Chona Hernández**, Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.- Doy fe.- Conste.- Rúbrica.